

Economías de base, economías populares y economías alternativas.

Formas innovadoras de organización del trabajo
en América Latina y el Caribe

Ronny J. Viales Hurtado y Rosa Alvarado Brenes
Editores



Economías **de base**, economías **populares** y economías **alternativas**.

Formas innovadoras de organización del trabajo
en América Latina y el Caribe

Economías de base, economías populares y economías alternativas.

Formas innovadoras de organización del trabajo
en América Latina y el Caribe

Ronny J. Viales Hurtado y Rosa Alvarado Brenes
Editores



With funding from the:



Federal Ministry
of Research, Technology
and Space

CIHAC.SIBDI.UCR CIP30

- Título:** Economías de base, economías populares y economías alternativas. Formas innovadoras de organización del trabajo en América Latina y el Caribe. / Ronny J. Viales Hurtado / Rosa Alvarado Brenes, editores. |
- Descripción:** Primera edición | Costa Rica : Universidad de Costa Rica. Centro de Investigaciones Históricas de América Central. CALAS. | 2026. | 568 páginas |
- Identificadores:** ISBN 978-9930-645-11-6 (digital)
- Materias:** LEMB: Economía informal | Aspectos sociales. | Política gubernamental. | Política económica. – América Latina | Política económica. – Caribe. | Subempleo. | Regiones subdesarrolladas. | Economía del trabajo. | Trabajo y trabajadores. |
- Clasificación:** CDD 331.13 23. ed.

Comité editorial:

Dr. Kevin Coleman, University of Toronto
Dr. David Díaz Arias, Universidad de Costa Rica
Dr. Marc Edelman, City University of New York
Dr. Michel Gobat, University of Pittsburgh
Dra. Christine Hatzky, Leibniz Universität Hannover
Dr. Jeffrey L. Gould, Indiana University
Dr. Lowell Gudmunson, Mount Holyoke College
Dra. Montserrat Llonch, Universidad Autónoma de Barcelona
Dr. George Lonné, Université Paris-Est Marne-la-Vallée
Dr. Héctor Pérez Brignoli, Universidad de Costa Rica
Dr. Eduardo Rey Tristán, Universidad de Santiago de Compostela
Dr. Ronny Viales Hurtado, Universidad de Costa Rica
Dra. Heather Vrana, University of Florida
Dr. Justin Wolfe, Tulane University
Dra. Cécile Stehrenberger, Cátedra Wilhelm y Alexander von Humboldt en Humanidades y Ciencias Sociales

Comité CALAS:

Dr. David Díaz Arias
Dra. Christine Hatzky
Dr. Werner Mackenbach
Dr. Joachim Michael
Dr. Ronny Viales Hurtado
Dra. Cécile Stehrenberger

Edición aprobada por el Centro de Investigaciones Históricas de América Central (CIHAC)
Primera edición: 2026

Diseño, portada, diagramación y control de calidad: Adriana Araya Esquivel

Revisión de pruebas: los editores

Imagen de la portada: *Vendedora de hongos Guatemala*. Imagen de Luisfi, Wikimedia Commons. Disponible en: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:060725_vendedora_de_hongos_guatemala.JPG

© Centro de Investigaciones Históricas de América Central (CIHAC)

© Ronny J. Viales Hurtado y Rosa Alvarado Brenes / editores

San José, Costa Rica, Centroamérica.

Este libro está disponible bajo una Licencia Creative Commons Atribución-Compartir Igual 4.0 Internacional (CC BY-SA 4.0).

Más información: <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es>

 CC BY-SA 4.0

Hecho el depósito de ley.

Índice

Introducción	
<i>Ronny J. Viales Hurtado y Rosa Alvarado Brenes</i>	xix
Las categorías analíticas novedosas para aproximarse a las transformaciones del mundo del trabajo “desde abajo”	xxii
Una perspectiva relacional, histórica y comparada	xxv
El contenido del libro	xxviii

PRIMERA PARTE

Formas alternativas de actividad económica organizadas “desde abajo”	1

CAPÍTULO 1

Pescadores artesanales en acción.

Anatomía de un puesto de primera venta en una playa del Partido de la Costa de la provincia de Buenos Aires, Argentina

<i>Marina Farinetti</i>	2
Introducción. El trabajo y la economía.....	2
La relación.....	4
El puesto.....	6
Saberes y habilidades en la transmisión de un oficio	9
Retratos laborales	11
Fuerza.....	16
La mirada del otro.....	18
Pescados	22
El futuro de la pesca artesanal.....	25
Reflexiones finales	28

CAPÍTULO 2

El encuentro de dos mundos sociales: la agricultura familiar y el basural. Aportes del estudio de caso de Tartagal, Argentina

<i>Cecilia Antonia Forment-Hirsch</i>	31
Introducción.....	31
Situando Pueblo Nuevo y el basural de Tartagal	35
Del cerco al basural: un abordaje etnográfico	38
Estructura del capítulo.....	39
Parte I. La emergencia de una nueva praxis: el “basureo”	39
El auge económico de Tartagal y la desaparición del monte	41
El desarrollo económico huele a basura.....	44
Basurear en familia.....	46
Parte II. El Capri: entre basural y supermercado	50
Del otro lado de las rejas	51
Los patios como un espacio multifuncional.....	56
La comunidad viste a la moda.....	60
Reflexiones finales	64

CAPÍTULO 3

Los ingresos de los hogares como un ejercicio especulativo. Una aproximación etnográfica a la opacidad de los ingresos en la vida económica de los hogares con ingresos moderados en Chile

<i>Lorena Pérez Roa</i>	71
Introducción.....	71
¿Qué constituye el ingreso del hogar?: algunos puntos sobre su variabilidad e intermitencia	75
La penetración de las finanzas en la percepción de ingresos disponibles de los hogares: el crédito que ensancha el ingreso.....	78
El desacople entre ingresos disponibles y patrones de consumo: cuando el gasto manda	81
A modo de conclusión: desafíos pendientes ante ingresos inciertos	84

CAPÍTULO 4

Economías populares, trabajo callejero y conflictividad en el centro de San José, Costa Rica (1980-1998)

<i>Carlos Izquierdo Vázquez</i>	89
Introducción.....	89
Características de las ventas y de las personas vendedoras de “tiliches” y productos agrícolas frescos.....	93
La venta de productos agrícolas comestibles.....	103
“Sacar un aguinaldito”. Ventas de juguetes y artículos navideños en diciembre	107
“Un mercado persa”. Conflictividad por el espacio público	112
Conclusiones.....	116

CAPÍTULO 5

El empleo informal: un análisis desde las economías de base. Costa Rica, 2020-2025

<i>Jesús Quirós González</i>	123
Introducción.....	123
El concepto de empleo informal.....	124
La problemática medición del sector informal	129
Caracterización del sector informal en Costa Rica entre 2020-2025	130
Las redes sociales, aplicaciones y nuevas tendencias del sector informal	138
Las economías de base y su relación con el sector informal dentro de una nueva realidad laboral	143
Conclusión.....	145

CAPÍTULO 6

Transformaciones económicas en Cuba y sostenibilidad de la vida: claves feministas para pensar los espacios socioproductivos

<i>Maura Febles Domínguez</i>	149
Introducción.....	149
Reformas económicas, contexto actual y desigualdad social	152
Economía feminista, reproducción social y sostenibilidad de la vida	157

Política social, marco jurídico y cuidados	160
¿Hacia una reorganización feminista de la reproducción social? Algunos resultados preliminares	162
1. Organización y asignación de roles: entre la rotación cooperativa y la especialización privada	163
2. Circuitos de cuidado y sostenimiento: entre la valorización explícita y la invisibilización funcional.....	164
3. Criterios distributivos y justicia económica: transparencia relativa frente a opacidad salarial.....	166
4. Ampliación del objeto social: adaptaciones económicas y tensiones subjetivas	167
Algunas consideraciones finales	168

SEGUNDA PARTE

Papel de las organizaciones de base en el fomento de proyectos productivos	175

CAPÍTULO 7

Construyendo la Economía Indígena Amazónica: reflexiones desde una perspectiva regional <i>Oscar Miguel Luna Alvarado, Guillermo Romero y Elizabeth Morillo</i>	176
Introducción.....	176
La economía indígena en la cuenca Amazónica	180
La Economía Indígena desde la visión de los pueblos y nacionalidades amazónicas del Ecuador	188
Mingas de pensamiento: proceso de reflexión colectiva en Colombia en torno a la economía indígena.....	195
Conclusiones.....	199

CAPÍTULO 8

Horizontes y límites del trabajo de cuidados comunitarios en la economía popular organizada en Argentina <i>Malena Victoria Hopp</i>	205
Introducción.....	205
Mirar desde la economía popular: enfoque teórico-metodológico.....	209

Estrategia metodológica	211
La Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular.....	213
Cuidados comunitarios: de la necesidad a la organización	216
Cuidados comunitarios en la economía popular organizada	220
Transformaciones y disputas en el presente	225
Rondas de ollas vacías y cuatro jornadas laborales.....	228
Reflexión final. Horizontes y límites de los cuidados comunitarios en la economía popular organizada.....	232

CAPÍTULO 9

La economía popular solidaria en la frontera México- Guatemala: resistencia y alternativas ante la violencia <i>León Enrique Ávila Romero</i>	241
Marco teórico-conceptual: economías desde abajo y la agencia en los márgenes.....	243
Economías de base y economías populares.....	243
Horizontalidad y autogestión	243
Interseccionalidad y metabolismo social.....	244
Contexto geohistórico: La producción social de la frontera Chiapas-Guatemala.....	245
El impacto del conflicto guatemalteco y el refugio.....	245
La coyuntura neoliberal y securitizadora	245
Principales sucesos de violencia en la Sierra Mariscal y Frontera Comalapas período (2018-2025).....	247
Sembrando vida en la frontera sur: desarrollo, migración y violencia en Chiapas	248
Impactos sociales y culturales: reconstrucción del tejido comunitario en contextos de rezago.....	249
Impactos ambientales: agroforestería entre la restauración y el riesgo	250
Impactos en la migración interna e internacional: ¿una alternativa real?	251
La sombra del narcotráfico: violencia que desafía al desarrollo	252
Intersecciones analíticas: tejiendo la trama de las alternativas	253

Migración y economías de base: solidaridad, subsistencia y tránsito	253
Agroecología como praxis de autogestión y defensa del territorio.....	254
Autogestión y empoderamiento comunitario: la arquitectura de lo horizontal	256
Autonomías territoriales y ontologías relacionales	257
Conclusiones.....	259

CAPÍTULO 10

La pluralidad del trabajo: desposesión, organización colectiva y éticas ordinarias en el Gran Buenos Aires <i>Virginia Manzano</i>	264
Introducción.....	264
Entramando Trabajo(s): emprendimientos, entornos comunitarios e infraestructuras	269
Políticas del trabajo: formas de acción colectiva, intervenciones estatales y desafíos del mercado	279
Reflexión final: la (in) dignidad del pobre: éticas ordinarias y desafíos políticos.....	287

CAPÍTULO 11

Tecnologías desde abajo y economía popular: Plataformas híbridas en el transporte urbano de Quito, Ecuador <i>Daniel Vizuite Sandoval</i>	295
Introducción.....	295
Hacia una economía popular digital: claves teóricas para entender las plataformas híbridas	298
Genealogía del taxismo: infraestructura popular, acción colectiva y disputas territoriales	302
Cartografía de las plataformas híbridas: ensamblajes digitales en la economía popular del taxi	306
Gobernar lo híbrido: soberanía tecnológica, economía popular digital y las tensiones de la modernidad periférica	310

CAPÍTULO 12

Redes de cuidado comunitario y resiliencia en entornos
de cohesión social fragmentada. Mujeres y comercio barrial
en comunidades urbanas de El Salvador

<i>Emilia Gallegos Mejía</i>	317
Introducción.....	317
Marco teórico y metodología	319
Resultados nacionales: la arquitectura de la desigualdad	321
Nivel macro: las fuentes de las reglas	321
La regla de reproducción intergeneracional: el circuito que institucionaliza la desventaja	322
La no-operación del derecho: la disyunción constitucional como regla macroeconómica	323
Nivel de elección colectiva (meso). La doble gobernanza del cuidado: mercado y orden criminal	324
La regla principal del mercado de trabajo: la división sexual del trabajo y su materialización en el tiempo	325
La regla de exclusión: el bloqueo al acceso al trabajo.....	327
La regla de conciliación precaria: la informalidad como estrategia de supervivencia	329
Los costos del cuidado en el nivel meso.....	334
El control pandillero como regla meso: la gobernanza criminal del territorio.....	336
Gobernanza local del cuidado: circuitos y reglas en Las Margaritas	338
Ámbito espacial.....	338
La arena operativa del cuidado.....	339
Participantes y sus posiciones	339
De las acciones posibles a la circulación del cuidado a través de circuitos entrelazados	341
Información y control.....	345
Costos y beneficios netos	347
Resultados del sistema	348
Conclusiones.....	349

TERCERA PARTE

Representaciones de las economías de base, las economías populares y las economías alternativas desde las subjetividades	355

CAPÍTULO 13

Qullqix jakäwiniwa (el dinero tiene vida), taqi kunas jakañaniwa (todo tiene vida): jamp'atu (sapo), economía y prosperidad <i>Jesús Nilo Llusco Mamani</i>	356
Introducción.....	356
Los imaginarios del sapo: representaciones simbólicas, históricas y culturales en el mundo.....	357
Pajchiri, la waxt'a y el sapo: la persistencia de la Pachamama	361
Economía popular y circulación de la prosperidad	368
Política, plurinacionalidad y conflictos contemporáneos.....	373
Conclusión.....	378

CAPÍTULO 14

Vulnerabilidad socioecológica y trata en mercados sexuales en contextos de crisis e informalidad: Ejemplos desde Venezuela <i>Irina Zudina</i>	382
Introducción.....	382
¿Mercados de victimización?	385
Vulnerabilidades.....	389
Una excursión filosófica	390
Marcos socioecológicos	393
Economías sexuales y trata en tiempos de crisis	397
Factores de riesgo en Venezuela	401
Factores Diversos	403
<i>Individual(es)</i>	403
<i>Entorno geográfico</i>	404
<i>Factores socioculturales</i>	405
<i>Relaciones sociales y familiares</i>	406
<i>Perspectivas laborales</i>	407
<i>Crimen organizado</i>	408
Conclusiones y reflexiones críticas	409

CAPÍTULO 15

Economia solidária sob disputa: forma jurídica ambiental e as organizações de catadores na logística reversa brasileira <i>Leila Giovana Izidoro</i>	422
Introdução.....	422
Economia solidária, informalidade e neoliberalismo: o lugar das organizações de catadores.....	425
Da economia solidária à economia verde: forma jurídica ambiental e a responsabilidade estendida do produtor.....	430
A participação das organizações de catadores no mercado brasileiro de logística reversa de embalagens	438
Considerações finais	444

CAPÍTULO 16

La legitimación de la informalidad desde las élites a partir de la discursividad mediática. El caso de Costa Rica <i>Ronny J. Viales Hurtado y David Chavarría Camacho</i>	451
Introducción.....	451
Enfoque teórico.....	455
Discurso, informalidad y poder.....	455
“Sistematización de estrategias discursivas”	457
Metodología	459
Marcos discursivos dominantes sobre la informalidad laboral en la prensa costarricense: análisis crítico desde la construcción mediática del fenómeno	461
Representaciones interseccionales en el discurso mediático sobre la informalidad en Costa Rica	477
La tipología de personas actoras y su papel en la legitimación de la informalidad en Costa Rica.....	484
Conclusión: discursividad mediática, perspectivas dominantes “desde arriba” y representaciones de la informalidad en Costa Rica.....	489
<i>Sobre las personas autoras</i>	508

Índice de tablas

TABLA 2.1 Evolución de la población en el Departamento General José de San Martín (1947-1991).....	42
TABLA 5.1 Aproximaciones de las escuelas de pensamiento a la Economía Informal	127
TABLA 5.2 Población ocupada y empleo informal en Costa Rica del 2019 al 2025	131
TABLA 5.3 Personas desempleadas y tasa de desempleo ampliada en Costa Rica entre 2019-2025.....	133
TABLA 5.4 Población ocupada en el sector informal, según ocupación, Costa Rica 2020-2025. Valor porcentual	135
TABLA 12.1 Evolución del tiempo semanal de cuidado no remunerado (personas de 12+ años).....	326
TABLA 12.2 Distribución del tiempo semanal de cuidado según grupo objetivo.....	326
TABLA 12.3 Evolución de la participación laboral y la brecha de género (2022-2024).....	326
TABLA 12.4 Trayectoria de la brecha salarial simple (2022-2024).....	327
TABLA 12.5 Tendencias de inactividad femenina	329
TABLA 12.6 Indicadores clave de la formalización del empleo femenino	330

TABLA 12.7 Evolución de la informalidad laboral por sexo, 2022–2024	331
TABLA 12.8 Comparación de metodologías de medición de informalidad urbana, 2022-2023	333
TABLA 12.9 Informalidad por rama de actividad económica, 2024	333
TABLA 16.1 Sistematización de estrategias discursivas sobre la economía informal a partir de la literatura consultada.....	458
TABLA 16.2 Estrategias discursivas, indicadores textuales y preguntas guía para el análisis.....	460
TABLA 16.3 Síntesis de resultados sobre las estrategias discursivas analizadas	467

Índice de figuras

FIGURA 2.1 El centro de Tartagal, el basural y las comunidades aledañas.....	36
FIGURA 2.2 Vespucio, Cherenta y el centro de Tartagal	40
FIGURA 2.3 Las tres ubicaciones del basural municipal de Tartagal	44
FIGURA 2.4 Reja de Pueblo Nuevo	52
FIGURA 2.5 Mujer delante de su casa en Pueblo Nuevo.....	53
FIGURA 2.6 Pueblo Nuevo en 2024.....	54
FIGURA 2.7 Macetas de botellas de plástico en Pueblo Nuevo	57
FIGURA 2.8 Jardín de Pueblo Nuevo	57
FIGURA 2.9 Jardín de Pueblo Nuevo	58
FIGURA 2.10 Interior de una habitación de la casa de Josefa en Pueblo Nuevo	61
FIGURA 2.11 Interior de una habitación de la casa de Josefa en Pueblo Nuevo	61
FIGURA 4.1 Sitios comerciales y circulación de personas vendedoras callejeras en el centro de San José	94
FIGURA 7.1 Talleres participativos para la construcción del concepto de Economía Indígena en Ecuador.....	191

FIGURA 7.2 Relación entre los tres principales elementos del concepto de economía indígena de la Amazonía ecuatoriana	193
FIGURA 8.1 Tipos de espacios de cuidado.....	221
FIGURA 9.1 Redes de la economía popular solidaria.....	244
FIGURA 9.2 La frontera entre México y Guatemala, epicentro de la violencia.....	248
FIGURA 9.3 Alternativas económicas en la frontera México-Guatemala.....	258
FIGURA 12.1 Mapa relacional de las categorías utilizadas en la codificación	320
FIGURA 13.1 La representación del sapo en la waxt'a	366
FIGURA 13.2 La ciudad de El Alto, La Ceja, los sapos y la iglesia.....	367
FIGURA 13.3 El sapo, sus ofrendas y su altar.....	367
FIGURA 16.1 Costa Rica: Marcos discursivos dominantes sobre la informalidad en la prensa nacional.....	463
FIGURA 16.2 Síntesis analítica de los ejes de representación interseccional de la informalidad laboral en Costa Rica a partir de la discursividad mediática	478
FIGURA 16.3 Las personas actoras y su papel en la legitimación de la informalidad desde la discursividad mediática.....	485
FIGURA 16.4 Las estrategias de la discursividad mediática para la legitimación de la informalidad desde las élites en Costa Rica	491
FIGURA 16.5 Los riesgos sociales de la legitimación de la informalidad desde la discursividad mediática.....	493
FIGURA 16.6 El poder discursivo de las personas actoras sobre la legitimación de la informalidad	494

Introducción

Ronny J. Viales Hurtado

Rosa Alvarado Brenes

Editores

Centro de Investigaciones Históricas
de América Central-Universidad de Costa Rica y
Centro Regional Centroamérica y el Caribe-CALAS

El Centro Maria Sibylla Merian de Estudios Latinoamericanos Avanzados en Humanidades y Ciencias Sociales (CALAS), en su fase de transición (2025-2029), impulsó el programa «Creando Horizontes: Aceleraciones, Transformaciones y Emergencias», estructurado en torno a tres ejes de investigación: las aceleraciones de los procesos sociales, las transformaciones de las visiones de mundo y las emergencias de nuevas prácticas. Este último eje parte de la premisa de que las crisis contemporáneas no solo producen rupturas e incertidumbres, sino que también generan experiencias que anticipan futuros posibles mediante nuevas formas de organización, convivencia, producción de conocimiento y reproducción de la vida. Desde esta perspectiva, las prácticas emergentes constituyen respuestas sociales capaces de cuestionar las formas dominantes de organización económica, política y cultural, al tiempo que abren horizontes alternativos

sustentados en la cooperación, la solidaridad, la justicia ambiental, la interculturalidad, la producción colaborativa del conocimiento y la acción colectiva. (CALAS, 2025).

El presente libro se inscribe en ese horizonte analítico de las aceleraciones de los procesos sociales, al estudiar las economías de base, las economías populares y otras formas alternativas de organización del trabajo que han surgido y se han fortalecido en América Latina y el Caribe como respuesta a las profundas transformaciones experimentadas por el mundo laboral durante las últimas décadas. Lejos de concebir estas experiencias únicamente como estrategias de supervivencia, los capítulos reunidos en este libro muestran que constituyen espacios de innovación social donde se producen nuevas formas de organización económica, nuevos vínculos entre comunidad, mercado y estado, así como alternativas concretas para sostener la vida en contextos marcados por la incertidumbre y la desigualdad.

Estas transformaciones deben entenderse dentro de un proceso histórico de reestructuración del capitalismo que ha modificado profundamente las relaciones laborales, los sistemas de protección social y los mecanismos de integración económica. En América Latina y el Caribe, el avance del reformismo neoliberal, después del ciclo de gobiernos progresistas que intentaron ampliar las políticas sociales y laborales, ha reconfigurado los estilos históricos de cohesión social. La flexibilización de los mercados de trabajo, la expansión de la informalidad, la erosión de los derechos laborales, el debilitamiento de la negociación colectiva y la creciente precarización del empleo han transformado las condiciones de reproducción de amplios sectores sociales. En este contexto, la denominada «guerra legal» (lawfare) ha funcionado también como un mecanismo de reconfiguración institucional y política que, en numerosos casos, ha favorecido reformas regresivas en materia laboral y social (Kittrie, 2016; Palacio y Fink, 2017).

La centralidad de estas transformaciones trasciende el ámbito económico. Tal como ha señalado Axel Honneth (2023), el trabajo continúa siendo un componente esencial de la autonomía individual, del reconocimiento social y de la participación democrática. La pérdida de estabilidad laboral, la expansión del empleo precario y el debilitamiento de los sistemas de protección no solo afectan los ingresos de las personas, sino también sus posibilidades de integración social y de ejercicio efectivo de la ciudadanía. En consecuencia, comprender la transformación contemporánea del trabajo exige analizar simultáneamente los cambios en las relaciones económicas, las instituciones laborales y las formas de construcción de las desigualdades.

La profundidad de estos cambios obliga a replantear la denominada «nueva cuestión social». Resulta indispensable preguntarse cuáles mecanismos han utilizado las élites políticas y económicas para transformar el mundo laboral (Viales Hurtado, Chavarría y Araya, 2016), cuáles han sido sus efectos sobre los derechos de las personas trabajadoras y sobre la seguridad social (Viales Hurtado y Díaz Arias, 2018), y de qué manera estos procesos han reconfigurado las formas contemporáneas de desigualdad (Viales Hurtado y Vargas, 2016). Estas preguntas adquieren mayor relevancia en un escenario caracterizado por la convergencia de múltiples crisis que interactúan entre sí y se refuerzan mutuamente (Hernes, 2010), configurando nuevas expresiones de vulnerabilidad social y laboral.

La pandemia de COVID-19 puso de manifiesto esta condición de manera particularmente evidente. Más que constituir un episodio aislado, aceleró procesos que ya se encontraban en marcha: profundizó la segmentación de los mercados de trabajo, amplió las desigualdades de clase, género, etnia y generación, modificó las modalidades de empleo y fortaleció nuevas formas de organización productiva sustentadas en tecnologías digitales (Cortés y Forsythe,

2022; Díaz Arias y Viales Hurtado, 2020). Paralelamente, la expansión de la inteligencia artificial, el capitalismo de plataformas, la reorganización de las cadenas globales de valor y los efectos de la crisis climática continúan transformando las formas de producción, circulación y consumo, planteando desafíos inéditos para la regulación laboral y para los sistemas de protección social (Shanti y Maclean, 2019; Baldry y Hyman, 2022; Jones, 2021).

En consecuencia, el estudio del trabajo ya no puede limitarse al análisis del empleo formal o de las relaciones salariales tradicionales. Las nuevas configuraciones del capitalismo exigen incorporar perspectivas capaces de comprender simultáneamente la informalidad, las economías populares, las formas cooperativas, las iniciativas comunitarias, las redes de ayuda mutua y otras modalidades mediante las cuales millones de personas producen cotidianamente los recursos necesarios para sostener la vida. Precisamente, es en este terreno donde las economías de base adquieren una importancia analítica fundamental.

Las categorías analíticas novedosas para aproximarse a las transformaciones del mundo del trabajo “desde abajo”

Las transformaciones descritas obligan a replantear las categorías tradicionales utilizadas para estudiar el trabajo y la producción. Las fronteras entre formalidad e informalidad, empleo y autoempleo, trabajo remunerado y no remunerado, producción y reproducción social se han vuelto cada vez más difusas como consecuencia de las múltiples estrategias mediante las cuales las personas enfrentan la creciente incertidumbre económica. En este contexto, las economías de base (grassroots economies) constituyen una herramienta analítica particularmente útil para comprender cómo los distintos actores sociales producen, distribuyen,

intercambian y gestionan los recursos necesarios para sostener la vida cotidiana.

Desde la antropología económica, Susana Narotzky (2004, 2012, 2020) propone desplazar la atención desde los grandes agregados macroeconómicos hacia las prácticas concretas mediante las cuales las personas organizan cotidianamente su subsistencia. Este enfoque permite observar cómo la población combina diversas fuentes de ingreso, moviliza redes familiares y comunitarias, desarrolla mecanismos de cooperación y reciprocidad, accede al crédito formal e informal, reutiliza recursos disponibles y construye estrategias de adaptación frente a mercados laborales crecientemente inestables. En consecuencia, las economías de base no constituyen un sector residual del capitalismo, sino una dimensión constitutiva de su funcionamiento, especialmente en sociedades caracterizadas por elevados niveles de desigualdad e informalidad.

Este libro distingue, como herramienta heurística, entre las economías de base entendidas como el conjunto de prácticas cotidianas mediante las cuales las personas organizan su reproducción material y social (Narotzky, 2020), y la economía de base concebida como la generación de alternativas organizativas surgidas desde la economía popular para innovar, reorganizar la producción y construir nuevas formas de trabajo en el contexto del capitalismo contemporáneo. Esta distinción permite comprender simultáneamente la dimensión cotidiana de la supervivencia y la capacidad colectiva para generar respuestas organizativas frente a las transformaciones estructurales del mercado de trabajo.

Desde esta perspectiva, la informalidad deja de entenderse exclusivamente como una condición jurídica o estadística para convertirse en un fenómeno profundamente relacional. La expansión de formas de trabajo informal responde tanto a las transformaciones del capitalismo global como a la capacidad de los actores sociales para construir mecanismos alternativos de inserción económica, producción y reproducción

de la vida. Ello implica abandonar las interpretaciones que reducen la informalidad al incumplimiento normativo o a la marginalidad y reconocerla como un espacio donde convergen dinámicas económicas, sociales, culturales y políticas que interactúan constantemente con las instituciones estatales y con los mercados formales.

Esta perspectiva relacional también permite recuperar la tradición de la economía moral de los pobres, desarrollada por E. P. Thompson (1971), para comprender cómo las comunidades construyen criterios propios de justicia, reciprocidad y legitimidad económica frente a las desigualdades generadas por el mercado. Las estrategias de supervivencia no responden únicamente a cálculos racionales de maximización económica, sino que se encuentran atravesadas por normas morales, relaciones de confianza, obligaciones familiares, vínculos comunitarios y formas históricas de solidaridad que condicionan tanto la producción como la distribución de los recursos. En este sentido, las economías de base expresan formas específicas de agencia colectiva que permiten sostener espacios de integración social aun en contextos marcados por la exclusión y la precarización.

Los estudios desarrollados por Viales Hurtado e Izquierdo (2018) amplían esta perspectiva al proponer un análisis relacional que articula familia, redes de ayuda mutua, mercados laborales, consumo, ahorro, microcrédito, informalidad y relaciones entre comunidad, mercado y estado. Este enfoque permite comprender que las economías de base funcionan mediante múltiples escalas de interacción y que su dinámica depende tanto de factores estructurales como de decisiones cotidianas adoptadas por hogares, organizaciones comunitarias, cooperativas, asociaciones y pequeños emprendimientos. En consecuencia, las economías de base no pueden analizarse únicamente desde indicadores económicos, sino también mediante las relaciones sociales, culturales e institucionales que hacen posible su reproducción.

Esta aproximación resulta especialmente pertinente para América Latina y el Caribe, donde las profundas desigualdades históricas de clase, etnia, género y territorio han favorecido la consolidación de formas heterogéneas de organización económica que desbordan las categorías tradicionales del empleo asalariado. Agricultura familiar, cooperativas, asociaciones comunitarias, comercio popular, reciclaje, trabajo doméstico, plataformas digitales, economías indígenas, redes de cuidados, trabajo migrante y múltiples formas de autoempleo constituyen expresiones diversas de un mismo proceso: la búsqueda permanente de mecanismos de reproducción social frente a las limitaciones del empleo formal y de los sistemas tradicionales de protección laboral.

Desde esta perspectiva, el objetivo de este libro no consiste únicamente en describir experiencias de economía popular o informalidad, sino en analizar cómo estas prácticas producen nuevas formas de organización económica, nuevos repertorios de acción colectiva y nuevas maneras de imaginar el futuro del trabajo. Las economías de base aparecen como espacios privilegiados para comprender tanto las respuestas sociales frente a las crisis contemporáneas como la emergencia de alternativas capaces de cuestionar los modelos tradicionales de desarrollo y de ampliar los horizontes de transformación social.

Una perspectiva relacional, histórica y comparada

El estudio de las economías de base exige superar los enfoques sectoriales que analizan aisladamente el empleo, la informalidad, la pobreza o la economía popular. Las transformaciones contemporáneas del trabajo solo pueden comprenderse mediante una perspectiva que articule diferentes escalas de análisis y reconozca la interacción permanente entre procesos históricos, instituciones, mercados y experiencias cotidianas.

En consecuencia, este volumen adopta un enfoque histórico, comparado, relacional e interseccional, orientado a explicar cómo las transformaciones estructurales del capitalismo se expresan de manera diferenciada en distintos estados, territorios, grupos sociales y formas de organización económica.

El análisis histórico permite situar las economías de base dentro de trayectorias de larga duración. Muchas de las prácticas estudiadas en este libro —cooperativas, redes de ayuda mutua, agricultura familiar, economías indígenas, comercio popular, trabajo comunitario o reciclaje— no constituyen respuestas coyunturales surgidas exclusivamente del neoliberalismo contemporáneo. Por el contrario, poseen raíces históricas profundas que remiten a formas comunales de organización existentes desde las sociedades indígenas, fortalecidas posteriormente mediante sociedades mutualistas, cooperativas, organizaciones campesinas y múltiples experiencias de economía solidaria desarrolladas a través de la historia. Esta perspectiva evita interpretar las economías de base únicamente como expresiones de carencia y permite reconocerlas como procesos históricos de innovación institucional y organización colectiva.

Al mismo tiempo, el enfoque comparado posibilita identificar tanto las particularidades nacionales como los procesos compartidos que caracterizan a América Latina y el Caribe. Las transformaciones del trabajo responden simultáneamente a dinámicas globales —reestructuración productiva, financiarización, plataformas digitales, inteligencia artificial, crisis climática o nuevas cadenas globales de valor— y a configuraciones institucionales específicas de cada sociedad. La comparación permite comprender cómo estas tendencias generales interactúan con distintas trayectorias estatales, regímenes laborales, tradiciones organizativas y culturas políticas, evitando explicaciones universalistas y resaltando la diversidad de respuestas construidas por las sociedades latinoamericanas y caribeñas.

El enfoque relacional constituye el eje metodológico del libro. Las economías de base son analizadas como procesos que vinculan permanentemente comunidad, mercado y estado, articulando relaciones familiares, redes de reciprocidad, mecanismos de cooperación, políticas públicas, instituciones laborales y formas diversas de intercambio económico. Desde esta perspectiva, la informalidad no representa un espacio separado de la economía formal, sino una dimensión constitutiva de sistemas económicos complejos donde coexisten múltiples formas de regulación, producción y circulación de recursos. Ello permite comprender las economías populares no como economías “paralelas”, sino como componentes fundamentales del funcionamiento cotidiano de las sociedades contemporáneas.

Esta aproximación incorpora igualmente una perspectiva interseccional, reconociendo que las oportunidades, restricciones y estrategias de reproducción social se encuentran atravesadas por relaciones de poder asociadas a la clase, el género, la etnia, la edad, la nacionalidad, la edad, el territorio y otras formas de diferenciación social. La precarización laboral, la informalidad, la migración, la división sexual del trabajo, los cuidados, las desigualdades ambientales y las distintas formas de violencia no constituyen fenómenos independientes, sino dimensiones interrelacionadas que configuran experiencias diferenciadas del trabajo y de la supervivencia cotidiana. Analizar estas intersecciones resulta indispensable para comprender tanto las desigualdades estructurales como la diversidad de respuestas construidas desde las economías de base.

En este sentido, el libro propone desplazar la mirada desde los indicadores tradicionales del mercado laboral hacia los procesos mediante los cuales las personas y las comunidades sostienen la reproducción de la vida. La producción, el consumo, el ahorro, el crédito, el cuidado, el reciclaje, la agricultura familiar, las economías indígenas, las plataformas digitales,

las cooperativas y las redes comunitarias son analizados como dimensiones de un mismo proceso de reorganización del trabajo que desafía las categorías convencionales de empleo, empresa y productividad. El objetivo no consiste únicamente en documentar nuevas modalidades laborales, sino en comprender las transformaciones contemporáneas del capitalismo a partir de las prácticas cotidianas de quienes experimentan sus efectos de manera más directa.

En consecuencia, este libro propone comprender las economías de base como un laboratorio privilegiado para estudiar las tensiones entre desigualdad, innovación y transformación social. Más que constituir respuestas marginales frente a la crisis, estas experiencias revelan la capacidad de los actores sociales para construir formas alternativas de organización económica, generar nuevas relaciones de solidaridad y redefinir los límites entre producción y reproducción de la vida. Desde esta perspectiva, las economías de base representan simultáneamente una categoría analítica, un objeto de investigación y un espacio de producción de futuros posibles.

El contenido del libro

Para aproximarse a estas problemáticas, la Sede Centroamérica y el Caribe de CALAS (<http://calas.lat/es/acerca-de-calas>), ubicada en el Centro de Investigaciones Históricas de América Central (CIHAC) (<https://cihac.fcs.ucr.ac.cr/>) de la Universidad de Costa Rica, con el apoyo del Ministerio Federal de Investigación, Tecnología y Espacio (BMFTR), convocaron la Plataforma para el Diálogo “Economías de base, economías populares y economías alternativas. Horizontes y limitaciones de las actuales dinámicas laborales en América Latina y el Caribe”, que se llevó a cabo en la Universidad de Costa Rica, entre el 5 y el 7 de noviembre de 2025. La actividad fue organizada por Ronny J. Viales Hurtado (Centro de Investigaciones Históricas de América Central-Universidad

de Costa Rica y Centro Regional Centroamérica y el Caribe-CALAS); Christine Hatzky (Centre for Atlantic and Global Studies - Leibniz Universität Hannover y Centro Regional Centroamérica y el Caribe-CALAS); Cristina Cielo (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales-Ecuador y Centro Regional Andes-CALAS); y Marina Farinetti (Escuela de Humanidades y Escuela de Política y Gobierno-Universidad Nacional de San Martín y Centro Regional Cono Sur-CALAS).

Este libro incluye 16 capítulos basados en las ponencias presentadas en esta plataforma. El libro se organiza en tres partes: la primera parte presenta aproximaciones a las formas alternativas de actividad económica organizadas “desde abajo”; la segunda se centra en el análisis del papel de las organizaciones de base en el fomento de proyectos productivos y la tercera en el estudio de las representaciones de las economías de base, las economías populares y las economías alternativas desde las subjetividades.

En la primera parte, en el capítulo 1, titulado “Pescadores artesanales en acción. Anatomía de un puesto de primera venta en una playa del Partido de la Costa de la provincia de Buenos Aires, Argentina”, Marina Farinetti propone repensar la economía desde las prácticas cotidianas del trabajo artesanal, tomando como estudio de caso un puesto de primera venta de pescado en la costa bonaerense. A partir de una investigación etnográfica desarrollada durante veinticinco días, la autora analiza cómo los pescadores construyen formas de vida, saberes, relaciones de cooperación y sentidos compartidos que desbordan una comprensión exclusivamente económica del trabajo. Inspirada en la antropología de la economía de Narotzky y Besnier, introduce los conceptos de economías de base y valor social para demostrar que el trabajo pesquero no solo produce mercancías, sino también reconocimiento, identidad, transmisión intergeneracional de conocimientos y vínculos comunitarios. El análisis muestra que el puesto de venta constituye un espacio privilegiado

para observar la articulación entre escalas locales y globales, donde confluyen la naturaleza, las regulaciones estatales, las tecnologías digitales, los mercados y las relaciones sociales.

Farinetti evidencia que la pesca artesanal enfrenta profundas tensiones derivadas del capitalismo contemporáneo, la competencia de la pesca industrial, las transformaciones ambientales y la pérdida de relevo generacional. Los pescadores experimentan una constante desvalorización social de su oficio, aunque reivindican su trabajo por la autonomía que ofrece, el contacto cotidiano con el mar y el conocimiento especializado que requiere. Asimismo, la autora muestra cómo el valor de los productos pesqueros está determinado por cadenas comerciales y mercados de exportación que muchas veces ignoran las necesidades y preferencias de las comunidades locales. El estudio concluye que comprender las economías de base exige reconocer que el valor económico está inseparablemente ligado al valor social producido por las personas, sus prácticas y sus relaciones, lo que permite cuestionar las formas dominantes de valorización del capitalismo y abrir nuevas perspectivas para pensar la economía desde el trabajo y la reproducción de la vida en común.

Cecilia Antonia Forment-Hirsch, en el capítulo 2, titulado “El encuentro de dos mundos sociales: la agricultura familiar y el basural. Aportes del estudio de caso de Tartagal, Argentina”, aborda la interrogante de cómo las economías de base emergen en la intersección entre la agricultura familiar indígena y las actividades de recuperación de residuos en el basural de Tartagal, en el norte argentino. Mediante una investigación etnográfica, centrada en la experiencia de una familia guaraní, la autora muestra que el paso desde el trabajo agrícola hacia la recolección de residuos no responde únicamente a la condición de pobreza, sino también a la convergencia de crisis ambientales —como la sequía y la escasez de agua—, transformaciones económicas y estrategias familiares para sostener la reproducción cotidiana. Desde una

perspectiva inspirada en la antropología de la economía, la teoría de las capabilities y los estudios sobre la informalidad latinoamericana, el capítulo cuestiona la visión que reduce el trabajo informal a una carencia y propone comprenderlo como un espacio de innovación, creatividad y construcción de nuevas formas de organización económica y social.

A partir del estudio del basural como un espacio de encuentro entre distintos regímenes de valor, Forment-Hirsch demuestra que los residuos adquieren diversos significados económicos, sociales y morales, según los actores que interactúan con estos. Las prácticas de recolectar alimentos para animales, recuperar objetos para reutilizarlos y comercializar materiales reciclables constituyen estrategias económicas complejas que combinan conocimientos agrícolas, redes familiares y circuitos comerciales transfronterizos. La autora evidencia las tensiones entre la dignidad asociada al trabajo agrario y el estigma que pesa sobre quienes trabajan con la basura, mostrando cómo ambas actividades conviven en las trayectorias de las familias rurales. El capítulo concluye que estas economías de base revelan la capacidad de los actores y de las actoras para producir nuevas formas de subsistencia y organización frente a contextos de precariedad estructural, desdibujando las fronteras entre lo formal e informal, lo rural y lo urbano, y entre la producción y el descarte, para repensar la economía desde las prácticas concretas de reproducción de la vida.

En el capítulo 3, Lorena Pérez Rosa estudia “Los ingresos de los hogares como un ejercicio especulativo. Una aproximación etnográfica a la opacidad de los ingresos en la vida económica de los hogares con ingresos moderados en Chile”. La autora se aproxima a las economías de base desde el espacio doméstico, argumentando que la reproducción cotidiana de la vida se encuentra profundamente condicionada por la expansión de la financiarización. Su propuesta desplaza la atención desde las grandes estructuras financieras hacia las prácticas concretas mediante las cuales los

hogares populares administran ingresos inestables, deudas, créditos y redes familiares para garantizar la subsistencia. El endeudamiento no aparece únicamente como un mecanismo económico, sino también como una forma de organización social que redefine las relaciones familiares, los tiempos de vida, las obligaciones morales y las expectativas de futuro. En este sentido, la autora sostiene que las familias desarrollan complejas estrategias de aprovisionamiento, ahorro, consumo y reciprocidad que permiten sostener la reproducción social aun en contextos de creciente precarización laboral.

Desde una perspectiva de economía feminista y antropología económica, el capítulo cuestiona la separación entre producción y reproducción, mostrando que el trabajo doméstico, los cuidados y la gestión cotidiana del dinero constituyen actividades económicas fundamentales, aunque frecuentemente invisibilizadas. Las mujeres ocupan un lugar central en estas estrategias, administrando presupuestos familiares, negociando deudas y articulando redes de apoyo que amortiguan los efectos de la incertidumbre económica. Así, las economías de base no deben entenderse únicamente como espacios de supervivencia, sino también como ámbitos de creación de valor social, reciprocidad y resistencia frente a las dinámicas del capitalismo financiarizado. La autora concluye que comprender estas prácticas cotidianas resulta indispensable para analizar las desigualdades contemporáneas y para repensar las políticas públicas desde la sostenibilidad de la vida antes que desde la lógica exclusiva del mercado.

Carlos Izquierdo Vázquez, en el capítulo 4, titulado “Economías populares, trabajo callejero y conflictividad en el centro de San José, Costa Rica (1980-1998)”, se aproxima al crecimiento de las economías populares urbanas en Costa Rica, como respuesta a la crisis económica de la década de 1980 y a las reformas de ajuste estructural. El autor sostiene que la expansión de las ventas ambulantes y estacionarias no constituyó un fenómeno marginal o transitorio, sino una

estrategia de reproducción social desarrollada por amplios sectores excluidos del mercado laboral formal. A partir de una perspectiva histórica, reconstruye las formas de organización del trabajo callejero, las trayectorias de quienes dependían de estas actividades y las respuestas del Estado, las municipalidades, los comerciantes establecidos y los medios de comunicación. El capítulo muestra que el espacio público del centro de San José se convirtió en un escenario donde convergían necesidades económicas, disputas políticas y conflictos por el uso de la ciudad, revelando que las economías populares eran parte constitutiva de las transformaciones del capitalismo costarricense durante las décadas de 1980 y 1990.

El análisis evidencia que la conflictividad alrededor del comercio callejero trascendía las discusiones sobre orden urbano o la legalidad, pues expresaba tensiones más profundas relacionadas con la exclusión social, la precarización del trabajo y la redefinición del papel del Estado en el contexto neoliberal. Izquierdo demuestra que los vendedores ambulantes desarrollaron formas de organización colectiva, negociación y resistencia para defender su derecho al trabajo frente a políticas de desalojo, regulación y criminalización. Asimismo, examina cómo los discursos institucionales y mediáticos tendieron a asociar estas actividades con el desorden, la inseguridad y los problemas sanitarios, invisibilizando su función como mecanismo de subsistencia para miles de familias. El capítulo propone interpretar las economías populares como espacios de producción de valor económico y social que cuestionan las fronteras entre formalidad e informalidad, al tiempo que evidencian la capacidad de los sectores populares para construir alternativas de trabajo y reproducción de la vida en contextos de profundas transformaciones económicas.

En el capítulo 5, que lleva por título “El empleo informal: un análisis desde las economías de base. Costa Rica, 2020-2025”, Jesús Quirós González se centra en el análisis de la

evolución reciente del empleo informal en Costa Rica desde la perspectiva de las economías de base, con el propósito de comprender cómo las personas desarrollan estrategias de supervivencia y generación de ingresos en un contexto marcado por la postpandemia de la COVID-19, la recuperación económica y la expansión de las plataformas digitales. El autor parte de una revisión del concepto de empleo informal y de su evolución historiográfica e institucional, para mostrar que las nuevas modalidades de trabajo asociadas a aplicaciones como Uber, DiDi, los servicios de reparto y el comercio mediante redes sociales han transformado las formas tradicionales de informalidad. El autor sostiene que estas actividades deben entenderse como expresiones contemporáneas de las economías de base, en las que los trabajadores recurren a mecanismos flexibles de inserción laboral frente a la insuficiencia del empleo formal. Asimismo, advierte que el discurso del emprendimiento y del «hazlo por ti mismo» puede invisibilizar procesos de precarización laboral y de desprotección social al presentar estas actividades como opciones individuales más que como respuestas estructurales a las crisis económicas.

A partir del análisis de las Encuestas Continuas de Empleo del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) para el período 2020-2025, el capítulo examina la magnitud, composición y evolución del sector informal en Costa Rica, identificando sus principales características demográficas y ocupacionales. Aunque los indicadores muestran una reducción porcentual de la informalidad tras la pandemia, el autor argumenta que ello no implica necesariamente una disminución de la precariedad, pues una parte importante de las nuevas modalidades laborales continúa desarrollándose al margen de la protección laboral y de la regulación estatal. Desde esta perspectiva, las economías de base constituyen un marco analítico que permite comprender el empleo informal no solo como una categoría estadística, sino como

un conjunto de estrategias sociales orientadas a garantizar la reproducción de la vida en contextos de incertidumbre económica. En consecuencia, el capítulo concluye que el estudio del trabajo informal debe incorporar las transformaciones tecnológicas, las plataformas digitales y las nuevas formas de autoempleo, sin perder de vista las desigualdades estructurales que impulsan a miles de personas a depender de estas modalidades de trabajo.

El caso de Cuba es estudiado por Maura Febles Domínguez, en el capítulo 6 titulado “Transformaciones económicas en Cuba y sostenibilidad de la vida: claves feministas para pensar los espacios socioproductivos”. En este se examinan las profundas transformaciones que ha experimentado la economía cubana desde inicios del siglo XXI, a partir de la expansión de formas de gestión no estatal, como las micro, pequeñas y medianas empresas, las cooperativas y diversos proyectos comunitarios. La autora sostiene que estos cambios no representan simplemente una liberalización económica, sino más bien una reconfiguración del modelo socialista que ha modificado las relaciones entre estado, mercado y sociedad. Desde la economía feminista, el capítulo cuestiona las interpretaciones centradas exclusivamente en la producción y el crecimiento económico, proponiendo analizar estos procesos a partir de la sostenibilidad de la vida, entendida como el conjunto de actividades materiales y afectivas que garantizan la reproducción cotidiana de las personas y las comunidades. En este marco, los espacios socio-productivos son concebidos como escenarios donde convergen dinámicas económicas, relaciones de género, prácticas de cuidado y estrategias de organización colectiva que desbordan la lógica mercantil.

A partir de este enfoque, Febles plantea que las nuevas formas de organización económica generan oportunidades para diversificar las fuentes de ingreso y fortalecer iniciativas comunitarias, pero también reproducen desigualdades de género al trasladar buena parte de las responsabilidades

de cuidado a los hogares y, especialmente, a las mujeres. El análisis evidencia que la sostenibilidad de estas experiencias depende de la articulación entre trabajo remunerado y no remunerado, de las redes comunitarias y de las capacidades colectivas para gestionar recursos y resolver necesidades cotidianas. Así, el capítulo propone que las economías de base en Cuba deben comprenderse como espacios de innovación social en los que la producción económica solo puede analizarse junto con la reproducción de la vida. La autora concluye que incorporar una perspectiva feminista permite visibilizar el valor económico y social de los cuidados, cuestionar las métricas tradicionales del desarrollo y ampliar el debate sobre las transformaciones económicas cubanas hacia un modelo que coloque la vida, la equidad y la justicia social en el centro del análisis.

La segunda parte del libro inicia con el trabajo de Oscar Miguel Luna Alvarado, Guillermo Romero y Elizabeth Morillo quienes, en el capítulo 7 titulado “Construyendo la Economía Indígena Amazónica: reflexiones desde una perspectiva regional”, proponen una reinterpretación de la economía amazónica desde las experiencias y los conocimientos de los pueblos y nacionalidades indígenas. Las personas autoras parten de la constatación de que las organizaciones indígenas han desarrollado, durante décadas, procesos de resistencia frente al extractivismo, la expansión del capitalismo y las políticas de desarrollo impuestas desde el estado y los organismos internacionales. Estas intervenciones, diseñadas bajo esquemas verticales de modernización, han ignorado sistemáticamente las dinámicas culturales, sociales y territoriales de las comunidades amazónicas, generando proyectos con escasa sostenibilidad y, con frecuencia, impactos sociales y ambientales negativos. Frente a ello, el capítulo sostiene que la economía indígena amazónica constituye una propuesta alternativa construida desde las propias organizaciones indígenas, basada en la defensa del territorio, la autonomía,

la acción colectiva y la valorización de los conocimientos ancestrales, aunque estas experiencias han recibido escasa sistematización en la literatura académica.

Desde esta perspectiva, argumentan que la economía indígena no puede entenderse únicamente mediante categorías convencionales de mercado, producción o crecimiento, sino como un sistema integral en el que la reproducción de la vida, la conservación de la naturaleza, las relaciones comunitarias y el ejercicio de los derechos colectivos constituyen dimensiones inseparables. Las organizaciones indígenas aparecen como actoras fundamentales para impulsar proyectos productivos que fortalecen la soberanía territorial, la gobernanza comunitaria y formas de desarrollo compatibles con los valores culturales amazónicos. El capítulo propone superar los enfoques extractivistas y desarrollistas mediante un diálogo horizontal entre conocimientos académicos e indígenas, reconociendo a las economías de base como espacios de innovación política, económica y ambiental. De esta manera, la economía indígena amazónica se presenta no solo como una estrategia de supervivencia, sino como una alternativa de desarrollo que cuestiona las relaciones de poder del capitalismo contemporáneo y plantea nuevas formas de articular bienestar, territorio y sostenibilidad.

En el capítulo 8, Malena Victoria Hopp analiza los “Horizontes y límites del trabajo de cuidados comunitarios en la economía popular organizada en Argentina”, a partir del papel de los cuidados comunitarios como una de las principales formas de organización del trabajo dentro de la economía popular argentina, tomando como estudio de caso a la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP). La autora sitúa su trabajo en un contexto de creciente precarización laboral, debilitamiento del empleo asalariado protegido y profundización de las desigualdades de género, agravadas por las políticas de ajuste implementadas en Argentina desde finales de 2023. A partir de una

metodología cualitativa basada en entrevistas, observación participante y análisis documental, reconstruye la evolución de las organizaciones comunitarias de cuidado y muestra que estas no constituyen únicamente respuestas asistenciales frente a la pobreza, porque constituyen experiencias laborales y políticas que sostienen cotidianamente la reproducción de la vida en los barrios populares. Desde esta perspectiva, la economía popular aparece como una categoría analítica que permite comprender formas de trabajo invisibilizadas por las estadísticas convencionales y por las concepciones tradicionales del mercado laboral.

El capítulo sostiene que los cuidados comunitarios producen un valor económico y social fundamental al garantizar alimentación, educación, salud, acompañamiento y organización territorial, tareas desarrolladas mayoritariamente por mujeres en condiciones de escaso reconocimiento y protección laboral. Hopp muestra cómo la UTEP ha impulsado procesos de organización gremial y de incidencia política para que estas actividades sean reconocidas como trabajo, promoviendo iniciativas legislativas como la campaña “Cuidar es Trabajo” y proyectos orientados a garantizar remuneración, derechos laborales y seguridad social para las trabajadoras comunitarias. Asimismo, analiza las tensiones generadas por las recientes reformas estatales, que han debilitado las políticas de apoyo a la economía popular y a los cuidados, reubicándolas nuevamente en el ámbito privado y familiar. La autora concluye que la organización colectiva de los cuidados constituye una experiencia innovadora de las economías de base, capaz de cuestionar la separación entre producción y reproducción, visibilizar el trabajo históricamente feminizado y proponer un modelo de desarrollo centrado en la sostenibilidad de la vida, la solidaridad y la justicia social.

León Enrique Ávila Romero se aproxima, en el capítulo 9, a “La Economía Popular Solidaria en la Frontera México-Guatemala: Resistencia y Alternativas ante la Violencia”.

Examina el potencial de la Economía Popular Solidaria (EPS) como una estrategia de resistencia frente a la exclusión, la violencia y las desigualdades que caracterizan a la frontera sur de México. El autor parte de una crítica al capitalismo global y a las políticas neoliberales que han profundizado la marginación territorial, proponiendo la EPS como una forma de organización económica basada en la autogestión, la cooperación, la reciprocidad y la sostenibilidad. Inspirado en los aportes de Gibson-Graham y José Luis Coraggio, sostiene que las economías de base constituyen alternativas reales al paradigma hegemónico del mercado al fortalecer las capacidades organizativas de las comunidades y promover formas democráticas de producción y distribución. En el caso de la frontera Chiapas–Guatemala, estas iniciativas adquieren una dimensión particular, pues se desarrollan en un territorio atravesado por la migración, la violencia del narcotráfico, la militarización y las profundas desigualdades sociales, donde las comunidades han construido respuestas colectivas para defender sus medios de vida y su autonomía.

A partir del análisis de diversas experiencias comunitarias, el capítulo plantea que la economía popular solidaria no solo genera oportunidades productivas, sino que también fortalece el tejido social y la capacidad de las comunidades para enfrentar contextos de inseguridad y conflicto. El autor destaca la importancia de proyectos agroecológicos, cooperativas, redes de comercio justo y programas como “Sembrando Vida”, cuyo potencial depende de que las políticas de desarrollo se articulen con estrategias eficaces de protección de los derechos humanos y de seguridad ciudadana. Sin embargo, advierte que la persistencia de la violencia criminal limita la consolidación de estas iniciativas, ya que el control territorial ejercido por organizaciones delictivas debilita la organización comunitaria y obstaculiza la construcción de alternativas económicas sostenibles. Ávila concluye que la transformación de la frontera requiere superar las intervenciones

asistencialistas y construir políticas integrales que reconozcan a las organizaciones locales como actoras centrales del desarrollo territorial, la justicia ambiental y la paz social.

En el capítulo 10, titulado “La pluralidad del trabajo: desposesión, organización colectiva y éticas ordinarias en el Gran Buenos Aires”, Virginia Manzano propone una reinterpretación de las transformaciones del trabajo en la periferia urbana de Buenos Aires, Argentina, a partir de un enfoque antropológico que supera la identificación exclusiva entre trabajo y empleo asalariado. La autora parte de la profunda reestructuración económica iniciada durante la última dictadura militar argentina y consolidada bajo las reformas neoliberales, proceso que provocó el cierre de industrias, el desempleo masivo y la expansión de nuevas formas de organización económica popular. Tomando como punto de partida la aparición de las ollas populares en antiguos barrios obreros, Manzano muestra cómo las experiencias de desposesión no produjeron únicamente exclusión, sino también nuevas formas de organización colectiva y de producción de la vida cotidiana. Desde esta perspectiva, el trabajo debe entenderse como un conjunto plural de actividades que incluyen la producción de bienes, el cuidado, la autoconstrucción del hábitat, la alimentación comunitaria y la organización política, todas ellas fundamentales para sostener la reproducción social en contextos de crisis.

El capítulo argumenta que las economías de base se configuran mediante prácticas colectivas y éticas ordinarias que articulan solidaridad, reciprocidad y acción política en la vida cotidiana. A través de una reconstrucción histórica y etnográfica del Gran Buenos Aires, Manzano demuestra que las organizaciones territoriales surgidas frente al desempleo y la pobreza no constituyen respuestas coyunturales, sino procesos duraderos de creación de nuevas formas de trabajo y ciudadanía. Las experiencias de comedores populares, cooperativas, movimientos de trabajadores desocupados y otras

iniciativas comunitarias producen recursos materiales, pero también generan vínculos sociales, capacidades organizativas y sentidos compartidos que cuestionan las fronteras convencionales entre economía, política y vida comunitaria. En consecuencia, la autora concluye que comprender la pluralidad del trabajo implica reconocer que las economías populares no representan una anomalía del capitalismo, porque constituyen espacios donde se producen formas alternativas de organización económica y de acción colectiva que redefinen el significado mismo del trabajo y de la reproducción de la vida.

Daniel Vizuite Sandoval, en el capítulo 11, titulado “Tecnologías desde abajo y economía popular: Plataformas híbridas en el transporte urbano de Quito, Ecuador”, presenta un análisis centrado en la emergencia de plataformas híbridas en el sector del transporte urbano en Ecuador como una expresión de las transformaciones contemporáneas de las economías de base en la era digital. El autor cuestiona la idea de que la digitalización implica necesariamente la sustitución de las formas tradicionales de organización económica por plataformas corporativas como Uber o DiDi. En su lugar, demuestra que las cooperativas de taxis ecuatorianas han incorporado aplicaciones, sistemas de geolocalización y herramientas digitales sin abandonar sus estructuras gremiales, territoriales y cooperativas. Estas experiencias constituyen una forma de economía solidaria digital, donde las tecnologías globales son apropiadas y resignificadas desde contextos locales para fortalecer formas históricas de cooperación y organización colectiva. Desde un enfoque crítico de los estudios sociales de la ciencia y la tecnología, Vizuite sostiene que estas iniciativas representan procesos de innovación producidos “desde abajo”, capaces de disputar el sentido de la modernización tecnológica en América Latina.

El capítulo propone interpretar estas experiencias mediante los conceptos de *ethos* barroco, desarrollado por Bolívar Echeverría, y de hibridación, de Néstor García Canclini, para

explicar cómo las organizaciones populares combinan infraestructuras digitales externas con prácticas locales de reciprocidad, solidaridad y autogestión. Las plataformas híbridas no son presentadas como modelos plenamente cooperativos ni como simples reproducciones del capitalismo de plataformas, sino como configuraciones sociotécnicas contradictorias que articulan dependencia tecnológica y autonomía organizativa, subordinación e innovación. Más que competir únicamente en términos de eficiencia económica, estas iniciativas buscan construir formas incipientes de soberanía tecnológica, permitiendo que actores históricamente marginados intervengan en los procesos de digitalización y redefinan las relaciones entre tecnología, trabajo y territorio. En consecuencia, Vizuite concluye que las economías populares digitales constituyen espacios dinámicos de experimentación social que amplían las posibilidades de la economía solidaria en el contexto latinoamericano y muestran que la innovación tecnológica también puede surgir desde las organizaciones de base.

El capítulo 12, de Emilia Gallegos Mejía, cuyo título es “Redes de cuidado comunitario y resiliencia en entornos de cohesión social fragmentada. Mujeres y comercio barrial en comunidades urbanas de El Salvador”, estudia cómo las mujeres dedicadas al comercio barrial han construido redes comunitarias de cuidado para sostener la reproducción cotidiana de la vida en un contexto caracterizado por la precariedad económica, la insuficiencia de los servicios públicos y la violencia urbana. La autora parte del planteamiento de que el hogar se ha convertido en la principal unidad de contención frente a las crisis sociales, trasladando a las familias —y especialmente a las mujeres— la responsabilidad de suplir funciones que el estado y el mercado no garantizan. En este escenario, las actividades productivas y reproductivas se entrelazan de manera permanente, dando lugar a modalidades híbridas de trabajo en las que la generación de ingresos y las tareas de cuidado son inseparables.

El capítulo busca descifrar el funcionamiento cotidiano de estas redes mediante preguntas sobre los mecanismos que regulan la cooperación, las normas informales que garantizan el intercambio de apoyo y las posibilidades de construir formas más equitativas de organización social.

A partir de este trabajo, Gallegos Mejía plantea que las redes de cuidado comunitario constituyen una infraestructura social fundamental para enfrentar la fragmentación del tejido comunitario provocada por la violencia y la desigualdad. Estas redes operan mediante relaciones de reciprocidad, confianza y obligaciones morales que permiten compartir responsabilidades de cuidado infantil, apoyo económico, intercambio de información y protección cotidiana entre mujeres vinculadas al comercio barrial. Aunque estas prácticas fortalecen la resiliencia de las comunidades y compensan parcialmente las carencias institucionales, también reproducen importantes desigualdades de género al concentrar sobre las mujeres el trabajo no remunerado indispensable para la sostenibilidad de la vida. En consecuencia, la autora sostiene que las economías de base deben comprenderse no solo como mecanismos de supervivencia económica, sino como espacios donde se producen formas alternativas de organización colectiva capaces de sostener la cohesión social y abrir posibilidades para transformar las relaciones de cuidado desde principios de solidaridad y corresponsabilidad.

En la tercera parte del libro, Jesús Nilo Llusco Mamani, en el capítulo 14, titulado “Qullqix jakäwiniwa (el dinero tiene vida), taqi kunas jakañaniwa (todo tiene vida): jamp’atu (sapo), economía y prosperidad”, propone una interpretación de las economías de base desde la cosmovisión aimara, cuestionando las concepciones occidentales que separan la economía de la espiritualidad y de la naturaleza. A partir de un estudio sobre el culto ritual al jamp’atu (sapo) en la región circunlacustre del lago Titicaca, especialmente en el cerro sagrado de Pajchiri (provincia de Omasuyus, Bolivia),

el autor muestra como las prácticas económicas están profundamente entrelazadas con relaciones de reciprocidad entre seres humanos, la Pachamama y otros seres no humanos. La *waxt'a*, ceremonia ritual de ofrendas, constituye el eje de este análisis, pues permite comprender cómo el sapo ha pasado de simbolizar la fertilidad agrícola a representar también la prosperidad económica, el éxito comercial y el bienestar familiar. De este modo, el dinero deja de concebirse como un objeto inerte y se entiende como una entidad viva que circula dentro de una red de relaciones materiales y espirituales.

El autor sostiene que estas prácticas rituales expresan una concepción relacional de la economía en la que los procesos de producción, intercambio y acumulación no pueden separarse de la memoria, la territorialidad y la vida espiritual. Las representaciones del sapo, elaboradas en diversos materiales y colocadas en hogares, negocios y espacios públicos, funcionan como mediadoras entre el mundo humano y el no humano, reforzando una ética de reciprocidad que orienta tanto las actividades económicas como las relaciones comunitarias. Llusco Mamani argumenta que la persistencia y resignificación contemporánea de estos rituales demuestra la capacidad de las comunidades aimaras para articular tradición y modernidad sin abandonar sus propios marcos epistemológicos. En consecuencia, el capítulo plantea que las economías de base deben comprenderse también desde las subjetividades y ontologías indígenas, donde la prosperidad no se reduce a la acumulación material, sino que depende del equilibrio entre comunidad, territorio, espiritualidad y naturaleza. Así, el autor ofrece una crítica a las visiones economicistas convencionales y reivindica la vigencia de los saberes indígenas para pensar formas alternativas de organización económica y social.

En el capítulo 14, cuyo título es “Vulnerabilidad socioecológica y trata en mercados sexuales en contextos de crisis e informalidad: Ejemplos desde Venezuela”, Irina Zudina

realiza una aproximación a las relaciones entre las crisis humanitarias, la informalidad económica y las condiciones que incrementan el riesgo de trata de personas en los mercados sexuales. La autora cuestiona las interpretaciones simplificadoras que equiparan automáticamente el trabajo sexual con la trata o que reducen la vulnerabilidad a decisiones individuales. A partir del caso de la Emergencia Humanitaria Compleja venezolana, propone un enfoque de vulnerabilidad socioecológica que permite comprender cómo la interacción entre crisis económicas, colapso institucional, migración forzada, violencia y ausencia de mecanismos de protección configura entornos donde aumentan las posibilidades de explotación. El capítulo sostiene que las economías sexuales informales constituyen espacios atravesados simultáneamente por relaciones de agencia, supervivencia y coerción, por lo que resulta indispensable analizar las estructuras sociales que producen esas condiciones antes que atribuir la vulnerabilidad exclusivamente a características individuales.

Desde esta perspectiva, Zudina examina críticamente las categorías jurídicas y políticas utilizadas para identificar a las víctimas de trata, mostrando que los discursos prohibicionistas, abolicionistas, regulacionistas y legalizacionistas producen interpretaciones divergentes sobre el trabajo sexual y la explotación. La autora advierte que los “mercados de victimización” pueden surgir cuando las narrativas públicas y las políticas estatales presuponen que todas las personas que participan en mercados sexuales son víctimas de trata, invisibilizando la diversidad de experiencias y dificultando la identificación de quienes realmente enfrentan situaciones de coerción, engaño o violencia. Frente a ello, propone un enfoque ético y relacional que reconozca la complejidad de las economías informales en contextos de crisis, incorporando factores como las redes migratorias, la informalidad, el crimen organizado y las desigualdades estructurales. En consecuencia, el capítulo concluye que la prevención de la

trata requiere políticas que fortalezcan las capacidades de protección social y reduzcan las condiciones estructurales de vulnerabilidad, en lugar de limitarse a respuestas punitivas o moralizantes sobre los mercados sexuales.

La “Economía solidária sob disputa: forma jurídica ambiental e as organizações de catadores na logística reversa brasileira” constituye el eje de análisis del capítulo 15, donde Leila Giovana Izidoro reflexiona sobre las tensiones que atraviesan a las organizaciones de recicladores de materiales reutilizables en Brasil, frente a la expansión de los mercados de logística inversa y la creciente financiarización de las políticas ambientales. La autora parte del reconocimiento de que los “catadores” (personas que recolectan materiales reutilizables) han desempeñado históricamente un papel fundamental en la recuperación y reincorporación de residuos al ciclo productivo, siendo responsables de la mayor parte del reciclaje urbano del país, pese a trabajar en condiciones de precariedad e informalidad. Sin embargo, sostiene que el desarrollo de mecanismos de compensación ambiental y de mercados de créditos de logística inversa ha transformado profundamente este sector, incorporando el trabajo de las personas recicladoras dentro de nuevas formas de valorización económica del medio ambiente. Desde una perspectiva crítica del derecho, la economía solidaria y los derechos humanos, el capítulo analiza cómo las cooperativas y asociaciones de recicladores se convierten simultáneamente en actores indispensables para la sostenibilidad ambiental y en objeto de disputas por el control del valor generado por su trabajo.

La autora argumenta que la economía solidaria representa una estrategia colectiva mediante la cual los recicladores buscan mejorar sus ingresos, fortalecer su capacidad organizativa y ampliar su autonomía frente a intermediarios y grandes empresas. No obstante, advierte que la incorporación de estas organizaciones al mercado de créditos ambientales también puede generar nuevas formas de subordinación,

al vincular su actividad a criterios de productividad y eficiencia definidos por los grandes agentes económicos responsables de la contaminación. En este sentido, el capítulo demuestra que la disputa por la logística inversa —que traslada bienes, materiales o productos desde el consumidor final de vuelta hacia el fabricante o distribuidor— no es únicamente técnica o ambiental, sino también política y jurídica, pues enfrenta distintos proyectos sobre quién debe apropiarse del valor producido por el trabajo de reciclaje y cómo deben distribuirse los beneficios derivados de la transición ecológica. La autora concluye que una transición ambiental justa exige reconocer a las personas recicladoras como sujetos de derechos y protagonistas de la economía circular, fortaleciendo las formas cooperativas y solidarias de organización para evitar que la protección ambiental reproduzca las desigualdades sociales propias del capitalismo contemporáneo.

En el último capítulo del libro, el capítulo 16, titulado “La legitimación de la informalidad desde las élites a partir de la discursividad mediática. El caso de Costa Rica”, Ronny J. Viales Hurtado y David Chavarría Camacho estudian la manera en que las élites económicas, políticas y mediáticas han construido discursivamente la informalidad laboral en Costa Rica. Los autores parten de una crítica a las interpretaciones tradicionales que presentan la economía informal como sinónimo de ilegalidad, atraso o desorganización, argumentando que dichas representaciones ocultan el carácter estructurante de la informalidad y las relaciones de poder que la producen. Desde una perspectiva inspirada en el análisis crítico del discurso y en los estudios sobre las economías de base, sostienen que la informalidad no es únicamente una categoría económica, sino también una construcción simbólica y política, cuya legitimación o criminalización depende de las narrativas promovidas por los actores con mayor capacidad de influencia. El capítulo destaca que la multiplicidad de conceptos utilizados para nombrar este

fenómeno —economía sumergida, paralela, gris, autoempleo o sector informal, entre otros— evidencia la disputa por definir su significado y por orientar las respuestas institucionales hacia determinados intereses sociales.

A partir del estudio de la discursividad mediática costarricense, Viales y Chavarría analizan cómo los medios de comunicación contribuyen a moldear la percepción pública sobre la informalidad mediante marcos interpretativos que oscilan entre la estigmatización, la normalización y la legitimación. Retomando, entre otros referentes, el análisis de Owen Jones sobre la construcción mediática de las clases trabajadoras, los autores evidencian que ciertos discursos presentan la informalidad como una responsabilidad individual o una elección personal, invisibilizando las condiciones estructurales de exclusión laboral, desigualdad y precarización que impulsan a amplios sectores de la población hacia estas formas de trabajo. El capítulo concluye que las representaciones mediáticas desempeñan un papel central en la reproducción de las relaciones de poder, al definir qué formas de trabajo son consideradas legítimas y cuáles permanecen asociadas al “desorden” o la marginalidad. Desde esta perspectiva, comprender las economías de base exige analizar no solo sus dimensiones económicas, sino también los procesos discursivos mediante los cuales las élites construyen socialmente la informalidad y condicionan las políticas públicas dirigidas a este componente de la sociedad.

Esperamos que esta obra constituya un insumo importante, dada la excelencia de su contenido, para el debate académico y para establecer un diálogo con las organizaciones de base, el estado y el mercado, así como para otros trabajos que se planteen la necesaria reflexión sobre el futuro del trabajo y las economías de base desde una perspectiva de superación de las desigualdades en América Latina y el Caribe.

Las personas editoras agradecen el apoyo de la Junta Directiva de CALAS, especialmente de su director, Dr. Jaime

Preciado Coronado, de su gerente general, Dr. Jochen Kemner, y del Dr. Thomas Czerner de la Leibniz Universität Hannover y del Centro Regional Centroamérica y el Caribe-CALAS, para la publicación de este libro. Asimismo, agradecemos la colaboración de las personas que revisaron el texto en durante el proceso de producción editorial: Amanda Sofía Sánchez Mesén, Ana María Ramírez Masís y José Gabriel Vargas Navarro, jóvenes profesionales en el campo de la historia que cursan su posgrado en el Posgrado Centroamericano en Historia de la Universidad de Costa Rica y que colaboran como asistentes de investigación en el CIHAC.

Bibliografía citada

- Baldry, C. y Hyman, J. (2022) *Sustainable Work and the Environmental Crisis. The Link between Labour and Climate Change*. Routledge.
- Centro Maria Sibylla Merian de Estudios Latinoamericanos Avanzados (CALAS). (2025). *Afrontar las crisis: Perspectivas transdisciplinarias desde América Latina*. CALAS. <https://calas.lat/es/investigacion>
- Cortés, G. y Forsythe, E. (2023) “Heterogeneous Labor Market Impacts of the COVID-19 Pandemic”. *ILR Review*, 76(1), 30-55.
- Díaz Arias, D. y Viales Hurtado, R. J. (2020). “Centroamérica: neoliberalismo y COVID-19”. *Geopolítica(s) Revista de estudios sobre espacio y poder*, 11(Número especial), 53-59.
- Hernes, G. (2010). “Prefacio: Un planeta, mundos aparte ¿el mismo mapa?”. En: UNESCO, *Informe sobre las Ciencias Sociales en el mundo. Las brechas del conocimiento* (pp. vi-ix). UNESCO.
- Honneth, A. (2023). *Der arbeitende Souverän. Eine normative Theorie der Arbeit*. Suhrkamp.
- Jones, P. (2021). *Work Without the Worker: Labour in the Age of Platform Capitalism*. Verso.
- Kittrie, O. (2016). *Lawfare: Law as a Weapon of War*. Oxford University Press.
- Narotzky, S. (2004). *Antropología Económica: Nuevas tendencias*. Melusina.
- Narotzky, S. (2012). “Europe in crisis: grassroots economies and the anthropological turn”. *Etnográfica*, 16(3), 627- 638.

- Narotzky, S. (2020). *Grassroots economics*. Pluto Press.
- Palacio, J. M. y Fink, L. (Eds.). (2017). *Labor Justice Across the Americas*. The University of Illinois Press.
- Shanti Jagannathan, S. R. y Maclean, R. (2019). “Dominant recent trends impacting on jobs and labor markets - An Overview”. *International Journal of Training Research*, 17(S 1), 1-11.
- Thelen, D. (1999). “The Nation and Beyond: Transnational Perspectives on United States History”. *The Journal of American History*, 965-975.
- Thompson, E. P. (1971). “The Moral Economy of the English Crowd in the Eighteenth Century”. *Past & Present*, 50, 76-136.
- Viales Hurtado, R. J.; Chavarría, D. y Araya, R. (2016). “El proceso de reforma al Código Procesal Laboral: legislación laboral, actores sociales y lenguajes de valoración. Tres elementos clave de la política socio-laboral en Costa Rica, 1998-2016”. *Revista Memorias*, (30), 66-97.
- Viales Hurtado, R. J. y Díaz Arias, D. (2018). “Costa Rica y los pactos sociales multclasistas. La Reforma al Código Procesal Laboral (2015-2017)”. *Revista Nueva Sociedad*, (273), 83-97.
- Viales Hurtado, R. J. e Izquierdo Vázquez, C. (2018). “Hacia una definición de las Grassroots Economies para la investigación histórica: familia, redes de ayuda mutua, mercado laboral, microcrédito y estrategias de supervivencia de las economías de base” *Revista de Ciencias Sociales*, (162), 131-148.
- Viales Hurtado, R. J. y Vargas, M. (2016). “Los debates recientes sobre la historia socioeconómica de los mercados laborales capitalistas. Aportes para una propuesta de enfoque teórico para su estudio en sociedades ‘periféricas’”. *Diálogos*, 17(Número Especial Homenaje a Juan José Marín Hernández), 165-195.

PRIMERA PARTE

Formas alternativas de actividad
económica organizadas “desde abajo”

CAPÍTULO 1

Pescadores artesanales en acción.

Anatomía de un puesto de primera venta
en una playa del Partido de la Costa de
la provincia de Buenos Aires, Argentina

Marina Farinetti

Introducción. El trabajo y la economía

El trabajo es una superficie de impacto de las grandes transformaciones del capitalismo. En la actualidad, estas han calado hondo en un concepto amenazado por un desempleo tecnológico no solo creciente, dado que hay un salto temerario de la robótica que nos pone en el horizonte nuevo para el trabajo. El término *fin del trabajo* en un libro influyente de un economista americano, sintetiza un factor de aceleración del presente futuro (Rifkin, 1996). Converge por otro camino con el planteo de un sociólogo francés: las metamorfosis de la sociedad salarial (Castel, 1995). Claro que el trabajo se extiende más allá de esta forma histórica y cultural y, en todo caso, el tiempo transcurrido obliga a actualizar los argumentos. Se precipita una *fenomenología*

del fin: mutación de la sensibilidad humana provocada por las tecnologías digitales en la vida cotidiana y en la habilidad de percibir el cuerpo del otro como una extensión viva del propio cuerpo (Berardi, 2020, p. 13).

El trabajo es superficie de impacto de las tecnologías digitales, así como de la proliferación por doquier de crisis económicas. Una actividad tradicional como la pesca artesanal, si bien parece alejada de las innovaciones de avanzada, veremos que no escapa a transformaciones por el acceso a la tecnología digital y debemos agregar los cambios en las condiciones ambientales. Estudiar ámbitos específicos de trabajo resulta indispensable para captar cambios en las formas de vida. El registro de las perspectivas conceptuales sobre trabajo y futuro (Farinetti, 2024a y 2024b) viene a complementarse con investigaciones empíricas. Este capítulo presenta los primeros resultados de un estudio sobre la pesca artesanal en una localidad menor del Partido de la Costa de la provincia de Buenos Aires de la Argentina.

Las transformaciones del capitalismo en la base de las economías generan sociedades crecientemente desiguales, fragmentadas y conflictivas. Asistimos a una nueva vuelta de tuerca en la desvalorización del trabajo humano. El valor económico pasa cada vez más por otro lado. ¿Podré contribuir a repensar la economía a partir de este trabajo? Para ello, adopto el enfoque de la antropología de la economía proporcionado por Narotzky y Besnier (2020) y dos nociones son medulares para mi estudio. *Economías de base*: Prácticas cotidianas de la gente común para ganarse la vida, lo que las personas comunes entienden como una vida que vale la pena vivir, por ejemplo, formar parte de colectivos que dan sentido. *Base* se conecta con dimensiones fundacionales de la valorización. *Valor social*: “Modo en que una sociedad valora a las personas: el valor de las personas, pero también el obtenido a través de las personas y el invertido y acumulado en las personas” (Narotzky y Besnier, 2020, p. 34).

Aplico estas tres modalidades del valor social a mi objeto de estudio. Se desprenden las siguientes preguntas.

- a) ¿Cómo se valorizan los saberes y habilidades en la transmisión social de un tipo de trabajo?
- b) ¿Cómo la sociedad valora a los pescadores?
- c) ¿Cuál es el valor que producen?

Uso la escala del puesto como método para comprender el circuito local de la economía del pescado. Interrogo el oficio, la grupalidad del trabajo, la naturaleza, las intermediaciones, las regulaciones. El puesto abre un campo de conexiones no exentas de conflictividad con otros actores sociales que operan en escalas económicas e institucionales de amplio alcance. Lo local se entrama con lo global y viceversa.

La descripción y los argumentos están basados principalmente en fuentes primarias, construidas en un trabajo de campo sociológico de tipo etnográfico realizado en el espacio de un puesto de primera venta de pescado en la playa.

La relación

¿Cómo se origina la relación con el puesto de venta de pescado en la playa? Mi amigo Germán viene a pasar fin de año a mi casa de veraneo en la costa atlántica. Los primeros días de enero de 2025 descubrimos un puesto de pescadores en la playa, foco de atención en común de amantes de la cocina: el pescado fresco. Germán es cocinero y actor. Mis vacaciones comienzan a mezclarse con el trabajo como investigadora social.

A propósito de los pescadores, comento a Germán sobre mi investigación filmada en la fábrica de calzado: *Calzarte. A tus pies vivo. Un ensayo documental* (2023, disponible en YouTube). El foco en el trabajo genera una conexión con el trabajo de reportero que Germán hace en las redes. Detecta situaciones de interés para ampliar el circuito de seguidores para vender sus comidas caseras hechas con amor y cultura familiar tucumana. La mirada de los dos se dirige al puesto.

En dos minutos, Germán estaba grabando videos de los trabajadores del puesto: Marcos, Genaro, Lisandro y Julián. Ellos salen a la madrugada en la lancha a recoger las redes que dejan el día anterior. A las 8:00 ya están vendiendo pescado entero o *filet* en la playa, hasta después del mediodía. Marcos enseguida supimos que era el jefe. En el puesto hay dos lugares para filetear. Los ocupan Marcos y Lisandro. Genaro y Julián se ubican cerca de los cajones de pescado. Venden al público.

Nos dicen que es un trabajo que les gusta. Ver la salida del sol en el agua es un momento inigualable que forma parte del trabajo. *Es otro mundo a la madrugada. Es lo lindo.* Usaré cursivas para incluir las voces en el grupo que no necesariamente remiten a un sujeto individual sino a una experiencia colectiva. *No tiene precio ver ballenas. A veces las podés acariciar. No sos esclavo del trabajo. No trabajás todos los días. No es monótono.* Usaré comillas para las voces individualizadas.

Nos llama la atención la valorización positiva de un trabajo tan riesgoso. Era el primer día de trabajo de Julián, el aprendiz de 19 años. Nos parte la cabeza que no sabe nadar y no tiene miedo. Lisandro tampoco sabe nadar y es un pescador con 30 años de experiencia. Son estos los primeros registros de la temporada que condujeron a mi decisión de trabajar en el puesto.

Germán se va. Me tomo unos días para meditar sobre mi trabajo en contrapunto con el de mi amigo. Reportera no soy. Soy investigadora social. Tenemos puntos en común y diferencias. La mía es una labor que lleva más tiempo. Busco pensar un tema. Mi medio específicamente no es la cámara sino la escritura. Echo de menos al equipo con el que realizamos el documental ya mencionado. ¿Qué haría Gastón Bejas (Licenciado en Cine, realizador audiovisual) para construir una narrativa del puesto de pescadores? Una locura visual haría con ese mar, esos vehículos, esas personas. Mi oficio

en cambio es la escritura. Por supuesto, adoro las imágenes y me esmero con mi celular. Me digo que podría hacer videos además de grabar audios. Lástima que no había llevado el grabador profesional y la cámara buena. Si hubiera sabido...

El puesto

¿Cómo es el oficio? ¿Cómo empezaron? ¿Qué tareas realizan? ¿Cómo está constituido el grupo embarcado y el puesto de venta? ¿Cómo usan la tecnología? ¿Cómo perciben y organizan el tiempo? Con estas preguntas comienza una conversación que se incorpora a la dinámica cotidiana del puesto. Iré las mañanas de enero hasta el fin de mis vacaciones. Fueron 25 días. No solamente yo tenía que entender el trabajo de pescadores artesanales, sino que ellos tenían que entender cuál era mi trabajo. La reciprocidad se establece en un clima reflexivo. Me engancha el mirar en el espejo de otro el propio trabajo.

El grupo de pesca está constituido por el *capitán*, los *marineros*, la lancha, el vehículo transportador, cajones, la infraestructura del puesto, cuchillos, martillo, bolsas para dar la mercadería, una cartera para guardar el dinero y, desde ya, los pescados. El grupo del puesto observado está integrado por Marcos (49 años), el capitán, dueño de la lancha y titular del puesto; Genaro (24 años), marinero y socio de Marcos (dueño de un motor y una lancha de repuesto); Lisandro (43 años), marinero experimentado y Julián (19 años), aprendiz de marinero. La lancha es un gomón (embarcación inflable) y el vehículo transportador es un tractor Hamonag *fachero*.

Lisandro trabaja simultáneamente bajo dos capitanes o patrones (es indistinta la denominación para él). Su primer capitán o patrón es Augusto (49 años), la *pareja de pesca* de Marcos, lo que quiere decir que comparten la bajada a la playa. *Se pesca siempre en pareja*. Augusto no vende al público: “no da para dos un puesto y no quiere irse a otro lugar”. Lisandro es su único marinero. La pesca la vende a

un restaurante de una localidad turística cercana. En general, no sale a la madrugada como el grupo de Marcos, dado que no vende en el puesto. Complementa con otra actividad: la pesca embarcada para turistas. Lo considero parte del puesto. Me propongo habitar ese espacio incorporándome a la dinámica del trabajo. Procuro escribir y pensar al ras del puesto, siempre con mi cuaderno a mano, lo mismo que el celular en la *app* de la grabadora. Presto mucha atención a la dinámica de los cuerpos. No debía entorpecer el trabajo con las entrevistas. Se construían rituales. Llevaba *libritos* (bizcochos de grasa) para el mate.

Lo primero que hacía al llegar era mirar los cajones, observar la diversidad de especies y las particularidades de la pesca del día. Preguntaba cómo les fue. La respuesta se mide en cajones. Se envía una parte al frigorífico y otra parte queda en la playa para la primera venta. Tienen que calcular cuánto va a venta directa (la ganancia es mayor). Vienen intermediarios de frigoríficos a llevar el pescado en una carrera contra la descomposición. Cuando hace mucho calor ellos bajan hielo.

Pescar mucho es el orgullo del pescador. Hay *pica* entre los pescadores a ver quién pesca más. La conversación en el puesto incluye a veces a otros pescadores que vienen de visita. Se hacen *inteligencia* entre ellos. Marcos se comunica por Whatsapp en un grupo de colegas. Comenta la suerte de los otros. Se alegra cuando él pesca más que los otros.

Hay siempre temas de conversación. Me muevo alrededor del puesto. Hablo con cada uno mientras trabajan. Marcos y Lisandro al frente del puesto fileteando y preparando el pescado para la parrilla, el horno, la plancha, la cacerola, el disco... Genaro y Julián venden en proximidad con los cajones de pescado. La conversación incluye a clientes por momentos. La palabra circula. Marcos es alegre, siempre tiene un chiste. Lisandro es simpático en su modo de promocionar las ventas haciendo imaginar la comida. Genaro es un

gourmet. En el puesto se intercambian recetas y técnicas de cocina. Se habla de los pescados con los clientes. Participo en el intercambio de recetas de pescado.

El puesto nos dio la espacialidad de la relación de conocimiento que entablamos con mi presencia. Lisandro un día expresa: “no cualquier puesto tiene una socióloga”. Los otros me ven más como psicóloga, Marcos siempre lo dice. ¿Quién era yo? Al menos mi yo en este mundo pesquero. ¿Cómo podría trabajar esto? El lazo social reconoce formas de vida: la universidad, la ciencias sociales y humanas / la pesca artesanal en ese lugar relativamente joven de la costa atlántica de la provincia de Buenos Aires. El reconocimiento instauro una zona de reciprocidad y también de lucha en la que se pone en juego qué hacemos y para qué. Estoy agradecida con el grupo por la amistad, la actitud abierta, el dejar fluir las relaciones, el compartir el conocimiento, el saber estar, el hablar, el interesarse.

La localidad fue fundada a partir de un loteo a cargo de una inmobiliaria en la segunda mitad de la década de 1970. Los terrenos en ese momento eran arena y médanos. Actualmente, tiene alrededor de 600 habitantes. Marcos destaca que tuvo un gran crecimiento. “Antes con 6 mil dólares te comprabas un terreno, ahora están en las nubes”. ¿De qué trabaja la gente? Responde: “Construcción, carreteros, municipalidad, pesca. Hay trabajo. No hay pobreza. Hay negros, como siempre están los que se compran un televisor y no tienen para otras cosas. Los carreteros sacan arena (conchilla) de la playa y la venden para la construcción.” Estos últimos son en general trabajadores jóvenes que se mueven en una carreta tirada por un caballo. La playa está llena de contradicciones. La economía de subsistencia explota a los animales y erosiona la playa. Deja cráteres.

Con los registros de campo escribí “Diario de la playa con pescadores”, con la ilusión de publicarlo, ahora es mi archivo de relatos y escenas que presentaré en el análisis de

la economía de base. Ciertas razones me llevaron al diario como un género apropiado para un primer producto de la investigación sobre el trabajo de pesca. Surge como un modo de seguir las vetas de la experiencia, en otras palabras, el orden de aparición de los temas y la información. Me propuse justamente dejar fluir la conversación, no intentar formatearla de acuerdo a un cuestionario y mis intereses. El diario ayuda a transmitir la sorpresa y lo imprevisible de cada día en el puesto. Es una escritura al ras de la espontaneidad y también de nuestro trabajo con las notas de campo, las grabaciones, etc. En el diario, los acontecimientos se presentan con menos mediaciones conceptuales e interpretativas.

A continuación, con la inspiración del enfoque de antropología de la economía, se analizan los diversos modos de construcción del valor social de la actividad de los pescadores a través de los saberes y habilidades, el lugar social del grupo y los productos. El valor social incluye el valor económico y no deja que se separe conceptualmente. Con el estudio de caso, se espera mostrar las relaciones en la estructuración de regímenes de valoración.

Saberes y habilidades en la transmisión de un oficio

El tiempo meteorológico orienta permanentemente la actividad de pesca y un conocer el estado del mar es crucial en la toma de decisiones: el viento, la precipitación, etc. Afecta el tiempo cotidiano: hace la diferencia entre el trabajo y el tiempo libre. Los días *feos* no salen.

Es un trabajo variable según las estaciones. En invierno entran al mar varias veces al día. En verano salen en la lancha a la madrugada a recoger las redes dejadas el día anterior. En verano se levantan a las 3:30, desayunan y a las 5:00 están en la playa. Deben dormirse temprano. Llegan de trabajar después del mediodía, se duchan, almuerzan y duermen la

siesta. Regular el tiempo es asunto valorizado en el oficio. No es bueno que la siesta se prolongue hasta juntarse con la hora de dormir a la noche. El trabajo de pescador demanda una organización del tiempo cotidiano a contrapelo del común de las personas. Se valoriza la disciplina del tiempo cotidiano.

Hay distintos tipos de pescadores. Los del grupo son pescadores artesanales. Entran al mar desde la playa y vuelven en el día.

Marcos explica el rol del capitán:

“1. Cuidar a los marineros, 2. asegurar los elementos de seguridad. Cuando vas entrando, el tiempo es segundos. Hay que ser estricto, que la falla no sea humana. Si le pasa algo a los pibes te tenés que ir o suicidar. En el agua son todos compañeros, como una familia”.

Aparece aquí la diferencia entre agua y tierra. Cambian los vínculos entre las personas, hay códigos del agua. Marcos me ofrece un relato representativo de estas categorías. Su enemigo en la tierra lo auxilió en el agua cuando tuvo un accidente, a pesar de que le había roto un brazo por haberle robado pescado. En el agua las reglas son otras.

En cuanto a su grupo, quiere que todos aprendan a manejar la lancha por si le pasa algo. Hace un par de años le pasó un accidente: lo pinchó un bagre y su marinero lo sacó manejando la lancha. Salieron en La Lucila,

“no donde teníamos que salir. Todos tienen que aprender las cosas del oficio. Le enseñé todo a Genaro. Te tiene que gustar y es un laburo. La gente lo toma como una boludez, esos negros... Antes lo hacía como un laburo, ahora me gusta. Cuando hay pescado vivís bien”.

Es una forma de vida, acota Lisandro y afirma: “soy pescador.”

Ellos perciben la desvalorización del oficio en la sociedad. La autovalorización pasa por enfatizar que les gusta, lo cual es un factor elemental para realizar el trabajo que

corresponde al oficio. Al indagar sobre los saberes y habilidades necesarias en el oficio, en todas las entrevistas se repite que estas no son difíciles de aprender, pero *te tiene que gustar*. El gusto excede el valor económico, indica el valor del trabajo en sí mismo. A su vez, tiene ventajas con respecto a otros trabajos, fundamentalmente porque tienen más tiempo libre que en otros trabajos. Vamos a ilustrar estas formas de valorización y transmisión del oficio, en las trayectorias laborales de los pescadores del puesto.

Retratos laborales

Los retratos de los integrantes del grupo de pescadores del puesto sirven especialmente para pensar las transiciones o trasmisiones de saberes y habilidades entre las profesiones que desempeñamos a lo largo de la vida. ¿Cómo se inician en la pesca?

Marcos nació en Villa Elisa (La Plata) en 1974. Su madre era ama de casa. Tiene tres hermanos y una hermana. Los primeros son camioneros. Uno fue policía y “cuando se dio cuenta lo que era ese trabajo se dedicó a la distribución de bebida”. El otro hermano, a los 14 años, entró en Coca Cola. Fue chofer, hoy es encargado de planta, “toda la vida en Coca Cola”. La hermana es ama de casa y tiene una nena. Marcos hizo hasta segundo año del secundario. A los 18 “se subió” a los camiones de larga distancia. ¿Cómo se hizo pescador?

Un día un amigo pescador lo invitó a pescar y a comer en el Río Salado, Punta Indio (localidad de la provincia de Buenos Aires). Era época de la pesca de la lisa, por eso había barcos de Mar del Plata (puerto marítimo más grande de la provincia de Buenos Aires). Marcos empezó a trabajar en estos barcos y aprendió. Un tiempo después se compró su propia lancha y se hicieron amigos con Genaro. Le propuso trabajar juntos al 50 %; ahora son socios en el puesto.

Martín tiene dos hijos que “no quieren agarrar el oficio. Uno es albañil y el otro anda con la madre en la política”.

Augusto pesca con su lancha “Neptuno” y un camión. Nació en San Bernardo, en 1975. Su familia es de Misiones, de abuelos paraguayos. Su padre “hacía ingeniería mecánica, sin título, se había criado con un ingeniero alemán”. Augusto era gasista matriculado y plomero, hacía las instalaciones de casas y edificios. Ganaba bien. Como plomero hacía grandes obras, edificios. Observa: “casi nunca laburé bajo patrón”.

Dejó la plomería por completo, se compró un camión y se fue a Misiones antes de la pandemia. Vendía artículos de ferretería por las localidades, en realidad, “vendía de todo”. “Las rutas son más peligrosas que el mar”. Le gusta la pesca. Tal es así que a veces sale a pescar con caña. Enfatiza: “es la vida que me tocó, voy a morir acá pescando. Hay delfines, cientos en Mar del Sur, vi una ballena hace dos días. Una vez pude acariciar una”.

¿Cómo se hizo pescador? Su hermano pescaba. Ganaba en un día la instalación de gas de un dúplex entero que hacía él como gasista matriculado, que era mucho. Se dio cuenta de que podía cambiar de trabajo en 2003-2004. “Es lucrativo. Hoy me siguen llamando. Son oficios... Lo que tiene la pesca es que es rentable y trabajás 12 días al mes. No estás atado a nada. En realidad, en la plomería tampoco. Nunca tuve un trabajo atador”.

Augusto tiene dos hijas, una estudia Derecho en la Universidad Nacional de Misiones. Ella no quiso volver a la Costa después de la pandemia. La otra estudia para maestra jardinera. Se presume que no está ni siquiera en el horizonte de las mujeres ser pescadoras. La esposa de Augusto suele ir al puesto a tomar mates con él.

Genaro nació en Buenos Aires. Vino de bebé a la Costa. Hace dos años que trabaja como pescador con Marcos, a quien considera un hermano. Le gusta el trabajo, es relajado. “No tenés que trabajar todos los días, así como esclavo”.

El padre es jubilado. Fue marino, policía, constructor, actualmente es carnicero. La madre es ama de casa y monotributista (régimen impositivo de trabajo autónomo). Está en el negocio de las artesanías y vende pescado en su casa. También recoge hongos del bosque y los lleva al norte para canjearlos por especias.

Genaro empezó a trabajar a los 12 años. Antes de dedicarse a la pesca, trabajó de cajero en un supermercado. Fueron tres años sin un franco. Una vez puso una cafetería. Era muchísimo trabajo. Valora el tiempo libre en el trabajo de pescador.

Hace seis años conoció a Marcos en el supermercado hablando de truco (juego de cartas). Se retaron a un partido: “me hicieron jugar con un borracho...” Después Marcos fue novio de su hermana. Genaro siempre ahorró en dólares, por eso pudo formar un capital que le permitió cambiar su trabajo de cajero. Hoy Marcos vive en una casa de la mamá de Genaro. Dejó de cobrarle alquiler.

En invierno no tienen el puesto. Salen a las 6:00 cuando sale el sol. A las 9/9:30 pueden estar de regreso en las casas. A Genaro le queda tiempo para jugar a la *Play* y leer libros. Le gustan las *novelas de romance*. Este tema forma parte de mis conversaciones cotidianas con Genaro en el puesto. Nos contamos argumentos de libros. Me contó varios libros de Danielle Steel. *Culpa mía*: la mamá se pone a salir con un multimillonario... se enamora del hermanastro. *Caleidoscopio*: romance en la guerra. “Te engancha”. Son 500 páginas, las leyó en dos días. Otras son *El rey cruel*, *El otro lado del océano*. Compra muchos libros. Compartí con él mi fascinación con el cuento que estaba leyendo ese verano del escritor rumano Mircea Cărtărescu: “El Ruletista”. También de esos que te atrapan y no podés dejar de leer. Se trata de un personaje que trabaja en los espectáculos de ruleta rusa. Empezó arriesgando su vida para un patrón y se convirtió en su propio patrón. ¿Con qué sentido arriesgaba su vida estrechando cada vez más las probabilidades de

tiro de muerte (iba agregando una bala más en el tambor del revolver)? ¿El dinero? Se hace multimillonario, pero el sinsentido es evidente. ¿Por qué? ¿La gloria? El texto tiene una gran tensión existencial que alcanza al trabajo mismo del escritor/narrador. Se lo presté a Genaro.

Lisandro se presenta como un “varón del campo”: sabe hacer fuerza. Nació en Villa Roch, Partido de Tordillo, Conesa, provincia de Buenos Aires. Me muestra en su celular dos monumentos de referencia en su lugar natal: la escultura sobre la leyenda del tordillo que nunca se dejó agarrar y la estatua del indio, en Punta Indio. Ambos monumentos hablan de su carácter indómito. Se presenta repetidas veces como una persona del campo educada por su abuelo-padre-padrino, padre de su mamá. Ella se fue de la chacra cuando él era un niño. Lo dejó con su abuelo. Por eso, la odió hasta los 20 años. Después la perdonó. Actualmente, ella tiene 75 años, vive en una localidad del Partido de la Costa. Trabajó muchos años “yendo a bailar”: como cuidadora del baño de una discoteca. Lo buscó en la pandemia cuando no sabía nada de él.

No conoció a su padre biológico, un camionero. Su madre “era una belleza”. Su nacimiento fue “un regalo de la ruta”. Una vez se animó a llamarlo por teléfono. Sabía que vivía en Mar del Plata. No se animó a hablar.

Lisandro viene de familia de alambradores. Su bisabuelo alambró la ruta a Mar de Ajó cuando se hizo en los años 70. Me explicó que la ruta se trazó esquivando las estancias (Santa Clara, El Recreo, Los Overos...). La ruta cortó al medio la chacra de la familia. Su abuelo-padre-padrino nunca recibió la paga del estado por la expropiación. De 30 hectáreas quedaron 14. Antes de independizarse como alambrador había trabajado como sembrador de las estancias. Creía que en las estancias le habían hecho aportes, pero no fue así. Se jubiló con una pensión mínima. Todavía existe la casa vendida cuando murió su abuela. Ella era ama de casa. Cocía, sembraba, bordaba, lavaba ropa para afuera, ordeñaba.

Trabajó de cocinera en una estancia a 15 km de la casa. Lisandro tiene recuerdos de la comida.

Lisandro se fue de la chacra a los 21 años, cuando su novia de Buenos Aires quedó embarazada. Agarró un bolsito y se mudó a la metrópolis. Era la época de la presidencia de Menem (1989-1999). Recordamos juntos las filas para conseguir trabajo por los clasificados de Clarín. Consiguió uno como controlador de carga en el puerto de Retiro (“el mejor trabajo que tuvo”), en empresas de limpieza... Era muy difícil conseguir trabajo. No había. Iba al campo 15 días (ganaba más alambrando) y volvía una semana a Buenos Aires.

Lisandro llegó al Partido de la Costa en 2001. Empezó a trabajar en la construcción. Conoció a una chica. Se hizo de la Costa. Trabajó como estibador en el puerto de Lavalle desde 2010 hasta la pandemia. Cada día en el puesto, me va aportando más información sobre su historia. De niño, Lisandro era nervioso: “locuras de chico”. Lo calmaba ir a cazar o tirar tiros a las botellas. En la casa siempre hubo armas. Tiene cicatrices en sus manos: “se la agarraba con las paredes”. Era muy buen alumno, pero nada bueno en conducta. Fue el mejor promedio, abanderado. Le hubiera gustado estudiar. Le gustaba leer y matemática. Por el contrario, a su hija, para que aprenda las tablas, la tuvo que sobornar con la compra de un teléfono. Tiene 4 hijos, dos en Buenos Aires: Cecilia (32) y Luna (29), dos en San Clemente: Amalia (27) y Ariana (14). Y su hijo de 15 años.

Juan tiene 19 años, vive con sus padres y hermanos. Su casa tiene salida al mar en la calle principal de la localidad donde habita el grupo de pescadores. El padre trabaja en una localidad cercana con playa exclusiva de clase alta. Hace zanjeo. Su mamá es ama de casa. Juan despacha. Ordena los cajones. Se ocupa de los desperdicios. Sus tareas son: anotar las ventas en un cuaderno dentro de una bolsita de *nylon*, mantener la limpieza, vender, ordenar los pescados, elegir las piezas para filete. Martín le enseña los criterios todo el tiempo.

Para mí, fue una “pasantía” en pescado. Agradezco la educación que me proporcionaron los pescadores.

Cuando regresa a su casa, come y duerme la siesta. Cuando se levanta juega con el celular o va al gimnasio: dos opciones.

¿Conocen pescadoras? Preguntaba siempre. Mencionaron a “Ojito”, quien tiene ojos verdes. Ahora trabaja como guardavidas. Mencionaron mujeres que hacen el trabajo de destramallar (sacar el pescado de la red en la playa). Marcos dijo que su ex esposa “ve un pescado y piensa que la va a morder”. Bautista, otro pescador, me contó que su ex pareja, hija de pescador, salía con él en la lancha cuando faltaba un marinero. Sensibilidades de desvalorización y valorización.

Para analizar los saberes y habilidades que tienen valor en el oficio, me concentro en dos actividades que forma parte del trabajo: hacer fuerza y filetear.

Fuerza

Dado que trabajó como estibador y controlador de puerto, le pregunto a Lisandro si le atraen los puertos — “No, me gusta hacer fuerza”. Repite la siguiente frase como un refrán: “no le dijeron que la pala es más pesada que un libro”. Se refiere a que sin estudio no podés aspirar a otro trabajo.

“Nací haciendo fuerza. Me estibaba dos a tres semi con remera en invierno. Así conocí gente del gremio. Descargaba lanchas en la Bahía de Samborombón. Un día faltó un marinero y me insistieron. Vencí el miedo al agua. No sé nadar. Subí por compromiso y amistad.”

Augusto le propuso entrar al mar. Su remuneración es el 10 o 15 % de la pesca del día. Vende pescado también en el barrio. Se enamoró del trabajo. Es el primer trabajo que disfruta. “Todos los días son diferentes. En la obra siempre es igual, la hora no pasa”.

Pone onda a todos los trabajos. Siempre trata de estar a la altura del patrón. Le gusta el trabajo físico. Es fuerte y hábil.

Hace la mímica de los trabajos, el ritmo, la cadencia. Hizo un día la mímica del trabajo de estibador. Busca la perfección de los movimientos. Augusto quiere que todo salga redondo, es meticuloso. “Sé hacer las cosas, pero le pregunto cómo las quiere hacer”.

¿Cómo eligen a sus marineros los capitanes?

Augusto: “que vengan todos los días y no se descompongan en el agua. Después le van agarrando la mano”.

¿Cómo es el trabajo?

Hay que hacer fuerza, tener maña y aguantar el frío. Te tiene que gustar, no es por la plata.

Genaro aprendió rápido a filetear. Me llama la atención la actitud y estilo que adhirió para hacerlo. Lo indago sobre la rapidez para aprender a filetear.

El papá era carnicero y tenía una granja antes. Nos pusimos a comentar sobre el tipo de cuchillo para filetear. Tiene que ser fino y puntudo. Mi papá también era carnicero, no recuerdo si se lo dije a Genaro o solo en mi pensamiento relacionaba la habilidad con la transmisión familiar y el valor social acumulado en las personas (Narotzky y Besnier, 2020).

Juan también aprendía a filetear en el puesto. Lisandro nos enseñaba (me incluyo) y conversaba sobre el manejo del cuchillo en el campo. “Cómo no vas a matar, si mataban todo. Todo bicho se comía. Siempre llevaba un cuchillo”.

Lo indago sobre la violencia en la vida en el campo. Señala que andaba siempre de visitante en la ciudad. “Me hubiera gustado hacer vale todo, pelea en la jaula. *Knock out* o no salís del octógono”. Se refiere al deporte UFC (*Ultimate Fighting Championship*). Es un deporte mezcla de diferentes estilos de artes marciales como el *kickboxing*, el *muay thai* o el boxeo. Las peleas se disputan en un ring octogonal parecido a una jaula, y los contrincantes utilizan unos guantes menos acolchados que los que se usan en el boxeo. Hay apuestas.

Me hace acordar al cuento del ruletista que presté a Genaro. Se lo llevé en una bolsa de plástico para protegerlo del agua y los jugos del pescado. Él le agregó otra bolsa para asegurarlo.

Lisandro me muestra sus cicatrices en la cara. Son cuchilladas. Una de las cicatrices es el resultado de una pelea: “gané por puntos: 23 en la cabeza con un palo contra 8 puntos en la cara con cuchillo. El conflicto comenzó por una pala. De joven, era un muchacho de pocas pulgas”.

Se peleó a cuchillo varias veces. Relata cuando le hicieron la cicatriz en la boca, originada en una pelea de barrio... Relata con movimientos corporales de pelea a cuchillo.

Lisandro tiene un carácter arrabalero no desprovisto de un sentido de justicia social. Pienso en Juan Moreira, personaje popular de la novela gauchesca argentina. Ambos tienen una familiaridad con el medio de la violencia y, en especial, con el manejo del cuchillo en la pelea. Asimismo, “a los 8 años tiraba con armas en el campo”.

Hacer fuerza y filetear forman parte de los saberes y habilidades que se valorizan en la pesca. Son el resultado de aprendizajes sociales intergeneracionales que valorizan y desvalorizan a los pescadores y lo que producen. Para repensar la economía a partir del trabajo, hay que mirar las relaciones sociales que producen el valor económico.

La mirada del otro

Presento dos escenas que muestran la valorización subalterna de los pescadores, por parte de los otros, con respecto al tratamiento de los desperdicios. En cuanto a la autovaloración, ya he mostrado que ellos destacan ver la salida del sol en el mar, el tiempo libre, acariciar ballenas, un trabajo sin monotonía, el valor económico del producto. La conexión entre ambas valorizaciones podría pensarse como un régimen de valoración que conecta diversas perspectivas.

Llego al puesto. Martín y Juan conversaban en la orilla.

De rutina, observo los cajones y averiguo por la pesca del día. Es cambiante. Ese día habían pescado mucha pescadilla, un pescado apreciado por el público, no tanto como la corvina. También pescaron bagre de mar, que no es apreciado por los consumidores. Un día antes les había sobrado un cajón de esta especie. Genaro lo había puesto en el *freezer* mientras resolvía qué hacer con los bagres. La valorización de los productos es otra dimensión del valor económico, irreductible a este, dado que involucra procesos culturales, tradiciones, gustos, criterios de calidad. En el próximo apartado seguimos desarrollando la valorización desde el punto de vista del producto.

Me acerco a conversar con Genaro. Me cuenta la escena que había tenido lugar en el puesto un ratito antes. *Negros de mierda* es lo primero que escuchó. Era a Julián a quien se dirigía, pero fue Genaro quien le respondió al agresor: “¡viejo, empecé a callarte la boca!”.

La agresión se debía al tratamiento del desperdicio del fileteado. En el puesto se va tirando al mar. Julián se encarga de que no se acumule en los cajones del desperdicio. Según “el viejo”, explica Genaro, a los desperdicios hay que enterrarlos. Para los pescadores, esto sería peor. “Vienen los perros y desentierran, es lo peor que hay, está loco”. Genaro le dijo “¡la concha de tu madre, viejo de mierda!” y le hizo el típico gesto de *chupame los huevos*. “Se enardecí el viejo, dijo que hacía 40 años que venía a esta playa, que paga todos los impuestos. Yo también pago los impuestos, ¿qué tiene que ver? Dijo dos o tres veces más negros de mierda y se calló”.

Julián acota que estaba toda la gente mirando la discusión. Genaro se arrepiente de haberle respondido. “Si tuviera menos edad (ahora tiene 24), le pegaba. Martín me dijo: no contestes, es al pedo, pero había que hablarle bien de cerca: ¡tenemos permiso municipal!”.

A Julián le “chupó un huevo, no le molestó. Al fin y al cabo, es el trabajo”.

Venía pensando en mi trabajo: cómo voy a hacer para registrar lo social o la mirada del otro en este puesto. ¿Cuál es el lugar social de los pescadores en la playa bonaerense? ¿Cómo los ven los otros? Debía dejar que se manifestara, sin anticiparme con un cuestionario inspirado en mi formación teórica. Pues, lo social se manifestó en la escena de los desperdicios. Todo un recorte de la realidad o un régimen de visibilidad.

Indago qué hacen en los frigoríficos con el desperdicio. Hacen comida balanceada para gatos y harina.

Después de la escena, terminamos hablando con Genaro de comidas con brócoli y remolacha.

Días más tarde, Martín me comenta las novedades del día. No se tiran más los desperdicios al mar. En el grupo de Whatsapp de pescadores dijeron que la gente se quejaba en todos los puestos de la playa. Tomaron la medida de poner los residuos en bolsas de consorcio negras y guardarlas en la lancha para tirarlo en alta mar, en la salida del día siguiente. En el grupo también decían de llevar los desperdicios a la municipalidad. Hay un *container*, que lo llevan después a un basural en Santa Teresita.

Hubo después otra escena con un señor que enfoca la mirada en el desperdicio. Se pone a hablar conmigo: “cuánta gente comería y con eso hacen comida para gatos.”

La mirada social que se posa en el desperdicio puede deberse a una preocupación por el cuidado del medio ambiente, pero también puede estar operando una lógica económica sistémica: el capitalismo va capturando nuevos recursos sin valor para entrarlos en procesos de valorización económica. Me baso en un “episodio del antidesperdicio” (Laera, 2024, p. 115), referido a una narración de la caza de liebre en *El desperdicio* de Matilde Sánchez (2007). Acontece en un momento de cambio en la caza de liebre en un pueblo de la provincia de Buenos Aires, relacionado con la búsqueda de alternativas para enfrentar la crisis económica de finales

de la década de 1990 y la aparición de frigoríficos de liebre para la exportación. La práctica de los cazadores furtivos es captada por la industria frigorífica. Se trata del eslabón ilegal (la caza comercial de liebres está prohibida) de una cadena productiva legal: el frigorífico y la exportación (Laera, 2024, pp. 119-120). En Argentina la carne de liebre no es socialmente valorada: es negra, tiene un sabor salvaje, la forma de prepararla es todo. El valor económico de la liebre para exportación depende de otra escala de valorización posiblemente relacionada con lo exótico. La lógica productivista del capitalismo se ensambla con la crisis económica para producir y consumir todo. Entonces, las miradas posadas en el desperdicio de pescado podrían interpretarse en clave de las narrativas del “antidesperdicio”. Sánchez narra la morada oculta de la producción de valor económico de la liebre, donde se articulan habilidades y saberes que la sociedad ha venido incorporando en los cazadores desde tiempos primitivos, con los procedimientos del frigorífico.

“Ninguna muerte es gratuita. Cada célula se hace dinero. Los generosos despojos iniciales participan de molindas destinadas a abono y balanceado para perros -a excepción del cuero, vendido a las industrias de sombreros y textiles de falsa angora” (Sánchez, 2007, p. 168).

El texto literario se fusiona con la etnografía y narra todo el proceso de trabajo con la liebre. En relación con nuestro episodio del desperdicio del pescado, interesa especialmente la contraposición entre el trabajo de los cazadores y el de los trabajadores del frigorífico. El primero es grupal (similar al grupo de pescadores artesanales) y el segundo responde a la organización de un proceso industrial. Hay un eslabonamiento similar entre los pescadores artesanales y los frigoríficos de pescado. No es casual que en nuestro episodio aparezca el frigorífico como valor social en tanto solución al problema del desperdicio. En relación con nuestro episodio, importa

como régimen de visión y moral, dado que los pescadores fueron socialmente desvalorizados con el insulto *negros de mierda*. La preocupación por el desperdicio conecta al parecer diversas sensibilidades. Es como un espejo a través del cual se ven varias cosas. Se ve la pobreza, ante la cual el desperdicio es un crimen, hay que aprovecharlo como comida. Se ve el medio ambiente y aparece la pregunta por el mejor tratamiento del desperdicio desde el punto de vista ecológico. Se ve lo que no se quiere ver: la morada oculta de la producción. El frigorífico no es un proceso público. Ni quisiera ver esas molindas de despojos y los hornos que los transforman en alimento. Lo que primero que me imagino es el olor asqueroso que deberán soportar los trabajadores para la valorización del desperdicio.

Marcos, Genaro y Lisandro también saben y les gusta cazar.

Pescados

Una de las primeras cosas que me dijo Genaro sobre el oficio: “nunca pasás hambre”. Marcos no come pescado. Me explica que en Argentina el consumo es bajo por las preferencias de los consumidores. Japón, China y Estados Unidos son los países más consumidores de pescado. La accesibilidad de un alimento de gran calidad, no es suficiente para el valor social. En todo caso, la pesca de los pescadores locales no se orienta hacia el mercado local, donde el pescado no es tan accesible como parecería evidente. Conozco el tema como consumidora. En verano los puestos de la playa captan la demanda de los turistas. Cuando no es verano, para conseguir hay que recorrer la playa en los indeterminados horarios de salida de las lanchas. Puede uno estar horas esperando junto al camión o tractor que dejaron para entrar al mar. Suele haber repartidores en bicicleta que esperan y salen a vender por encargo o en circuitos habituales. Fuera de la playa hay que conocer las casas de los pescadores que suelen vender, hay que buscar la información o bien ir a las pescaderías de la ciudad cercana.

La mirada de los pescadores está en la demanda para la exportación y las grandes ciudades, es decir, la que pasa por el frigorífico.

¿Qué sucedió en la pandemia? Los pescadores fueron categorizados como trabajadores esenciales, por lo cual pudieron seguir trabajando en los períodos de encierro. Es recordada como una buena época por el grupo: *hacían lo que querían en la playa, no había nadie*, había mucho pescado, todo iba al frigorífico. Indago por qué no vendían pescado en la playa, un lugar especialmente ventilado. La respuesta: *la gente no podía salir*. Me interrogo sobre la irracionalidad colectiva que desconecta el producto de los consumidores comunitarios. Son elementos del valor social a tener en cuenta.

En cuanto al valor económico, en el puesto el kilo de pescado entero costaba 3 mil pesos argentinos (2 dólares) y el kilo de filet 6 mil pesos argentinos (4 dólares). Independientemente de la especie. En febrero, ya de vuelta en la Ciudad de Buenos Aires, fui a la feria de la Plaza Martín Fierro en San Cristóbal. El pescado estaba el doble de caro o más según la especie. Envié la información a los pescadores y para mí se había acabado la época del acceso al pescado fresco de alta calidad a bajo costo.

Lisandro trabajó cuatro años como marinero con Patricio, pescador artesanal que suele visitar el puesto. Comenta un malentendido que llevó a la ruptura de la relación. Se relaciona con un pescado sin valor comercial: el pargo. Se parece a la corvina, pero no está en los catálogos de los frigoríficos. Me ofrece el relato que ahora presento para ejemplificar la valorización del producto.

Estaban pescando cerca del faro. Enganchan pargo. La discusión se dio en torno a la decisión de devolverlo al mar o llevarlo. Patricio, el dueño de la embarcación, estaba en tierra y dejó de contestar por radio. “Fue un puterío”. Quedaron desvinculados bien. Marcos acota que no tiraría el pargo. Este producto, según me explican, tiene propiedades

alimenticias y de sabor equivalentes a la corvina. La diferencia es que aquel no tiene valor comercial, por tanto, no es valorado socialmente. Será por esto que es un producto que no se encuentra disponible en la cadena de comercialización.

En contraste, encuentro al pargo en el menú de los restaurantes de Costa Rica. ¿Será la misma especie que la del mar argentino? Me explicó la camarera que hay dos tipos. Como si fuera una señal, para probar la relatividad de la valorización del producto, fue preciso que lo eligiera para cenar días posteriores a mi exposición en la plataforma de CALAS. Comestible es, pero no lo pude valorar bien dado que lamentablemente no estaba bien preparado.

Entiendo que el valor económico nace, en gran parte, en los frigoríficos y los catálogos de productos para la exportación. Ellos compran lo que tiene valor de exportación. Bautista, otro pescador artesanal que entrevisté, vende al frigorífico que le pague más. *Hay precios en dólares*. La corvina es lo más apreciado para exportación, le sigue la pescadilla. No se exporta el gatuzo y la anchoa de banco, sin embargo, el primero es un pescado muy apreciado por los consumidores locales y la anchoa de banco es exquisita y de alto valor nutricional. El pargo es un ejemplo que muestra la incidencia extrema del valor económico en el mercado global, a tal punto que existe la práctica de no recogerlo y puede generar tensiones entre marineros y patronos. El valor del pescado está desvinculado de la comunidad local.

Un día pregunté de rutina cómo anduvo la pesca del día. A Augusto no le había ido bien con la pesca. A Marcos, en cambio, sí le había ido bien. Me informaron los cajones para el frigorífico y primera venta. *La gente quiere corvina, pero no hay*. Martín no quiere arriesgarse a poner las redes más lejos por buscar la corvina.

Hacia fin de enero, empieza a no haber buena pesca: pez guitarra o melgacho, bagre, algo de pez pollo. Esta última especie es apreciada: las clientas comentaban que

no tiene gusto a pescado, los chicos se lo comen todo. A mí no me gusta y he probado distintas recetas.

El gasto de nafta es 100000 pesos para ver si vas a agarrar pescado. A veces gastás para salir cinco veces y no pescás bien. Marcos dijo que dos o tres veces más así y dejaba de pescar. No nos bajoneamos. Es así. Pregunta Augusto a Marcos si pescaron saracas. Es signo de que se termina el pescado. Marcos pescó una, Augusto como seis. Acá hablamos del factor estacional, no obstante, aparece conectado con otra resonancia de la posible fuga del pescado. ¿Cómo piensan los pescadores el futuro de la pesca artesanal?

El futuro de la pesca artesanal

Varios factores configuran un futuro incierto de una profesión tan vieja como la humanidad. Uno de estos es la inmersión del diagnóstico en una *fenomenología del fin* en las percepciones de los pescadores. Se traza un horizonte de desaparición del sujeto de la pesca: el pescado, al cual conducen las prácticas colectivas de todos los actores del sistema de pesca. Es un ejemplo de la paradoja de la racionalidad individual: puede llevar a la irracionalidad colectiva, en este caso, a la devastación de las condiciones locales de reproducción del recurso ictícola. El futuro de la pesca artesanal depende de muchos factores. Desde ya, las regulaciones actúan sobre la racionalidad del sistema. Se interesa por captar los factores que aparecen problematizados desde el punto de vista de los pescadores artesanales.

En el puesto se dijo, en repetidas ocasiones, que *el pescadito se va a acabar*. Es una percepción compartida hasta donde llegué a escuchar, con distintas explicaciones.

Los barcos grandes se llevan el pescado. En enero no se ven porque están en veda, en febrero arrancan de nuevo. La veda de pesca se implementa para proteger la reproducción y el crecimiento de las especies marinas y de agua dulce,

asegurando su sostenibilidad a largo plazo. Estos períodos de veda, que pueden ser temporales o espaciales, restringen la pesca para proteger los períodos de desove, reclutamiento y crecimiento de las poblaciones de peces y otras especies.

Augusto considera que antes pescaban más que ahora: “la diferencia es por la depredación. Hay menos pescado por los barcos grandes. En 2012 dijeron que habían vedado la pesca de la merluza en el sur. Se vinieron a pescar la pescadilla. Vienen de Mar del Plata”.

Me muestra la aplicación *Marine* que muestra todos los barcos que están pescando en ese momento. “Hay barcos chicos pescando, muchos. Los barcos grandes están en reparaciones por la veda, empiezan en febrero. No dejan desovar a la merluza negra en la Bahía de Samborombón. Es impresionante la depredación”.

Ambos no ven garantizada la continuidad del oficio por la sustracción del pescado. Se suma Patricio en la apreciación.

“Hace 5 años que vengo muy mal. No hay pescado. No sé la razón. Las especies migran. La corvina y la pescadilla van a Brasil, África y vuelven. También están los barcos grandes. Barcos chinos. Se comenta que, durante el covid, el presidente cedió las aguas para obtener vacunas chinas, para pagar parte de los medicamentos. Antes no venían esos barcos. A veces se ven. Un amigo me contó que en Bahía Blanca hay muchos”.

Hay tipos de pesca: deportiva con caña (con o sin devolución), artesanal y comercial. El antagonismo entre pesca artesanal e industrial define el escenario del futuro de los artesanales. Marcos entiende que

“quieren sacar a los barcos chiquitos. Le están dando bola a los grandes. Hay una discusión de categorías. Dividen a los pescadores artesanales en grandes y chicos. Estos se distinguen de los pescadores comerciales. No dicen que los artesanales somos nosotros, que hacemos

todo a mano, usamos el cuerpo, a pulmón. Los otros usan todo tipo de maquinaria. El permiso de pesca dice que los artesanales podemos pescar hasta 20 cajones. Los supuestamente “artesanales grandes” pescan más. Pescan de arrastre, que está prohibida. Se realiza con dos lanchas. No es artesanal. Aunque se hace. Ellos la hacen en invierno. Los barcos pesqueros más grandes que las lanchas de pescadores artesanales tienen un patrón, un radio operador, mecánico y dos o tres marineros.”

Marcos comentó que dieron permisos de pesca a barcos de Mar del Plata.

Es todo política, mafia. El sistema juega en contra de los pescadores menores. Por ejemplo, te piden que tengas una balsa. Ocupa espacio, molesta. En el puerto de Lavalle pusieron una división y está Prefectura. Ya no se pueden ver las descargas de pescado. No se puede ver cuánto pescado ingresa al puerto. Todo arreglado. Cada vez hay menos chicos. El círculo está armado. Si te quejás a Prefectura no llegas a nada. Los supuestos artesanales pescan cerca de la costa y se llevan el pescado al que llegan los chicos.

No poder ver los pescados habla de la opacidad de las cantidades sobre la pesca. *Se saca en negro, después se blanquea, a través del frigorífico que compra o de la planta municipal vinculada a una cooperativa.*

Queda comprendida la diferencia de escala. Indago si ellos se proyectan a adquirir un barco grande para crecer en la actividad. Los dos capitanes responden que no. Se trata de otra cosa. No buscan ese cambio. No quisieran cambiar.

El arrastre tiene beneficios y perjuicios, dado que pescan más, pero *se quedan sin pescado. Se enteran los barcos grandes que hay pesca y se vienen a la orilla. Pescan con cadenas grandes.* En comparación, ellos usan “cadenitas”, según lo expresa Marcos. *Si los dos hacen pesca de arrastre a la vez, se va el pescado. Rompen el suelo y con ello su alimento. Marcos*

le explica a Julián cómo es la pesca de arrastre. “Cuando ves tanto pescado, ¡te da tanta alegría!”. Muestra en su celular el video de cuando agarraron 70 cajones. Hace como 15 años que descubrieron la pesca de arrastre. Aprendió en “los barcos de los tanos. Son de Mar del Plata y les dan puerto en la Bahía. Cuando trabajaba en el Salado”.

Pero además del fin del pescado, el futuro de la pesca artesanal está en duda por otro factor: la transmisión intergeneracional. Patricio, pescador de visita en el puesto, quien ya fue presentado en este texto, comenta que “no tiene a nadie en vista si fallara alguno de sus marineros. Antes siempre se acercaban. Ha cambiado la juventud. Son más bancados por los padres”. Marcos, siempre con sus salidas humorísticas, acota que “habría que subir la *Play* a la lancha...” Terminan la escuela y están ahí en la casa. No está garantizada la transmisión del trabajo. Esto lo sostienen a pesar de que en el puesto Genaro y Julián son muy jovencitos.

Los pescadores no le ven futuro al oficio, *no hay chicos nuevos que quieran integrarse a la pesca. Quedan de 50 años para arriba. Es un oficio riesgoso pero un laburo que te da todo en la puerta de la casa. A todos les cuesta levantarse a la mañana. Dejan porque les cuesta madrugar. Los jóvenes están con el teléfono las 24 horas. Los tiene atados.*

Reflexiones finales

Repensar la economía a partir del trabajo puede parecer un propósito desmesurado, pero es precisamente esa desmesura la que orienta investigaciones como la aquí presentada. El enfoque de la antropología de la economía propuesto por Narotzky y Besnier (2020) resultó especialmente fértil para este intento. Sus nociones de economías de base y valor social permitieron iluminar las prácticas concretas de los pescadores artesanales y, al mismo tiempo, mostrar cómo esas prácticas se sitúan en la frontera porosa entre economías

informales, formales, de subsistencia, comerciales, artesanales, industriales, locales y globales.

Volver a la base —a las formas cotidianas de ganarse la vida, a los vínculos que sostienen la reproducción social, a la experiencia situada del trabajo— abre una vía para interrogar la economía más allá de sus métricas hegemónicas. Desde allí, se vuelve posible plantear cómo el trabajo no solo produce bienes, sino también relaciones, sentidos, cuerpos, tiempos y mundos compartidos. El valor social de las personas y de las cosas, lejos de ser un resto cultural de la economía, constituye su condición de posibilidad.

A partir del caso de los pescadores artesanales, es posible advertir cómo los regímenes contemporáneos de valorización —tecnológicos, industriales, institucionales y ambientales— afectan la continuidad de oficios que condensan saberes intergeneracionales, vínculos comunitarios y formas de autonomía. Observar el trabajo “al ras del puesto” muestra, al mismo tiempo, las tensiones entre estos regímenes y los espacios de maniobra que las personas inventan para sostener formas de vida que consideran valiosas.

Pensar la economía desde el trabajo, desde sus prácticas concretas y sus regímenes de valoración, permite interrogar las estrategias —individuales, colectivas e institucionales— para entrar y salir de las dinámicas dominantes del capitalismo contemporáneo. Este estudio es apenas un paso en esa dirección, abierto a nuevas preguntas y a nuevos modos de comprender cómo se produce valor y, sobre todo, cómo se produce vida en común.

Bibliografía

- Berardi, F. (2017). *Fenomenología del fin: sensibilidad y mutación conectiva*. Caja negra.
- Castel, R. (1997) *Las metamorfosis de la cuestión social: una crónica del salariado*. Paidós.

- Farinetti, M. (2024a) Trabajo. En A. Kozel, S. Grinberg y M. Farinetti (Eds.), *Léxico crítico del futuro* (pp. 546-549). UNSAM Edit. Farinetti, M. (2024b). Trabajo (fin del). En A. Kozel, S. Grinberg y M. Farinetti (Eds.), *Léxico crítico del futuro* (pp. 550-553). UNSAM Edit.
- Laera, A. (2024). *¿Para qué sirve leer novelas? Narrativas del presente y capitalismo*. Fondo de Cultura Económica.
- Narotzky, S. y Besnier, N. (2020). Crisis, valor y esperanza: repensar la economía. *Cuadernos de Antropología Social*, (51), 23-48.
- Rifkin, J. (1996). *El fin del trabajo. Nuevas tecnologías contra puestos de trabajo: el nacimiento de una nueva era*. Paidós.
- Sánchez, M. (2007). *El desperdicio*. Alfaguara.

CAPÍTULO 2

El encuentro de dos mundos sociales: la agricultura familiar y el basural. Aportes del estudio de caso de Tartagal, Argentina

Cecilia Antonia Forment-Hirsch

Introducción

09 de septiembre de 2024: Josefa (60 años) está sumergida hasta las rodillas en basura. Con la ayuda de un fierro largo revuelve las bolsas a su alrededor. Su hija, Rosario (48 años), su esposo, Pedro y su otro hijo, Marcos “basurean”, como dicen ellos, con ella hoy. Junto a ellos, otras treinta y pico personas acumulan materiales entre las bolsas recién descargadas de los camiones de basura municipales.

Decenas de vacas pasan su día pastando en el basural, compitiendo con las personas para apropiarse de la basura. A un costado, Josefa tiene su bolsón blanco que gradualmente llena de cáscaras de papa y pan para alimentar sus cerdos y perros.

Dos horas después de haber llegado al basural, Josefa y Rosario se encuentran visiblemente cansadas y el sol está

demasiado fuerte para seguir trabajando. La familia decide volver a la casa de Josefa para descargar lo recolectado.

Josefa tiene una parcela de tierra que denomina “cerco” a 1,5 km del basural destinada al cultivo de maíz principalmente. Al llegar a su cerco, lo primero que me desborda es el olor. Desagradable, podrido, inconfundiblemente residuos. Pedro observa mi sorpresa al ver los cambios en el espacio desde la última vez que fui en septiembre de 2023. Sonriendo, me dice: “el cerco se ha convertido en un basural”. Nos sentamos en el patio de tierra y Josefa me extiende un mate. Le pregunto: “¿Qué pasó?”.

Pedro, que a unos metros de distancia descarga los contenidos del bolsón, me responde antes: “ella forma parte de esos acumuladores compulsivos”. Nos reímos y él explica que hace un año, comenzaron a ir al basural más de tres veces por semana porque “no llegamos a fin de mes”. Además, ante la persistente sequía y el limitado acceso al agua, la familia no pudo preparar la tierra para la cosecha de maíz.

Comenzaron a recolectar botellas de plástico que llaman “cristal” por su color transparente. Un comprador les presta grandes bolsones blancos para facilitar la recolección y periódicamente pasa por su casa para comprarlos al kilo.

Además del cristal, Josefa adquirió el hábito de recoger mucho más que botellas. Su patio es testigo: una pava eléctrica sin base ni tapa; muebles de armarios rotos; recipientes de plástico agujereados; un cochecito; pantuflas rotas; telas. Efectivamente, su cerco parece un basural. (C. A. Forment-Hirsch, comunicación personal, 2024).

Mis notas de campo registran una jornada típica de Josefa y su familia en el basural a cielo abierto de Tartagal. Ella reside en Pueblo Nuevo, una comunidad guaraní situada a 1,5 km de allí. La escena encarna la “proliferación de híbridos” que Latour (1993) asocia con la constitución moderna de la realidad arraigada en binarios que deben ser

examinados críticamente. Por un lado, el paisaje del monte coexiste con los residuos del basural. En una parcela rural, el cerco de Josefa, que normalmente utiliza para el cultivo de maíz, ahora hay botellas de plástico esparcidas por el patio de tierra. Presiones medioambientales: la sequía y la falta de acceso al agua han empujado a la familia de Josefa hacia un estilo de vida radicalmente diferente: la recolección de residuos. En lugar de reproducir la división entre naturaleza y cultura, que puede proporcionar fácilmente una versión dicotómica de la realidad, retomo la propuesta de Quéré para ecologizar las ciencias sociales (Quéré, 2024, p. 79). Él retoma el enfoque de Dewey (1916; 1981; 1993), que hace hincapié en la integración e interiorización del organismo y el medio ambiente, así como en su capacidad mutua para actuar.

Por otro lado, Pedro describe la escasez de dinero de la familia, mostrando que, mientras familias enteras de Pueblo Nuevo recogen ropa, objetos y comida en el basural porque “no llegan a fin de mes”, lo que recogen en el basural representa el excedente de la vida urbana, los desechos del centro de la ciudad de Tartagal.

Pretendo distanciarme de una parte importante de la literatura existente que enmarca el trabajo de los recolectores de residuos exclusivamente como una consecuencia de la escasez material. En su lugar, destaco las *capabilities* de los actores (Sen y Nussbaum, 1993), es decir, “integro los propios valores y aspiraciones de las personas en la lógica de la investigación” (Zimmermann, 2018, p. 949) para comprender el abanico de prácticas que desarrollan en torno al basural. En este sentido, la etnografía de Kathleen Millar (2018) sobre Jardim Gramacho (un basural en Río de Janeiro, Brasil) proporciona una visión excepcional de los “proyectos de vida” y la “búsqueda de la buena vida” que se forjan en el basural.

Las yuxtaposiciones mencionadas anteriormente no son solo materiales, prácticas o ambientales, sino que también se manifiestan en el ámbito de la moralidad. El trabajo agrario de

una familia guaraní conlleva dignidad, mientras que trabajar con basura conlleva estigma y vergüenza. Este contraste entre lo que es limpio y sucio, trabajo digno y vergonzoso, trasciende opiniones individuales. Implica una forma colectiva de clasificar, organizar y categorizar grupos (Durkheim y Mauss, 1901-1902; Douglas, 1966) que tiene consecuencias concretas y observables.

Teniendo esto en cuenta, la principal paradoja sobre la cual este capítulo pretende arrojar una luz es: ¿Por qué el basural se ha constituido en una, entre otras, fuentes de ingreso para la familia de Josefa, que tiene un lote de tierra y tradición de trabajo agrario? Las respuestas a esta pregunta permitirán explorar la preocupación de fondo aquí presente: las prácticas económicas alternativas (catalogadas como informales) que nacen del encuentro de estos dos mundos sociales.

Sin embargo, antes de analizar dichas prácticas es fundamental dar cuenta de que la “informalidad” sigue siendo un término controvertido dentro de las ciencias sociales. Millar (2018) critica la tendencia normativa a definir el trabajo informal en términos negativos. Es decir, como una

desviación de las formas de trabajo reguladas por el Estado, reconocidas oficialmente y organizadas institucionalmente en las sociedades capitalistas. En otras palabras, estos diversos tipos de trabajo se definen principalmente por lo que no son (...) su trabajo es informal porque no se ajusta a las normas (p. 13).

Verónica Gago (2014) toma en cuenta esta crítica y, en cambio, propone recuperar el concepto, entendiendo la informalidad como una fuerza generativa para comprender el panorama laboral de América Latina. Ella entiende

lo informal como fuente instituyente o como principio de creación de realidad. Defino la informalidad no de manera negativa por su relación con la normativa que define lo legal/ilegal, sino de modo positivo por su carácter de innovación y, por tanto, por su dimensión de praxis que busca

nuevas formas. Lo informal en este sentido no refiere a lo que no tiene forma, sino a la dinámica que inventa y promueve nuevas formas (productivas, comerciales, relacionales, etc.), poniendo el eje en el momento procesual de producción de nuevas dinámicas sociales (p. 21).

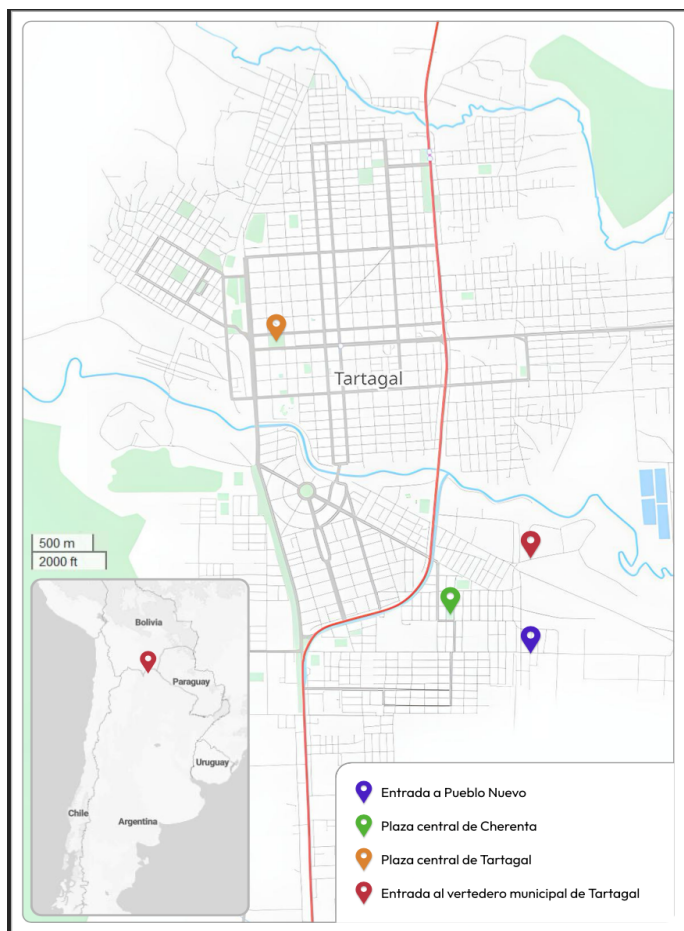
Volviendo a la viñeta etnográfica, se pueden identificar diversas prácticas vinculadas al basural. Por ejemplo 1) la recolección de residuos orgánicos para alimentar a los animales (a veces incluso a las personas) a pequeña escala, 2) la recolección de diversos objetos considerados útiles o deseables para uso propio, para reparar y regalar o transformar y vender, así como 3) la recolección y venta de materiales secos reciclables vendidos por kg, que, según la Red Argentina de Investigación y Acción en Residuos (RIAR), incluyen “papel y cartón, vidrio, plásticos y metales ferrosos y no ferrosos” (RIAR, s. f.). Estos “flujos de materiales”, tal y como los describen Sorroche y Rodríguez (2024), se distinguen por su “producción masiva, alta reciclabilidad y, en muchos casos, por la existencia de mercados ya establecidos” (p. 39) que se encuentran tanto en entornos urbanos como rurales. En el seno de un mismo grupo familiar, más aún, de la misma persona, coexisten estas múltiples formas de relacionarse con el basural y los residuos.

Situando Pueblo Nuevo y el basural de Tartagal

La investigación que nutre este capítulo se realizó en Tartagal, una ciudad intermedia situada en el noroeste de la Argentina, en la frontera con Bolivia. La ciudad de Tartagal (63.196 habitantes) es la capital del Departamento de General San Martín (178.367 habitantes), en Salta. Además de la presencia de los hidrocarburos, es una zona histórica de tala de madera, avance de la frontera sojera y, por su cercanía con Bolivia, se dan movimientos migratorios, así como de comercio y contrabando transfronterizo.

Figura 2.1

El centro de Tartagal, el basural y las comunidades aledañas.



Nota. Tomado de Pablo De Lucca. 2024.

Esta región también representa una de las zonas más étnicamente diversas de Argentina, contando con la presencia de siete pueblos indígenas, migrantes internos de otras partes de la Argentina e inmigrantes de Bolivia.

La población guaraní del Chaco argentino descende en su mayoría “de refugiados que huyeron de Bolivia durante la Guerra del Chaco, que enfrentó a los ejércitos boliviano y paraguayo en la década de 1930” (Diz, 2020, p. 2). Durante las décadas siguientes, muchos se incorporaron como trabajadores en los ingenios azucareros de la región (Hirsch, 2004) y formaron nuevas comunidades, manteniendo siempre una estrecha relación con los familiares que permanecieron en Bolivia.

Tartagal sigue recuperándose, o más bien padeciendo, el impacto de la privatización de Yacimientos Petrolíferos Fiscales en la década de 1990. Para hacerle frente a las severas dificultades económicas que arrastra desde hace décadas, a las que se suman las crisis coyunturales y cíclicas de la Argentina, la mayoría de los habitantes de Tartagal tienen los pies sumergidos en la informalidad. Sea Margarita, que además de ser dueña de una heladería en el centro, compra y vende oro y dólares del otro lado de la frontera; las familias que venden su chatarra a compradores intermediarios que lo llevan a la frontera como contrabando; y hasta los funcionarios de la municipalidad, que complementan sus ingresos con otros trabajos, la informalidad es la norma y representa la parte más vital de una economía que se encuentra en recesión desde hace décadas.

La falta de gestión de residuos ha llevado al desarrollo y crecimiento indiscriminado del basural, que actualmente alcanza las 20 hectáreas y constituye el sitio oficial de eliminación de residuos de Tartagal.

En ese marco, la actividad económica vinculada al basural cobra importancia para todos los estratos de la sociedad tartagalense. Dicha red, además, se extiende más allá del territorio nacional. El comercio de cartón, plástico, vidrio o metales y chatarra fluctúa de acuerdo con el mercado internacional, especialmente en relación con Bolivia, y el valor del peso argentino (notoriamente inestable debido a los recurrentes ciclos inflacionarios), el dólar y el peso boliviano.

Pueblo Nuevo es una de varias comunidades guaraní de la zona sobre la ruta 34. Josefa vive allí desde 2007,

cuando junto a un grupo de 15 mujeres guaraníes, comenzó a ocupar las tierras que hoy conforman la comunidad de Pueblo Nuevo. Junto a su prima, Amalia, y las otras mujeres, alzaron una carpa en esas tierras y reclamaron el derecho a vivir y cultivar allí como lo hacían sus abuelos. Ni las amenazas de desalojo del dueño, que usaba la tierra para producción agraria, ni las de la policía lograron hacerlas retirar. Poco a poco, comenzaron a obtener del Estado cierto reconocimiento en tanto que comunidad indígena con derecho a esa tierra, así como ciertas garantías de que no podrían ser expulsadas. Actualmente la comunidad abarca 118 hectáreas donde viven 200 familias y, a pesar de que luchan por obtener la personería jurídica, el reconocimiento máximo del Estado, todavía no lo han logrado.

Del cerco al basural: un abordaje etnográfico

El corpus de datos de esta tesis proviene de visitas al terreno realizadas entre junio de 2022 y octubre de 2024. El método etnográfico entendido como “un proceso investigativo que se sustenta en una observación prolongada, continua o fraccionada, de situaciones, en espacios públicos, organizaciones o comunidades” (Cefaï, 2013, p. 1) me permitió identificar regularidades, formas de cooperación entre miembros, el universo discursivo y las convenciones que hacen al mundo social de los desechos en Tartagal.

Privilegié la etnografía sobre otras técnicas de recolección de datos, porque parto de la misma premisa de Blumer quien afirma que “los seres humanos orientan sus acciones hacia las cosas de acuerdo con su significado” (Blumer, 1982, p. 32). En otras palabras, los actores “aplican esquemas interpretativos o ‘marcos primarios’ (Goffman, 1974, p. 24) para clasificar la información e interpretarla de manera significativa” (Dietram & Tewksbury, 2007). Por lo tanto, es tarea de la socióloga comprender el significado y el sentido que los actores atribuyen a sus acciones.

Estructura del capítulo

El capítulo se estructura en dos partes. A partir de la historia de vida de Josefa, primero expongo las condiciones de posibilidad que llevaron a que dos mundos aparentemente contrastantes: el de la comunidad guaraní que vivía del trabajo agrario y el del basural a cielo abierto de Tartagal, comiencen a entrecruzarse.

Segundo, exploro la multiplicidad de objetos que las familias guaraní recuperan del basural, lo cual provee claves para entender las diversas maneras en que el basural atraviesa la vida cotidiana de las personas de Pueblo Nuevo. No solo muestro la pluralidad de experiencias, materialidades y usos que las familias le dan a lo recolectado en el basural, sino también el valor que adquieren esos objetos en el contexto y la economía local.

Parte I. La emergencia de una nueva praxis: el “basureo”

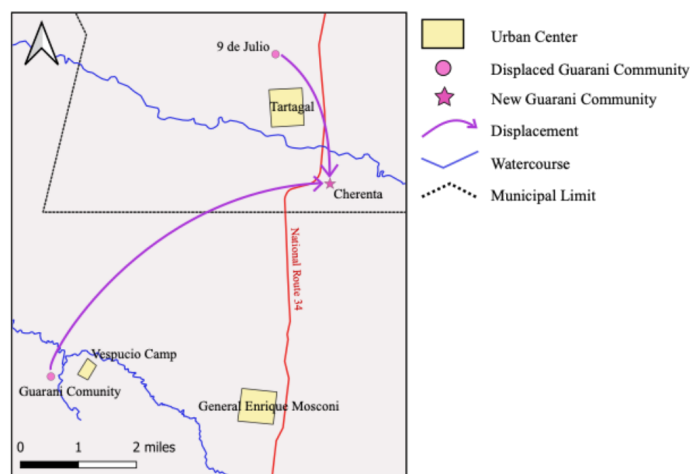
Antes de vivir cerca del basural, Josefa y su prima, Amalia, vivían con sus familias en Vespucio (a 15,4 km de Tartagal. Véase la figura 2.2). Las primas recuerdan que su casa estaba construida con paredes de barro y techo de paja, contaban con un terreno para cultivar y criar algunos animales de granja para su subsistencia. La única persona de la familia que recibía un salario era el papá de Amalia, es decir, el tío de Josefa que trabajaba como albañil en el hospital de Vespucio. Estos ingresos fijos complementaban lo que consumían o vendían de la producción agrícola a pequeña escala. Este estilo de vida, caracterizado por la agricultura familiar, cambió repentinamente en 1968, cuando la familia de Josefa y otros miembros de la comunidad fueron desplazados de Vespucio a Cherenta. Las niñas tenían aproximadamente 11 años.

La historia de vida de Josefa ofrece una valiosa perspectiva sobre la infancia y la vida familiar en Vespucio durante las décadas de 1950 y 1960. Vespucio simboliza tanto el crecimiento que acompañó a la explotación petrolera en la

primera mitad del siglo XX en Tartagal, así como la crisis en la que se subsumió la región cuando dicha industria dejó de constituir un motor económico a fines de ese siglo.

Figura 2.2

Vespucio, Cherenta y el centro de Tartagal



Nota. Elaboración conceptual de C. Forment; cartografía realizada por E. Gabbardo (julio de 2025). Fuentes: datos etnográficos, Instituto Geográfico Nacional (Argentina) y OpenStreetMap. Sistema de referencia de coordenadas: WGS 84.

Un tema central en la narrativa de la familia Vásquez es su baja integración a la fuerza de trabajo formal.

En un país en el cual la noción de ciudadanía social se constituyó articuladamente –y casi indisolublemente– con la categoría de trabajador (formal), y en donde la pertenencia estuvo dada a partir de una configuración socioinstitucional en la que la imbricación trabajo-derechos articuló la llave de inclusión al colectivo (Perelman, 2008, p. 1),

El hecho de que el padre de Amalia haya sido el único de su familia que percibía un salario es un dato importante.

Agustin Diz (2016) establece una diferencia entre la incorporación de la mano de obra criolla (no indígenas) a la industria petrolera en expansión, en contraste con la mano de obra guaraní que solamente podía aspirar a changas (término utilizado para denominar trabajos temporales y mal pagos). En este sentido, los contactos cotidianos que se daban entre los mundos guaraní y criollo eran poco frecuentes y cuando sucedían estaban teñidos de tensión.

A pesar de las tensiones raciales presentes en Vespucio, Josefa y su familia sienten nostalgia. Para ellos, no era solamente un lugar de exclusión. La autonomía que les proporcionaba el cerco les permitía alcanzar un cierto grado de autosuficiencia y dignidad, incluso en medio de la marginación racial y económica. Teniendo esto en cuenta, ¿por qué se vio trastocada su vida en la década de 1960?

El auge económico de Tartagal y la desaparición del monte

No está claro si el desplazamiento de la comunidad guaraní de Vespucio a Cherenta fue el resultado de una demanda de las comunidades indígenas que necesitaban tierra, o una imposición “desde arriba” de un político local (el alcalde Alberto Abraham). En cualquier caso, el acuerdo entre Alberto Abraham, Jacinto Romero y Marcelino Segundo (caciques) que llevó al desplazamiento de la comunidad guaraní de Vespucio solo puede entenderse en el contexto de las siguientes transformaciones económicas.

El auge en la industria petrolera a inicios de la década de 1960 se debió a la confluencia de varios factores. Los avances tecnológicos y relevamientos geofísicos en la década de 1950 permitieron la identificación y realización de perforaciones más profundas en la región del noroeste (Riccardi, 2015), y en los años posteriores se desarrollaron técnicas de “extracción secundaria. Los cuales, ampliaban la vida útil de las reservas

ya existentes.” (Dachevsky, 2022, p. 247), Adicionalmente, el desarrollo de obras de infraestructura y transporte “conectaban yacimientos ya descubiertos en décadas anteriores, con los centros de consumo, y, en consecuencia, habilitaban la incorporación de éstas como reservas listas a ser explotadas” (Dachevsky, 2022). Por último, la política nacional favorable contribuyó a una creciente inversión en torno a este rubro.

Este desarrollo económico contribuyó al crecimiento demográfico. Debido a la fuerza laboral que movilizaba, los índices poblacionales sufrieron un vertiginoso salto del 96% en la década de 1960, como registra Benclowicz (2011) en la Figura 3 que muestra la evolución de la población en el Departamento General San Martín y en las localidades de Tartagal y Mosconi desde 1947 hasta 1991.

Tabla 2.1

Evolución de la población en el Departamento General José de San Martín (1947-1991)

	Total provincial	Departamento San Martín	Tartagal	Mosconi+Vespucio
Población en 1947	290.826		8.539	4.912
Población en 1960	412.854	50.929	16.740	6.809
Crecimiento en % 1947-1960	42,0		96,0	38,6
Población en 1970	509.803	67.203	23.696	8.355
Crecimiento en % 1960-1970	23,0	32,0	42,0	23,0
Población en 1980	662.870	80.793	31.367	11.158
Crecimiento en % 1970-1980	30,0	30,0	32,0	34,0
Población en 1991	866.153	106.688	43.586	12.600
Crecimiento en % 1980-1991	30,7	32,1	39,0	12,9

Nota. Tomado de Benclowicz (2011), basado en el Censo General de la Nación de 1947 y los Censos Nacionales de población de 1960, 1970, 1980 y 1991.

Dicho crecimiento poblacional a su vez dio inicio a un “proceso de urbanización de la zona del umbral al Chaco, al irse parcelando y loteando los terrenos para la compra y venta a través de registros y titularidades privadas” (Flores Klarik, 2023, p. 319).

En paralelo, aunque adquiere mayor fuerza en la década de 1990, ya en la década de 1970 “la instalación y expansión del nuevo modelo agrario” que privilegiaba la rentabilidad que suponía la sojización de la producción “trajo consigo el desplazamiento de poblaciones y las amenazas de desalojos para las comunidades campesinas, sobre todo en la llamada “frontera agrícola” (las áreas marginales), como en las provincias de Santiago del Estero y Salta” (Svampa, 2008, p. 34). Este proceso también es conocido como la pampeanización del Chaco argentino. Debido a que la tierra en esta región tiene un menor rendimiento que el de la región pampeana, requiere la explotación de extensiones mayores de tierra.

Los resultados de este proceso son subrayados por Bolsi y Mieichtry (2006) quienes concluyeron que en solo 20 años (de 1960 a 1980) se amplió 45 % de la superficie cultivada. Esto agudizó el deterioro de las condiciones materiales y de vida de las personas que vivían de la producción agrícola a pequeña escala. En este marco, el desmonte como consecuencia de “la apropiación del territorio por las actividades agroindustriales, hidrocarburíferas y madereras desencadenó una conflictividad social en las relaciones interétnicas entre criollos e indígenas” (Lorenzetti, 2013), ya que las poblaciones indígenas fueron desplazadas a tierras poco productivas. Es decir, el desplazamiento de la familia de Josefa y el resto de las familias guaraní corresponde a un patrón típico del noroeste argentino durante el periodo en cuestión.

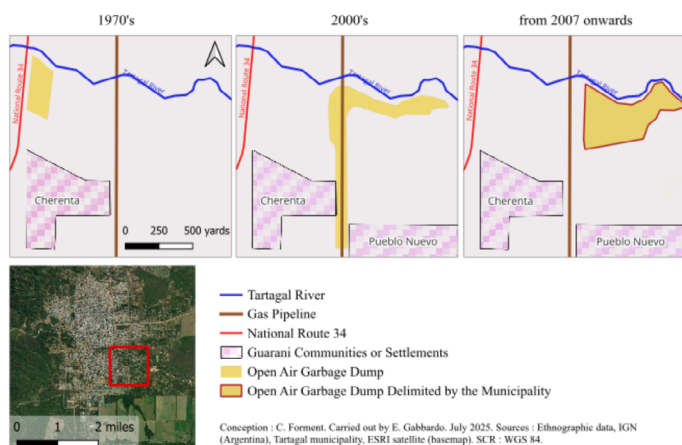
¿Cómo impactan en la vida de Josefa y su familia estas transformaciones estructurales de Tartagal? ¿Cómo cambia la manera de habitar el espacio de Josefa, Amalia y sus familias cuando el monte se encuentra diezmado? ¿Y cuáles eran las características del entorno en Cherenta?

El desarrollo económico huele a basura

A pesar del desplazamiento a 15 km. de distancia de Vespucio, el cerco continuó siendo una fuente indispensable de subsistencia para las familias. El excedente es utilizado para realizar intercambios o trueques con los vecinos. Por ejemplo, la abuela de Josefa intercambiaba huevos por pan.

Figura 2.3

Las tres ubicaciones del basural municipal de Tartagal



Nota. Elaboración conceptual de C. Forment; cartografía realizada por E. Gabbardo (julio de 2025). Fuentes: Datos etnográficos, Instituto Geográfico Nacional (Argentina), Municipalidad de Tartagal y Environmental Systems Research Institute (ESRI) satellite (basemap). Sistema de referencia de coordenadas: WGS 84.

La proximidad de Cherenta con la ruta 34, así como el centro de Tartagal (3 km), facilitó una incipiente urbanización. Sin embargo, este nuevo espacio conformado por monte también estaba integrado por una presencia disruptiva: el basural a cielo abierto. El mismo proceso que dio forma al desarrollo económico y la expansión urbana, nótese la explotación de recursos naturales, también sentó las condiciones de posibilidad de la emergencia del basural.

Como ya se mencionó, las décadas de 1960 y 1970 representaron los años ‘dorados’ para un sector de la clase media y los “YPFanos” de Tartagal. Durante este periodo hubo un incremento en su poder adquisitivo, lo que llevó a un incremento de consumo. Varios comerciantes del centro de Tartagal, hijos e hijas de trabajadores de YPF añoran la abundancia con la que asocian esa época. La posibilidad de comprar electrodomésticos, ropa, y otros bienes. Sin embargo, el rédito económico fruto de la explotación de los recursos naturales no fue redistribuido equitativamente y además tuvo un alto costo ambiental. La contracara de esta abundancia fue la creciente capacidad de producción de basura.

Además de este incremento sustancial en la cantidad de productores y producción de basura, se sumaron otras condiciones que contribuyeron a la aparición del basural a cielo abierto ubicado en proximidad de lo que es actualmente Cherenta, en la década de 1970. Como observa Benclowicz (2005), el auge económico que atravesó la municipalidad en este periodo no fue acompañado de una inversión en infraestructura, particularmente en lo que corresponde a la gestión de residuos. Esta “omisión en el control estatal de la disposición de residuos de todo tipo (ambos industriales y domiciliarios)” (D’Hers, 2014, p. 3), así como “la misma disposición ilegal —durante décadas— por parte de algunos municipios”, como el de Tartagal, “para no abonar el costo de hacerlo en sitios destinados a ese fin” (D’Hers, 2014, p. 3) incidieron en la creación del basural. A su vez, esta omisión da cuenta de la ausencia de una problematización o política vinculada al impacto ambiental de la disposición de residuos, o en su defecto, sobre el reciclaje, que nunca se posicionó en la agenda pública.

Ahora bien, “la dramática interrelación entre el sufrimiento ambiental, la experiencia tóxica y la dominación social” (Auyero y Swistun, 2006, p. 38) forma parte de un campo de estudios que todavía tiene mucho por ofrecer en la Argentina. Para comprender esta dinámica, retomo el

concepto de la experiencia experimental de Dewey (1993). De manera similar al análisis de Von Uexküll (1934), citado en Cefaï et al. (2024) sobre el *Umwelt* de la garrapata, Dewey emplea la metáfora de una almeja que se adapta a su entorno para ilustrar que: “este ajuste al entorno no es totalmente pasivo: no se trata de un simple moldeado del organismo por el entorno circundante” (Dewey, 1993, p. 111). Más bien, al modificar su entorno (el medio ambiente), incluso ante el movimiento más sutil de adaptación, el organismo sufre las consecuencias de sus acciones. El supuesto dualismo entre organismo y medio ambiente queda así desplazado: el organismo es parte del medio ambiente y el medio ambiente, parte del organismo.

A la luz de esta ecología, ¿qué tipo de “adaptación” (entendida como el movimiento de actuar-sufrir) experimenta la familia de Josefa en respuesta a su entorno cambiante? ¿Qué tipo de recursos encuentran al enfrentarse a este lugar? ¿Qué prácticas emergen de esa adaptación? La “adaptación” debe entenderse entonces como este doble movimiento de ajuste a un entorno determinado, con sus limitaciones materiales, y la proyección de soluciones a los problemas, generando un mundo vital colectivo.

Basurear en familia

28 de agosto, 2023: Yo cuando tenía 12 años me enseñó mi abuela a ir al basural. Basureábamos con mi abuela. Buscábamos de todo. A mi abuela le gustaba traer ropa, pero no traía esa ropa vieja, la encontraba en una bolsita, y todo era así nuevo, medio usado pero limpito. Mi abuela se la llevaba, y decía “por ahí a vos te va a andar este”. Y así fue, mire cómo teníamos que andar, hasta ahora. Ya tengo 65 años y sigo yendo a la basura. Me gusta ir. Lo que pasa es que, no sé, parece que ya me he acostumbrado, es mi hobby, parece (risas) (C. A. Forment-Hirsch, comunicación personal, 2023).

En el testimonio de Josefa, comienza a aparecer una palabra desconocida para mí: el *basureo*. Derivada de la palabra basura, es usada como verbo y se define como la práctica de ir al basural de Tartagal con el propósito de buscar, elegir, y retirar objetos diversos que comienza alrededor de la década de 1970.

Como afirma la hipótesis de Sapir-Whorf (1912), se inventó una nueva categoría para nombrar un nuevo tipo de práctica, relevante para la vida de la comunidad que denota un cambio en la forma en que las familias se relacionan y se involucran con su entorno. El cerco y la producción agrícola ya no son los ejes principales que organizan la vida personal, familiar y social de las familias guaraníes de Cherenta. Ahora el espacio de las familias está compuesto de un ecosistema de monte y basura.

Para las mujeres de Pueblo Nuevo, el basureo es una actividad que, al igual que el trabajo en el cerco o la costura, aprendieron de sus abuelas a una temprana edad. Esta iniciación con el basural comienza a familiarizar a muchas con este espacio: dónde está, cómo llegar y cómo es, lo cual comienza a teñirlo de un sentido familiar también, ya que es una práctica que se lleva adelante en familia. Así, basurear se convierte en una opción, entre otras, para obtener recursos, no exclusiva, sino complementaria al monte y al cerco.

En los primeros años, la abuela recuperaba principalmente ropa y zapatos, telas para coser o hacer sábanas y objetos de aluminio, como teteras para calentar agua. Con el tiempo, la cantidad y diversidad de los bienes recuperados se expandieron.

Estas nuevas materialidades subrayan una distancia con respecto a la vida en Vespucio, caracterizada por la austeridad, evidente en las casas de barro con techos de paja, sin conexión de electricidad o gas, y en donde la producción agrícola alcanzaba para la subsistencia y no mucho más. Ahora, por el otro lado, comienzan a aparecer objetos como puertas de heladeras, secarropas, latas y un énfasis cada vez mayor en ropa en los testimonios de la comunidad.

Este cambio en el volumen de bienes disponibles en el basural responde al incremento en la capacidad de compra de la clase media de Tartagal desarrollado anteriormente. Implicó un cambio en la definición de deseos, necesidades y aspiraciones que permearon a toda la sociedad.

La proximidad de Cherenta al centro de Tartagal permitió a algunas personas de la comunidad obtener trabajos temporales en el centro. Tal fue el caso de Josefa,

28 de agosto de 2023: Josefa comenzó a separarse de su primera pareja a los 18 años, con quien había tenido tres hijos (Rosario, Marcos y Lucas). En ese momento, consiguió un trabajo en el centro “como empleada doméstica, en una casa familiar. Me gustaba planchar, limpiar, pero no hacer cosas como cocinar. Limpiaba, lavaba los platos, limpiaba la cocina y a las dos de la tarde volvía a casa, y llevaba mercadería para mis hijos” (C. A. Forment-Hirsch, comunicación personal, 2023).

Entendiendo que “nuestros proyectos y escenarios alternativos se forman en interacción con otros, tal y como subraya Dewey” (Zimmermann, 2024, p. 9), esta interacción entre las mujeres y el mundo material de la ciudad nos invita a replantearnos “la compleja relación de los pobres y marginados con los regímenes culturales en los que se desenvuelven” (Appadurai, 2004, p. 67), especialmente en términos de “la capacidad de aspirar” (Appadurai, 2004, p. 67), es decir, de alcanzar aquellos bienes y servicios que caracterizan la vida de la clase media en Tartagal. Más allá de entender esto exclusivamente en términos de prácticas culturales, Hobson y Zimmermann (2022) consideran dimensiones longitudinales y laterales: la historia de vida de una persona (su experiencia) y sus interacciones con el entorno.

Más allá de que hubo interacción entre la comunidad guaraní y el centro de Tartagal, este contacto no supuso una integración. Por el contrario, la comunidad guaraní de Tartagal

siguió sufriendo 1) segregación espacial y física del centro de la ciudad, como lo demuestra su continuo desplazamiento y reubicación a las afueras de la ciudad, donde las familias guaraníes asistían a sus propias escuelas e iglesias y eran excluidas del trabajo asalariado formal; 2) marginalización, por lo que los asentamientos indígenas surgieron en zonas contaminadas con poco o ningún acceso a servicios básicos como agua, electricidad y gas; y 3) racismo de la clase trabajadora, así como de los criollos residentes en el centro de la ciudad y los políticos, que se manifestaba en el uso de insultos y, en ocasiones, violencia física contra las personas indígenas.

Dada la imposibilidad de adquirir la ciudadanía plena a través del trabajo o la integración espacial, se reforzó la incorporación a través del acceso al bienestar material. A partir de la década de 1970, y de forma aún más marcada en la década de 1990 (Svampa, 2005), el consumo se convirtió en “el modo más rápido y dinámico de inclusión social” (Gago, 2014, p. 29).

Volviendo a los testimonios, hay una ambivalencia en torno al basural. Por un lado, las familias resaltan que acuden a este por “necesidad”, ante la falta de trabajo, y el bajo rendimiento de la producción agrícola del cerco, pero por el otro lado, resaltan materialidades que están más asociadas a un nivel socioeconómico medio, como el énfasis en ropa o electrodomésticos. En este marco, el basural comienza a representar un mundo de nuevas posibilidades de acceso a bienes materiales para la comunidad guaraní de Cherenta, al que, de otra manera, no podrían acceder.

En este sentido, el basureo en Tartagal emerge “de un proceso de ajuste de expectativas del actor” (Meccia, 2019, p. 30). Esta acción social no puede ser pensada por separado de las dimensiones longitudinales y laterales que lo parieron porque “no hay acción social si no media un aprendizaje social, aprendizaje en el que se invirtió tiempo biográfico” (Meccia, 2019, p. 30).

El relato de vida de Josefa y su familia visibiliza la gradual formación de la praxis de basurear como “un emergente del proceso de interacción entre el individuo y la situación cultural y social” (Shaw citado en Meccia, 2019, p. 30), así como espacial y material en la que viven.

Parte II. El *Capri*: entre basural y supermercado

Pueblo Nuevo está atravesado por múltiples estigmas, entre los cuales el contacto con la basura es uno de los más prominentes. Para mencionar solo algunos ejemplos: en las ocasiones que la iba a visitar a Josefa justo después de que volvía del basural, ella sentía mucha vergüenza de que yo la viera antes de que se aseara y cambiara su ropa. Saludarla con un beso en la mejilla, como se acostumbra en Argentina, suscitaba comentarios y risas nerviosas. Sumado a esto, Luisa, la tía de Amalia me dijo una vez “a nadie le gusta decir que van ahí”, en referencia al basural.

Para contrarrestar esto, muchas personas desarrollan mecanismos de naturalización y racionalización (Becker, 1963). Por ejemplo, ir al basural se plantea como una necesidad para Josefa y su familia porque de lo contrario, “no llegamos a fin de mes”. Marcos aclara que “si tenés vergüenza te vas a morir de hambre”. El hecho de revolver la basura es valorado porque implica la disposición para “proveer” a la familia. En este sentido, la amenaza de una reacción estigmatizante por parte de la sociedad comienza a relativizarse ante la búsqueda de estrategias planteadas en términos de supervivencia.

En vez de “basural”, la manera en que la comunidad de Pueblo Nuevo lo denomina es el *Capri*. Esta palabra no se encuentra en el diccionario español. Sin embargo, circula entre los jóvenes, los recolectores que trabajan en el basural y las personas que viven en los asentamientos y barrios aledaños

a este. El *Capri* significa supermercado (en referencia a una cadena de supermercados de la zona).

La palabra *Capri* marca un importante desplazamiento semiótico. Establece las fronteras de un mundo social en el que hay un grupo de personas con un campo de experiencias común para las cuales el basural deja de ser únicamente una expresión de miseria humana, y de falta, a un espacio donde los actores van a buscar insumos de diversa naturaleza. En esta reconfiguración, el basural comienza a pavimentar el camino para la realización de ciertas aspiraciones.

A partir de esta categoría emergente me pregunto: ¿qué van a buscar al *Capri* las personas de Pueblo Nuevo? Y ¿cómo usan los objetos en su cotidianeidad? Para responder esto, realizo una descripción sociológica de las cosas, los objetos que hacen el día a día de esta comunidad. Entendiendo que colocar la mirada sobre estas materialidades también nos puede dar claves para pensar la historia de las familias, sus patrones de consumo y cómo las personas de una comunidad se vinculan a través de las cosas.

Esto, a su vez, se plantea con el propósito de responder: ¿Qué valor tiene el *Capri* para los recuperadores de Pueblo Nuevo? ¿Y qué nos dice esto sobre cómo surge, se negocia y se mantiene un mundo social compuesto por prácticas informales en la periferia de la ciudad de Tartagal?

Del otro lado de las rejas

Desde los caminos de tierra de Pueblo Nuevo se ven las rejas que rodean los lotes rectangulares de las familias y que tienen diferentes alturas. Dentro de cada lote pueden vivir varios miembros de una familia o solo una persona que piensa comenzar una familia o traer a la que ya tiene de otro asentamiento. Todos los terrenos tienen rejas. Mientras que algunas son bajitas, otras forman una muralla que impide ver hacia adentro de la casa. Las rejas están hechas principalmente de planchas de madera

colocadas una al lado de otra. Algunas son regulares, prolijas y otras tienen formas irregulares, con huecos grandes entre ellas. Además de madera, algunas rejas están conformadas por un *collage* de materiales: madera, plástico y chatarra.

Figura 2.4

Reja de Pueblo Nuevo.



Nota. Fotografía por la autora, 14 de junio, 2022.

Las rejas en Pueblo Nuevo cumplen diversas funciones. En primer lugar, para aquellos que tienen cercos, la reja cumple la importante función de proteger el predio de las vacas que deambulan libremente (pertenecientes a familias criollas). Estas representan una amenaza porque pisan la siembra, comen todo lo que está a su alcance, y arruinan el arduo trabajo agrícola que llevan adelante las familias.

En segundo lugar, las rejas delimitan el terreno de cada familia. Distinguen los pasajes comunitarios (los caminos de tierra) del espacio doméstico, que a menudo también sirve como lugar de actividad económica. Al hacerlo, la reja señala:

habitación, desalentando la usurpación. Algunas casas restringen el acceso a una sola puerta, a menudo asegurada con una cadena o alambre, mientras que otras son porosas. Los vecinos y los niños pasan libremente por caminos conocidos para recoger agua, tomar atajos o refugiarse del sol bajo la sombra de los árboles.

En tercer lugar, las rejas tienen la importante función de observar sin ser visto. Esta práctica es importante para brindar una sensación de privacidad a las familias, y para proveer temas de conversación diarios, inspirados en la persona o situación que transcurre en los caminos de tierra.

Los videos e imágenes de los primeros años tras la ocupación inicial en 2007 de Pueblo Nuevo muestran que no había rejas. En la figura 2.5, una mujer remueve la tierra de la entrada de su casa, construida con madera y silobolsas del basural. No hay rejas a la vista.

Figura 2.5

Mujer delante de su casa en Pueblo Nuevo.



Nota. Fotografía de Alejandro Kirchuk, 2013.

En esos años había contadas familias conocidas entre sí y una permanente amenaza de desalojo que desincentivaba la inversión en construcciones de material durable y la permanente ocupación de esos terrenos por parte de muchas familias. Salvo contadas excepciones, las personas seguían viviendo en Cherenta, mientras lentamente construían sus casas ahí.

Figura 2.6

Pueblo Nuevo en 2024



Nota. Fotografía por la autora, 24 de septiembre, 2024.

Las figuras muestran cómo en el año 2013 predominaba el monte en Pueblo Nuevo. A medida que fueron llegando más personas de Cherenta para vivir y expandir sus familias, la construcción de rejas se volvió cada vez más necesaria. La mayoría fue construida con materiales que provienen del basural. De este modo las rejas representan el testimonio material de la creciente ocupación y expansión de Pueblo Nuevo.

Además de su funcionalidad, es importante colocar la mirada sobre la materialidad misma de las rejas. Desde el año 2022 hasta 2024 las rejas pasaron de ser un *collage* de chatarra y madera a primordialmente madera. Este cambio no fue meramente estético, sino que responde a una oleada de robos que comenzó a partir de enero de 2024 impulsada por el deterioro del panorama económico del país, los recortes en las ayudas sociales del gobierno y el aumento de los precios de la chatarra, especialmente debido a los compradores bolivianos que adquirirían el material a un precio más alto. A medida que la chatarra se volvía más rentable, el número de recolectores en el basural se disparó, lo que provocó una escasez local. Como resultado, algunas personas recurrieron a medios ilícitos de adquisición (como el robo de cables de cobre, rejas familiares y vías férreas abandonadas).

Otro elemento que comenzó a vislumbrarse durante mi última visita al terreno fue la creciente preocupación de las personas de la comunidad con respecto al aumento de consumidores de paco (pasta base de cocaína). En 2024 cuatro familias de Pueblo Nuevo habían comenzado a vender paco. De acuerdo con Julieta, la vicepresidenta de la comunidad, esto comenzó a atraer a jóvenes de otras comunidades y barrios a comprar allí y a delinquir, o para hacer actos de vandalismo como producto de su estado alterado, y para financiar su consumo.

El hecho de que las cercas se convirtieran en parte integrante del paisaje de Pueblo Nuevo demuestra que su construcción no fue el resultado de una elección individual, es decir, una decisión racional y utilitaria tomada de manera privada, sino que evidencia la aparición de una convención (Becker, 1982). Durante los primeros años de Pueblo Nuevo, las rejas no se consideraban necesarias ni deseables. Sin embargo, a medida que llegaron más familias y el asentamiento comenzó a crecer, el horizonte de aspiraciones cambió. Basándose en la bibliografía disponible sobre la capacidad de aspirar, Zimmermann (2024) escribe: “para que surja

cualquier aspiración, el futuro debe ser plausible (Lewin et al. 1944) y, para ser plausible, debe estar asociado a ‘vías de acción viables y valiosas’” (p. 519).

A medida que la incipiente comunidad logró acceder a la electricidad y al agua mediante la conexión con precarios sistemas de tuberías, estos logros abrieron nuevos horizontes para los habitantes de Pueblo Nuevo. Los residentes no solo exigieron al Estado que mejorara la infraestructura existente, sino que también comenzaron a construir colectivamente las rejas características de los barrios urbanos. Además, las transformaciones a lo largo del tiempo en los materiales utilizados demuestran su permeabilidad y adaptabilidad a las transformaciones ambientales en la economía, la composición social de la comunidad y los recursos disponibles en el basural (Dewey 1993; Zimmermann 2024). El basural, en este caso, se convierte en un recurso que el asentamiento transforma para mejorar sus condiciones de vida y, al hacerlo, transforma el paisaje material y espacial de Pueblo Nuevo.

Los patios como un espacio multifuncional

12 de septiembre de 2024: En el jardín de Amalia hay docenas de macetas, botellas de plástico blancas con caras de dibujos animados y macetas tradicionales de color marrón, todas recuperadas del basural, que contienen una variedad de plantines: palta, mango, granada, cactus. Amalia prefiere las macetas para plantar en el suelo de tierra, “es más lindo”, dice.

Uno de los principales pasatiempos, y pasiones de las mujeres de la comunidad es la jardinería. Esto requiere una atención y un espacio asignado diferente al de la cosecha en el cerco. Los jardines están compuestos por macetas pequeñas y no son iniciativas comerciales sino personales, estéticas y simbólicas. Casi todos los materiales, las macetas, las decoraciones e incluso los plantines provienen del basural.

Figura 2.7

Macetas de botellas de plástico en Pueblo Nuevo



Nota. Fotografía por la autora, 4 de octubre, 2022.

Figura 2.8

Jardín de Pueblo Nuevo



Nota. Fotografía por la autora, 11 de septiembre, 2024.

Figura 2.9

Jardín de Pueblo Nuevo



Nota. Fotografía por la autora, 24 de septiembre, 2024.

Mantener un jardín en el patio es principalmente una ocupación femenina en Pueblo Nuevo. En un contexto donde el agua es escasa y las elevadas temperaturas fácilmente secan cualquier planta, y el suelo se vuelve inhóspito, el esfuerzo requerido para cultivar incluso la más modesta vegetación es significativo. Sin embargo, la dedicación de las mujeres se nota en los detalles: las macetas recicladas, hechas con botellas de plástico cortadas o recipientes de vidrio rotos, se limpian, se decoran y se llenan con plantines, muchos de los cuales también provienen del Capri. La jardinería se convierte en una práctica tanto material como social: las mujeres intercambian gajos de frutas, plantas y comparten estrategias para mantenerlas vivas.

Esta práctica es relativamente reciente para la comunidad. Por un lado, se aleja de la lógica del cerco cuya utilidad es aparente: la producción agrícola para consumo familiar o venta e intercambio en pequeña escala. En un sentido análogo a la lógica detrás de la construcción de las rejas, una mayor inversión en

los materiales y expansión de las casas, el jardín implica una proyección de permanencia en el espacio donde están viviendo.

Por último, se trata de un proyecto no solo individual o familiar sino colectivo para embellecer el espacio donde viven. Lejos de seguir una lógica de subsistencia, esta actividad de la cual el *Capri* forma parte indispensable se relaciona con las “formas de vida” de aquellos que trabajan en el basural y que están “estrechamente entrelazados con los valores y creencias sobre lo que constituye una buena vida y con las luchas humanas por hacer realidad estas visiones, incluso dentro de las brutales restricciones sociales” (Millar, 2018, p. 26).

Para comprender el valor que tienen los jardines para las mujeres de Pueblo Nuevo, hay que prestar atención al mundo en el que se inscriben; este horizonte es “lo que garantiza la identidad del objeto a lo largo de la exploración” (Merleau-Ponty, 1945, p. 68). Los jardines forman parte de una reconfiguración más amplia de lo que significa vivir bien en Pueblo Nuevo. No se trata de un retorno a las disposiciones espaciales tradicionales guaraníes, ni de una continuación directa de la vida rural que tenían en lugares como Vespucio. La jardinería aquí surge como una forma novedosa, arraigada en las condiciones materiales de la marginalidad, pero moldeada por la aspiración (Zimmermann, 2024). Para muchas mujeres, el punto de referencia son las casas de clase media del centro de Tartagal: casas con jardines y macetas decorativas. Estos jardines se convierten en una gramática visual de la aspiración que adquiere sentido dentro de una historia de marginalización, segregación y racismo (como se reconstruyó en la primera parte del capítulo).

Una botella de plástico usada, una botella de vidrio rota, un marcador sin tinta, entre otros objetos encontrados en el Capri, pueden representar basura para la población criolla de clase media, pero para las mujeres de Pueblo Nuevo, “el acto de recuperar estos objetos en particular y muchos más es también un acto de rehacer el mundo” (Millar, 2018, p. 33).

Los jardines están entrelazados con valores y visiones de la buena vida: no solo la supervivencia, sino la capacidad de crear belleza, de ofrecer hospitalidad, de vivir con dignidad incluso en condiciones precarias.

La comunidad viste a la moda

15 de junio de 2022: Esa mañana, entre sorbos, y las cucharadas de azúcar que Josefa vierte reiteradamente al mate, las mujeres comentan la cantidad elevada de ropa que tienen en los armarios. Los volúmenes de ropa a veces las llevan a vender, regalar e incluso donar la ropa a otras comunidades o personas más desafortunadas que ellas mismas. Este exceso que describen parece contrastar con la carencia en materiales y construcción de vivienda, de agua, e incluso de alimentos que caracteriza a la comunidad.

-Pero ¿de dónde sale tanta ropa? Pregunto.

Me explican que en el basural cerca de ahí se encuentran muchas cosas. Hasta un par de vaqueros como esos (señalando mis pantalones) habían encontrado. Y a veces, ni siquiera requieren arreglos las prendas que encuentran. Ante mi expresión de sorpresa, entre risas, prometen que me llevarán al basural para que pueda sacar fotos. Burlándose del hábito que tenemos “los de la universidad” de sacarle fotos a cualquier cosa, incluso la basura. (C. A. Forment-Hirsch, comunicación personal, 2022).

El recorrido que realicé hasta ahora de la cultura material de Pueblo Nuevo sigue la progresión de los espacios a los que yo misma fui accediendo a lo largo de mi trabajo de campo. A medida que el *rapport* con ciertas familias se fue afianzando, me invitaban cada vez más a observar su intimidad, culminando con el interior de las casas. Estas eran las áreas destinadas al sueño y al descanso, y representan el umbral final de mi trabajo de campo. Las figuras 2.10 y 2.11 muestran la casa de Josefa.

Figura 2.10

Interior de una habitación de la casa de Josefa en Pueblo Nuevo



Nota. Fotografía por la autora, 25 de septiembre, 2024.

Figura 2.11

Interior de una habitación de la casa de Josefa en Pueblo Nuevo



Nota. Fotografía por la autora, 25 de septiembre, 2024.

Alrededor del 80 por ciento de lo que se ve en las imágenes proviene del basural. Algunos accesorios (carteras, y mochilas) también provienen de ferias americanas en Bolivia, o re-venta de ropa usada en ferias de Cherenta u otras comunidades. El estado de la ropa que Josefa encuentra en el basural es variado.

Entendiendo, como lo hace Merleau-Ponty (1945) que

Me muevo hacia un mundo en el que entierro mis intenciones perceptivas y prácticas en objetos que, en última instancia, aparecen antes y fuera de esas intenciones y que, sin embargo, solo existen para mí en la medida en que despiertan en mí pensamientos o voluntades (p. 82).

¿Cómo podemos entender las voluminosas y desordenadas pilas de ropa que invaden todos y cada uno de los espacios disponibles de la casa de Josefa?

Me muestra pantalones de pijama con etiqueta, hasta retazos de tela que recortó de prendas insalvables. Otras, las recupera, aunque tengan manchas o estén rotas, con la esperanza de repararlas. La ropa que guarda sirve tanto para hombres como para mujeres y niños.

Detrás del desorden de ropa y objetos, la mayoría de los cuales nunca se han usado, se esconde no solo una percepción de lo que tiene valor (entendido como sustantivo), sino un acto de (e)valuación (Dewey, 1939). Josefa selecciona prendas pensando en personas concretas, imaginando usos para el futuro. También imagina formas de transformar estos artículos para venderlos, donarlos o regalarlos. Ve un potencial sin explotar.

Por ejemplo, en 2022 y 2023, la familia de Josefa reutilizó retazos de tela de ropa irreparable del basural para fabricar accesorios para el cabello llamados ‘chuletas’. Estos se vendieron o distribuyeron como regalos en el Día de la Madre o el Día del Niño. En este contexto concreto, el significado del basural no podía estar más lejos de ser un

lugar de miseria y necesidad; más bien, se convierte en el facilitador de un estilo de vida que Josefa valora, en el que se hacen regalos para eventos importantes y hay suficiente excedente como para permitir donaciones (a menudo en el contexto de eventos solidarios organizados por la iglesia). Se distancia de aquellos que son “más desafortunados” que ella y su familia, tiene un armario repleto de ropa que no necesita, al igual que la gente de clase media del centro de Tartagal. En lugar de romper con los valores dominantes del centro de Tartagal, la recolección de Josefa se presenta como una forma de remodelar su entorno de manera que se ajuste a sus aspiraciones de participar en la abundancia que ella asocia con ese mundo (Dewey, 1939).

Sin embargo, el acto de identificación, individuación, y recuperación que lleva adelante Josefa conlleva el riesgo de devenir en acumulación. Como señala su hijo Marcos, el proceso puede volverse compulsivo. La promesa de transformación y la realización del potencial, es decir, la creencia de que cada objeto del basurero tiene una utilidad futura, ha dado lugar a la saturación de sus espacios vitales. Al hacerlo, en lugar de alejarse de la escasez asociada con la recolección en el basural, su propio hijo observa que su patio y su casa se han convertido en un “microbasural”.

Mientras que las familias (e)valúan al Capri como una fuente de bienes que utilizan para construir, ampliar y mejorar sus hogares, lo que les acerca a “la buena vida”, este contacto con el basural, el hecho de llevar estos materiales al hogar forma parte de un mundo social de residuos que delimita un interior y un exterior.

Afuera, están aquellos para quienes estas 20 hectáreas son un espacio sucio, contaminado, un depósito de desechos que ya no tienen lugar en sus hogares, y aquellos para quienes es el Capri, un espacio de posibilidades y potencial, de recursos y bienes, análogo al papel de un supermercado. Aunque los primeros conciben a los segundos

“como incapaces de aprovechar las oportunidades de progreso que existen en diversos caminos aprobados por la sociedad” (Goffman, 1963, p. 166), surge un mundo social en torno a los residuos, con su criterio de valoración de los residuos. Esta dualidad define la tensión entre inclusión y exclusión, entre residuos y valor, y lo que cuenta como una vida que vale la pena vivir.

Reflexiones finales

En contraste con las formas más visibles e institucionalizadas de trabajo con los residuos como la compraventa de materiales reciclables, este capítulo pretendió mostrar que existe una pluralidad de prácticas alternativas vinculadas a la basura (como el basureo) que todavía están lejos de ser reconocidas como trabajo legítimo. En un municipio como Tartagal, donde no existe una política coherente ni sostenida de gestión de residuos, donde los guaraníes han sido históricamente marginados del mercado de trabajo formal y donde la región ha estado sumida por años en recesión, desempleo y crisis económica, el basural se convierte en un espacio de promesa para la gente de Pueblo Nuevo.

La respuesta a la pregunta que inauguró este capítulo, por el creciente rol del basural en la vida de las familias guaraní, sólo puede comprenderse a partir de la compleja relación entre las transformaciones en la configuración espacial de la década de 1960 y 1970 y la relación de cercanía/lejanía con respecto a la población criolla y de clase media de Tartagal. En ese sentido, la primera parte del capítulo examinó cómo se encontraron dos mundos sociales, a primera vista excluyentes: el de la agricultura familiar, característica de la comunidad guaraní en Tartagal antes de la década de 1970, y el mundo de los residuos en donde el basureo se constituye como práctica en el basural a cielo abierto de Tartagal. El destino de las familias de Josefa

y Amalia, y la comunidad guaraní de la que formaban parte es inseparable del desarrollo de una economía nacional y regional extractivista (gas, petróleo, tala, agricultura).

La segunda parte del capítulo parte de la recategorización del basural en *Capri*, un término adoptado por la comunidad de Pueblo Nuevo. En este marco, hablar de residuos como meros recursos o mercancías es insuficiente. Así como limitar la observación a las prácticas de compra y venta de materiales reciclables. Por eso coloco la mirada sobre la pluralidad de objetos, en donde se aglutina una pluralidad de valores que nacen de juicios prácticos, no teóricos.

El juicio práctico, tal y como lo entiende Dewey y lo elaboran De Munck y Zimmermann (2014, p. 3), vincula los valores a las situaciones para informar la acción. El valor de los objetos del Capri en Pueblo Nuevo no puede explicarse por su valor económico previo a su descarte. Más bien, lo que surge son convenciones. Patrones recurrentes en lo que se valora: silobolsas, pavas eléctricas, ropa y hasta botellas rotas y macetas.

Estos patrones no son idiosincrásicos ni anecdóticos. Más bien, son “productos de la valoración colectiva” (De Munck y Zimmermann, 2014, p. 22) y de la acción (Becker, 1982), que evolucionan con el paso de los años. En los primeros años del asentamiento, materiales como las silobolsas eran muy apreciados. A medida que el asentamiento creció y se estabilizó, surgieron nuevos deseos y aspiraciones, lo que llevó a la valoración de la madera para las rejas o las botellas de plástico para la decoración. Estos cambios dan cuenta del carácter experimental e instrumental de los objetos de Capri y de la creatividad de quienes les asignan valor. La invitación de Zimmermann a estudiar lo que las personas valoran en lugar de los valores en sí mismos, siguiendo a Amartya Sen (1987, 2002), resulta especialmente instructiva. En Pueblo Nuevo, el valor surge en un contexto marcado por el empleo precario, las crisis

hídricas, las sequías prolongadas, el estigma social y las historias de migración y desplazamiento.

Para concluir, este capítulo propuso un acercamiento a las prácticas alternativas en torno a la recuperación de residuos llevada adelante por una comunidad guaraní. Si bien es cierto que a lo largo del capítulo no me detuve en la manera en que la comunidad se autopercibe, ni su retórica en tanto comunidad indígena perteneciente a un pueblo originario, adopté un enfoque praxeológico que, a través de las interacciones y la materialidad muestra que la relación de las familias con el basural no se puede entender sin tomar en cuenta la exclusión, marginalización, y la tensión racial que anida en el corazón de Tartagal. Busqué resaltar la capacidad de hacer y de aspirar de familias como la de Josefa, cuyas *capabilities* desafían la imagen inicial del basural como un simple lugar de miseria y revelan un mundo complejo y dinámico, moldeado no solo por la supervivencia, sino también por juicios prácticos, aspiraciones y la redefinición persistente del valor.

Bibliografía

- Appadurai, A. (2004). The Capacity to Aspire: Culture and the Terms of Recognition. En V. Rao & M. Walton (Eds.) *Culture and Public Action* (pp. 59-84). Stanford University Press.
- Auyero, J., & Swistun, D. (2006). Tiresias en Villa Inflamable. Hacia una cronografía de la dominación. *Cuadernos del CISH*, 19(20), 15-45.
- Becker, H. S. (1982). *Art Worlds*. Berkeley: University of California Press.
- Becker, H. S. (1963). *Outsiders: Studies in the Sociology of Deviance*. The Free Press.
- Benclowicz, J. D. (2011). Aportes para la historia del norte de Salta. Conformación y desarrollo de las localidades de Tartagal y General Mosconi durante la primera mitad del siglo XX. *Andes*, 32(1), 1-24.

- Benclowicz, J. D. (2005). Notas sobre la formación y el desarrollo del movimiento de trabajadores desocupados de Tartagal-Mosconi (provincia de Salta, Argentina). Partidos, movimientos y alternativas políticas en América Latina y el Caribe. Programa Regional de Becas CLACSO.
- Blumer, H. (1982). *El interaccionismo simbólico. Perspectiva y método*. Ed. Hora.
- Bolsi, A., & Meichtry, N. (2006). Territorio y pobreza en el Norte Grande argentino. Scripta Nova. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales, 10(218), 1–20.
- Cefaï, D., Berger, M. Carlier L. and O. Gaudin. (2024). *Écologie humaine. Une science sociale des milieux de vie*, Saint-Étienne, Creaphis.
- Cefaï, D. (2013). ¿Qué es la etnografía? Debates contemporáneos. Primera parte. Arraigamientos, operaciones y experiencias de la encuesta. *Persona y Sociedad*, 17(1), enero-abril.
- Dachevsky, 2022. El retroceso de la propiedad nacional del petróleo en Argentina. *Trabajo y Sociedad*, 38(23), 241-260.
- De Munck, J., & Zimmermann, B. (2014). Evaluation as Practical Judgment. *Human Studies*, 38(1), 22-45.
- Dewey, J., (1939). *Theory of Valuation*. The University of Chicago Press.
- Dewey, J. (1993). *La reconstrucción de la filosofía*, Planeta, Buenos Aires
- Dewey, J. (1916). *The Middle Works. Essays in Experimental Logic*. Southern Illinois University Press.
- Dewey, J. (1981). Experience and Nature. In J. Dewey (Ed.), *John Dewey: The Later Works* (Vol. 1, pp. 1925-1953). Southern Illinois University Press.
- D'Hers, V. (2014). Los basurales a cielo abierto y su invisibilización: ¿Un traspaso de costos a futuro?. *Norus. Revista Novos Rumos Sociológicos*, 2 (2), 1-11.
- Dietram A. Scheufele & David Tewksbury (2007) Framing, Agenda Setting, and Priming: The Evolution of Three Media Effects Models, *Journal of Communication* 57, 1, 9–20
- Diz, A. (2016). *The Afterlife of Abundance: Wageless Life, Politics, and Illusion Among the Guaraní of the Argentine Chaco* [Doctoral dissertation, London School of Economics and Political Science].

- Diz, A. (2020). Healing the Institution: Conflict and Democratic Sovereignty in an Indigenous Community of the Argentine Chaco, *Geoforum*, 117, 173-182.
- Douglas, M. (1966). *Purity and Danger: An Analysis of Concept of Pollution and Taboo*. Routledge.
- Durkheim, É., & Mauss, M. (1901–1902). De quelques formes primitives de classification. Contribution à l'étude des représentations collectives. *L'Année sociologique*, 6.
- Fischer, B. (2014). A Century in the Present Tense: Crisis, Politics, and the Intellectual History of Brazil's Informal Cities. In B. Fischer, B. McCann, & J. Auyero (Eds.), *Cities from Scratch: Poverty and Informality in Urban Latin America* (pp. 9–67). Durham, NC: Duke University Press.
- Flores Klarik, M. (2023). Colonización y urbanización del Chaco salteño: Conflictos territoriales indígenas en perspectiva histórica. *Andes. Antropología e Historia*, 34(1), 288–324.
- Gago, V. (2014). La razón neoliberal: Economías barrocas y pragmática popular. Tinta Limón.
- Gibson-Graham, J. K. (2006). *A Postcapitalist Politics* (New ed.). University of Minnesota Press.
- Giddens, A. (1976). Introduction. In Weber, M, *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism*. (ed. 2005, pp. vii-xxiv). Routledge.
- Goffman, E. (1974). *Frame Analysis: An Essay on the Organization of Experience* (Vol. 3). Harper & Row.
- Goffman, E. (1963). *Stigma: Notes on the Management of Spoiled*. Simon & Schuster Inc.
- Goldstein, D. M. (2016). *Owners of the Sidewalk: Security and Survival in the Informal City*. Duke University Press.
- Hirsch, S. (2004). Ser Guaraní en el noroeste argentino: variantes de la construcción identitaria. *Revista De Indias*, 64(230), 67–80. <https://doi.org/10.3989/revindias.2004.i230.411>
- Hobson, B. and Zimmermann, B. (2022) Pathways in Agency and Alternative Futures: Projectivity, Temporality and the Capability to Aspire. *Working Paper Series N 41*. Stockholm, Sweden: Stockholm University Department of Sociology.
- Latour, B. (1993). *We Have Never Been Modern* (C. Porter, Trans.). Harvard University Press.

- Lorenzetti, M. I. (2013). Experiencias de sufrimiento, memorias y salud en las comunidades wichí de Tartagal. *Cuadernos de antropología social*, (38), 131-151.
- Meccia, E. (2019). Una ventana al mundo. Investigar biografías y sociedad. In E. Meccia. (Dir.), *Biografías y sociedad. Métodos y perspectivas*. Ediciones UNL. Eudeba.
- Merleau-Ponty Maurice (1945), *Phénoménologie de la perception*, Paris, Gallimard.
- Millar, K. M. (2018). *Reclaiming the Discarded: Life and Labor on Rio's Garbage Dump*. Duke University Press.
- Perelman, M. (2008). Democracia, trabajo y ciudadanía: reflexiones a partir del caso argentino. *Sociológica (México)*, 23(67), 191-217.
- Quéré, L. (2024). *Self-action*, Interaction et Transaction. Comment 'écologiser' les sciences sociales ?, chapitre 2 in Louis Quéré, *Au commencement était l'acte*, Bibliothèque de Pragmata, 3, en ligne.
- RIAR. (s.f.). *Corrientes de residuos*. Red de Investigación y Acción sobre los Residuos.
- Riccardi, A. (2015). *El desarrollo histórico de las exploraciones petroleras en la Argentina* [Presentación de Power Point]. Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires.
- Sapir, E. (1912). Language and Environment. *American Anthropologist*, 14(2), 226-242.
- Sen, A. (2002 [1987]). *Éthique et économie : et autres essais*. Presses Universitaires de France.
- Nussbaum, M., & Sen, A. (1993). *The Quality of Life*. Oxford: Clarendon Press.
- Schalkowski, N., & Braig, M. (2023). Informal Work: A Relational Category. In L. Herzog & B. Zimmermann (Eds.), *Shifting Categories of Work: Unsettling the Ways we Think About Jobs, Labor, and Activities* (pp. 119-133). Routledge.
- Sorroche, S. y Rodríguez, V. M. (2024). Gestión de residuos reciclables secos. In *¿Qué hacer con los residuos? Desafíos y propuestas para gestionar distintos materiales: secos, orgánicos, aceites, electrónicos, baterías, pilas, neumáticos, medicamentos, textiles y de construcciones*, pp. 39-98, Mariana Saidón y Santiago Sorroche Eds. Teseo, Buenos Aires.
- Svampa, M. (2005). *La sociedad excluyente*. Taurus.

- Svampa, M. (2008). Argentina: una cartografía de las resistencias (2003-2008) Entre las luchas por la inclusión y las discusiones sobre el modelo de desarrollo. *OSAL*, 24, 17-49.
- Uexküll J. V. (2010 [1934]. *Milieu animal et milieu humain*, Paris, Payot Rivages.
- Zimmermann, B. (2018). From Critical Theory to Critical Pragmatism: Capability and the Assessment of Freedom. *Critical Sociology*, 44(6), 937–952.
- Zimmermann, B. (2024). The Capability to Aspire: An Agentive Model. *Journal of Human Development and Capabilities*, 25(4), 518–536.

CAPÍTULO 3

Los ingresos de los hogares como un ejercicio especulativo. Una aproximación etnográfica a la opacidad de los ingresos en la vida económica de los hogares con ingresos moderados en Chile

Lorena Pérez Roa

Introducción

Conocer los ingresos del hogar, es un supuesto base de todas las mediciones de estratificación social y de los programas de intervención social en un estado que focaliza recursos. Es lo que se entiende, como la base para poder definir los mínimos con los que un hogar puede resolver sus necesidades básicas y de acceso a los servicios. Saber lo que uno ingresa es la clave para poder distribuir de manera adecuada y eventualmente iniciar un plan de ahorro. Por ende, la primera e incómoda pregunta que se suele hacer al iniciar un programa de intervención en esta materia es: me podría decir, de la manera más precisa posible ¿cuáles son los ingresos del hogar?

Durante los años que llevamos abordando etnográficamente estos temas, muy pocas han sido las personas que han

logrado responder a esta pregunta con claridad. En general, la respuesta es esquiva o definitivamente vaga: “*depende del mes*”, “*yo creo que aproximadamente gano*”, “*¿contando la línea de crédito?*”. Si bien, las dificultades para estimar los ingresos no son novedosas, puesto que es una pregunta que genera alta deseabilidad social, la falta de certeza sobre los ingresos que se perciben da cuenta de dos elementos que, a nuestro juicio, deben prestarles mayor atención: 1) las formas difusas y variadas que constituye el ingreso del hogar 2) la penetración de las finanzas en la percepción de ingresos y 3) el desacople entre ingresos y patrones de consumo.

Según la Encuesta Presupuestaria Familiares (Instituto Nacional de Estadísticas de Chile [INE], 2023) el ingreso disponible mensual promedio en Chile es de CLP \$1.413.349 (1587 USD, y el salario mínimo es de 607 USD), y se compone principalmente de ingresos disponibles del trabajo (ingresos del trabajo dependiente, independiente y otros) y minoritariamente de otras fuentes tales como los ingresos disponibles de jubilación, transferencias, propiedades y activos financieros. Si bien, el componente principal de ingresos de los hogares en Chile es el disponible por el trabajo, los resultados dan cuenta de que la participación aumenta conforme aumenta el quintil de ingresos. Es decir, los hogares más pobres son quienes reportan menores ingresos salariales y un mayor grado de diversidad de fuentes de ingresos. En efecto, aquellos hogares que no cuentan con ingresos fijos presentan mayores dificultades para lograr obtener los ingresos necesarios para asegurar su reproducción social. Muchos hogares deben activar “estrategias de rebusque” (Pérez Orozco, 2019) para poder resolver la tensión permanente de los requerimientos para la subsistencia a corto plazo (urgencias, proyectos económicos a corto/mediano plazo, o pagar alguna deuda) y las obligaciones y expectativas económicas que los hogares proyectan a mediano plazo (vacaciones, casa propia, regalos, etc.,) (Pérez-Roa y Cuadra, 2024). En este sentido, la pregunta

por los ingresos del hogar, más que responder a un indicador estático y estándar es, para muchos hogares chilenos, un desafío cotidiano que los hogares deben saber enfrentar.

Esa dificultad para precisar los ingresos es el punto de partida de este capítulo. Lo que busco mostrar, a partir de los trabajos etnográficos realizados en el último tiempo, es que los ingresos no operan como un monto estable, sino como un proceso en movimiento hecho de estimaciones, promesas y ajustes cotidianos. En otras palabras, el “dinero de la casa” parafraseando a la antropóloga brasileña Eugenia Motta (2023) no es un concepto fijo ni un tipo de dinero específico, sino un estado transitorio y siempre en proceso de transformación. Está constantemente tensionado por necesidades inmediatas, juicios morales y expectativas, lo que genera incertidumbres y sospechas sobre si se respetarán las reglas y acuerdos implícitos. Así, el dinero de la casa es un proceso dinámico de “hacerse el dinero de la casa”, que refleja la fluidez y la incompletitud de las relaciones sociales y económicas en el entorno doméstico (Motta, 2023).

En cuanto a los datos que alimentan esta discusión, refieren a un proyecto ANID-Fondecyt N°1220039 (2022-2025) sobre las estrategias de movilización de recursos financieros y no financieros en hogares de ingresos moderados para afrontar distintos escenarios de incertidumbre, en tres regiones de Chile. Para ello, indagamos en sus conocimientos y prácticas financieras, en los apoyos que brindan y reciben de familiares y/o amigos, en las justificaciones éticas detrás de sus decisiones, y en las diferencias asociadas al género en la forma en que se administran y distribuyen los ingresos familiares. El trabajo de campo se realizó mediante el seguimiento a hogares durante tres años consecutivos, entrevistando cada 4-5 meses a la persona con mayor conocimiento sobre el manejo de los recursos familiares. Nuestra muestra se compuso de 40 hogares: 20 de Santiago, 10 de Talca y 10 de Gran Concepción. Las personas entrevistadas

poseen una amplia información sobre las estrategias de manejo de los recursos económicos domésticos. Todos los hogares tienen al menos un miembro inserto en el mercado formal del trabajo y con integrantes que dependen económicamente de quienes generan ingresos, entre los cuales se encuentran niños, niñas, adolescentes y adultos mayores.

El promedio de ingreso de los sostenedores del hogar es de un millón setecientos mil pesos y el ingreso per cápita de los hogares es de un millón de pesos aproximadamente. Esta condición económica los ubicaría en el cuarto quintil de ingresos en Chile. En este sentido, son hogares que se caracterizan por asegurar su bienestar en un equilibrio económico precario, apoyándose en prestaciones de políticas públicas no focalizadas y aquellas otorgadas por el mercado que —al estar condicionadas a su capacidad de pago— son de menor valor y calidad (Farías, 2019) y que enfrentan las incertidumbres económicas movilizándolo preferentemente recursos propios (Cataldi, et al., 2021; Lazarus y Luzzi, 2015). Eso implica que, desde la política pública se considera como hogares que no requieren beneficios estatales.

En este sentido, este capítulo busca aportar a la discusión sobre las formas en que los supuestos que moldean las nociones de ingresos en la política pública parecen construirse desde un criterio cada vez más alejado de la realidad económica concreta de los hogares. Las condiciones laborales, los modos de ingresos y la forma en que los hogares gestionan sus recursos económicos son zonas nebulosas para la elite política, que intenta reaccionar a través de ensayo y error fórmulas que les permitan delinear con mayor exactitud estas realidades económicas. Si nada cambia, seguirán persistiendo los errores de diagnóstico: sub y sobre coberturas al medir ingresos que no existen tal como se declaran; sobreendeudamiento encubierto y agotamiento de redes familiares; ineficiencias del gasto público por instrumentos que no capturan variabilidad; y estrés financiero crónico que erosiona bienestar y participación laboral,

con particular peso en hogares con cuidados. Abrir la discusión desde las ciencias sociales y en particular a partir de enfoques etnográficos, permite mostrar que las finanzas no solo son un recurso disponible para los hogares, sino que también se transforman en prácticas de cuidado, obligación y aspiración dentro de los hogares (Zaloom y James, 2023).

¿Qué constituye el ingreso del hogar?: algunos puntos sobre su variabilidad e intermitencia.

“Felipe ¿nos puede decir cuál es tu monto aproximado de ingreso? Es que depende, nos dice. ¿Depende de qué?, le preguntamos: de los bonos de desempleo, es decir, de cuantos clientes logre retener en el banco”.

Felipe trabaja hace más de quince años en un banco, en atención al cliente. Según nos cuenta, a pesar de que tiene un trabajo fijo, gran parte de su salario es variable, es decir, depende de su rendimiento mensual. Es por ello por lo que le es muy difícil saber lo que recibe mes a mes. Por eso prefiere, jugar, como él dice, “con el aproximado”

Según las encuestas que observan los presupuestos de los hogares en Chile (INE, 2023), los ingresos de los hogares moderados se componen principalmente de ingresos salariales, a diferencia de los hogares más pobres cuyos ingresos dependen de las transferencias del Estado. Sin embargo, aquellos como Felipe, que trabajan el sector bancario y financiero, reciben aproximadamente el 40% de sus ingresos de forma variable. Este primer caso nos introduce al problema de los salarios con componentes contingentes y abre la discusión sobre cómo los hogares estiman —y declaran— su “ingreso” en contextos de incertidumbre mensual.

Ahora bien, la especulación de los ingresos no solo se explica por la estructura salarial, sino también por la frecuencia y relevancia de las ayudas económicas que los hogares

reciben de otras unidades domésticas, así como también de los montos de ayuda que entregan a otros familiares. Este segundo eje introduce el papel de los cuidados y de los apoyos interhogares en la conformación del ingreso disponible.

Valeria, por ejemplo, es profesora de historia y sus dos padres son personas mayores que requieren cuidados permanentes. La madre padece de Alzheimer desde el año dos mil trece. Sin embargo, después de la pandemia su situación se empeoró y requiere cuidados permanentes. Valeria tiene dos hermanas, con ellas mantiene un fondo común, cada una de ellas contribuye con un monto fijo y una vez cada tres meses se rotan los costos de los medicamentos y los pañales. En nuestra última entrevista, Valeria nos cuenta que la situación económica la tiene desbordada: *“yo no gano mal, para ser profesora tengo un sueldo alto, pero este sueldo no resiste, porque es mucha plata la que se nos va en cuidar a mis papás. Yo no dispongo de todo lo que gano. Yo debería jubilar pronto, pero en esta situación ¿qué posibilidad tengo de dejar de trabajar? Ninguna”*, nos dice.

Cristina tiene 42 años y vive con su hija de 16 en un departamento arrendado en Concepción. Ella es nutricionista y trabaja en un servicio de salud. Cristina dice recibir un salario “justo”, con el que podría hasta incluso ahorrar. Sin embargo, en la pandemia, la hija de Cristina comenzó a desarrollar una depresión severa, lo que cambió radicalmente su día a día y su orden financiero. Según nos cuenta, el tratamiento de su hija le consume más del 50% de sus ingresos mensuales. Por ello, tiene que recurrir a su pareja, familiares y amigos para poder llegar a fin de mes. Lo que en un principio Cristina pensó como una ayuda puntual para asumir un gasto específico, con el tiempo, se han transformado en ingresos permanentes para una situación que ella ya asume como permanente.

¿Se deben entender estos casos de cuidado como gastos?
¿Qué los diferencia de otros gastos variables, como el aumento

de la cuenta de luz en invierno o los gastos escolares a principios de año? Parece que la diferencia radica en el carácter intergeneracional de los cuidados hacia miembros que pueden no residir en el hogar. En algunos casos, estos cuidados inicialmente se presentan como gastos únicos, pero luego se transforman en gastos fijos. O bien, estos cuidados son comunes, generando incertidumbre si alguien no asume su parte correspondiente. Independientemente de la respuesta, las presiones económicas del cuidado vuelven aún más porosa la pregunta ¿cuál es el dinero que los hogares disponen? Lo que muestran estos casos es sencillo: cuando el salario no alcanza o la necesidad persiste, es la familia la que sostiene y, al mismo tiempo, la que se sobrecarga.

Estos materiales no idealizan la familia: la muestran como un soporte indispensable y, a la vez, como un lugar de presión. La solidaridad funciona, pero no es gratuita: redistribuye tiempo y dinero, difiere planes y acumula cansancio. Responder a las necesidades económicas de un pariente —como ocurre en los cuidados prolongados— puede, sobre todo para las personas más jóvenes, poner en “pausa” proyectos de autonomía y empujar a vivir “al día” generando una sensación de “dar vueltas en círculos” (Jovanović, 2025).

Estos tres casos que les he presentado dan cuenta de la variabilidad en la estructura de los ingresos de los hogares. La intermitencia opera por vías simultáneas: (a) variaciones intra-mes (horas extra, comisiones, propinas); (b) variación inter-mes (bonos de desempeño, metas anuales, contratos temporales); (c) entradas no salariales (apoyos familiares, transferencias y otras entradas que pasan de esporádicas a regulares); (d) eventos de cuidado que convierten un gasto extraordinario en un compromiso fijo y compartido. La combinación de estas vías produce bandas de ingreso que los hogares manejan como mínimos y máximos, más que como un monto único.

Para enfrentar la inestabilidad, las familias trazan umbrales: “lo mínimo para sostener arriendo y básicos”, “lo que

no puedo dejar de pagar”. Sobre ese piso, agregan o detraen ítems según el mes. El cálculo incluye expectativas (¿entrará el bono?, ¿aportará la hermana?, ¿habrá pedidos?), de modo que el ingreso se anticipa y se corrige con información parcial.

De esta manera, cuando un formulario exige “ingreso mensual del hogar” en cifra única, el hogar responde con el valor que mejor reduce el riesgo: declarar poco para evitar perder beneficios, o declarar más para acceder a crédito. Esto genera sub y sobre coberturas y distorsiona los instrumentos de focalización. Definir la situación económica del hogar solo con base en lo considerado como “ingreso fijo” aporta una visión limitada. En la línea de las recomendaciones de la Comisión Asesora de Expertos para la Actualización de la Medición de la Pobreza (2025) centrarse exclusivamente en ingresos monetarios subestima otras problemáticas estructurales y culturales que afectan la situación socioeconómica. La medición insuficiente de ingresos no solo complica las mediciones de estratificación social, sino que también limita el conocimiento sobre la heterogeneidad de las familias y sus estrategias de supervivencia. En este sentido, los estudios longitudinales resaltan la importancia de seleccionar y ampliar muestras para captar la complejidad de los ingresos y apoyos intergeneracionales, explicando así la dinámica cambiante de los hogares y la implementación de políticas (Muñoz, 2020; León, 2018).

La penetración de las finanzas en la percepción de ingresos disponibles de los hogares: el crédito que ensancha el ingreso

Angela (52 años, Concepción) trabaja como analista financiera en un centro médico. Trabaja hace más de 15 años en el mismo lugar. Comenzó siendo recepcionista y fue ascendiendo hasta llegar a ser “la mano derecha” del gerente. Angela es de las entrevistadas que más ha disfrutado el proceso de

seguimiento y el uso del “diario de vida económico”. Los diarios de vida económicos son repertorios etnográficos de los activos económicos que los hogares fueron registrando durante todo el proceso de seguimiento. Los usos de estos cuadernos dependen de cada hogar participante y dan cuenta de las planificaciones económicas, los gastos, ingresos y las transferencias realizadas. Cada entrevista llega contándonos cuánto subieron los huevos este mes o lo difícil que ha sido conseguir café barato en su ciudad. Angela es una mujer que registra cada gasto y conoce “al dedillo” los precios y su variabilidad. A pesar de presentarse como una mujer “responsable financieramente”, al inicio de nuestra última entrevista nos dice: *“Mi hijo me preguntó, mamá ¿cuándo le vas a decir a la entrevistadora que vives endeudada? Pero mi marido, lo corrigió y le dijo: no, tu madre no está endeudada, ella paga todos los meses su línea de crédito. Tú mamá no le debe nada a nadie”* (Angela, entrevista 4. Concepción)

Angela me dice, que ella ocupa regularmente su línea de crédito para sus gastos mensuales: *“pero nunca me paso del monto que tengo y además lo pago sagradamente a finales de mes así que no tengo ninguna deuda”*, nos explica. Para ella la línea de crédito es lo que hemos denominado en otros trabajos como “extensión salarial”.

¿Qué haría yo sin mi línea de crédito? Nos dice Fernanda (45 años). Ella tiene un emprendimiento de cortinas y según nos cuenta “no hay un mes igual que el otro”, pero lo que se mantiene igual o se incrementa son los gastos. *“Yo gasto lo que tengo disponible: línea de crédito y ahora un poco más la tarjeta de crédito que tienen menos intereses y ahí voy bicicleteando todos los meses (...)”*. Para ella, la línea de crédito es lo único que le permite sostener gastos fijos en un contexto de ingresos variables.

La primera vez que nos encontramos con Alejandro (32 años, administrador público) fue en la casa de su mamá en Santiago. Estaba a pocos días de irse a vivir al sur de Chile

por razones de trabajo. Ya en nuestra segunda entrevista vivía ahí. Sin embargo, en la tercera se había vuelto a cambiar de ciudad, porque quedó desempleado y se fue a vivir a la casa de su novia. En estos dos años los ingresos de Alejandro han variado considerablemente. Ha pasado de tener “*suelo de gerente, a sueldo de obrero*”. Según nos cuenta la única forma de pasar por esta inestabilidad financiera es haciendo un “uso estratégico del crédito”. Esto implica movilizar distintos tipos de estrategias que le permitan estabilizar sus ingresos. Así nos cuenta que adapta sus gastos a los beneficios de la tarjeta de crédito, o paga sus deudas con las tarjetas de crédito y así disminuye el monto de las cuotas que paga mensualmente. “*Gracias al sistema financiero he podido tener libertad de movimiento a pesar de no tener ingresos algunos meses*”, nos dice.

A pesar de las enormes diferencias en su situación laboral y familiar, los tres casos representan distintas formas en que los instrumentos financieros, en particular el crédito, penetran la percepción de los ingresos. En estos relatos, el crédito ingresa en la contabilidad cotidiana como parte de “lo disponible” y ensancha la percepción de ingreso mensual. En el caso de Angela opera como extensión salarial: el cupo que se usa y repone borra la frontera entre salario y deuda que se paga al final de mes, pero es un ejercicio tan natural que borra la imagen de lo que se define y se entiende como una deuda. En el de Fernanda, el crédito estabiliza ingresos variables y permite “bicicletear”, convirtiendo gastos fijos en cuotas y suavizando el consumo cuando “no hay un mes igual que el otro”. En el de Alejandro, el “uso estratégico” del crédito sustituye transitoriamente al salario, arbitra cuotas y organiza el tiempo de pago para sostener movilidad y continuidad de vida.

La literatura sobre financiarización doméstica ha documentado estos cruces entre instrumentos financieros y presupuesto del hogar, mostrando cómo el crédito habilita accesos y, a la vez, reordena prioridades y tiempos de pago (Pollard, 2013; Gago & Roig, 2019; Roberts, 2016). En esta línea,

se ha observado el crédito como estrategia de “consumption smoothing” que permite hacer “malabares”, mantener a los acreedores relativamente satisfechos y sostener un nivel de vida básico, con riesgos de acumulación y sobrecarga si su uso se prolonga (Seefeldt, 2015; Montgomerie y Tepe-Belfrage, 2016; Lewin-Epstein et al., 2016; James, 2019). Evidencia reciente muestra además que hogares de ingresos medios recurren a productos de mayor costo para maniobrar el corto plazo y proteger su historial, tratando el ingreso como flujo incierto más que como base estable (Lamb, 2024). En el contexto chileno, diversos trabajos describen la deuda como un “activo” para maniobrar la brecha entre costo de vida, ingresos percibidos y cargas financieras; no solo circula dinero, también circulan instrumentos como cheques y tarjetas (Han, 2011; Marambio-Tapia, 2018; Pérez-Roa y Gómez Contreras, 2019; Pérez-Roa, 2020; Ossandón et al., 2017). Todo ello sugiere que la financiarización no es un proceso lineal de dominación, sino un campo de negociación en el que los hogares ejercen agencia en condiciones estructuralmente desiguales, anticipando ingresos futuros y reorganizando el presente con crédito, con vulnerabilidades que se intensifican en escenarios de crisis y fluctuación (Zaloom y James, 2023).

El desacople entre ingresos disponibles y patrones de consumo: cuando el gasto manda

“¿Cuánto es lo que haces al mes, Mónica? La verdad no sé. Conozco el monto mínimo de lo que tengo que hacer para pagar el arriendo y los gastos básicos, y en función de ese monto me voy moviendo”.

La primera vez que nos encontramos con Mónica, todavía le quedaban algunos ahorros de la ayuda que dio el gobierno para contener la crisis de la pandemia, así que estaba tranquila. Sin embargo, con el tiempo, los ingresos de su taller de costuras comenzaron a ser insuficientes para responder a

sus gastos básicos de arriendo, comida y transporte. A pesar de que ha logrado bajar sus gastos al mínimo posible, tener que hacer el dinero para pagar el arriendo es una preocupación permanente. Mónica no tiene tarjetas de crédito y dice que prefiere no pedir ayuda económica a su familia, así que como sabe cuál es el monto básico que tiene que juntar, se las rebusca para encontrar otros trabajos esporádicos que le permitan alcanzar ese monto.

La situación de Mónica es relativamente similar a la de aquellos hogares entrevistados que perciben ingresos más bajos o que enfrentan gastos emergentes o pérdidas de empleo. Muchos hogares deciden realizar “pequeños negocios informales” o “emprendimientos” como una manera de maniobrar mejor la economía doméstica. Aurora, por ejemplo, tiene un pequeño emprendimiento de repostería; Álvaro y su pareja hacen clases de baile; Amparo vende joyas; Cristina vende acuarelas; Paulina vende tejidos a pedido y Teresa hace bolsos de telas recicladas. Para ellos, sus ingresos salariales no son suficientes, y viven permanentemente en la presión de buscar nuevas fuentes de ingreso.

Según la Encuesta de Presupuestos Familiares (INE, 2023), la estructura de gastos promedio de los hogares en Chile, es porcentualmente mayor a los ingresos disponibles. Siendo los ítems alimentación, transporte y vivienda los principales destinos del gasto. En este sentido, que el gasto supere a los ingresos parece ser la realidad del promedio de la población.

Sin embargo, esta dinámica de presión del gasto en las economías domésticas está a su vez presente en aquellos hogares con ingresos superiores que han preferido “mantener sus niveles de consumo”, independientemente de las fluctuaciones en sus ingresos. Por ejemplo, antes de la pandemia la empresa del marido de Carmen quebró y se quedó sin ingresos. Sus tres hijas iban a colegios particulares y no podían seguir pagándolo. Como no estaban dispuestos a que sus hijas pagaran las consecuencias de esta situación,

las hermanas de Carmen se ofrecieron a pagarle el colegio a sus hijas. Según nos cuenta, durante ese tiempo se fueron a vivir al entretecho de un local comercial de una de sus hermanas. A pesar de que durante ese tiempo vivieron dependiendo de las ayudas de sus familias, decidieron mantener la vida de sus hijas: *“no estábamos dispuestas a sacarlas del colegio y meterlas a un colegio público: uno sabe que en eso se juega el futuro de sus hijos”* nos dice Carmen.

En su último trabajo Bandelj (2025) analiza como el dinero que los padres destinan a los niños refleja las transformaciones sociales y culturales de las familias estadounidenses, convirtiendo las finanzas en un campo de especulación financiera: *“hemos transformado los gastos de crianza a inversiones parentales”*. Este giro convierte los ingresos del hogar en capital a arriesgar donde las familias comienzan a operar bajo lógicas especulativas, ya que las decisiones económicas se justifican por la promesa de retornos futuros en capital humano.

La estructura de los ingresos de los hogares no está dada únicamente por el ingreso disponible: se configura, en gran medida, a partir de patrones y niveles de gasto que el propio hogar considera necesarios mantener. En la práctica, los hogares ajustan cómo y cuánto ingresan a sus necesidades y hábitos de consumo, priorizando la continuidad de su nivel de gasto según sus preferencias, obligaciones y aquello que definen como esencial. Este comportamiento se vuelve especialmente claro en contextos de inestabilidad laboral y bajos salarios: como plantean Lloyd y Horsley (2022), aún bajo esas condiciones los hogares continúan participando activamente en la cultura del consumo porque el consumo provee identidad, estatus y sentido de pertenencia. Así, el crédito desempeña una función estructural e ideológica al permitir sostener ese estándar de consumo, proyectando la ilusión de bienestar y pertenencia en medio de la precarización del trabajo y, al mismo tiempo, anclando los ingresos futuros a la preservación de esos niveles de gasto.

A partir de estos relatos y datos, el desacople se observa como una operación concreta: primero se fija un piso de gastos que no puede ceder (arriendo, alimentación, transporte, educación de los hijos) y luego se ajustan los ingresos para alcanzarlo, aun cuando ello implique multiplicar trabajos esporádicos, abrir “pequeños negocios” o sostener el consumo mediante apoyos familiares y crédito. En los hogares con menos ingresos, esto se traduce en buscar nuevas fuentes de entrada y rotar actividades para cubrir el mes; en los hogares que deciden mantener estándares de consumo, se activan redes familiares que financian partidas consideradas esenciales (como la educación), desplazando el ajuste desde el consumo hacia la composición del ingreso.

Así, los patrones de gasto preestablecidos ordenan el presupuesto y empujan estrategias que convierten el ingreso en una variable a producir: se intensifica la búsqueda de trabajos adicionales, se reprograman pagos y, cuando hay acceso, se recurre al crédito para suavizar o sostener niveles de vida. La noción de “inversión parental” (Bandelj, 2025) y la participación en la cultura del consumo (Lloyd y Horsley, 2022) ayudan a explicar por qué, aún ante inestabilidad, los hogares priorizan mantener ciertos consumos como apuestas sobre retornos futuros y como anclajes de identidad y pertenencia. De este modo, el desacople no es una anomalía puntual sino una forma recurrente de organización económica doméstica en la que el gasto guía y el ingreso corre detrás.

A modo de conclusión: desafíos pendientes ante ingresos inciertos

En conjunto, los relatos y la evidencia convergen en una escena nítida: **la economía doméstica se sostiene sobre ingresos inciertos, cuidados que reordenan prioridades y crédito que actúa como “extensión salarial” y puente de liquidez.** Bajo estas condiciones, el “ingreso disponible”

deja de ser un monto fijo para convertirse en un cálculo dinámico, especulativo y negociado mes a mes: se produce y ajusta combinando trabajos añadidos, pequeños emprendimientos, apoyos intergeneracionales y artefactos financieros; se preserva un piso de gastos que no puede ceder (arriendo, alimentación, transporte, educación) y se mantiene un estándar de consumo que funciona como anclaje identitario y como apuesta por retornos futuros, aún a costa de mayor exposición al riesgo. Así, prácticas hoy normalizadas —emprendimientos informales para cerrar el mes, “bicicleteo” de pagos, ayudas familiares recurrentes— alivian el corto plazo, pero también desplazan silenciosamente el umbral de lo que se entiende como “ingreso suficiente”, generando una disputa cotidiana por alcanzar una meta que se desajusta una y otra vez.

Este funcionamiento cotidiano dialoga con la dinámica de endeudamiento observada: los hogares ya no conciben el ingreso como flujo estable, sino como ejercicio de anticipación y apuesta. Como señalan Berisha y Meszaros (2018), se gasta hoy con la expectativa de ingresos futuros, y esas expectativas —a menudo demasiado optimistas— impulsan la demanda de crédito; el resultado puede ser una restricción de la movilidad ascendente y la consolidación de desigualdades, con ciclos de deuda que, incluso a nivel agregado, terminan debilitando la economía cuando la expansión del crédito se apoya en mejoras esperadas que no siempre se materializan. En ese marco, los hogares ejercen una “autonomía enredada” (Zaloom, 2019, como se citó en Zaloom y James, 2023): buscan independencia financiera, pero solo pueden sostenerla mediante dependencias cruzadas con bancos, Estado y redes familiares, que habilitan y a la vez condicionan las maniobras de corto y mediano plazo.

Estas constataciones tienen implicancias directas para la medición y para la política pública. La definición tradicional del “ingreso del hogar” como cifra única subestima la volatilidad, invisibiliza la presión económica del cuidado y deja fuera el papel estructural del crédito en la contabilidad

cotidiana. De allí que los instrumentos de focalización y las estadísticas de pobreza tiendan a producir sub y sobre coberturas, y a perder de vista la heterogeneidad de arreglos que efectivamente sostienen la vida diaria.

Incorporar estas capas —flujos variables, costos de cuidado, apoyos intergeneracionales, uso de instrumentos financieros— exige combinar evidencia cualitativa y cuantitativa y revisar supuestos de elegibilidad y seguimiento, de modo que la intervención pública reconozca cómo se produce el “ingreso” en contextos de incertidumbre. La urgencia es clara: políticas y métricas sensibles a esta complejidad permitirían reducir errores de cobertura, prevenir sobreendeudamiento evitable y orientar apoyos más pertinentes y oportunos.

Bibliografía

- Bandelj, N. (2025). The social life of money for children. *The British Journal of Sociology*, 1-21. <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1468-4446.13176>
- Berisha, E., & Meszaros, J. (2018). Household debt, expected economic conditions, and income inequality. *International Journal of Finance & Economics*, 23(3), 283–295. <https://doi.org/10.1002/ijfe.1616>
- Cataldi, L., Tomatis, F., & Costa, G. (2021). Even more in the pandemic and social emergency: for an individual welfare beyond the family and the community. *Community, Work & Family*, 25(2), 194–198. DOI:10.1080/13668803.2021.1911936
- Comisión Asesora Presidencial de Expertos para la actualización de la medición de la Pobreza. (2025). *Informe final recomendaciones* (Informe). Ministerio de Desarrollo Social y Familia, Gobierno de Chile.
- Farías, A. (2019). *Políticas sociales en Chile: Trayectorias de inequidades y desigualdades en la distribución de bienes y servicios*. Ediciones UAH.
- Gago, V., & Roig, A. (2019). *Las finanzas y las cosas. El imperio de las finanzas. Deuda y desigualdad*. Buenos Aires: Miño y Dávila.

- Han, C. (2011). *Life in debt: Times of care and violence in neoliberal Chile*. University of California Press.
- Instituto Nacional de Estadísticas de Chile. (2023). *Encuesta de Presupuestos Familiares* [Encuesta]. Instituto Nacional de Estadísticas de Chile. <https://www.ine.gob.cl/estadisticas/so-ciales/ingresos-y-gastos/encuesta-de-presupuestos-familiares>.
- James, D. (2019). Owing everyone: debt advice in the UK's time of austerity. *Ethnos*, 87(1), 1-19.
- Jovanović, D. (2025). The household and family as refuge? Relational dimensions of household debt management in an industrial town in Serbia. *Focaal—Journal of Global and Historical Anthropology*, (101), 13–24. <https://doi.org/10.3167/fcl.2025.1010102>
- Lamb, L. (2024). Examining payday loan utilization among households with mainstream credit access. *Journal of Financial Economic Policy*, 16(3), 330-347.
- Lazarus, J. & Luzzi, M. (2015). Les pratiques monétaires des ménages au prisme de la financiarisation. *Critique internationale*, 69(4), 9-19. DOI:10.3917/cii.069.0009
- León Ossandón, V. A. (2018). El trabajo informal en Chile, ¿opción voluntaria o condición obligada? *Revista de Economía Laboral*, 15(2), 57-89.
- Lewin-Epstein, N., & Semyonov, M. (2016). Household debt in midlife and old age: A multinational study. *International Journal of Comparative Sociology* 57(3), 151–172. doi:10.1177/0020715216653798
- Lloyd, A., & Horsley, M. (2022). Consumer culture, precarious incomes and mass indebtedness: Borrowing from uncertain futures, consuming in precarious times. *Thesis Eleven*, 168(1), 55–71. <https://doi.org/10.1177/07255136211053421>
- Marambio-Tapia, A. (2018). El peso de la financiarización de la vida diaria del nuevo proletariado de servicios en Chile. *Revista Central de Sociología*, 8(8), 82-101.
- Montgomerie, J., & Tepe-Belfrage, D. (2016). A Feminist Moral-Political Economy of Uneven Reform in Austerity Britain: Fostering Financial and Parental Literacy. *Globalizations* 13(6), 890–905.
- Motta, E. (2023). O que faz o dinheiro da casa. *Horizontes Antropológicos*, 29(66), e660602. <https://doi.org/10.1590/1806-9983e660602>

- Muñoz Saavedra, J. A. (2020). *Mujeres, pobreza y transferencias monetarias en Chile: Una investigación cualitativa longitudinal desde el enfoque de explicación por mecanismos* [Tesis doctoral, Universitat Autònoma de Barcelona]. Universitat Autònoma de Barcelona.
- Ossandón, J., Ariztía, T., Barros, M. & Peralta, C. (2017). Contabilidad en los márgenes. Ecologías financieras entre big y small data. *Civitas*, 17(1), 1-26.
- Pérez Orozco, A. (2019). *Subversión feminista de la economía: Aportes para un debate sobre el conflicto capital-vida*. Traficantes de Sueños.
- Pérez-Roa, L., & Cuadra Montoya, X. (2024). Sostener la vida en tiempos de incertidumbre: estrategias de aprovisionamiento de mujeres populares en Santiago de Chile. *Revista de Estudios Sociales*, (87), 79-96. <https://doi.org/10.7440/res87.2024.05>
- Pérez-Roa, L., & Gómez Contreras, M. (2019). Deuda, temporalidad y moralidad: Proceso de subjetivación de parejas jóvenes profesionales. *Psicoperspectivas*, 18(3), 1-12. <https://dx.doi.org/10.5027/psicoperspectivas-vol18-issue3-fulltext-1646>
- Pérez-Roa, L. (2020). Consumo, endeudamiento y economía doméstica: una historia en tres tiempos para entender el estallido social. En K. Araujo (Ed.), *Hilos tensados: Para leer el octubre chileno* (pp. 83-105). Editorial USACH.
- Pollard, J. (2013). Gendering capital: Financial crisis, financialization and (an agenda for) economic geography. *Progress in Human Geography*, 37(3), 403-423.
- Roberts, A. (2016). Household debt and the financialization of social reproduction: Theorizing the UK housing and hunger crises. En S. Soederberg (Ed.), *Risking capitalism* (Vol. 31, pp. 135-164). Emerald Group Publishing Limited.
- Seefeldt, K. S. (2015). Constant Consumption Smoothing, Limited Investments, and Few Repayments: The Role of Debt in the Financial Lives of Economically Vulnerable Families. *Social Service Review*, 89(2), 263-300. doi:10.1086/681932
- Zaloom, C., & James, D. (2023). Financialization and the household. *Annual Review of Anthropology*, 52, 399-415. <https://doi.org/10.1146/annurev-anthro-052721-100947>

CAPÍTULO 4

Economías populares, trabajo callejero y conflictividad en el centro de San José, Costa Rica (1980-1998)

Carlos Izquierdo Vázquez

Introducción

La crisis económica que estalló en 1980 impactó en un incremento del desempleo, el subempleo y la pobreza. Ante esto, las ventas estacionarias y ambulantes se expandieron rápidamente, como una salida coyuntural frente a la falta de trabajo, los salarios bajos y la inestabilidad laboral de los sectores populares. Estas actividades se mantuvieron y crecieron durante la aplicación de las reformas de ajuste estructural y apertura económica y fueron decisivas para numerosas personas como medio de sobrevivencia.

La exclusión social fue la “nueva cuestión social” del fin del siglo XX, como consecuencia de “la crisis de los mecanismos de integración que conoció el capitalismo de posguerra” y “la crisis del trabajo asalariado” (Schettini y Sarmiento, 2000, p. 99). Numerosas personas engrosaron los trabajos ocasionales, sin horarios ni ingresos fijos o

transitaban entre una labor y otra con frecuencia. El trabajo de menores de edad también tuvo un incremento.

Las personas vendedoras de las calles, como parte de los sectores populares, no han sido siempre las perdedoras o las víctimas de la globalización. Más bien han sido actores bajo las políticas de desregulación; buscaron también el aprovechamiento y la gestión de la interconexión entre diferentes partes del mundo, protagonizando una “globalización desde abajo” con “entrelazamientos transpacíficos, redes sociales y combinación de prácticas económicas informales y formales” (Braig y Göbel, 2013, p. 59).

Los actores económicos populares fungieron como “hacedores de lo global”, principalmente en relación con la producción de China y el sureste asiático, “tensionando las reglas que rigen la circulación de mercancías y los pasajes fronterizos, las reglas que regulan la propiedad intelectual sobre productos y marcas y las licencias de ventas y uso del espacio” (Rabossi y Tassi, 2023, pp. 37-38).

La mayor parte de las personas estaba relacionada con la “globalización desde abajo”, en vez de la globalización hegemónica (Mathews y Alba, 2021). Participaron en flujos de bienes y personas, vinculados con sumas de dinero relativamente pequeñas y transacciones informales. Alba y Braig (2012) indican que “sin esos flujos migratorios y mercantiles, los consumidores de bajos recursos de todas partes no podrían acceder a esta parte de la producción mundial” (p. 130).

La noción de economía popular (EP) ha tenido fines reivindicativos y emancipatorios, para visibilizar la creatividad y el valor de producción de las organizaciones económicas populares. Su principal expresión ha sido el trabajo por cuenta propia de muchas personas trabajadores que producen o comercializan bienes y servicios en pequeña escala en espacios públicos y privados. Maldovan (2018) indica que su aporte fue que

Hizo hincapié para pensar estos emprendimientos como vías de inclusión social desde una mirada que recupera las capacidades y habilidades productivas de las personas, construyendo sujetos productivos y creativos que adquieren grados crecientes de autonomía y capacidad de trabajo en equipo (p. 44).

Había un sector antiguo de personas vendedoras estacionarias y ambulantes de artículos diversos, lotería, periódicos, golosinas y algunos platillos. Empero, hubo otro sector de personas vendedoras que adquirieron mayor visibilidad, tuvieron mayor protagonismo y fueron considerados como amenazantes debido a su resistencia a marcharse de las vías públicas. Estaba integrado principalmente por las personas comerciantes de “chucherías”, “tiliches”, “baratijas” y las personas comerciantes de frutas, hortalizas y raíces que proliferaron en diversos lugares del centro de San José. También crecieron las ventas diurnas y nocturnas de alimentos preparados en el sitio, artesanías y *souvenirs* (principalmente en la Plaza de la Cultura en San José) y en menor medida, objetos usados o de segunda mano.

Los “tilicheros” se localizaron principalmente en la Avenida Central y sus alrededores, así como en las cercanías de algunas tiendas grandes, como La Gloria y El Globo. Usualmente ofrecían productos importados y de bajo costo, algunos de los cuales variaban según la época del año. En determinadas fechas (como el Día de la Madre y diciembre) su oferta variaba y sus ventas se incrementaban.

Las personas vendedoras de productos agrícolas comestibles incluyeron frutas, raíces y hortalizas frescas. Generalmente se ubicaban en algunas esquinas, cerca de los mercados Central y Borbón y en la calle 8. La diversidad y los precios podía oscilar a lo largo del año, principalmente con base en la oferta. Algunos vendedores y vendedoras también comercializaban frutas partidas o peladas, lo cual no estaba permitido por el Ministerio de Salud (MS) y generó

roces con la Municipalidad de San José (MSJ), dado que esta última no tenía la potestad para sancionar los incumplimientos sanitarios ni velaba porque las ventas fueran de frutas enteras únicamente.

En este trabajo se postula que la globalización desde abajo también comprende una amplia gama de establecimientos comerciales en los que se ofrecen las mercaderías. Esta dinamizó enormemente el sector callejero, nutrido con el grueso de personas desempleadas y jóvenes. Este colectivo en gran medida se abocó al comercio de bienes finalizados en las vías públicas.

Se plantea que la EP fue una especie de válvula de escape ante el desempleo y un mercado laboral urbano que no proveía el trabajo suficiente ni las condiciones salariales para un amplio sector de población ávido de una relativa independencia para la generación de ingresos económicos y la satisfacción de sus necesidades familiares e individuales.

En este capítulo se analizarán las personas vendedoras en puestos fijos de “tiliches” y objetos diversos que trabajaban durante el año o en diciembre, así como quienes tenían a la venta productos agrícolas. Se considera a quienes carecían de patente municipal, por lo que operaban de manera informal y eran proclives a la expulsión, los decomisos, diversas sanciones y a la persecución policial.

La mayor parte de los puestos de ventas se concentraron en el centro de San José, por su cercanía con las paradas de autobuses, la concentración del sector comercial y la alta circulación de personas. Las fuentes consultadas son periódicos de circulación nacional, ya que dieron amplia cobertura a las ventas en espacios públicos; fungieron como voceros de diversos actores con posiciones antagónicas o convergentes y realizaron pequeñas entrevistas a las personas vendedoras.

El período de análisis empieza en 1980, con el estallido de la crisis económica en Costa Rica, que aumentó la pobreza, el trabajo informal y el desempleo. Esto fue clave en la

movilización de vendedores para que su actividad se legaliza y se derogara la ley de Regulación de Ventas Ambulantes en Costa Rica (ley 4769 de 1971). Finaliza en 1998, cuando se inauguró el Mercado del Paso de la Vaca, como el principal proyecto municipal para solucionar las ventas en los espacios públicos. Con esto, gran cantidad de vendedores y vendedoras se trasladaron en pos de un mejor futuro.

Características de las ventas y de las personas vendedoras de “tiliches” y productos agrícolas frescos

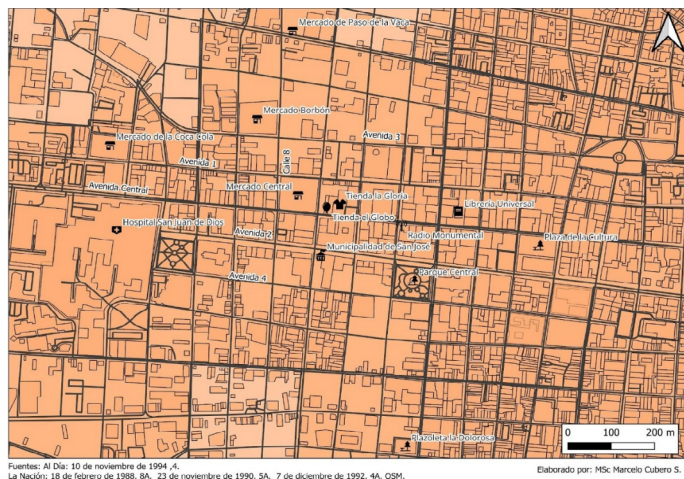
La Ley 4769 de 1971 limitó las ventas callejeras a sitios específicos del centro de San José; prohibió casi todas las ventas y creó el mercado de la Coca Cola para que se trasladaran quienes laboraban en las calles. No todas las personas vendedoras se reubicaron, surgieron nuevas personas comerciantes y algunas retornaron a las calles debido a que no se adaptaron al mercado o porque vendieron sus derechos.

Algunas ventas gozaban de cierta permisividad, como las de flores, periódicos, lotería y chances. También había un sector antiguo de vendedores de “tiliches” (Aguilar, 1989, p. 62), productos agrícolas, golosinas y otros bienes en diversas partes del centro de San José, principalmente en la Avenida Central y cerca del Mercado Central (figura 4.1).

El derecho al trabajo fue la principal reivindicación de varias protestas en 1980 y 1981 por parte de comerciantes callejeros, para que se derogara la ley 4769. En la Asamblea Legislativa, la mayoría apoyó los reclamos por el otorgamiento de patentes para legalizar su estatus y acabar con las detenciones y el cobro de multas. La ley fue derogada en 1981 y se aprobó la Ley de Patentes para ventas ambulantes y estacionarias en las vías públicas (ley 6587).

Figura 4.1

Sitios comerciales y circulación de personas vendedoras callejeras en el centro de San José



Fuentes: Al Día: 10 de noviembre de 1994, 4. La Nación: 18 de febrero de 1988, 8A; 23 de noviembre de 1990, 5A; 7 de diciembre de 1992, 4A. OSM.

Elaborado por: MSc Marcelo Cubero S.

Nota. Fuentes: Al Día: 10 de noviembre de 1994, 4. La Nación: 18 de febrero de 1988, 8A; 23 de noviembre de 1990, 5A; 7 de diciembre de 1992, 4A. OSM. Elaborado por Marcelo Cubero S.

La actividad se oficializó el 1 de julio de 1981. Las municipalidades quedaron encargadas de otorgar patentes para las ventas ambulantes y estacionarias en las vías públicas. Empero, la cantidad de patentes fue limitada y las disputas espaciales, los roces y las medidas represivas de la policía y la MSJ se incrementaron con el crecimiento de la cantidad de vendedoras y vendedores (“Congreso oficializó ventas ambulantes”, 1981, p. 3; Araya, 2021, p. 221).

El gremio participaba principalmente en la fase final de la comercialización de los bienes, al ponerlos a disposición del público. Algunas personas llevaban años laborando en las calles. Otras tenían una trayectoria laboral distinta, pero sus antiguos trabajos ya no eran viables; se habían hecho vendedores a raíz de una expulsión o dificultad para (re)insertarse o

continuar en el mercado laboral formal o en alguna actividad artesanal. Usualmente su nivel educativo era bajo, lo que les dificultaba conseguir trabajos calificados y estables.

La presencia de las mujeres en la economía popular del espacio público era importante. Usualmente enfatizaban que eran jefas de hogar y las encargadas del sostén económico de sus hijos, aunque también había mujeres casadas o que no tenían hijos. Probablemente el trabajo doméstico y de cuidado recaía en su totalidad en ellas, por lo que tenían una doble jornada laboral.

Esto denota el pasaje del padre proveedor (a través del trabajador asalariado, como jefe de familia) a “figuras feminizadas” (Gago, 2014, p. 59), quienes ocuparon y convirtieron las calles en espacios de sobrevivencia y demostraron la existencia de otras lógicas vitales.

Norma trabajaba en costura, un oficio afectado por la expansión de las fábricas de ropa desde la década de 1960. El alza de los precios de los materiales hizo que no pudiera comprarlos. La presión para obtener un ingreso fue mayor para María Elisa, quien debía mantener a seis hijos y pagar una hipoteca de 10 000 colones por “su casita”. Para ambas mujeres, el comercio callejero se volvió su única alternativa, una solución que múltiples personas vislumbraron ante la imposibilidad de continuar con otro trabajo (“Así ven las cosas los vendedores ambulantes”, 1983, p. 6; “Se gana el pan horadamente y fue tratada como si fuera delincuente”, 1986, p. 11).

Cristina era vendedora frente a la tienda El Globo (en la Avenida Central) y madre de dos hijos. Se había retirado de las ventas, pero volvió debido a que su matrimonio no funcionó. Llevaba a su hijo menor a su chinamo y este cuando se cansaba se dormía en un cajón debajo de su mesa de exhibición. Para ella, el niño no contribuía, porque se ponía a jugar con otros niños y la distraía o se “jalaba tortas” (González, 1990, p. 6 A) y esto facilitaba que le robaran a ella.

Para las vendedoras de la calle 8 era imposible “autoincapacitarse” por maternidad. La mayoría de las personas vendedoras de las calles carecía de acceso a la seguridad social y no recibían el pago de aguinaldo. Rosa María, de 38 años, madre de cuatro hijos y vendedora de plátanos maduros y limones ácidos, expresó: “Una tiene los hijos y al día siguiente está aquí; sino, se queda sin el santo y sin la limosna. Somos como las yeguas: parimos el güila y al momentito estamos en pie” (Guevara, 1993, p. 8 A).

Meoño y Muñoz (s.f.) indican:

(...) una situación real en el chinamo: el dueño es el jefe de la familia, generalmente un hombre. Este se ocupa en general de las actividades “claves” de la empresa, como las relaciones con el proveedor, las negociaciones con la Municipalidad (...) (p. 15).

El vendedor Benedicto manifestó que no podía trabajar debido a que “estaba impedido de la columna” y que con las ventas “mantengo a mi mujer que tiene problemas de la vista” (“Así ven las cosas los vendedores ambulantes”, 1983, p. 6). El carpintero José, vecino de Sagrada Familia, lamentó que en el último año había tenido tres empleos en fábricas y lo habían despedido antes de cumplir los dos meses, sin prestaciones. La situación empeoraba ya que carecía de herramientas propias, algo necesario para conseguir trabajo (“Testimonio de una familia trabajadora”, 1982, p. 7).

La mayoría de las personas vendedores requería la instalación de algún puesto para mostrar la mercadería. Otras la exhibían sujetándola con sus manos. Algunas personas utilizaban toldos, sombrillas u otros objetos de fácil instalación, para evitar o mitigar parcialmente los rayos solares y la lluvia, ya que sus jornadas eran largas. También daban cierta protección a aquellos productos que requerían más cuidado o que no les convenía recibir los rayos solares, la luz intensa o la lluvia.

También era habitual el empleo de plásticos para colocar la mercadería, la cual ameritaba ser protegida del polvo, la humedad, el hollín, el humo y otros agentes que había en las calles. Pese a esto, mucha de la mercadería era ofrecida a la intemperie y podía deteriorarse, disminuyendo las ganancias obtenidas (Jiménez y otros, 1992, p. 92).

Era común el uso de mesas, bolsas, baldes, cajas de diversos materiales, bateas, tablas de madera, láminas metálicas, maletines y tarimas para acomodar, almacenar, proteger y exhibir la mercadería. Algunas personas tenían algún carrito o camión estacionado. Algunos artefactos eran fabricados para exhibir la mercadería, mientras que otros podían ser diseñados o modificados por las personas vendedoras o por otra persona. Empleaban cartones, cajas de madera y cartón y otros materiales o artefactos para almacenar y exhibir la mercadería, depositar desechos, guardar objetos, sentarse o como parte de la infraestructura de sus puestos o chinamos (Durán, 2013, pp. 122-123).

El tipo de puestos dependía de la mercadería en exhibición y/o venta, así como de la facilidad de movilización, según la circunstancia. Los puestos fijos de mayor tamaño empleaban madera, láminas y otros materiales. Usualmente utilizaban permanentemente el espacio público y algunos se instalaron en fila (Ramírez y Murillo, 2003). También era importante el acceso a determinados bienes clave (tarimas, carretillas con ruedas, mostradores y otros) donde a veces también se expresaban procesos de acumulación y concentración, al igual que en la inserción de nuevos vendedores.

Otros artículos eran ofrecidos en maletas portátiles. Usualmente era mercadería pequeña, como bisutería de moda (collares, pulseras y aretes). Esto facilitaba y hacía más rápida la movilización de personas vendedoras, debido a que eran muy perseguidos por la policía (Ramírez y Murillo, 2003). Los tamaños de los medios usados para transporte, almacenamiento y exhibición variaban e incluían carretones de gran

tamaño, tarimas pequeñas o incluso únicamente unas cuantas cajas, bateas y lonas plásticas. Algunas personas se valían de sus manos o su cuerpo para sujetar y mostrar la mercadería.

El mobiliario predispuesto en un lugar específico también ayudaba o facilitaba el comercio callejero, como las paradas de autobuses, los desniveles, las gradas, una sombra o zona techada, las bancas y otros (Durán, 2013, pp. 122-123). Algunos objetos eran alquilados. Por ejemplo, este fue el caso de los coches con ruedas para transportar y vender frutas, negocio controlado por un hombre del Mercado Borbón, quien los alquilaba a los vendedores y no le convenía que la policía eliminara los tramos callejeros (Aguilar, 1990, p. 5 A; Aguilar, 1990, p. 5 A).

Las personas vendedoras debían respirar el humo emitido por los vehículos y aguantar la contaminación sónica debido a que se ubicaban en zonas de alto tránsito vehicular. En la vía pública no tenían agua potable, por lo que debían conseguirla en algún comercio y almacenarla para consumo personal, lavado y limpieza de la mercadería y de la infraestructura (Guevara, 1993, p. 8 A).

La incursión y permanencia en los chinamos requería de cierta habilidad comercial. A veces era clave contar con la venia, complicidad o patrocinio de quienes se encontraban en una posición de jerarquía sobre las personas vendedoras. Para unas personas existía una autonomía relativa en cuanto al desempeño de sus labores; otras tenían márgenes estrechos de acción y vínculos diversos con el sector formal, por lo que no constituyeron un mundo binario o antagónico. Tenían múltiples alianzas, redes, antagonismos y competencias.

Dependiendo de la actividad, era fundamental contar con el patrocinio o venia de algún “pez gordo”, que autorizaba y controlaba quién podía hacer ventas en las calles, máxime si se trataba de productos cotizados por la clientela. Algunos vendedores o vendedoras eran subordinados de personas dueñas de chinamos, intermediarias o debían entregarles un importante

porcentaje de sus ventas a un patrón o alquilaban el mobiliario (o parte de este) que requerían (Aguilar, 1990, p. 5 A).

Para un grupo de personas vendedoras (más allá de contar con los permisos), las condiciones eran más favorables y se relacionaban con su potencial de emprendimiento, vinculándose con fechas, lugares y bienes específicos. Algunos de los puestos aparecían en diciembre; las ventas de ciertos bienes se daban en torno a una festividad o celebración (como las banderas unas semanas antes del aniversario de la independencia); o bien, determinadas actividades eran vistas como pintorescas y tradicionales.

La oferta era muy variada y dependía de la época del año. Algunos productos se vendían de forma continua; otros tenían una demanda que aumentaba en ciertas ocasiones festivas (como el Día de la Madre y diciembre), mientras que otros tenían una época relativamente breve de bonanza (como el 14 de febrero y *Halloween*). Había cosméticos, pintura de uñas, accesorios para el pelo, bisutería, utensilios para el hogar, tarjetas alusivas a alguna celebración, peluches, flores de plástico, ropa, artículos para bebés, perfumes, casetes, fotografías de personalidades públicas, adornos pequeños, cinturones, llaveros, anteojos de sol y de aumento (González, 1990, p. 6 A; Batista, 1995, p. 8).

La presencia de comerciantes en las calles y la oferta de artículos para obsequio se incrementaban en las primeras dos semanas de agosto, previo a la celebración del Día de la Madre (15 de agosto). “Centenares” de vendedores y vendedoras habían inundado la avenida Segunda con su mantelería, cosméticos, ropa, pelapapas, calzones de vuelos, estampas del Espíritu Santo, papel de regalo, tarjetas y otros productos. Eran de gran atractivo para las personas transeúntes debido a sus bajos precios. (“Gran venta callejera”, 1986, p. 1-2).

Este sector de personas vendedoras probablemente aparecía también en ciertas fechas, como diciembre y febrero (previo a San Valentín). Estos artículos no eran de primera necesidad,

sino que eran decorativos, de uso cosmético, envoltorios o de modas pasajeras. Muchos de ellos eran comprados con el fin de ser regalados a otra persona, por lo que los y las vendedoras también aprovechaban para ofertar bolsas de regalo, papel para envolver, tarjetas de obsequio y colillas, especialmente en la primera quincena de agosto y en diciembre.

Las importaciones baratas y con impuestos bajos se incrementaron, con artículos considerados “chucherías”, “baratijas” y otros, generalmente importados de Hong Kong, Corea del Sur, Taiwán y China. Competían directamente con numerosas tiendas. El mercado se inundó de toda clase de objetos de diverso origen, destinados al consumo popular, a bajos precios y muchos de ellos a la venta en negocios especializados según su país de origen. Esto generaba una amplia red de (re)distribuidores y (re)vendedores (Estrada, 1995, p. 10).

Las personas comerciantes intermediarias eran la principal fuente para adquirir la mercadería. A inicios de la década de 1990, representaron el 83%. En una proporción mucho menor, destacaban los almacenes mayoristas, luego los talleres en pequeña escala y, por último, la fábrica mayorista (Gómez, 1991, p. 265).

La reducción de los aranceles de importación a diversas mercancías benefició al sector comercial, así como a las personas trabajadoras de las ventas callejeras. Algunas personas comerciantes se valieron de la alta migración de sus compatriotas, como los salvadoreños y salvadoreñas durante la década de 1980 e inicios de la de 1990. Otras empresas, en manos de personas chinas, taiwanesas y coreanas, aunque tenían una clientela más variada, probablemente también abastecían a un sector de trabajadores de las calles de diversas nacionalidades, principalmente en diciembre.

Un sector de las personas refugiadas y migrantes de El Salvador y Nicaragua instaló puestos de ventas en el centro de la ciudad, aunque su estatus migratorio limitaba sus opciones laborales formales. Las personas salvadoreñas desarrollaron

redes comerciales con distribuidoras de su país de origen, lo cual se evidenció en la venta de ropa y otros artículos. En 1984, había más de 20 empresas distribuidoras salvadoreñas (independientes entre sí), que los abastecían de la ropa. Las personas vendedoras costarricenses las consideraban competencia desleal, por lo que las veían con “resquemor”. En la década de 1990, aumentaron los operativos para detener y expulsar a quienes estuvieran en situación “irregular” (Coto, 1984, p. 6 A; “Economía navideña viste informalmente”, 1989, p. 33 A) y disminuyó la presencia de personas vendedoras y negocios en manos salvadoreñas.

El conjunto de “trameros” de las calles tenía vínculos de diversa índole con el sector comercial formal. Jaime trabajaba como vendedor en las cercanías de las tiendas La Gloria y El Globo (Avenida Central). Detalló: “(...) Porque nosotros compramos nuestros productos en las importadoras salvadoreñas o chinas, o en los grandes almacenes. Ellos ganan vendiéndonos (...)” (González, 1990, p. 6 A).

Un sector les compraba artículos; en otro, las personas trabajadoras eran empleadas de comerciantes mayoristas, habiendo así una jerarquía definida. Estas personas tenían probablemente un menor nivel de independencia y de ganancias. Una noticia publicada en 1994 adujo que las personas vendedoras eran mayoritariamente pobres, pero que detrás de ellas había un sector de comerciantes mayoristas, quienes no pagaban impuestos, cargas sociales ni alquiler de locales (Loaiza, 1994, p. 3).

La distancia crecía entre el proceso de producción de los bienes ofrecidos en las calles y el colectivo de personas vendedoras. Estas eran el último eslabón de una cadena comercial de circulación de bienes y quienes interactuaban directamente con las personas compradoras o interesadas en la mercadería, como parte de la “globalización desde abajo”. Algunas personas que laboraban como comerciantes en las calles conocían a sus proveedores, aunque también

otras estaban en una relación mucho más vertical e impersonal con quienes les surtían.

La compra de la mercadería con algún préstamo informal era común, obtenido mediante familiares, amistades y/o ahorros propios, ante la dificultad de acudir a instituciones bancarias. Con la compra de la mercadería, podían obtener una serie de facilidades, como descuentos, precios mayoristas o un trato preferencial, por lo que había una relación de mutuo beneficio con algunos establecimientos comerciales.

Las personas vendedoras intentaban adaptarse a los gustos, a las tendencias y a las necesidades de las personas compradoras; sabían o determinaban qué lugares eran los idóneos para vender y en cuáles no valía la pena instalarse debido a que no eran aptos para generar un importante volumen de ventas. Su clientela estaba en los lugares más céntricos, por lo que debían localizarse ahí, ya que difícilmente los transeúntes iban a “caminar cuadras y cuadras para adquirir un tiliche” (Scarcevic, 1994, p. 20; Jiménez y otros, 1994).

Los lugares más cotizados podían tener ventas fluctuantes o bajas por numerosos factores, como las lluvias, el alto costo de la vida o porque algunos artículos pasaban de moda, se acababa su temporada de ventas o no eran muy demandados por clientela. Los vendedores se opusieron sistemáticamente a reubicarse en los lugares que la MSJ establecía, ya que no eran estratégicos ni tenían una alta circulación de personas. (Scarcevic, 1994, p. 20).

La ley 6587 estableció que las patentes se otorgaban a personas costarricenses por nacimiento o a quienes tuvieran un mínimo de diez años de haberse naturalizado. La población migrante de Nicaragua y El Salvador trabajaba en las calles en condición de ilegalidad y no podían obtener una patente con facilidad y rapidez. En 1998, la Sala Constitucional (Sala IV) emitió la resolución 4832-98, para la eliminación del requisito de diez años de adquisición de la nacionalidad (Araya, 2021, p. 225).

La venta de productos agrícolas comestibles

Los chinamos que comercializaban frutas, raíces y hortalizas operaban en los alrededores del Mercado Central y el Mercado Borbón, principalmente en la calle 8. Los productos agrícolas usualmente estaban crudos y frescos y muchos eran de origen nacional. Algunos eran de temporada; otros se comercializaban durante todo el año, aunque sus precios a veces fluctuaban. Eran perecederos y no estaban en refrigeración, aunque usualmente se podían almacenar a temperatura ambiente, pero requerían diversos cuidados en su almacenamiento, exhibición y manipulación para que no se dañaran. Si no se comercializaban en un plazo determinado, algunos se dañaban, se descomponían o ya no eran aptos para la venta.

Competían directamente con otros establecimientos, principalmente los mercados municipales de los alrededores. También había otras ventas, al parecer más esporádicas, ubicadas en otros lugares, las cuales tenían menos variedad, pero con una cantidad abundante de un solo producto, como chayotes y pejibayes en un puesto, carretón o en un vehículo de carga. Estos últimos poco a poco se hicieron más comunes en diversos lugares (*La República*, 1985, p. 1).

Las políticas de ajuste estructural promovieron los “cultivos de diversificación” (León, 2012, p. 319) a partir de la década de 1980. El aumento sustancial en la producción de algunas frutas (como la piña, la naranja y el melón), expandió su mercado interno y su oferta. Algo similar sucedió con las verduras y raíces. Era común que algunas frutas (como la papaya, la piña, la sandía, el melón y otras) las comercializaran por peso o por unidades, a veces según el gusto de la clientela o como fuera fijado por las personas vendedoras, dependiendo del tamaño, de la demanda y de su cotización en el mercado. También se ofrecían en tajadas o partidas en una o varias porciones. Luego se empacaban en una bolsa y permanecían sin refrigeración en los tramos, que estaban

desperdigados por el centro de la ciudad. Su contaminación era generalizada y podía ocasionar enfermedades en las personas (Mendoza, 1989, p. 5 A; Guerrero, 1992, p. 12 B).

Entre las frutas tradicionales de producción nacional, empaçadas para su consumo inmediato, estaban los jocotes, los nances y los cases, así como el mango verde o “cele”, el cual era cortado en rebanadas, si bien su oferta era más por temporadas. Estas frutas (el mango en algunas ocasiones) se consumían con cáscara, acompañadas de sal. También había venta de otras frutas pequeñas con cáscara y requerrían que esta fuera desprendida para el consumo, como los mamones y las mandarinas.

Las frutas peladas o partidas, así como aquellas cuya cáscara se comía, podían contaminarse durante su transporte, distribución, almacenamiento y manipulación, por la presencia de diversos vectores y agentes infecciosos. Generalmente no estaban desinfectadas y cuando se realizaba el lavado, el agua se reutilizaba, ya que las personas vendedoras no contaban con acceso a la cañería de agua potable y no aplicaban técnicas adecuadas de manipulación de alimentos. Otras no las lavaban, sino que limpiaban la mercadería con un paño para hacerla más atractiva o la colocaban directamente en la infraestructura empleada para su venta (Molina, 1990, p.8; Mata, 1992, p. 296; Arias-Echandi y Antillón, 2000, p. 115).

Los tramos también ofrecían algunas frutas importadas a precios significativamente más bajos. Las manzanas y las uvas, que usualmente se comercializaban en diciembre, aparecieron con mayor frecuencia en los puestos callejeros a lo largo del año, gracias a la reducción de los aranceles a su importación, la disminución de sus precios y el aumento de su consumo. La oferta luego creció con peras, ciruelas, kiwis, melocotones, aguacates y otras (Arteaga, 1992, p. 5 A).

Los logos y leyendas alusivos a algunas marcas (principalmente estadounidenses) de empresas fruterías probablemente servían para resaltar las cualidades de sus productos y el país

de origen. Las palabras y frases usualmente estaban en inglés en cajas, calcomanías y tarimas. Empero, también se volvió una costumbre comprar y comer estas frutas inmediatamente sin lavarlas, por lo que algunas personas se enfermaban (“Consideran que es baja la venta de uvas y manzanas”, 1985, p. 12 A; Brenes, 1989, p. 20 A).

Algunas frutas tradicionales fueron reemplazadas parcialmente por las importadas o cuya producción y consumo no eran comunes en Costa Rica. También fue fundamental que las personas vendedoras “captan los cambios en la demanda y en función de ello modifican su oferta” (Jiménez y otros, 1992, p. 92), a partir de una serie de conocimientos y habilidades relacionadas con el mercadeo y los patrones de alimentación de las personas.

La práctica de cortar frutas tenía varios propósitos: mostrar su buena calidad, evidenciar que se podían consumir pronto, adornar sus tramos y para que las personas que transitaban las vieran y las adquirieran. Ciertas frutas no eran coloridas o atractivas por fuera (como el zapote y la papaya), por lo que era importante visibilizar su pulpa y evidenciar su frescura, dulzura y calidad.

Las personas vendedoras lograban que la mercadería de mejor apariencia quedara a la vista, particularmente cuando el tamaño, el color y la textura daban evidencias de su calidad. A falta de propaganda, se recurría a hacer “careo” para “darle un mejor aspecto al producto” (Novoa, 1993, pp. 13-14 C; Ross, 1994, p. 141); algunas frutas (como la piña, los bananos y las uvas) eran colgadas o amarradas y el puesto operaba como un mostrador. Algunos “trameros” de productos agrícolas u otro tipo de bienes anunciaban con gran volumen o a gritos su mercadería, las ofertas y las cualidades de sus productos, aunque también era común la colocación de letrero(s) con precio(s) y cantidad(es) (Arias, 1987, p. 16).

Cuando las frutas o verduras eran de gran tamaño (como la sandía, el ayote o la guanábana) o las personas tenían la

costumbre de comprar una porción, los “chinameros” las partían en trozos de diverso tamaño y peso y las envolvían con plástico. Este proceso era para preservar su contenido, para que su pulpa o interior quedara visible y para que la clientela se las llevara empacadas sin que desprendieran líquidos o se ensuciaran. Igualmente se podían contaminar si su manipulación no era adecuada (Mata, 1992, pp. 313-314).

Según varias personas vendedoras de frutas listas para consumo, las personas estaban acostumbradas a comprarles fruta en trozos; muy pocas adquirían fruta sin pelar y era inviable que la ofrecieran entera, ya que “nadie pasa por aquí para llevarse una piña o una papaya sin pelar para la oficina”. Esto les traería pérdidas, por lo que preferirían cerrar sus negocios.

En el gobierno de Óscar Arias Sánchez (1986-1990), el MS intensificó la erradicación de ventas callejeras de alimentos preparados en el sitio (incluido el comercio de frutas troceadas) debido a sus impactos negativos en la salud pública. Decomisaba el equipo y los alimentos a quienes ofrecían fruta pelada o productos cocinados en las vías públicas y luego se les entregaba un parte. (“Gobierno da ultimátum a vendedores callejeros”, 1986, p. 12 A).

Un vendedor increpó: “(...) no se sabe de alguien que se haya muerto por comerse un mango, un pedazo de piña o de papaya” (Umaña, 1988, p. 5). Para el MS resultó más difícil erradicar las ventas de frutas peladas y partidas debido a la costumbre de consumirlas en las calles. En los decomisos, las personas vendedoras perdían menos inversión, ya que no empleaban maquinaria sofisticada ni sustancialmente costosa. Su principal pérdida era la mercadería, por lo que se volvió una especie de cacería sin fin.

Una vendedora en las cercanías del Parque Central indicó con resignación que la venta de mangos pelados era el único sustento para ella y su familia. Las personas vendedoras se resignaban a cumplir los mandatos del MS y esperar a que se ejecutara la orden de desalojo ante la

amenaza del cólera en 1991, aunque también criticaron que las autoridades siempre se ensañaban contra las personas pobres (Vega, 1991, p. 7). Algunas personas retomaban sus actividades y las más combativas fueron las que comercializaban verduras, frutas y tubérculos, así como “tiliches”.

La oferta de frutas partidas y de alimentos preparados en el sitio disminuyó a partir de 1991, aunque no se eliminó por completo. Ante la alarma de la llegada del cólera a Costa Rica, el MS desarrolló una intensa campaña de prevención, la cual contribuyó a que estas ventas prácticamente desaparecieran, aunque luego tuvieron cierto repunte (Barrantes, 1991, p. 2 A; Varela, 1996, p. 4 A).

“Sacar un aguinaldito”. Ventas de juguetes y artículos navideños en diciembre

Las ventas de artículos varios tenían cierta tolerancia durante diciembre, cuando eran alusivos a los nacimientos, la lana (musgo) y el ciprés que simbolizaban lo tradicional. Al ser un mes festivo en que las personas gastaban más de lo usual por el pago del aguinaldo, las vacaciones de fin de año y el obsequio de regalos, la MSJ daba cierta tolerancia para la instalación de chinamos en este mes mediante permisos provisionales y luego por medio de la tolerancia y las treguas.

Las personas vendedoras sabían aprovechar que el poder de consumo de la población se incrementaba y que había mucha disposición a adquirir juguetes, adornos y otros artículos. El ingenio y la habilidad para hacer llamativo el tramo eran atributos vitales para diferenciarse de su competencia. El ponerse al tanto de las últimas tendencias y modas era decisivo para que su oferta captara la atención, particularmente si su público meta eran los niños y las niñas. El atractivo de los chinamos callejeros durante el último mes del año era “que la gente puede adquirir a precios módicos, tanto “el regalo del niño”, como los estrenos de los güilas (niños)

para nochebuena” (Cordero, 1981, p. 14; “Ventas callejeras: síntoma de crisis y desempleo”, 1983, p. 7).

Había al menos dos sectores: quienes recurrieron a las ventas temporales como la única alternativa de cara al desempleo y por la dificultad de conseguir otro trabajo, y quienes su trabajo principal era el comercio callejero a lo largo del año. El común denominador era la solicitud a la MSJ de un puesto temporal en la Avenida Central y sus alrededores. Muchos permanecían tras el fin del permiso temporal y variaban su mercadería.

La obtención de una entrada extra (en alusión al aguinaldo recibido por la mayoría de las personas trabajadoras) fue un propósito para los y las vendedoras durante el último mes del año. Otras personas continuaban sobreviviendo de las ventas en la calle, tal y como lo hacían el resto del año. En diciembre había una expectativa generalizada por mejorar su situación, aumentar sus ingresos, pagar deudas, ahorrar y realizar algunos gastos adicionales, principalmente en ropa y juguetes para sus hijos e hijas.

Con frases como “necesito trabajar, podría darme un puesto ambulante por ahí, por la Avenida Central...”, “(...) ganar algoillo” y otras similares, las personas comerciantes y vendedoras ambulantes buscaban “un lugarcito para trabajar”. Las personas vendedoras resaltaban que eran de “bajos recursos” (Cordero, 1981, p. 14) y que trabajaban año a año en esto por necesidad (“Se preparan para más ventas callejeras”, 1983, p. 3).

Los “trameros” estaban dentro de una dinámica comercial en calidad de compradores y vendedores. Roberto vendía juguetería en diciembre, adquirida en varios locales comerciales que le hacían descuento a él y a otros colegas. Detalló que “el resto del año la pulseo en construcción, pero eso está muy malo” (“Ventas callejeras: síntoma de crisis y desempleo”, 1983, p. 7). Luego vendían más barato que muchos de los almacenes. Algunos de estos y los negocios mayoristas les daban

la mercadería en consignación: si las personas comerciantes callejeras no lograban venderla toda, devolvían el sobrante a su proveedor (Jiménez y otros, 1992, p. 91).

La coyuntura de la crisis a inicios de la década de 1980 no era de bonanza y con el paso de los años los sectores populares sufrieron incrementos en el costo de vida, tras la intensificación de las políticas neoliberales. Empero, durante diciembre el consumo se dinamizaba, apoyado con el pago de los aguinaldos y por el periodo de las vacaciones. Las personas vendedoras también asumían una serie de riesgos, como el endeudamiento y la compra de mercadería cuya venta se debía realizar antes del 25 de diciembre, por el fin de los permisos provisionales y porque las ventas disminuían sustancialmente (“Concejo dice que no puede controlar ventas callejeras”, 1983, p. 2 A).

Para las personas vendedoras, era vital adquirir rápidamente la mercadería. Este mes era la única oportunidad para obtener ingresos extra “después de pasar largos meses “varados”, **pulseándola** donde aparezca” (“Ventas callejeras: síntoma de crisis y desempleo”, 1983, p. 7), pese a los constantes problemas con la policía. El sector de vendedores y vendedoras conocidos como “temporeros” (Gómez, 1991, p. 171) trabajaba en las calles únicamente en “épocas comercialmente importantes”. El resto del año tenían otros trabajos y generalmente sus familias no tenían una trayectoria en las ventas.

Flor, madre de ocho hijos, detalló que había terminado en la cárcel varias veces por trabajar en las calles. Lo obtenido con las ventas decembrinas únicamente iba a alcanzarle para la ropa y no para juguetes. Una colega, madre de nueve niños, se dedicaba a fabricar animales de peluche, siendo este “el fuerte” durante las ventas navideñas, aunque también vendía juguetes. Este era un caso singular, ya que lo usual era la adquisición de bienes ya finalizados (“Ventas callejeras: síntoma de crisis y desempleo”, 1983, p. 7).

Algunas personas vendedoras tenían mesas plegables o portátiles para mostrar los juguetes en lugares clave de alto

tránsito y cerca de los negocios que los exhibían en vitrinas, principalmente en la Avenida Central. No convenía ofrecer artículos muy caros, ya que había un margen de incertidumbre y entre más tuvieran que incrementar el precio con respecto al original, se arriesgaban a no vender o a que les sobraran juguetes. La estrategia que empleaban algunas personas era ir a almacenes comerciales, mirar la mercadería y los precios y luego ofrecer lo mismo a un monto inferior (Peralta, 1992, p. 2 A).

Los juguetes artesanales y elaborados en microempresas habían decaído en Costa Rica por el alto costo de los materiales y de la mano de obra, así como por una disminución en su compra, ya que no siempre estaban acorde con las tendencias de moda. Los aranceles de importación de juguetería disminuyeron. Llegaban marcas reconocidas, pero había otros de la línea “mercado abierto”, la cual no tenía un nombre comercial y sus precios eran más bajos. Su “consumo (era) más popular” (“Ventas callejeras con mercadería extranjera, 1981, p.4.; Arteaga, 1992, p. 8 A).

Los juguetes de plástico y de origen industrial se habían generalizado. Elida había invertido más de ₡6000 en juguetes de Taiwán: aviones, carros de bomberos, lanchas, rifles, ametralladoras y tractores. Los vendía a muy bajo precio para salir de “la presa”. El vendedor Carlos A. también vendía diversos juguetes, relojes y otros artículos taiwaneses y costarricenses y anteojos provenientes de Hong Kong. Aseveró que era imposible vender únicamente juguetes nacionales y que en un país democrático todas las personas tenían derecho a ganarse la vida.

José tenía una mesa cerca de la Librería Universal en la Avenida Central de San José. Lamentó las ventas bajas y esperaba que mejoraran el 24 de diciembre, ya que usualmente después de la Navidad, disminuían notablemente. Rosario llevaba seis años de vendedora y adquiría los juguetes al por mayor y a un precio mayorista. Marvin se movilizaba en silla de ruedas y tenía su mesa de ventas en la esquina diagonal a

Radio Monumental. Había comprado “jugueticos que puedo vender entre mil quinientos y dos mil pesos” (Peralta, 1992, p. 2 A). Le había ido muy bien y esperaba que así se mantuvieran las ventas hasta Navidad.

En diciembre de 1993, las personas vendedoras colocaron mesas con peluches, trenes, aviones, muñecas y carros a control remoto (Peralta, 1993, p. 8 A). Estos juguetes atraían a gran cantidad de público (principalmente niños y niñas), quienes miraban con curiosidad y deseo. Es probable que la reducción de los aranceles benefició en un principio a las ventas callejeras, pero luego la competencia de las tiendas especializadas en vender artículos baratos (que crecieron mucho en la década de 1990) y otros establecimientos fueron desplazándolas.

Las personas vendedoras callejeras de “tiliches”, “baratijas” y “chucherías” alusivas a la Navidad, generalmente no se especializaban en la oferta de un solo tipo de bienes. Eran una versión moderna, pequeña e informal de los bazares y tiendas de regalos y adornos. Usualmente no eran de gran tamaño, muchos comercios formales los vendían a precio mayor y su clientela tenía un poder adquisitivo menor (“Economía navideña viste informalmente”, 1989, p. 3).

El “avenidazo” era una práctica muy tradicional, donde las personas transeúntes recorrían la Avenida Central mirando ventanas y comprando durante diciembre, mientras arrojaban o les lanzaban confeti (papel picado). A la actividad acudían familias enteras y personas de todas las edades. Para 1994, la festividad casi había desaparecido como resultado de la inseguridad, de la prohibición de la venta y el lanzamiento de confeti y por la preferencia de algunas personas por visitar los centros comerciales y los recién inaugurados *malls* (González, 1994, p. 4 A).

En diciembre de 1989 algunos productos a la venta eran “relojes, ropa, frutas, bingos, dólares, lotería, flores, muñecas, tarjetas, pintura de uñas, jabón para hacer pompas, helados y hasta escapularios” (“Economía navideña viste informalmente”,

1989, p. 33). Cuando se estrenó la película *Batman*, el sector recién inaugurado del boulevard se llenó de ventas de todo tipo de artículos alusivos, mientras duraba el furor por la película

La figura de Santa Claus era parte de la cultura de masas navideña a través de todo tipo de artículos. Los puestos tradicionales con objetos y materiales para el pesebre coexistieron con las ventas de “baratijas” y “tiliches” que mostraban una versión de la Navidad similar a la de la publicidad estadounidense, con luces, nieve, campanas, trineos, renos, duendes y otros elementos. Las personas vendedoras utilizaban parte de la mercadería como elemento decorativo, como muestra o como una estrategia para atraer al público. Incluso, algunas se disfrazaron de Santa Claus (“Turno en la Avenida Central”, 1993, p. 13 A).

Desde principios de noviembre de 1991, la Avenida Central estaba llena de vendedoras y vendedores callejeros esperando que llegara clientela navideña, aunque todavía faltaba casi un mes para que empezara diciembre y circularan los aguinaldos. La mercadería era nueva y variada: lentes de sol para el verano (dado que a finales de diciembre muchas personas viajaban a playas y diversos lugares de vacaciones) hasta muñecos de cuerda que rodaban por el pavimento (“Tilicheros volvieron a la Avenida Central”, 1991, p. 8 A).

“Un mercado persa”.

Conflictividad por el espacio público

En 1989, las personas vendedoras y trabajadoras del Mercado Borbón y su administrador, Gerardo, reiteraron una antigua queja: el comercio informal obstruía las vías públicas e impedía el tránsito, generaba un caos permanente, y ocasionaba que las personas corrieran el riesgo de ser atropelladas. Sostuvieron que se colocaban sus productos en los caños o en el suelo y disponían libremente de los desechos, por lo que había peligro de contraer enfermedades por la presencia de ratas y cucarachas (“Denuncian caos en Mercado Borbón”, 1989, p. 4 A).

La prensa enfatizó que las personas vendedoras habían tenido fuertes altercados con la policía. Las instituciones del Estado y el gobierno local eran acusados de su responsabilidad por permitir las ventas callejeras y no ser lo suficientemente tajantes para desalojar a las personas vendedoras, pero estas autoridades también eran interpeladas para que solucionaran la problemática, generalmente de forma autoritaria y represiva (Meoño y Muñoz, s.f., p. 59).

Había tolerancia, negociaciones y treguas en las que se reproducían los estereotipos hacia determinados actores. Estos también tuvieron un margen de acción, mediante diversos sindicatos y agrupaciones que velaban por sus intereses. La institucionalidad fue aprovechada por las personas afectadas para detener o posponer los desalojos, principalmente con los recursos de amparo ante la Sala Constitucional, a partir de 1989, fecha de su fundación.

Entre las medidas represivas, la policía decomisaba la mercadería, detenía al colectivo de personas vendedoras, las encarcelaban hasta por varias semanas y les cobraban una multa para dejarlas en libertad. Al parecer, la permanencia tras las rejas se alargaba en caso de que no pagaran la multa por no portar el monto o carecer de dinero. Una de estas personas permaneció encerrada un mes y medio y había sido detenida en más de 20 ocasiones. Otra trabajadora, quien vendía frutas y verduras, fue detenida por 24 horas y la obligaron a firmar un documento en el que se comprometía a retirarse de las ventas callejeras josefinas (“Se gana el pan honradamente y fue tratada como si fuera delincuente”, 1986, p. 11).

Las persecuciones se daban principalmente por medio de los operativos planificados, a veces previamente anunciados para que las personas vendedoras se retiraran de forma voluntaria y para reducir la cantidad de enfrentamientos directos y el uso de la fuerza. Eran realizados con más frecuencia en diciembre para detectar ventas sin permiso, personas en condición irregular y mercadería cuya procedencia era “dudosa”. En la década de

1990 se intensificaron estas acciones, aunque también hubo numerosas negociaciones entre la MSJ, los colectivos de personas vendedoras, la policía y el sector comercial, pero los acuerdos no siempre eran cumplidos por las partes y había recriminaciones mutuas. (González, 1991, p. 6; Fuentes, 1992, p. 30 A).

En las décadas de 1980 y 1990, se añadieron diversas normativas para sancionar la salubridad de los productos, la obstaculización del tránsito libre, las ventas como una falta al “orden público” y las prohibiciones en ciertos espacios. La creación de la Policía Municipal en 1995 se relacionó con el incremento de la inseguridad, la proliferación de los “chapulines” (infractores juveniles menores de edad) y el crecimiento inusitado de las ventas callejeras. Sus principales metas fueron el control de las ventas patentadas y la expulsión de personas vendedoras sin patente, así como la atención de faltas al “orden público” (Durán, 2013, pp. 67-68).

La apertura del primer tramo del boulevard de la Avenida Central en 1989 pretendía ser un gran avance ante una ciudad poblada de chinamos, ávida de ornato y para darle un realce al comercio. Rápidamente se llenó de ventas callejeras, lo cual desató críticas y un panorama pesimista para el sector comercial formal. El término “mercado persa” fue el estigma que continuó siendo utilizado para referirse al centro de la ciudad, en alusión al desorden, los desechos sólidos, la contaminación, el caos vial y la apariencia de muchos de los puestos callejeros de ventas.

Manuel, director de la Cámara Nacional de Comerciantes Detallistas (agrupación que realizaba fuertes críticas hacia las ventas de la calle y hacia la MSJ por su supuesta permisividad), reiteró un argumento utilizado previamente por representantes del sector comercial. Los establecimientos comerciales estaban siendo afectados en gran magnitud por las ventas ambulantes, debido a que los primeros “pagan patentes caros y servicios con altos costos” (Cordero, 1989, p. 5), lo cual no hacían las personas vendedoras irregulares, consideradas competencia desleal.

Las violentas protestas del 24 de julio de 1991, protagonizadas por vendedores de las calles, terminaron en saqueos comerciales, vitrinas quebradas y la sede de la MSJ apedreada. Las medidas institucionales tuvieron que ser modificadas y se privilegió el diálogo y la negociación intersectorial, particularmente con varios colectivos de personas vendedoras, permitiendo su (re)ubicación temporal mientras se construían varios mercados modernos en diversas partes de la ciudad de San José. A finales de 1991, se permitió el trabajo a un grupo de estas sin patente, en la calle 8 durante los fines de semana, bajo la modalidad de “zonas de tolerancia”. La calle iba a estar cerrada los sábados y parte de los domingos. En un sector se ubicaron “vendedores de artesanías, ropa y artículos varios” (Valverde, 1991, p. 4 A), mientras que en otro se iban a colocar puestos para las personas comerciantes de productos perecederos.

También se acordó la instalación de chinamos en algunos parques durante diciembre. En 1994 fueron reubicadas 120 personas vendedoras en la Plazoleta de La Dolorosa; en 1995 se establecieron zonas de tregua temporales (ZTT), mientras se construían varios mercados nuevos y la MSJ definía su ubicación definitiva, por lo que se suspendieron los desalojos y decomisos contra las personas afiliadas a dos asociaciones de personas vendedoras. En los siguientes años, muchas volvieron a las calles; las confrontaciones y decomisos continuaron, aunque disminuyó la presencia de personas vendedoras en la Avenida Central (Meoño y Muñoz, s.f., p. 45; Araya, 2010, pp. 260-261; Luna y Rímola, 2014, p. 58).

Un grupo de 126 personas vendedores de la calle 8 estaba de acuerdo con la decisión de la MSJ de reubicarles en otro sitio (un mercado periférico). Quienes se opusieron al traslado fueron varias personas vendedoras que estaban fuera de la organización, quienes hicieron público su malestar y prometieron medidas de presión (“Apoyo a la Municipalidad”, 1994, p. 6 A).

En 1996 había 400 personas vendedoras callejeras con patente. Unas tenían puestos fijos y otras estaban en las ZTT.

También estaban los “vendedores ilegales”, por lo que la cifra no era precisa. Los sitios autorizados para la venta de todo producto crudo y que no requería refrigeración eran la calle 8 sobre las avenidas 1,2, y 3, la avenida 4 (entre calles 6 y 8) y las aceras frente al Hospital San Juan de Dios (Gentilini, 1996, p. 4 A).

En 1998 el Mercado del Paso de la Vaca fue inaugurado. Las personas vendedoras tenían esperanzas y les entusiasmaba contar con protección contra la lluvia y el sol y mejores condiciones de trabajo. Empero, también tenían dudas debido a que en el sitio no circulaban muchas personas y abundaban la delincuencia y la inseguridad. Un grupo de 120 personas permanecieron en la calle 8, ya que el mercado no fue abierto para la reubicación de la totalidad de las personas vendedoras. (Quesada, 1998, 6 A). Desde un principio las ventas fueron bajas y poco a poco fueron abandonándolo hasta que quedó vacío.

Conclusiones

En este trabajo se planteó que las ventas en los espacios públicos del centro de San José constituyeron una expresión de la EP, en el marco de la liberalización económica y las transformaciones en los mercados laborales. La noción tradicional del trabajo perdió peso y fue resignificada por un colectivo de personas que requerían ganarse el sustento. Estas cambiaron también la noción preexistente sobre el trabajo en las calles y se insertaron en la globalización como actores no hegemónicos, pero activos dentro de una red de circulación de bienes y dinero.

El perfil de las personas vendedoras era cada vez más urbano y tendieron a distanciarse de la fase productiva de la mercadería que ofrecían. También se añadieron personas migrantes de El Salvador y Nicaragua, urgidas de un ingreso económico y que fueron decisivas en la expansión de las ventas en las calles, aunque la población salvadoreña fue disminuyendo, al igual que el peso de las importaciones de ese país.

Las personas trabajadoras de las calles aprovecharon la globalización y se volvieron actores clave para que algunos

productos agrícolas, juguetes y objetos diversos estuvieran al alcance popular. A su vez, desarrollaron una relación comercial con algunos negocios, que fungieron como proveedores e intermediarios. La anhelada autonomía no era total y estaba vinculada directamente con la oferta comercial, la ubicación y la infraestructura utilizada.

El mobiliario urbano fue aprovechado y resignificado en favor de las ventas en las calles, caños, aceras, parques y otros espacios. Con materiales diversos, trabajo e ingenio, levantaron tramos para las ventas e idearon mecanismos para almacenar y exhibir la mercadería y atraer el público, aunque esto también transgredió la ya deteriorada estética urbana. También dejó claro que los decomisos y los desalojos no eran una solución integral en el largo plazo, sino que la negociación y la búsqueda de soluciones de mutuo beneficio podían tener mejores resultados, al menos en el corto plazo.

Corea del Sur, Taiwán, Hong Kong y China se volvieron grandes proveedores de artículos de bajo costo. Las personas vendedoras tenían una amplia gama de “tiliches”, “baratijas” y objetos diversos a la venta con el propósito de ser utilizados como adornos en el hogar, bisutería, artículos de belleza, juguetes o utensilios. Esto también era un reto para las personas vendedoras, como intermediarias entre la mercadería y la clientela. Había que conocer las necesidades, los gustos y el presupuesto de quienes circulaban en los alrededores, por lo que la ubicación resultaba clave también para el éxito en las ventas.

La venta de hortalizas, raíces y frutas se diversificó con las políticas de apertura económica. Esto deparó un reto doble cuando había frutas partidas o peladas para su consumo inmediato, dado que su ingesta causaba impactos negativos en la salud pública y las personas vendedoras casi no tenían otras alternativas laborales, por lo que volvían a las calles. Con el anuncio de la llegada del cólera en 1991 al país, el MS intensificó las campañas de prevención y suprimió con mayor velocidad los puestos de alimentos y

bebidas preparados en el sitio, incluyendo las frutas partidas. Esto logró disminuir aún más la actividad, aunque en años posteriores tuvo un ligero repunte.

Las ventas decembrinas tradicionales se combinaron con la de “baratijas” importadas y beneficiadas con la reducción a los aranceles de importación. La MSJ cedió parcialmente y toleró su permanencia en ciertos lugares durante diciembre, tras diversas negociaciones y para evitar enfrentamientos violentos.

El Mercado del Paso de la Vaca fue el proyecto emblema de la MSJ y se inauguró en 1998 para albergar a vendedores de productos agrícolas (y de “tiliches” en menor medida). Los pronósticos más pesimistas se cumplieron, hasta que terminó abandonado, tras una serie de intentos fallidos por retener a las personas vendedoras, que optaron por volver a las calles.

Bibliografía

- (15 de agosto de 1985). *La República*, 1.
- Aguilar, M. (1989). *Clase trabajadora y organización sindical en Costa Rica, 1943-1971*. Porvenir-FLACSO-ICES.
- Aguilar, N. (30 de noviembre de 1990). Yo, vendedor ambulante. *La Nación*, 5 A.
- Aguilar, N. (1 de diciembre de 1990). Peces gordos controlan ventas callejeras. *La Nación*, 5 A.
- Alba, C. y Braig, M. (2012). Organización política local y entrelazamientos transregionales del comercio ambulante en la Ciudad de México. *Iberoamericana* (48), 129-141).
- Apoyo a la Municipalidad. (19 de agosto de 1994). *La República*, 6 A.
- Araya, M. C. (2010). *San José. De “París en miniatura” al malestar en la ciudad: medios de comunicación e imaginarios urbanos*. EUNED.
- Araya, M. C. (2021). *De la “pequeña Wall Street” a la ciudad de los pulseadores. Las ventas que corren por las calles del mundo*. Editorial UCR.
- Arias, D. (23 de diciembre de 1987). Locura colectiva. *La República*, 16.
- Arias-Echandi, M. L. y Antillón, F. (2000). Contaminación microbiológica de los alimentos en Costa Rica. Una revisión de 10 años, *Revista Biomédica* 11 (2), 113-122.

- Arteaga, M. (1 de diciembre de 1992). Bajó precio de manzanas, uvas y peras. *La Nación*, 5A.
- Arteaga, M. (6 de diciembre de 1992). Juguetes importados acaparan mercado. *La Nación*, 8A.
- Así ven las cosas los vendedores ambulantes. (21 de enero de 1983). *Libertad*, 6.
- Barrantes, V. J. (18 de abril de 1991). Amenaza del cólera se cierne sobre vendedores. *La República*, 2 A.
- Batista, M. (31 de mayo de 1995). Ambulantes denuncian violación de convenio. *Al Día*, 8.
- Batista, M. (10 de noviembre de 1994). Nuevo mercado para “ambulantes”. *Al Día*, 4.
- Braig, M. y Göbel, B. (2013). Entrelazamientos transpacíficos desiguales: las relaciones económicas entre América Latina y China. En O. Ette, W. Mackenbach y H. Nitschack (eds.), *TransPacífico. Conexiones y convivencias en AsiAméricas. Un simposio transareal*, p. 53-64. Editorial Tranvía.
- Brenes, M.F. (13 de octubre de 1989). Recado para la doctora Ross. *La República*, 20 A.
- Concejo dice que no puede controlar ventas callejeras. (8 de diciembre de 1983). *La Nación*, 2 A.
- Congreso oficializó ventas ambulantes. (1 de julio de 1981). *La República*, 3.
- Consideran que es baja la venta de uvas y manzanas. (13 de diciembre de 1985). *La Nación*, 12 A.
- Cordero, L. (13 de diciembre de 1981). Trabajar es sobrevivir. *La República*, 14.
- Cordero, R. (12 de abril de 1989). Piden control sobre las ventas ambulantes. *La Prensa Libre*, 5.
- Coto, J. (15 de noviembre de 1984). Distribuidores salvadoreños nutren las ventas callejeras. *La Nación*, 6 A.
- Denuncian caos en Mercado Borbón. (30 de julio de 1989). *La República*, 4 A.
- Durán, L. A. (2013). *Cartografías josefinas: ventas ambulantes y espacio público*. Editorial Universidad Nacional.
- Economía navideña viste informalmente. (12 de diciembre de 1989). *La República*, 33 A.

- Estrada, R. (14 de agosto de 1995). Tiempos difíciles para comercio. *La República*, 10 A.
- Expropiarán terreno para edificar plaza. (18 de febrero de 1988). *La Nación*, 8 A.
- Fuentes, J. L. (13 de diciembre de 1992). Policía decomisa ventas ilegales de la calle 10. *La República*, 30 A.
- Gago, V. (2014). *La razón neoliberal. Economías barrocas y pragmática popular*. Tinta Limón.
- Gentilini, A. (7 de setiembre de 1996). Buscan acomodo para vendedores ambulantes. *La República*, 4 A.
- Gobierno da ultimátum a vendedores callejeros. (1986, 23 de setiembre). *La Nación*, 12 A.
- Gómez, R. (1991). *La reproducción social de los comerciantes informales del casco comercial de la ciudad de San José*. [Tesis de Licenciatura en Antropología, Universidad de Costa Rica].
- González, L. (9 de agosto de 1990). Un problema social con disfraz de chinamo. *La República*, 6 A.
- González, L. (9 de marzo de 1991). El Gobierno negocia con vendedores ambulantes, *La República*, 6 A.
- González, R. (21 de diciembre de 1994) Murió el “avenidazo”. *La República*, 4 A.
- Gran venta callejera. (16 de agosto de 1986). *La República*, 1-2.
- Guerrero, L. (4 de octubre de 1992). Costarricenses deben exigir higiene en los alimentos, *La República*, 12 B.
- Guevara, J. D. (10 de octubre de 1993). Peones de sol a sol. *La Nación*, 8 A.
- Jiménez, V. y otros. (1992). *La respuesta del estado ante los problemas del sector informal de la economía costarricense: un análisis desde la perspectiva del Trabajo Social*. [Tesis de Licenciatura en Trabajo Social, Universidad de Costa Rica].
- La Municipalidad incapaz de frenar las ventas callejeras. (16 de agosto de 1984). *La República*, 3.
- León, J. (2012). *Historia económica de Costa Rica en el siglo XX. Tomo II: La economía rural*. IICE-CIHAC.
- Loaiza, M. (8 de febrero de 1994). Caos en Avenida Central. *La Prensa Libre*, 3.

- Luna, K. y Rímola, J. (2014). *De tolerancia a represión: análisis del proceso de cambio en la política pública de venta ambulante en el cantón central de San José, durante el período 2002-2006*. [Tesis de Licenciatura en Ciencias Políticas, Universidad de Costa Rica].
- Maldovan, J. (2018). *La economía popular: debate conceptual de un campo en construcción*. Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo.
- Mata, L. (1992). *El cólera. Historia, control y prevención*. Editorial de la Universidad de Costa Rica-Editorial Universidad Estatal a Distancia.
- Mathews, G. y Alba, C. (2021). Introducción. ¿Qué es la globalización desde abajo? En Carlos Alba, Gustavo Lins Ribeiro y Gordon Mathews (coords.), *La globalización desde abajo. La otra economía mundial*, pp. 27-51. Fondo de Cultura Económica-El Colegio de México.
- Mendoza, D. (8 de febrero de 1989). Salud encuentra contaminación fecal en ventas callejeras. *La Nación*, 5 A.
- Meoño, C. L. y Muñoz, V. (s.f.). *De la ciudad y el chinamo: una historia de comerciantes de la calle*. Defensoría de los Habitantes.
- Molina, C. (11 de enero de 1990). Y el Ministerio de Salud... ¿qué? *La Prensa Libre*, 8.
- Moya, R. (23 de noviembre de 1990). Vendedores a la avenida central. *La Nación*, 5 A.
- Novoa, V. (4 de julio de 1993). La magia del Mercado Borbón. *La República*, 13-14 C.
- Peralta, R. (23 de diciembre de 1992). Vendedores ambulantes luchan por sobrevivir. *La República*, 2 A.
- Peralta, R. (19 de diciembre de 1993). Gran venta de juguetes en vísperas de Navidad. *La República*, 8 A.
- Quesada, B. (27 de noviembre de 1998). Vendedores abandonan Calle 8. *La República*, 6 A.
- Rabossi, F. y Tassi, N. (2023). *Globalización popular en América Latina: por una teoría etnográfica*. Instituto de Investigaciones Sociológicas Maurice Lefebvre.
- Ramírez, A. A. y Murillo, M. A. (2003). *Análisis Comparativo de los Efectos Jurídicos y las Repercusiones Socioeconómicas del Sector Informal en Costa Rica. Análisis de la Ley de Ventas Ambulantes y Estacionarias Vigente. Propuestas para una Eventual Reforma*. [Tesis de Licenciatura en Derecho, Universidad de Costa Rica].

- Ross, M. (1994). *Las frutas del paraíso*. Editorial de la Universidad de Costa Rica.
- Scarcevic, D. (5 de diciembre de 1994). Cosas de la economía. *La República*, 20 A.
- Schettini, P. y Sarmiento, J. (2000). Relación entre trabajo, ciudadanía y democracia, en I. Cortazzo y C. Moise (comps.), *Estado, salud y desocupación. De la vulnerabilidad a la exclusión*, pp. 87-119. Paidós.
- Se gana el pan horadamente y fue tratada como si fuera delincuente. (17 de octubre de 1986). *Libertad*, 11.
- Se preparan para más ventas callejeras. (22 de noviembre de 1983), *La República*, 3.
- Solórzano, J. (7 de diciembre de 1992). Inician control a ventas callejeras. *La Nación*, 4 A.
- Testimonio de una familia trabajadora. (19 de febrero de 1982). *Libertad*, 7.
- Tilicheros volvieron a la avenida central. (10 de noviembre de 1991). *La República*, 8 A.
- Turno en la Avenida Central. (18 de diciembre de 1993). *La República*, 13 A.
- Umaña, J. (12 de enero de 1988). Desaparecerán frutas peladas. *Diario Extra*, 5.
- Valverde, L. (16 de noviembre de 1991). Hoy cierran calle 8 para ventas ambulantes. *La República*, 4 A.
- Varela, I. (14 de setiembre de 1996). Persiste contaminación fecal en alimentos. *La República*, 4 A.
- Vega, L. (4 de junio de 1991). Intensifican acción contra los vendedores ambulantes. *La República*, 7 A.
- Ventas callejeras: síntoma de crisis y desempleo. (9 de diciembre de 1983). *Libertad*, 7.
- Ventas callejeras con mercadería extranjera. (23 de diciembre de 1981). *La Prensa Libre*, 4.

CAPÍTULO 5

El empleo informal: un análisis desde las economías de base.

Costa Rica, 2020-2025.

Jesús Quirós González

Introducción

En la época de las redes sociales y las plataformas digitales, el empleo informal ha tenido una nueva evolución. Esto debido a que las personas han encontrado nuevas formas de generar un ingreso económico, sin pasar por elementos formales y regulatorios. Con el auge de las plataformas digitales como UBER o DIDI tanto para el transporte de personas, como de mercancía o el uso de redes como Instagram, para la venta de todo tipo de negocios, desde alimentación, hasta ropa, que ha generado un nuevo nicho de mercado dentro del sector informal.

Lo anterior representa una nueva manera de analizar el alcance de un elemento como el empleo informal, el cual ha estado presente durante el desarrollo de la economía capitalista y que su estudio ha ido en constante evolución desde la segunda mitad del siglo XX, de la mano de la necesidad de tratar de dar una explicación a esta problemática.

La precarización laboral que puede darse en estos nuevos espacios viene de la mano de una necesidad de ingreso por parte de las personas. Lo anterior visto desde la óptica de las economías de base, plantea una forma de supervivencia en tiempos de crisis económica o necesidad, lo cual en ocasiones ha sido romantizado con base en una visión equívoca del emprendedurismo, bajo la idea de hazlo por ti mismo, sin la necesidad de ser regulado por el Estado.

Este capítulo se centra en la definición más institucionalizada del empleo informal. La descripción del empleo informal en Costa Rica en los últimos cinco años, así como la relación que existe entre la informalidad y las nuevas tendencias de empleo como las plataformas digitales, pone en evidencia que existe una relación directa con las economías de base, por lo que se aborda la interrogante de ¿cómo las personas logran sobrevivir en momentos de crisis económica? Para ello se plantean dos preguntas importantes para guiar la investigación ¿Cuáles son las características del empleo informal en Costa Rica del 2020 al 2025? ¿Cómo se puede explicar la relación del empleo informal con las nuevas formas de trabajo?

El concepto de empleo informal

El empleo informal es uno de los temas que se ha logrado abordar a partir de la consolidación de modelos de medición y encuestas de empleo en diversas regiones del planeta. Esto se evidencia con mayor claridad en la segunda mitad del siglo XX, de la mano del crecimiento de los instrumentos de recolección de datos por parte de organismo internacionales como la UNESCO o la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

El concepto en sí de la informalidad o el sector informal, se comienza a acuñar a finales de los años sesenta del siglo XX, pero se hace público a inicios de la década de 1970. Se considera que su origen como concepto está vinculado con el estudio sobre la fuerza de trabajo en el sur de Ghana,

centrado en el tipo de trabajo de migrantes del grupo étnico de los Frafras del norte de Ghana, realizado por Keith Hart. Este autor señaló algunos elementos importantes a considerar como parte de la descripción y definición del sector informal, por un lado, establece la importancia del análisis del sector informal dentro de la economía al afirmar que “muchos de los bienes y servicios que se compran en la ciudad se producen de manera informal, por lo que su exclusión del análisis económico resulta injustificada”. (Hart, 1973, pág. 85) Esto resalta la importancia del estudio del sector informal y la necesidad del mismo dentro de la sociedad. Por otra parte, describe la manera en la cual solía ser visto a inicio de los años setenta del siglo XX al sector informal, ya que, según el autor “las actividades informales se reconocen como típicas de la vida económica en las ciudades de los países en desarrollo y desarrollados, pero su importancia general podría considerarse insignificante, excepto, por supuesto, para las personas desafortunadas obligadas a vivir de esta manera” (Hart, 1973, pág. 84)

Posteriormente, se da una institucionalización del concepto por parte de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Ya para la década de 1950 se planteaba en los informes de la organización internacional el término subempleo que abarcaba a todas las personas que, por diversas razones, trabajaban fuera del ámbito industrial, privado o público. Pero además se volvía constantemente a la explicación del modelo Keynesiano para explicar que estas personas subempleadas eran mano de obra no utilizada. (Benanav, 2019) El término economía informal o informalidad dentro de los sistemas económicos, es mencionado por primera vez en el año de 1972 por la Organización Internacional del Trabajo, en un informe realizado sobre las condiciones de trabajo de las personas en los países que fueron llamados tercermundistas. En el informe sobre Kenia de la OIT, se hablaba sobre una problemática encontrada a la hora de hacer las estadísticas del empleo en este país, ya que identificaron algunos casos de personas

que trabajaban sin un salario fijo o por cuenta propia y a esa condición la denominaron sector informal (OIT, 1972).

Pero este término fue profundizado por los economistas de la OIT. Como lo señala Aaron Benanav el concepto de sector informal viene precedido de un desarrollo de algunos conceptos por parte de la organización a la hora de buscar dar un orden a los aspectos laborales en el mundo y previo a esta conceptualización se trabajaron conceptos como trabajadores no asalariados o el mismo concepto de desempleo revisitado, porque no explicaban la manera en la cual dentro de una economía nacional o mundial actuaban ciertas personas sin un empleo definido, pero que formaban parte de los actividades económicas de los países. Por eso se estableció el concepto de sector informal o economía informal, al ver las dinámicas de las grandes ciudades, donde muchas actividades económicas no calificaban dentro de los estándares establecidos por la OIT (Benanav, 2019).

Diversas escuelas de pensamiento, han aportado al desarrollo del concepto de sector informal o de economía informal los cuales son abordados por Martha Alter Chen (Chen, 2012) (Ver tabla 5.1)

Ante estas diversas maneras de abordar la informalidad para su estudio, la OIT en la décimo quinta Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo (CIET) establece la definición de Sector Informal con el fin de brindar un marco para su estudio de los diversos países de este sector de la economía, por lo cual se define como:

El sector informal puede describirse en términos generales como un conjunto de unidades dedicadas a la producción de bienes o la prestación de servicios con la finalidad primordial de crear empleos y generar ingresos para las personas que participan en esa actividad. Estas unidades funcionan típicamente en pequeña escala, con una organización rudimentaria, en la que hay muy poca o ninguna distinción entre el trabajo y el capital como

Tabla 5.1*Aproximaciones de las escuelas de pensamiento a la Economía Informal*

Escuela de Pensamiento	Definición de Economía Informal	Teoría causal de la Economía Informal
Dualistas	El sector informal de la economía comprende actividades marginales, distintas provenientes y no relacionadas con el sector formal, que proporcionan ingresos para los pobres y una red de seguridad en tiempos de crisis.	Las personas trabajadoras informales son excluidos de la economía moderna por el desbalance existente entre el aumento de la población y la generación de empleos dentro de la industria.
Estructuralistas	La economía informal es un conjunto de unidades económicas subordinadas (microempresas) y personas trabajadoras que sirven para reducir los costos de insumos y mano de obra y, con ello, aumentar la competitividad de grandes empresas capitalistas	El Capitalismo impulsa el crecimiento de la economía informal, específicamente, por los intentos de las empresas formales de reducir los costos laborales y aumentar la competitividad y la reacción de firmas formales al poder del trabajo organizado, regulación estatal de la economía (en particular, impuestos y legislación); a la competencia global; y al proceso de industrialización (en particular, industrias extraterritoriales, cadenas de subcontratación y especialización flexible).
Legalistas	El sector informal está compuesto por microempresarios "valientes" que eligen operar de manera informal para evitar los costos, el tiempo y el esfuerzo del registro formal y quién necesita derechos de propiedad para convertir sus activos en activos legalmente reconocidos	Un sistema legal hostil lleva a las personas trabajadoras por cuenta propia a operar informalmente con sus propias normas informales extrajurídicas.
Voluntaristas	La economía informal está compuesta por una serie de microempresarios que buscan eludir las regulaciones y los impuestos, pero por el simple hecho de querer hacerlo de esta manera y no por los costos para entrar dentro de la economía formal.	Las personas trabajadoras informales eligen operar de esta manera después de sopesar los costos-beneficios de informalidad en relación con la formalidad.

Nota. Elaboración propia a partir de (Chen, 2012).

factores de producción. Las relaciones de empleo – en los casos en que existan – se basan más bien en el empleo ocasional, el parentesco o las relaciones personales y sociales, y no en acuerdos contractuales que suponga garantías formales. (CIET, cómo se citó en OIT, 2013).

Otra acepción del concepto de informalidad es la que plantea Zoran Slavnic al distinguir dos tipos de informalidad. La informalidad desde arriba que hace referencia a una serie de estrategias utilizadas por las grandes industrias para lograr mayores beneficios, como los subcontratos, la explotación de mano de obra, el outsourcing, estas maneras, son características de los grandes mercados. Además, se encuentra la informalidad “desde abajo”, que aglutina las actividades realizadas por personas en estados de marginalidad o pobreza al margen de la ley como un medio de supervivencia en algunos casos, estos negocios informales generan encadenamientos con otros negocios informales. (Slavnic, 2012).

En términos teóricos, tres abordajes principales del concepto la ofrecen la óptica marxista, la neoclásica y la keynesiana. Desde el marxismo, según lo explica Thomas Barnes, se interpreta la economía informal como una extensión y transformación de las formas de explotación del capitalismo, no como algo separado o ajeno a este. El capitalismo reorganiza la producción y el empleo para seguir extrayendo plusvalor, mediante nuevas formas de trabajo precario, subcontratado o “autoempleado”, donde las personas trabajadoras siguen dependiendo de la venta de su fuerza de trabajo, aunque sea fuera del empleo formal. (Barnes, 2012)

Por su parte Dell’Anno, establece desde el punto de vista neoclásico, los agentes económicos son racionales y toman decisiones basadas en la maximización de su bienestar (utilidad o beneficio) bajo ciertas restricciones de recursos. Las unidades productivas (empresas o individuos) optan voluntariamente por participar en la economía informal como resultado de un cálculo racional de costos y beneficios (Dell’Anno, 2022).

Por su parte, el trabajo de Nicoletta Batini, Emanuela Lotti y Paul Levine, establece desde una óptica neo keynesiana que la economía formal y la informal conviven, cada una con una manera de producir diferente y empleando otras tecnologías. La economía informal es vista como un escape a la rigidez de la economía formal, absorbiendo mano de obra que es excluida de la economía formal. (Batini, Lotti, & Levine, 2019)

Al final, partiendo de lo establecido por William F. Maloney y Jaime Saavedra-Chanduvi en un trabajo realizado para el Banco Mundial en el 2007, el: “término informalidad tiene diferentes significados para diferentes personas, pero casi siempre tiene connotaciones negativas: trabajadores desprotegidos, regulación excesiva, baja productividad, competencia desleal, evasión de la ley, bajos pagos o no pago de impuestos y trabajo “subterráneo” (Maloney & Saavedra-Chavundi, 2007, pág. 21) donde el único punto en común radica en la relación directa que existe entre la economía formal y la informal.

La problemática medición del sector informal

La medición del sector informal por su naturaleza, es algo que puede tornarse complicado, esto debido a los múltiples factores asociados a este fenómeno, como lo mencionan William F. Maloney y Jaime Saavedra-Chanduvi, aun teniendo los datos, los cuales en ocasiones son difíciles de encontrar

¿En qué aspectos estamos interesados? ¿Empresas grandes que evaden los impuestos? ¿Microempresas que son administradas a través de mecanismos familiares y comunitarios y no se relacionan con el Estado? ¿Trabajadores excluidos de los empleos formales? ¿O mujeres que renuncian a trabajos con beneficios para estar con sus hijos y trabajar de forma independiente? Esta heterogeneidad es claramente la manifestación de múltiples fenómenos sociales y económicos que han dado lugar a una cacofonía de caracterizaciones e intentos de medición (Maloney & Saavedra-Chavundi, 2007, pág. 27).

Esta realidad explica la complejidad de la medición del sector informal, pero también deja en evidencia una realidad palpable: el sector informal implica posibilidades de sobrevivencia en contextos de crisis, a su vez, se establece como un fenómeno amplio que implica la explotación de la mano de obra, explotación sexual, criminalidad, personas que trabajan por subsistencia, así como aspectos relacionados a maneras de generar más ingresos por parte de grandes empresas. Todo lo anterior es precisamente lo que convierte al sector informal en algo difícil de medir.

Ante esto, Maloney y Saavedra-Chavundi (2007) exponen dos métodos para la posible medición de la economía informal, los directos y los indirectos. Los métodos directos hacen referencia a encuestas voluntarias, como las encuestas de hogares y empleo, así como también las auditorías fiscales realizadas por entes estatales o supra nacionales. Por su parte, los métodos indirectos que surgen a partir de datos como la discrepancia entre el total de la fuerza laboral y la cantidad de personas dentro del empleo formal, utilizan métodos monetarios, entre otros, que buscan a partir de datos inferir las características propias del sector informal.

Caracterización del sector informal en Costa Rica entre 2020-2025

Para el caso de Costa Rica el estudio del sector informal, se ha hecho utilizando datos de las encuestas de hogares y encuestas de empleo, que utilizan métodos directos, con base en lo solicitado por medio de la OIT para el análisis del empleo y su evolución, las primeras encuestas de hogares y empleo donde se establece el término del sector informal se encuentran a partir de 1976.

El presente capítulo estudia el comportamiento del sector informal en el último lustro de la historia del país, a partir de la pandemia del COVID 19 y el proceso de recuperación

de esta por parte de la economía. Para el análisis, se utilizan las encuestas continuas de hogares realizadas por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Si bien es cierto que el período en estudio abarca del año 2020 al 2025, se hará un breve repaso por el comportamiento del sector informal en el año 2019, para reconocer sus características del mismo antes de la pandemia.

Desde el año 2019 hasta el 2025, el comportamiento general de los datos del empleo informal según la Encuesta Continua de Empleo (INEC, 2019-2025) han presentado una tendencia a la baja, pasando del 46,5 % del total de la población ocupada para el 2019 a un 35,8% del total de la población ocupada para el año 2025, datos, con excepción del año 2025, provienen del cuarto trimestre de cada año (Ver tabla 5.2). Por su parte, la población ocupada se mantiene entre los 2.100.000 o 2.200.000 de personas, con excepción del año 2020, en medio de la pandemia, que disminuyó hasta 1.953.151 personas.

Tabla 5.2

Población ocupada y empleo informal en Costa Rica del 2019 al 2025

IV Trimestre			
	Población total ocupada	Población total ocupada en el sector informal	Porcentaje
2019	2.182.818	1.015.102	46,5
2020	1.953.151	881.628	45,1
2021	2.103.963	963.297	45,8
2022	2.173.061	953.000	43,9
2023	2.081.900	777.175	37,3
2024	2.231.365	845.402	35,8
II Trimestre			
2025	2.153.487	771.471	35,8

Nota. Elaboración propia a partir de datos de la Encuesta Continua de Empleo (INEC, 2019-2025).

Según los datos de la Tabla 5.2, se puede notar una disminución en el sector informal de cerca del 10% del total de la población ocupada desde el año 2019 al año 2025. Visto de una manera muy superficial, se podría afirmar que se ha trabajado en buscar una disminución del sector informal, pero aquí es importante analizar un dato más y es la población desempleada que busca empleo y la población desempleada que no busca empleo.

Es importante lo que describe el Ministerio de Trabajo en el Informe del empleo informal en el mercado laboral costarricense 2011-2025, donde entre sus principales análisis, se encuentran:

- Existe una marcada diferencia en sentido etario de las personas dentro del empleo informal, donde las personas mayores de los 60 años, tienen una tasa del 60,7%.
- Existe una mayoría de hombres en comparación a las mujeres en el empleo informal
- A menor nivel educativo, puede existir mayor posibilidad de tener un empleo informal. Las personas con menor escolaridad enfrentan mayores obstáculos para acceder a empleos formales, lo que en muchas ocasiones las lleva hacia ocupaciones informales. Mientras que el 62,5% de las personas ocupadas con primaria incompleta o menos tienen un empleo informal, en el caso de las que poseen un título universitario este porcentaje es de 14,7%. (Ministerio de Trabajo, 2025)

La Tabla 5.3, aporta datos de la población desempleada y la tasa de desempleo ampliado, la cual según las encuestas del INEC se define como “Porcentaje de la población desempleada más la población fuera de la fuerza de trabajo disponible desalentada respecto a la fuerza de trabajo más la población fuera de la fuerza de trabajo disponible desalentada” (INEC, 2019-2025).

A partir de estos datos, se establece un porcentaje de la población que no se encuentra dentro del dato oficial

del empleo informal, por lo cual, se podrían emplear métodos indirectos para medirlo, donde se podrían plantear la siguiente interrogante ¿Cómo sobreviven este porcentaje de personas desempleadas? Podría decirse que viven con familiares, se encargan de labores en el hogar o que realizan actividades económicas diversas, pero no se registra la información en las encuestas, lo cual es lo normal dentro del estudio del sector informal.

Tabla 5.3
Personas desempleadas y tasa de desempleo ampliada en Costa Rica entre 2019-2025

IV Trimestre		
	Población Desempleada	Tasa de desempleo ampliada
2019	309.465	14,20%
2020	487.675	21,40%
2021	333.424	14,80%
2022	287.085	12,30%
2023	163.884	7,80%
2024	164.807	7,30%
II Trimestre		
2025	137.497	6,30%

Nota. Elaboración propia a partir de datos de la Encuesta Continua de Empleo (INEC, 2019-2025).

La Encuesta Continua de Empleo plantea una división de la población total ocupada en el sector informal, según el sector de actividad financiera, desarrollando las siguientes categorías:

1. Incluye agricultura, ganadería y pesca.
2. Incluye industria manufacturera, construcción, explotación de minas y canteras, suministros de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado, suministros de agua, evacuación de aguas residuales y gestión de desechos y contaminación.

3. Incluye comercio y reparación, transporte y almacenamiento, hoteles y restaurantes, intermediación financiera y de seguros, actividades profesionales y administrativas de apoyo, administración pública, enseñanza, salud, información y comunicaciones, actividades inmobiliarias, actividades artísticas, de entretenimiento y recreativas, actividades de organizaciones y órganos extraterritoriales, otras actividades de servicios.
4. Comercio, incluye actividades de venta de diversos productos, como alimento, ropa, entre otros
5. Hogares como empleadores
6. Incluye actividades profesionales, científicas y técnicas, actividades de servicios administrativos y de apoyo, enseñanza y actividades de atención de la salud humana y de asistencia social.
7. Incluye actividades de asociaciones empresariales, transporte y almacenamiento, administración pública, actividades financieras, comunicaciones y otras, profesionales y de empleadores, actividades de sindicatos, actividades de otras asociaciones, reparación de computadoras y equipos de comunicaciones, reparación de enseres de uso personal y domésticos u otras actividades de servicios personales. (INEC, 2019-2025)

Partiendo de estas categorías de análisis, la tabla 5.4 registra el peso porcentual de cada una de estas, por lo que evidencia en buena manera dónde se concentra el peso de la población que trabaja dentro del sector informal en Costa Rica en los últimos cinco años: el área de servicios, lo cual se relaciona con trabajos como transporte de personas o mercancías, personas que trabajan dentro de sectores como el turismo, entre otros, seguido por otros trabajos relacionados también con los servicios, pero estos más dirigidos a servicios prestados a asociaciones empresariales, sindicatos o cooperativas. La importancia de este dato refleja una realidad: la gran mayoría de personas dentro del sector informal

trabaja en lo que se conoce de la manera coloquial como “camaronear”, es decir, en labores ocasionales o temporales para subsistir, a falta de un empleo fijo.

Relacionando los datos de la Tabla 2, sobre el comportamiento total del sector informal, el cual ha ido en disminución del 2020 al año 2025, con los datos de la Tabla 4, se denota que el porcentaje de personas que se emplean en el sector de servicios se encuentra en un aumento constante en los últimos dos años, pasado de un 65% en el año 2023 a cifras del 70% en el año 2024 y 72% para el tercer trimestre del año 2025. Lo anterior se puede explicar a partir del uso de plataformas digitales o aplicaciones para trabajar, ya sea en el transporte de personas como UBER o DIDI, o en el transporte de mercancías o comida, siendo estas las posibles opciones más rápidas para generar un tipo de ingresos económico en el caso de no tener un empleo formal. Este último elemento es importante de profundizar, para tratar de explicar la relación actual entre estas nuevas maneras de empleo y el sector informal.

Tabla 5.4
*Población ocupada en el sector informal, según ocupación,
Costa Rica 2020-2025. Valor porcentual*

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1. Sector primario	16,2	14,2	12,5	14,9	11,5	11,4
2. Sector secundario	18,9	16,5	20,7	19,9	17,7	16,4
3. Sector servicios	64,8	69,2	66,7	65,1	70,8	72,2
4. Comercio	17,3	18,3	16,6	16,6	19,3	17,8
5. Hogares como empleadores	10,5	10,4	13,9	10,3	10,9	11,2
6. Actividades profesionales, administrativas, enseñanza y salud	8,7	11	8,6	8,7	9,5	9,5
7. Otras actividades de servicios	28,3	29,5	27,6	29,4	31,1	33,6
8. No especificado	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

Nota. Elaboración propia a partir de datos de la Encuesta Continua de Empleo (INEC, 2019-2025).

Para complementar el análisis del comportamiento del sector informal el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (2024), realizó un informe sobre este del 2019 al 2024, dentro de los aportes importantes a señalar, está la clasificación propuesta. Esta divide la informalidad en 5 categorías o vectores:

- **Empleo informal precario:** Comprende a la población ocupada con empleo informal que no recibe ingresos (personas auxiliares no remuneradas) y aquellas que perciben ingresos menores a un salario mínimo con un nivel educativo bajo (primaria completa o menos).
- **Empleo informal medio en microempresas:** Corresponde a la población ocupada con empleo informal que perciben ingresos menores a un salario mínimo pero que cuenta con niveles educativos medios (secundaria), así como las personas con niveles educativos bajos y medios pero que perciben ingresos que representan más de un salario mínimo.
- **Empleo informal en empresas de 5 o más trabajadores:** Comprende a las personas ocupadas en establecimientos con 5 o más personas trabajadoras.
- **Empleo informal con nivel educativo alto:** Se refiere a la población con empleo informal que posee niveles educativos universitarios.
- **Empleo informal en hogares:** Corresponde a las personas con empleo informal que se dedican a actividades de hogares como empleadores. (Ministerio de Trabajo y Seguridad Social , 2024)

A partir de estas categorías del Ministerio de Trabajo realiza un análisis de cada uno de estos, dentro de lo más importante a destacar en cada uno de los vectores sería:

Precario: La mayor parte de la población corresponde a hombres con un nivel de escolaridad bajo, que se dedican principalmente al sector primario como la agricultura, la ganadería o la pesca.

Medio en microempresas: La mayor parte de la población son hombres con niveles educativos medios, es decir secundaria completa o incompleta, este sector se relaciona mucho con la construcción, el transporte, reparación de vehículos, entre otras actividades relacionadas con los servicios.

Empresa de cinco o más personas trabajadoras: En este vector se agrupan principalmente hombres, con niveles educativos medios y bajos (secundaria incompleta o menos) y que aparte de la educación regular no cuentan con títulos o certificaciones de educación no regular. Adicionalmente, la mayoría de la población no domina un segundo idioma y tienen de 25 a 35 años. Principalmente laboran en estas cinco actividades económicas: comercio, agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, transporte y almacenamiento, construcción, y actividades de alojamiento y servicios de comida.

Mayor nivel educativo: Este vector agrupa tanto hombres como mujeres. Por definición, cuentan con niveles educativos altos, sin embargo, la mayoría no cuenta con títulos o certificaciones aparte de la educación regular y no dominan un segundo idioma, este sector se caracteriza por profesionales que prestan algún tipo de servicios como clases privadas, consejerías o freelancing.

Empleo Informal en Hogares: Este vector agrupa principalmente a mujeres. Se caracterizan porque cuentan con niveles educativos muy bajos (primaria completa o menos), y además no poseen títulos o certificaciones aparte de la educación regular, ni dominan un segundo idioma. Por definición, corresponde a las personas que se dedican a actividades de hogares como empleadores y especialmente laboran en ocupaciones no calificadas. En cuanto al nivel de ingresos, la mayoría percibe menos de un salario mínimo y de uno a menos de dos salarios mínimos. (Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 2024)

De los elementos aportados en el análisis del Ministerio de Trabajo, es importante destacar que en el caso del empleo

informal de las mujeres, este se encuentra relacionado con aspectos dentro del mismo hogar, es decir en muchas ocasiones las mujeres deben además de buscar alguna fuente de ingreso, seguir siendo la encargada de las tareas del hogar. Aquí es importante ver las diversas maneras que pueden usar las mujeres para generar estos ingresos, los cuales podrían ser desde venta de alimentos preparados en casa, hasta venta de productos por catálogos de perfumes, maquillaje o elementos varios.

Además, se vuelve la notar lo que se registra ya en la tabla 5.4, la gran masa de la fuerza de trabajo dentro del sector informal, se relaciona a los servicios. Por ende, es importante ver como este sector de la economía es el gran motor de la economía informal y uno de los que más se ha transformado con el acceso a las redes sociales y a las aplicaciones. Con las cuales se pueden generar dinero, ampliando las oportunidades de tener una entrada económica.

Las redes sociales, aplicaciones y nuevas tendencias del sector informal

Durante la pandemia del COVID 19, fue muy común el uso de redes sociales para promocionar diversos productos que ayudaran a generar ingresos económicos. Desde personas que vendían comida y la iban a dejar a las casas. Hasta personas que impartían clases de deporte para que las personas lo hicieran en casa durante el tiempo que estuvieron las prohibiciones de movilidad y reunión de las personas.

Otro elemento que comenzó a proliferar durante este período, fueron los servicios de entrega de comida a partir de plataforma digitales, lo cual se convirtió en una manera de mover la economía. Este ejemplo puntual, ratifica la relación cercana que existe del sector informal con el sector formal de la economía.

Ante esta realidad Elías Miguel Ahuat, Ana Gabriela de León y Juan Roberto Hernández, en un estudio para Guatemala establecen que

Las nuevas tendencias y los avances tecnológicos, incluida la economía de plataformas, profundizan tendencias de largo plazo y vuelven más compleja la manera de entender la informalidad. Las recientes dinámicas de trabajo remoto y el crecimiento del comercio digital podrían potencializar nuevas formas de informalidad a futuro. Todo esto implica desafíos para la definición de informalidad, los sistemas de protección social y la gobernanza de las plataformas tecnológicas. (Ahuat, de León, & Hernández, 2025, pág. 6)

Lo anterior resume de una manera muy veraz las nuevas realidades del empleo a nivel mundial, sobre todo a la hora de profundizar en el sector informal, ya que las relaciones indirectas de las plataformas digitales con sus “servidores” o “socios” generan todo un marco de estudio para esta situación y se debe comenzar a entender esta nueva dinámica de empleo. Para el estudio de estas nuevas formas de empleo, se comienza a desarrollar a profundidad el concepto de formas atípicas de empleo, las cuales comienzan a darse con una mayor rapidez en el contexto de la llamada cuarta revolución industrial y en la consolidación de políticas neoliberales a nivel mundial, que comenzaron darse desde los años ochenta del siglo XX, pero que en la actualidad se establecen como el statu quo dentro del mercado. A partir de este contexto, Elías Miguel Ahuat, Ana Gabriela de León y Juan Roberto Hernández, citando a Abramo (2021) definen el empleo atípico como

El “empleo atípico” significa el distanciamiento del empleo a tiempo completo (empleo a tiempo parcial), de la prestación en las instalaciones del empleador (subcontratación, tercerización, trabajo a domicilio y trabajo de plataformas), del carácter continuo y permanente de la relación de trabajo (empleo a plazo fijo, de temporada, empleo intermitente, empleo eventual u ocasional), del carácter directo de la prestación (trabajo para un contratista o subcontratista, para una empresa de trabajo temporario, para una plataforma o para un proveedor de personal), de

prestación en relación de dependencia (trabajo autónomo, trabajo autónomo económicamente dependiente, relación de trabajo ambigua, nuevos modos de vinculación). Abramo (2021, como se citó en Ahuat, et al , 2025, p 22)

Ante esta nueva realidad, se hace inherente la necesidad de un nuevo análisis de las formas de empleo. Ya que, con empleos concernientes a las plataformas digitales, el tipo de relación que existe entre el trabajador y su “patrón” se vuelve muy diferente. Para ello usemos el ejemplo de las aplicaciones de mensajería o delivery, donde el trabajador del total del monto que se le cobra al usuario por la entrega, recibe un porcentaje del mismo. Pero no tiene una relación directa con su patrón, si no que solamente se da el depósito semanal de un dinero, sin tener garantías, derechos sociales o seguros médicos.

Pero estas nuevas formas de empleo, como lo señalan Ahuat et al. (2025)

Las formas de empleo llamadas “atípicas” pueden ayudar a las personas a insertarse en el mundo laboral o a complementar sus ingresos. En ese sentido, las plataformas digitales prometen oportunidades para democratizar la generación de ingresos. Sin embargo, presentan también el riesgo de la precarización del trabajo, lo que genera retos desde el punto de vista regulatorio y desafía el alcance de las normas laborales, fiscales y de protección a la fuerza laboral enmarcada en estos modelos. (Ahuat, de León, & Hernández, 2025)

Como lo plantean Kruskaya Hidalgo Cordero y Carolina Salazar Daza sobre América Latina y su relación con el empleo de las plataformas digitales

En nuestra región, los mercados laborales han estado caracterizados por la informalidad, precariedad y la explotación al adquirir mano de obra barata. Por esto, es pertinente pensar cómo estos modelos de negocios

permean e impactas mercados debilitados bajo discursos de falso emprendedurismo que -aprovechándose de la necesidad- intensifican formas extractivas para la expansión del capital. (Hidalgo & Salazar, 2020 pág 16).

Por tanto, ¿se puede vivir bien a partir de trabajo solamente por medio de aplicaciones digitales?, las autoras antes mencionadas indican que la respuesta es no, ya que significan jornadas de trabajo muy amplias por poco dinero (Hidalgo & Salazar, 2020). En el caso de Uber, la aplicación para el transporte de personas solamente permite un máximo de doce horas de estar conectado a la misma como conductor para poder generar un ingreso importante al día, hay que dedicar esa cantidad de tiempo. Pero la realidad va más allá de esto, ya que muchas personas además de Uber, también tiene instalada Didi y otra aplicación que les permita trabajar en lo mismo, lo cual pueden llegar a genera jornadas de trabajo de hasta quince horas o más. Se debe sumar el atenuante de las personas que no son dueñas de los vehículos que manejan, si no que deben pagar un alquiler mensual o diario sobre este. En un estudio realizado por la fundación Friedrich-Ebert-Stiftung, para el año 2020 en 103 conductores de Uber en Costa Rica, se indica que el máximo de horas permitidas por la aplicación para que una persona conduzca no llega a cubrir el monto diario de un salario mínimo, por lo cual, se afirma que existe una precariedad laboral entre este sector de la población. (Friedrich-Ebert-Stiftung, 2020)

Shirley Benavides y Kerlyn Suárez Espinoza indican que

“La diversidad en las modalidades de trabajo, como las formas atípicas, que por un lado, han permitido a un mayor número de personas participar del mercado laboral, pero, por otro, hacen necesario replantear las medidas regulatorias y las políticas públicas relacionadas con las condiciones de trabajo y los diferentes tipos de relación con las empresas contratantes” (Benavides y Suárez, 2022, pág 23)

Ante la necesidad de regular la relación laboral entre las personas trabajadoras y las plataformas, en Costa Rica se han presentado proyectos de ley ante el Poder Legislativo que no han sido aprobados. Judicialmente existe una sentencia que obliga a Uber a pagar aguinaldo, vacaciones y prestaciones ante un demandante, como lo resume el medio digital Delfino CR

El Juzgado de Trabajo del Tercer Circuito Judicial de San José sentenció este lunes en primera instancia que la empresa Uber en Costa Rica tiene relación laboral con los choferes de su plataforma, al declarar parcialmente con lugar una demanda entablada por un conductor que reclamó el reconocimiento de sus extremos laborales tras laborar desde el año 2017 para la empresa.

En sentencia 2023-212 de este 27 de marzo emitida por la jueza Carolina Fallas Sánchez, el Juzgado condenó a Uber a pagar lo correspondiente a vacaciones, aguinaldo y todo lo correspondiente a los regímenes de seguridad social (régimen de Invalidez, Vejez y Muerte; Fondo de Capitalización Laboral; Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias; y Riesgos del Trabajo) durante el tiempo que duró el vínculo laboral. (Madrigal, 2023)

Esta sentencia del año 2023 se une a otra sentencia similar de agosto del año 2025, que implica algún nivel de reconocimiento de derechos laborales. Se demuestra así, como en América Latina “la necesidad” se convierte en una forma para generar una relación desigual y de precarización laboral entre un trabajador y una compañía. Lo anterior, bajo el pretexto de que las personas necesitan un empleo, no se regulan este tipo de relaciones, las cuales en otros países ya se encuentran reguladas como, por ejemplo, en Reino Unido, donde los choferes de Uber son reconocidos como personas trabajadoras con sus respectivos derechos y garantías, o en la Unión Europea, donde Uber funciona bajo licencia de un servicio de taxi.

Las economías de base y su relación con el sector informal dentro de una nueva realidad laboral

En 1979, el historiador E.P. Thompson publicaba en su libro “Tradición, revuelta y conciencia de clase” un ensayo sobre una temática que había comenzado a trabajar en el año 1963: el concepto de economía moral, la cual después pasa a denominar “economía moral de multitud”. Esta idea recoge las herramientas utilizadas en las sociedades rurales preindustriales inglesas para poder tener acceso al trigo utilizado en la elaboración del pan, entre otros elementos, en épocas de escasez y hambruna, en contraposición con las leyes establecidas por la corona. “Sobre el fin de este tipo de economía el autor señala que, tras el avance de la economía libre de mercado, con el paso de los años desaparece la economía moral de las multitudes quedando reducida en un aspecto netamente salarial”. (Thompson., 1979, pág. 113)

Pero la lógica de Thompson para el estudio de las diversas maneras utilizadas por los habitantes rurales ingleses puede dar un punto de partida para decir que a lo largo del desarrollo de la economía capitalista esta economía moral de las multitudes, se fue transformando. Esta transformación se puede notar en diversos mecanismos utilizados por las personas para combatir las necesidades en época de crisis o en condiciones de pobreza, son precisamente estos mecanismos los que se pueden definir como las economías de base.

La crisis económica que comienza con la burbuja inmobiliaria del 2008 en los Estados Unidos y que se extiende a lo largo del planeta, presenta una serie de consecuencias globales, pero puntualmente se hace muy visible en los medios y las discusiones económicas, las consecuencias para el Sureste de Europa y para países de la periferia de la Unión Europea como Portugal y España. Dentro de este contexto describe Riccardo Guidi que “se desarrollaron una serie de mecanismos solidarios

por parte de la población como el trueque solidario, esquemas de comercio de intercambio local, monedas locales, bancos éticos, cooperativas de mercado local, cooperativas para la oferta de servicios sociales, formas alternativas de producción. Esta serie de mecanismos de resiliencia, que se han desarrollado a través del tiempo de una u otra manera, se comenzaron a estudiar en el contexto de la crisis del 2008 con el nombre de *grassroots economies*". (Guidi, 2019, pág. 82) Viales e Izquierdo señalan que estas implican formas de "cómo sobreviven las personas pobres, en el contexto de los determinantes estructurales de diversos estilos de crecimiento económico y de (des)desarrollo." (Viales & Izquierdo, 2018, pág. 132)

Por su parte Susana Narotzky desde la antropología para el año 2012, establece que los grandes modelos económicos capitalistas no toman en cuenta el estilo de vida diario de las personas y que las *grassroots economies* se convierten en una alternativa de supervivencia de los seres humanos. La autora plantea una interrogante interesante sobre la cual se puede construir una serie de respuestas al decir "¿Cuál es la participación de las personas ordinarias en la economía, ya sea de manera individual o grupal?" (Narotzky, *Europe in crisis: Grassroots economies and the anthropological turn*, 2012, pág. 630)

Ya que las relaciones de las personas dentro del modelo económico capitalista muchas veces han sido obviadas en los análisis de dicho modelo. Centrando el análisis en las estructuras macroeconómicas, en la producción, distribución y consumo, dejando de lado en muchas ocasiones los elementos cotidianos de la vida de las personas y cómo esto se relaciona de una u otra manera con la economía. Ante esto, Narotzky (2004), señala "Las relaciones sociales constituyen la expresión práctica, real y materialista de la actividad humana para la producción y reproducción en la vida real." (Narotzky, 2004, pág. 241).

Ante esta definición de economías de base se parte de la premisa de que el sector informal y estas maneras de economías de supervivencia van de la mano. Planteando la idea

señalada anteriormente de que el sector informal y el sector formal conviven de manera en la cual uno complementa al otro. Podría afirmarse que las economías de base conviven de igual manera con el sector informal de la economía, donde vemos como las personas buscan maneras de satisfacer sus necesidades básicas de diversas formas, por ejemplo, con la venta de comida, o ropa usada o asistencialismo social.

En la era de las redes sociales, estos elementos se ven ahora desde una nueva perspectiva, puesto que el uso de elementos como el Marketplace de Facebook o el Instagram ha hecho que las personas puedan comprar y vender desde comida hasta cualquier tipo de artículos, convirtiendo este espacio en uno donde las personas buscan un ingreso económico ya sea adicional o como principal fuente de ingreso.

Conclusión

El análisis del empleo informal en Costa Rica entre 2020 y 2025 revela una transformación estructural impulsada tanto por factores económicos como tecnológicos. La pandemia del COVID-19 generó la necesidad de nuevas dinámicas laborales, donde el auge de las plataformas digitales y las redes sociales plantea alternativas de subsistencia fuera del marco formal. Aunque las estadísticas registran una disminución del empleo informal en términos porcentuales, ello no implica necesariamente una mejora sustantiva en la calidad del trabajo. Más bien, se evidencia una reorganización del trabajo informal hacia sectores de servicios mediados por tecnologías, los cuales continúan careciendo de protección social, estabilidad y garantías laborales.

Asimismo, el capítulo pone de manifiesto la complejidad del fenómeno informal, que no puede entenderse de manera homogénea. Los datos del Ministerio de Trabajo y del INEC muestran que el empleo informal adopta múltiples formas —desde trabajos precarios en el sector primario hasta

microemprendimientos con niveles educativos más altos—, lo que demuestra que la informalidad atraviesa diversos estratos socioeconómicos. Esta heterogeneidad, lejos de ser un signo de dinamismo, evidencia las profundas brechas estructurales del mercado laboral costarricense, donde la falta de oportunidades formales empuja a miles de personas hacia estrategias de supervivencia económica.

Ante esta realidad, el auge de las plataformas digitales como una fuente de empleo, plantea la necesidad de una mayor regulación y la creación de políticas que verdaderamente normen la relación obrero patronal en estas circunstancias. Estas formas de empleo “atípicas” han engrosado la cantidad de personas trabajadoras dentro del sector informal de la economía.

El vincular el fenómeno de la informalidad con las economías de base, se comprende que esta no solo responde a la falta de empleo formal, sino también a mecanismos sociales de resiliencia ante la exclusión económica. Las economías de base —o *grassroots economies*— representan estrategias comunitarias y cotidianas de reproducción de la vida, donde las personas utilizan recursos mínimos y redes sociales para sostener su existencia. En la era digital, estas prácticas se reconfiguran mediante el uso de redes y plataformas que amplían las posibilidades de intercambio, pero que simultáneamente refuerzan la dependencia del trabajo precario. Por tanto, el desafío actual radica en construir marcos normativos y sociales que reconozcan el valor del trabajo informal sin perpetuar su condición de vulnerabilidad.

Bibliografía

- Ahuat, E. M., de León, A. G., & Hernández, J. R. (2025). *Empleo en plataformas digitales. Perspectivas sobre la informalidad y nuevas formas de informalidad ante el* (Vol. Working paper Series N° 54). Guatemala: UNDP LAC.
- Barnes, T. (2012). Marxism and Informal Labour. *Journal of Australian Political Economy*(70), 144-166.

- Batini, N., Lotti, E., & Levine, P. (2019). *The Costs and Benefits of Informalization in a Two-Sector New Keynesian model*. New Delhi: National Institute of Public Finance and Policy.
- Benanav, A. (2019). The origins of informality: the OIL at limit of the concept of unemployet. *Journal of Global History*(14), 107-125.
- Chen, M. A. (2012). *The informal economy: Definitions, theories and policies*. Cambridge, Massachusetts : WEIGO Workiing Papers .
- Dell'Anno, R. (2022). Theories and definitions of the informal economy: A survey. *Journal of Economic Surveys*(36), 1610-1643.
- Espinoza, S. B. (2022). Desempleo e informalidad en Costa Rica: ante la revolución tecnológica 4.0. *Revista Sociedad y Economía*, 27(62), 1-29.
- Friedrich-Ebert-Stiftung. (2020). *Plataformas digitales y precarización laboral en Costa Rica*. San José: Friedrich-Ebert-Stiftung.
- Guidi, R. (2019). Grassroots economies activism in hard times: Exploring Southern Europe citizens' alternative resilience. (F. Othengrafen, & K. Serrao, Edits.) *Urban resilience, changing economy and social trends*, 81-97.
- Hart, K. (1973). Informal Income Opportunities and Urban Employment in Ghana. *The Journal of Modern African Studies*, 61-89.
- Hidalgo Cordero, K., & Carolina, S. D. (2020). A modo de introducción. En K. Hidalgo Cordero, & S. D. Carolina, *Precarización laboral en plataformas digitales, una lectura desde América Latina* (págs. 13-20). Quito, Ecuador: Friedrich-Ebert-Stiftung.
- INEC. (2019-2025). *Encuesta Continua de Empleo*. San José: INEC.
- Madrigal, L. M. (27 de Marzo de 2023). Juzgado de Trabajo sentencia que Uber tiene relación laboral con sus choferes en Costa Rica. San José, San José, Costa Rica. Obtenido de <https://delfino.cr/2023/03/juzgado-de-trabajo-sentencia-que-uber-tiene-relacion-laboral-con-los-choferes-de-su-plataforma-en-costa-rica>
- Maloney, W. F., & Saavedra-Chavundi, J. (2007). Sector informal ¿Qué es, por qué nos importa y cómo lo medimos? En W. M.-C. Guillermo Perry, *Informalidad Escape y Exclusión* (págs. 21-39). Washington, D.C.: Banco Mundial.
- Ministerio de Trabajo y Seguridad Social . (2024). *Tendencia del empleo informal y características segun vectores IV trimestre 2019-2024*. San Jose, Costa Rica: Ministerio de Trabajo.

- Narotzky, S. (2004). *Antropología Económica: Nuevas tendencias*. Barcelona: Melusina.
- Narotzky, S. (2012). Europe in crisis: Grassroots economies and the anthropological turn. *Etnográfica*(16), 627-638.
- OIT. (1972). *Employment, incomes and equality: a strategy for increasing productive employment in Kenya*. Ginebra: OIT.
- OIT. (2013). *La medición de la informalidad: Manual estadístico sobre el sector informal y el empleo informal*. . Ginebra: OIT.
- Slavnic, Z. (2012). . The Political Economy of informalization. *European Societies*, 12, 3-23.
- Thompson., E. P. (1979). *Tradición, revuelta y conciencia de clase: Estudios sobre las crisis en las sociedades preindustriales*. Barcelona: Crítica .
- Trabajo, M. d. (2025). *Empleo informal en el mercado laboral costarricense: II Trimestre 2011-2025*. San José.
- Viales, R., & Izquierdo, C. (2018). Hacia una definición de las grassroots economies para la investigación histórica: familia, redes de ayuda mutua, mercado laboral, microcrédito y estrategias de supervivencia de las economías de base. *Revista de Ciencias Sociales*(162), 131-148.

CAPÍTULO 6

Transformaciones económicas en Cuba y sostenibilidad de la vida: claves feministas para pensar los espacios socioproductivos

Maura Febles Domínguez

Introducción

El proceso de reconfiguración económica que vive Cuba desde inicios del siglo XXI ha dado lugar a un escenario productivo plural, en el que el sector estatal convive con formas diversas de gestión no estatal, desde micro, pequeñas y medianas empresas privadas hasta cooperativas y proyectos socio-productivos comunitarios. Este giro, legitimado en marcos normativos y constitucionales recientes (Consejo de Estado, 2019), representa una ruptura relevante respecto a la histórica centralidad estatal en la producción y provisión de bienes y servicios, eje articulador de la política social y del contrato redistributivo que caracterizó al socialismo cubano durante más de cinco décadas.

El impulso a formas productivas no estatales no se presenta como un desplazamiento absoluto del Estado, sino como un proceso de actualización institucional orientado

a dinamizar la economía sin renunciar a los principios de equidad, universalidad y justicia social que han guiado al proyecto revolucionario (Partido Comunista de Cuba, 2011). Sin embargo, la materialización de este tránsito ha estado atravesada por tensiones coyunturales y estructurales: persistente bloqueo económico por parte de Estados Unidos, contracción de ingresos externos, pandemia global, presiones inflacionarias, dificultades logísticas y migración sostenida de población joven. Este contexto convierte la discusión sobre la transformación económica en una reflexión sobre los fundamentos políticos y sociales de la vida en común en la isla.

Examinar este proceso aparece como una tarea urgente en tanto la transición productiva no ha derivado, hasta ahora, en mejoras generalizadas en las condiciones de vida de la población. Distintos estudios y diagnósticos oficiales y académicos advierten una disminución del poder adquisitivo, complejidades en el abastecimiento alimentario, deterioro de servicios básicos, ampliación de desigualdades territoriales y sociales y reconfiguraciones profundas en las formas de acceso a ingresos y bienestar (Espina, 2017; Zabala y Echevarría, 2019; Laguardia, 2020).

Desde una perspectiva feminista, este escenario no puede evaluarse únicamente con variables macroeconómicas. La pregunta por el desarrollo y las relaciones sociales requiere situar en el centro la reproducción cotidiana de la vida, las condiciones en las que las personas acceden y sostienen bienes materiales, afectivos y simbólicos, y la forma en que se organiza la provisión social en un contexto donde el Estado reduce progresivamente sus funciones directas y donde los hogares absorben crecientes responsabilidades para la supervivencia cotidiana. La economía feminista propone que toda economía está atravesada por dinámicas de cuidado, reproducción social y sostenimiento de la vida (Carrasco, 2011; Pérez Orozco, 2014). Sin incorporar estas dimensiones, el análisis permanece incompleto y políticamente insuficiente.

Este artículo se posiciona en ese cruce: examina las transformaciones económicas cubanas bajo el prisma de la sostenibilidad de la vida y la economía feminista, y analiza las posibilidades y límites de los espacios socio-productivos como actores —no solo productores— en la reorganización social del cuidado y la reproducción social. El trabajo combina revisión documental, análisis teórico, e insumos cualitativos de procesos de acompañamiento a espacios productivos no estatales del grupo de investigación Galfisa, del Instituto de Filosofía de Cuba. Forma parte, además, del proyecto doctoral de la autora como parte de su formación doctoral en Ciencias Sociales en la Universidad Nacional de La Plata, en Argentina.

Los casos de estudio seleccionados para este análisis empírico son:

- 1) la mipyme privada MODEL (2022), dedicada a confecciones textiles en una amplia variedad, constituida en su mayoría por trabajadoras. Esta empresa cuenta con gran experiencia en el rubro manufacturero, pues antes de las reformas constituían una empresa estatal con la misma actividad productiva.
- 2) la cooperativa DAJO (2013), especializada en servicios de lavandería y confecciones menores. Surgida a partir de una iniciativa familiar, constituye una referencia en el sector, pues fue de las primeras cooperativas aprobadas bajo los cambios normativos implementados.

Ambas experiencias son distintivas de las principales transformaciones de la estructura económica cubana, y son tomadas para el estudio considerando su forma de gestión (privada y cooperativa), más allá del nivel de su complejidad estructural y funcional. Se concentran, además, en la producción manufacturera, la actividad urbana más representativa (cuantitativamente) dentro de los sectores no estatales, y se ubican geográficamente en la capital cubana, donde se acumulan una mayor cantidad y complejidad de los recientes rubros económicos.

El argumento central de este capítulo sostiene que los nuevos espacios socio-productivos constituyen terrenos fértiles para imaginar y ensayar formas alternativas de organización económica y social orientadas a la sostenibilidad de la vida. Ahora bien, esta potencialidad solo puede desplegarse si se asume una perspectiva que supere la histórica separación entre lo productivo y lo reproductivo y reconozca que toda actividad económica está sostenida por trabajo de cuidado, afectos y relaciones sociales que no son accesorias, sino constitutivas del proceso productivo. El análisis propuesto busca complejizar el estudio de las formas no estatales incorporando dimensiones de cuidado habitualmente relegadas al ámbito doméstico o comunitario y que rara vez se consideran dentro de los espacios donde se producen bienes y servicios. En estas experiencias, la interrelación entre producción y reproducción no es lineal ni pacífica: se expresa de manera concreta en las tensiones cotidianas vividas por quienes habitan estos proyectos y también se manifiesta como contradicción interna dentro de los propios sujetos, atravesados por demandas económicas, afectivas y comunitarias simultáneas. De allí que, sin políticas públicas coherentes con un enfoque feminista, sin reconocimiento material del trabajo de cuidados y sin dispositivos colectivos sólidos que sostengan la vida, la transformación económica corre el riesgo de perpetuar desigualdades y desplazar la crisis de sostenibilidad hacia los hogares y, particularmente, hacia las mujeres, reproduciendo una matriz patriarcal bajo nuevas formas institucionales y organizativas.

Reformas económicas, contexto actual y desigualdad social

Las reformas implementadas desde 2007 se orientaron a descentralizar funciones estatales, flexibilizar marcos de gestión, descentralizar decisiones económicas y reconocer actores privados en sectores no estratégicos (Torres, 2021).

La narrativa oficial insistió en que la expansión del sector no estatal no significaba un abandono del proyecto socialista, sino un camino hacia mayor eficiencia, innovación y autosostenimiento económico del país. Esta apertura estuvo guiada por los Lineamientos de la Política Económica y Social (PCC, 2011) y legitimada constitucionalmente en 2019, donde se reconocen expresamente las nuevas formas de propiedad y gestión (Consejo de Estado, 2019).

El seguimiento de este proceso de reformas desde las ciencias sociales ha arrojado contradicciones entre los documentos rectores de la reforma en el país, los valores que sostiene el discurso político oficial y numerosos resultados e implicaciones sociales que va teniendo su implementación. Los principales estudios sobre el tema advierten acerca de la profundización de desigualdades de género, etario-generacionales, territoriales y socioclasistas debidas al ingreso económico, al color de la piel, al lugar de procedencia, y a ciertas discapacidades (Fundora, 2021; Voghon, 2021); así como de una sobrecarga de las familias, y muy especialmente de determinados grupos de mujeres, a partir del costo de la crisis de los cuidados (Arias y Echevarría, 2021).

Diversas investigaciones coinciden en que los grupos con peor inserción en el nuevo esquema productivo son aquellos sin acceso a capital inicial, redes en el exterior, activos patrimoniales y apoyo familiar, configurando una especie de estratificación económica asociada a la capacidad de conectarse a circuitos económicos o sociales (Espina & Echevarría, 2018; Rojas, 2017). Para las mujeres, estas barreras se refuerzan por la sobrecarga de tareas domésticas, la persistencia de normas de género y las dificultades para acceder a mecanismos de financiación y formalización empresarial (Echevarría, 2014). Además, la inserción femenina en el sector privado suele concentrarse en actividades feminizadas, con contratos informales y menor protección laboral (Nerey, 2014).

Los efectos de este cambio estructural en la matriz económica cubana contrastan con un capital acumulado en políticas públicas distinguido por el sostenimiento de indicadores sociales positivos, y con un modo de socialización (cotidiano/nacional) basado en garantías de derechos universales, en valores de solidaridad y justicia social, susceptible de ser preservado. Desde una perspectiva feminista, esta dinámica revela desplazamientos relevantes en la organización social del bienestar. Las reformas económicas no han incluido transformaciones equivalentes en las políticas públicas de cuidado ni en el reconocimiento material del trabajo reproductivo. Por el contrario, los procesos de ajuste fiscal, eliminación de subsidios y contracción estatal han intensificado la dependencia de los hogares como unidades básicas de abastecimiento y cuidado. Las familias —y dentro de ellas las mujeres— absorben los costos de la transición económica, al gestionar simultáneamente la provisión de alimentos, el cuidado de personas dependientes, la búsqueda de ingresos complementarios y la resolución cotidiana de servicios antes garantizados por el Estado.

A esto se suma un componente demográfico crítico: Cuba experimenta un proceso acelerado de envejecimiento poblacional, combinado con una emigración mayoritariamente joven y feminizada en los últimos años. Según estimaciones académicas recientes, entre 2022 y 2023 el país pudo haber perdido entre el 10 % y el 18 % de su población (Orbea & Benítez, 2024). Este fenómeno reduce la base laboral disponible, incrementa la proporción de personas mayores dependientes y tensiona la estructura de cuidados. La emigración deja también impactos afectivos, de organización doméstica y de redes familiares, obligando a replantear las formas en que se sostiene la vida en los territorios.

Este panorama exige a la academia y al activismo cubanos actualizar y profundizar los debates nacionales en torno al papel del Estado como garante de derechos, a la inserción

en la vida comunitaria de los nuevos actores económicos, y a las concepciones sobre economía, trabajo y cuidados en tanto ejes centrales de esta nueva etapa de cambios. Para ello es necesario trascender interpretaciones binarias entre “éxito del mercado” o “fracaso estatal” y situar el análisis en los entramados sociales que sostienen la reproducción de la vida cotidiana, atendiendo a las particulares dinámicas que cada gestión económica va tejiendo al interior y en interacción de unas con otras y con la comunidad. Es desde esta perspectiva que la economía feminista resulta pertinente.

Comprender las transformaciones cubanas requiere observar no solo las reformas normativas, sino los procesos materiales que las acompañan. La reconfiguración de la economía ocurre en medio de tensiones múltiples que afectan la vida cotidiana: inflación persistente, segmentación monetaria, dificultades en el acceso a servicios básicos, incremento de precios de alimentos y transporte y encarecimiento de medicinas y productos de higiene. El proceso de Tarea Ordenamiento en 2021, que reorganizó salarios, subsidios y tipo de cambio, tuvo efectos ambivalentes. Por un lado, buscó racionalizar la estructura salarial y dotar de mayor coherencia al sistema económico. Por otro lado, las condiciones externas adversas y limitaciones internas hicieron que la inflación absorbiera en poco tiempo los incrementos salariales, situando nuevamente a la mayoría de los hogares bajo presión económica severa.

La vida diaria se reorganiza en torno a la necesidad de conseguir insumos básicos, lo que supone una carga adicional de tiempo físico y mental para las familias. El acceso a alimentos, que en décadas previas contó con mecanismos de mayor previsibilidad estatal, ha pasado a depender en mayor medida de mercados informales, tiendas en moneda libremente convertible, remesas o redes comunitarias. La economía feminista subraya que estos procesos tienen impactos distintos según género, pues las mujeres continúan siendo las principales responsables de las tareas domésticas

y la gestión cotidiana del consumo, lo cual genera un “trabajo de supervivencia” permanente que compite con su inserción laboral, su tiempo propio y su salud mental.

Otra dimensión clave es la organización espacial y territorial. La ciudad de La Habana concentra mayor dinamismo económico, pero también mayores niveles de desigualdad interna, mientras que provincias orientales experimentan oportunidades económicas más limitadas y menor acceso a divisas. Estas asimetrías territoriales se relacionan con la reproducción social: quienes habitan zonas menos favorecidas deben enfrentar costos logísticos y sociales más elevados para sostener sus vidas. Si la reproducción social es el centro de la economía, como argumenta Picchio (1992), entonces la planificación económica nacional debe considerar la desigual distribución de cuidados, servicios e infraestructuras entre territorios.

Además, el sistema energético enfrenta tensiones persistentes. Los cortes eléctricos periódicos alteran rutinas productivas y domésticas, afectan la conservación de alimentos, la atención de personas dependientes y la organización del tiempo. La crisis eléctrica funciona como recordatorio de que la sostenibilidad de la vida es interdependiente con la sostenibilidad ecológica y la infraestructura pública. En Cuba, esta interdependencia se vuelve visible en cada apagón que demanda una reorganización doméstica para cocinar, estudiar o descansar.

Una lectura de este escenario no puede limitarse a la constatación de la urgencia cotidiana ni a la descripción de estrategias defensivas. La contracción del horizonte temporal convive con prácticas, discursos y actores que buscan sostener algún tipo de continuidad colectiva, aun en contextos de fragilidad material. Esa coexistencia entre resolución inmediata y aspiración a futuro abre un campo de disputa sobre qué formas de vida se consideran posibles y deseables. En lugar de interpretar esta tensión como mera contradicción,

resulta productivo leerla como terreno donde se ensayan sentidos, donde la necesidad convive con la imaginación política y donde emergen preguntas sobre cómo sostener la vida sin reducirla a gestión individual del riesgo. Es precisamente en esta intersección donde la propuesta de la economía feminista adquiere densidad analítica y potencia normativa.

Economía feminista, reproducción social y sostenibilidad de la vida

La economía feminista nació como crítica radical a los marcos analíticos que restringían la economía al mercado y a la producción mercantil, invisibilizando el trabajo cotidiano que sostiene la vida humana. Este trabajo, mayoritariamente realizado por mujeres, no ha sido históricamente reconocido como trabajo, sino como “naturaleza femenina”, “vocación”, “amor” o “responsabilidad familiar”, categorías funcionales a su desvalorización.

Desde la economía feminista se denuncia los sesgos androcéntricos que presenta el paradigma neoclásico de la economía: construido sobre la ausencia de las mujeres, niega toda relevancia económica a las esferas relacionadas con sus actividades (ámbito hogar/privado, trabajos no remunerados). No reconoce el ámbito de la reproducción ni a las mujeres que están inmersas en el lado de la “producción”. Tampoco se aprecia esfuerzos por establecer vínculos y relaciones entre uno y otro espacio, y mucho menos la interdependencia existente entre ambos. La economía feminista aparece entonces no solo como propuesta analítica y metodológica, sino que pretende un cambio radical en el análisis económico que pueda transformar la propia disciplina y permita construir una economía que integre y analice la realidad de mujeres y hombres, teniendo como principio básico la satisfacción de las necesidades humanas (Carrasco, 2006; Picchio, 2005; Pérez Orozco, 2005).

La propuesta feminista reconfigura el centro analítico: la economía es el conjunto de procesos necesarios para sostener la vida, no solo aquellos que generan mercancías o ingresos monetarios (Carrasco, 2011). Esta mirada incluye el trabajo doméstico no remunerado, la gestión emocional, la mediación comunitaria, las redes de apoyo mutuo y las tareas organizativas que garantizan la reproducción cotidiana. Supone también un reconocimiento de la interdependencia humana y la eco-dependencia: ninguna vida se sostiene sola, y toda existencia depende de ecosistemas saludables y relaciones de cuidado.

La noción de proyectos socioeconómicos desde esta lógica apuesta por otras economías:

en las que se multipliquen espacios de producción para el autoconsumo, y en la que éstos se combinen con espacios de intercambio: algunos, monetizados (con un dinero que no sirva como medio de acumulación sino de mero intercambio, y que esté sometido a control democrático); otros, de intercambio no monetizado (espacios de trueque, de reciprocidad y colaboración). Y en la que estos múltiples espacios funcionen en red, con el eje articulador de corresponsabilizarse para poner las condiciones de posibilidad del buen con vivir (Pérez Orozco, 2017, p. 36).

También la economía feminista latinoamericana ha avanzado en respuestas concretas a este interrogante, articulando prácticas solidarias, comunitarias, cooperativas y territoriales (Rodríguez, Partenio & Laterra, 2018; León, 2008; Federici, 2017).

La noción de sostenibilidad de la vida resulta vertebral en el marco conceptual que se propone, en tanto orienta un enfoque analítico que sitúa la satisfacción de las necesidades humanas como eje organizador de la economía, en contraposición a la primacía de las lógicas de mercado. Desde esta perspectiva, la reproducción social se interpreta a partir de las tensiones que atraviesan el vínculo entre producción y

reproducción, poniendo de relieve el carácter estructural del trabajo de cuidados en la generación de bienestar cotidiano y en la propia producción de la fuerza de trabajo que sustenta la actividad económica. Este enfoque atiende, asimismo, a la articulación entre las desigualdades que se configuran en los ámbitos doméstico y mercantil, así como a la implicación de las mujeres en ambos espacios, marcada por su doble presencia/ausencia. (Pérez Orozco, 2006).

Como hemos visto, el desplazamiento conceptual de lo que entendemos por economía y cómo se reproduce nos interroga sobre la propia noción de trabajo. Si reconocemos que hay otros elementos que contribuyen a la producción de bienes materiales, ¿cómo lo definimos? Siguiendo a Cristina Carrasco (2014) el cuidado puede entenderse como un concepto amplio que abarca el conjunto de actividades y relaciones implicadas en la producción de bienes y servicios, así como en la generación de afectos, bienestar y condiciones de salud. Se trata de procesos continuos, constitutivos de la vida social, que hacen posible la sostenibilidad de la existencia en interacción con el entorno natural.

De la Cal, Ruiz, y Sarriegui (2015) señalan que incluye también la actividad laboral no remunerada, distanciando el concepto al de empleo, el cual consideraríamos como un solo tipo de trabajo que se demanda y oferta en el mercado y se intercambia por dinero, mayoritariamente, por un salario. Más allá de los debates sobre ambos términos, abiertos hoy en día, Izquierdo (1998) considera importante determinar las relaciones sociales de distribución de la riqueza que acompañan a los trabajos o que reparten sus frutos. Esta distinción es esencial para nuestro estudio, en tanto será determinante dónde se sitúan a este respecto las relaciones implicadas en la actividad de trabajo dada, según cada caso seleccionado.

Precisamente, el término espacios socio-productivos, si bien no aparece claramente conceptualizado, se encuentra de modo generalizado dentro de las referencias vinculadas

a espacios/proyectos/emprendimientos enlazados a formas de economías popular, social, solidaria o del trabajo. Para el estudio que proponemos los asumiremos en tanto proyectos colectivos que responden a necesidades comunes, que pueden ser distinguidos respecto a sus niveles de asociacionismo y cooperación, a sus mecanismos de vinculación entre integrantes, grado de autonomía e impacto y visibilización comunitarios (Colino, Civitaresi, y Capuano, 2017). En el caso cubano, estos proyectos tipifican el proceso de descentralización territorial del Estado, uno de los objetivos nucleares de las actuales reformas, y la potencialidad de la acción cooperada y solidaria en los territorios (Galfisa, 2017).

Situar a Cuba en este debate implica reconocer especificidades históricas ineludibles. El país dispone de un acumulado en materia de derechos universales, valores igualitarios y prácticas de solidaridad social que han conformado durante décadas un horizonte colectivo de bienestar y responsabilidad pública sobre la reproducción de la vida. Ese sedimento político-cultural constituye un terreno fértil para impulsar agendas feministas orientadas a la sostenibilidad vital. Sin embargo, este legado no está garantizado ni es estático: la crisis económica prolongada y la expansión de lógicas de mercado colocan ese acumulado en disputa, tensionando la matriz universalista con un régimen creciente de acceso a bienes y servicios mediado por capacidad de pago, redes familiares transnacionales o inserción en circuitos dolarizados. En este escenario, se vuelve imprescindible repensar la articulación entre Estado, comunidad y familias, diseñando dispositivos que aseguren el cuidado y la reproducción social.

Política social, marco jurídico y cuidados

Desde las primeras décadas del proyecto revolucionario cubano, la incorporación de las mujeres al empleo remunerado y al espacio público fue una prioridad. La alfabetización masiva,

el acceso universal a educación y salud y la participación política en organizaciones de masas configuraron una base para ampliar derechos. Sin embargo, las transformaciones igualitarias no lograron desarticular completamente la división sexual del trabajo en el ámbito doméstico. La inserción laboral femenina convivió con la persistencia de responsabilidades familiares como ámbito casi exclusivo de las mujeres (Torres, 2020) y la doble jornada se convirtió en norma.

Más recientemente, las reformas económicas han generado un marco jurídico heterogéneo en relación con el cuidado y el trabajo reproductivo. El Código del Trabajo (2014) define el trabajo en términos de empleo formal y remunerado, dejando fuera el trabajo doméstico y de cuidados, lo cual contribuye a su invisibilización y a la precarización jurídica de quienes lo realizan (Romero, 2016). A esto se suma la vulnerabilidad laboral en sectores privados donde la regulación es más laxa y la informalidad elevada (Nerey, 2014). Por su parte, la Constitución de 2019, omite el reconocimiento explícito del trabajo de cuidado como pilar económico.

En ese escenario es aprobado en consulta popular el Código de las Familias (2022) con avances significativos al otorgar valor económico y patrimonial a la labor de cuidado y al establecer protecciones legales para personas cuidadoras, especialmente en situaciones de separación o dependencia (Dacal, 2022).

La aprobación reciente del Sistema Nacional de Cuidados constituye otro avance relevante. Su diseño inicial apunta a redistribuir responsabilidades y reconocer el trabajo de cuidado, aunque su enfoque todavía privilegia la atención a la dependencia y no incorpora plenamente la idea de interdependencia universal ni la reproducción social como estructura vital. Para cumplir el potencial transformador, el sistema requiere profundizar en primer lugar el diseño conceptual que sostiene las políticas a implementar, además de un financiamiento sostenido y la articulación entre instituciones estatales, colectivos productivos y redes comunitarias, procesos difíciles de sostener en el escenario actual.

En otro sentido se advierte un acumulado de investigaciones referentes al mundo del trabajo o del sector productivo, que atienden a los cambios y la diversificación de las relaciones laborales, a las consecuencias de las medidas sobre el empleo y la subjetividad expresada en el trabajo, entre otros. Martín (2014, 2019), Izquierdo (2017), Rosales y Esquenazi (2017), Rojas (2017), Piñeiro (2020), Arias y Echevarría (2021) son algunos de los principales referentes. Aparecen, además varios estudios en empresas cubanas (fundamentalmente estatales) sobre indicadores de capital intelectual: sentido de pertenencia y compromiso, clima laboral, trabajo en equipo, motivación y satisfacción laboral, creatividad y cultura innovadora, esfuerzos y resultados, entre otros (Borrás y Campos, 2018). Para el caso cubano, también han predominado los estudios sobre la eficiencia de las empresas, y en qué medida (cuantitativamente) estos factores contribuyen a ello. Estos esfuerzos, junto a estudios desde la psicología social sobre temas de identidad grupal y socioclasista (Pañellas, 2020) son los principales entrecruzamientos entre formas productivas y aspectos que trasciendan su núcleo económico.

Ahora bien, resulta evidente la poca producción de estudios empíricos que vinculen las actividades que implican cuidar, en sus múltiples alcances, con áreas que excedan las típicamente reproductivas. Esta escasez parece ser el resultado de la relación dicotómica —no resuelta aún— de los espacios productivos y reproductivos, que ha encapsulado así investigaciones en cada ámbito, sin entrecruzamientos sistemáticos.

¿Hacia una reorganización feminista de la reproducción social?

Algunos resultados preliminares

La comparación entre una cooperativa (Dajo) y una empresa privada (Model) permite observar dos racionalidades organizativas que, aun insertas en el mismo contexto nacional,

producen configuraciones diferenciadas respecto de la distribución de roles y tareas y la distribución de ingresos. Estas diferencias no constituyen polos cerrados, sino un campo en disputa donde coexisten apuestas colectivas, condicionamientos estructurales y tensiones no resueltas. Más allá de clasificaciones binarias entre “solidario” y “mercantil”, lo que emerge son formas híbridas donde la sostenibilidad material convive con la búsqueda de reproducción de la vida, y donde la crisis económica presiona a redefinir garantías históricas y modos de subjetivación laboral.

Algunos hallazgos preliminares son presentados a continuación:

1. Organización y asignación de roles: entre la rotación cooperativa y la especialización privada

En la cooperativa Dajo, el trabajo cotidiano se articula sobre la noción de rotación de tareas, lo cual aparece reiteradamente en testimonios y descripciones etnográficas. El movimiento entre zonas y funciones es visible desde la propia dinámica laboral: se percibe “un movimiento continuo de personas entre las áreas que diluye los límites entre ellas”. Este rasgo se traduce en dos dimensiones claves: primero, una movilidad funcional que permite a quienes ingresan experimentar distintos puestos para encontrar aquel que mejor se ajusta; segundo, una expectativa normativa de polivalencia como condición para la pertenencia cooperativa: “la idea de la cooperativa basada en el trabajo es que todxs puedan realizar la especialidad de cada puesto”. Esta organización puede leerse como una práctica de horizontalidad productiva y como estrategia para sostener la producción en contextos inestables. Además, la circulación por diversos puestos refuerza la noción de pertenencia y reduce fronteras funcionales.

En contraste, Model evidencia un esquema organizativo centrado en la especialización técnica y la delimitación

de funciones. El trabajo se realiza mayoritariamente de forma individual, con dominio específico de máquinas y procesos: “yo trabajo en la máquina de ojal... cuando no tengo trabajo... hago producción también en las máquinas planas”. La empresa incorpora cierta multifuncionalidad, pero sin una política explícita de rotación ni socialización sistemática del conocimiento productivo.

En este entorno, la jerarquía de tareas se estructura en función de la complejidad técnica y la velocidad, generando categorías como “costureras largas” y “costureras cortas”, que implican no solo diferencias operativas sino formas de distinción simbólica y reconocimiento. La especialización, por tanto, no solo organiza la producción, sino que también distribuye estatus y poder interno. En algunos relatos, tareas como la limpieza emergen como trabajo “extra”, cuya remuneración no siempre está asegurada, aun cuando se reconoce su centralidad para el funcionamiento: “claro que eso es trabajo... no sé si me lo pagarán o no”.

La comparación muestra un dilema central: mientras Dajo promueve una desespecialización relativa que busca evitar segmentaciones rígidas y favorecer la sostenibilidad colectiva, Model reproduce una lógica de individualización del desempeño, articulada a jerarquías técnicas y diferenciales de productividad. En ambos espacios, las prácticas definen subjetividades: pertenecer a la cooperativa implica ser parte del colectivo antes que de una función; en la empresa privada, el lugar se afirma sobre el rendimiento individual y el dominio técnico.

2. Circuitos de cuidado y sostenimiento: entre la valorización explícita y la invisibilización funcional

El análisis del cuidado dentro del espacio productivo revela otra línea de contraste. En Dajo, ciertas tareas de sostenimiento material del espacio —limpieza, mantenimiento,

orden— son nombradas explícitamente y reconocidas como importantes: “aquí todos los trabajos están iguales... porque todos los trabajos son importantes”. Si bien existe una figura formal vinculada a la limpieza (persona que es socia de la cooperativa), la empresa cultiva una expectativa explícita de corresponsabilidad cotidiana, donde cada persona es responsable de su espacio de trabajo, independientemente de la labor de quien realiza esta tarea. Esta lógica se refuerza en el hecho de que otras personas —incluidas las de la junta directiva— asumen tareas de limpieza cuando es necesario, lo que desarticula jerarquías rígidas y pone en acto un principio de horizontalidad práctica según el cual ninguna función queda naturalmente exenta del cuidado del espacio común.

La práctica recurrente de asumir colectivamente la limpieza y la disposición a colaborar activamente en tareas consideradas “menores” indica que la cooperativa ensaya formas de desprivatización del cuidado dentro del lugar de trabajo, sin trasladarlo automáticamente a cuerpos feminizados ni relegarlo fuera de la contabilidad simbólica del valor.

En Model, las tareas de cuidado del espacio aparecen como contribuciones puntuales, realizadas cuando falta personal u organización, pero sin constituir un principio colectivo formal. La frase “es un trabajo de ella... pero como está en la recepción...” expone que la reproducción cotidiana del espacio permanece subordinada a la lógica productiva central. En este marco, el cuidado puede volverse invisible o recaer informalmente en trabajadoras que ya sostienen otras cargas.

La comparación no traza una línea moral, pero revela dos gramáticas distintas: una que asocia cuidado y producción, y otra donde el cuidado se desdibuja o fragmenta. En ambos casos, la sostenibilidad de la vida emerge como problema, pero sus soluciones toman formas desigualmente distribuidas y valoradas. Si en Dajo el sostenimiento del espacio parece

tender hacia la colectivización parcial del cuidado, en Model predomina una separación estructural donde la provisión de cuidados se relega a lo periférico o se externaliza —como ocurre con la modalidad “cose en casa”, una variante productiva sostenida por redes familiares invisibilizadas. Esta externalización subraya cómo la eficiencia productiva se apoya en la transferencia de trabajo reproductivo a los hogares, reforzando las tensiones entre autonomía productiva y dependencia reproductiva.

3. Criterios distributivos y justicia económica: transparencia relativa frente a opacidad salarial

Las diferencias entre ambas experiencias también se expresan en los mecanismos de distribución de ingresos. En la cooperativa la asignación de utilidades sigue criterios explícitos basados en cantidad y calidad del trabajo, con porcentajes diferenciados según esfuerzo físico y complejidad técnica: “la planchadora cobra el 42%... porque el planchado es más sacrificado”.

Existe claridad entre socias/os sobre cómo se asignan ingresos y sobre la equivalencia entre aporte y remuneración, lo que fortalece percepciones de justicia interna y legitimidad colectiva. Además, el diseño redistributivo contempla que tareas de mayor intensidad física o menor frecuencia obtengan valor relativo mayor, lo que muestra una reconstrucción interna de la noción de valor no exclusivamente ligada al volumen productivo. Esta lógica permite reconocer el desgaste físico, la exposición y el tiempo como variables en la distribución, cuestionando el paradigma mercantil donde la productividad inmediata define la retribución.

En la empresa privada, en contraste, la distribución del excedente está ligada de manera central a la participación en el capital. Las normas productivas definen el ingreso y la transparencia es limitada: “yo no sé cómo es el salario... nos dijeron una cosa, hicieron otra”. Esta opacidad refuerza

una distancia entre dirección y trabajadoras, y sugiere que la justicia distributiva no se procesa colectivamente sino como prerrogativa de la estructura propietaria.

Asimismo, la empresa ha eliminado beneficios no salariales, justificando que “no estaban produciendo” lo correspondiente, lo que inscribe la redistribución en claves de meritocracia productiva estricta. El desplazamiento desde beneficios colectivos hacia ingresos estrictamente monetarios vinculados a rendimiento ilustra una individualización de la reproducción económica. La valoración del trabajo se define principalmente por el cumplimiento de la norma establecida, reforzando la equivalencia entre producción medible y derecho al ingreso.

Además, tanto Dajo como Model han atravesado procesos de retracción de beneficios e insumos colectivos respecto de momentos previos, cuando existían recursos para cubrir almuerzos, meriendas o apoyos materiales que fortalecían el sentido comunitario y reducían la presión individual sobre la reproducción cotidiana.

En la cooperativa, esa reducción se vivió como ajuste obligado para sostener estabilidad interna; en Model, como eliminación de beneficios extra-salariales justificada por caída de productividad. Este elemento compartido sugiere que, más allá de la diferencia en régimen de propiedad, ambas organizaciones negocian su capacidad de sostener bienes comunes laborales frente a condiciones macroeconómicas restrictivas.

4. Ampliación del objeto social: adaptaciones económicas y tensiones subjetivas

Tanto Dajo como Model han ampliado su objeto social en respuesta a la crisis, incorporando actividades comerciales paralelas. No obstante, los efectos internos difieren. En Dajo, la venta se integra físicamente al espacio principal y se narra como esfuerzo para asegurar insumos y liquidez colectiva.

La distribución conecta ingresos adicionales con trabajo cooperativo y expectativas de retorno al colectivo.

En Model, la ampliación comercial incorpora personal específico y genera distancia interna entre áreas productivas y comerciales: “no vimos el fruto de lo que se vendió”. Esto apunta a tensiones entre quienes participan en la nueva dinámica y quienes no ven reflejado su esfuerzo en la retribución, produciendo fricciones en torno a quién genera valor y quién captura el excedente.

Tanto Dajo como Model reportan pérdida de acceso a insumos colectivos y posibilidades materiales que antes estaban disponibles, lo que redibuja el campo de acción y debilita soportes de trabajo. La cooperativa recuerda momentos de mayor holgura material y actividades internas hoy suspendidas; la empresa privada menciona beneficios eliminados y reorganización de prácticas laborales. En ambos casos, la restricción económica actúa como fuerza niveladora negativa, obligando a reconfigurar expectativas y prácticas, aun cuando los sentidos que se asignan a esas decisiones divergen entre un horizonte cooperativo y uno empresarial.

Algunas consideraciones finales

La especificidad del contexto cubano interpela de modo directo la lectura de estas experiencias productivas. La crisis económica prolongada, la contracción material de los hogares y el debilitamiento de capacidades estatales para garantizar servicios universales introducen tensiones que atraviesan cualquier proyecto colectivista. La expansión acelerada de sectores y servicios privados, junto con procesos de dolarización parcial y encarecimiento de la vida cotidiana, reconfigura los horizontes de posibilidad materiales y simbólicos de la reproducción social. Este escenario convive con un dinamismo migratorio significativo, que fragmenta comunidades laborales y domésticas, redistribuye responsabilidades de cuidado y genera nuevas

formas de dependencia transnacional que alteran la composición y sostenibilidad de los espacios socioproductivos. En este marco, los proyectos autogestionados no emergen como islas protegidas, sino como prácticas situadas que deben negociar con condiciones estructurales volátiles, lo que impide lecturas simplificadas sobre sus alcances y limitaciones.

La arquitectura normativa funciona como otro vector de tensión. La existencia de marcos regulatorios que habilitan la expansión del sector privado sin un desarrollo equivalente de instrumentos atractivos para las cooperativas crea un terreno institucional asimétrico. La insuficiencia de mecanismos de financiamiento, acompañamiento técnico y acceso a insumos para formas asociativas contrasta con la agilidad para el establecimiento y crecimiento de emprendimientos privados. Esta brecha normativa no necesariamente expresa una intención explícita de desplazamiento del cooperativismo, aunque sí produce condiciones donde la iniciativa privada encuentra un cauce más expedito, al tiempo que las experiencias cooperativas deben sortear mayor incertidumbre. Observar estos procesos en desarrollo permite interrogar la relación entre política económica, imaginarios sociales y formas de organización del trabajo sin anticipar un desenlace único ni lineal.

Los resultados preliminares de esta investigación sugieren tendencias diferenciadas entre formas de gestión más colectivas y otras más individualizadas, incluso cuando las diferencias nominales en ingresos o beneficios no resultan drásticas. La variación aparece más en los modos de tomar decisiones, en las lógicas de participación, en la distribución de responsabilidades y en la atribución de valor al trabajo que sostiene la vida. La búsqueda cooperativa de horizontalidad y corresponsabilidad convive con tensiones propias del contexto y con la necesidad de mantener productividad en condiciones adversas. Por su parte, los emprendimientos privados exploran formas de flexibilidad

y eficiencia que responden a la presión competitiva, sin dejar por ello de desarrollar prácticas de sostén mutuo en momentos de crisis. Estas dinámicas plantean preguntas sobre la temporalidad de los procesos organizativos y los mecanismos mediante los cuales se consolidan o erosionan las prácticas colectivas.

La economía feminista ofrece un andamiaje teórico y político valioso para pensar estos desafíos. No se trata únicamente de recuperar el valor del cuidado como categoría analítica, sino de explorar cómo ese principio puede orientar formas de organización económica más sensibles a la interdependencia, la vulnerabilidad y la justicia social. Los espacios socioproductivos estudiados ensayan, con mayor o menor sistematicidad, prácticas que buscan reubicar la reproducción social en el centro de la vida colectiva. Estas experiencias no constituyen un modelo acabado ni una alternativa plenamente consolidada; funcionan más bien como zonas donde se tensionan y negocian sentidos, donde se prueban formas de sostenibilidad comunitaria y donde se experimentan gestiones económicas ancladas en vínculos cercanos y relaciones solidarias.

En suma, las trayectorias que aquí se examinan no confirman de manera concluyente la superioridad de un modelo sobre otro. Revelan, en cambio, el carácter situado, contingente y procesual de las apuestas colectivas en contextos de transformación estructural. La comparación sugiere que las formas organizativas no se agotan en sus atributos formales, sino que se constituyen en la práctica cotidiana, en las disputas internas por la distribución del trabajo y del valor, y en la capacidad de sostener vínculos comunitarios frente a presiones económicas externas. La construcción de alternativas no corre por una línea ascendente y continua; se desenvuelve en un campo atravesado por incertidumbre, creatividad, tensiones y aprendizajes. En esa apertura reside parte de su aporte político y epistemológico.

Bibliografía

- Arias, M. D. L. A., y Echevarría, D. (2021). Mujeres, trabajo y reproducción de la vida en Cuba: los desafíos de la pandemia y la reforma económica. *Sudamérica: Revista de Ciencias Sociales*, (15), 37-69.
- Borrás-Atiénzar, F., y Campos-Chaurero, L. (2018). El capital intelectual en las empresas cubanas. *Ingeniería Industrial*, 39(1), 56-66.
- Carrasco, C. (2014). La economía feminista: ruptura teórica y propuesta política. En C. Carrasco (Ed.) *Con voz propia. La economía feminista como apuesta teórica y política* (pp. 25-48). La oveja roja.
- Carrasco, C. (2011). La economía del cuidado: planteamiento actual y desafíos pendientes. *Revista de economía crítica*, (11), 205-225.
- Carrasco, C. (2006). La sostenibilidad de la vida humana: ¿un asunto de mujeres? En C. Carrasco (Ed.), *Mujeres y economía: nuevas perspectivas para viejos y nuevos problemas* (pp. 37-62). Icaria.
- Colino, E. D. V., Civitaresi, H. M., & Capuano, A. M. (2017). Una lectura de las redes inter-institucionales de la economía popular de la ciudad de Bariloche (Argentina). *OIDLES Observatorio Iberoamericano del Desarrollo Local y la Economía Social*, 11(23). <https://desarrolloyeconomiasocial.com/index.php/oidles/article/view/824>
- Consejo de Estado. (2019). *Constitución de la República de Cuba*. Editora Política.
- Dacal, A. (2022). *Más allá de las familias. Derecho, fe y política*. Editorial Caminos.
- de la Cal Barredo, M. L., Ruiz, Y. J., y Sarriegui, M. L. (2015). Cambios en los análisis laborales: Incidencia de los estudios e indicadores de género. En *Libro de actas del V Congreso Estatal de Economía Feminista: Vic, 2, 3, 4 de julio de 2015* (pp. 191-221). Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya.
- Echevarría, D. (2014). Trabajo remunerado femenino en dos momentos de transformación económica. *Revista Temas*, (80), 65-71.
- Espina, M. (2017). El bienestar como horizonte de políticas desde una teoría de las necesidades racionales. En M. C. Zabala (Comp.), *Debates actuales sobre política social. Cuba en el contexto de América Latina y el Caribe* (pp. 10-33). FLACSO Cuba/FES.

- Espina, M., & Echevarría, D. (2018). Reforma y equidad social en Cuba: apuntes sobre la política social y el cuadro socioestructural de la “actualización”. En B. Anaya & I. Díaz (Eds.), *Economía cubana: entre cambios y desafíos* (pp. 89–123). Instituto Juan Marinello.
- Federici, S. (2017). Economía feminista entre movimientos e instituciones: posibilidades, límites, contradicciones. En C. Carrasco & C. Díaz (Eds.), *Economía feminista. Desafíos, propuestas, alianzas* (pp. 21-28). Entrepueblos.
- Fundora, G. (2021). *Las políticas públicas y sus efectos en las desigualdades: análisis del caso cubano*. Fundación Friedrich Ebert.
- Galfisa. (2017). *Desafíos del cooperativismo en Cuba*. Editorial Filosofi@.cu.
- Izquierdo, M. J. (1998). *El malestar en la desigualdad*. Cátedra.
- Izquierdo, O. (2017). Las relaciones laborales: propuesta teórico metodológica para el análisis de los procesos laborales en el contexto de Actualización del Modelo Económico Cubano. *Universidad de la Habana*, (283), 193-206.
- Laguardia, J. (2020). La reforma económica en Cuba tras la aprobación de la nueva Constitución. *Revista de Ciencia Política*, 40(2), 287–313.
- León, M. (2008). Después del desarrollo: el buen vivir y las perspectivas feministas. *Umbrales*, (18), 35–44.
- Martín, J.L. (2014). El toro por los cuernos: La necesaria transformación de las relaciones de trabajo en el país y el papel de las Ciencias Sociales en ella. *Revista Novedades en Población*, 10(20), 125-136.
- Martín, J. L. (2019). Los espacios económicos. Origen, utilidad y perspectivas de un concepto. *Revista Novedades en Población*, 15(29), 30-41.
- Nerey, B. (2014). El nuevo Código del trabajo. El Trabajo en la reforma. *Revista OSAL Observatorio Social de América Latina*, XIV, (36), 101-114.
- Pañellas, D. (2020). Grupos e identidades sociales en cambio. *Novedades en Población*, 16(31), 64–84.
- Partido Comunista de Cuba. (2011). Lineamientos de la política económica y social del Partido y la Revolución.

- Pérez Orozco, A. (2017). ¿Espacios económicos de subversión feminista? En C. Carrasco y C. Díaz (Eds.), *Economía feminista. Desafíos, propuestas, alianzas* (pp. 29-58). Entrepueblos.
- Pérez Orozco, A. (2014). *Subversión feminista de la economía*. Traficantes de Sueños.
- Pérez, A. (2006). Amenaza tormenta: la crisis de los cuidados y la reorganización del sistema económico. *Revista de economía crítica*, (5), 8-37.
- Picchio, A. (1992). *Social Reproduction: The Political Economy of the Labour Market*. Cambridge University Press.
- Picchio, A. (2005). La economía feminista y el análisis del bienestar. En C. Borderías, C. Carrasco y C. Alemany (Eds.), *Las mujeres y el trabajo: rupturas conceptuales* (pp. 103-138). Icaria.
- Piñeiro, C. (2020). Las cooperativas no agropecuarias y su contribución al desarrollo local. Propuesta de medidas para materializar sus potencialidades. *Economía y Desarrollo*, 164(2). <https://www.redalyc.org/journal/4255/425565064010/>
- Rojas, M. (2017). Desigualdades en el mercado de trabajo. En D. Echevarría & J. L. Martín (Comps.), *Cuba: Trabajo en el siglo XXI* (pp. 111-142). FES/CEDEM-UH/CEEC-UH.
- Rodríguez, C., Partenio, F., & Laterra, P. (2018). Lecturas feministas de la economía y la autogestión. *Autogestión para otra economía*, (6).
- Romero Almodóvar, M. (2016). *El trabajo doméstico remunerado a domicilio en Cuba: un estudio de caso en Miramar* [Tesis de doctorado, Universidad de La Habana] .
- Rosales, S. Y Esquenazi, A. (2017). Panorama laboral cubano. Diagnóstico de brechas. En D. Echevarría y J. L. Martín (Comps.), *Cuba: Trabajo en el siglo XXI* (pp. 71-110). FES, CEDEM-UH, CEEC-UH.
- Torres, A. (2020). Cuidado de los niños y las niñas en Cuba: seguridades, inseguridades y urgencias. En E. Acosta (Ed.), *Crisis de cuidados, envejecimiento y políticas de bienestar en Cuba* (pp. 193-220). Universidad Sergio Arboleda.
- Torres Pérez, R. (2021). *Cuba: la transformación económica en un nuevo escenario*. Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales (CRIES).

- Voghon, R. M. (2021). Reforma institucional cubana y las entrucladas de la desigualdad en el siglo XXI. En B. Hoffman (Ed.), *Políticas sociales y reforma institucional en la Cuba pos-COVID* (pp. 246–264). Verlag Barbara Budrich.
- Zabala, M., & Echevarría, D. (2019). Políticas sociales y desarrollo en Cuba hacia 2030. En R. Torres & D. Echevarría (Comps.), *Miradas a la economía cubana: un plan de desarrollo hasta 2030* (pp. 137–148). CEEC.

SEGUNDA PARTE

Papel de las organizaciones de base
en el fomento de proyectos productivos

CAPÍTULO 7

Construyendo la Economía Indígena Amazónica: reflexiones desde una perspectiva regional

Oscar Miguel Luna Alvarado

Guillermo Romero

Elizabeth Morillo

Introducción

Una de las características de las organizaciones de los pueblos y nacionalidades indígenas en la Amazonía ha sido la lucha por sus derechos, su territorio y su hábitat. Esta lucha, de larga data, ha contemplado la defensa de sus territorios frente al extractivismo, el acceso a la tierra y el respeto por sus propias formas de vida (CIDH, 2019). De esta manera, han forjado discursos propios que han permitido articular bases sólidas de organización, pensamiento y acción colectiva.

Históricamente, la introducción del capitalismo en la región y la integración de las economías de subsistencia a economías de mercado han estado marcadas por tensiones y relaciones desiguales de poder. En estas, los modelos de desarrollo han sido impuestos desde un esquema de políticas

verticales, de “arriba hacia abajo”, definiendo *a priori* tanto las necesidades de las poblaciones como las vías de intervención, mediante un discurso de modernización en el cual los saberes y prácticas tradicionales son deslegitimados como medios para asegurar el bienestar de las poblaciones (COICA, 2004; Garzón, 2017). Rubenstein (2004) y Vallejo *et al.* (2016) plantean que la producción capitalista anclada en el extractivismo ha subordinado a las economías de reproducción simple, forzando a las poblaciones locales no solo a integrarse a la economía de mercado, sino también a modificar sus deseos e intereses locales en función del sistema. Este tipo de esquema generalmente ha sido conducido desde el Estado central y actores de la economía extractiva, con poca o nula inclusión de las poblaciones locales (Frigolett, Villanueva y Ríos, 2021).

Este tipo de modelo no ha conseguido mejorar, de forma significativa, las condiciones de vida de la población, debido en gran medida a que no considera las dinámicas locales que abarcan ámbitos culturales, sociales y de subsistencia. Como resultado, los proyectos no tienen el impacto esperado ni pueden sostenerse en el tiempo, y a menudo presentan efectos sociales y ambientales adversos (Gasché, 2004). Este enfoque de políticas económicas se ha caracterizado como un diálogo de una sola vía (Garzón, 2017). Ante esto, los pueblos y nacionalidades indígenas amazónicos, mediante extensos procesos de lucha y resistencia, han desarrollado propuestas alternativas para nivelar las relaciones de poder que delinean su realidad económica (Rodríguez, 2020).

A pesar de esto, las vastas reflexiones generadas en torno a su experiencia no suelen encontrarse disponibles en la literatura académica o en un cuerpo conceptual sistematizado en el ámbito de la economía. En las últimas décadas, las organizaciones de los pueblos y nacionalidades indígenas se han planteado este desafío para crear herramientas conceptuales que den cuenta de su experiencia colectiva

acumulada y contribuyan a establecer objetivos claros para su porvenir. De esta forma, no solo buscan acoger teorías o conceptos externos para comprender e interpretar su realidad, sino también construir expresiones de conocimiento y saber desde su propia perspectiva y en sus propios términos.

Este esfuerzo se ha reflejado en procesos en marcha desde organizaciones indígenas que forman parte de la región amazónica. Las discusiones provienen de su propia experiencia y suelen girar en torno a temas como la relación entre los pueblos y nacionalidades indígenas con los actores e instituciones occidentales; los objetivos y medios que definen sus economías; el manejo de los recursos de sus territorios y los provenientes de ámbitos externos, como el Estado y la cooperación internacional; la relación entre la economía comunitaria y la economía de mercado; el impacto de las actividades económicas sobre las comunidades, su cultura y su territorio; y el rol de las comunidades y las organizaciones en la toma de decisiones. Estas discusiones han sido enmarcadas en una dimensión económica, pero reflejan visiones holísticas más amplias, basadas en la comunidad y el cuidado de la naturaleza.

Las discusiones en torno a la economía indígena amazónica se han desarrollado en diversos espacios y niveles, desde iniciativas impulsadas directamente por las bases comunitarias hasta encuentros en escenarios internacionales. En muchos casos, estos procesos han contado con el apoyo financiero y logístico de organizaciones aliadas, como ONG ambientalistas, que han facilitado los espacios de diálogo y articulación.

Por tanto, es importante reconocer que tales procesos se han desenvuelto en el marco de interacciones entre poblaciones indígenas y actores del ambientalismo como las ONG conservacionistas y de cooperación internacional (Conklin y Graham, 1995; High y Oakley, 2020). Estas relaciones han visibilizado la importancia que tienen los ecosistemas amazónicos, han configurado alianzas de apoyo a la defensa territorial de los pueblos indígenas y han integrado a organizaciones

y comunidades en la implementación de proyectos de conservación, con intervenciones específicas en los territorios. Autores como Conklin y Graham (1995) plantean, a través de su categoría “*eco-Indian middle ground*”, que la relación entre las poblaciones indígenas y los grupos conservacionistas nace del supuesto de que las formas que tienen los indígenas de relacionarse y aprovechar su entorno son consistentes con los principios conservacionistas occidentales. A partir de ello, se ha establecido un terreno ideológico común para la construcción de una agenda ambiental compartida como, por ejemplo, para enfrentar a las empresas extractivas.

Estas interfaces de la relación entre poblaciones indígenas y grupos ambientalistas son cada vez más complejas, dinámicas y diversas. De hecho, High y Oakley (2020) sostienen que en la Amazonía del siglo XXI las esperanzas, deseos y medios de vida de las poblaciones indígenas están cada vez más atadas a las relaciones y prácticas en torno a la conservación. Esto no implica necesariamente que todas las conductas y aspiraciones de pueblos indígenas en torno a lo ambiental estén modeladas por las relaciones que mantienen con actores conservacionistas externos, sino que, como lo muestra Cepek (2008) con su estudio con los cofanes en Ecuador, las poblaciones indígenas integran sus identidades y valores culturales propios. Para el autor, “la creación de relaciones basadas en la conservación con actores no indígenas comprende un proceso de autodeterminación socioculturalmente fundamentado, políticamente astuto y materialmente productivo del ser cofán” (Cepek, 2008, p. 199).

De modo que, si bien el proceso de construcción de los conceptos de economía indígena se ha generado en un marco de complejas interrelaciones entre organizaciones indígenas y organizaciones ambientalistas, es importante no pasar por alto que los pueblos indígenas poseen su propia agenda política y económica, y que participan en estas iniciativas desde una posición estratégica y consciente. En este sentido,

aprovechan los recursos, plataformas y redes disponibles para fortalecer su voz y posicionar la economía indígena también como una estrategia para conseguir apoyos y financiamiento.

Para autores como Barkin (2022), estas propuestas de economía indígena que emergen desde lo comunitario pueden dialogar con el marco de la Economía Ecológica Radical. Este enfoque busca promover la colaboración con comunidades locales —especialmente campesinas e indígenas— para identificar caminos alternativos frente a los desafíos actuales de la humanidad. Asimismo, procura forjar respuestas a las crisis ambientales y sociales que amenazan la existencia de estas comunidades, reconociendo la complejidad e interconexión de los problemas contemporáneos. Desde esta perspectiva, se cuestionan las estructuras económicas y sociales dominantes y se impulsa la transformación de la relación sociedad–naturaleza y de las formas de organización social, valorando la sabiduría y las prácticas locales para construir alternativas y modelos económicos más justos.

En este marco, el presente capítulo examina las experiencias generados por la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), la experiencia de la Confederación de Nacionalidades Indígenas Amazónicas del Ecuador (CONFENIAE) y la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC), enfatizando en las discusiones y avances más significativos que han tenido en torno al tema, con el fin de esbozar una perspectiva general de su situación actual.

La economía indígena en la cuenca Amazónica

La cuenca amazónica, el sistema de bosques lluviosos más grande del planeta, se extiende por nueve países de América del Sur y ocupa un papel central para el equilibrio climático global, la regulación de aguas, la biodiversidad y la vida de millones de personas. Esta inmensa región no solo alberga

bosques, ríos, humedales y llanuras aluviales, sino también culturas indígenas que han habitado esos territorios por milenios, contribuyendo al entramado socio-ecológico de la Amazonía (Panel Científico por la Amazonía, 2021).

A pesar de su riqueza ecológica, la Amazonía ha sido históricamente escenario de múltiples explotaciones de recursos naturales. Desde el auge del caucho en los siglos XIX y XX, hasta la actual extracción petrolera, la minería y la agroindustria, los territorios amazónicos han sido convertidos en fuente de materias primas para economías nacionales y globales. El Informe del SPA identifica que “A partir de la década de 1960, la Amazonía experimentó la transformación socioambiental más profunda de su historia” (Panel Científico por la Amazonía 2021, p. 8) convirtiéndose en proveedora de materias primas y energía para los mercados nacionales e internacionales. Estas dinámicas de extracción han tenido impactos profundos sobre los ecosistemas y las comunidades locales.

En este contexto de saqueo de los recursos, cientos de miles de pueblos indígenas han experimentado una larga historia de invisibilización en los relatos dominantes del desarrollo. Aunque la población indígena amazónica ha sido siempre central en el manejo ecológico, cultural y territorial del bosque, los procesos extractivos —petróleo, minería, infraestructura y agroindustria— siguen vigentes y continúan comprometiendo sus territorios, modos de vida y derechos (Miranda *et al.*, 2023). En muchos casos, los espacios de autogestión y los derechos colectivos se ven reducidos, fragmentados o negociados sin la participación plena de quienes habitan estos territorios.

Frente a esta realidad, los pueblos indígenas y las comunidades amazónicas han venido defendiendo sus territorios, movilizándose políticamente, presentando denuncias, reclamando procesos de consulta previa y proponiendo alternativas que articulan conservación, autodeterminación y desarrollo. Sin embargo, los datos del SPA y de otros estudios alertan que cada vez quedan menos territorios con control

local efectivo y que las presiones externas se intensifiquen: la fragmentación territorial, las concesiones para minería, los oleoductos y la expansión de la agroindustria amenazan la integridad de la Amazonía (Panel Científico por la Amazonía, 2021; RAISG, 10 de octubre de 2024).

La región amazónica no sólo ha sido escenario de extracción de materias primas, sino que está cada vez más integrada a los mercados nacionales e internacionales. Las economías indígenas y locales han visto varias de sus prácticas tradicionales —como el intercambio comunitario o la economía de subsistencia— transformadas por la dinámica del mercado global: productos forestales, farmacéuticos de origen amazónico, agroindustria, turismo y bioproductos tienen salida comercial y generan ingresos vinculados a cadenas globales (Lesenfants et *al.*, 2024). Las comunidades indígenas han empezado a articularse de formas diversas con esos mercados, desarrollando productos de la biodiversidad, gestionando concesiones forestales comunales, participando en sellos de comercio justo, entre otros.

En este marco, en donde la economía mundial tiene cada vez mayor influencia, diversas organizaciones como la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) han planteado la importancia de distinguir la economía indígena de otras economías. Por lo que ha generado procesos de reflexión que les permita conceptualizar qué es lo que distingue a esta economía de otras. Desde COICA se señala que “Somos defensores y defensoras de la vida, de nuestros derechos y territorios, por lo que necesitamos actuar frente a la visión actual de la economía de mercado que se basa en la explotación de los recursos, sin conciencia de los impactos negativos que se generan, vulnerando los derechos humanos y violentando la vida de nuestros pueblos indígenas” (COICA, s. f.). Frente a esto señalan que cuando se habla de desarrollo bioeconómico es importante que la voz de los pueblos indígenas sea escuchada.

En este sentido, COICA ha realizado un primer ejercicio para definir lo que se entiende por economía indígena:

La Economía Indígena es un modelo económico que se caracteriza por promover el bienestar de nuestras comunidades indígenas y la conservación de nuestros territorios; respetando y valorando nuestra cosmovisión y sabiduría ancestral. La Economía Indígena, además, nos permite fortalecer los procesos de gobernanza indígena para generar acciones eficientes en defensa de nuestros derechos y territorios. Entre esas acciones están la gestión e incidencia para lograr financiamiento directo para nuestras organizaciones y comunidades, es decir, financiamiento ágil y sin intermediaciones para nuestros defensores y defensoras. La Economía Indígena también demanda trabajar en sinergia con la innovación, sin dejar de lado nuestros saberes y prácticas ancestrales, y generar alianzas que respeten, valoren y apoyen este modelo económico que protege a nuestros pueblos y territorios (COICA, s.f.).

La economía indígena, tal como la plantean los pueblos y nacionalidades de la cuenca amazónica agrupados en COICA, se fundamenta en una serie de principios que reflejan su cosmovisión, su sabiduría ancestral y su relación directa con el territorio.

Los pueblos y nacionalidades indígenas, aunque compartimos la hermandad de ser pueblos originarios y las luchas por nuestros derechos y territorios, mantenemos características propias expresadas a través de la cultura e identidad, que permean en el concepto o definición de lo que representa para cada uno el desarrollo y la economía, de acuerdo al marco conceptual occidental, sin embargo, coincidimos en el enfoque de que todo proceso económico para una vida digna debe estar guiado por los siguientes principios (COICA, s.f.).

Entre estos principios se encuentra la autosuficiencia, entendida no como mera subsistencia, sino como la capacidad de vivir del territorio con lo necesario y suficiente para satisfacer las necesidades familiares y colectivas. Se destaca también la solidaridad, que implica cuidar de todos los miembros de la comunidad, y la reciprocidad, basada en relaciones de corresponsabilidad entre iguales bajo la lógica del trabajo conjunto. A estos valores se suma la colectividad, que promueve el desarrollo de actividades comunes bajo los sistemas de gobernanza indígena, y la asociatividad, concebida como una forma de organización que facilita el trabajo colectivo, la representación de los intereses económicos y productivos, y la distribución justa de los beneficios (COICA, s.f.).

Asimismo, la economía indígena prioriza la biodiversidad, manteniendo una relación de respeto con los ecosistemas, conservando los recursos mediante sus ciclos regenerativos y valorando los métodos, herramientas y sistemas propios de producción. Se sustenta también en el conocimiento tradicional, la identidad y la cosmovisión, con pleno reconocimiento del derecho a la propiedad intelectual colectiva, buscando preservar la cultura sin renunciar a la innovación ni a la articulación con el mundo contemporáneo. Finalmente, la economía indígena debe garantizar una vida digna para las familias y comunidades, asegurando beneficios justos y equitativos basados en el trabajo colectivo, y promover un intercambio comercial justo, orientado a generar bienestar comunitario y sostenibilidad para las organizaciones indígenas (COICA, s.f.).

COICA identifica claramente qué actividades no pueden ser consideradas economía indígena bajo esta perspectiva: el fomento del monocultivo que conduce a la deforestación, la explotación de recursos o materias primas que implique destrucción de biodiversidad y contaminación, la extracción de componentes naturales para producción farmacéutica, cosmética o alimentaria sin un reconocimiento justo del beneficio para las comunidades, la explotación comercial de la identidad cultural

y conocimientos ancestrales por entidades externas, y las cadenas de abastecimiento vinculadas a empresas extractivistas que destruyen y contaminan la biodiversidad (COICA, s.f.).

En conjunto, los principios propuestos por COICA permiten construir una economía indígena que no sólo busca la generación de riqueza sino la reproducción de la vida, la justicia social y el cuidado del territorio. Presentan una alternativa al modelo dominante basado en la extracción y el lucro, articulando la ancestralidad con la modernidad, e impulsan un horizonte donde los pueblos indígenas pueden reafirmar su protagonismo económico sin renunciar a su identidad, cultura y relación con la naturaleza.

La economía indígena también dialoga con la bioeconomía, un concepto de origen occidental que en los últimos años ha cobrado relevancia en América Latina. Aramendis et al. (2018, p. 25) advierten que “América Latina está en una posición de privilegio para contribuir al desarrollo e implementación de la bioeconomía global”. Esto es especialmente visible en los países amazónicos, donde la enorme biodiversidad ofrece un alto potencial para impulsar enfoques productivos basados en el uso sostenible de los recursos biológicos (Hodson, 2014).

Un ejemplo de este interés regional fue el Foro de Acción por la Bioeconomía Panamazónica, realizado en Leticia (Colombia) en julio de 2025 y organizado por la Red Pan-Amazónica por la Bioeconomía y el *World Resources Institute Colombia* (WRI Colombia). El encuentro reunió a más de 120 representantes de gobiernos, organizaciones indígenas, sector privado e instituciones internacionales con el objetivo de definir prioridades compartidas para consolidar un modelo de bioeconomía en la región. En términos generales, la bioeconomía constituye un esfuerzo por utilizar la ciencia y la tecnología para aprovechar más eficiente y sosteniblemente los recursos y principios biológicos, a través de su incorporación en el mercado, generando rentabilidad económica y desarrollo para diversas poblaciones (IICA, 2019).

Este enfoque, entendido como un sistema productivo compatible con la integridad ecológica del bioma amazónico y con la diversidad cultural de sus pueblos, busca generar bienestar local, proteger la biodiversidad y contribuir a la acción climática mediante cadenas de valor basadas en productos tradicionales como el açaí, la castaña, la copaiba o el camu-camu (WRI, 17 de julio de 2025).

Si bien la economía indígena y la bioeconomía pueden presentar puntos de convergencia, es importante subrayar sus diferencias. Como señala Escobar (2016), para los pueblos indígenas la naturaleza no es un recurso a ser explotado sino una entidad constitutiva de la vida social, lo que marca una distancia profunda respecto de los enfoques modernos que buscan “ecologizar” el desarrollo sin cuestionar sus fundamentos. En ese sentido, mientras la economía indígena es ontológica, relacional y arraigada en territorios y cosmologías específicas, la bioeconomía es un modelo técnico-político formulado desde instituciones estatales y organismos internacionales, cuya lógica es adaptable a diversos contextos sin partir necesariamente de las visiones de los pueblos indígenas.

En este escenario, la COICA ha planteado la importancia de avanzar hacia una bioeconomía “con rostro indígena”, sustentada en el comercio justo, la autonomía territorial y el acceso directo al financiamiento (Comunicaciones COICA, 17 de julio de 2025). Su Programa Regional de Economía Indígena impulsa herramientas como *Amazon Fair Trade*, que certifica productos con trazabilidad indígena; Con Amazonía, una marca para bioemprendimientos sostenibles; y mercados comunitarios móviles que fortalecen rutas propias de comercialización (Comunicaciones COICA, 17 de julio de 2025). La organización enfatiza que la bioeconomía, para no reproducir lógicas extractivas, debe garantizar la participación protagónica de los pueblos que han gestionado y protegido el territorio amazónico por milenios, evitando reducir a las comunidades a meras proveedoras de materias primas.

Es fundamental no confundir la Economía Indígena —un proceso en construcción que emerge directamente desde las organizaciones y pueblos indígenas— con la bioeconomía, que constituye un esfuerzo institucional de origen externo. Mientras la primera se nutre de prácticas comunitarias, relaciones de reciprocidad y una comprensión integral del territorio, la segunda responde a marcos conceptuales diseñados principalmente desde la academia, los Estados y organismos internacionales, lo que explica sus diferencias en términos de prioridades, racionalidades y objetivos.

Cabe señalar que los procesos de reflexión para la construcción del concepto de economía indígena no se limitan a los impulsados por la COICA con representantes de toda la cuenca amazónica. Varios países han desarrollado propuestas propias desde sus contextos territoriales. En el caso de Ecuador, la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (CONFENIAE), y en Colombia, la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC), han promovido elaboraciones conceptuales y metodológicas desde sus realidades políticas, culturales y organizativas.

En este sentido, la economía indígena no constituye un concepto cerrado ni homogéneo, sino una noción en permanente construcción, alimentada por la diversidad de experiencias y cosmovisiones que emergen de los distintos pueblos y territorios amazónicos. Aunque existen matices entre las propuestas nacionales y locales, todas coinciden en aspectos fundamentales: la centralidad de lo comunitario, la reciprocidad, la autosuficiencia y la armonía con la naturaleza. Estos elementos comunes permiten identificar un camino compartido de construcción conceptual, en el cual la economía indígena se afirma como una alternativa viva frente a los modelos extractivistas y como expresión de la autodeterminación de los pueblos amazónicos.

A continuación, se aborda el caso de Ecuador y su proceso de construcción del concepto de economía indígena.

La Economía Indígena desde la visión de los pueblos y nacionalidades amazónicas del Ecuador

La Amazonía ecuatoriana ha vivido procesos sostenidos de exclusión estructural: pese a su enorme riqueza natural, la región presenta indicadores de pobreza y privación que superan a los del resto del país, y las poblaciones indígenas figuran entre los grupos más afectados (Marchán y De los Ángeles, 2024). Estas desigualdades se reflejan en acceso limitado a servicios básicos, oportunidades económicas y reconocimiento efectivo de derechos colectivos, lo que explica en parte la persistencia de brechas sociales y territoriales en la Amazonía ecuatoriana (Velín, 2026).

La explotación petrolera en la Amazonía norte comenzó a intensificarse desde las décadas de 1960–1970 y se constituyó en uno de los pilares de la economía nacional; sin embargo, su expansión no ha resultado en una redistribución justa de la renta ni en remedios adecuados frente a los impactos ambientales y sanitarios reportados por comunidades indígenas (Larrea y Larrea, 2017). Los casos emblemáticos —como las demandas contra Texaco/Chevron por contaminación en el nororiente ecuatoriano— y los frecuentes derrames y condiciones de contaminación fluvial muestran la magnitud de los daños y las demandas de reparación por parte de las comunidades afectadas (Kimerling, 2006).

En las últimas décadas la Amazonía ecuatoriana también ha enfrentado un notable avance de la minería a gran y pequeña escala, con un incremento significativo de superficies concesionadas y focos de deforestación vinculados a la minería aurífera y otras explotaciones (RAISG, 2020). Frente a estas presiones, los pueblos indígenas han jugado un rol activo en la defensa del territorio: han documentado y denunciado contaminación, han impugnado proyectos y concesiones —por ejemplo, la comunidad Kichwa de Sarayaku obtuvo un fallo

favorable en la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la falta de consulta previa— (Mantuano, 2025) y han desarrollado estrategias de resistencia que incluyen vigilancia territorial, demandas judiciales ante instancias nacionales e internacionales y acciones colectivas para impedir la instalación de empresas extractivas (Amazon Frontlines, 2025). Estos episodios muestran tanto la gravedad de las amenazas extractivas como la capacidad política y jurídica de los pueblos indígenas para buscar reparación y proteger sus territorios.

De modo que, se evidencia que los pueblos y nacionalidades amazónicas del Ecuador enfrentan una serie de presiones que amenazan su hábitat y medios de vida, provenientes de fuentes como la intervención del territorio para construcción de infraestructura, explotación petrolera, minería, construcción de proyecto hidroeléctricos, deforestación, cambios de uso de suelo y ampliación de la frontera agrícola. Estas fuentes generan amenazas a sus hábitats y medios de vida (López et al. 2013).

Este escenario refiere a una consolidación del extractivismo en la región, el cual puede entenderse como un régimen económico, social y político basado en la extracción a gran escala de recursos naturales orientado a su exportación a los países del norte global en función de las necesidades del capital mundial (Acosta, 2011). En el caso de la Amazonía ecuatoriana, el extractivismo, en sus diferentes manifestaciones, ha marcado históricamente sus procesos sociopolíticos, desde la explotación del caucho y la canela en el siglo XVIII, hasta la actualidad con la explotación petrolera y minera. Esta trayectoria se ha visto marcada por tensiones, conflictos y violencia, ejercidas desde el Estado nacional y actores del capitalismo transnacional, pero también por resistencia, luchas sociales y reivindicaciones políticas, las cuales ha permitido constituir organizaciones e identidades sólidas y con una gran capacidad de movilización (López et al. 2013).

Tras siglos de colonización y décadas de inserción creciente en los mercados nacionales y globales, muchas

lógicas de la economía dominante se han establecido en los territorios indígenas y han modificado aspiraciones y modos de vida locales. Esta penetración del mercado —que en numerosos casos ha desplazado prácticas de subsistencia, reciprocidad y trueque— obliga a reconocer procesos de hibridación económica: las comunidades combinan estrategias tradicionales (chakras, intercambio comunitario) con nuevas actividades mercantiles y formas de relación con actores externos. Estudios y documentos regionales subrayan cómo esta dinámica obliga a pensar una economía indígena que dialogue con la modernidad sin renunciar a sus principios comunitarios y ambientales (Salinas et *al.* 2020).

En este contexto, el rol de las organizaciones indígenas amazónicas es clave. En Ecuador la organización que representa a las nacionalidades indígenas amazónicas es la Confederación de Nacionalidades Indígenas Amazónicas del Ecuador (CONFENIAE), a la cual pertenecen las nacionalidades Kichwa, Shuar, Achuar, Waorani, Sápara, Andwa, Shiwiar, Cofan, Siona, Siekopai y Kijus, que agrupan a más de 1.500 comunidades. La CONFENIAE mantiene como objetivos organizativos el fortalecimiento institucional, el desarrollo comunitario, la defensa del territorio, del medio ambiente y de los recursos naturales, así como la revalorización cultural y el fortalecimiento de la gobernanza. Estos objetivos están orientados a la construcción del poder popular, enmarcados en los derechos de autonomía y libre determinación (CONFENIAE, 2023a). En este sentido, mantienen una posición orgánica de resistencia al extractivismo, al colonialismo y ante los desequilibrios territoriales del capitalismo, con una marcada perspectiva étnica y cultural

Desde esta posición, la CONFENIAE ha considerado pertinente definir conceptos propios sobre qué es la economía indígena amazónica, para sus pueblos y nacionalidades, con el fin de construir colectiva y participativamente una visión compartida sobre la economía a la que se aspira para la región y que sirva de directriz para la acción colectiva de la organización.

En 2023, CONFENIAE organizó el primer taller de construcción colectiva del concepto de economía indígena, en el cual participaron las 21 filiales que componen la confederación. Metodológicamente se desarrolló como un taller colaborativo de reflexión colectiva, en el cual se discutieron las realidades y necesidades de los territorios indígenas amazónicos, para generar consensos mínimos y visiones compartidas, que fueron sintetizadas en un primer concepto de economía indígena amazónica para Ecuador.

Figura 7.1

Talleres participativos para la construcción del concepto de Economía Indígena en Ecuador



Nota. Fotografía por Óscar Luna 2023.

Este concepto propuesto ha sido sometido a una constante retroalimentación para recoger las necesidades y aspiraciones de las comunidades que conforman la organización. El objetivo del concepto es servir como base para una reflexión continua, más que como un producto definitivo que establezca

de manera inamovible los objetivos y características de la economía indígena amazónica. Es decir,

no pretende ser un concepto acabado, sino que se encuentra en constante construcción, siendo un concepto vivo. El concepto tampoco busca homogeneizar la enorme riqueza y diversidad cultural de los pueblos y nacionalidades amazónicas, sino que, reconociendo las diferencias entre cada cultura, busca encontrar elementos comunes para la construcción de una agenda compartida que aporte al bienestar de la gente y de los territorios (Luna, Shiki y Romero, 2023, p. 24).

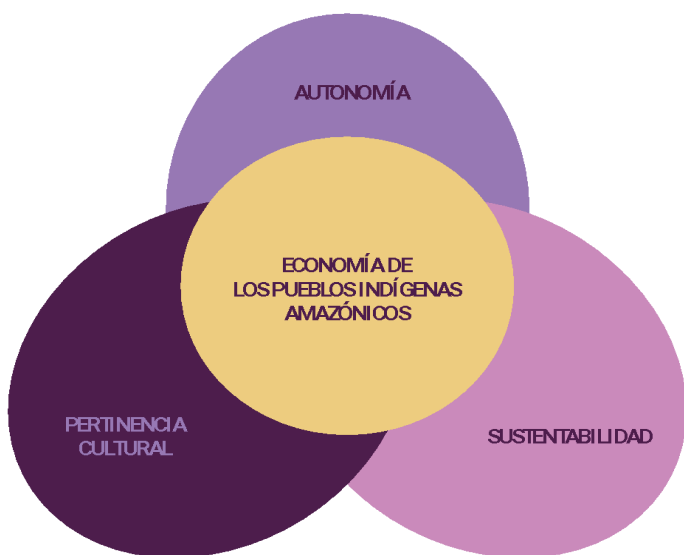
Este concepto es el resultado de un proceso de construcción colectiva llevado a cabo por parte de CONFENIAE. Fue elaborado mediante talleres que contaron con la participación de representantes de todas las nacionalidades amazónicas del Ecuador y luego fue sometido a la validación en el territorio por sus bases. Además, en octubre de 2022, el concepto fue presentado y aprobado en la asamblea general de la CONFENIAE, el máximo espacio de decisión de las organizaciones indígenas amazónicas. El concepto se define de la siguiente manera:

La economía de los pueblos y nacionalidades amazónicas se define como el conjunto de actividades económicas fundamentado en una autonomía digna, justa y equitativa, que se promueven de manera sustentable y con principios ancestrales de reciprocidad, solidaridad y redistribución. Estas prácticas pueden integrar elementos del capitalismo, pero con pertinencia cultural, bajo un conocimiento equilibrado entre la cosmovisión de los pueblos y nacionalidades amazónicas y el mundo occidental. Son actividades que buscan cubrir y satisfacer las necesidades propias de los pueblos y nacionalidades, sin convertir los territorios en expansiones extractivas a pequeña, mediana y gran escala, generando sinergias y relaciones en armonía entre la naturaleza y cultura ancestral (CONFENIAE, 2023b, s.p.).

Este concepto refleja una visión holística de la economía que integra nociones políticas, sociales, culturales y ecológicas. Cabe resaltar que este concepto plantea, desde sus primeras líneas, una perspectiva de reivindicación de los derechos de los pueblos y nacionalidades frente a las desigualdades de larga data del colonialismo y el capitalismo, enunciando a la economía a la que se aspira construir como una “autonomía digna, justa y equitativa”, para posteriormente desarrollar los siguientes elementos del concepto.

Figura 7.2

Relación entre los tres principales elementos del concepto de economía indígena de la Amazonía ecuatoriana.



Nota. Elaborado con base en Luna, Shiki y Romero (2023, p. 24).

Es posible identificar tres elementos constitutivos de esta visión, que son recurrentes en otras perspectivas similares de la región, tanto en pueblos indígenas como comunidades campesinas (Barkin, 2022).

En primer lugar, se aborda la autonomía como la capacidad de toma de decisiones de los pueblos y nacionalidades sobre su territorio, sus recursos y sus medios de vida, en un marco de poder que históricamente se ha encontrado marcado por tensiones, conflictos y luchas contra la dominación del estado nacional y capitales internacionales. Se busca que la economía sea una herramienta para el mejoramiento de las condiciones de vida de los pueblos y nacionalidades indígenas, pero se establece que esta se encuentra dentro de un marco de relaciones de poder que determina diferentes equilibrios y desequilibrios territoriales, que tienen que ser disputados en favor de las comunidades.

En segundo lugar, se establece que la economía indígena se encuentra arraigada al cuidado de la naturaleza y la defensa del territorio. Se busca promover la integración de conocimientos técnicos-productivos que benefician el cuidado de la naturaleza, con el conocimiento y sabiduría ancestral que constituye su memoria y patrimonio bio-cultural. A esto se suma un firme rechazo a las actividades extractivas en todas sus formas, debido a los impactos ambientales y sociales que estas representan, y cuyos efectos han experimentado de primera mano en su cotidianidad.

En tercer lugar, destaca el rol clave que mantiene el sentido de comunidad para pensar la economía como un proyecto orientado al beneficio de la colectividad. La economía de las comunidades se basa en los principios de reciprocidad y redistribución, en donde prima una lógica colectiva-comunitaria, en contraste a la economía capitalista de mercado que se fundamenta en la propiedad privada y generación de ganancias, cimentada en una lógica individual. Este contraste también se observa en la primacía del trabajo comunitario de la minga (jornadas de trabajo comunitario), en contraste con el trabajo asalariado propiamente capitalista.

Desde esta perspectiva, los pueblos y nacionalidades reconocen la necesidad de integrarse a la economía de mercado

por su carácter dominante y global, pero su objetivo es preservar sus valores tradicionales de reciprocidad y redistribución como pilares de la vida comunitaria. A esto se suma la preocupación por que la incursión en nuevas actividades económicas no trastoque la conservación de sus tradiciones y cultura, frente a lo cual proponen incluir de forma prioritaria su identidad cultural en sus emprendimientos.

La intención del concepto es buscar, desde una perspectiva holística, un modelo de desarrollo alternativo que respete la visión y riqueza cultural de las comunidades indígenas en el mundo contemporáneo. Se centra en la creación de un sistema económico propio que fortalezca y priorice las aspiraciones propias de los pueblos indígenas, permitiéndoles alcanzar autonomía para la defensa del territorio, hábitats y principios culturales y que, a su vez, permita proyectar alternativas económicas que disputen la hegemonía del extractivismo en la región (CONFENIAE, 2024).

Mingas de pensamiento: proceso de reflexión colectiva en Colombia en torno a la economía indígena

Los pueblos de la Amazonía colombiana también han emprendido un esfuerzo por articular conceptos que den cuenta de su experiencia y perspectiva sobre la economía. Una primera versión ha sido trabajada particularmente por los pueblos del departamento del Putumayo, en el sur de la región amazónica, desde una reflexión colectiva que permita articular un concepto de economía indígena y explorar su relación con la gobernanza del territorio. Con este cometido, bajo el liderazgo de la Organización Zonal Indígena del Putumayo (OZIP) y la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC), recurrieron a una serie de “mingas de pensamiento” a lo largo del año 2022, en las cuales los ejes de la discusión fueron:

explorar los horizontes de la economía desde la visión única de cada pueblo, cómo fortalecer la economía en los territorios y la relación de la economía con la gobernabilidad del territorio (OZIP y OPIAC, 2023, p. 7).

Durante este proceso, se estableció como el núcleo de la reflexión el conocimiento ancestral, una forma en la que la economía indígena se basa en un tejido de vida ligado a la espiritualidad, los conocimientos ancestrales y el respeto por la tierra y la naturaleza. En este sentido, se rescatan conocimientos tradicionales como el *payacuar* de pueblo Pasto que significa compartir, el *jemtrocac* del pueblo Kamentsá que representa el intercambio o trueque, el *sokrenan* del pueblo Kamentsá y el *kulke* del pueblo Inga que representan el dinero, y el *monijue* del pueblo Murui-Muina, que representa la abundancia.

De esta forma, para comprender la economía se propone entender la forma de vida de los pueblos indígenas. La economía debe representar una forma de vida arraigada a la espiritualidad, la sostenibilidad y el conocimiento sobre la madre tierra, ya que este es el origen de todos los productos que sostienen la vida. Los procesos que parten de esta base, como la generación de emprendimientos, no se pueden entender simplemente como negocios, sino como proyectos que impactan en las vidas a niveles personales, familiares y comunitarios (OZIP y OPIAC, 2023, p. 11).

Los procesos que sostienen su economía se basan en una serie de nociones que dan sentido a sus esfuerzos. Los productos y servicios de los pueblos indígenas surgen como respuestas a sus necesidades diarias, pero también como resultado de su conciencia sobre el impacto en la madre tierra, el territorio y la cultura. Estos productos no solo alimentan el cuerpo, sino también el alma. La forma de trabajo es la “minga”, que les permite compartir habilidades y conocimientos. Incentivan la participación de las mujeres y las personas jóvenes, sobre todo para que de esta forma

perduren las tradiciones. No solo se busca generar ganancias, sino preservar la cultura, la unidad y la participación. Su producción se dirige a los mercados locales, para abastecer a su territorio y fortalecer las conexiones entre culturas y comunidades (OZIP y OPIAC, 2023, p. 14).

También se destacan dos tipos de actores clave en las comunidades: los médicos de la tierra y las autoridades. Los primeros son custodios de las tradiciones, poseen la sabiduría para transmitir las y practicarlas en el cuidado de la comunidad y sus miembros. Los segundos, como pilares, promueven la gobernabilidad de las actividades mediante su gestión y orientación, contribuyendo así al sostenimiento de los procesos y a la toma de decisiones que benefician a la comunidad (OZIP y OPIAC, 2023, p. 13).

Además, han planteado diversas estrategias para fortalecer la economía indígena. Consideran fundamental integrar los conocimientos tradicionales con nuevos conocimientos técnicos, así como entablar y sostener alianzas entre comunidades, colonos y afrodescendientes que hacen parte de sus mercados locales. Así mismo, buscan integrar el conocimiento y la identidad a través de las generaciones mediante un trabajo conjunto intergeneracional, restringir la comercialización de medicina ancestral fuera de su territorio y trabajar en políticas públicas que fortalezcan sus propios sistemas (OZIP y OPIAC, 2023, p. 14).

En el marco de la economía indígena se han establecido tres tipos de emprendimientos. Los emprendimientos comunitarios en los que se reúnen varios miembros de la comunidad, familias o se forman comités y trabajan en algún tipo de producto o servicio de su interés. El trabajo es colaborativo y se recurre en gran medida a la minga, mientras que se comparten materiales y conocimientos, fortaleciendo el tejido comunitario. Los emprendimientos familiares en los que participan miembros de una misma familia, en los cuales se destaca el papel de las personas jóvenes,

quienes plantean las ideas para los emprendimientos. Finalmente, también se cuenta con emprendimientos individuales (OZIP y OPIAC, 2023, p. 15).

Se han planificado acciones para fortalecer a los emprendimientos a corto, mediano y largo plazo. A corto plazo, se busca fortalecer la elaboración de artesanías, el cultivo de plantas medicinales, la protección y rescate de chagras y el rescate de semillas, la cría de peces, el turismo y las demostraciones culturales. A mediano plazo, se busca trabajar en la ampliación de experiencias turísticas que ofrezcan un conocimiento profundo de la cultura, la transmisión de conocimientos y prácticas de medicina tradicional, así como la oferta de hospedaje. A largo plazo, se busca trabajar en cultivos sostenibles, a mayor escala, orientados a la seguridad alimentaria, la promoción de la cultura gastronómica, la transformación tecnificada de alimentos y plantas medicinales, los emprendimientos agropecuarios de mayor escala, los talleres culturales de formación para jóvenes, y la restauración con siembra de árboles (OZIP y OPIAC, 2023, pp. 16-17).

Es posible contar con criterios que sintetizan la experiencia de estos pueblos y el camino que quieren seguir en el futuro. Los pueblos indígenas se identifican como guardianes de la madre tierra, guardianes de la biodiversidad y, por lo tanto, su economía debe reflejar esta profunda conexión. Sus emprendimientos deben mejorar su calidad de vida y fortalecer su cultura, educación y salud. La comunidad debe tomar las decisiones y también respetarlas, por lo que el rol de los líderes es fundamental y debe respaldarse. Los conocimientos tradicionales deben guiar el porvenir de las comunidades. La participación de las mujeres y las personas jóvenes es primordial, pues en ellas reside el futuro de las comunidades. Se deben enfrentar las amenazas para el territorio, como las actividades ilegales y los proyectos extractivos, a través de la unidad (OZIP y OPIAC, 2023, pp. 18-19).

Conclusiones

Los esfuerzos de las organizaciones indígenas amazónicas por construir conceptos en el ámbito económico muestran su relevancia al presentar las primeras versiones de cuerpos conceptuales, que permiten comprender la vastedad de la experiencia acumulada durante cientos de años de lucha, así como su perspectiva para el futuro. De esta forma, se facilita el establecimiento de diálogos con experiencias similares alrededor del mundo y su articulación con propuestas dirigidas a objetivos globales, fundamentales para la supervivencia del planeta.

Desde una perspectiva metodológica, este trabajo ha sido producto de un ejercicio de reflexión colectiva, que ha dado cuenta de las coincidencias de las perspectivas que plantean los pueblos originarios de la región amazónica —a partir de tres casos de estudio: COICA (cuenca Amazónica), la CONFENAIE (Ecuador), la OZIP y la OPIAC (Colombia)— frente a los retos que enfrentan para el sostenimiento de la vida y la defensa de su territorio.

Los principales acuerdos se orientan hacia la construcción de modelos económicos propios, que aseguren la subsistencia y la calidad de vida de los pueblos, que estén basados en la comunidad y el cuidado de la naturaleza. Estos modelos se encuentran basados en principios de solidaridad, redistribución y reciprocidad. Se busca crear nuevas alternativas económicas, basadas en el cuidado de la naturaleza y que se nutran de la identidad cultural y los conocimientos tradicionales, a la vez que permitan resguardar este patrimonio de prácticas extractivas como la biopiratería. También se alerta sobre las amenazas y presiones del extractivismo, y la necesidad de la resistencia frente a este, pero también de encontrar alternativas económicas. Además, se ha dejado en evidencia la distancia entre la economía de mercado y la visión de los pueblos originarios, debido a la incompatibilidad de estos en temas como

la acumulación individual y la explotación ilimitada de la naturaleza. Adicionalmente, se menciona la importancia de la participación de las personas jóvenes y de las mujeres.

La revisión de estos acuerdos indica que los pueblos indígenas de la Amazonía comparten dos elementos fundamentales, alrededor de los cuales han organizado sus perspectivas sobre la economía: la comunidad y la naturaleza. Durante el ejercicio de conceptualización, estos elementos emergen como ejes organizadores, en torno a los cuales se articulan la comprensión de las problemáticas actuales, las amenazas que enfrentan y las posibles alternativas para el futuro.

Desde estos elementos es posible entender la relación de los pueblos amazónicos con la economía de mercado, el extractivismo, el Estado y otros actores, así como sus formas de sostener la vida en sus territorios. La comunidad y la naturaleza son imprescindibles para aproximarse a un concepto de economía indígena amazónica. Así, la economía no puede entenderse de forma aislada, sino que solo puede abordarse desde una perspectiva holística e integral, reflejando el ethos comunitario de los pueblos amazónicos. Los primeros resultados del ejercicio de conceptualización sobre economía indígena amazónica reflejan la lucha y organización de los pueblos originarios para el sostenimiento de su vida y su cultura.

Bibliografía

- Acosta, A. (2011). Extractivismo y neoextractivismo: dos caras de la misma maldición. Más allá del desarrollo. En M. Lang y D. Mokrani (Comps.), *Más allá del desarrollo* (pp. 83-118). Fundación Rosa Luxemburg / Abya Yala.
- Amazon Frontlines. (2025). *Amazon Frontlines and Avaaz Unite to Support Local Resistance Against Oil Drilling in the Ecuadorian Amazon*. https://amazonfrontlines.org/chronicles/amazon-frontlines-and-avaaz-unite-to-support-local-resistance-against-oil-drilling-in-the-ecuadorian-amazon/?utm_source=chatgpt.com

- Aramendis, R. H., Rodríguez, A. G., y Krieger Merico, L. F. (2018). *Contribuciones a un gran impulso ambiental en América Latina y el Caribe: Bioeconomía*. CEPAL.
- Barkin, D. (2022). El ethos comunitario en una era de crisis ecológica. *Minga*, (7), 8–36.
- Cepek, M. (2008). Essential commitments: Identity and the politics of Cofán conservation. *Journal of Latin American and Caribbean Anthropology*, 13(1), 196–222.
- Chavarría, H., Trigo, E. y Rodríguez, A. (2019). *La bioeconomía: Potenciando el desarrollo sostenible de la agricultura y de los territorios rurales en ALC*. CEPAL, FAO e IICA.
- Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). (2019). *Situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas y tribales de la Panamazonía*. CIDH / OEA.
- Comunicaciones COICA. (17 de julio de 2025). *La Amazonía se moviliza por la bioeconomía*. <https://coicamazonia.org/13807-2/>
- Confederación de Nacionalidades Indígenas Amazónicas del Ecuador (CONFENIAE). (2023a). Órgano de difusión de las nacionalidades indígenas de la Amazonía ecuatoriana. *Voz de la CONFENIAE* No. 24. <https://confeniae.net/wp-content/uploads/2023/09/FINAL-confe-REVISTA-2023-PEKE.pdf>
- Confederación de Nacionalidades Indígenas Amazónicas del Ecuador (CONFENIAE). (2023b). *Resolución de la Asamblea Anual CONFENIAE*.
- Confederación de Nacionalidades Indígenas Amazónicas del Ecuador (CONFENIAE). (2024). *Pueblos y Nacionalidades Amazónicas del Ecuador: La definición holística de economía indígena*. Proyecto Amazonía Indígena: Derechos y Recursos. <https://wwflac.awsassets.panda.org/downloads/cartilla-economia-pueblos-y-nacionalidades-amazonicos-ecuador.pdf>
- Conklin, B., y Graham, L. (1995). The shifting middle ground: Amazonian Indians and eco-politics. *American Anthropologist*, 97(4), 695–710.
- Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA). (2004). Dónde come uno comen todos. *Revista Nuestra Amazonía*, (24), 4-6.

- Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA). (s.f.). *Principios de Economía Indígena*. <https://economiaindigena.coicamazonia.org/principios-de-economia-indigena/>
- Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA). (s.f.). *Economía indígena. Un nuevo enfoque de economía que protege a nuestros pueblos indígenas y los territorios*. <https://economiaindigena.coicamazonia.org/>
- Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA). (s.f.). *Una Economía que integra la cosmovisión Indígena*. <https://economiaindigena.coicamazonia.org/que-es-la-economia-indigena/>
- Escobar, A. (2016). *Autonomía y diseño: La realización de lo comunal*. Editorial Universidad del Cauca.
- Frigolett Córdova, H., Güell Villanueva, P., & Ríos Núñez, S. (2021). La economía política de las prácticas de autonomía en las comunidades y actores locales: apuntes para la reflexión. *Polis*, (56), 1-5. <http://journals.openedition.org/polis/18987>
- Garzón, L. (2017). ¿El desarrollo local desde y para quién? Análisis de la formulación e implementación de proyectos estatales en comunidades indígenas amazónicas. *Gestión y Ambiente*, 20(2), 244–252. <https://doi.org/10.15446/ga.v20n2.65642>
- Gasché, J. (2004). Una concepción alternativa y crítica para proyectos de desarrollo rural en la Amazonía. En J. Gasché (Ed.), *Crítica de proyectos y proyectos críticos de desarrollo: Una reflexión latinoamericana con énfasis en la Amazonía* (pp. 105-118). Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana.
- High, C., y Oakley, R. E. (2020). Conserving and extracting nature: Environmental politics and livelihoods in the new ‘middle grounds’ of Amazonia. *Journal of Latin American and Caribbean Anthropology*, 25(2), 236–247.
- Hodson, E. (2014). *Hacia una bioeconomía en América Latina y el Caribe en asociación con Europa*. Editorial Pontificia Universidad Javeriana.
- Kimerling, J. (2006). Indigenous Peoples and the Oil Frontier in Amazonia: The Case of Ecuador, ChevronTexaco, and Aguinda v. Texaco. *New York University Journal of International Law and Politics*, 38(3), 413–664. <https://nyujilp.org/wp-content/uploads/2013/02/38.3-Kimerling.pdf>

- Larrea, C., y Larrea, A. I. (2017). “¿Hemos sembrado el petróleo en el Ecuador?”. En C. Larrea (Coord.), *¿Está agotado el período petrolero en Ecuador? Alternativas hacia una sociedad más sustentable y equitativa: Un estudio multicriterio* (pp. 33-56). Universidad Andina Simón Bolívar.
- Lesenfans, Y., Veprinsky Mehl, A., Muggah, R., Aguirre, K., y Smith, P. C. (2024). *Re-Imagining Bioeconomy for Amazonia*. Inter-American Development Bank / Igarapé Institute. <https://doi.org/10.18235/0013007>
- López, A. V., Espíndola, F., Calles, J., y Ulloa, J. (2013). *Amazonía Ecuatoriana Bajo Presión*. EcoCiencia.
- Luna, Ó., Shiki, L., y Romero, G. (2023). La economía de los pueblos y nacionalidades amazónicas. *La Voz de la CONFENIAE*, (24), 23-24. https://confeniae.net/revista/#flipbook-df_8377/1/
- Mantuano, M. (2025). *Sarayaku: 10 años de la sentencia histórica de la Corte IDH*. Fundación Pachamama. <https://www.pachamama.org.ec/noticias/a-10-anos-de-historica-sentencia-de-la-corte-interamericana>
- Marchán, J. y De los Ángeles, M. (2024) Determinantes de la exclusión social en pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador en 2023. *Revista Cuestiones Económicas*, 34(2), 80-114.
- Miranda, R., Schwaninger, M., Lucena, A., Logullo, Y., Belderrain, M. C. N., Carvalho, T. C. M. B., y Sato, R. C. (2023). Sustainable Amazon: A Systemic Inquiry with Native Populations. *Sustainability*, 15(9), 7517. <https://doi.org/10.3390/su15097517>
- Organización Zonal Indígena del Putumayo (OZIP) y Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC). (2023). *Voces de nuestra tierra. Mingas de pensamiento: Descubriendo la economía indígena en Putumayo*. Proyecto Amazonía Indígena Derechos y Recursos.
- Panel Científico por la Amazonía. (2021). *Resumen ejecutivo del informe de evaluación de la Amazonía 2021*. Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.
- RAISG. (2020). *Amazonía Bajo Presión*. <https://www.raisg.org/es/publicacion/amazonia-bajo-presion-2020/>

- RAISG. (10 de octubre de 2024). *COP16 de Biodiversidad: el 23% de los bosques de la Amazonía ha perdido totalmente su conectividad ecológica y podría estar acelerando el punto de no retorno*. <https://www.raisg.org/es/radar/cop16-de-biodiversidad-el-23-de-los-bosques-de-la-amazonia-ha-perdido-totalmente-su-conectividad-ecologica-y-podria-estar-acelerando-el-punto-de-no-retorno/>
- Rodrigues, J. (2020). Propuestas de resistencias y “re-existencias” desde la Amazonía ecuatoriana: El caso del Pueblo Originario Kichwa de Sarayaku y las luchas antiextractivas. *Revista Direito em Debate*, (53), 44–55.
- Rubenstein, S. (2004). Steps to a Political Ecology of Amazonia. *Tipití: Journal of the Society for the Anthropology of Lowland South America*, 2(2), 131-176.
- Salinas, V., Bilsborrow, R. E., y Gray, C. (2020). Cambios socioeconómicos en el siglo XXI en poblaciones indígenas amazónicas: retos actuales. *Estudios demográficos y urbanos*, 35(1), 83-116. <https://doi.org/10.24201/edu.v35i1.1768>
- Vallejo, I., Valdivieso, N., Cielo, C., y García, F. (2016). Ciudades del Milenio: ¿Inclusión o exclusión en una Nueva Amazonía? En H.-J. Burchardt, R. Domínguez, C. Larrea, & S. Peters (Eds.), *Nada dura para siempre: Neo-extractivismo tras el boom de las materias primas* (pp. 281-215). Universidad Andina Simón Bolívar / International Center for Development and Decent Work.
- Velín, J. (2026). Riqueza natural, pobreza persistente: instituciones, políticas públicas y desarrollo en la Amazonía ecuatoriana. *Revista Académica Decisión Gerencial*, 5(11), 52-68.
- World Resources Institute (WRI). (17 de julio de 2025). *Foro Pan-Amazonico en Colombia: hoja de ruta hacia una bioeconomía que proteja la Amazonía y sus comunidades*. <https://es.wri.org/noticias/foro-pan-amazonico-en-colombia-hoja-de-ruta-hacia-una-bioeconomia-que-proteja-la-amazonia>

CAPÍTULO 8

Horizontes y límites del trabajo de cuidados comunitarios en la economía popular organizada en Argentina.

Malena Victoria Hopp

Introducción

Las políticas neoliberales en América Latina y el Caribe y los efectos de la pandemia de Covid-19 vienen produciendo importantes transformaciones en el mundo del trabajo y en los estilos históricos de cohesión social que impactan en las estrategias de supervivencia “desde abajo” (Díaz y Viales, 2021). Según el informe técnico de la Organización Internacional del Trabajo (OIT por sus siglas en inglés) (2020) sobre tendencias de los mercados e instituciones laborales en los últimos treinta años, la informalidad laboral alcanza a aproximadamente la mitad de las personas trabajadoras en la región, aunque con diferencias significativas entre países, sectores y grupos poblacionales. Las mujeres y jóvenes de los hogares más vulnerables son quienes siguen encontrando mayores barreras para acceder a empleos protegidos y bien remunerados. Si bien se han registrado avances en la institucionalidad del trabajo e implementado reformas que mejoraron los sistemas

de protección social incorporando prestaciones no contributivas, la precariedad y la desprotección siguen caracterizando la experiencia de una parte muy importante de la población trabajadora (Bertranou y Gontero, 2025).

En Argentina, los efectos de estos procesos se expresan en la caída de la participación relativa del trabajo asalariado frente a la emergencia de nuevas formas laborales atípicas y el incremento de trabajos no registrados (Donza et al., 2022; Maceira, 2021). También en el aumento del número de personas trabajadoras pobres que no logran acceder a ingresos suficientes, a niveles de bienestar aceptables, ni garantizar estabilidad, protección, reconocimiento y seguridad (Etchemendy et al., 2024; Poy, 2022). Además, la recuperación económica post-pandemia acrecentó el sesgo regresivo de la distribución del ingreso: en 2021 el 1% más rico concentró un cuarto de la riqueza nacional, mientras que “25 millones de personas no llegan a fin de mes, 18 millones son pobres y 4 millones pasan hambre” (Lozano y Rameri, 2023, p. 14). Según los datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), en el 4° trimestre de 2024 el 42% del empleo del total de aglomerados urbanos era informal, 28,6% de los hogares y 38,1% de las personas que habitan el territorio nacional se encontraban en situación de pobreza. En consonancia con las tendencias regionales, las mujeres y las personas jóvenes son quienes tienen en mayor proporción ocupaciones informales y peor remuneradas (INDEC, 2025). El trabajo doméstico es la ocupación que presenta mayores niveles de informalidad, además de ser una actividad feminizada e históricamente invisibilizada (Poblete, 2022).

A la par de ello, la confluencia de procesos socioeconómicos, políticos, demográficos, y sanitarios de larga data, llevan a la profundización de la crisis de los cuidados (Scaglia 2020). Esta crisis no es un hecho aislado, por el contrario, expresa las contradicciones socio-reproductivas de un capitalismo globalizado y financiarizado (Fraser, 2016). La tendencia del sistema a la acumulación ilimitada amenaza, cada vez más,

con desestabilizar las capacidades reproductivas de las que depende el propio capital para su reproducción y que todas las personas necesitamos para sostener la vida. Desde esta perspectiva, las tensiones a las que están sometidos los cuidados no son accidentales, sino que forman parte de un orden social constituido por el conflicto capital-vida (Pérez Orozco, 2014) que excede la oposición capital-trabajo y alcanza a las diversas formas laborales remuneradas (asalariadas y no asalariadas) y no pagas. Esta crisis afecta especialmente a las mujeres que son quienes se ocupan en mayor medida de las tareas de cuidado. Así lo muestra la Encuesta Nacional de Usos del Tiempo en Argentina, donde estas tareas insumen casi el doble de tiempo para las mujeres que para los varones. La desigualdad se profundiza en los sectores de menores ingresos que no tienen posibilidades de acceso a servicios de cuidados mercantilizados (INDEC, 2022).

Las políticas de desregulación económica y ajuste fiscal impulsadas a partir de la asunción del gobierno de ultraderecha de Javier Milei, en diciembre de 2023, no solo están profundizando las dinámicas de precarización laboral y de las condiciones de vida (Barrancos, 2025; Beccaria y Fernandez, 2025; Etchemendy et al., 2024; Vera et al., 2025) sino que marcan una ruptura en la concepción del Estado como garante de derechos. Esta transformación incluye una dimensión cultural que desconoce problemáticas y desigualdades de género asociadas a la crisis de los cuidados, y rechaza toda forma de organización colectiva, particularmente aquellas vinculadas con los feminismos y el mundo del trabajo.

En este escenario, este capítulo tiene como objetivo analizar las formas de organización, innovación y adaptación de los cuidados comunitarios desarrollados en la economía popular organizada en la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP). Interesa indagar en sus potencialidades, horizontes y límites para generar trabajo y sostener la reproducción de la vida en barrios populares del

Área Metropolitana de Buenos Aires. Para ello, utilizamos una metodología cualitativa que combinó entrevistas a informantes clave, observación participante y análisis documental. A partir de una estrategia de análisis relacional, buscamos vincular los mecanismos y lógicas de funcionamiento del trabajo de cuidados comunitarios con el contexto socioeconómico y político-institucional en el que se desarrollan, evidenciando la capacidad de agencia de estas personas trabajadoras. Argumentamos que no hay comprensión posible del trabajo y de los cuidados en la sociedad argentina contemporánea sin mirar desde la economía popular. La economía popular es un lente que no solo permite interpretar el mundo, sino que lo reordena simbólicamente para volver visible lo que el capital invisibiliza: las tramas territoriales de los cuidados, la centralidad de estos trabajos para la sostenibilidad de la vida y la potencia de las prácticas colectivas para la atención de necesidades y la construcción de otros mundos posibles.

La relevancia del estudio radica en la posibilidad de conocer, visibilizar y sistematizar alternativas laborales y de provisión de cuidados que tienen alcances e impactos significativos en la atención de necesidades en los barrios populares y la construcción de formas de sociabilidad basadas en la solidaridad y el apoyo mutuo. Además, se trata de iniciativas que son implementadas a partir de recursos propios y capacidades colectivas que aportan a pensar nuevos modelos de gestión comunitaria de los cuidados y ampliar los horizontes de construcción de una sociedad que coloque la vida en el centro.

La organización del capítulo es la siguiente. Primero presentamos la perspectiva teórico-metodológica de la investigación y caracterizamos el caso de la UTEP. En el siguiente apartado, reconstruimos cómo se fueron complejizando los cuidados comunitarios en la economía popular para abarcar “esas infinitas tareas” de sostén material y afectivo que incluyen, pero exceden, las labores en comedores para garantizar la alimentación. Luego exploramos

las transformaciones y disputas en el contexto del gobierno de Milei, orientadas por la noción de soberanía en cuidados como horizonte de sus prácticas sociales, laborales y políticas. Por último, presentamos las reflexiones finales destacando los horizontes y límites del trabajo de cuidados comunitarios en la economía popular organizada.

Mirar desde la economía popular: enfoque teórico-metodológico

El concepto de economía popular se construyó en discusión con el de economía informal acuñado por la OIT y difundido en diferentes corrientes de pensamiento económico (Coraggio, 1989; Quijano, 1998; Razeto, 1986). Si bien las conceptualizaciones sobre la informalidad no son homogéneas, mayormente coinciden en definirla como el conjunto de actividades marginales que desarrollan las personas pobres para sobrevivir. También la consideran una característica de las economías de la periferia en las que conviven un sector moderno, otro tradicional y el informal urbano. Esta perspectiva caracteriza sus prácticas como heterogéneas, constituidas con escaso acceso al capital, débil apropiación de tecnología y baja calificación, desarrolladas por fuera de los mecanismos de regulación estatal. En algunos casos la inscriben en la categoría de microempresarios que optarían por la informalidad para evadir costos, tiempos y esfuerzos del registro formal. En este marco, las unidades productivas informales fueron entendidas como resabios del proceso de modernización en América Latina, como empresas que no han llegado a incorporar las pautas culturales y tecnológicas para su integración al sector moderno de la economía. Esta conceptualización presenta connotaciones negativas y estigmatizantes hacia las prácticas laborales y económicas de los sectores populares, concebidas como atrasadas, marginales, descalificadas, transitorias, de refugio, y en algunos casos

también ilegales. Además, el concepto presenta limitaciones teóricas para captar, medir y comprender las especificidades de los trabajos que desarrollan los sectores populares para garantizar la reproducción de sus hogares y sostener la vida en las comunidades (Coraggio, 1999; Hopp y Mutuberria, 2022).

En contraposición, la perspectiva de la economía popular ofrece herramientas conceptuales para comprender las actividades que desarrollan los sectores populares desde el punto de vista del trabajo. Dicho de otro modo, se destaca la centralidad del trabajo frente a otros recursos o factores para producir, distribuir y consumir. También difiere en la concepción de la racionalidad de las unidades productivas. Si la idea de informalidad se define a partir de una lógica mercantil, basada en el crecimiento y la acumulación de capital, la economía popular se comprende desde la racionalidad reproductiva o de la sostenibilidad de la vida. Este es un punto de encuentro con la economía feminista que propone colocar la vida en el centro y comprender desde ese lugar la organización social y económica (Carrasco, 2001; Pérez Orozco, 2014). Desde la racionalidad mercantil, las actividades que se realizan en la economía popular son consideradas improductivas y la labilidad de los límites entre la unidad doméstica y la productiva que caracteriza al trabajo en la economía popular, se plantean como un problema. Desde la racionalidad reproductiva, en cambio, son trabajos indispensables que requieren ser reconocidos, protegidos y valorados por el aporte que realizan al bienestar social. Su lógica implica que las prácticas económicas se fortalecen en su estrecha vinculación con las unidades domésticas de sus miembros y los territorios en las que se asientan (Coraggio, 2007; Gago et al., 2018; Sarria Icaza y Tiribia, 2004). En esta clave, la perspectiva de género es indispensable para comprender la economía popular. Los múltiples trabajos que realizan, principalmente las mujeres, son elementos nodales del sostenimiento de las unidades económicas. Por ello, el trabajo de cuidados requiere ser pensado

no solamente como parte de las estrategias domésticas de los hogares, sino como el eje del funcionamiento de la economía popular en su conjunto (Frega, 2018; Hopp, 2025).

Desde estos debates proponemos una perspectiva teórico-metodológica que define la economía popular como un lente que permite comprender los procesos de producción y reproducción de la vida, la organización social de los cuidados y las estrategias de resistencia ante el despojo neoliberal y patriarcal en América Latina y el Caribe. Se trata de un campo en construcción en donde convergen prácticas laborales no asalariadas, autogestionadas, asociativas y comunitarias. Y que ha dado lugar a la emergencia de sujetos políticos y procesos de organización colectiva que disputan sentidos y expresan distintas búsquedas de reconocimiento social, cultural, estatal, laboral y económico de sus prácticas, de acceso a recursos, poder y condiciones de vida digna, que incluyen la igualdad de género y la solidaridad como dimensiones centrales.

Estrategia metodológica

Para abordar el problema de los cuidados comunitarios desde el lente de la economía popular utilizamos una metodología cualitativa que articuló distintas técnicas, en el marco de una estrategia de análisis relacional. Este enfoque buscó vincular la experiencia de trabajo de cuidados comunitarios de las organizaciones que conforman la UTEP, con el contexto socioeconómico y político-institucional en el que se desarrollan. Para ello fue necesario reconstruir los procesos sociales, históricos y de organización colectiva que hicieron posible y moldearon las formas de (auto)reconocimiento y la (re)conceptualización de las múltiples tareas que llevan adelante las mujeres, generación tras generación, como *trabajo*. También los modos de (re)producción de las desigualdades laborales y de género que implica el sostenimiento de los cuidados comunitarios en los territorios, y las relaciones que se establecen entre la comunidad, el Estado y el mercado,

evidenciando la capacidad de agencia de las personas trabajadoras de la economía popular y sus organizaciones para la construcción de horizontes alternativos a la racionalidad de mercado y las lógicas de despojo neoliberal y patriarcal.

Utilizamos las siguientes técnicas de recolección de información:

- a) *Entrevistas semi estructuradas a informantes clave* que fueron mujeres que integran la conducción de la UTEP. Las entrevistas se realizaron entre 2022 y 2024 como parte del proyecto PICT “Género, organización gremial y políticas públicas: las estrategias políticas y sindicales de las trabajadoras de la economía popular en Argentina”. El criterio de selección de las informantes fue su rol en la organización del trabajo socio-comunitario. En este capítulo consideramos las entrevistas realizadas a Norma Morales y Dina Sánchez, Secretarías Adjuntas de la UTEP. A Marina Joski, Secretaria de las Mujeres y la Diversidad de la UTEP hasta 2023. Y a Celeste Ortiz, Secretaria de Cuidados Comunitarios de UTEP.

Realizamos dos entrevistas a cada informante en distintos momentos, a fin de indagar la concepción de los trabajos socio-comunitarios que sostienen y la forma en que se organizan; el proceso de consolidación de la rama dentro de la UTEP, sus principales demandas y la construcción de proyectos de ley para regular el trabajo de cuidados comunitarios. Para su análisis, realizamos una codificación abierta que nos permitió acercarnos a los temas principales vinculados con las transformaciones de los cuidados comunitarios. Luego establecimos relaciones entre dichas transformaciones, los contextos socioeconómicos, políticos e institucionales y los procesos de organización gremial de la economía popular. Siguiendo a Zibecchi (2022) buscamos desentrañar

los sentidos políticos de las prácticas de cuidado, considerando que su politicidad se despliega a partir de la posibilidad abierta y contingente de inscribir la experiencia individual (en este caso de mujeres que llegaron a ocupar cargos de conducción en la UTEP) en un proyecto colectivo mayor.

- b) *Observación participante* en actividades públicas y manifestaciones callejeras. En ellas tomamos notas de campo que enriquecieron la información de las entrevistas con el discurso público de la UTEP.
- c) *Análisis documental*. El *corpus* incluyó tres proyectos de ley de reconocimiento económico del trabajo de cuidados comunitarios impulsados por la UTEP, documentos de diagnóstico y difusión asociados a ellos como la plataforma cuidarestabajo.com.ar, notas de prensa, información de sitios web y redes sociales y estadísticas del sector. El análisis documental permitió observar las demandas y formas de protesta en torno al reconocimiento de los cuidados, así como las propuestas concretas desarrolladas para regularlos y promoverlos.

La Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular

La UTEP se conformó en diciembre de 2019. Se trata de una organización que asumió la representación gremial de un conjunto heterogéneo de actividades laborales que se diferencian del trabajo asalariado y se organizan en distintas ramas: transporte y almacenamiento, agricultura familiar y campesina, construcción e infraestructura social y mejoramiento ambiental, recuperación, reciclado y servicios ambientales, servicios personales y otros oficios, servicios socio-comunitarios, comercio popular y trabajos en espacios públicos, e industria manufacturera.

Los trabajos socio-comunitarios tienen un peso muy importante en la economía popular. Según el Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular (RENATEP) esta rama comprende a casi un millón de las 3.618.606 personas registradas (27%), seis de cada diez de ellas son mujeres (63%) (RENATEP, 2023). Distintas estimaciones afirman que la economía popular está integrada por alrededor de 4,2 millones de personas trabajadoras (Arango et al., 2017, Observatorio de Coyuntura Económica y Políticas Públicas [OCEPP], 2019, RENATEP, 2021, Wolanski et.al, 2022).

La UTEP cuenta con más de 420.000 afiliados/as y está integrada por alrededor de sesenta organizaciones de base en todo el país. Plantean que la economía popular nuclea al 30% de la población económicamente activa, que representa al menos a seis millones de personas, aunque solo un millón se encuentran organizadas (<https://utep.org.ar/nuestro-sindicato>). La UTEP surge a partir del fortalecimiento y ampliación de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), creada en 2011. Estas experiencias permitieron construir el concepto de economía popular como una categoría política y reivindicativa (Fernández Álvarez, 2018) que unificó la representación de personas trabajadoras usualmente denominadas informales, desde una nueva perspectiva que las valora y piensa como parte del sistema económico y productivo. Desde su constitución se dieron cambios significativos en las estructuras para la toma de decisiones y en las formas organizativas que se complejizaron y formalizaron a partir de obtener la personería social, en 2021.

Este proceso tuvo su correlato en el fortalecimiento de una identidad como parte de un sector del trabajo, en el desarrollo de una agenda propia que incluye demandas asociadas a problemáticas que involucren distintos aspectos de sus condiciones laborales y de vida y en la elaboración de propuestas para abordarlas, tales como proyectos legislativos, políticas públicas o sistemas de registro. También en

la incorporación de referentes de las organizaciones que integran la UTEP a la gestión pública de distintos niveles gubernamentales y dentro del ámbito parlamentario.

Entre estos cambios, destacamos también la transversalización de la perspectiva de género y la construcción de estrategias orientadas a revertir las desigualdades sexo-genéricas. Las acciones en esta dirección fueron variadas, entre ellas la participación en movilizaciones del Día Internacional de la Mujer Trabajadora y el 3J contra la violencia de género del Movimiento Ni una Menos, la integración de la inter-sindical feminista que reúne a un amplio grupo de sindicatos para abordar sus demandas desde una perspectiva feminista, la incorporación de cláusulas de paridad en el estatuto organizacional y la creación de una Secretaría de las Mujeres y la Diversidad (Hopp y Maldovan, 2025). Respecto al abordaje específico de los trabajos socio-comunitarios, en 2019, se dio la constitución de esta rama entendida como una actividad principal, no sólo como un apoyo para la participación laboral de las mujeres en otras actividades (Timpanaro, 2023). A partir de ello se desarrollaron distintas campañas de visibilización de los cuidados en el marco de las estrategias gremiales orientadas al reconocimiento económico de dichos trabajos.

Las medidas de aislamiento social, preventivo y obligatorio para atender la emergencia sanitaria provocada por la pandemia del COVID-19, volvieron a colocar en el centro del debate público el problema de los cuidados, mostrando el carácter esencial de las tareas que realizaron cotidianamente las mujeres de la economía popular en los barrios populares para enfrentar el virus y sostener la vida de cientos de miles de hogares cuyos ingresos se habían reducido abruptamente por la imposibilidad de salir a trabajar. Estas circunstancias tan adversas, lejos de paralizarlas, impulsaron la transformación de las formas de organización de los cuidados comunitarios y abrieron una nueva vía para disputar el reconocimiento de estos trabajos dentro de las organizaciones, frente a la sociedad y las políticas públicas.

Cuidados comunitarios: de la necesidad a la organización

El desarrollo de los espacios socio-comunitarios en Argentina se remonta, al menos, a la década de 1980, cuando comenzaron a instalarse los procesos de pauperización ligados a las consecuencias de las políticas neoliberales. En ese contexto, los programas focalizados que pretendían atender esta situación fueron incorporando a su diseño la obligación de realizar una contraprestación en ámbitos comunitarios (Pautassi et al., 2014) que colaboró con su expansión. Esto implicó un desarrollo basado, en gran medida, en la participación de mujeres en contextos de pobreza, que, si bien habilitó su incorporación al ámbito público y favoreció la construcción de nuevas redes, no contempló los efectos en términos de una extensión de las tareas domésticas desde los ámbitos privados a los comunitarios.

Hace más de una década, distintos estudios señalaron que estas actividades que desarrollan las mujeres de barrios populares se reproducen con base en trabajo no pago y no reconocido como tal, a partir de lógicas que velan la necesidad económica por el supuesto desinterés presente en las relaciones de cuidado (Zibecchi, 2014). Si bien la cuestión del reconocimiento económico estaba presente, no era problematizada en el ámbito público y las demandas de ingresos y protección a partir de la politización de los cuidados, no se planteaba desde su reconocimiento como trabajadoras (Fournier y Gorgoschidse, 2014).

A lo largo de los años, los espacios socio-comunitarios crecieron y se transformaron. En 2023 existían 34.782 inscriptos en el Registro Nacional de Comedores y Merenderos Comunitarios de Organizaciones de la Sociedad Civil (RENACOM), allí trabajaban 134.449 personas (Malasechevarria, 2023). Además, hay que considerar las más de 970.000 personas inscriptas en la rama socio-comunitaria del RENATEP. Este crecimiento implicó la complejización de las formas de gestión y provisión

de cuidados y la consolidación de distintas modalidades de relación con las políticas públicas que, hasta la asunción de Milei, se desarrollaron en el marco de una tensión entre la promoción y el apoyo y la invisibilización y débil remuneración. Esta situación fue conceptualizada como una forma de subsidio al Estado por parte de las trabajadoras socio-comunitarias (Fournier, 2017). Estas transformaciones, también dieron lugar a la emergencia de una representación sindical de estas mujeres que fueron identificándose como trabajadoras de la economía popular y se organizaron en la UTEP.

En los relatos de las entrevistadas, los orígenes de los cuidados comunitarios remiten a la crisis del año 2001, cuando el colapso político-institucional y económico, la desocupación y la pobreza masiva en Argentina impulsaron la creación de ollas populares, comedores y redes solidarias para garantizar la subsistencia. Para ellas, esta crisis fue un momento bisagra que permitió el reconocimiento de una situación problemática común cuyas causas se vinculaban con las políticas de reforma estructural neoliberales profundizadas durante la década de 1990. Marina Joski recuerda el 2001 evocando la imagen de personas “varadas” en barrios despojados de servicios básicos (como el agua, la salud, la educación, la urbanización) y del acceso al alimento y al trabajo. Territorios que no contaban con espacios colectivos para el cuidado de las infancias o de personas mayores, “en donde el avance del narcotráfico dejaba tirados y regados en las esquinas a nuestros pibes, pibas y adolescentes”. (M. Joski, comunicación personal, 7 de diciembre de 2024).

La situación crítica de los barrios populares se había extendido también a los sectores medios, definidos en aquel entonces como “nuevos pobres” (Minujin, 1992). Este fue parte del contexto que llevó al estallido social de diciembre de 2001, un acontecimiento que fue interpretado como la puesta en crisis de principios asociados a la democracia representativa, y también como un potente laboratorio de experimentación que hizo eclosionar formas de organización

alternativas (Longoni et. al, 2024) como las asambleas y ollas populares en las que las mujeres tuvieron un rol protagónico. Estas experiencias de organización colectiva que comenzaban a multiplicarse permanecen como parte de los repertorios de organización de la economía popular hasta hoy.

Norma Morales recuerda el modo en que la situación socioeconómica y política crítica del país la atravesó en términos personales, cuando a su compañero le redujeron la cantidad de horas de trabajo en la fábrica de juguetes en la que estaba empleado. Ellos vivían en un barrio popular de Avellaneda. Su hija mayor tenía cuatro años y ella estaba embarazada. Con su compañero se miraban y lloraban porque no sabían cómo afrontar la situación que estaban pasando. Norma tuvo que salir con su changuito (carrito de compras) y su hija a buscar comida, al igual que tantas otras mujeres que lo hicieron en aquel entonces, mientras los varones sentían vergüenza y se quedaban en las casas. A partir de esa experiencia de necesidad, se fue involucrando en la organización colectiva: “Resulta que me pasó algo loco ahí, porque salí a la esquina de mi casa y había dos compañeros, vecinas, que estaban atravesando la misma situación. Y dijimos bueno, nos unió la necesidad” (N. Morales, comunicación personal, 14 de julio 2023). A partir de ese reconocimiento “levantaron la vista” y se dieron cuenta de que no eran ellos solos. Cientos de miles de personas de los barrios cercanos y en todo el país pasaban hambre y habían perdido su trabajo. Con el reconocimiento del problema estructural, cuyos efectos desbordaban la situación personal-familiar, comenzaron a darse procesos de socialización y a construirse tramas territoriales para garantizar la reproducción (Scaglia, 2020). Estas tramas abrieron la posibilidad de inscribir la experiencia individual en proyectos colectivos más amplios que, en el caso de las entrevistadas, confluyeron en la actual UTEP. Dina Sánchez (comunicación personal, 23 de junio 2023) recuerda aquellos tiempos y los compara con la situación actual:

“Todos los días se suman compañeros y compañeras a las orgas porque hay cada vez más exclusión y esas personas se vienen a las organizaciones. Por eso digo que no somos un 2001. Ahí la gente no estaba organizada, se quedaba en el barrio, se quedaba sin trabajo y no sabía que existían organizaciones, o había muy pocas en los territorios. Ahora en cada manzana hay una organización, y no solamente de la UTEP. Aunque a veces lo acoten al comedor y al merendero que a mí, por ejemplo, fue lo que me salvó las papas. Yo llegue a la organización desde la necesidad, llegue con mi tuppercito para llevarme la comida. Hoy no es el 2001 en ese sentido, las personas saben que hay organizaciones que van a poder garantizar la comida y que le pueden permitir insertarse en un trabajo, en una unidad productiva”. (Dina Sánchez, Secretaria Adjunta UTEP, junio 2023).

En 2001 estas mujeres comenzaron un camino que, años después, derivó en la posibilidad de entender que las tareas de cuidado comunitario siempre habían estado presentes pero que aún faltaba ponerles “un nombre y apellido”. Esas tareas realizadas por generaciones de mujeres se encuentran naturalizadas: “cuidar, criar, cambiar pañales, cocinar, limpiar” son parte de las obligaciones impuestas por un sistema patriarcal que comenzó a problematizarse en asambleas y ollas populares. Estos vínculos y redes que se fueron tejiendo en los barrios permitieron transformar el problema de acceso a los alimentos y a los cuidados en una cuestión de índole pública, comunitaria y política abordada de manera colectiva. En esa clave, las experiencias de Norma, Dina y tantas otras mujeres, pueden ser interpretadas como un proceso de salida del hogar-privado que puso en cuestión la proyección espacial de las diferencias entre los sexos (Bourdieu, 1999). Este proceso, impulsado por la propia necesidad, operó una nueva lectura política construida a partir del vínculo con otros/as que permitió impugnar y alterar, desde la propia práctica, el sentido de esas tareas que siempre han realizado las mujeres en sus casas pero que, articuladas

en tramas territoriales y de organización colectiva, hoy pueden nombrar como cuidados comunitarios (Hopp, 2026).

Esta potencia política de los cuidados es reconocida ampliamente desde perspectivas feministas, destacando, entre otras dimensiones, los aspectos morales que se ponen en juego en las relaciones sociales en torno a los cuidados. Comas (2017) desarrolla la idea de circulación de una deuda de reciprocidad inter-generacional que asume la interdependencia y pone en cuestión la lógica utilitarista de las relaciones mercantilizadas. Desde este lugar, podemos pensar las múltiples tareas que llevan adelante las trabajadoras de la economía popular para sostener la vida de sus familias, comunidades y de la propia organización social. También sus sueños y horizontes de construcción de otros futuros posibles.

Cuidados comunitarios en la economía popular organizada

Una de las principales características de los cuidados en la economía popular es el carácter colectivo y comunitario. Según los datos del RENATEP (2023) seis de cada diez personas inscriptas en la rama de servicios socio-comunitarios desarrolla sus tareas en organizaciones sociales o comunitarias y una de cada diez, en cooperativas. En este sentido, los cuidados se asumen como un problema asociado a la reproducción social y el ámbito comunitario constituye el centro de las estrategias de vida de estas personas trabajadoras que no están aisladas sino inscriptas en territorios y organizaciones específicas (*Proyecto de Ley de Creación de un Sistema Integral de Protección del Trabajo de Cuidado Comunitario*, 2023).

Si bien la cuestión del hambre atraviesa fuertemente estas experiencias, las entrevistadas destacan que lo que hacen es mucho más que dar de comer, por eso el sostén afectivo constituye una dimensión fundamental de su tarea. Celeste Ortiz explica que “se abren un montón de ramas”

que abarcan el cuidado de personas mayores, infancias y adolescencias, pero también se trata de “conectar con ellas desde una perspectiva más comunitaria. (...) la salida siempre es colectiva y desde el amor, en conjunto.” (C. Ortiz, comunicación personal, 17 de diciembre, 2024).

El Relevamiento de Barrios de Pie-UTEP (2023) realizado en 523 espacios de cuidados comunitarios del Área Metropolitana de Buenos Aires muestra que, si bien las ollas populares y centros que brindan asistencia alimentaria son las actividades predominantes, como se observa en el figura 8.1, casi todos ellos realizan además otras tareas.

Figura 8.1
Tipos de espacios de cuidado



Nota. Tomado de Barrios de Pie, UTEP (2023). *Estado de situación de los espacios comunitarios y el trabajo de cuidado en los Barrios Populares del AMBA*. Buenos Aires. Cuidarestrabajo.com.ar.

Estas actividades que Celeste define como “de sostén de la vida” se desarrollan en centros de cuidado que funcionan en condiciones de suma precariedad respecto de su infraestructura y equipamiento, ya que se emplazan principalmente en las casas de las trabajadoras, en locales de organizaciones, espacios prestados o alquilados o se montan directamente en la calle. Además, la mayor parte no trabaja articuladamente con los gobiernos locales y “sólo 6,7% está reconocido como institución o posee personería jurídica” (Barrios de Pie y UTEP 2023, p. 10). En estas condiciones surgen y se sostienen a partir de un compromiso colectivo que Marina Joski describe del siguiente modo: en los barrios hay “una doña” que abre su patio para que jueguen las infancias, “pone su propio arroz” para dar de comer y esa experiencia después se multiplica, se sistematiza y desde esos saberes populares llega a convertirse en un comedor o en un espacio de primera infancia. Las trabajadoras de la economía popular desarrollan conocimientos específicos vinculados con la atención de múltiples necesidades y la resolución de problemas sociales complejos con recursos escasos, infraestructuras inadecuadas, débil o nulo apoyo estatal y sin una remuneración ni derechos vinculados a su trabajo. (M. Joski, comunicación personal, 7 de diciembre de 2024).

Estas labores de producción, organización, asesoramiento y contención se despliegan, muchas veces, en el marco de políticas públicas como las alimentarias, de promoción de salud o atención de situaciones de violencia de género. Ese “conocimiento específico y minucioso de las problemáticas del barrio” (Barrios de Pie y UTEP, 2023, p. 11) permite brindar respuestas a necesidades materiales y afectivas que no son atendidas por el Estado ni pueden ser resueltas en el mercado. En las entrevistas realizadas pudimos observar la capilaridad de los cuidados comunitarios, su imbricación en las tramas de reproducción cotidiana y su rol clave para que los recursos estatales lleguen a los territorios relegados. Por ejemplo, cuando las compañeras salen corriendo para

atender la situación de un adolescente que tuvo problemas con la policía, o acompañan a una vecina a gestionar la cobertura municipal para el sepelio de un ser querido, o cuando además de preparar la comida deciden hacer una medición de talla y peso de los y las niñas que asisten a los comedores para detectar situaciones de desnutrición y derivar a esas familias a los centros de salud locales.

La multiplicidad de tareas que desarrollan es parte del aporte esencial del trabajo no remunerado de cuidados a la economía nacional que, en 2022, representó el 16,8% del PBI, siendo la actividad que realizó el mayor aporte, seguida por el comercio y la industria. En Argentina se dedican 146,1 millones de horas diarias de trabajo no pago a las tareas del hogar y los cuidados, que son realizadas en un 70,2% por mujeres (DNEIyG, 2023). Todo ello da fundamento a la demanda de reconocimiento económico, apoyo en infraestructura, insumos y protección social que vienen sosteniendo desde la UTEP. Sin el trabajo de las cuidadoras y sus organizaciones, el problema de la accesibilidad a las prestaciones sociales y los servicios públicos sería aún más grave.

Además, en muchos casos, estos trabajos son los que garantizan efectivamente la atención de las necesidades que las políticas buscan abordar, por ejemplo, mediante la entrega de alimentos que alguien debe cocinar y servir para que sea efectivamente un plato de comida o la transferencia de bienes o recursos económicos que resultan insuficientes y se complementan con el trabajo no pago. Marina caracteriza el caso del acceso a la salud: las ambulancias que funcionan en villas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no tienen un reconocimiento estatal y su funcionamiento no está reglamentado. Utilizan una “metodología villera”, que consiste en “compañeros de la villa que circulan y realizan traslados” destinados a quienes tienen una obra social tanto como a los que se atienden en el sistema público. Las ambulancias también son solicitadas desde las escuelas y los Centros de Atención Primaria de la

Salud locales. Los recursos para que este sistema funcione son autogestionados, se valen de la organización colectiva y del trabajo de los y las propias compañeras (M. Joski, comunicación personal, 9 de junio de 2023).

El desarrollo y la consolidación del sindicato de la economía popular es un proceso clave para comprender el desarrollo y las transformaciones de los cuidados comunitarios. La conformación de la rama de actividad, junto a la articulación con los movimientos feministas, permitieron sistematizar los saberes contruidos a partir de estas prácticas de larga data para plantear propuestas concretas de reconocimiento económico, protección social y apoyo al trabajo de cuidado comunitario y a quienes lo realizan. Entre estas propuestas se destaca el Proyecto de Ley de Creación de un Sistema Integral de Protección del Trabajo de Cuidado Comunitario, presentado por la Diputada Nacional e integrante de Barrios de Pie-UTEP, Natalia Souto (Hopp y Maldovan, 2025). Este proyecto tiene como objeto “reconocer el valor social y económico del trabajo de cuidado comunitario como sostén de la vida del conjunto de la sociedad constituyéndose como apoyo fundamental de los sectores socioeconómicamente vulnerados de la sociedad”. Las personas destinatarias son “trabajadores/as de la economía popular y social que prestan servicios en los centros de cuidado comunitarios”, tanto como aquellas personas que reciben esos cuidados, incluyendo a las comunidades en las que se inscriben estos espacios (*Proyecto de Ley de Creación de un Sistema Integral de Protección del Trabajo de Cuidado Comunitario*, 2023, p. 1)

El alcance de la propuesta se construyó a partir de los principios de a) integralidad, que promueve el involucramiento de todos los actores que participan de la organización comunitaria de los cuidados (Estado, mercados, comunidad-organizaciones sociales y hogares), b) perspectiva de género y diversidad en su distribución, c) abordaje comunitario para “incorporar las miradas, perspectivas, saberes y conocimientos de las comunidades, sus formas organizativas y su mirada colectiva

sobre la gestión de los cuidados”, d) enfoque de derechos y e) equidad en la organización y distribución de las tareas de cuidado. Su diseño se gestó “desde abajo” y recogió las voces y experiencias de las compañeras que llevan adelante estas tareas. Su redacción y presentación fue posible gracias a “la estructura” organizacional que lo acompañó y la experiencia gremial ganada a lo largo de los años. Al momento de la presentación del Proyecto ya contaban con experiencia legislativa, como la Ley 27.345 de Emergencia Social que logró su sanción a partir de estrategias de movilización e incidencia:

(...) teníamos la experiencia, teníamos la construcción de los cuidados comunitarios, teníamos nuestras compañeras diputadas dentro del Congreso, teníamos alianzas también dentro de la Cámara de Senadores, teníamos nuestra Universidad Popular de Barrios de Pie. Y yo creo que era eso, las tres patas y las experiencias, por supuesto (...). (N. Morales, comunicación personal, 7 de diciembre de 2024).

El proyecto fue acompañado por un conjunto de acciones de visibilización de los cuidados comunitarios que tomaron más fuerza partir del contexto de pandemia. Estas acciones se enmarcaron en la Campaña Cuidar es Trabajo que tuvo como objetivo poner de manifiesto el carácter laboral de las tareas de cuidado y mostrar su valor. En ella les hablaban a los compañeros de la organización, a las trabajadoras comunitarias, tanto como a la sociedad en su conjunto, que habitualmente conciben estas tareas como amor, solidaridad o entrega y no como un trabajo por el cual se debe recibir una remuneración, acceso a derechos y protecciones sociales.

Transformaciones y disputas en el presente

La asunción a la presidencia de Javier Milei marcó una ruptura en la orientación de las políticas públicas basada en la desregulación económica, laboral y social, la privatización de

los recursos públicos y naturales. Estas medidas forman parte de una transformación que incluye una dimensión cultural que altera la concepción del Estado, la sociedad, la política y sus interrelaciones. En este contexto las organizaciones populares y los movimientos feministas son dos de los principales blancos de ataque de una declarada “batalla cultural” contra la justicia social, el wokismo y los feminismos (Milei, 2025).

Desde una perspectiva centrada en el mercado, se creó el Ministerio de Capital Humano que condensó las funciones de los Ministerios de Trabajo, Desarrollo Social y Educación. El Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades creado en la gestión previa fue eliminado y sus funciones desarticuladas. La Secretaría de Economía Social y los programas de inclusión laboral y economía popular pasaron a depender de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), infantilizando y volviendo a colocar en el ámbito familiar-privado las experiencias laborales que se generaron en el marco de estos programas en las dos décadas previas.

Las políticas que promovían la economía social y popular se paralizaron y desfinanciaron: Potenciar Trabajo, el plan que garantizaba un ingreso equivalente a medio salario mínimo, vital y móvil se reestructuró y desacopló de dicho valor, quedando congelado en un contexto inflacionario. Mediante el Decreto 198/2024 se reguló la redefinición y segmentación de este programa con el objetivo de “optimizar” la estrategia de inclusión sociolaboral (Poder Ejecutivo Nacional, 2024). Por un lado, se creó Volver al Trabajo para la reinserción laboral de titulares considerados empleables. Por otro, Acompañamiento Social, destinado a la asistencia e implementación de acciones de fortalecimiento familiar y empoderamiento de quienes tienen mayores dificultades para volver al mercado laboral: personas mayores de cincuenta años y madres de cuatro o más hijos. En marzo de 2025, este proceso se formalizó en la eliminación de la mayor parte de las políticas para la economía social y popular (Ministerio de

Capital Humano, 2025). El monotributo social que, que aún con limitaciones, constituye una herramienta de formalización y protección redujo un 60% su padrón dejando sin acceso a la cobertura de salud y al sistema previsional a alrededor de 400.000 titulares dados de baja (Ámbito Financiero, 2025).

En cuanto a la asistencia alimentaria, se dejó de enviar mercadería a comedores comunitarios de varios puntos del país (Faur, 2024), mientras que toneladas de alimentos almacenados en galpones se acercaban a su fecha de vencimiento sin ser distribuidos. La UTEP judicializó esta situación y obtuvo fallos a favor de los comedores que fueron desoídas por las autoridades de gobierno. Ante reiteradas protestas callejeras, la Ministra de Capital Humano expresó públicamente que atendería *individualmente* a la gente que tuviera hambre, pero no a los referentes de las organizaciones sociales (Infobae, 2024), marcando un claro posicionamiento contra la organización colectiva.

A dos años del inicio de la gestión de La Libertad Avanza, estas transformaciones implicaron la eliminación de las expresiones economía popular y economía social de los organismos públicos nacionales (excepto del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social) y una acelerada desinstitucionalización de áreas de gestión, programas e intervenciones construidas durante las últimas dos décadas (Observatorio de Políticas Públicas de Economía Popular, Social y Solidaria [OPPEPSS], 2025). Este mismo proceso se dio con las políticas de género y el abordaje de problemáticas específicas de las mujeres y diversidades a partir de la disolución del Ministerio, áreas y programas que se habían creado o ampliado en los últimos años (Barrancos, 2025). Según el 5° Informe La cocina de los cuidados, en junio de 2025, de 50 políticas de cuidado existentes, sólo cuatro se mantuvieron vigentes (Centro de Estudios Legales y Sociales [CELS], 2025). Las personas jubiladas, discapacitadas, infancias y mujeres que hoy cuentan con menos apoyos para realizar

estas tareas, son los grupos más afectados por la política de ajuste y “motosierra”. Estas transformaciones abren un nuevo escenario de confrontación y disputa para las organizaciones de la economía popular y plantean la necesidad de entablar nuevas estrategias de sostenimiento de los espacios de cuidado comunitario. La situación político-institucional no sólo implica la disminución de recursos estatales, sino también la persecución política y deslegitimación del sector a partir de auditorías y denuncias no comprobadas de usos discrecionales y malversación de fondos públicos.

Rondas de ollas vacías y cuatro jornadas laborales

Las trabajadoras socio-comunitarias fueron fuertemente afectadas por el cambio de rumbo de la política nacional, no obstante, siguieron sosteniendo los espacios de cuidados en los territorios empobrecidos. Frente al desconocimiento de la organización colectiva respondieron con más organización y reinventaron las formas de protesta para sostener sus demandas. Celeste describe la situación crítica iniciada tras la asunción del nuevo gobierno:

“Ya empezó la campaña de ajuste y de motosierra a los que menos tienen (...). En diciembre nosotros arrancamos con nuestras primeras *rondas de ollas vacías* en la puerta de (el ex Ministerio de) Desarrollo Social, para reclamar que vengan los alimentos. (...) después de doce meses, de un año completo, seguimos sin alimentos. (...) y hoy tampoco está actualizado nuestro sueldo (refiere a lo que percibían mediante Potenciar Trabajo)”. (C. Ortiz, comunicación personal, 17 de diciembre 2024).

En este contexto, los espacios comunitarios reciben cada vez más familias, que no son la población que típicamente asistía, sino muchos adultos mayores y adolescentes, que quizás por

vergüenza no se acercaban antes, pero que hoy llegan a buscar un plato de comida. La profundización de las necesidades en los barrios, el incremento y la diversificación de los grupos con necesidades alimentarias, se producen en el marco de un reforzamiento de la criminalización de la protesta formalizada en el protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación (Ministerio de Seguridad, 2023), conocido popularmente como protocolo anti-piquete.

Ante esto, inspiradas en la acción de resistencia de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, decidieron comenzar las rondas de las ollas vacías realizadas frente a distintos edificios públicos y espacios donde se encuentran quienes son considerados responsables de la situación de crisis y criminalización que derivó en la reorganización o el cierre involuntario de los espacios de cuidados comunitarios. Los pocos proyectos que tenían de la Secretaría de Niñez para apoyar a sus espacios de primera infancia fueron eliminados y tuvieron que cerrarlos. No tenían recursos para alimentar a los niños y a las niñas y el ingreso que cobraban, a través del Programa Potenciar Trabajo, se redujo drásticamente debido a su congelamiento en un contexto de inflación y a la eliminación del plus económico que recibían a través del componente nexo, destinado a quienes se dedicaban al trabajo socio-comunitario, para garantizar un ingreso equivalente al salario mínimo. Estos recortes llevaron a las trabajadoras a buscar otros trabajos para cubrir sus necesidades y a la reducción de los días de atención o el cierre de espacios que eran acompañados con becas u otros recursos estatales que contribuían a su sostenimiento y fueron recortados.

¿Cómo se sostienen los espacios de cuidados comunitarios en este contexto? Lo hacen desde la autogestión. Una estrategia que «no es sana porque desgasta y otorga nuevamente a la compañera» la responsabilidad de resolver los problemas. «Si antes teníamos triple tarea, triple jornada laboral, ahora le sumamos una nueva que tiene que ver con la gestión de

los recursos, cuatro jornadas laborales para quien cuida.» (M. Joski, comunicación personal, 7 de diciembre 2024). La situación de doble jornada laboral o triple cuando al trabajo mercantil y doméstico se añade la atención de necesidades en la comunidad, fue ampliamente documentada (Díaz Lozano 2020; Pautassi, 2007). El desgaste y la intensificación de la labor de estas trabajadoras que se responsabilizan por la gestión de recursos escasos para garantizar el funcionamiento de los espacios de cuidado, en el contexto de ajuste estatal, colocó en el centro el problema de la salud física y mental de las cuidadoras. “Las nuestras están rotas”, nos dice con preocupación Norma.

Como respuesta a estas nuevas problemáticas construyeron la Escuela de Cuidados Comunitarios con un doble objetivo: la formación y el desarrollo de acciones de autocuidado y acompañamiento a quienes cuidan. En sus propios términos, la escuela la crearon “para abrazar a las compañeras” (N. Morales, comunicación personal, 7 de diciembre 2024). El ataque que sufren diariamente se despliega desde distintos ámbitos: el gobierno nacional, los medios de comunicación, la justicia que criminaliza, sumado al conflicto que se genera en las puertas de los comedores cuando la comida no alcanza. A pesar de todo ellas siguen adelante “por el amor a nuestro pueblo, (...) a nuestra comunidad, es el amor a nuestros viejos, a nuestras niñas” (N. Morales, comunicación personal, 7 de diciembre 2024).

De estas palabras se desprende otra de las características de los cuidados: su dimensión afectiva. Sin embargo, la inscripción de los cuidados comunitarios en la organización sindical de la economía popular abre un espacio de politización que contribuye a resignificar el amor, como condición natural femenina, y construir un compromiso que parte de asumir la interdependencia como característica humana. La organización colectiva y comunitaria son la base que da sustento y materializa este compromiso.

Frente al discurso oficial-dominante que refuerza el individualismo y erige al mercado como único medio de distribución de recursos legítimo, la economía popular construye tramas territoriales que resisten y sostienen la vida por medio de los cuidados comunitarios. Desde sus prácticas, estas trabajadoras proponen alternativas con base en una idea de soberanía en cuidados, entendida como lo opuesto a los procesos de colonización (en el ámbito alimentario, de la salud, cultural, de los saberes, de los cuerpos de las mujeres y diversidades) que definen la “normalidad” de las experiencias y procesos vitales (como la infancia, la adolescencia o el envejecimiento) y la forma en que deben ejercerse los cuidados, atravesados por una fuerte lógica patriarcal que (re)produce desigualdades de género y formas de violencia moral y física (Hopp, 2026).

Esta idea de soberanía en cuidados se despliega frente al despojo de los bienes comunes, a la desarticulación de las políticas para la promoción de la economía popular y de los cuidados. También en contraposición a un sistema capitalista que externaliza estas tareas en las familias y comunidades. Desde la perspectiva de una de las entrevistadas, la soberanía en cuidados se plantea como horizonte de construcción social y política de la patria. Una soberanía que se trama en los territorios y busca generar condiciones que permitan cuidar y ser cuidados/as con dignidad, salud, reconocimiento y respeto. La soberanía en cuidados emerge como un proceso de construcción cotidiana en el que se reconocen las condiciones estructurales que limitan su accionar y por ello deben ser transformadas: la imposición de consumir ciertos alimentos y de formas de pensar la emergencia alimentaria en contraposición a resolver las necesidades con “alimentos soberanos, producidos por nuestra tierra, sin ningún tipo de agrotóxicos y que no nos contaminen la sangre, que no nos den solamente harina” (M. Joski, comunicación personal, 7 de diciembre 2024). Al mismo tiempo, implica pensar y ejercer otras formas de cuidado, ya no exclusivamente desde el ámbito doméstico-privado sino principalmente territorial-comunitario.

Reflexión final. Horizontes y límites de los cuidados comunitarios en la economía popular organizada

El objetivo del capítulo fue analizar las formas de organización, innovación y adaptación de los cuidados comunitarios en la economía popular, tomando como caso la experiencia de la UTEP. A partir de una estrategia de análisis relacional, pudimos vincular las prácticas de las trabajadoras con el entramado institucional, político y económico que las condiciona, mostrando cómo los cuidados comunitarios constituyen, simultáneamente, respuestas a la emergencia, prácticas de resistencia frente al despojo y espacios de creación colectiva. Este enfoque permitió comprender las múltiples escalas de relación entre los hogares, territorios, organizaciones sociales y políticas públicas, visibilizando los procesos de agencia social que emergen de la necesidad y se transforman en poder colectivo.

El análisis realizado muestra que no es posible comprender las transformaciones del trabajo y la vida social contemporánea sin mirar desde la economía popular, entendida no solo como objeto empírico, sino como lente epistemológica. Desde esta perspectiva se hace visible lo que la racionalidad capitalista invisibiliza: las tramas territoriales de los cuidados y su centralidad para la sostenibilidad de la vida. Este marco se potencia al entrelazarse con la economía feminista, que aporta una lectura situada de las desigualdades de género y del conflicto capital-vida. La convergencia entre ambas perspectivas permite disputar sentidos sobre el trabajo, cuestionar la dicotomía entre producción y reproducción, y proponer un horizonte político que coloque la vida en el centro de la organización económica y social.

La experiencia analizada permite también comprender que las estrategias de organización populares y comunitarias no son fenómenos marginales ni residuales, sino que pueden ser pensados como laboratorios de futuro desde donde se

experimentan otras formas posibles de habitar y construir el mundo. Frente al vaciamiento estatal y la mercantilización de la vida, las trabajadoras de la economía popular despliegan modelos de gestión colectiva y solidaria de los cuidados, que integran dimensiones laborales, políticas, sociales, afectivas y relacionales. Estas experiencias, en diálogo con procesos comunitarios que se desarrollan en otros países de América Latina, configuran formas concretas de innovación social que tensionan los límites de las políticas públicas tradicionales, del mundo del trabajo y amplían los márgenes de lo posible en la construcción de bienestar.

El escenario argentino actual, atravesado por políticas de ajuste, descolectivización y criminalización de los movimientos sociales y feministas, profundiza las condiciones de precariedad estructural que caracterizan el trabajo comunitario, limitando su desarrollo. A pesar de ello, las prácticas analizadas evidencian la persistencia de una racionalidad alternativa orientada al sostenimiento de la vida y la reconstrucción de los lazos sociales. En este contexto, resulta urgente avanzar hacia la co-construcción de políticas con base en una nueva relación Estado-comunidad, capaz de reconocer las redes territoriales de cuidado como actores centrales de las políticas públicas y de fortalecer las condiciones materiales, simbólicas y de protección de quienes sostienen la reproducción de la vida. La construcción de una soberanía en los cuidados supone, entonces, no solo resistir a las lógicas de despojo neoliberal y patriarcal, sino reconfigurar los cimientos del pacto social en torno a la interdependencia, la reciprocidad y la dignidad.

En suma, los cuidados comunitarios en la economía popular condensan una potencia transformadora que articula lo material, lo simbólico y lo político. Constituyen prácticas que, aún en condiciones de precariedad y desprotección, amplían los horizontes de posibilidad y abren caminos hacia una economía centrada en la vida. A través de ellas, las trabajadoras de la economía popular resignifican el amor y la solidaridad como

principios políticos y productivos. También redefinen el sentido del trabajo desde una ética del cuidado que interpela los fundamentos del orden social y económico vigente. Reconocer, proteger y acompañar estas experiencias no solo implica un acto de justicia social, sino una apuesta epistemológica y política por imaginar futuros donde cuidar y ser cuidado constituyan derechos efectivos y responsabilidades colectivas.

Bibliografía

- Ámbito Financiero (20 de marzo de 2025). Monotributo social: el Gobierno dio de baja a más de 400.000 personas, ¿qué hay detrás?. *Ámbito Financiero*. <https://www.ambito.com/economia/monotributo-social-el-gobierno-dio-baja-mas-400000-personas-que-hay-detras-n6125790>
- Arango, Y., Chena, P., y Roig, A. (2017). Trabajos, ingresos y consumos en la economía popular. *Cartografías del Sur*, 6, 1–18. https://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.13578/pr.13578.pdf
- Barrancos, D. (2025). ¡Afuera las políticas de género!: Crónica de un año aciago. *Ciudadanías. Revista de Políticas Sociales Urbanas*. <https://revistas.untref.edu.ar/index.php/ciudadanias/article/view/2417/2118>
- Barrios de Pie y UTEP. (2023). *Estado de situación de los espacios comunitarios y el trabajo de cuidado en los barrios populares del AMBA*. <https://cuidarestabajo.com.ar/>
- Beccaria, L., y Fernández, A. L. (2025). El mercado de trabajo argentino en un contexto de ajuste y flexibilización. *Ciudadanías. Revista de Políticas Sociales Urbanas*, 1-27. <https://revistas.untref.edu.ar/index.php/ciudadanias/article/view/2414/2115>
- Bertranou, F., y Gontero, S. (2025). *Trabajo, empleo, protección laboral y social en América Latina y el Caribe, 1994–2024*. Organización Internacional del Trabajo. <https://www.ilo.org/es/publications/trabajo-empleo-proteccion-laboral-y-social-en-america-latina-y-el-caribe>
- Bourdieu, P. (1999). Efectos de lugar en *La miseria del mundo* (pp. 119–124). Fondo de Cultura Económica.

- Carrasco, C. (2001). La sostenibilidad de la vida humana: ¿Un asunto de mujeres? *Mientras Tanto*, 82, 43-70. <https://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/gt/20101012020556/2carrasco.pdf>
- Centro de Estudios Legales y Sociales. (2025). La cocina de los cuidados (Informe N° 5) <https://www.cels.org.ar/web/wp-content/uploads/2025/06/La-cocina-de-los-cuidados-informe-nro-5-1.pdf>
- Comas d'Argemir, D. (2017). El don y la reciprocidad tienen género: Las bases morales de los cuidados. *Quaderns-e de l'Institut Català d'Antropologia*, 22(2), 17-32. https://www.antropologia.cat/estatic/files/2_ComasdArgemir.pdf
- Coraggio, J. L. (1989). Política económica, comunicación y economía popular. *Ecuador Debate*, 17, 57-94.
- Coraggio, J. L. (1999). *Política social y economía del trabajo: Alternativas a la política neoliberal para la ciudad*. Miño y Dávila.
- Coraggio, J. L. (2007). *La economía social desde la periferia: Contribuciones latinoamericanas*. UNGS Altamira. https://www.ungs.edu.ar/wp-content/uploads/pdfs_ediciones/La_Econom%C3%ADa_Social_desde_la_periferia-completo.pdf
- Poder Ejecutivo Nacional. (27 de febrero de 2024). *Decreto 198/2024: Programa Volver al Trabajo – Programa de Acompañamiento Social*. <https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/decreto-198-2024-396928>
- Díaz Lozano, J. (2020). Triple presencia femenina en torno a los trabajos: mujeres de sectores populares, participación política y sostenibilidad de la vida. *Tempo e Argumento*, 12(29), 2-21. https://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.13566/pr.13566.pdf
- Díaz Arias, D., y Viales Hurtado, R. (2021). El impacto del COVID-19 y otras “pandemias” contemporáneas en Centroamérica. En G. Gutiérrez Cham, S. Herrera Lima, y J. Kemner (Eds.), *Pandemia y crisis: El COVID-19 en América Latina* (pp. 86-117). Guadalajara: CALAS Universidad de Guadalajara. https://libreria.clacso.org/biblioteca_calas/publicacion.php?p=2345&b=2
- Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género (DNEIyG). (2023). *El aporte de los cuidados al PBI. Las brechas de género en la economía argentina. Cuarto trimestre de 2022*. https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2023/11/las_brechas_de_genero_4to_trimestre_2023_0.pdf

- Milei, J. (23 de enero de 2025). *Discurso en el Foro de Davos*. <https://www.casarosada.gob.ar/informacion/discursos/50848-discurso-del-presidente-de-la-nacion-javier-milei-desde-el-foro-de-davos-suiza>
- Ministerio de Seguridad de la Nación. (2023). *Protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación*.
- Donza, E., Poy, S., y Salvia, A. (2022). Segmentación del mercado de trabajo y trayectorias laborales ante el impacto del COVID-19 en la Argentina urbana. *Entramados y Perspectivas*, 12(12). <https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/16491>
- Etchemendy, S., Pastrana, F., y Vezzato, J. M. (2024). *Ingresos populares bajo el gobierno de Milei: Deterioro generalizado y heterogéneo*. Fundar. https://fundar.ar/wp-content/uploads/2024/12/Fundar_Ingresos-populares-bajo-el-gobierno-de-Milei_CC-BY-NC-ND-4.0-1.pdf
- Faur, E. (2024). El trabajo de cuidado comunitario: De la invisibilidad al reclamo de derechos. En K. Batthyány, V. Perrota y J. Pineda Duque (Coords.), *La sociedad del cuidado y políticas de vida* (pp. 93–134). CLACSO, UNRISD, Instituto Nacional de las Mujeres. <https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/bitstream/CLACSO/250248/3/La-sociedad-del-cuidado.pdf>
- Fernández Álvarez, M. I. (2018). Más allá de la precariedad: prácticas colectivas y subjetividades políticas desde la economía popular argentina. *Íconos - Revista De Ciencias Sociales*, 62, 21–38. <https://doi.org/10.17141/iconos.62.2018.3243>
- Fournier, M. (2017). La labor de las trabajadoras comunitarias de cuidado infantil en el conurbano bonaerense: ¿Una forma de subsidio de abajo hacia arriba? *Trabajo y Sociedad*, 28, 83–108. <https://www.redalyc.org/pdf/3873/387349334005.pdf>
- Fournier, M. y Gorgoschidse, A. (2014). Derechos y cuidados en tensión: la organización social del cuidado en sectores populares urbanos. Ponencia presentada en la I Bienal Latinoamericana de Infancias y Juventudes. Democracias, derechos humanos y ciudadanías. Manizales, Colombia.
- Fraser, N. (2016). Las contradicciones del capital y los cuidados. *New Left Review*, 100, 111–132. <https://newleftreview.es/issues/100/articles/nancy-fraser-el-capital-y-los-cuidados.pdf>

- Frega, M. (2018). El conurbano en el centro: Aportes para el encuentro entre la economía feminista y la economía popular. En M. Burgos (Coord.), *Memorias del cuarto Congreso de Economía Política 2017*. Ediciones del CCC.
- Gago, V., Cielo, C., y Gachet, F. (2018). Presentación del dossier: Economía popular, entre la informalidad y la reproducción ampliada. *Íconos. Revista de Ciencias Sociales* 62, 11–20. <https://iconos.flacsoandes.edu.ec/index.php/iconos/article/view/3501>
- Honorable Cámara de Diputados de la Nación. (2023). *Proyecto de Ley de Creación de un Sistema Integral de Protección del Trabajo de Cuidado Comunitario (Expediente 2227-D-2023)*.
- Hopp, M. (2025). Trabajos para la vida: reconocimiento económico de los cuidados comunitarios e igualdad de género en la economía popular. En R. Viales Hurtado (Ed.), *Crisis y transformaciones del mundo laboral en América Latina y el Caribe: Cambios institucionales, política social, género y resistencias* (pp. 199–233). UCR-CIHAC-CALAS. http://calas.lat/sites/default/files/transformaciones_del_mundo_laboral.pdf
- Hopp, M. (2026). Dinámicas y transformaciones de los cuidados comunitarios en Buenos Aires, Argentina. *Scripta Nova. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales*.
- Hopp, M., y Maldovan Bonelli, J. (2025). Cuidados comunitarios y agenda sindical en la economía popular: un análisis de las propuestas legislativas para su regulación en Argentina. *Revista Latinoamericana de Antropología del Trabajo*, 9(19), 1–27. <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/10274313.pdf>
- Hopp, M., y Mutuberría Lazarini, V. (2022). ¿Economías transformadoras o transformar la economía? *Tekoporá. Revista Latinoamericana de Humanidades Ambientales y Estudios Territoriales*, 4(1), 56–74. https://ri.conicet.gov.ar/bitstream/handle/11336/201219/CONICET_Digital_Nro.4d152d3b-e676-485a-bca3-e044433324c2_B.pdf?sequence=2&isAllowed=y
- Instituto Nacional de Estadística y Censos. (2022). *Encuesta nacional de uso del tiempo 2021: Resultados definitivos*. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Instituto Nacional de Estadística y Censos.
- Instituto Nacional de Estadística y Censos. (2025). *Mercado de trabajo: Indicadores de informalidad laboral (EPH), cuarto trimestre de 2023 a cuarto trimestre de 2024. Trabajo e Ingresos*, 9(5).

- Infobae. (1 de febrero de 2024). Sandra Pettovello salió a la calle en medio de una protesta: “Voy a recibir a la gente que tiene hambre, no a los referentes.” *Infobae*. <https://www.infobae.com/politica/2024/02/01/sandra-pettovello-salio-a-la-calle-en-medio-de-una-protesta-voy-a-recibir-a-la-gente-que-tiene-hambre-no-a-los-referentes/>
- Longoni, A., Gamarnik, C., Cañada, L., Cuello, N., Di Filippo, M., Lida, C., Manduca, R., Margiolakis, E., Pérez Balbi, M., y Risler, J. (2024). *2001: El futuro detrás. Deseos, fracasos, derivas, saqueos*. Buenos Aires: Tren en Movimiento.
- Lozano, C., y Rameri, A. (2023). *La disputa por los ingresos y la riqueza: Renta básica universal y empleo garantizado en la Argentina*. Coyunturas. <https://ipypp.org.ar/portfolios/la-disputa-por-los-ingresos-y-la-pobreza/>
- Maceira, V. (2021). Diferenciación socio-territorial del Área Metropolitana de Buenos Aires y reproducción de los procesos de marginalidad. *Quid*, 16(14), 283–310. <https://www.redalyc.org/journal/5596/559673484014/html/>
- Malasechevarria, C. (6 de julio de 2023). Cocineras comunitarias: alimentan a 10 millones de personas por día y reclaman ser reconocidas. *Reveladas*. <https://reveladas.com.ar/cocineras-comunitarias-alimentan-a-10-millones-de-personas-por-dia-y-reclaman-ser-reconocidas/>
- Minujín, A. (1992). *Cuesta abajo: Los nuevos pobres. Efectos de la crisis en la sociedad argentina*. UNICEF/Losada.
- Observatorio de Coyuntura Económica y Políticas Públicas. (2019). *Estimación cuantitativa de la economía popular*. OCEPP.
- Observatorio de Políticas Públicas de la Economía Popular, Social y Solidaria. (2025). *La economía popular, social y solidaria en el Estado nacional (Argentina 2025)*. <https://oppepss.ungs.edu.ar/organismos-de-epss-en-el-estado-nacional-marzo-de-2025>
- Organización Internacional del Trabajo. (2020). *COVID-19 y el mundo del trabajo en Argentina: Impacto y respuestas de política*. Oficina de País de la OIT para la Argentina.
- Pautassi, L. (2007). *Cuánto trabajo mujer*. Capital Intelectual.
- Pautassi, L., Arcidiacono, P., y Strachnoy, M. (2014). Condicionando el cuidado: la asignación universal por hijo para la protección social en Argentina. *Íconos. Revista de Ciencias Sociales*, 18(50), 61–75. <https://siteal.iiop.unesco.org/investigacion/2102/condicionando-cuidado-asignacion-universal-hijo-proteccion-social-argentina>

- Pérez Orozco, A. (2014). *Subversión feminista de la economía: Aportes para un debate sobre el conflicto capital-vida*. Traficantes de Sueños. https://traficantes.net/sites/default/files/pdfs/Subversi%C3%B3n%20feminista%20de%20la%20econom%C3%ADa_Traficantes%20de%20Sue%C3%B1os.pdf
- Poblete, L. (2022). *La invisibilidad del trabajo doméstico por horas en Argentina: Un análisis del cambio institucional durante el siglo XXI*. *Trabajo y Sociedad*, 23(39), 335–355. <https://www.redalyc.org/journal/3873/387372886017/html/>
- Poy, S. (2022). Trabajadores/as pobres ante la irrupción de la pandemia de COVID-19 en un mercado laboral segmentado: el caso argentino. *Estudios del Trabajo*, 62, 1–30. https://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2545-77562021000200055
- Quijano, A. (1998). Colonialidad del poder, cultura y conocimiento en América Latina. *Ecuador Debate*, (44), 227–238.
- Razeto Migliaro, L. (1986). *Economía popular de solidaridad: Identidad y proyecto en una visión integradora*. PET.
- Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular. (2021). *Diagnóstico y perspectivas de la economía popular: Reporte agosto 2021*. Secretaría de Economía Social, Ministerio de Desarrollo Social.
- Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular. (2023). *Juventudes y economía popular en el ReNaTEP: Reporte abril 2023*. Secretaría de Economía Social, Ministerio de Desarrollo Social.
- Ministerio de Capital Humano. (31 de marzo de 2025). *Resolución 206/2025* <https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/323459/20250404>
- Ministerio de Seguridad. (14 de diciembre de 2023). *Resolución 943/2023*. <https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/300917/20231215>
- Sarria Icaza, A. M., y Tiriba, L. (2004). Economía popular. En A. Cattani (Org.), *La otra economía*. Editorial Altamira – OSDE – UNGS.
- Scaglia, M. C. (2020). Mujeres, cuidados y capitales en I. Petz, M. C. Scaglia, y G. Hindi (Eds.), *Antropología económica* (pp. 103–141). Editorial de la Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires.

- Honorable Cámara de Diputados de la Nación. (2023). *Proyecto de Ley 2227-D-2023: Sistema Integral de Protección del Trabajo de Cuidado Comunitario*.
- Timpanaro, B. (2023). *El principio protectorio del trabajo en la economía popular: El caso de la CTEP-UTEP en los oficios populares comunitarios y callejeros* (Tesis doctoral, Universidad Nacional de Lanús).
- Vera, J., Salvia, A., Bonfiglio, J. I., y Giannecchini, A. (2025). Ajuste libertario, crisis y estabilización: efectos sobre la dinámica de la pobreza y la desigualdad social. *Ciudadanías. Revista de Políticas Sociales Urbanas*, 1-38. <https://revistas.untref.edu.ar/index.php/ciudadanias/article/view/2415/2114>
- Wolanski, S., Sorroche, S., Mate, E., Santín Rulfo, B., y Fernández Álvarez, M. I. (2022). *La economía popular, sus números y dinámica entre el 4t-20 y el 1t-22: Análisis de la composición etaria de la población*. Citra.
- Zibecchi, C. (2014). Cuidadoras del ámbito comunitario: Entre las expectativas de profesionalización y el “altruismo”. *Íconos. Revista de Ciencias Sociales*, 50, 129–145. <https://iconos.flacsoandes.edu.ec/index.php/iconos/article/view/1433>
- Zibecchi, C. (2022). ¿Nuevas formas de sociabilidad y politicidad en torno a los cuidados? Los movimientos sociales desde la perspectiva de los cuidados. *La Ventana. Revista de Estudios de Género*, 6(55), 370–400. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-94362022000100370

CAPÍTULO 9

La economía popular solidaria en la frontera México-Guatemala: resistencia y alternativas ante la violencia

León Enrique Ávila Romero

La Economía Popular Solidaria (EPS) surge como un modelo alternativo frente a las dinámicas excluyentes del capitalismo global, promoviendo relaciones económicas basadas en la equidad, la sostenibilidad y la autogestión comunitaria. Desde una perspectiva teórica, *las economías de base* (Gibson-Graham, 2006) cuestionan el paradigma hegemónico del mercado, destacando prácticas económicas alternativas que emergen desde los territorios. La EPS, en este sentido, no solo representa una respuesta a la crisis socioeconómica, sino también una reconfiguración de las relaciones humanas y con la naturaleza, basada en principios de reciprocidad, cooperación y justicia distributiva (Coraggio, 2011).

La autogestión es un eje central de la EPS, donde las comunidades ejercen control sobre sus procesos productivos sin depender de estructuras jerárquicas externas. Como señalan Coraggio (2011) y Razeto (1993), este modelo fortalece

la democracia económica mediante empresas asociativas, cooperativas y redes de comercio justo. Un ejemplo emblemático son las empresas recuperadas en Argentina, donde trabajadores asumieron la gestión de fábricas abandonadas, demostrando la viabilidad de modelos autogestionarios (Ruggeri, 2014). En el contexto de la frontera México-Guatemala, la EPS adquiere un carácter de resistencia, especialmente en zonas afectadas por la violencia del narcotráfico.

La frontera entre Chiapas (México) y Guatemala constituye mucho más que una línea geopolítica o un corredor de tránsito migratorio. Es un territorio vivo y socialmente producido, donde históricamente se han entrelazado pueblos, economías y culturas. En este espacio, marcado por una profunda asimetría regional y por políticas neoliberales y securitizadoras, han florecido una constelación de prácticas económicas alternativas que desafían los modelos hegemónicos. En ese marco, este artículo explora la relación entre las economías populares, de base y horizontales, analizando sus intersecciones críticas con cuatro dinámicas centrales en la región: la migración, la agroecología, la autogestión y el empoderamiento comunitario.

A partir de la premisa de que un “reformismo neoliberal” ha profundizado la exclusión social y transformado las estrategias históricas de cohesión, se plantea que las comunidades en la frontera despliegan lógicas económicas propias y resilientes. Estas economías, lejos de ser meras estrategias de supervivencia residuales, representan horizontes de innovación social y política, formulando alternativas concretas desde lo cotidiano. De esta forma, para el artículo se utiliza un enfoque relacional y multiescalar que, tomando en cuenta dimensiones estructurales, institucionales e interseccionales (clase, etnia, género), permite observar cómo la gente común se apropia de los recursos y los distribuye, en la práctica cotidiana. El objetivo es ofrecer una visión integral que supere la mirada reduccionista sobre la frontera sur de México como un simple espacio de flujos, para centrarse en la vida,

la agencia y los proyectos de los habitantes permanentes y en movimiento que la construyen día a día.

Marco teórico-conceptual: economías desde abajo y la agencia en los márgenes

Para comprender las prácticas económicas en la frontera, es necesario precisar un marco conceptual que dialogue con la realidad de la región.

Economías de base y economías populares

Se distingue, siguiendo a Narotzky (2012), entre las economías de base como el conjunto de prácticas cotidianas mediante las cuales la gente común se gana la vida, y la *economía popular* como un proyecto organizativo que genera opciones para innovar o adaptar la producción y el trabajo en contextos adversos. En la frontera, esta distinción es fluida: la venta ambulante, el comercio transfronterizo a pequeña escala o el trabajo agrícola familiar (economías de base) pueden devenir en cooperativas de comercio justo o redes de productores (economía popular organizada).

Horizontalidad y autogestión

Estos conceptos aluden a formas de organización no jerárquicas y a la capacidad de las comunidades para administrar sus recursos y procesos productivos de manera colectiva y democrática. Se vinculan con lo que algunos autores como Edward Thompson (2019), James Scott (1977) llaman la “economía moral de los pobres”, que evidencia su capacidad de agencia y sus criterios éticos de distribución. La autogestión es, a la vez, un medio y un fin para construir autonomía frente al Estado y al mercado capitalista.

La autogestión tiene que ver con la toma de decisiones sobre el espacio y los territorios, los pueblos indígenas han practicado

procesos autogestivos, ya que desarrollan diversas prácticas económicas, culturales y políticas en sus comunidades (Ávila, 2013).

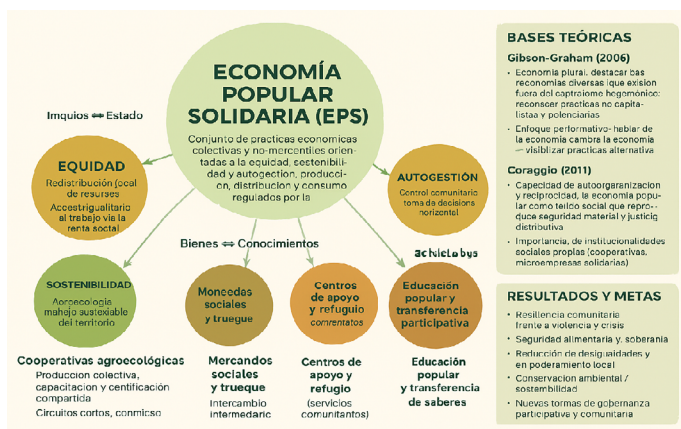
Interseccionalidad y metabolismo social

El análisis debe ser interseccional, reconociendo cómo las desigualdades de clase, etnia y género estructuran el acceso a los recursos y la participación en estas economías. Asimismo, el concepto de *metabolismo social* (Marx, 2019) —los procesos de apropiación, producción, circulación, consumo y desecho— es útil para entender la relación material de las comunidades con su territorio, especialmente en su dimensión agroecológica.

En la figura 9.1 podemos observar las diversas redes, que se tejen en torno al concepto de la economía popular solidaria, por una lado, tenemos la equidad, la sostenibilidad, las monedas sociales, los centros de apoyo, la educación popular y la autogestión.

Figura 9.1

Redes de la economía popular solidaria



Nota. Adaptado de *A Postcapitalist Politics*, por J. K. Gibson-Graham, 2006, University of Minnesota Press; *Economía Social y Solidaria: El trabajo antes que el capital*, por J. L. Coraggio, 2011, Editorial Abya-Yala, *Grassroots Economics: Living with Austerity in Southern Europe*, por S. Narotzky, 2020, Pluto Press.

Contexto geohistórico: la producción social de la frontera Chiapas-Guatemala

La frontera no es un dato natural, sino un proceso histórico de construcción social, política y económica. La delimitación actual es resultado de procesos del siglo XIX y XX. Sin embargo, históricamente ha sido una región de intercambios constantes entre pueblos mayas (mam, q'anjob'al, kaqchikel, mestizos, etc.). Las dinámicas de colonización agrícola, la explotación maderera y la continua reconfiguración del territorio generaron conflictos, que se detallan a continuación.

El impacto del conflicto guatemalteco y el refugio

Durante la guerra interna en Guatemala (1960-1996), la frontera se convirtió en un corredor de salvación para decenas de miles de refugiados. Su establecimiento en campamentos en Chiapas y su posterior integración o reasentamiento dejaron una huella profunda: redes de solidaridad transnacional, experiencia organizativa y una memoria colectiva del desplazamiento forzado que actualmente se reactiva con las nuevas caravanas migrantes.

La coyuntura neoliberal y securitizadora

En las últimas décadas, políticas como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y la Iniciativa Mérida han redefinido la región. Desde esta perspectiva, se ha promovido un modelo extractivista (minería, monocultivos, megaturismo) que despoja a las comunidades, mientras se militariza la frontera bajo la lógica de la “seguridad nacional”. Esta doble dinámica de desposesión y contención es el telón de fondo contra el cual surgen las economías alternativas.

No obstante, la frontera entre Chiapas y Guatemala ha sido un escenario de violencia, conflicto y migración en los últimos años, especialmente del 2018 a 2025. Este fenómeno ha incentivado la migración transfronteriza de miles de personas en busca de seguridad y oportunidades. En esta línea, se examinaron los

hechos de violencia en la región, con un enfoque particular en la sierra fronteriza Mariscal de Chiapas y Frontera Comalapa. Asimismo, se presenta un marco teórico sobre la violencia, una línea del tiempo con los eventos más relevantes y un análisis del impacto que esta violencia tiene en la migración.

La violencia puede entenderse desde múltiples perspectivas. Según Galtung (1990), existe una distinción entre violencia directa, estructural y cultural. La *violencia directa* se refiere a aquella que implica el uso físico de la fuerza, mientras que la *violencia estructural* se relaciona con situaciones de desigualdad e injusticia que no necesariamente se manifiestan mediante agresiones físicas. Por su parte, la *violencia cultural* abarca los aspectos simbólicos y discursivos que legitiman la violencia directa y estructural.

En el contexto de la frontera chiapaneca, la violencia se manifiesta principalmente a través del crimen organizado, el narcotráfico y las violaciones de derechos humanos, afectando gravemente a la población civil. Esto refleja no solo la violencia directa, sino también una estructura social y económica que perpetúa la pobreza y la exclusión.

Desde el 2018, la Sierra Mariscal de Chiapas y Frontera Comalapa han sido testigos de varios episodios violentos. Un informe del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (2025) señalaba un aumento en los desplazamientos forzados debido a amenazas y ataques por parte de grupos criminales. Los enfrentamientos entre cárteles de droga y la violencia policiaca han dejado un saldo elevado de víctimas. La violencia en esta región ha tenido consecuencias directas en la migración. Muchos habitantes han optado por abandonar sus hogares debido a la falta de seguridad. Según datos del Instituto Nacional de Migración (INM, 2021), el flujo migratorio ha aumentado en un 30 % en los últimos tres años, siendo Chiapas un punto clave en la ruta hacia Estados Unidos. Aquellos que migran suelen enfrentar riesgos considerables, incluyendo extorsiones y agresiones durante su trayecto.

Principales sucesos de violencia en la Sierra Mariscal y Frontera Comalapas período (2018-2025)

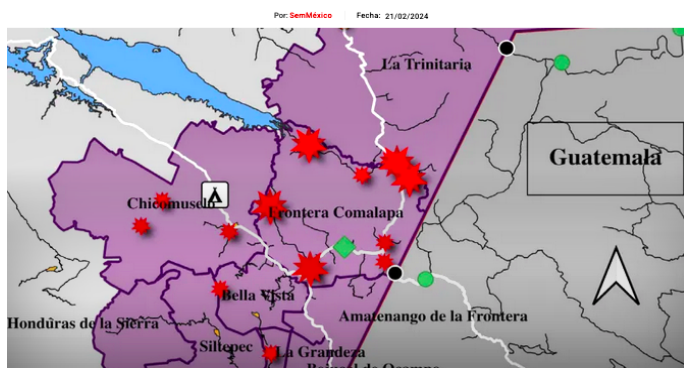
A partir de 2018, con la llegada del gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón (2018-2024), se observa un incremento significativo en la actividad de los grupos criminales. En 2019, según el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (2025), se documentan casos de desplazamiento forzado. Para 2020 se generan nuevas rutas migratorias no seguras por el incremento de la violencia.

En el año 2021 inician las confrontaciones entre el Cartel de Sinaloa y el Cartel Jalisco Nueva Generación por el control de las principales comunidades. Para 2022 se incrementa de forma significativa la violencia en la región, con batallas campales en la Sierra fronteriza. Entre 2023 y 2024 se dan ejecuciones extrajudiciales por parte del narco, así como el asedio hacia miembros de la diócesis de San Cristóbal de las Casas. También se reporta, el asesinato de miembros de la Iglesia católica, donde sobresale el caso del Padre Marcelo y de la familia del diácono de la comunidad de Nueva Morelia, que se oponían a la actividad minera en la Sierra. En la figura 9.2 podemos observar un mapa sobre los principales hechos de violencia en la región fronteriza.

La violencia en la frontera entre Chiapas y Guatemala ha desencadenado una crisis humanitaria que afecta a miles de personas. La interacción entre la violencia estructural y la directa contribuye a un ciclo perpetuo de migración y vulnerabilidad. Por este motivo, es fundamental desarrollar políticas integrales que no solo aborden la seguridad, sino que también promuevan el desarrollo socioeconómico y otorguen protección a quienes se ven obligados a huir de sus hogares.

Figura 9.2

La frontera entre México y Guatemala, epicentro de la violencia



Nota. Semanario México 2024.

Sembrando vida en la frontera sur: desarrollo, migración y violencia en Chiapas

El programa Sembrando Vida, pilar de la política social del gobierno mexicano, se despliega en un escenario nacional marcado por profundas desigualdades. Con el objetivo declarado de combatir la pobreza rural y la degradación ambiental mediante sistemas agroforestales, este programa busca regenerar el tejido social y reactivar la economía local. Su implementación en regiones como la Sierra Mariscal y los municipios de Chicomuselo y Frontera Comalapa, en el estado de Chiapas, adquiere una dimensión particularmente crítica (Gobierno de México, 2024, 2025). Esta zona, caracterizada por un elevado rezago social, una rica diversidad cultural (incluyendo presencia de pueblos indígenas) y una ubicación estratégica en la frontera con Guatemala, es también un territorio afectado por la violencia asociada a los cárteles del narcotráfico.

Desde esta perspectiva, en este apartado se analizan, de manera breve, los impactos sociales, culturales, ambientales

y migratorios del programa Sembrando Vida en la frontera de Chiapas, explorando su interacción con el complejo fenómeno de la violencia criminal. La tesis central sostiene que, si bien el programa posee un potencial transformador al abordar causas estructurales de la pobreza y la migración, su efectividad en contextos de violencia extrema y su transparencia en la medición de resultados presentan desafíos significativos que pueden limitar su alcance y sostenibilidad (Gouttefanjat, 2023).

Impactos sociales y culturales: reconstrucción del tejido comunitario en contextos de rezago

En el ámbito social, Sembrando Vida actúa mediante un modelo de intervención directa. Para ello, proporciona un apoyo económico mensual (6 450 pesos en 2025) a los beneficiarios, lo cual representa una inyección de recursos vitales en economías locales deprimidas. Este pago, condicionado a la participación activa en el trabajo parcelario, busca generar un ingreso básico que mitigue la pobreza extrema. No obstante, el impacto social más ambicioso radica en la promoción de las Comunidades de Aprendizaje Campesino (CAC) las cuales son el eje para la reconstrucción del tejido social, fomentando la organización colectiva, el diálogo de saberes y la solidaridad. En teoría, este mecanismo fortalece el sentido de pertenencia e identidad comunitaria, un aspecto crucial en zonas indígenas y rurales donde la cohesión social ha sido erosionada por la migración y la violencia (Gobierno de México, 2024, 2025).

Culturalmente, el programa se apropia y potencia prácticas tradicionales. Así, por ejemplo, el modelo de milpa intercalada entre árboles frutales (MIAF) no es una innovación externa, sino la sistematización de un conocimiento agroecológico ancestral mesoamericano. Al incentivar este sistema, Sembrando Vida podría contribuir a la revalorización de la cultura campesina e indígena y así, fortalecer la soberanía alimentaria a través del cultivo de maíz y frijol.

A saber, la creación de bancos de semillas nativas (187 hasta 2025, preservando 27 razas de maíz) es una acción concreta en esta dirección, que busca proteger el patrimonio biocultural. Sin embargo, en el contexto de la Sierra Mariscal y Chicomuselo, estos esfuerzos por regenerar el tejido social y cultural chocan frontalmente con una realidad paralela: la presencia de grupos delictivos que imponen sus propias reglas, ejercen control territorial y pueden cooptar o intimidar a las comunidades, socavando los procesos de organización autónoma y pacífica que el programa pretende fomentar.

Impactos ambientales:

agroforestería entre la restauración y el riesgo

El componente ambiental de Sembrando Vida es fundamental y se materializa en el establecimiento de Sistemas Agroforestales (SAF). La meta nacional es cubrir 1 139 372,5 hectáreas para 2025, combinando árboles maderables, frutales y cultivos anuales. Los beneficios ecológicos potenciales son considerables:

- Recuperación de suelos: el aumento de la materia orgánica y el control de la erosión hídrica.
- Captura de carbono: los árboles contribuyen a la mitigación del cambio climático.
- Conservación de biodiversidad: los SAF pueden servir como corredores biológicos y hábitats (Gobierno de México, 2024, 2025).

No obstante, la implementación masiva del programa ha enfrentado cuestionamientos serios (Giraldo & Rosset, 2021). Críticas señalan que, en algunos casos, la prisa por establecer parcelas ha llevado a la tala de vegetación nativa (selva o bosque) para plantar los árboles frutales y maderables del programa, generando un efecto contrario al buscado: la deforestación. En la región de estudio, este riesgo es particularmente delicado dada la riqueza biológica de la Sierra

Madre de Chiapas. Además, la violencia y la impunidad asociadas al narcotráfico facilitan otras formas de degradación ambiental no vinculadas al programa, como el tráfico ilegal de especies o la ocupación de áreas naturales protegidas por grupos criminales, creando un entorno donde cualquier política de conservación lucha por ser efectiva.

Impactos en la migración interna e internacional: ¿una alternativa real?

Sembrando Vida fue diseñado, en parte, como una política para atacar las causas estructurales de la migración. La lógica es simple: al generar empleo e ingresos dignos en el campo, se reduce la necesidad económica de emigrar. El programa incluso se extendió a Centroamérica (El Salvador, Honduras, Guatemala, Cuba) como una estrategia binacional con Estados Unidos para frenar los flujos migratorios. Reportes oficiales han citado cifras espectaculares, como una reducción de la intención de migrar del 55 % al 0,6 % entre beneficiarios salvadoreños (Gonzalez, 2026). Sin embargo, existe una grave opacidad en la metodología para obtener estas cifras. Investigadores como Abbdel Carmago y Sergio Prieto (2023) han denunciado la imposibilidad de acceder a datos verificables sobre cuántos migrantes potenciales han desistido gracias al programa, tanto en México como en Centroamérica.

En la frontera sur chiapaneca, la dinámica migratoria es especialmente compleja. La región no solo es expulsora de migrantes internos e internacionales, sino también territorio de tránsito para miles de centroamericanos y extracontinentales. Aquí, la promesa de Sembrando Vida de fijar a la población se ve desafiada por factores que el programa no puede controlar de manera aislada, entre ellos:

- La violencia criminal: la lucha entre cárteles por el control de rutas de tráfico de drogas, personas y mercancías genera inseguridad extrema que, por

sí sola, es un poderoso factor de desplazamiento forzado y migración.

- La multifactorialidad de la migración: la decisión de migrar rara vez se debe a un solo factor. Aunque Sembrando Vida mejore los ingresos, la persistencia de la inseguridad, la falta de servicios educativos y de salud, así como la violencia de género puede seguir impulsando a las personas a abandonar sus comunidades.

Por lo tanto, es ingenuo esperar que un solo programa productivo, por más ambicioso que sea, pueda revertir por sí solo flujos migratorios arraigados en dinámicas económicas globales, crisis políticas y el flagelo de la violencia organizada.

La sombra del narcotráfico: violencia que desafía al desarrollo

La violencia de los cárteles del narcotráfico no es un telón de fondo estático, sino un actor dinámico que interactúa constantemente con iniciativas como Sembrando Vida. La lógica del crimen organizado transnacional, descrita como una red piramidal y descentralizada donde los grupos locales compiten violentamente por un lugar en la cadena de suministro, tiene efectos concretos en el territorio, a considerar:

- Control territorial: los cárteles y grupos locales buscan controlar no solo rutas, sino también comunidades, recursos naturales y economías lícitas e ilícitas. Un programa que suministra recursos económicos significativos y moviliza a la población rural puede atraer la atención de estos grupos, ya sea para extorsionar a beneficiarios, desviar recursos o cooptar la estructura del programa para lavar dinero o como fachada.
- Desplazamiento forzado: la violencia directa (enfrentamientos, ejecuciones, amenazas) es un motor primario de migración interna en México. Familias enteras abandonan sus tierras y parcelas, inclusive aquellas

trabajadas con Sembrando Vida, rompiendo cualquier proceso productivo o comunitario en ciernes.

- Erosión institucional y social: la corrupción y la intimidación asociada al narcotráfico debilitan las instituciones locales y la confianza comunitaria, que es justo el capital social que las CAC intentan fortalecer. En este entorno, la participación en programas gubernamentales puede incluso generar riesgos de seguridad para los beneficiarios.

Asimismo, esta violencia tiene una dimensión geopolítica. Como analiza el Observatorio Lawfare y Instituto Tricontinental (2025), la llamada “Guerra contra las Drogas” impulsada por Estados Unidos durante décadas ha priorizado un enfoque militarista y punitivo que, lejos de resolver el problema, ha exacerbado la violencia, corrompido instituciones y amenazado la soberanía nacional, fomentando el caldo de cultivo perfecto para que florezcan estos fenómenos. Sembrando Vida representa un enfoque alternativo, que busca atacar las causas socioeconómicas que subyacen a la vulnerabilidad de las comunidades frente al crimen. No obstante, en regiones donde el poder de los cárteles es ya hegemónico, este enfoque de desarrollo resulta insuficiente si no va acompañado de una estrategia integral de seguridad y justicia que priorice la protección de la población civil y el desmantelamiento de las redes económicas del crimen.

Intersecciones analíticas: tejiendo la trama de las alternativas

Migración y economías de base: solidaridad, subsistencia y tránsito

La migración en tránsito (principalmente centroamericana hacia Estados Unidos) y la migración regional (por trabajo estacional) son realidades omnipresentes que se entrelazan con las economías locales.

El paso de migrantes genera una economía de base ambivalente. Por un lado, está la economía depredadora de coyotes y redes criminales. Por otro, florece una economía solidaria y de subsistencia: familias que ofrecen alimento y albergue, “casas de huéspedes” informales, venta de ropa y zapatos usados, y una red vital de albergues sostenidos por la sociedad civil y comunidades de fe. Estos albergues, más que un simple servicio, son espacios de autogestión migrante donde se toman decisiones colectivas, se comparten saberes y se ejercen derechos.

Personas migrantes varadas o en espera desarrollan microemprendimientos (lavado de ropa, elaboración de artesanías, venta de comida) para subsistir. Estas prácticas, estudiadas desde el enfoque *from below*, muestran la capacidad de agencia y resiliencia frente a un sistema diseñado para su invisibilización y desgaste.

Para las comunidades originarios de Guatemala que tienen familiares en Chiapas o más al norte, las remesas son un pilar económico. Su impacto es ambivalente: pueden sostener el consumo, pero también hay experiencias donde se canalizan colectivamente hacia proyectos comunitarios de agroecología o infraestructura, transformándose en un instrumento de empoderamiento colectivo.

Agroecología como praxis de autogestión y defensa del territorio

Entre 2020 y 2024, la violencia generada por los cárteles en la frontera sur de México ha exacerbado la precariedad económica. Sin embargo, en este escenario han surgido iniciativas de EPS que articulan producción agroecológica, comercio justo y autonomía territorial. Asimismo, cooperativas de café orgánico, miel y artesanías han logrado establecer circuitos cortos de comercialización, reduciendo la dependencia de intermediarios y fortaleciendo la economía local (Ávila, 2021).

Como sostiene Ávila (2021), la EPS no se limita a una alternativa productiva, sino que constituye un entramado social donde se reconfiguran esperanzas y ontologías relacionales. En un contexto marcado por la violencia, estas experiencias representan no solo resistencia, sino también la construcción de futuros posibles. De esta forma, la agroecología en la frontera trasciende una técnica agrícola; es un proyecto político, económico y cultural integral, porque promueve:

- Respuesta al extractivismo y recampesinización: frente al avance de la palma aceitera, la minería y la ganadería extensiva, la agroecología se erige como una estrategia de defensa del territorio-cuerpo-tierra. Promueve la soberanía alimentaria al recuperar semillas nativas (maíz, frijol) y diversificar las parcelas (milpa), reduciendo la dependencia de insumos externos y mercados volátiles.
- Autogestión del conocimiento y la producción: las escuelas campesinas y los intercambios de saberes entre comunidades (chiapanecas y guatemaltecas) son espacios horizontales de autogestión del conocimiento. Se revalorizan los saberes indígenas y se experimenta colectivamente. La producción se organiza a menudo en cooperativas o grupos de trabajo mutuo (como el tequio), priorizando el autoconsumo y los mercados locales justos sobre la lógica de maximización de ganancias.
- Mercados alternativos y circuitos cortos: surgen ferias agroecológicas y tianguis comunitarios (como los existentes en San Cristóbal de Las Casas o Comitán) que conectan directamente a productores y consumidores. Estos mercados construyen una economía moral alternativa, donde el precio considera el trabajo digno y la salud ambiental, no solo la oferta y la demanda. Ejemplos como las cooperativas de café de pequeños productores integradas en redes de comercio justo ilustran esta articulación entre lo local y circuitos económicos solidarios globales.

Autogestión y empoderamiento comunitario: la arquitectura de lo horizontal

La autogestión es el principio organizativo que vertebra muchas de las economías alternativas en la región. Esto, a su vez, implica una diversidad de alternativas:

- Formas históricas y contemporáneas: desde los ejidos y comunidades agrarias zapatistas con sus gobiernos autónomos, hasta las cooperativas de refugiados guatemaltecos que crearon empresas comunitarias, la región tiene una densa historia de autoorganización. Actualmente, esta tradición se expresa en cooperativas de artesanas textiles, sistemas comunitarios de agua potable, radios comunitarias y empresas de turismo comunitario.
- Empoderamiento comunitario a través del control colectivo: la autogestión empodera porque transfiere el control de los recursos y procesos (tierra, agua, semillas, medios de comunicación, ingresos) a la comunidad. Este control resulta como un antídoto contra la condición de “desechabilidad” a la que el neoliberalismo condena a ciertos grupos. En contextos indígenas, la autogestión suele articularse con sistemas normativos propios (usos y costumbres), reforzando la autonomía política.
- Desafíos interseccionales: la autogestión no está exenta de tensiones. Las desigualdades de género persisten, relegando a menudo a las mujeres a roles de trabajo no reconocido. No obstante, cada vez más colectivos de mujeres lideran proyectos agroecológicos y comerciales. Del mismo modo, la participación de jóvenes puede verse limitada por la migración o la falta de oportunidades dentro de los proyectos comunitarios.

Un caso paradigmático es la Casa del Migrante “La 72” en Tenosique, Tabasco, donde se ha desarrollado un centro

agroecológico que emplea a población migrante, en la que se generan ingresos colectivos y se promueve la soberanía alimentaria. Estas iniciativas no solo responden a necesidades materiales, sino que también reconstruyen el tejido social en contextos de desplazamiento forzado.

Autonomías territoriales y ontologías relacionales

En comunidades indígenas y campesinas de la región, la EPS se entrelaza con formas ancestrales de organización, como el *komon vuelta* (reciprocidad, en lengua tzeltal) y el “don” como principio de intercambio (Mauss, 2009). Estas prácticas, analizadas por Araújo et. al (2024) como autonomías territoriales de horizonte popular, cuestionan la lógica mercantilista y proponen economías arraigadas en relaciones comunitarias.

El empoderamiento comunitario es el hilo conductor y el resultado de las intersecciones anteriores:

- De la supervivencia a la agencia transformadora: las economías de base comienzan como estrategias de supervivencia frente a la informalidad y el trabajo precario. Sin embargo, cuando se colectivizan y politizan, a través de la agroecología y la autogestión, devienen en proyectos de agencia transformadora. La comunidad deja así de ser víctima pasiva para convertirse en sujeto que construye su propio “buen vivir” o *lekil kuxlejal*.
- Construcción de autonomía y ciudadanía sustantiva: este empoderamiento construye autonomía material y política frente al Estado y el capital. Las comunidades desarrollan capacidades para negociar en mejores condiciones, resistir el despojo y proponer alternativas de desarrollo local. Esto constituye una forma de ciudadanía sustantiva, ejercida desde la práctica cotidiana y la defensa del territorio.

- Redes transfronterizas de solidaridad: el empoderamiento se amplifica mediante redes regionales y continentales. La participación en la Red Intercontinental de Promoción de la Economía Social y Solidaria (RIPESS) o en la Vía Campesina conecta las luchas locales con movimientos globales, proporcionando apoyo, visibilidad y marcos de sentido compartido.

En la figura 9.3 podemos observar las principales alternativas generadas en la Frontera Sur de México.

Figura 9.3

Alternativas económicas en la frontera México-Guatemala



Nota. Tomado de *Alternativas al colapso socioambiental desde América Latina*, por L. Ávila, 2021, CALAS.

Conclusiones

La Economía Popular Solidaria (EPS) en la frontera México-Guatemala evidencia que, incluso en escenarios de crisis, es posible construir economías basadas en la solidaridad y la autodeterminación. Su potencial radica en su capacidad para integrar saberes locales, innovación social y resistencia política, ofreciendo un camino hacia sociedades más justas y sostenibles.

La relación entre economías populares, migración, agroecología, autogestión y empoderamiento en la frontera Chiapas-Guatemala revela un ecosistema complejo de resistencia y creación. Lejos de ser fenómenos aislados, se retroalimentan: la migración forzada por el despojo refuerza la urgencia de la agroecología como defensa territorial; la agroecología requiere y fortalece formas de autogestión; y la autogestión exitosa constituye el núcleo del empoderamiento comunitario.

Estas prácticas representan horizontes de posibilidad concretos ante las crisis social, económica y ecológica. Demuestran que es posible organizar la vida económica con base en la reciprocidad, la sostenibilidad y la democracia radical, al desafiar los principios del individualismo, la acumulación y la jerarquía.

Sin embargo, estas prácticas enfrentan limitaciones estructurales considerables: la cooptación por agendas gubernamentales o de ONG, la represión y criminalización por parte del Estado securitizado, la competencia desleal de los mercados capitalistas, y las tensiones internas de género y generación. En este sentido, su sostenibilidad a largo plazo depende de su capacidad para profundizar en la justicia interseccional, escalar sus impactos a través de alianzas sólidas y mantener una doble militancia: la gestión cotidiana de lo alternativo y la confrontación política con el sistema que genera la necesidad de dichas alternativas.

En definitiva, estudiar estas economías en la frontera sur de México no es un ejercicio académico marginal.

Es una ventana para comprender cómo, en los márgenes del capitalismo global, se siembran las semillas de futuros posibles, donde la economía no esté al servicio del despojo y la desesperación migrante, sino de la reproducción ampliada de la vida comunitaria y de la dignidad.

La existencia del programa del gobierno federal mexicano Sembrando Vida es una política pública de enorme escala y ambición que aborda problemas estructurales del México rural: pobreza, degradación ambiental y descomposición social. En la Sierra Mariscal y la frontera de Chicomuselo y Comalapa, su implementación tiene el potencial de generar ingresos, restaurar ecosistemas, revalorizar culturas campesinas y ofrecer una alternativa concreta a la migración por necesidad económica. Las CAC y los SAF son herramientas teóricamente sólidas para alcanzar estos objetivos.

Sin embargo, este potencial se ve severamente limitado por dos grandes conjuntos de desafíos. Primero, los problemas intrínsecos del programa: la opacidad en la medición de resultados (especialmente en migración y medio ambiente), el riesgo de deforestación por malas prácticas y la dificultad de garantizar que el apoyo llegue efectivamente a los más pobres en contextos de corrupción. Segundo, y más decisivo en la región analizada, el contexto extrínseco de violencia criminal. La lucha entre cárteles no es solo un “ruido” en el entorno, sino un factor determinante que puede revertir cualquier avance social, ambiental o económico. La violencia desplaza poblaciones, controla territorios, corrompe instituciones y siembra el miedo, destruyendo el tejido social que el programa busca reconstruir.

En última instancia, el éxito o fracaso de Sembrando Vida en territorios como la frontera sur chiapaneca no dependerá únicamente de su diseño agroforestal o de sus pagos mensuales. Dependerá, más bien, de la capacidad del Estado mexicano para articular una política integral donde el desarrollo social y la justicia ambiental vayan de la mano con una

estrategia efectiva de seguridad ciudadana que esté centrada en la protección de la vida y los derechos de las comunidades. Mientras la violencia del narcotráfico siga definiendo la vida cotidiana, cualquier semilla de desarrollo, por más bien intencionada que sea, luchará por echar raíces en un suelo minado por la inseguridad y la impunidad.

Bibliografía

- Araújo, M., Rosset, P. M., Pinheiro, L., Giraldo, O. F., Ávila, L. E., y Peters, T. (2024). Autonomía territorial y soberanía popular: Diferencias históricas, convergencias políticas y diálogos en la construcción de alternativas y defensas territoriales en América Latina. *Ambientes: Revista de Geografía e Ecología Política*, 6(2), 220–272. <https://doi.org/10.48075/amb.v6i2.31623>
- Ávila Romero, L. (2013). La disputa por el patrimonio biocultural, la economía verde y sus impactos en los pueblos indígenas, en Matías Carámbula Pareja y León Enríque Ávila Romero (eds.), *Patrimonio biocultural, territorio y sociedades afroindioamericanas en movimiento*. CLACSO.
- Ávila, L. (2021). *Alternativas al colapso socioambiental desde América Latina*. CALAS.
- Camargo, A., & Prieto, S. (2023). Fronteiras da fronteira sul: Entre (re) planejamento territorial e (re) distribuições populacionais. *Argumentos-Revista do Departamento de Ciências Sociais da Unimontes*, 20(2), 234-268.
- Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. (2025). *Chiapas, en la espiral de la violencia armada y criminal*. <https://frayba.org.mx/informe-frayba-violencia-armada-criminal>
- Coraggio, J. L. (2011). *Economía social y solidaria: El trabajo antes que el capital*. Abya-Yala.
- Galtung, J. (1990). Cultural violence. *Journal of Peace Research*, 27(3), 291–305. <https://doi.org/10.1177/0022343390027003005>
- Giraldo, O. F., y Rosset, P. M. (2021). Principios sociales de las agroecologías emancipadoras. *Desenvolvimento e Meio Ambiente*, 58, 708–732. <https://doi.org/10.5380/dma.v58i0.77785>

- Gibson-Graham, J. K. (2006). *A postcapitalist politics*. University of Minnesota Press.
- Gobierno de México, Secretaría de Bienestar. (2024, 22 de octubre). *Programa Sembrando Vida*. <https://www.gob.mx/bienestar/acciones-y-programas/programa-sembrando-vida>
- Gobierno de México. (2025a). *Sembrando Vida: Programas para el bienestar*. <https://programasparaelbienestar.gob.mx/sembrando-vida/>
- Gobierno de México. (2025b). *Primer informe de gobierno: Sembrando Vida*. <https://www.informegobierno.gob.mx/indice/sembrando-vida>
- González, R. (2026, 8 de marzo). *Flujo de salvadoreños que cruzan México se desploma 87%*. *El Sol de México*. <https://oem.com.mx/elsoldemexico/mexico/flujo-de-salvadorenos-que-cruzan-mexico-rumbo-a-eu-se-desploma-87-28835368>
- Gouttefanjat, F. (2023). Pistas críticas para la valoración integral del programa mexicano Sembrando Vida. *Utopía y Praxis Latinoamericana*, 28(102), 168–180.
- Instituto Tricontinental de Investigación Social y Observatorio Lawfare. (2025). *La arquitectura imperialista y el ataque contra la soberanía*. <https://thetricontinental.org/es/argentina/adictos2-geopolitica/>
- Instituto Nacional de Migración. (2021). *Estadísticas migratorias*.
- Marx, K. (2019). *El capital: crítica de la economía política*. FCE.
- Mauss, M. (2009). *Ensayo sobre el don*. Katz.
- Medina Carrillo, A. M. (2022). La frontera no es como la pintan. *Papel Político*, 27, 1–23.
- Narotzky, S. (2012). *Economías cotidianas*. Icaria.
- Narotzky, S. (2020). *Grassroots economics*. Pluto Press.
- Observatorio Lawfare y Instituto Tricontinental de Investigación Social. (2025). *La arquitectura imperialista y el ataque contra la soberanía*.
- Razeto, L., y Rufino, A. M. (1990). *Las empresas alternativas*.
- Razeto, L. (1993). *De la economía popular a la economía de solidaridad: un proyecto de desarrollo alternativo*. Programa de Economía del Trabajo.
- Ruggeri, A. (2014). *Las empresas recuperadas*. Facultad de Filosofía y Letras.
- Sáinz, J. P. (2025). *El trabajo en la era digital*. Siglo XXI.

- Scott, J. C. (1977). *The moral economy of the peasant: Rebellion and subsistence in Southeast Asia*. Yale University Press.
- SemMéxico. (2024, 21 de febrero). El foco de tensión en la frontera México-Guatemala. <https://semmexico.mx/el-foco-de-tension-en-la-frontera-mexico-guatemala/>
- Srnicek, N. (2019). *Capitalismo de plataformas*. Caja Negra.
- Tarrow, S. (2004). *El poder en movimiento*. Alianza.
- Thompson, E. P. (1971). The moral economy. *Past & Present* 50(1), 76–136.
- Thompson, E. P. (2019). *Costumbres en común*. Capitán Swing Libros.
- Viales, R., y Izquierdo, J. (2018). *Análisis relacional de las economías de base*. CALAS.

CAPÍTULO 10

La pluralidad del trabajo: desposesión, organización colectiva y éticas ordinarias en el Gran Buenos Aires

Virginia Manzano

Introducción

Gonzalo Chaves, un probado militante revolucionario de las décadas de 1960 y 1970 inserto en luchas sindicales, relata su sorpresa al descubrir la propagación de ollas populares en barrios obreros del Gran Buenos Aires hacia fines de la última dictadura militar en Argentina (1976-1983). Reflexiona desde el presente con el sociólogo Jerónimo Pinedo y considera que esas ollas que históricamente se asociaban con acontecimientos disruptivos, como los crudos conflictos fabriles (huelgas u ocupaciones de plantas), comenzaron a funcionar cotidianamente, a inicios de la década de 1980, para proporcionar alimento diario a cientos de habitantes de esos cordones populares afectados dramáticamente por el cierre masivo de fábricas, despidos y aumento de la pobreza. En sus propias palabras: “Para mí fue una sorpresa. Eso fue algo que uno esperaba que ocurriera en Tucumán o en Santiago del Estero, no en lo que para nosotros era el corazón

de la Argentina obrera e industrial” (Pinedo, 2022, p. 283). Chaves se extrañaba con respecto a un mundo que creía conocer acabadamente mientras hallaba signos inequívocos de la transmutación histórica del Gran Buenos Aires, un área que se había expandido desde mediados del siglo XX en torno a la figura del obrero industrial y sindicalizado, autoconstructor de su vivienda y productor de la ciudad periférica.

Por varias razones, la sorpresa que manifiesta Chaves tiene una importancia cardinal para los temas que se propone abordar este capítulo. El Gran Buenos Aires representaba el epítome de una estructuración singular de la sociedad argentina, comparada con otros países de América Latina, que se caracterizaba por la escasa centralización del capital, la diversificación productiva y la extensa difusión de la relación salarial con un peso mayoritario de trabajadores industriales entre las clases subalternas. Las estrategias de poder de la última dictadura cívico-militar reestructuraron profundamente esa sociedad y sus efectos perduran hasta el presente. La militarización del ámbito urbano e industrial, la eliminación física y desaparición forzada de militantes de base, el disciplinamiento del conjunto de la clase trabajadora y la destrucción del aparato productivo (Pinedo, 2022), presentan como su reverso a la centralización del capital y al predominio del sector financiero en simultáneo con la fragmentación de las clases populares a partir del crecimiento del trabajo no asalariado y la pérdida del peso sustantivo que otrora tenían los trabajadores industriales (Villarreal, 1985). Estas tendencias se profundizaron con agresivas reformas neoliberales durante la década de 1990, las cuales se expresaron en mayores niveles de flexibilización y precarización laboral y en el aumento sostenido y catastrófico de la pobreza y el desempleo.

El corazón obrero e industrial al que hacía alusión Chaves no se agotaba en la particularidad de su estructura social, era también, y acaso ese asunto inquietaba profundamente

al observador, el eje medular de una forma de organización política y sindical. Con la dictadura militar mutaron las bases sociales de poder sobre las que se había asentado la capacidad de movilización de los grupos subalternos desde, al menos, la década del cuarenta del siglo XX (Villarreal, 1985). Chaves considera que las ollas populares indicaban el dinamismo de antiguos barrios obreros puesto que ofrecían una respuesta a la pobreza desde el entramado asociativo de clubes sociales y deportivos, juntas vecinales, cooperadoras escolares y Comunidades Eclesiales de Base de la Iglesia Católica. Durante la década del noventa, cuando se profundizan las reformas neoliberales, esos barrios serán concebidos como sitios para la distribución focalizada de recursos entre poblaciones calificadas como pobres o vulnerables, pero también como lugares para la organización de trabajadores desempleados e informales, proyectando desde allí al movimiento de desocupados y a organizaciones que con el tiempo darán forma a la Unión de Trabajadores de la Economía Popular. Al sorprenderse, Chaves se pliega en un gesto ético que advierte el sentimiento de humillación que invade a las antiguas familias obreras, en tanto que para procurarse un elemento vital para su supervivencia, como el alimento, deben mostrarse públicamente en ollas populares comprometiendo sus sentidos históricos de dignidad.

Como parte de estas profundas transformaciones en la vida social y política de las clases trabajadoras en Argentina a lo largo de las últimas cuatro décadas, este capítulo se hace eco de grandes interrogantes en torno a cómo reproducen socialmente sus vidas los sectores populares urbanos, cuando las opciones de trabajo asalariado formal se ven severamente restringidas, y cómo inscriben esas experiencias en un campo de lucha política. En función de ello, estas preguntas se sustentan en un marco analítico atento a las particularidades que asume el trabajo en el capitalismo contemporáneo. La reestructuración cíclica del capital,

y los consecuentes procesos de desposesión, producen un abanico diferenciado de relaciones laborales que obligan a ir más allá de las distinciones tradicionales entre sector formal e informal, asalariados y no asalariados, producción y reproducción (Carbonella y Kasmir, 2015; Lazar, 2023). Las formas de violencia y las diversas actividades —remuneradas y no remuneradas, laborales y no laborales— generan capital a través de múltiples extracciones, permaneciendo una buena parte del trabajo productor de valor como invisible o no reconocido (Kasmir y Narotzky, 2025).

La categoría “ganarse la vida”, que la antropóloga española Narotzky propone para comprender la reproducción social en el capitalismo contemporáneo, resulta de utilidad para ordenar el análisis (Narotzky y Besnier, 2014; Narotzky, 2015). Esta categoría encierra un punto de vista metodológico que parte de la experiencia de las personas comunes, dando cuenta de sus decisiones limitadas por el tipo de bienes, riqueza y poder, pero también de estrategias complejas, individuales y colectivas, que desarrollan para mejorar su propio bienestar y el de futuras generaciones. Se define a la reproducción social como la continuidad que pone juntas a las generaciones a través de microproyectos de hacer la vida y mejorar oportunidades futuras y de macroproyectos de poder y distribución de bienes. Esta propuesta invita a reconstruir *circuitos de aprovisionamiento* que operan con relaciones de confianza, cuidado, afecto y redes de reciprocidad, incorporando recursos, tangibles e intangibles, y obligaciones morales (Narotzky y Besnier, 2014). Estas inversiones relacionales y afectivas también ponen de relieve distintas clases de valor y valorización, que traspasan el intercambio de mercado, instaurando una fricción que se expresa en torno a la noción de dignidad, en tanto la realidad vivida de las dependencias choca con discursos hegemónicos (neoliberales) de autonomía, autosuficiencia individual y emprendería personal (Narotzky, 2015).

En lo que sigue, desde una perspectiva de antropología política, reconstruyo los entramados del trabajo en barrios populares del Gran Buenos Aires, procurando volver inteligibles circuitos de aprovisionamiento e infraestructuras comunitarias que posibilitan y limitan el despliegue de emprendimientos particulares y colectivos. En segundo lugar, muestro cómo esas experiencias de trabajo se inscriben y traducen en una larga temporalidad de acción política y lucha colectiva que establece un marco de contienda en el entrecruce contradictorio entre formas de acción colectiva e intervenciones estatales. Finalmente, señalo que las tensiones de las configuraciones contemporáneas del trabajo y de los escenarios políticos en los cuales tienen lugar se expresan en categorías morales que refieren a la “(in)dignidad del pobre”, en especial frente a la renovada estigmatización del mundo popular y el ascenso vertiginoso de programas ultra-neoliberales y proyectos de extrema derecha en el país.

Este análisis forma parte de un programa de investigación más amplio cuyo propósito es contribuir al estudio de los modos de vida de los sectores populares urbanos en el Área Metropolitana de Buenos Aires. En este caso se presentan resultados de estudios etnográficos en el Gran Buenos Aires, aglomeración urbana donde residen 10.849.299 de personas, según el último Censo Nacional de Población y Vivienda del año 2022, lo que representa el 37 por ciento de la población total del país. Se parte de una perspectiva etnográfica entendida en su triple dimensión de enfoque, método y texto (Rosato, 2009), asumiendo una concepción y una práctica de producción intersubjetiva de conocimiento. En tanto método, aplicamos el conjunto de actividades que se designan como trabajo de campo, otorgando prioridad a la observación participante en articulación con entrevistas en profundidad y recopilación de fuentes secundarias. La argumentación retoma mi trabajo de largo aliento con el movimiento de desocupados así como también un proyecto de investigación

colaborativa, que iniciado en el año 2014 continúa hasta el presente, en un centro comunitario, denominado PROMEBA, en San Francisco Solano, partido de Quilmes, zona sur del Gran Buenos Aires. Además, recurro a fuentes secundarias, especialmente relevamientos de prensa escrita, para señalar ciertas tensiones derivadas de la extrema polarización del campo político en Argentina.

Entramando Trabajo(s): emprendimientos, entornos comunitarios e infraestructuras

Katy tiene 28 años de edad y trabaja como instructora de *zumba* (programa de entrenamiento que combina ejercicios aeróbicos con ritmos musicales latinos). Ofrece clases de esa especialidad a un puñado de mujeres que habita la zona en la cual ella misma reside, un área de la periferia urbana del Gran Buenos Aires en permanente autoconstrucción. Sin embargo, durante la pandemia por COVID-19, estas actividades deportivas y artísticas se vieron interrumpidas mucho más tiempo que otras en función de las medidas sanitarias de aislamiento social decretadas por el gobierno nacional para controlar la propagación del virus SARS-CoV-2. Frente a esa situación imprevista y disruptiva, que vino a limitar severamente el rango de ingresos monetarios, comienza a experimentar con la comercialización de productos cosméticos, con certificación ecológica, mediante plataformas digitales, aprendiendo sobre procedimientos impositivos, puntos y acumulación de bonos. Katy consideraba que: “El sistema de venta creció porque personas de todas las edades ante la pérdida de fuentes de trabajo se encontraron receptivas a escuchar oportunidades digitales para emprender” (K. Ovando, comunicación personal, 16 de junio de 2021). Con el fin de mejorar su propio emprendimiento, decide invertir dinero tanto para actualizar el modelo de su teléfono móvil como para ampliar el contrato del servicio de provisión de internet.

Aunque con exigencias menores a aquellas que requieren las plataformas digitales de comercialización, numerosas personas que habitan barrios populares, fundamentalmente mujeres y jóvenes, también ofrecen distinta clase de productos y servicios a través de redes sociales. Flor, una joven de 25 años, exhibe cuadros en Instagram que ella misma pincela, repartiendo su tiempo entre esa labor artística y el despacho de alimentos y bebidas en el pequeño comercio montado en la antesala de su casa familiar (F. Benítez, comunicación personal, 22 de junio de 2021). En el caso de Alejandro (A. Gutiérrez, comunicación personal, 24 de junio de 2021), mientras él trabaja en un servicio de fletes, su pareja, según me comentaba, se inicia en la venta de calzado usado familiar a través de Facebook, diversificándose posteriormente hacia alimentos cocidos y vestimenta. Jere, un joven de 19 años, al ser despedido de un *call-center*, invierte su último salario en zapatillas a bajo costo para revenderlas luego por *WhatsApp*, asimismo, liquida el último saldo de ese lote con una rifa (J. Amarilla, comunicación personal, 17 de julio de 2025). La venta mediante redes sociales se generaliza desde la pandemia, en algunas circunstancias reemplaza y en otras se añade a intercambios que antes se daban exclusivamente en puestos de ferias populares o en las cadenas de trueque que funcionaron hace algunas décadas atrás.

En paralelo a sus labores como instructora de *zumba* y comerciante en línea, Katy cuida diariamente de otros integrantes de su familia, especialmente de su pareja, quien sufre de alergia y asma, y de la abuela de este, con la que mantienen una relación afectuosa y, a la vez, dependiente por ser la propietaria del lote donde habitan en contigüidad. En época de pandemia, Katy asumió la responsabilidad de tramitar asuntos concernientes a la salud, la provisión de medicinas y alimentos. Al narrar el reencuentro con sus alumnas de *zumba*, reflexiona sobre la afectación corporal y afectiva del trabajo de cuidado: “Las chicas estaban muy afectadas con la pandemia,

emocionalmente, económicamente, excedidas de peso corporal. Todo eso por la preocupación familiar, todo recaía en ellas, aparte, al estar encerradas estuvieron muy expuestas a la televisión y las noticias, estaban con estrés y pánico” (K. Ovando, comunicación personal, 16 de junio de 2021).

Katy retoma su labor como instructora de *zumba* durante el último tramo del año 2020, pero el local que rentaba para brindar sus clases con anterioridad a la pandemia, como era el taller de lavado y reparación de autos de un pariente suyo, deja de ser apto porque carecía de la ventilación adecuada que exigían las normas sanitarias de ese entonces. Granjea esta nueva dificultad acordando organizar los entrenamientos en un centro social denominado PROMEBA, donde venía colaborando con el comedor comunitario en virtud de sus vínculos socio-afectivos con quienes gestionan ese lugar, fundamentalmente con Estela quien es reconocida en la zona por ser una “mujer luchadora” (K. Ovando, comunicación personal, 16 de junio de 2021). Estela, como tantas otras mujeres de esos barrios, se incorpora a una de las primeras Comunidades Eclesiales de Base que, inspiradas en la Teología de la Liberación, se fundaron en esa zona durante la década de 1970. Casi por esa misma época también se vuelve parte activa de un poderoso movimiento social urbano cuyas luchas se libran en torno a la ciudad autoconstruida, para confluir durante la década de 1990 con el incipiente movimiento de desocupados (E. Gutiérrez, comunicación personal, 14 de julio de 2015).

En esa larga temporalidad histórica de lucha urbana y popular, el edificio PROMEBA, inaugurado en el año 2015 con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo, se interpreta como una conquista de los movimientos sociales. En ese nuevo espacio comunitario se suceden diversas actividades como programas educativos para jóvenes y adultos, apoyo escolar para niños y para niñas, juegoteca infantil, talleres de entrenamiento en oficios (costura, cocina, computación, herrería, entre otros), formación en técnicas de compostaje,

clases de gimnasia y *hip hop*, campañas de prevención sanitaria y de saneamiento ambiental, asesoramiento sobre titulación de lotes urbanos, ferias de emprendedores, huertas y comedores comunitarios.

Como tantos otros lugares en barrios de la periferia urbana, el centro comunitario PROMEBA actúa como una infraestructura colectiva que posibilita, bajo ciertas condiciones y compromisos vinculantes, el despliegue temporario de emprendimientos particulares para la reproducción social de la vida. Katy encuentra un entorno donde ofrecer sus clases de *zumba* y sortear los efectos impuestos por la pandemia, a la vez que su trabajo también aporta a darle forma a ese lugar puesto que los programas deportivos se promocionan como pieza clave para el cuidado de la salud. No obstante, esta actividad, bajo las normas del centro comunitario, no puede ser arancelada ni regirse por algún tipo de tarifa monetaria fija, la fórmula a la que se recurre es la “contribución voluntaria”, es decir, el dinero que se moviliza se significa como colaboración a la tarea de la instructora y a un fondo común para mantener en buenas condiciones el edificio. Las mujeres que cocinan en el comedor comunitario brindan otro ejemplo en esta dirección, ofrecen alimentos gratuitamente pero también utilizan las instalaciones de PROMEBA para elaborar otro tipo de productos alimenticios que colocan a la venta en exhibidores públicos y redes sociales, de ese modo, una parte del dinero recaudado fortalece sus ingresos familiares y la otra se reinvierte en insumos para dar continuidad a sus emprendimientos particulares y a los proyectos comunes.

En esos mismos espacios se vitalizan prácticas de ayuda mutua inscriptas en tradiciones populares como colectas, rifas, ferias, bingos y bailes para reunir dinero y afrontar colectivamente situaciones críticas e imprevistas tales como enfermedad, muerte, procedimientos judiciales, desperfectos en las viviendas, inclemencias ambientales, entre otras. Por otra parte, allí suele inscribirse a programas de asistencia estatal

que transfieren dinero a personas calificadas como pobres o vulnerables a cambio de la contraprestación de trabajo en proyectos comunitarios y/o productivos. Katy y otras personas vinculadas a ese centro fueron inscriptas como beneficiarias de este tipo de programas, adecuando sus actividades a las normativas exigidas como contraprestación laboral.

Al reconstruir trazos centrales de trayectorias vitales como las de Katy, que se entraman con otras en espacios comunitarios del Gran Buenos Aires, es posible registrar un paisaje encarnado de trabajo que se ordena irregularmente entre el empleo asalariado formal y protegido, la contraprestación laboral en programas estatales de asistencia social, y un extenso abanico de ocupaciones informales (intermitentes y/o relativamente permanentes) en actividades tales como comercio de bienes y servicios (ambulante, ferias, en línea o en una parte del espacio físico de la vivienda), recolección y reciclado de residuos, limpieza en casas particulares, jardinería, cuidado de niñas, niños y adultos mayores, “changas” en el rubro de la construcción, costura, entrenamiento deportivo, alquiler de juegos inflables para fiestas, producción musical y animación de eventos, peluquerías y barberías, entre otras.

Este paisaje encarnado permite iluminar ciertas dinámicas del trabajo, especialmente destacar que el empleo asalariado y protegido es una opción limitada con respecto a otras modalidades y relaciones que se ponen en juego para reproducir socialmente la vida. Informes recientes, basados sobre la información que proporciona la Encuesta Permanente de Hogares del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INDEC), indican que un total de 3.800.000 personas componían el llamado sector de la economía popular durante el primer semestre de 2025, lo cual representa un 26,8 por ciento sobre la población económicamente activa (PEA). El 56,6 por ciento de ese total percibe ingresos inferiores a tres salarios mínimo vital y móvil. En términos socio-demográficos, la población menor a 29 años asciende a 838.000,

representando un 24,9 por ciento de la PEA joven, en tanto que la adulta se ubica en 3.000.000, alcanzando al 27, 5 de la PEA adulta. Sobre el total general, 1.900.000 son varones, quienes representan al 24, 5 por ciento de la PEA masculina, el 50 por ciento de ellos percibe ingresos menores a tres salarios mínimo vital y móvil, y el 4, 5 recibe ayuda social. El número de mujeres también asciende a 1.900.000, representando al 29, 5 por ciento de la PEA femenina, el 63, 2 por ciento de ellas percibe ingresos menores a tres salarios mínimo vital y móvil y el 34, 4 recibe ayuda social (Balza et al., 2025) .

La economía popular, sostienen distintos especialistas, se caracteriza por su dinamismo para crear fuentes laborales, pero también por la precariedad y desprotección así como por la persistencia de las desigualdades de género (Hopp, 2025). De esta manera, los rasgos centrales de ese sector se inscriben en tendencias estructurales generales del empleo en el país, como la contracción del empleo protegido, la inestabilidad e intermitencia laboral, la pluriactividad y el empobrecimiento generalizado de ocupados y desocupados (Balza et al., 2025). Para precisar este punto, sobre el total de la población económicamente activa en el segundo semestre de 2024, solo el 39, 7 por ciento contaba con empleo de pleno derecho, en tanto que el 8,9 estaba desocupada, el 23, 6 con subempleo inestable (changas, trabajos temporarios o no remunerados, beneficiarios de programas de empleo con contraprestación) y el 27, 8 restante con empleo regular pero precario (Donza, 2024). A esto debe añadirse la drástica disminución de la capacidad de compra del ingreso medio laboral mensual, que cae en un 44, 1 por ciento durante el período comprendido entre 2010 y 2024 (Donza, 2024). Asociado a ello, las tasas de pobreza e indigencia en los principales centros urbanos, correspondientes al primer semestre de 2025, según el INDEC, se ubican en el 31,6 por ciento y 6,9 por ciento respectivamente. Es preciso aclarar que ambas tasas muestran una reducción significativa con relación al 52,9 por ciento

de pobreza y el 18,1 por ciento de indigencia que se había registrado un año atrás. Entre los principales factores que explican esta variación interanual, afirman algunos expertos, se encuentra el aumento extraordinario de los montos de prestaciones de transferencia monetaria a poblaciones *vulnerables* (Asignación Universal por Hijo y Tarjeta Alimentar) y la disminución del precio de algunos productos esenciales de la canasta básica de alimentos.

Los programas de transferencia condicionada de ingresos, conocidos popularmente como *planes*, a cambio de distinto tipo de contraprestación laboral, tal como abordaré en el próximo apartado, tienen un peso considerable para configurar las relaciones políticas y la reproducción social de la vida entre sectores populares (Manzano, 2013). Es cierto también que ninguna familia vive exclusivamente del dinero que se percibe a cambio de un plan social, puesto que el sostenimiento de la vida conlleva el ejercicio de una simultaneidad de ocupaciones y la participación en diversas tramas sociales, asimismo, el valor de esas prestaciones se ubica reglamentariamente por debajo del nivel del salario mínimo regional. De todas maneras, estos programas han persistido a lo largo de los últimos treinta años como una de las respuestas centrales del Estado argentino al problema del desempleo y la informalidad. Además, la contraprestación se enmarca en proyectos productivos o comunitarios supervisados por distintas entidades colectivas, entre ellas movimientos sociales, que suelen guiarse por las pautas normativas del mundo de trabajo formal como la división de la jornada en turnos laborales y períodos anuales de vacaciones, imponiendo rutinas cotidianas en barrios populares (Manzano, 2013).

Las formas de actividad que se registran en barrios populares articulan espacios de trabajo y residencia, sobresaliendo el trabajo femenino (Hopp, 2025; Manzano, 2013; Pacífico y Stefanetti, 2025). Cuando Katy refiere a sus tareas de cuidado pone de manifiesto una experiencia común y generizada

entre sectores populares. En tal sentido, Nora, una mujer de 36 años, combina su trabajo precario como cuidadora de adultos mayores a domicilio, sus estudios para terminar la escolaridad secundaria y la participación en el comedor comunitario del edificio PROMEBA, que con el tiempo, y la mediación colectiva, logra inscribir como contraprestación en un programa de transferencia condicionada de ingresos. A lo largo de nuestras conversaciones, manifiesta su gusto por las labores del comedor considerando tanto las artes implicadas en la cocción de alimentos como el valor de los vínculos interpersonales que allí se cultivan, según me comentaba: “Muchos somos psicólogos” (N. Barraza, comunicación personal, 22 de diciembre de 2021). Escuché sistemáticamente establecer asociaciones entre la labor en entidades comunitarias, especialmente comedores, y la labor psicológica, si bien esta equiparación encierra ciertas complejidades, en términos básicos refiere a la creación de entornos cuasi-terapéuticos dados a la comunicación emocional y afectiva con otras personas. Además, estos espacios de trabajo comunitario vitalizan formas de saber-hacer inscriptas en tradiciones populares y encarnadas en trayectorias personales, que se han venido traspasando en los múltiples acontecimientos de crisis que ha vivido la Argentina durante las últimas cuatro décadas.

A este respecto, en otras publicaciones abordé detalladamente cómo durante los últimos cuarenta años, desde aquel momento en el que Gonzalo Chaves es sorprendido por la extensión de ollas populares en barrios obreros, se ha configurado una tradición de intervención estatal y de auto-organización comunitaria contenida en una economía moral que legitima el reparto de alimentos (Manzano, 2013; Manzano y Barreto, 2025). Desde la pandemia, estas actividades comenzaron a nominarse como trabajo socio-comunitario, haciendo parte de las demandas de los feminismos y las organizaciones de trabajadores y trabajadoras de la economía popular para llamar la atención sobre trabajos

feminizados, poco reconocidos y escasamente valorados, pero esenciales para la reproducción de la vida de amplios sectores de la población (Hopp, 2025; Pacífico y Stefanetti, 2025). Simultáneamente, estudios críticos señalan la extracción del trabajo de las mujeres bajo estas condiciones, en cuanto las políticas sociales se apoyan en sus labores no remuneradas para administrar la asistencia a poblaciones vulnerables o empobrecidas (Auyero y Servián, 2023; Hopp, 2025).

La pluralidad de trabajos y ocupaciones que se dinamizan en barrios populares dependen en gran medida del funcionamiento de las infraestructuras urbanas, muchas de las cuales son producto de diversas formas de acción colectiva que se impulsaron en diferentes momentos a lo largo del tiempo. En otro artículo he analizado pormenorizadamente aquellos procesos colectivos de ocupación de tierra y la formación de asentamientos populares en el Gran Buenos Aires (Manzano, 2020), aquí me interesa señalar que se trata de un modelo que se asemeja a lo que otros autores caracterizan como urbanización periférica (Caldeira, 2017). Con el término periférico no se refiere a una locación fija con respecto a un centro, sino a una forma de producir ciudad que se despliega lentamente de forma transversal a las lógicas oficiales, admite la contestación y produce una ciudad altamente heterogénea y desigual. Con este término también se procura destacar el protagonismo de los residentes en la autoconstrucción de vivienda y construcción de ciudad, haciéndose a sí mismos como ciudadanos y agentes políticos (Caldeira, 2017). Es dentro de este modelo de urbanización periférica que debe comprenderse el esfuerzo por mantener y hacer funcionar diariamente las infraestructuras, generando ensamblajes socio-materiales, precarios, flexibles y provisionales, que al tiempo que permiten reproducir socialmente la vida, también la someten a amenazas (Moreno y Wagener, 2023).

En encuentros cotidianos, entrevistas, talleres de educación popular o reuniones comunitarias de las cuales he participado,

se componen diagnósticos en torno al funcionamiento diario de infraestructuras, principalmente aquellas vinculadas con la provisión de energía eléctrica y agua. La inestabilidad en la provisión de energía eléctrica o la interrupción total de ese suministro por largas jornadas, provoca pérdidas constantes de bienes comestibles, artefactos y vidas, que no solo afectan las rutinas de los hogares sino también las actividades laborales y las tareas de cuidado. Esto se ejemplifica en la putrefacción de alimentos acopiados para su venta en pequeños comercios o para su cocción en comedores comunitarios, la suspensión de operaciones en plataformas o redes sociales, la quema de artefactos (refrigeradores, lavarropas, estufas, entre otros), los incendios de viviendas por cortocircuitos, la muerte de vecinos, principalmente varones, quienes reciben descargas eléctricas cuando intentan intercambiar fases de alta tensión para devolver el suministro de energía. Asociado con ello, la inadecuada iluminación pública también se experimenta como riesgo, en tanto favorece la exposición a situaciones de violencia interpersonal, especialmente durante el traslado hacia trabajos, escuelas o centros sanitarios, cuando suceden asaltos sobre bienes, como teléfonos móviles que se usan también como una herramienta laboral. Ante ello se generan distintas formas de colaboración, como reunir dinero para adquirir cables reforzados e instalar postes de luz en las calles, reclamar por el servicio a empresas proveedoras, o coordinar esquemas horarios para desplazarse en grupo a través de los barrios durante la noche o el amanecer, práctica esta última que también advierten otros estudios en la misma zona (Auyero y Servián, 2023).

Las referencias al agua hacen foco tanto en su escasez como en su abundancia bajo la forma de reiteradas inundaciones. Por consiguiente, se comparten saberes y tecnologías para la provisión de agua como despertarse de madrugada cuando las cañerías tienen mayor presión, cavar pozos y rellenar recipientes casi al ras del suelo o gestionar mediante

centros comunitarios el servicio gratuito de camiones cisternas, especialmente en verano. En cuanto al exceso de agua, son frecuentes los desbordes de arroyos debido al escaso mantenimiento en la limpieza de cauces y márgenes. Tras las inundaciones recurrentes se pierden innumerables pertenencias, alimentos, herramientas de trabajo y bienes en general. Ante ello, se peticionan colectivamente obras públicas para contener inundaciones, operativos estatales de control de roedores y campañas para reponer bienes perdidos.

Las formas de trabajo, como vemos, se entraman en un conjunto de relaciones sociales y afectivas que constituyen distintos regímenes de valor y obligaciones. La acción de emprender, que se acelera desde la pandemia, no logra desplegarse plenamente en tanto estrategia individual, a imagen del *homo economicus*, puesto que depende de ese entramado de relaciones y de modos de acción colectiva que garantizan las infraestructuras mínimas para su operatividad. Por otra parte, estos entramados se inscriben en políticas del trabajo situadas en un campo de fuerzas sociales más vasto que articula contradictoriamente formas de acción colectiva, intervenciones estatales y desafíos del mercado.

Políticas del trabajo: formas de acción colectiva, intervenciones estatales y desafíos del mercado

Las experiencias de trabajo que reconstruimos desde las geografías de los barrios populares se inscriben y traducen dentro de una larga temporalidad de acción política y lucha colectiva. Por eso mismo, para comprender aquellas dinámicas que caracterizan a centros comunitarios como PROMEBA, es preciso situarse en un marco específico de relaciones de fuerzas dentro del cual las calles y los barrios populares se transformaron en escenarios para la disputa de poder desde la década de 1990, en tanto allí se entretejieron

contradictoriamente tradiciones históricas de acción colectiva, alianzas políticas y sindicales, y modos de gestión estatal de poblaciones categorizadas como vulnerables (Manzano, 2013). De manera reciente, esas experiencias vienen siendo interpeladas por programas ultra-neoliberales y proyectos políticos de extrema derecha, cuya figura emblemática es el mismo presidente Javier Milei, que exaltan la valía moral y económica de aquellos que sobreviven del mercado sin depender de la redistribución de ingresos propiciada por el Estado ni de organizaciones sindicales o comunitarias (Semán y Welschinger, 2023).

Con las reformas neoliberales de la década de 1990, el desempleo crece exponencialmente en el Área Metropolitana de Buenos Aires, pasando del 2, 4 por ciento de la población económicamente activa en 1975 al 20 por ciento en mayo de 1995, y más dramáticamente al 24 por ciento en 2001. Pero el desempleo no solo expresa una variable cuantitativa puesto que también se constituye como un terreno fértil para la lucha y la organización colectiva. Desde tradiciones sindicales diferentes a las oficiales, como la que se nuclea en la Central de los Trabajadores de la Argentina, se advierte tempranamente sobre las transformaciones del trabajo, la figura plural de los trabajadores y la urgencia de explorar nuevos lugares para la acción gremial como los espacios de residencia en barrios populares, dando pleno vigor al lema “de la fábrica al barrio”. En paralelo cobran notoriedad grupos autonomistas que, bajo la inspiración de experiencias latinoamericanas como el Movimiento Zapatista de Liberación Nacional de México y el Movimiento de los Sin Tierra de Brasil, formulan una serie de tesis sobre el contrapoder que encuentran en la experiencia de la desocupación una potencia immanente para producir nuevos valores y modos de existencia por fuera del trabajo explotado, cuestionando tanto el horizonte de integración/inclusión como las premisas clásicas de la revolución orientadas a la toma del poder central (Manzano, 2017).

Ambas propuestas encuentran su carnadura cuando se insertan en las dinámicas de barrios populares autoconstruidos a partir de ocupaciones masivas de tierras acaecidas durante la década de 1980. En esos espacios entran en conexión con líderes locales que habían luchado para urbanizar las tierras ocupadas, experimentados en sostener redes de reciprocidad comunal y conocedores del lenguaje de derechos para vincularse con las agencias estatales. En esos mismos barrios también se encuentran con las históricas Comunidades Eclesiales de Base de la Iglesia Católica que continúan estimulando la lectura grupal de la biblia, la liturgia religiosa por la geografía barrial y las visitas domiciliarias. Estas prácticas contribuyeron a dar forma a los incipientes movimientos de desocupados en tanto permitían establecer un registro preciso sobre la situación dramática que enfrentaban los grupos familiares con el propósito de fortalecer ciertas protecciones comunitarias ante la enfermedad, la extrema pobreza y la muerte. (Manzano, 2017).

El entretejido de prácticas y tradiciones que van dando forma al movimiento de desocupados es un fenómeno complejo, sobre el que he dado cuenta detalladamente en otros estudios (Manzano, 2013), aquí solamente importa señalar que ante la creciente movilización y la adopción de repertorios de protesta como cortes de rutas o piquetes, el Estado argentino, en sus escalas nacionales y provinciales, comienza a responder con la extensión de políticas de *workfare* o transferencia condicionada de ingresos, financiadas con préstamos de organismos internacionales de crédito a cambio de ajustes estructurales. Inicialmente, estas políticas ofrecían 50 dólares mensuales a jefes o jefas de hogar desocupados con niños en edad escolar, los cuales debían someterse a controles sanitarios y cursar la escolaridad formal mientras que los adultos beneficiarios debían incorporarse a proyectos productivos o comunitarios, tales como comedores, construcción de infraestructura urbana o huertas, para nombrar solo unos pocos. Bajo una concepción neoliberal de estado mínimo, se delegaba la gestión de

estas políticas a gobiernos municipales, entidades eclesiales y comunitarias, y al movimiento de desocupados.

Los límites establecidos para la acción política se redibujan parcialmente tras las jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001, cuando una “multitud” asalta las calles, se enfrenta a tropas armadas y fuerza la renuncia de dos presidentes nacionales en siete días. Estos acontecimientos forman parte de un ciclo latinoamericano de protestas contra programas neoliberales y abren el terreno para la aplicación de políticas de redistribución del ingreso que llevarán adelante aquellos gobiernos de Sudamérica que la literatura especializada calificó como progresistas o pos-neoliberales. En el caso de Argentina, se trata de los gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández de Kirchner (2007-2011 y 2011-2015), que implementaron medidas tendientes a la recuperación del empleo formal, partiendo de una concepción del trabajo como garantía de inclusión, seguridad de reproducción social, fuente de dignidad y factor de ciudadanía (Grassi, 2012). Uno de los efectos más significativos de estas medidas ha sido la sensible reducción de la tasa de desempleo nacional que pasa del 20 por ciento en 2003 a ubicarse en un 8 por ciento en 2007 (Arcidiácono y Gamallo, 2022).

En ese nuevo marco, una parte considerable de quienes integraban organizaciones de desocupados en el Gran Buenos Aires, sobre todo varones adultos que contaban con distinta clase de oficios (matriceros, mecánicos, electricistas, entre otros), volvió a emplearse en pequeñas y medianas empresas que resurgían como parte de las medidas gubernamentales de impulso a la industria. De ese modo, el movimiento de desocupados queda centralmente en manos de mujeres, jóvenes y adultos mayores que se convirtieron en objeto de políticas que promovían la asociación en cooperativas y micro-emprendimientos para la construcción de viviendas, mejoramientos urbanos o para la producción de distintos bienes con el fin de su comercialización a escala de mercado.

Hacia el año 2008, tras la crisis financiera mundial, comienzan a expresarse las limitaciones estructurales para crear empleo asalariado formal como medio central para la reproducción de la vida. Tomando nota de esta situación, desde el Estado se lanzan dos programas que vendrán a reconfigurar una vez más el vínculo entre el gobierno y los sectores populares organizados colectivamente: el Programa Ingreso Social con Trabajo “Argentina Trabaja” y la Asignación Universal Por Hijo para la Protección Social (AUH). El primero de ellos apuntaba tanto a personas en situación de desempleo como a trabajadores no registrados o informales, proponiendo, nuevamente, su organización en cooperativas. En el caso de la AUH se inscribe entre las acciones del sistema contributivo de seguridad social -régimen de jubilaciones y pensiones, asignaciones familiares y prestaciones por desempleo-, y su particularidad radica en que extiende ese tipo de asignaciones a familias de trabajadores del sector informal y desocupados; apenas se implementa alcanza a 1.770.000 titulares y a 3.360.000 niños, niñas y adolescentes (Arcidiácono y Gamallo, 2022; Grassi, 2012).

En el plano de la organización colectiva, la interpretación sobre la naturaleza del trabajo y la limitación estructural de la relación salarial formal para la reproducción de la vida, traza las líneas de una nueva cartografía organizacional que se ordenará en torno a un sector que moviliza políticamente la categoría de economía popular y otro que reivindica la tradición piquetera. En el año 2011 se constituye la Confederación de la Economía Popular, que se redefine en 2019 como Unión de los Trabajadores de la Economía Popular, presentándose como una herramienta de aquellos que “habiendo quedado fuera del mercado laboral se inventaron su trabajo para sobrevivir”. En el caso de Argentina, entonces, la economía popular puede ser entendida como una categoría política reivindicativa o de identidad colectiva que se orienta a unificar a un heterogéneo conjunto de sujetos y actividades mediante

la promoción de aquello que hacen como trabajo y la conquista de derechos similares al de los trabajadores formales bajo relación salarial (Fernández Álvarez, 2018). Una de las apuestas centrales consiste en reconocer el valor producido por este sector, superando la frontera que impone el valor de mercado y privilegiando la utilidad social de muchas de estas ocupaciones (Maldován Bonelli, 2020; Hopp, 2025).

Paralelamente a la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, la Unidad Piquetera se convierte en otro espacio sumamente gravitante que articula organizaciones que surgieron históricamente para agrupar a personas desempleadas. Este agrupamiento ha mantenido niveles más altos de confrontación con las autoridades gubernamentales y practicado innovaciones en los repertorios de protesta, estableciendo una modalidad novedosa como son los campamentos (acampes) frente a la sede del entonces Ministerio de Desarrollo Social sobre una de las vías de circulación más importantes de la Ciudad de Buenos Aires como es la Avenida 9 de Julio. Durante los acampes se narraban historias de vida atravesadas por la informalidad de las contrataciones laborales, la inestabilidad de los empleos y el deterioro de la paga, señalando una distinción con las narraciones de fines de la década de 1990 que se vertebraban en torno al desempleo abierto. A diferencia de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, en este caso se demanda trabajo genuino puesto que desde esta perspectiva política la valorización de la economía popular implica perpetuar situaciones de explotación y precarización laboral.

A lo largo del tiempo, los programas de transferencia condicionada de ingresos prevalecieron como respuesta del Estado tanto al aumento del desempleo y la informalidad laboral como a la creciente y variada movilización colectiva. No obstante, la cantidad de personas alcanzadas por estas prestaciones ha variado durante las tres últimas décadas de acuerdo con las distintas administraciones gubernamentales, para graficar esta cuestión, en el año 2002,

el número de beneficiarios alcanzó la cifra de 2.000.000, en tanto que en 2015, cuando finalizó su mandato Cristina Fernández de Kirchner, se contabilizaron 254.000 personas. En cambio, la cifra vuelve a aumentar aceleradamente durante el gobierno neoliberal de Mauricio Macri (2015-2019) alcanzando a 642.000 beneficiarios. Finalmente, bajo la presidencia de Alberto Fernández (2019-2023), el número de beneficiarios asciende vertiginosamente a la cifra de 1.500.000, debido, entre otros factores, a la crisis provocada por la pandemia y la inflación de los precios de los alimentos básicos de la canasta popular.

A partir de la pandemia, este marco histórico de disputa y contienda, cuyas modalidades de protesta y respuestas estatales se volvieron un tanto previsibles, se comienza a reconfigurar en direcciones casi imprevistas. A los ya conocidos enfrentamientos con fuerzas represivas se suma una construcción social y mediática que, basada en estereotipos y prejuicios, tiene efectos potentes para legitimar la violencia, el disciplinamiento, la criminalización y represión hacia el mundo popular movilizado colectivamente. Una construcción que postula que piqueteros y *planeros* (término despectivo para aludir a beneficiarios de programas sociales) representan un testimonio acabado y transparente de la pérdida de cultura del trabajo, en tanto desestiman el esfuerzo y el sacrificio por la pasividad de la asistencia del Estado. Estas apreciaciones se enmarcan en un escenario de creciente polarización política, que resulta del agotamiento del ciclo de gobiernos progresistas y el corrimiento hacia la extrema derecha en América Latina, aunque sus alcances son más amplios si consideramos las situaciones de Estados Unidos y otros países europeos (Kessler y Vommaro, 2021). Para el caso de nuestra región, estos proyectos ponen en cuestionamiento el consenso pos-neoliberal en torno a la redistribución social del ingreso y agitan una agenda cultural conservadora (Kessler y Vommaro, 2021)

Más allá de la escena pública, la pandemia termina por dar forma y visibilidad a una experiencia vital y sensible que se expresa públicamente cuando es interpelada por las propuestas de una derecha popular y radical que encabeza Javier Milei del partido La Libertad Avanza. Se trata de una sensibilidad que reivindica la superioridad moral de aquellos que sobreviven en el mercado sin depender de un salario público o de ingresos, subvenciones o transferencias provistas por el Estado (Semán y Welschinger, 2023). La figura del emprendedor exalta el rendimiento económico del sujeto, lo cual se vuelve posible mediante la optimización del yo medible en la eficacia laboral y en dimensiones físicas, psicológicas, estéticas y emocionales. La autonomía personal y el emprendedurismo se conciben como las vías exclusivas para alcanzar la superación a través del esfuerzo personal (Semán y Welschinger, 2023).

El despliegue de una concepción del mundo centrada en la economía, en la visión de uno mismo y los otros como unidades productivas, produce subjetividades que operan como estructura de acogida de los discursos libertarios (Semán y Welschinger, 2023). Ahora bien, estos mismos estudios sostienen que aquellos que se definen como emprendedores no se perciben a sí mismos como átomos, en tanto que sus vidas se sostienen en un encadenamiento de esfuerzos, apoyos y obligaciones familiares de variada configuración antes que en la visión abstracta del individuo calculador y racional. El desafío, entonces, es conocer cómo estas figuras que exaltan la acción emprendedora, una experiencia que también comparte Katy y cientos de personas de barrios populares, se mixturán con organizaciones comunitarias que también resultaron vitalizadas durante la pandemia. En tal sentido, años atrás, un trabajo pionero de Gago (2015) anticipaba estas tensiones cuando sugería que las economías populares combinan saberes comunitarios autogestivos con tecnologías de la auto-empresarialidad de masas en una

pragmática vitalista, que da lugar a ensambles heterogéneos vinculados con la pluralización de formas laborales (Gago, Cielo y Tassi, 2023). Economía barroca es la denominación que encuentra Gago (2015) para capturar las articulaciones entre formas comunitarias, tácticas populares de resolución de la vida y modalidades específicas de negociación de derechos. El conjunto de estas tensiones también se expresa en la asignación del valor de las personas, lo cual se fricciona a través de la categoría de dignidad.

Reflexión final: la (in) dignidad del pobre: éticas ordinarias y desafíos políticos

Las experiencias del trabajo en barrios populares y las tensiones de los escenarios políticos en los cuales se inscriben suelen expresarse a través de la categoría de (in)dignidad. Como sostienen distintos autores, la dignidad no es un concepto fijo sino un campo de batalla en torno a derechos y obligaciones que dan valor a la vida en contextos históricos, sociales y culturales determinados (Narotzky, 2015). Preocupados acerca de cómo se pueden formular narrativas políticas a través de categorías morales, algunos estudios señalan el papel de las éticas ordinarias, es decir, lejos de cualquier moralidad trascendente, atienden a juicios prácticos y sus vínculos con eventos en los cuales se ponen en conexión ámbitos cotidianos con programas políticos de largo alcance, que permiten resignificar experiencias del orden individual y privado como experiencias colectivas (Pérez, 2022). Narotzky (2015) agrega la noción de fricciones en torno a la dignidad cuando se definen asuntos acerca de quién la posee, cómo se expresa y cómo se reconoce, lo cual plantea un debate acerca del valor de las personas, las diferencias, las dependencias y las autonomías para la elaboración de proyectos de vida.

Los procesos de estigmatización hacia el mundo popular se han vigorizado desde la pandemia, reiterándose ciertas

narrativas ante cada evento de movilización que protagonizaron la Unión de Trabajadores de la Economía Popular y la Unidad Piquetera para confrontar el recorte del gasto social en un contexto de elevados índices de pobreza entre los años 2021 y 2023. Como se planteó previamente, se ha fraguado una construcción social y mediática que define a los sectores populares como seres carentes, brutos, holgazanes, calculadores, manipulados por líderes populistas, faltos de pensamiento y validos solamente por la fuerza de sus cuerpos. La pérdida de la cultura del trabajo, como si fuera un atributo esencial que se transmite por herencia, y su contracara, la dependencia absoluta de la asistencia del Estado, se esgrimen como explicación fundamental de la pobreza y la creciente desigualdad social. En este tipo de construcciones, el trabajo aparece como una actividad difusa pero que gana unicidad porque representa todo aquello que se opone a la asistencia estatal. Asimismo, se suele referir a un tipo de actividad que implica esfuerzo y sacrificio, cuyo símbolo predilecto es una herramienta de labor manual como la pala de cavar. De esta manera, toda alusión al trabajo queda sustraída de discusiones acerca de los cambios en sus formas, del nivel de ingresos y de la extensión de la pobreza entre ocupados y desocupados.

A lo largo de mi trabajo de campo he registrado de manera reiterada una expresión que refiere a la *dignidad del pobre*, particularmente cuando mis interlocutores afirman que al pobre le roban la dignidad, aluden a las experiencias profundas de desigualdad social pero también señalan la manera estereotipada desde la cual son vistos por “los otros”. Raúl se siente interpelado por esos esquemas que reducen la vida del pobre, especialmente cuando trabaja temporariamente en la carga y descarga de equipos de luces y sonido en espectáculos musicales. En tal sentido recuerda:

“Hay muchas pibas (...) que creen que uno, por ser carga y descarga, es el burro de carga y nos tienen

esquematzados. Hoy ser carga, en mi ámbito laboral, quiere decir que vos sos de la villa, del asentamiento, o sos analfabeto o sos borracho... todo, menos un tipo que piensa, ¿no? Un día, yo discutí con una piba, sabés lo que pasa, le dije, ustedes nos tienen esquematizados a nosotros. Vos crees que por el solo de hecho de ser carga yo soy borracho, analfabeto y villero. Y no. Yo puedo tener más cultura que vos” (R. Montes, comunicación personal, 15 diciembre de 2023).

Cuando expresan esta frase están denunciando, en distintos entornos colectivos y cotidianos, los profundos niveles de desigualdad social, como el mal funcionamiento de las infraestructuras que conlleva a la pérdida reiterada de sus bienes debido a fallas en el suministro eléctrico o a inundaciones por el desborde de arroyos. A la par, alertan sobre la falta de empleo asalariado y de dinero, la inestabilidad de las prestaciones sociales del Estado, la incerteza sobre la titularidad de sus terrenos, la peligrosidad de la economía de la droga, la precariedad de las viviendas y la escasez de alimentos adecuados, entre otras cuestiones.

Al denunciar sus condiciones de vida también lanzan sospechas sobre la intencionalidad de los actos de gobierno, tendientes, según sus perspectivas, a mantener a los pobres en un estado de indignidad. Así, cuando dan cuenta de la mala calidad de los bienes que se distribuyen mediante políticas públicas, como viviendas sociales o alimentos a punto de perecer, sostienen: “es como que te están degradando de arriba, para que vos sigas siendo menos en el futuro, no tengas lo que tengas que tener”, sentencia Carlos (C. Santillán, 15 de diciembre de 2023). “Juegan con nuestra necesidad”, agrega Susana (S. Torres, comunicación personal, 15 de diciembre de 2023).

Ahora bien, la reflexión sobre el robo de dignidad no se agota en la valoración del vínculo con otros sectores sociales o con el Estado, también pone en cuestionamiento a los

procesos políticos en los cuales se hallan envueltos de manera más horizontal y cercana. Puntualmente, se alude a las diversas filiaciones políticas, la competencia entre distintos movimientos sociales y la distancia que suelen establecer algunos liderazgos con relación a las experiencias de la vida cotidiana en los barrios populares. El cuestionamiento hacia los liderazgos ha sido especialmente intenso durante gobiernos progresistas cuando numerosos integrantes de este tipo de movimientos se suman a la estructura estatal como funcionarios o legisladores. Criticar el distanciamiento es especialmente relevante porque los vínculos próximos, como aquellos que se traman en espacios socio-comunitarios diariamente, son altamente valorados y su cultivo insume una buena parte de la labor de organizaciones y movimientos sociales populares, dando cuenta de una política de la contención, el cuidado y los afectos. Estar presentes en la vida cotidiana es participar, acompañar y sostener a las personas en acontecimientos claves para sus vidas: nacimientos, cumpleaños, hospitalizaciones y velorios, entre otros. Es ser parte activa de encuentros en los cuales se producen los reconocimientos mutuos y se favorecen los procesos de reconstitución subjetiva y corporal en orden de alcanzar cierto nivel de bienestar personal y comunitario.

Por eso mismo, el robo de la dignidad tiene como contracara necesaria la evaluación moral de todos aquellos procesos y actitudes que fortalecen la dignidad de la persona. De esta manera, la dignidad parecería encontrarse plegada en sus identidades íntimas, en la valoración de las luchas cotidianas para ganarse la vida, en los procesos pasados de auto-organización colectiva, en los conocimientos producidos a lo largo del tiempo y en las memorias compartidas, cuyas señales se encuentran en los territorios autoconstruidos y en figuras emblemáticas que animan al compromiso comunitario.

Como sostuvieron otros autores, la noción de dignidad expresa la lucha y la denuncia del incumplimiento de una red de derechos y obligaciones que dan valor a la vida en

un contexto determinado. A través de ella, se reclama reconocimiento y los términos de ese reconocimiento. Colocar el acento en la “indignidad del pobre” es también apuntar una crítica a los modos de desposesión en múltiple dimensiones: del histórico empleo asalariado, de recursos, de formas de vida urbana o de herramientas para actuar en política. Con relación a ello, la persistencia durante cuatro décadas de experiencias que dan cuenta de la pluralidad de formas de trabajo suele ser desvalorizada en tanto el trabajo asalariado, registrado y protegido, funciona no pocas veces como parte de un pasado idealizado y como horizonte de expectativas futuras. Las críticas encendidas contra las políticas públicas de redistribución social del ingreso conjuntamente con transformaciones en las modalidades de movilización popular, las cuales viraron del carácter antagónico a la rutinización y desactivación, intensifica la fragmentación de organizaciones populares y el desgaste de ciertas formas de sociabilidad que cimentaron la acción colectiva durante los últimos treinta años. De esta manera, un entramado comunitario vigoroso, vitalizado con la pandemia, proporciona diariamente la infraestructura colectiva básica para el despliegue de cualquier forma de emprendimiento, pero ese mismo entramado comienza a dislocarse del campo de fuerzas sociales establecido en las últimas décadas, quedando sujeto a las presiones de proyectos ultra-neoliberales que pregonan la radicalidad del mercado y la autonomía empresarial como forma privilegiada para reproducir socialmente la vida.

Bibliografía

- Arcidiácono, P. y Gamallo, G. (2022). El régimen nacional de asignaciones familiares (1983-2019): de las contingencias familiares al combate a la pobreza en Gamallo, G. (Comp.), *Alfonsín a Macri. Democracia y política social en Argentina (1983-2019)* (pp. 313-348). EUDEBA.

- Auyero, J. y Servián, S. (2023). *Cómo hacen los pobres para sobrevivir*. Siglo XXI.
- Balza, S; Sorroche, S y Fernández Álvarez, M. I. (2025). *Actualización de indicadores de la Economía Popular entre el 4to trimestre de 2023 y 2024 y entre el 3er trimestre de 2023 y 2024. Análisis de la población en función del género y edad*. Colección Apuntes de Economía Popular (8). CITRA, UMET. CONICET
- Carbonella, A. y Kasmir, S. (2015). Dispossession, disorganization and the anthropology of labor en Carrier, J. y Kalb, D. (Eds.). *Anthropologies of Class Power, Practice and Inequality* (pp. 41-53). Cambridge University Press.
- Caldeira, T. (2017). Peripheral urbanization: Autoconstruction, transversal logics, and politics in cities of the global South. *Environment and Planning D: Society and Space*, 35(1), 3-20.
- Donza, E. (2024). Escenario laboral: Persistencia de la heterogeneidad estructural en un contexto de reformas en *Deudas sociales en la Argentina del siglo XXI (2004-2024): Fin de ciclo y futuro abierto*. UCA.
- Fernández Álvarez, M. I. (2018). Más allá de la precariedad. Prácticas colectivas y subjetividades políticas desde la economía popular argentina. *Iconos. Revista de Ciencias Sociales*, (62), 21-38.
- Gago, V. (2015). *La razón neoliberal: economías barrocas y pragmática popular*. Tinta Limón y Traficantes de Sueños.
- Gago, V., Cielo, C. y Tassi, N. (2023). Mapear las economías populares como apuesta analítica y política latinoamericana en Gago, V., Cielo, C. y Tassi, N. (Eds.) *Economías populares. Una cartografía crítica latinoamericana* (pp. 11-51). CLACSO.
- Grassi, E. (2012). La política social y el trabajo en la Argentina contemporánea. Entre la novedad y la tradición. *Revista e-l@tina*, 10 (39), 5-33.
- Hopp, M. V. (2025). Trabajos para la vida. Reconocimiento económico de los cuidados comunitarios e igualdad de género en la economía popular en Argentina en Viales Hurtado, Ronny (Ed.). *Crisis y transformaciones del mundo laboral en América Latina y el Caribe: cambios institucionales, política social, género y resistencias* (pp. 199-233). CIHAC.

- Kasmir, S. y Narotzky, S. (2025). Simultaneous disruptions: forms of livelihood, fragmentation of classes, and social labor in the twenty-first century. *Dialectical Anthropology*, (49), 1–7.
- Kessler, G. y Vommaro, G. (2021). Introducción al dossier “Movilizaciones de la derecha en América Latina”. *Población & Sociedad*, 28 (2), 1-7.
- Lazar, S. (2023). *How we struggle. A political Anthropology of Labour*. Pluto Press.
- Maldován Bonelli, J. (2020). Trabajo y Economía Popular: categorías y supuestos en debate. *Revista institucional de la defensa pública*, 13-18.
- Manzano, V. (2013). *La política en movimiento. Movilizaciones colectivas y políticas estatales en la vida del Gran Buenos Aires*. Prohistoria Ediciones.
- Manzano, V. (2017). Dilemmas of trade unionism and the movement of the unemployed under neoliberal and progressive regimes in Argentina en Lazar, Sian (Ed.). *Where are the unions?. Workers and Social Movements in Latin America, The Middle East and Europe* (pp. 209-230). Zed Books.
- Manzano, V. (2020). Derechos y subjetividades en la producción colectiva del Gran Buenos Aires: sobre la política de la vida (digna). *Journal de Comunicación Social*, (10), 13-47.
- Manzano, V. y Barreto, L. (2025). Entretejidos de la vida comunitaria y relaciones de poder cambiantes: historicidades y desafíos en barrios populares del Gran Buenos Aires. *Revista Trabajo y Sociedad*, (44), 213-235.
- Moreno, L. y Wagener, M. (2023). Infraestructuras urbanas y formas de acción política en barrios populares del Gran Buenos Aires. *En Actas del III Encuentro Nacional de la Red Barrios Populares (ENRAP)*, Universidad Nacional de Tucumán.
- Narotzky, S. (2015). Economías ordinarias: valores escondidos. Otra antropología de la crisis desde el Sur de Europa. *Antrópica. Revista de Ciencias Sociales y Humanidades*, (1) 2, 67-76.
- Narotzky, S. y Besnier, N. (2014). Crisis, Value, and Hope: Rethinking the Economy. *Current Anthropology*, 9 (55), 4-16.
- Pacífico, F. y Stefanetti, C. (2025). Los trabajos de cuidado comunitario: demandas gremiales y agendas de organización colectiva. *Pulso Laboral*, (6), 1-10.

- Pérez, M. (2022). *The Right to Dignity: Housing struggles, city making and citizenship in urban Chile*. Stanford University Press.
- Pinedo, J. (2022). *Zona sur. Urdimbres de la acción colectiva popular en el Gran Buenos Aires (1974-1989)*. Universidad Nacional de La Plata, Universidad Nacional de Misiones, Universidad Nacional de General Sarmiento.
- Rosato, A. (2009). Introducción: El ‘hacer’ política: cotidianidad y delimitación del dominio político en Boivin, M., Heredia, B. y Rosato, A. (comps.). *Política, instituciones y gobierno: abordajes y perspectivas antropológicas sobre el hacer política* (pp. 7-21). Antropofagia.
- Semán, P. y Welschinger, N. (2023). Juventudes mejoristas y el mileísmo de masas. “Por qué el libertarismo las convoca y ellas responden” en Semán, P. (Cord.). *Está entre nosotros ¿De dónde sale y hasta dónde puede llegar la extrema derecha que no vimos venir* (pp. 163-202). Siglo XXI.
- Villarreal, J. (1985). *Los hilos sociales del poder*. Siglo XXI.

CAPÍTULO 11

Tecnologías desde abajo y economía popular: Plataformas híbridas en el transporte urbano de Quito, Ecuador

Daniel Vizuite Sandoval

Introducción

La expansión global de la economía de plataformas ha reconfigurado profundamente los modos de intermediación, organización y control del trabajo, transformando sectores tan diversos como el comercio minorista, la logística, la movilidad y los servicios personales. Este proceso, denominado plataformización, se basa en la capacidad de ciertas empresas para centralizar datos, coordinar trabajadores mediante algoritmos y captar rentas a través de infraestructuras digitales que se vuelven indispensables para la participación económica (Srnicek, 2018). En América Latina, la plataformización se inserta en un contexto marcado por desigualdades estructurales, mercados laborales altamente informales y Estados con limitadas capacidades regulatorias, lo que genera condiciones particularmente propicias para una expansión rápida y conflictiva de empresas como Uber, Cabify o Didi.

Como han señalado Woodcock y Graham (2020), estas plataformas no solo introducen nuevas formas de gestión del trabajo, sino que reconfiguran ecologías laborales completas, alterando relaciones sociales previas y desplazando actores tradicionales mediante estrategias agresivas de entrada y de “desobediencia estratégica” (ICIJ, 2022).

En la mayoría de los países de América Latina, la llegada de plataformas internacionales desde mediados de la década de 2010 fue irregular. En Ecuador, este proceso se superpuso con una estructura gremial históricamente consolidada en el sector del taxi legal, caracterizada por cooperativas, sindicatos y mecanismos propios de regulación comunitaria. Esto generó un conflicto inmediato que activó protestas nacionales, tensiones institucionales y presiones sobre un aparato estatal que, pese a su voluntad de control, carecía de herramientas jurídicas y tecnológicas para regular la operación algorítmica de empresas transnacionales. Esta situación revela una contradicción más amplia: mientras la modernidad digital ingresa a través de plataformas globales que explotan vacíos normativos, las formas locales de organización del trabajo deben adaptarse rápidamente para no quedar desplazadas por infraestructuras que concentran poder económico y cognitivo. En este escenario, la disputa por la legitimidad: quién puede transportar, bajo qué reglas y con qué tecnologías, se convierte en un eje central del conflicto, cruzado por dinámicas de informalidad, desconfianza ciudadana, reclamos por seguridad y demandas de “modernización” del transporte urbano.

A pesar de estas tensiones y del carácter profundamente asimétrico del ecosistema digital global, diversos actores populares en Ecuador comenzaron a impulsar iniciativas tecnológicas propias como respuesta tanto a la presión competitiva de las plataformas internacionales como a la necesidad de actualizar sus prácticas organizativas. Cooperativas, federaciones de taxis, startups locales y gobiernos locales desarrollaron aplicaciones digitales que operan con taxis legales, que no siguen al pie de

la letra el modelo de las empresas internacionales, sino que articulan infraestructuras digitales con valores cooperativos, territorialidad (Albornoz, et al., 2023) y formas de autogestión propias de la economía popular. Estas experiencias no pueden entenderse como simples réplicas, sino como configuraciones socio-técnicas híbridas, inscritas en las trayectorias históricas de la economía popular y sus modos de acción colectiva.

La literatura reciente muestra que las economías populares no son sectores marginales ni meramente informales, sino espacios heterogéneos de reproducción social, territorialidad y disputa política (Gago, Cielo y Gachet, 2018). En América Latina, estas economías constituyen infraestructuras vivas que permiten sostener la vida en contextos de crisis, desigualdad e inestabilidad laboral, operando “en el entre” de la formalidad e informalidad, del Estado y el mercado (Cielo, Gago y Tassi, 2023). Lejos de ser un residuo de precariedad, estas economías articulan redes territoriales, saberes colectivos y relaciones de cooperación que no desaparecen con la llegada de tecnologías digitales, sino que se recomponen con ellas. En esta clave, el surgimiento de plataformas híbridas en Ecuador puede ser leído como parte de una economía solidaria digital emergente (Albornoz, et al., 2025), donde las organizaciones del taxi reconfiguran sus estructuras históricas mediante la adopción de infraestructuras digitales externas. A diferencia de las plataformas cooperativas plenas, que requieren propiedad colectiva del software, algoritmos justos y gobernanza democrática (Scholz, 2016; Fuster Morell et al., 2021), estas plataformas locales operan en una zona ambigua que Grohmann (2023) denomina “tecnologías gestionadas por trabajadores desde abajo”.

En este sentido, este trabajo interpreta estas iniciativas como plataformas híbridas: sistemas sociotécnicos que combinan tecnologías externas: software, geolocalización, pago digital o arquitectura algorítmica, con marcos organizativos basados en reciprocidad, redes comunitarias y roles gremiales.

Para comprender esta articulación, se retoman dos enfoques centrales. Interpretar estas experiencias exige un marco que reconozca su creatividad y carácter contradictorio. Desde la perspectiva de Bolívar Echeverría (2000), las plataformas híbridas pueden comprenderse como expresiones del *ethos* barroco, una racionalidad que permite reconfigurar imposiciones externas, como la digitalización o los algoritmos, sin subsumirse completamente a ellas. De forma complementaria, la noción de hibridación de García Canclini (1990) ilumina cómo estas plataformas articulan tecnologías globales con lógicas organizativas locales, produciendo configuraciones socio-técnicas que desdibujan las fronteras entre lo tradicional y lo moderno, entre lo popular y lo corporativo.

Se analiza el surgimiento, características y tensiones de estas plataformas híbridas en Ecuador, interpretándolas como tecnologías desde abajo que combinan infraestructuras digitales con organización gremial, territorialidad y formas históricas de cooperación. Desde un enfoque cualitativo y teórico crítico, el texto argumenta que estas iniciativas no solo buscan competir con Uber, sino disputar sentidos de modernidad, legitimidad y soberanía tecnológica en condiciones periféricas. Lejos de constituir adaptaciones tardías o fracasos modernizadores, representan formas situadas, barrocas e híbridas de innovación socio-técnica dentro de la economía popular urbana (Vizúete-Sandoval, 2026).

Hacia una economía popular digital: claves teóricas para entender las plataformas híbridas

A diferencia del relato dominante que presenta a la plataformaización como un proceso lineal de modernización tecnológica, en Ecuador la digitalización del transporte urbano emerge en un campo marcado por la heterogeneidad organizativa, la precarización laboral y la centralidad de infraestructuras

comunitarias. En este escenario, las plataformas no irrumpen como innovaciones “puras”, sino como resultados contingentes de encuentros entre tecnologías externas y formas históricas de organización gremial (Cielo, Gago y Tassi, 2023), especialmente en el sector taxi. Este contexto obliga a desplazar el enfoque desde la tecnología en sí misma hacia las trayectorias sociales que permiten y condicionan su apropiación, retomando lecturas críticas sobre trabajo, territorio y acción colectiva en América Latina (Coraggio, 2020; Herrera, 2021).

Las plataformas híbridas desarrolladas por cooperativas y gremios del transporte en alianza con empresas tecnológicas (generalmente, locales) no pueden comprenderse únicamente desde las lógicas universales de la innovación tecnológica. Su emergencia está profundamente anclada en la condición periférica de las sociedades latinoamericanas, donde la modernidad nunca es un proceso lineal ni homogéneo, sino un campo de tensiones, traducciones y resignificaciones. Esta perspectiva encuentra un sustento teórico fundamental en el trabajo de Bolívar Echeverría, quien describe la modernidad latinoamericana como una modernidad barroca, caracterizada por la capacidad de las sociedades periféricas de reconfigurar imposiciones externas económicas, culturales o tecnológicas, sin subsumirse completamente a ellas (Echeverría, 1998; 2000).

Desde esta óptica, las plataformas híbridas no expresan un déficit de modernización, sino una forma barroca de habitar la tecnología: una racionalidad práctica que combina cálculo e improvisación, disciplina e informalidad, dependencia y autonomía relativa. Esta racionalidad permite a los colectivos populares adaptarse a infraestructuras globales, algoritmos, bases de datos, sistemas de geolocalización, sin renunciar a las estructuras de cooperación, reciprocidad y territorialidad que organizan su vida cotidiana (Cielo, Gago y Tassi, 2023). Lejos de representar una contradicción, esta convivencia es constitutiva de la modernidad periférica:

su fuerza radica precisamente en la capacidad de producir formas híbridas y no hegemónicas de modernización.

La noción de hibridación cultural propuesta por García Canclini (1990) contribuye a profundizar la lectura socio-técnica de estas experiencias. Para este autor, la modernidad en América Latina no opera por sustitución de lo tradicional por lo moderno, sino por la articulación tensional de prácticas, códigos y temporalidades diversas. Aplicado al ámbito tecnológico, ello implica que la digitalización no elimina las formas de organización previas, sino que se superpone a ellas, generando sistemas de coordinación donde el algoritmo convive con la asamblea gremial, la app con la radio troncal, el software externo con la identidad cooperativa. Estas plataformas no sustituyen a las organizaciones territoriales: las transforman parcialmente, al tiempo que son transformadas por ellas.

Las economías populares, descritas por Gago, Cielo y Gachet (2018) como ensamblajes abigarrados que operan “en el entre” de diversas lógicas económicas, constituyen un terreno privilegiado para observar este tipo de hibridaciones. En ellas no existen límites estrictos entre formalidad e informalidad, mercado y comunidad, regulación estatal y autogestión. Por ello, cuando adoptan tecnologías digitales, estas organizaciones no tienden a replicar modelos tecnológicos homogéneos, sino a ensayar aproximaciones situadas, adaptativas y frecuentemente contradictorias. Las plataformas híbridas expresan este carácter abigarrado: mezclan reglas corporativas con tradiciones cooperativas, prácticas de seguridad digital con redes comunitarias y dispositivos algorítmicos con negociaciones territoriales (Cielo, Gago y Tassi, 2023).

La lectura de Grohmann (2023) permite profundizar aún más esta interpretación. Según su propuesta, en el Sur Global emergen “tecnologías gestionadas por trabajadores desde abajo”, caracterizadas por la intersección entre dependencia tecnológica y agencia colectiva. Estas tecnologías no alcanzan la autonomía plena sobre el software, los datos

o los algoritmos, pero sí ejercen control sobre los procesos organizativos que les dan sentido. Así, las plataformas híbridas ecuatorianas gestionan parcialmente la digitalización sin apropiarse de todos sus soportes técnicos: controlan quién accede a la plataforma, cómo se organizan las flotas, qué reglas se aplican a los usuarios y cómo se negocian las alianzas con municipios y proveedores tecnológicos, aun cuando el código y los sistemas de datos permanezcan en manos externas. Esta agencia limitada, pero significativa, constituye una forma de resistencia sutil frente a la plataformización corporativa (Scholz, 2016; Grohmann, 2023).

La hibridación socio-técnica adquiere así una profundidad política: expresa formas de negociación de la modernidad digital desde las condiciones históricas de la economía popular urbana. La modernidad barroca de Echeverría se manifiesta en la capacidad de las cooperativas y gremios del taxi de reapropiarse parcialmente de tecnologías globales, incorporándolas a su repertorio organizativo sin reproducir por completo las lógicas extractivas o disciplinarias del capital digital. En lugar de un tránsito lineal hacia modelos corporativos o cooperativos, lo que emerge es un territorio intermedio, donde la digitalización se convierte en un recurso estratégico para enfrentar problemas urgentes como seguridad, legitimidad e ingresos, sin abandonar la densidad comunitaria que constituye la base histórica del sector.

Desde este enfoque, las plataformas híbridas son manifestaciones de una modernidad periférica que inventa soluciones desde sus propias contradicciones. No representan un estadio incompleto del cooperativismo digital ni una “versión degradada de Uber”, sino configuraciones barrocas y situadas de innovación tecnológica. Son el resultado de negociaciones continuas entre actores locales y dispositivos globales; entre lógicas comunitarias y sistemas algorítmicos; entre la necesidad de competir en mercados precarizados y el deseo de preservar formas de autogestión

parcial. Esta doble condición, lejos de ser un problema analítico, constituye la clave para comprender la especificidad de la digitalización en el transporte urbano ecuatoriano y su inscripción en una “economía digital emergente”.

Genealogía del taxismo: infraestructura popular, acción colectiva y disputas territoriales

La emergencia de plataformas híbridas en el transporte urbano ecuatoriano no puede entenderse sin reconstruir la trayectoria histórica del taxismo como actor popular, infraestructura territorial y sujeto político. A diferencia de la literatura que analiza el sector taxi únicamente como un gremio corporativo de defensa de rentas, su presencia en ciudades como Quito, Guayaquil o Cuenca debe leerse como una institución urbana consolidada, resultado de décadas de autoorganización laboral, negociación estatal y construcción de legitimidad social. El reconocimiento legal de las cooperativas como formas legítimas de organización económica y social consolidó su papel como interlocutores válidos frente al Estado. Este proceso institucional contribuyó a la promulgación de las primeras legislaciones integrales y al diseño de estructuras públicas destinadas a su regulación y supervisión. Tal es el caso de las cooperativas de taxi en Ecuador, que son el principal modo de organización de este tipo de transporte urbano en Ecuador.

El servicio que prestan los taxis constituye una parte fundamental del sistema de transporte, particularmente en ciudades como Quito. El taxismo, entendido como actividad económica y como organización gremial, ha evolucionado a lo largo de las últimas décadas en medio de transformaciones regulatorias, tecnológicas y sociales. Existen dos modalidades principales de operación: el taxi convencional y el taxi ejecutivo. El primero se caracteriza por su color amarillo, uso obligatorio de taxímetro y afiliación a cooperativas o compañías. El segundo, en cambio, opera

por reserva previa y generalmente sin taxímetro, aunque en ambos casos se exige contar con permisos habilitantes. Según el Plan Maestro de Movilidad Sostenible, el 12% de los viajes en la ciudad se realizan en taxis (Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, 2022). Esta participación es significativa en un contexto donde el transporte público no cubre eficientemente todas las necesidades.

Los taxistas han estado en tensión con las plataformas de transporte de pasajeros desde su llegada a América Latina, a través de la introducción de aplicaciones como Easy Taxi, Cabify y Uber a partir de 2010. En Ecuador, la introducción de plataformas de transporte inició con Easy Taxi (2012) y posteriormente con Uber (2016), Cabify (2017), InDriver y Didi. La llegada de estas plataformas generó conflictos con el gremio taxista (Samaniego Ponce, 2018), que históricamente ha tenido una fuerte capacidad de movilización y articulación gremial quienes han denunciado competencia desleal, informalidad y ausencia de regulación efectiva (Sáenz-Leandro, 2023). El conflicto ha ido escalando llegando a niveles pocas veces vistos.

Desde mediados del siglo XX, el sector absorbió mano de obra excedente y se convirtió en una alternativa económica estable en un mercado laboral caracterizado por informalización, crisis recurrentes y migración interna. La cooperativización reforzó estas dinámicas, institucionalizando mecanismos de afiliación, representación y reciprocidad que permitieron consolidar una arquitectura organizativa compleja (Herrera, 2021). Tal como sugieren Cielo, Gago y Tassi (2023), este tipo de organizaciones populares combinan subsistencia y acumulación, territorialidad e interacción estatal, en un orden abigarrado donde coexisten racionalidades diversas. El taxi ecuatoriano no es un bloque homogéneo: es un ecosistema con tensiones internas, disputas por cupos, diferencias entre taxis ejecutivos y convencionales, y relaciones ambivalentes con federaciones nacionales y municipales.

La irrupción de Uber y Cabify alteró abruptamente este equilibrio. Más que una competencia comercial, produjo un desplazamiento en los criterios de legitimidad: los usuarios comenzaron a priorizar trazabilidad, reputación digital, eficiencia algorítmica y seguridad percibida como elementos centrales en un contexto urbano de creciente violencia y criminalidad. La respuesta inicial del gremio fue la movilización. Aunque se reportaron protestas previas, en marzo de 2018 miles de taxistas se movilizaron en todo el país para exigir la salida de Uber y Cabify (France 24, 2018; SwissInfo, 2018). Jorge Tupuna, entonces presidente de la FedFedotaxis, denunció que las plataformas operaban fuera del marco legal y sin pagar impuestos, mientras los taxistas cumplían con las obligaciones normativas (Flor, 2018).

Como resultado, se instalaron mesas de trabajo entre el gremio y el Municipio de Quito. El entonces alcalde convocó un “debate ciudadano” para decidir si Uber y Cabify debían continuar operando (La República, 2018), pero debido a la proximidad de las elecciones locales esta iniciativa no pasó del plano discursivo. Otro acuerdo sí prosperó: el desarrollo de una aplicación municipal para competir con las plataformas corporativas. Así nació Chasqui, una app diseñada para conectar a usuarios con taxis formales registrados y operada desde el municipio (El Universo, 2019). Chasqui fue concebida para integrarse al marco normativo nacional y municipal, permitiendo operar únicamente a vehículos homologados y excluyendo a operadores informales (El Comercio, 2019).

La aplicación incorporó funciones de seguridad, como botón de pánico, seguimiento de ruta integradas a sistemas de monitoreo de la Agencia Metropolitana de Tránsito (Metro Ecuador, 2019). Su lanzamiento, ya en la siguiente administración municipal, fue presentado como una alternativa “robusta” y consensuada con el sector: “una plataforma digital acorde a la modernidad”, según el alcalde Jorge Yunda (Quito Informa, 2019). Sin embargo, la iniciativa

nunca logró implementarse plenamente, convirtiéndose en un caso más de autonomía disciplinada, en el sentido que Estima y Lemos (2025) plantean para describir proyectos sociotécnicos impulsados desde el Estado que no alcanzan agencia ni sostenibilidad organizativa.

Este ciclo frustrado de digitalización municipal alimentó el malestar gremial en un contexto marcado por protestas sociales de gran magnitud. En octubre de 2019, el sector del transporte fue el primero en paralizar actividades frente al Decreto Ejecutivo 883, que eliminaba subsidios a los combustibles. Aunque iniciaron bloqueos y exigieron la derogatoria del decreto, su participación fue efímera: tras negociaciones con el Ejecutivo, abandonaron el paro el 4 de octubre, dejando el liderazgo a las organizaciones indígenas (Le Quang, Chávez y Vizuite, 2020). En junio de 2022, en medio del deterioro de servicios públicos, el aumento del costo de vida y una percepción de inseguridad generalizada, el gremio volvió a participar, aunque de modo fragmentado, en las movilizaciones convocadas por la CONAIE (Chávez y Madrid Tamayo, 2022).

El gobierno nacional y los municipios alternaron, durante estos años, entre intentos de regulación, promesas de homologación de plataformas locales y omisiones normativas prolongadas. Como muestran Salazar Daza e Hidalgo Cordero (2020), esta ambivalencia produjo un escenario de regulación fallida, caracterizado por la coexistencia de formas legales e ilegales de prestación del servicio, la falta de controles efectivos y la ausencia de un marco institucional capaz de responder a la disrupción industrial introducida por las plataformas corporativas.

Es en este contexto turbulento donde el gremio del taxi recurrió a soluciones tecnológicas propias o adquiridas externamente. Siguiendo a Grohmann (2023), estas pueden entenderse como tecnologías gestionadas por trabajadores desde abajo: iniciativas que emergen no desde la lógica emprendedora del capitalismo digital, sino desde la necesidad

urgente de sostener ingresos, seguridad y legitimidad. La adopción de aplicaciones como Ktaxi, Fedotaxi, Digitaxi, Unitaxi o Clipp no implicó el abandono de prácticas comunitarias preexistentes. Más bien produjo procesos de hibridación socio-técnica (García Canclini, 1990), en los que radios troncalizadas, asambleas cooperativas y redes barriales de vigilancia se articularon con geolocalización, sistemas de registro y mecanismos algorítmicos de asignación de carreras.

Este ensamblaje confirma la vigencia del *ethos* barroco descrito por Echeverría (1998; 2000): las cooperativas adoptaron tecnologías globales de manera selectiva y estratégica, adaptándolas a su repertorio organizativo sin dejarse subsumir completamente por sus lógicas disciplinarias. La digitalización no sustituyó la estructura gremial; se superpuso a ella, generando una modernidad periférica híbrida y conflictiva. La genealogía del taxismo ecuatoriano revela que las plataformas híbridas no son meros artefactos tecnológicos ni respuestas técnicas a la competencia digital. Son el resultado de una historia densa de organización popular, conflicto político, crisis urbana y negociaciones multiescalares. Constituyen formas situadas de tecnología desde abajo, inscritas en redes cooperativas que buscan sostener la vida en un entorno de violencia, precariedad y regímenes regulatorios inestables.

Cartografía de las plataformas híbridas: ensamblajes digitales en la economía popular del taxi

El ecosistema de plataformas híbridas que ha surgido en el transporte urbano ecuatoriano desde mediados de la década de 2010 constituye un campo heterogéneo, fragmentado y profundamente situado. Estas iniciativas, entre ellas Ktaxi, Fedotaxi, Digitaxi, Unitaxi, Clipp, y la fallida plataforma municipal Chasqui, no pueden analizarse como variaciones menores del modelo corporativo de Uber ni como

experiencias consolidadas de cooperativismo digital. Su despliegue responde a condiciones específicas: crisis de legitimidad del taxi regulado, aumento de la violencia urbana, competencia con plataformas corporativas, presiones municipales por control y trazabilidad, y deseos gremiales de demostrar modernización sin renunciar a su identidad colectiva (Gago, Cielo y Gachet, 2018).

Las plataformas híbridas surgieron como respuesta a una larga trayectoria de movilización y negociación con el gobierno local y nacional que tiene como telón de fondo el avance de la digitalización y el recrudecimiento de una crisis de inseguridad y paulatino deterioro de los ingresos de la mayoría de la población. Así, los dirigentes gremiales del taxismo de Quito y Pichincha, han buscado alternativas para “dar soluciones” a los problemas de su gremio.

La teoría del *ethos* barroco de Echeverría (1998; 2000) permite comprender estas apropiaciones tecnológicas como formas latinoamericanas de modernidad periférica: lo digital no sustituye a las prácticas gremiales, sino que se injerta sobre ellas, generando soluciones contradictorias y creativas que negocian la subordinación al mercado sin abandonar racionalidades comunitarias y territoriales. De manera complementaria, la noción de hibridación de García Canclini (1990) muestra cómo estas plataformas mezclan elementos simbólicos, colores del gremio, radios, identidades cooperativas, con lenguajes tecnológicos como geolocalización y reconocimiento facial; combinan taxímetros y tarifas reguladas con algoritmos de asignación; y reconfiguran las relaciones con el Estado mediante nuevas capas de vigilancia, regulación y disputa. Para este autor, la hibridación no es un proceso armónico ni homogéneo, sino una negociación conflictiva entre elementos disímiles que coexisten en los sistemas culturales contemporáneos. Lejos de ser una mezcla “pura” o un estado transicional hacia una forma dominante, lo híbrido constituye una configuración cultural en sí misma, con características

relacionales, móviles y desestabilizadoras de los binarismos tradicionales (Canclini, 1990, pp. 228–290).

Lo híbrido, según el autor, no debe concebirse como una mezcla impura o un estadio inferior de civilización, sino como una forma contemporánea de producción cultural que desestabiliza los binarismos tradicionales entre lo moderno y lo tradicional, lo popular y lo culto, lo local y lo global (García Canclini, 1990, p. 290). Esta perspectiva relacional permite analizar cómo se construyen las culturas en movimiento, en interacción con flujos transnacionales de información, tecnología y poder. propone analizar la hibridación en tres dimensiones interrelacionadas: simbólica, económico-tecnológica y político-comunicacional. La hibridación simbólica y cultural se refiere a la rearticulación de significados, lenguajes, narrativas e identidades. Aquí, los consumidores y actores locales no son receptores pasivos de los productos globales, sino que los resignifican con recursos locales, generando nuevas prácticas culturales.

El eje central de estas plataformas radica en ofrecer un servicio legal, transparente y tecnológicamente competitivo. A diferencia de las plataformas internacionales, estas aplicaciones priorizan la formalización del transporte mediante la verificación previa de los conductores, el cumplimiento de normas locales y la incorporación de mecanismos de seguridad para usuarios y taxistas. Esta propuesta de valor se apoya en la confianza que otorga el respaldo institucional o gremial que muchas de estas plataformas poseen. En este escenario, se consolidó un ecosistema diverso y fragmentado de plataformas híbridas.

- Clipp, desarrollada por la startup Mobiltech en Loja, opera en más de 23 ciudades y seis países, articulando una lógica territorial con estrategias de expansión regional (Clipp, 2024; Vivar Espinoza, 2023).
- Fedotaxi App, promovida por la Federación Nacional de Operadoras de Transporte en Taxi, ofrece funciones

de seguridad como botón de pánico y rutas seguras, reforzando la legitimidad institucional mediante la homologación de la ANT (Fedotaxi, 2024).

- Ktaxi, pionera en el país y creada por Kradac, combina sencillez técnica, cobertura nacional y pagos mixtos; su integración reciente al ecosistema de Clipp muestra procesos de concentración tecnológica en clave local (Ktaxi, 2024).
- Unitaxi, aplicación de la Unión de Transporte en Taxi de Pichincha, orientada al mercado corporativo y homologada por la ANT, demuestra cómo el cooperativismo adopta lógicas empresariales sin disolverse completamente en ellas (Unitaxi, 2024).
- Digitaxi, vinculada al ECU 911, incorpora reconocimiento facial y botones de emergencia, evidenciando que la seguridad, más que la eficiencia de mercado, es un eje central de adopción tecnológica (Radio La Calle, 2022).

Es importante subrayar que estas plataformas no deben confundirse con el cooperativismo de plataforma descrito por Scholz (2016), Fuster Morell et al. (2021) y Grohmann (2023). En las plataformas cooperativas, los trabajadores o las comunidades poseen la infraestructura digital y controlan el diseño tecnológico, la gobernanza y los algoritmos. En cambio, en las plataformas híbridas ecuatorianas y latinoamericanas la tecnología suele ser provista por startups, empresas privadas o instituciones públicas. Esto genera una distancia entre gobernanza organizativa y soberanía tecnológica, produciendo formas de “subordinación digital”: los trabajadores usan plataformas que no comprenden ni controlan, limitando su potencial transformador (Grohmann, 2023).

Desde la perspectiva de la Economía Popular y Solidaria, estas plataformas encarnan tensiones entre la variante integracionista, que busca competir en mercados capitalistas con nichos propios, y la variante de coexistencia, donde

organizaciones populares intentan preservar principios de autogestión, equidad y territorialidad (Coraggio, 2011; 2020). Las plataformas híbridas navegan en esta zona intermedia: no son plenamente cooperativas ni plenamente comerciales, sino artefactos barrocos y periféricos, que combinan creatividad, dependencia y agencia.

Gobernar lo híbrido: soberanía tecnológica, economía popular digital y las tensiones de la modernidad periférica

Las plataformas híbridas surgieron como respuesta a una larga trayectoria de movilización y negociación con el gobierno local y nacional que tiene como telón de fondo el avance de la digitalización y el recrudecimiento de una crisis de inseguridad y paulatino deterioro de los ingresos de la mayoría de la población. El despliegue de plataformas híbridas en el transporte urbano ecuatoriano revela que la digitalización no es simplemente un proceso técnico, sino una arena de disputa política, económica y simbólica donde convergen actores estatales, gremiales, empresariales y comunitarios. La gobernanza de estas plataformas se encuentra atravesada por múltiples tensiones: entre regulación y omisión, entre soberanía y dependencia, entre formalización y exclusión, y entre las promesas de modernización y las condiciones estructurales de precariedad que caracterizan a la mayoría de trabajadores del sector.

La coexistencia de ordenanzas municipales fragmentadas, reglas de homologación incompletas y ausencia de un marco nacional claro genera que lo legal e ilegal coexistan sin que ninguna autoridad logre imponer un modelo de ordenamiento estable. Esta ambivalencia normativa no solo afecta la operación de las plataformas, sino que alimenta la incertidumbre gremial, inhibe inversiones tecnológicas sostenidas y refuerza la fragmentación organizativa que caracteriza a la economía popular del transporte.

En este contexto, la cuestión de la soberanía tecnológica se vuelve central. Aunque estas plataformas son impulsadas desde organizaciones locales, rara vez controlan la infraestructura digital que utilizan. La dependencia de proveedores externos, como startups, empresas privadas o programas municipales con débil capacidad institucional, genera una brecha estructural entre autonomía discursiva y control real de la tecnología (Grohmann, 2023; Scholz, 2016). Esta subordinación digital reproduce patrones históricos de vulnerabilidad tecnológica en América Latina, donde las innovaciones importadas suelen ser adoptadas sin control sobre los algoritmos, los datos o el mantenimiento del software. Como señala Echeverría (2000), esta situación expresa el carácter barroco de la modernidad periférica: formas de apropiación que habilitan agencia situacional, pero que continúan operando bajo estructuras globales de dependencia.

Sin embargo, interpretar estas plataformas únicamente como expresiones deficitarias sería limitar su análisis. A pesar de sus limitaciones, las organizaciones del taxi han logrado construir formas parciales de soberanía, apoyadas en prácticas territoriales, redes asociativas y mecanismos comunitarios de regulación (Herrera, 2021; Coraggio, 2011). Estas prácticas funcionan como contrapesos frente a la lógica concentradora de las plataformas corporativas y permiten disputar sentidos de legitimidad y modernidad en la movilidad urbana (García Canelini, 1990; Grohmann, 2023). En términos de Coraggio (2011; 2020), estas plataformas encarnan tensiones entre la variante integracionista, que busca competir en el mercado sin abandonar principios solidarios y la variante de coexistencia, orientada a construir espacios económicos diferenciados regidos por la autogestión, la reciprocidad y el control comunitario.

Asimismo, la gobernanza de estas infraestructuras híbridas transforma la relación entre el taxi y el Estado. Los intentos de homologar aplicaciones, integrar herramientas a sistemas

de vigilancia como el ECU 911 o construir plataformas públicas como Chasqui revelan procesos de municipalización del control digital (Metro Ecuador, 2019). Sin embargo, las capacidades institucionales son desiguales y frecuentemente discontinuas: proyectos tecnológicos dependen de coyunturas políticas, presupuestos limitados y equipos técnicos inestables (Estima y Lemos, 2025; Quito Informa, 2019). Esto lleva a un mosaico de iniciativas descoordinadas que dependen de alianzas frágiles entre municipios, empresas de software y gremios, reforzando la condición híbrida y abigarrada de este ecosistema (Cielo, Gago y Tassi, 2023).

Frente a este escenario, la economía digital no aparece como un ideal acabado, sino como un campo de experimentación socio-técnica. Sus limitaciones como dependencia tecnológica, fragmentación organizativa, desigualdad económica o precariedad laboral coexisten con una potencia transformadora basada en su capacidad para generar soluciones tecnológicas situadas y sostenidas por prácticas colectivas (Grohmann, 2023). Las plataformas híbridas no reproducen la promesa del cooperativismo digital pleno, pero sí abren fisuras en la hegemonía de las plataformas globales y permiten imaginar futuros donde la digitalización no esté subordinada exclusivamente al capital transnacional (Scholz, 2016; Fuster Morell et al., 2021).

La pregunta clave, entonces, no es si estas plataformas son un modelo alternativo competitivo, sino qué tipo de modernidad digital periférica están produciendo. Si, como señala García Canclini (1990), la hibridación desestabiliza las dicotomías entre lo tradicional y lo moderno, lo popular y lo tecnocrático, lo local y lo global, las plataformas híbridas encarnan precisamente esa condición. Son tecnologías que combinan subordinación y resistencia, fragmentación y creatividad, dependencia y agencia, evidenciando la persistencia de racionalidades populares que rehúsan desaparecer ante los dispositivos digitales (Echeverría, 1998; Gago, Cielo y Gachet, 2018).

Más que evaluar estas iniciativas por su “éxito” técnico o su capacidad de competir con Uber o DiDi, conviene leerlas como manifestaciones de la disputa por el sentido de la digitalización en América Latina. En este terreno, las plataformas híbridas del taxi ecuatoriano muestran que actores históricamente marginales, como las cooperativas de transporte, pueden intervenir en los procesos de innovación, reorganizar infraestructuras y producir formas incipientes de soberanía tecnológica (Coraggio, 2020; Grohmann, 2023). Son, entonces, tecnologías desde abajo, expresiones barrocas de una economía popular digital en movimiento, que revela tanto los límites estructurales de la región como su extraordinaria capacidad para ensayar, recombinar y disputar los imaginarios del futuro urbano.

Bibliografía

- Albornoz, M. B., Chavez, H., Vizuete, D., Graham, M., & Bertolini, A. (2023). *Fairwork Ecuador ratings 2022/2023: Platform hybrid models*. Fairwork. <https://fair.work/en/fw/publications/fairwork-ecuador-ratings-2022-23-platform-hybrid-models/>
- Albornoz, M. B., Vizuete, D., Gualavisí, A., Grohmann, R., Bertolini, A., & Valente, J. (2025). *Solidarity Platform Cooperativism in Latin America Report*. FLACSO Ecuador.
- Chávez, N., & Madrid Tamayo, A. (2022). Acciones políticas colectivas en el Ecuador: ¿Cómo se vivieron los 18 días de movilizaciones en junio de 2022 en Ecuador? *Revista Ciencias Sociales*, 1(44), 195–213. <https://doi.org/10.29166/csociales.v1i44.4189>
- Cielo, C., Gago, V., & Tassi, N. (2023). Introducción: Mapear las economías populares como apuesta analítica y política latinoamericana. En V. Gago, C. Cielo, & N. Tassi (Comps.), *Economías populares: Una cartografía crítica latinoamericana* (pp. 11-51). CLACSO.
- Clipp. (2024). *Clipp* (versión 4.62.818) [Aplicación móvil]. Clipp Mobility – Kradac. <https://clipp.app>

- Coraggio, J. L. (2011). *Economía social y solidaria: El trabajo antes que el capital*. Abya-Yala.
- Coraggio, J. L. (2020). Economía social y economía del trabajo: Conceptos básicos. *Ecuador Debate*, (111), 97-107. <http://repositorio.flacsoandes.edu.ec/handle/10469/17463>
- Echeverría, B. (1998). *La modernidad de lo barroco*. Ediciones Era.
- Coraggio, J. L. (2000). *Valor de uso y utopía*. Siglo XXI editores.
- El Comercio. (16 de diciembre de 2019). *El Municipio de Quito lanzó la plataforma tecnológica Chasqui, para que taxistas formales compitan con Uber y Cabify*. <https://www.elcomercio.com/actualidad/taxis-quito-plataforma-tecnologica-chasqui/>
- El Universo. (16 de diciembre de 2019). *Chasqui, una app que servirá para pedir un taxi en Quito*. <https://www.eluniverso.com/noticias/2019/12/16/nota/7648451/chasqui-app-que-servira-pedir-taxi-quito>
- Estima, W., y Lemos, A. (2025). Disciplined autonomy: A failed platform-cooperativism initiative in Brazil. *Platforms & Society*, 2, 1-13. <https://doi.org/10.1177/29768624241307318>
- Fedotaxi. (2024). *Federación Nacional de Operadoras de Transporte en Taxi del Ecuador*. <https://www.fedotaxi.com>
- Flor, M. F. (30 de marzo de 2018). Ecuador: autoridades estatales respaldan a taxis frente a Uber y Cabify. *PanAm Post*. <https://panampost.com/mamela-fiallo/2018/03/30/ecuador-taxi-versus-uber-y-cabify/>
- Fuster Morell, M., Espelt, R., y Renau Cano, M. (2021). Cooperativismo de plataforma: Análisis de las cualidades democráticas del cooperativismo como alternativa económica en entornos digitales. *CIRIEC-España, Revista de Economía Pública, Social y Cooperativa*, (102), 5-31.
- France 24. (27 de marzo de 2018). *Taxistas de Ecuador protestan contra Uber y Cabify*. <https://www.france24.com/es/20180327-taxistas-de-ecuador-protestan-contra-uber-y-cabify>
- Gago, V., Cielo, C., y Gachet, F. (2018). Presentación del dossier. Economía popular: entre la informalidad y la reproducción ampliada. *Íconos - Revista de Ciencias Sociales*, (62), 11-20.
- García Canelini, N. (1990). *Culturas híbridas: Estrategias para entrar y salir de la modernidad*. Grijalbo.

- Grohmann, R. (2023). Not just platform, nor cooperatives: worker-owned technologies from below. *Communication, Culture & Critique*, 16(4), 274–282. <https://doi.org/10.1093/ccc/tcad036>
- Herrera, M. (2021). *Economía popular y solidaria: ¿Una utopía?*. Universidad Andina Simón Bolívar.
- ICIJ. (2022). How Uber won access to world leaders, deceived investigators and exploited violence against its drivers in battle for global dominance. *ICIJ*. <https://www.icij.org/investigations/uber-files/uber-global-rise-lobbying-violence-technology/>
- Ktaxi. (2024). *Ktaxi* (versión 4.62.818) [Aplicación móvil]. Kradac Cía. Ltda. <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kradac.ktaxi>
- La República. (30 de noviembre de 2018). *Rodas invita a debate ciudadano sobre el uso de Uber y Cabify*. <https://www.larepublica.ec/blog/2018/11/30/rodas-invita-a-debate-ciudadano-sobre-el-uso-de-uber-y-cabify/>
- Le Quang, M., Chávez, N., & Vizuite, D. (2020). El octubre plebeyo: Cronología de doce días de movilización social. En F. Ramírez Gallegos (Ed.), *Octubre y el derecho a la resistencia. Revuelta popular y neoliberalismo autoritario en Ecuador* (pp. 53–84). CLACSO. <https://doi.org/10.2307/j.ctv1gm037d.5>
- Metro Ecuador. (2019). *Chasqui, la nueva app para los taxistas de Quito que competirá con Uber y Cabify*. <https://www.metroecuador.com.ec/ec/noticias/2019/12/17/chasqui-la-nueva-app-para-los-taxistas-de-quito-que-competira-con-uber-y-cabify.html>
- Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. (2022). *Plan Maestro de Movilidad Sostenible 2022–2042*.
- Quito Informa. (16 de diciembre de 2019). *Chasqui: plataforma tecnológica ultramoderna para el servicio de taxi*. <https://www.quitoinforma.gob.ec/2019/12/16/chasqui-plataforma-tecnologica-ultramoderna-para-el-servicio-de-taxi/>
- Radio La Calle. (2022). *Digitaxi: una aplicación de transporte vinculada al ECU 911*. <https://radiolacalle.com/digitaxi-una-aplicacion-de-transporte-vinculada-al-ecu-911>
- Sáenz-Leandro, R. (2023). Platforms, politics, and policy change: Framing a governance approach to TNCs in the gig economy. *RIPS: Revista de Investigaciones Políticas y Sociológicas*, 22(2). <https://doi.org/10.15304/rips.22.1.9463>

- Salazar Daza, C., y Hidalgo Cordero, K. (2020). A modo de introducción. En K. Hidalgo Cordero & C. Salazar Daza (Eds.), *Precarización laboral en plataformas digitales: Una lectura desde América Latina* (pp. 15–22). Friedrich-Ebert-Stiftung Ecuador.
- Samaniego Ponce, P. (2018). Bañados de amarillo. *Revista Interuniversitaria de Estudios Urbanos de Ecuador*, (2), 65-70.
- Scholz, T. (2016). *Platform cooperativism: Challenging the corporate sharing economy*. Rosa Luxemburg Stiftung.
- Scholz, T. (2023). *Own this! How platform cooperatives help workers build a democratic internet*. Verso Books.
- Srnicek, N. (2018). *Capitalismo de plataforma*. Caja Negra.
- SwissInfo. (26 de marzo de 2018). *Taxistas de Ecuador protestan contra Uber y Cabify*. <https://www.swissinfo.ch/spa/taxistas-de-ecuador-protestan-contra-uber-y-cabify/44002490>
- Unitaxi. (2024). *Unitaxi*. <https://unitaxi.ec>
- Vivar Espinoza, E. (22 de agosto de 2024). La app de movilidad lojana que conquistó 23 ciudades de seis países. *Forbes Ecuador*. <https://www.forbes.com.ec/negocios/la-app-movilidad-lojana-conquisto-23-ciudades-seis-paises-n58001>
- Vizuite-Sandoval, D. (2026). Beyond Uber, beyond the taxi: Emergence of hybrid platforms in ride-hailing sector in Ecuador. En R. Grohmann, M. B. Albornoz & A. Bertolini (Eds.), *Digital Solidarity Economy in Latin America* (1. ed., Vol. 1). Bristol University Press and Policy.
- Woodcock, J., & Graham, M. (2020). *The gig economy: A critical introduction*. Polity Press.
- Zuckerfeld, M., & Yansen, G. (2021). Plataformas. Una introducción: La cosa, el caos, humanos y flujos. *Redes: Revista de Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología*, 27(53), 1-25. <https://doi.org/10.48160/18517072re53.167>

CAPÍTULO 12

Redes de cuidado comunitario y resiliencia en entornos de cohesión social fragmentada. Mujeres y comercio barrial en comunidades urbanas de El Salvador

Emilia Gallegos Mejía

Introducción

La insuficiencia crónica de servicios públicos se ha visto agravada por la violencia urbana que inhibió la cooperación extrafamiliar con espacios comunitarios, bloqueados por actores criminales que interrumpieron los circuitos relacionales. El hogar ha sido la última unidad de contención, absorbiendo las insuficiencias de un sistema económico y social que externaliza sus costos en las familias, específicamente, en las mujeres.

La imperiosa necesidad de conciliar las responsabilidades domésticas con la generación de ingresos desplaza a las mujeres hacia una modalidad de trabajo híbrido donde lo remunerado y lo no remunerado se superponen en una conciliación forzada. De manera incipiente, hay arreglos

comunitarios que operan como mecanismos concretos de gestión del riesgo y compensación material.

El problema que aborda este capítulo reside en descifrar el código operativo de este sistema de cuidado en El Salvador que, pese a su carácter inequitativo, constituye la infraestructura real que sostiene la vida, sobre la base de estas preguntas: ¿Cómo se activan, regulan y sancionan en la práctica cotidiana estos circuitos de cuidado? ¿Qué reglas no escritas y mecanismos de sanción social (como el retiro del apoyo o el veto moral) aseguran su cumplimiento y perpetúan su lógica desigual? ¿En qué puntos de su arquitectura interna se abre la posibilidad de una reorganización hacia un sistema más equitativo?

Se trata, en esencia, de un problema de imaginación sociológica: para transformar el cuidado, primero hay que ser capaces de ver claramente el sistema existente. Comprender su lógica no es un ejercicio académico, sino el prerrequisito para cualquier intervención que no colapse la delicada infraestructura que impide que la vida se desplome.

El estudio de caso que se aborda en este capítulo es el de la organización del cuidado en Las Margaritas a través de sus circuitos, reglas y economías internas, para comprender los fundamentos de su arquitectura social y desentrañar las condiciones necesarias para su transformación hacia un sistema equitativo y se pone el énfasis en la caracterización de la organización del cuidado identificando sus lógicas internas, actores clave y mecanismos de regulación, en el examen de las reglas no escritas y los dispositivos de sanción social que sostienen y reproducen esta organización con especial atención a los umbrales de riesgo moral y las normas de género que restringen la circulación del cuidado y, finalmente, en la identificación de los puntos de fricción y las contradicciones internas del sistema actual donde emerge el potencial para su reorganización, considerando las dinámicas intergeneracionales, los costos corporales y las economías ocultas que lo sostienen.

Marco teórico y metodología

La Urbanización Las Margaritas (Soyapango) como caso único devela los circuitos operativos del cuidado, sus reglas no escritas y economías internas a través del marco de Análisis y Desarrollo Institucional de Ostrom (2005). Este distingue niveles analíticos anidados: macro (generación de normas), meso (instituciones que refuerzan la aplicación de las reglas) y micro (prácticas cotidianas). El cuidado se conceptualiza como un *common-pool resource* y se plantea que su agotamiento amenaza la reproducción social.

A nivel meso, junto con el mercado de trabajo, se integra el concepto de la Eficacia Colectiva (Sampson et al., 1997) para explicar cómo la capacidad de control social configura el entorno del cuidado. En territorios como Las Margaritas, esta eficacia es desafiada por la fragmentación de redes sociales generada por el delito (Salingaros, 1998, 70), debilitando el cuidado comunitario.

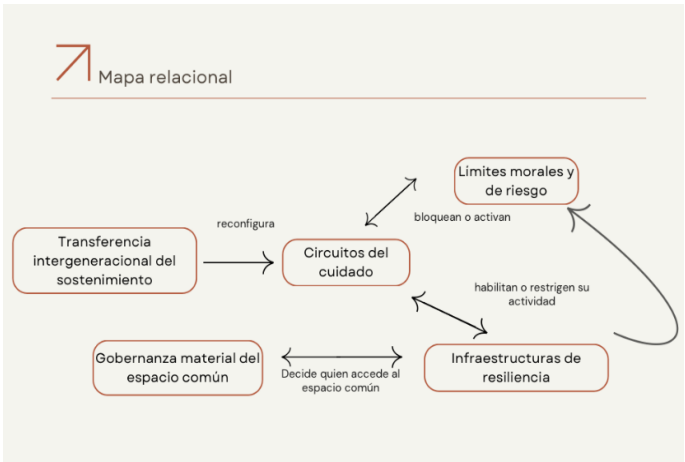
El concepto de “Paternidad Tradicional” (Ortega Hegg et al., 2005), que analiza los roles masculinos de Proveedor/No Cuidador como reglas de elección de género, complementa las prácticas comunitarias femeninas donde la precariedad de la informalidad bloquea la transición hacia paternidades corresponsables, naturalizando el mandato del proveedor como única forma de cuidado. Esta triangulación conceptual entre Ostrom, Sampson y Ortega Hegg permite capturar la especificidad del cuidado como problema de acción colectiva en contextos de violencia urbana.

Los Circuitos de Cuidado (Araujo Guimarães, 2019) materializan a nivel operativo las prácticas, mediante la intersección de significados, actores, interacciones y recompensas. La identificación de las “Reglas de Elección Operativas” de Ostrom (2005) se fundamentó en las interacciones del grupo focal y el contraste entre casos. El “Veto Moral” y la “Regla de Control Corporal y Temporal” emergieron de discusiones

explícitas; la “Regla de la Obligación Femenina” fue un patrón recurrente; y la “Regla del Parentesco y Reciprocidad” se infirió del contraste en trayectorias y acceso al ocio entre las participantes (ej. el diferencial acceso al ocio entre mujeres con apoyo del linaje versus aquellas sin él).

Figura 12.1

Mapa relacional de las categorías utilizadas en la codificación



Nota. Elaboración propia.

El estudio adopta un diseño mixto y situado, articulando: 1) un análisis nacional que cuantifica las dimensiones estructurales del cuidado basándose en las EHPM 2022-2024, ENUT 2017-2022, Censo 2024), y 2) un enfoque etnográfico comunitario en Las Margaritas, que reconstruye las prácticas de cuidado mediante observación participante, entrevistas semiestructuradas, grupo focal y revisión documental. Todo bajo estrictos protocolos éticos. Esta integración metodológica permite capturar tanto la arquitectura estructural de la desigualdad como la gramática institucional informal que gobierna los circuitos de cuidado en la vida cotidiana.

El primer nivel de análisis presenta la arquitectura nacional de la desigualdad, descifrando las reglas macro y meso que externalizan el costo del cuidado sobre las mujeres. El segundo examina las prácticas del cuidado en Las Margaritas, donde las reglas estructurales se traducen en circuitos operativos de resiliencia doméstica.

Resultados nacionales: la arquitectura de la desigualdad

En el nivel macro, la reconfiguración demográfica y la regla de reproducción intergeneracional establecen las restricciones estructurales de la situación de acción del cuidado y el meso es un multiplicador de desventajas a través de instituciones como el mercado laboral y la imposición de reglas por parte de actores no estatales. Ambos niveles se articulan con la organización económica para institucionalizar una “desventaja acumulativa a lo largo del ciclo vital” descrita por el Banco Mundial (2024).

Nivel macro: las fuentes de las reglas

La evolución demográfica de El Salvador (2022-2024) está redefiniendo la geografía del cuidado nacional. La cohorte de niños entre 0 y 4 años disminuyó de 431.530 a 393.159 entre 2022 y 2024 (EHPM), indicando el tránsito definitivo hacia la segunda ola poblacional: la de la adultez joven hasta 2043, sin embargo, hay una disminución de la población masculina entre 20- 29 años atribuible a la migración y el Régimen de Excepción. Además, el envejecimiento poblacional se consolida con un aumento del 38,1% en hogares que incluyen adultos mayores entre 2000 y 2021, alcanzando el 35,4% del total (MINDEL y UNFPA, 2023, 77).

Adicionalmente, el modelo familiar nuclear biparental está en declive: hay un aumento acelerado de los hogares monoparentales con jefatura femenina, cuyo crecimiento duplicó la reducción de la población masculina en el mismo

período (EHPM, 2022-2024). Estos hogares presentan una mayor incidencia de miembros mayores de 60 años (42,0% frente al 31,1% en hogares con jefatura masculina). De forma crucial, el 34,5% de los hogares con jefaturas de 60 años o más asumen una doble demanda de cuidado, atendiendo tanto a las generaciones salientes (adultos mayores) como a las entrantes (de 0 a 14 años) (MINDEL y UNFPA, 2023, 79).

Este nuevo panorama demográfico se convierte en una fuente de reglas, al forzar a los hogares a generar arreglos informales y autoorganizados de cuidado.

La regla de reproducción intergeneracional: el circuito que institucionaliza la desventaja

La Regla de Reproducción Intergeneracional se manifiesta a través de dinámicas entrelazadas que garantizan la transmisión intergeneracional de la pobreza. Las mujeres enfrentan una desventaja acumulativa durante sus años productivos y reproductivos, donde la carga de cuidados no remunerados limita su acceso al trabajo. Esta penalización se intensifica en los embarazos de adolescentes en contextos de pobreza.

Por otra parte, opera una transmisión dual del capital humano y la precariedad en la que viven niños y adolescentes. Una cobertura educativa de apenas 5% para niños de 0–4 años representa la pérdida de la ventana crítica de desarrollo, y el 42% de niños y adolescentes en pobreza enfrentan inseguridad alimentaria y reducción escolar (Banco Mundial, 2024), pues los choques económicos fuerzan estrategias de supervivencia negativas que impactan permanentemente el desarrollo de la niñez y adolescencia.

Esta regla estructural instituye así un circuito autopertuante, donde la vulnerabilidad económica de las madres y los déficits de inversión en capital humano infantil se refuerzan mutuamente, institucionalizando la desventaja en generaciones sucesivas.

La no-operación del derecho: la disyunción constitucional como regla macroeconómica

La arquitectura de la desigualdad se consolida mediante una regla de no-operación del derecho constitucional (reglas formales). Este fenómeno representa la disyunción crítica entre las reglas formales y las reglas en uso que estructura el sistema de cuidados. La dimensión de esta disyunción queda evidenciada con los Centros de Atención a la Primera Infancia (CAPI). Pese a que el artículo 42 de la Constitución (1983) establece esta obligación, desde el texto de 1950, fue necesaria una sentencia de la Sala de lo Constitucional en 2017 declarando la inconstitucionalidad por omisión para iniciar un proceso legislativo.

Hubo constantes prórrogas legislativas, cinco desde 2020, y plazos ampliados recurrentemente (Portillo, 2023). A ocho años de dicha sentencia, la implementación evidencia la no-operación sistemática del derecho: a inicios del 2025, de 262 distritos, 254 carecían completamente de CAPIs autorizados, con solo 32 centros a nivel nacional concentrados en dos departamentos (Portillo y Aguilar, 2025). Este incumplimiento del marco constitucional se proyecta sobre las políticas públicas de cuidado. Los esfuerzos por posicionar el cuidado en la agenda pública salvadoreña han culminado en instrumentos como la Política Nacional de Corresponsabilidad de los Cuidados (GOES, 2022), que reconoce formalmente el cuidado como derecho humano y postula la corresponsabilidad, pero carece de implementación relevante.

Estos servicios de cuidado que dependen de la condición de trabajador formal implican un dualismo institucionalizado que segrega el acceso a derechos por tipo de empleo, mientras los requisitos de certificación se vuelven en barreras a la oferta del servicio público. Desde la protección no contributiva, el enfoque ha sido predominantemente compensatorio, canalizado a través del Subsistema

de Protección Social Universal (GOES, 2014), el cual es insuficiente y deja intactos los mecanismos que generan la distribución inequitativa del tiempo y los recursos.

Este desfase entre regulación y servicios se manifiesta en tres dimensiones críticas. En primer lugar, el financiamiento público insuficiente y la limitada capacidad fiscal condenan a las políticas públicas a la irrelevancia práctica, manteniendo al cuidado como obligación femenina no remunerada (BCIE, 2020; GIZ-CEPAL, 2015). Además, el riesgo de reforzar el rol de las mujeres como cuidadoras primarias si la atención a las poblaciones dependientes no resuelve el problema del trabajo no remunerado de los cuidados (GOES, 2022). Finalmente, la precarización del trabajo de cuidado remunerado, especialmente en el servicio doméstico (Banco Mundial, 2024), que reproduce desigualdades entre mujeres donde las de mayores ingresos externalizan el cuidado contratando a otras en condiciones de explotación.

La no-operación del derecho a servicios de cuidado para todas las personas trabajadoras, sin importar el tipo de empleo, es la fuente de todas las reglas que operacionalizan la conciliación de ingresos-cuidados como un problema privado y no público.

Nivel de elección colectiva (meso).

La doble gobernanza del cuidado: mercado y orden criminal

El nivel meso invoca, monitorea y aplica el cumplimiento de las reglas que afectan los circuitos de cuidado. Es el ámbito de mercados, instituciones y las normas. En El Salvador, este nivel está determinado por una doble estructura de gobernanza: por un lado, la división sexual del trabajo que penaliza estructuralmente a las mujeres en el mercado laboral; y por otro, el legado de un orden criminal que redefinió coercitivamente las reglas de supervivencia comunitaria.

La regla principal del mercado de trabajo: la división sexual del trabajo y su materialización en el tiempo

La división sexual del trabajo (DST) se consolida como la regla fundamental en el nivel meso, instituyendo que la responsabilidad del cuidado recaiga en las mujeres. El mecanismo central de esta sanción es la asignación desigual del tiempo de cuidado, principal restricción para la autonomía económica femenina. Las Encuestas de Uso del Tiempo (ENUT 2017, 2022) documentan la materialización de esta regla. Los datos revelan no solo una carga desproporcionada, sino su intensificación del trabajo no remunerado en los hogares (trabajo doméstico y cuidados). El tiempo semanal dedicado al cuidado pasó de 18,6 a 44,3 horas semanales en mujeres y de 9,7 a 26,3 horas semanales en hombres. El incremento afecta a ambos sexos, pero el volumen adicional absorbido por las mujeres es mayor.

La brecha absoluta de cuidado, diferencia en horas semanales entre mujeres y hombres, se duplicó: de 8,9 a 18,1 horas. La brecha relativa de cuidado, cuántas veces más cuidan las mujeres respecto de los hombres, pasó de 1,9 a 1,7. La reducción de la brecha relativa no responde a una caída del tiempo femenino, sino al aumento del tiempo masculino. Hay hombres cuidando más, pero el incremento no compensó el aumento total de la demanda de cuidado, que siguió siendo absorbida principalmente por mujeres.

Esta carga se distribuye de manera heterogénea, operando con mayor intensidad en los tramos de cuidado más demandantes. En la atención a niños de 0-6 años (ver tabla 12.2), las mujeres destinan 18,6 horas semanales versus 10,0 horas semanales de los hombres, una brecha de 8,6 horas semanales que evidencia la feminización del cuidado intensivo.

Los datos de la ENUT (2022) revelan que la carga de trabajo no remunerado no se distribuye homogéneamente a lo largo del ciclo vital. La penalización temporal alcanza su punto máximo entre las mujeres de 30 a 39 años, quienes

Tabla 12.1

Evolución del tiempo semanal de cuidado no remunerado (personas de 12+ años)

Indicador	2017	2022	Variación
Horas semanales — mujeres	18,6 h	44,3 h	+138,7%
Horas semanales — hombres	9,7 h	26,3 h	+171,5%
Brecha absoluta (m–h)	8,9 h	18,1 h	+103%
Brecha relativa (m/h)	1,9×	1,7×	↓ moderada
Participación en cuidado — mujeres	93,7%	92,0%	–1,7 p.p.
Participación en cuidado — hombres	75,3%	78,8%	+3,5 p.p.

Nota. ENUT (2017, 2022).

Tabla 12.2

Distribución del tiempo semanal de cuidado según grupo objetivo

Grupo de cuidado	Mujeres (h/sem)	Hombres (h/sem)	Brecha absoluta (m–h)	Rasgo principal del cuidado
Niñez 0–6 años	18,6	10,0	+8,6	Cuidado intensivo, continuo y domiciliado
Niñez 7–14 años	10,6	8,4	+2,2	Acompañamiento escolar y supervisión
Adultos 15–59 años	10,6	11,7	–1,1	Apoyo funcional entre pares autónomos
Personas 60+	11,1	10,4	+0,7	Soporte para deterioro funcional gradual
Dependencia severa	18,2	14,1	+4,1	Alta carga física y emocional, 24/7

Nota. ENUT, 2022

Tabla 12.3

Evolución de la participación laboral y la brecha de género (2022-2024)

Indicador	2022	2023	2024	Tendencia	Análisis breve
Participación hombres	80,80%	81,52%	79,56%	–1,24 pp	Contracción leve
Participación mujeres	48,00%	50,55%	48,17%	+0,17 pp	Estancamiento tras recuperación
Brecha de participación	32,80 pp	30,97 pp	31,39 pp	–1,41 pp	Reducción moderada
Mujeres con educación superior	216.418	246.179	250.124	Alza sostenida	Reducción de 3,7% mujeres con educación superior en informalidad.
Ingreso asalariadas (USD mensuales)	\$185-500	\$200-515	\$251-530	Alza moderada	±1σ (68%), μ ± \$158

Nota. Elaboración propia con los datos de EHPM (2022, 2023, 2024).

dedican 7:02 horas diarias (equivalente a 49,1 horas semanales) al trabajo de cuidado y doméstico, concentrando principalmente labores de cuidado descendente. Esta carga se ve agravada por las condiciones socioeconómicas, las mujeres en pobreza extrema destinan 7:27 horas diarias a estas labores, mientras que aquellas con los niveles educativos más bajos (1 a 5 años de estudio) llegan a dedicar 6:39 horas diarias.

*La regla de exclusión:
el bloqueo al acceso al trabajo*

La tasa de participación femenina se mantiene estancada alrededor del 48%, con una brecha de más de 31 puntos porcentuales frente a los hombres (EHPM 2022-2024). Como muestra la tabla 12.3, tras una recuperación alentadora en 2023, la tasa en 2024 retrocedió a niveles casi idénticos a los de 2022, evidenciando la fragilidad de los avances.

El análisis de la brecha salarial revela una trayectoria de deterioro seguida de estabilización en niveles inequitativos. Los datos muestran que la brecha salarial simple se amplió drásticamente en 5,2 puntos porcentuales entre 2022 y 2023, pasando del 14,8% al 20,0%. Si bien en 2024 se registró una leve contracción al 19,3%, este nivel se mantiene muy por encima del punto de partida en 2022.

Tabla 12.4
Trayectoria de la brecha salarial simple (2022–2024)

Año	Salario hom- bres (\$)	Salario mujeres (\$)	Brecha salarial simple	Trayectoria y análisis
2022	403,99	344,01	14,8%	Punto de referencia inicial.
2023	448,04	358,39	20,0%	Ampliación sustancial. La brecha se amplía en 5,2 p.p., indicando un fuerte retroceso en la equidad remunerativa.
2024	461,76	372,55	19,3%	Leve mejora insuficiente. La brecha se reduce 0,7 p.p., pero persiste 4,5 p.p. por encima del nivel de 2022.

Nota. Elaboración propia a partir de la EHPM (2022, 2023, 2024).

En 2024 hubo una contracción laboral que sugiere un mecanismo de adaptación del mercado: mientras se perdieron 46.950 empleos femeninos netos en la informalidad, el empleo asalariado mostró resiliencia. La formalización por contracción ilustra cómo las crisis externalizan los costos hacia los sectores más vulnerables y plantea cómo la salida selectiva de trabajadoras de menores ingresos eleva artificialmente el promedio salarial femenino. La educación superior muestra una rentabilidad creciente, con una prima salarial del 83% sobre el bachillerato (tabla 12.3). Las mujeres con educación superior reducen la brecha salarial con los hombres al 11%, aquellas con solo secundaria enfrentan una diferencia del 23%, señalando que la certificación académica mitiga, pero no resuelve la desigualdad salarial.

Según el Banco Mundial (2024), uno de los principales mecanismos de exclusión laboral femenina es la inactividad forzada por cuidados: en 2023, el 66,8% de las mujeres fuera del mercado laboral reportaron a los quehaceres domésticos u obligaciones familiares como razón principal. Esta exclusión se intensifica durante los años reproductivos. La participación laboral femenina disminuye drásticamente cuando hay niños menores de 5 años en el hogar, precisamente el período más crítico para el desarrollo profesional de la madre y la acumulación de capital humano de la niñez.

Entre 2022 y 2024, si bien el número absoluto de mujeres inactivas experimentó una reducción de 27.318, la estructura de las razones de inactividad permaneció estable. Los quehaceres domésticos se consolidaron como la barrera principal, incrementando levemente su peso del 60,8% al 61,5%, mientras que la proporción específicamente atribuible al cuidado (quehaceres domésticos y obligaciones familiares) se mantuvo en alrededor del 67%, con un aumento marginal de apenas 0,5 puntos porcentuales. Esta estabilidad refuerza que la división sexual del trabajo opera como un dique de contención que persiste a pesar de las leves variaciones en los valores absolutos.

Tabla 12.5
Tendencias de inactividad femenina

Indicador	2022	2023	2024	Cambio 2022–2024
Mujeres inactivas total	1.367.318	1.350.000	1.340.000	–27.318
Distribución por razón principal:				
· Quehaceres domésticos	831.894	826.200	824.100	–7.794
· Estudia	176.805	176.900	178.200	+1.395
· No puede trabajar	165.778	162.000	159.800	–5.978
· Obligaciones familiares	80.254	76.500	76.300	–3.954
· Enfermedad o accidente	55.096	54.800	50.900	–4.196
· Jubilado/pensionado	46.014	48.600	44.700	–1.314
· Capacitación	5.863	6.000	6.200	+337
· Otros	5.519	5.000	5.800	+281
· Hecho violento	95	0	0	–95
Proporción cuidado–inactividad	66,7%	66,8%	67,2%	+0,5 PP
Mujeres inactivas por cuidados	912.148	902.700	900.400	–11.748

Nota. EHPM (2022, 2023, 2024).

La regla de conciliación precaria: la informalidad como estrategia de supervivencia

El mercado laboral femenino (2022-2024) mostró una mejora moderada en formalidad. La tasa de asalariamiento pasó de 49,3% en 2022 a 49,8% en 2024. Este incremento de 0,5 puntos porcentuales, aunque positivo, esconde dos realidades críticas. La primera, entre 2022 y 2023, la tasa cayó a 46,7%, mostrando una recuperación frágil. La segunda es que, a pesar de esta mejora, solo aproximadamente la mitad de las mujeres ocupadas (49,8%) tiene un empleo asalariado, la puerta de entrada principal a la protección social contributiva. Esto significa que, en 2024, aproximadamente 614.347 mujeres carecían de un empleo que, por ley,

debería garantizarles cotizaciones al Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) y acceso a una pensión a través de las administradoras de fondos de pensiones (AFP).

Tabla 12.6
Indicadores clave de la formalización del empleo femenino

Indicador	2022	2023	2024	Tendencia	Observación
Mujeres ocupadas total	1.196.904	1.269.550	1.222.600	Aumento 2023, caída 2024	Pérdida neta de 46.950 empleos en 2024
Tasa de asalariamiento	49,3%	46,7%	49,8%	Baja y rebote	Mejora 0,5% en 2024
Mujeres asalariadas	589.501	593.501	608.253	Alza sostenida	Aumento de 14.752 asalariadas en 2024
Mujeres cuenta propia	418.730	433.947	399.074	Se mantiene y baja	Reducción de informalidad en 2024
Servicio doméstico	122.612	130.707	113.229	Aumenta y baja	Reducción positiva continua
Brecha de género de informalidad (B05)	9,51 pp	10,87 pp	7,10 pp	Leve reducción	Brecha en reducción

Nota. EHPM (2022, 2023, 2024)

La mejora en la educación de las mujeres no se traduce completamente en formalización: según los Cuadros B06 de la EHPM, en 2024, de las 250.124 mujeres con educación superior (13+ años de estudio), solo 194.299 (77,7%) accedieron a empleo asalariado, mientras que 55.825 (22,3%) aproximadamente una de cada cinco permaneció en la informalidad. Para el análisis de la informalidad, la contracara del asalariamiento, se utilizó el método de medición de categorías ocupacionales (*proxy*) a partir del Cuadro B05 de la EHPM, considerando ocupaciones como: cuenta propia sin local, trabajador familiar no remunerado, servicio doméstico y asalariado temporal. Esta aproximación, aunque

introduce sesgos de sobrestimación al incluir todos los asalariados temporales y de subestimación al considerar toda la cuenta propia con local como formal, permite mantener la comparabilidad temporal.

Tabla 12.7
Evolución de la informalidad laboral por sexo, 2022–2024

Indicador	2022	2023	2024
Total de ocupados	2.845.750	2.932.679	2.881.080
Ocupados informales	1.314.586	1.396.345	1.339.887
Tasa de informalidad	46,2%	47,6%	46,5%
Tasa hombres	43,0%	44,5%	44,8%
Tasa mujeres	51,1%	52,6%	49,1%
Brecha de género (pp)	8,1	8,1	4,3

Nota. Elaboración propia con base en EHPM (2022, 2023, 2024).

Los resultados revelan una ligera reducción en la tasa agregada de informalidad entre 2022 y 2024, pasando de 46,2% a 46,5%, aunque persisten patrones estructurales de precariedad. La brecha de género en informalidad, si bien reducida de 8,1 en 2022-2023 a 4,3 puntos porcentuales en 2024, sigue siendo significativa, reflejando la sobrerrepresentación femenina en la informalidad.

Es importante contextualizar que la pérdida neta de empleos femeninos en 2024 no es un fenómeno aislado, sino parte de una contracción general del mercado laboral nacional, donde el total de ocupados cayó de 2.932.679 a 2.881.080. La drástica reducción en las categorías más informales, como el empleo por cuenta propia (que perdió 34.873 mujeres) y el servicio doméstico (que perdió 17.478), contrasta con el aumento de 14.752 mujeres en empleos asalariados. Esta divergencia apunta a una marginación de la economía informal vinculada probablemente a las medidas de seguridad y ordenamiento territorial. Estas medidas

generan efectos colaterales sobre la población económicamente vulnerable: disrumpen los flujos económicos informales (como la venta ambulante con alta participación femenina), generan estigmatización y riesgo percibido en el espacio público, y contraen la demanda local en economías barriales que dependen de los ingresos informales.

Esto se suma a las dinámicas de género de la informalidad con impacto severo en la protección social contributiva. La brecha de 7,1 puntos porcentuales en la tasa de informalidad entre mujeres y hombres (tabla 12.7) se traduce directamente en una brecha de protección social: un hombre tiene más probabilidades de cotizar al ISSS y a una AFP, mientras que una mujer en la informalidad queda relegada a ser dependiente (esposa o hija) en el sistema de salud o directamente excluida del sistema de pensiones.

El análisis de los cuadros B14 y B15 de la EHPM para 2022 y 2023 revela tendencias preocupantes que no son capturadas por la medición de la informalidad por categorías ocupacionales. Mientras este muestra una tasa de informalidad de 46,2% y 47,6% respectivamente, la medición oficial de la informalidad (Cuadro B14, limitado al sector urbano) señala un aumento significativo de la informalidad de 44,2% a 47,0% entre 2022 y 2023, para un incremento de 2,8 puntos porcentuales en solo un año. Particularmente preocupante es que la tasa de informalidad femenina se mantuvo en un nivel críticamente alto del 62,8% en ambos años según el B14, muy por encima del 52,6% estimado por el método de categorías ocupacionales en 2023, indicando que las mujeres enfrentan barreras adicionales de formalización no capturadas por las categorías ocupacionales básicas.

La distribución sectorial de la informalidad presenta una marcada heterogeneidad que afecta desproporcionadamente a las mujeres. Mientras que en ramas como administración pública y enseñanza la informalidad es inferior al 5%,

en sectores con alta concentración femenina como el servicio doméstico (78,2% de informalidad) y el comercio (50,9%) las tasas son considerablemente más elevadas.

Tabla 12.8
Comparación de metodologías de medición de informalidad urbana, 2022-2023

Indicador	2022 (B14/B15)	2023 (B14/B15)	Diferencia
Tasa informalidad total (B14)	44,2%	47,0%	+2,8 pp
Tasa informalidad excluyendo servicio doméstico (B15)	41,9%	44,7%	+2,8 pp
Mujeres en informalidad (B14)	62,8%	62,8%	0,0 pp
Hombres en informalidad (B14)	36,8%	39,6%	+2,8 pp
Informalidad en área metropolitana (B14)	37,3%	40,3%	+3,0 pp

Nota. Elaboración propia con base en EHPM (2022, 2023).

Tabla 12.9
Informalidad por rama de actividad económica, 2024

Rama de actividad económica	Tasa de informalidad
Pesca	79,2%
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura	78,6%
Hogares con servicio doméstico	78,2%
Construcción	74,9%
Comercio, hoteles y restaurantes	50,9%
Transporte y almacenamiento	45,7%
Servicios comunales, sociales y salud	24,1%
Suministro de electricidad, gas y agua	22,6%
Intermediación financiera e inmobiliaria	14,6%
Enseñanza	4,8%
Administración pública y defensa	1,0%

Nota. Elaboración propia a partir de la EHPM (2024).

La EHPM 2024 no publicó los cuadros B14 y B15 que distingue entre ocupados formales e informales y la comparación de años anteriores revela que el método de categorías ocupacionales subestima consistentemente la informalidad femenina en aproximadamente 10 puntos porcentuales en comparación con la medición oficial. Lo que sugiere que la brecha real de protección social para las mujeres podría ser aún más amplia de lo aquí calculado para 2024.

De esta manera, opera el mecanismo de penalización femenina de canalización hacia empleos de baja productividad, respondiendo a la lógica de conciliación forzada (Banco Mundial, 2024): las mujeres se concentran en sectores que permiten compatibilizar cuidados e ingresos, como servicio doméstico (78,2% informalidad) y comercio (50,9% informalidad). Estos sectores, si bien proporcionan flexibilidad, ofrecen bajos ingresos y nula protección social.

La evidencia presentada sugiere que, a pesar de los avances modestos en la formalización del empleo femenino, persisten núcleos duros de informalidad en sectores tradicionalmente feminizados que requieren intervenciones específicas que trasciendan las políticas de mercado laboral y aborden la organización social del cuidado y la segregación ocupacional.

Los costos del cuidado en el nivel meso

En el nivel meso, las reglas del cuidado estructuran un sistema de incentivos y desincentivos (Ostrom, 2005) que externaliza los costos de la reproducción social hacia las mujeres, mientras el mercado y el Estado capturan sus beneficios. Se recurre a la Economía del Cuidado como marco teórico de la economía feminista y la sociología del trabajo, que visibiliza y analiza los procesos esenciales para sostener la vida humana, ignorados por la economía convencional (Esquivel, 2014) y en contextos de exclusión, surge como economía popular entendida como el conjunto de actividades productivas realizadas

predominantemente por mujeres que, surgidas de la necesidad de conciliar la obligación social del cuidado con la generación de ingresos, mercantilizan habilidades y saberes tradicionalmente asociados al ámbito reproductivo-doméstico (Hindi, 2023).

Las estimaciones para 2022 cuantifican que el costo de reemplazo del trabajo no remunerado de las mujeres alcanza \$10.841 millones anuales (33,4% del PIB), representando el subsidio invisible que las mujeres proveen a la economía (Esquivel, 2014, p. 146). Una estimación basada en el análisis de los cuadros B05 (EHPM, 2022-2023) revela que aproximadamente 520.000 personas, en su mayoría mujeres (77%-79%), se emplean en la economía popular. Con aproximaciones basadas en ingresos del sector informal (C02) que sugieren una generación de entre \$988 millones y \$1.365 millones anuales (3%-4.2% del PIB de 2022). Esto implica además en ausencia de protección social contributiva (salud y pensión) que se crea una precariedad estructural donde las madres son obligadas para sobrevivir.

La abismal diferencia entre el costo de reemplazo (\$10.841 millones) y los ingresos de la economía popular (~\$1.200 millones) revela la dinámica central del sistema: la economía es viable precisamente porque está subvencionada por el trabajo gratuito del cuidado no remunerado (Esquivel, 2014). Las mujeres pueden generar ingresos en la economía popular solamente porque simultáneamente absorben el costo completo de la reproducción social, un fenómeno que se manifiesta en prácticas observadas en terreno como la venta de comida desde el hogar o la costura simultánea al cuidado.

El costo de oportunidad, es decir, la pérdida de ingresos por inactividad forzada se estima en \$2.979 millones (9,2% del PIB 2022) y representa una paradoja: si las mujeres quisieran incorporarse al mercado laboral, sus potenciales ingresos serían insuficientes para pagar a alguien que las sustituya en las labores de cuidado. El sistema que las deja solas, no les permite tampoco comprar su libertad. Los mecanismos estatales para

corregir estas fallas resultan marginales. Las transferencias monetarias condicionadas como estrategia de protección social no contributiva representan solo el 0,2% del ingreso total de los hogares en El Salvador versus 2,6% en América Latina. Programas como el Bono Primera Infancia y Educación, pese a su buen diseño, ven su impacto limitado por una baja cobertura y asignación presupuestaria insuficiente (Banco Mundial, 2024). Estas intervenciones operan como paliativos que estabilizan la desigualdad sin transformar sus bases estructurales.

Paralelamente, las redes transnacionales de cuidado transforman a las familias en unidades productivas que trascienden fronteras. Las transferencias privadas representaron el 32,6% de los ingresos de los adultos mayores en 2021 (MINDEL y UNFPA, 2023), pero generaron tasas de participación laboral femenina 13% más bajas en 2023 (Banco Mundial, 2024, p. 55), reforzando los roles tradicionales de género por lo que se convierte en una Regla de Reproducción Institucional de la desigualdad.

El resultado es un sistema donde la misma resiliencia que sostiene la economía nacional reproduce estructuralmente la desigualdad de género, confirmando así la paradoja central de la “resiliencia perversa” que caracteriza los circuitos de cuidado en El Salvador.

El control pandillero como regla meso: la gobernanza criminal del territorio

El control pandillero en Las Margaritas operó como institución del nivel meso que establecía, monitoreaba y sancionaba las reglas de la vida colectiva. Desde las redes urbanas (Salingaros, 1998), se analiza la transformación del comercio barrial, estrategia clave para que las mujeres articulen cuidado y generación de ingresos, mediante tres fases evolutivas documentadas con evidencia etnográfica (Martínez y García, 2022), análisis videográfico (2021, 2023) y prensa escrita.

La Fase 1 de Economía de Coerción (2020-2021) mostró control criminal intensificado mediante “toques de queda pandilleros” que restringían movilidad e incrementaban extorsión (Martínez y García, 2022). La MS13 instituyó colaboración forzosa donde la “ventaja competitiva” se basaba en la sumisión. El video de 2021 evidencia comercio concentrado e informalidad en el “mitológico triángulo”, con ventas de subsistencia como “panes mataniños” en espacio adyacente a viviendas. La Fase 2 de Presión Securitaria e Inflacionaria (2022) coincidió con el inicio del Régimen de Excepción y alza de precios de alimentos hasta +42% (BCR 2024). Esto contrajo oportunidades económicas informales, creando convergencia securitario-inflacionaria que intensificó la presión sobre las redes de cuidado. La Fase 3 de Reconfiguración del Mercado (2023) muestra expansión lineal del comercio en la avenida principal con proliferación de pupuserías y taquerías antes inviables. Se visibiliza la producción doméstica de mujeres “cociendo el maíz” en sus hogares para hacer tortillas, una superposición espacial producción-reproducción de la Economía Popular.

Esta reconfiguración mantiene una lógica securitaria que penaliza las formas más precarias. El desalojo de vendedoras informales en el Bulevar del Ejército (junio 2024), incluida Rosa Elisea (66 años, 15 años vendiendo), evidenció cómo la racionalidad securitaria reemplazó el miedo pandillero: “Si nos oponemos, nos pueden detener bajo el régimen de excepción” condensa esta transición. La reubicación propuesta al mercado de Las Margaritas o Las Palmas, que según las vendedoras “por años ha sido abandonado” (González, 2024), revela la desconexión estructural entre políticas de ordenamiento y realidades de la Economía Popular.

El control también ha sido simbólico. El análisis comparativo de videos muestra la transición de una cartografía de vulnerabilidad (2021) a una del progreso gracias a la acción gubernamental securitaria (2023), resignificando las reglas hacia parámetros de mercado “convencionales”.

Este proceso no se comprende sin el legado del control pandillero como institución meso. La MS13 instituyó colaboración forzosa mediante “paros” y “postes”, sustentada en el silencio como mandato que dismanteló la confianza colectiva, incluso capturó funciones de cuidado, pervirtiendo el cuidado comunitario.

Gobernanza local del cuidado: circuitos y reglas en Las Margaritas

La ausencia estatal y la exclusión laboral se traducen de manera previsible en arreglos comunitarios autoorganizados, a través de la institucionalización de los mecanismos que reproducen tanto la desigualdad de género como la pobreza.

Ámbito espacial

La urbanización Las Margaritas, ubicada en el distrito de Soyapango (municipio de San Salvador Este), es un territorio emblemático del Área Metropolitana de San Salvador cuyo crecimiento desordenado, de 43.158 habitantes en 1971 a aproximadamente 230.255 en 2024 (Serarols, 1995; Censo 2024), se aceleró durante la industrialización de las décadas de 1970 y 1980 y las operaciones del Aeropuerto de Ilopango (Infografía: Bulevar del Ejército, el primer polo industrial, 2020) cuando se transformaron antiguas haciendas, como Venecia y Prusia de la familia Meléndez Quiñonez dedicadas a la cosecha de caña de azúcar, en lotificaciones populares.

La urbanización se organiza en cinco etapas. Mientras las primeras etapas (“las de arriba”) cuentan con viviendas de tres habitaciones, los sectores inferiores se caracterizan por viviendas de solo dos habitaciones (Aplanando calles, 2023). Esta configuración material incide en el cuidado, donde el hacinamiento y la superposición de actividades en espacios reducidos complejizan la conciliación entre el trabajo reproductivo y la generación de ingresos.

Además, hay infraestructura comunitaria como casa comunal, canchas deportivas y áreas de parqueo y servicios de rutas de bus público (41D y G), un mercado local, un puesto de la Policía Nacional Civil y “la escuelita del Triángulo”.

La arena operativa del cuidado

En el nivel operativo ocurren las acciones cotidianas de provisión, producción y distribución del cuidado, el análisis tiene como escenario principal el hogar, entendido como la unidad básica de reproducción de la vida y la fuerza de trabajo (Esquivel, 2014). El recurso gestionado, la capacidad colectiva de cuidado, funciona como un bien común (*common-pool resource*) de supervivencia (Ostrom, 2005): es no-excluyente dentro del parentesco femenino, pero rival en su consumo, pues el agotamiento de las cuidadoras amenaza con el colapso de todo el sistema.

El cuidado comprende prácticas concretas que incluyen el autocuidado, el cuidado directo de terceros, la provisión de condiciones materiales y su gestión. Estas prácticas constituyen una “situación de acción” institucional donde las participantes toman decisiones estratégicas. Para analizarlas, el marco IAD, el Marco de Análisis y Desarrollo Institucional según el análisis de Ostrom, identifica componentes que configuran sus resultados:

- Participantes y posiciones
- Acciones posibles
- Información y control
- Costos y beneficios netos
- Resultados

Participantes y sus Posiciones

El participante es una entidad con agencia, cuyas decisiones y acciones afectan los resultados de una situación social; puede ser individuo o colectividades siempre que responda a una

acción colectiva con mecanismos internos de toma de decisiones (Ostrom, 2005). Los actores colectivos son el Estado y el mercado (*free riders*) y el hogar, junto con actores individuales que ocupan posiciones específicas. Algunos actores colectivos externalizan costos, mientras los individuos reproducen comportamientos racionales dentro de marcos restrictivos.

Las posiciones, entendidas como espacios anónimos dentro de la arena de acción (Ostrom, 2005), se caracterizan por una asignación predominantemente coercitiva basada en el género. Hay una movilidad diferencial entre posiciones. Las transiciones femeninas suelen ser coercitivas, como lo demuestran expulsión y reasignación a contextos de mayor vulnerabilidad por embarazos no planificados; las masculinas en su rol de provisión de recursos son más flexibles pues pueden abandonar ese rol. En el polo femenino, se identifican posiciones vinculadas al linaje y la responsabilidad directa. La Madre Jefa de Hogar asume la gestión última de la reproducción social, integrando el trabajo productivo precario con la responsabilidad del cuidado. La Abuela Amortiguadora opera como red de seguridad intergeneracional, absorbiendo costos de salud para liberar el tiempo de las generaciones más jóvenes. La Hija Ayudante ocupa una posición de apoyo secundario, asumiendo costos de oportunidad tempranos que limitan su autonomía futura. Finalmente, la Cuidadora Remunerada en la Economía Popular monetiza tareas de cuidado asumiendo precariedad laboral.

En el polo masculino, las posiciones se estructuran desde la externalización sistemática del cuidado. El Proveedor Económico especializándose en ingresos, legitima su no-participación. Los roles se segmentan: el Colaborador Productivo (ej. hijo que ayuda en venta de comida) libera tiempo femenino para tareas domésticas, mientras el Cuidador Secundario asume labores agrícolas familiares. Así, la posición del No Cuidador opera como norma estructural activamente sostenida.

Es necesario desvincular la asignación de roles del género, reconociendo el cuidado como una función social que debe distribuirse equitativamente. Solo mediante la redefinición de estos espacios anónimos podrá superarse el equilibrio que perpetúa la sobrecarga femenina y limita el desarrollo comunitario.

De las acciones posibles a la circulación del cuidado a través de circuitos entrelazados

El IAD distingue entre las Acciones, que conforman el conjunto total de opciones estratégicas teóricamente disponibles, y las Interacciones, que son el flujo específico de acciones que se eligen y ejecutan efectivamente. Mientras las acciones posibles incluirían utilizar servicios estatales de cuidado o delegar en redes comunitarias amplias, las interacciones efectivas se concentran en el trabajo híbrido fragmentario, la absorción de cuidados por mujeres mayores en el eje madre-hija y la activación selectiva de ayuda solo en crisis agudas. Las interacciones se analizan a través de circuitos de cuidados que superponen lógicas de obligación, compensación, mercantilización y ayuda comunitaria que se entrelazan en la práctica cotidiana (Araujo Guimarães, 2019), tal y como se plantea a continuación.

- A. Circuito de Obligación Moral y su Superposición con lo Productivo. Este circuito, activado por los significados de “ayuda” y “deber familiar”, constituye la base no negociada del sistema. Sin embargo, rara vez opera de forma aislada. Se ejemplifica en el patrón donde, al existir una pareja masculina, el hombre financia el hogar y la mujer abandona el empleo para asumir el cuidado infantil intensivo, como en el caso de K, que era cajera hasta el nacimiento de su hija. La misma mujer que asume el cuidado como obligación moral debe luego generar ingresos cuando

la provisión masculina desaparece (Grupo focal, comunicación personal, 18 de octubre de 2025).

- B. Circuito de Compensación Intrafamiliar: La Monetización de la Obligación. Aquí, el cuidado funciona como intercambio económico o material que negocia los límites de la obligación moral. S recibe vivienda y alimentos de su hija, transformando el deber filial en un acuerdo de co-residencia. De manera más explícita, la hija de C paga a su madre por el cuidado de sus hijos tres días a la semana, monetizando una relación que socialmente definida como obligación (C, entrevista personal, 19/09/2025). El padre adulto mayor de J trabaja en su huerto casero en intercambio directo por alimentos, mientras CTA recibe alojamiento en la casa de su hijo como financiamiento diferido para cuidado futuro ante un posible retorno o deportación (grupo focal, 18/10/2025). Estos arreglos muestran cómo la compensación material modula y hace sostenible la obligación moral sin anularla.
- C. Circuito Mercantil: La Profesionalización Precaria del Cuidado. Este circuito incluye formas de monetización que van desde el cuidado profesional (jubilada del sistema de salud), trabajo doméstico hasta la economía popular. Esta última adopta modalidades diversas: K vende cosméticos en línea y L lo hace a través de catálogo, ambas manteniendo su rol primario de cuidado en el hogar gracias a la provisión de sus parejas, pero buscando alguna autonomía económica. Otras, como A con la costura y MNA con venta de comida ambas desde sus casas; mientras J combina trabajo doméstico con crianza de gallinas y cultivo de vegetales, y MTA hace repostería por encargo, representan la mercantilización de las habilidades domésticas. Aquí, lejos de constituir esferas separadas, el circuito mercantil emerge directamente de

la necesidad de conciliar lo remunerado dentro de lo no remunerado (grupo focal, 18/10/2025).

- D. Circuito Comunitario: Infraestructura, autocuidado y los límites de la confianza. Cuando se les pregunta directamente “¿quién les ayuda?” Las mujeres enumeran apoyos puntuales para afrontar “choques”: la organización colectiva del funeral de la madre de A, un pago para evitar la pérdida de la casa de MTA. Estos actos revelan una red latente que se activa en crisis. Sin embargo, existe una narrativa compartida de que no reciben ayuda económica de familiares extendidos, pues su lugar de residencia se lee socialmente como un indicador de autonomía económica (grupo focal, 18/10/2025).

El corazón del circuito comunitario es el grupo “Mujeres en Construcción”, un espacio de 18 mujeres que se reúne los sábados por la mañana, cuando el cuidado en el hogar se los permite, a través de un grupo de WhatsApp administrado por C. Creado para brindar asesoría contra la violencia intrafamiliar, el grupo ha evolucionado hacia una función más amplia de autocuidado colectivo. Su composición es mayoritariamente de mujeres entre 50 y 60 años, sugiriendo un rol de contención intergeneracional (C, entrevista personal, 19/09/2025). La función del grupo trasciende a sus miembros registrados. Durante el trabajo de campo, hubo inclusión a través del cuidado: K (una madre joven expulsada del hogar materno) y CTA (que enfrenta la soledad tras la migración de sus hijos) fueron invitadas al grupo focal como un acto de apoyo. Esta estrategia muestra cómo el grupo opera como un nodo que irradia cuidados hacia mujeres en alta vulnerabilidad, expandiendo los límites de la comunidad. El apoyo se mide más en gestos que en dinero: “La ayuda a veces no es de dinero, sino de ser escuchada y que le ofrezcan un café”, explica K o se materializa en prácticas como las rutinas de ejercicio que L comparte con

CTA, utilizando además el Polideportivo como oportunidad para generar ingresos informales con la venta de lencería.

La práctica grupal más significativa son los “sopones” en el kiosko. Estas cocinas colectivas, donde cada una aporta un ingrediente, son mucho más que una estrategia nutricional. Son actos de resistencia afectiva que tejen confianza, crean disfrute y reparan el lazo social fracturado por la violencia.

La estratificación interna de este circuito se hace evidente al analizar el acceso diferencial al apoyo emocional y espiritual. MM, pensionada y casada, sugería acudir a la iglesia a “las que sentían solas” ilustra los distintos pisos de necesidad. MM, con su seguridad económica básica resuelta, puede buscar bienestar emocional; J, trabajadora doméstica y viuda, utiliza la iglesia como red de supervivencia social contra la soledad. En contraste, las mujeres más jóvenes con carga de cuidado infantil y abandono económico no acceden a este recurso, confinadas al piso de la supervivencia material inmediata donde el autocuidado emocional representa un costo de oportunidad prohibitivo. Un mismo recurso comunitario funciona como bienestar, supervivencia o bien inalcanzable, según la posición en la jerarquía de vulnerabilidades femininas (grupo focal, 18/10/2025).

La infraestructura que sostiene estas prácticas lleva las marcas de la gobernanza reciente. Cuando el ejército ocupó la casa comunal durante el cerco militar inicial del Régimen de Excepción, la comunidad respondió, con ayuda externa, construyendo un kiosko. Este hecho demuestra cómo la adaptación espacial es una forma de agencia frente a las imposiciones estatales (C, entrevista personal, 19/09/2025).

Sin embargo, la confianza tiene límites infranqueables. El cuidado infantil comunitario permanece bloqueado por un temor generalizado al abuso sexual, un veto moral que delata la desconfianza estructural forjada por el pasado criminal. Notablemente, las mujeres nunca mencionaron a las pandillas. No hubo, por ejemplo, referencia a cuando eran forzadas a

cuidar hijos de pandilleros encarcelados (Martínez y García, 2022). En su lugar, proyectaron la gramática del Régimen de Excepción para interpretar realidades distantes, como cuando una participante relató que la detención de una nuera en Estados Unidos, para alguien más, eso significaba que “allá también había Régimen de Excepción”. Esta transferencia semántica revela la profundidad con que esta nueva racionalidad securitaria ha reconfigurado el imaginario colectivo.

La resiliencia del sistema reside en la capacidad de las mujeres para activar estratégicamente, de manera simultánea o secuencial, estos circuitos, una negociación constante que asegura la supervivencia mientras naturaliza su sobrecarga como mecanismo de ajuste estructural.

Información y control

La información es el conocimiento que los participantes tienen sobre la estructura completa de la situación de acción (Ostrom, 2005). En Las Margaritas, existe una información incompleta reforzada por la baja cobertura estatal: las mujeres desconocen alternativas de los dos CAPIs y un centro de día en Soyapango; tampoco comprenden las reglas meso y macro que configuran su realidad. Esta información incompleta se filtra a través de una variable cognitiva fundamental: el entendimiento del cuidado como deber femenino, conceptualizado a través de un vocabulario de obligación afectiva y moral: “amor propio”, “apoyo”, “solidaridad” y “deber familiar”; en notable ausencia de nociones como “servicio”, “derecho” o “relevo”. Por el contrario, en el campo, hubo narrativas que naturalizaban la no-participación masculina, por la creencia recurrente de que los hombres “no podían hacer más de una cosa a la vez” y, por tanto, se desentendían del trabajo simultáneo de cuidado y doméstico. Esta concepción es un filtro que determina qué cursos de acción se consideran legítimos.

El control, definido como el grado de dominio sobre la vinculación entre la acción y los resultados, que varía desde absoluto hasta casi nulo; se ejerce a través de la autoorganización. Bajo el liderazgo de la presidenta de ADESCO, cuya autoridad emana de su trayectoria como anterior promotora comunitaria y ahora facilitadora judicial, el grupo “Mujeres en Construcción” opera con una doble función: administra el orden preexistente reproduciendo tácitamente reglas que confinan la responsabilidad a lo femenino y a lo doméstico, mientras ejerce agencia colectiva mediante prácticas de resistencia afectiva como los “sopones”. Sin embargo, el grupo de mujeres no gobierna deliberando, sino administrando un orden preexistente mediante liderazgos que gestionan el riesgo.

Es precisamente en esta dualidad donde se manifiesta la paradoja del poder en términos de Ostrom. Las mujeres ejercen un control operativo máximo sobre la gestión cotidiana que requiere precisamente la capacidad de realizar múltiples tareas simultáneas, pero el valor de su oportunidad se encuentra constreñido por su información incompleta y por este entendimiento del cuidado como deber femenino que legitima la abstención masculina mediante la construcción de una incapacidad funcional.

Esta configuración evidencia la dinámica de los “tres interruptores” que afectan la relación entre acciones posibles y resultados: mientras las mujeres mantienen su interruptor comunitario permanentemente activado para evitar el colapso inmediato, el poder para reconfigurar las reglas del juego reside en quienes controlan los otros dos interruptores y optan por la abstención deliberada: el Estado, mediante la no-operación del derecho (interruptor macro), y los hombres, mediante una evitación activa justificada en narrativas de incapacidad performativa (interruptor meso). La provisión equitativa de cuidado, la “luz”, permanece apagada, porque los demás controladores eligen no activar sus interruptores.

Costos y beneficios netos

La crisis del cuidado en Las Margaritas constituye un dilema social, donde la racionalidad individual conduce a resultados colectivos subóptimos, opera cuando cada hogar, buscando maximizar su beneficio privado inmediato (la subsistencia familiar y la gestión del riesgo reproductivo), agota completamente sus recursos internos sin posibilidad de externalizar costos hacia la comunidad. El núcleo del dilema reside en que los beneficios privados para cada familia superan su parte del beneficio conjunto de un sistema de cuidado colectivo. Las mujeres enfrentan una elección forzada: internalizar los costos del cuidado mediante la sobrecarga de trabajo, el deterioro de su salud y el sacrificio de su autonomía económica o arriesgar la supervivencia inmediata del hogar. Esta disyuntiva se agudiza, porque el agotamiento de los recursos internos elimina cualquier posibilidad de reciprocidad comunitaria ampliada.

Los costos netos son el deterioro de la salud física, visible en condiciones como la diabetes y la claudicación intermitente no tratada de S. (S, entrevista personal, 18/10/2025), y en el plano emocional, donde frases como “Hasta que todos están dormidos tengo paz” y “se puede vivir con la calamidad” revelan la carga psicológica del cuidado continuo. Adicionalmente, el sistema genera costos de oportunidad al desplazar a las mujeres hacia la Economía Popular, limitar su autonomía económica y excluirlas de la protección social.

Este equilibrio se sustenta en restricciones materiales abrumadoras donde la falta de infraestructura pública y la precariedad laboral se combinan con reglas operativas como el “veto moral”. El balance es una sostenibilidad paradójica, basada en la maximización del trabajo no remunerado femenino, que asegura el bienestar mediante el sacrificio de la autonomía, salud y desarrollo de las cuidadoras. La repetición de estas elecciones individualmente necesarias consolida un resultado colectivo indeseable, donde Estado y mercado actúan como *free riders* de esta labor de supervivencia.

La solución, por tanto, no reside en cuestionar las decisiones individuales de las mujeres, sino en transformar las reglas estructurales que convierten la subsistencia en un dilema social y distribuyen sus costos de manera sistemáticamente desigual.

Resultados del sistema

El sistema demuestra eficiencia al movilizar intercambios recíprocos que sostienen la vida con mínimos recursos públicos, operando como subsidio invisible mediante el trabajo femenino no remunerado. Mientras que las normas comunitarias naturalizan el cuidado como “obligación moral femenina”, permitiendo a los hombres externalizar costos en un sistema intrínsecamente injusto. El trabajo afectivo y la confianza generan resiliencia ante choques severos, pero la calidad del cuidado se ve mermada por la precariedad laboral y la ausencia de servicios públicos. Dependiente de la sobreexplotación femenina y subsidios externos, el sistema muestra fragilidad estructural.

La estabilidad inequitativa se basa en que los actores maximizan su utilidad dentro de las reglas existentes: para los hombres No Cuidadores, el valor neto de externalizar el cuidado es positivo (reconocimiento social, evitación de costos emocionales); para las mujeres, pese a los altos costos, la utilidad neta reside en garantizar la sostenibilidad de la vida en contextos de precariedad. Este cálculo de utilidades asegura la reproducción del sistema mediante el linaje femenino, mientras las intervenciones estatales son neutralizadas al no reconfigurar el “veto moral”.

El colapso por agotamiento representa la segunda trayectoria. Contrario a la tragedia de los comunes por sobreexplotación, este escenario emergería del desgaste físico y emocional irreversible de las cuidadoras. La fragilidad demográfica del eje madre-hija-abuela lo vuelve particularmente vulnerable ante el envejecimiento poblacional.

La transformación estructural constituye la tercera trayectoria. No basta con alterar las recompensas mediante transferencias,

que son paliativos. Se requiere modificar las reglas de elección que restringen las alternativas disponibles. Esto exige intervenir las condiciones materiales subyacentes mediante infraestructura pública de cuidado que haga físicamente posible y socialmente legítima la delegación fuera del parentesco.

El sistema enfrenta así una encrucijada: mantener la resiliencia perversa, encaminarse hacia el colapso por agotamiento o catalizar una transformación que posicione el cuidado como responsabilidad colectiva.

Conclusiones

Esta investigación descifra el código operativo del cuidado en Las Margaritas revelando un sistema de resiliencia perversa donde la misma arquitectura que garantiza la supervivencia reproduce la desigualdad. Lejos de la informalidad caótica, emerge un orden alternativo profundamente internalizado, gobernado por reglas no escritas.

El análisis etnográfico permitió inferir las Reglas de Elección operativas, el código moral que gobierna la acción en el nivel micro, que estructuran las decisiones cotidianas de las mujeres. Estas reglas, identificadas a través de las prácticas y los relatos de las participantes, son:

- La Regla del Veto Moral, que prohíbe delegar el cuidado fuera del parentesco directo por temor al riesgo sexual, volviendo socialmente inutilizables los servicios públicos de cuidado y confinando la solución al ámbito doméstico.
- La Regla de la Obligación Femenina, que impone la generación de ingresos a través de la Economía Popular mientras restringe la autonomía temporal y corporal de la mujer, asegurando su disponibilidad permanente.
- La Regla del Parentesco y Reciprocidad, que activa el cuidado casi exclusivamente en el eje madre-hija, excluye a las nueras y externaliza los costos del cuidado

lejos de los hombres, instituyendo un linaje femenino de responsabilidad. Esta estrategia de cooperación condicional resuelve el desafío de coordinación reduciendo incertidumbre y asegurando que el cuidado sea provisto por actoras con la mayor probabilidad de permanencia y la más alta internalización de la norma de obligación femenina en un juego familiar que no tiene fin.

- La Regla de Control Corporal y Temporal, que disciplina los cuerpos femeninos permitiendo el ocio solo cuando se orienta al mantenimiento estético y para asegurar la fidelidad masculina, mientras penaliza socialmente el descanso que limita el cuidado, justificando así las jornadas extendidas hasta altas horas de la noche.

Estas reglas son la expresión concreta de las reglas meso y macro identificadas. El mercado laboral, junto con otras instituciones meso como las iglesias que refuerzan mandatos de género, impone el escenario donde estas reglas son la única estrategia de supervivencia posible. La penalización femenina en el empleo (tasa de participación estancada, brecha salarial y confinamiento a la informalidad) constituye el mecanismo estructural que provoca la “conciliación forzada”, pero son las reglas de elección y la permisividad social hacia la evasión masculina las que dictan cómo esta conciliación se materializa cotidianamente.

Esta configuración dialoga críticamente con el perfil de “Paternidad Tradicional” identificado por Ortega Hegg *et al.* (2005) como mayoritario en El Salvador (59,86%). En Las Margaritas, este perfil se internaliza a través de tres mecanismos: la naturalización cognitiva de la incapacidad masculina (“no pueden hacer más de una cosa a la vez”), que refleja la oposición entre cuidados y autoridad; el desentendimiento operativo que materializa el abandono documentado (84,8% de ausencias paternas); y la externalización estructural del

cuidado basada en narrativas que responsabilizan a la mujer de las consecuencias de la sexualidad. Así, la Paternidad Tradicional opera como gramática moral que sustenta la resiliencia perversa del sistema.

Un segundo hallazgo revela una transformación de las gramáticas de control en el territorio. Donde antes operaba el mandato pandillero del silencio, una regla meso-institucional de origen criminal, hoy persiste una autocensura internalizada que responde a la nueva racionalidad estatal securitaria, así una forma de gobernanza meso (estatal) puede reemplazar a otra (criminal) sin disipar del todo la desconfianza y el repliegue social que esta última instauró.

La identificación de contradicciones revela la doble tensión del sistema. El análisis del contexto nacional expone la paradoja de que la racionalidad gubernamental, al debilitar la economía informal, socava la base material de los mismos circuitos de cuidado que el Estado absentista requiere para funcionar.

La contribución de este análisis es descifrar la ‘gramática oculta’ que gobierna el cuidado, desde la no-operación del derecho constitucional (macro) y las reglas del mercado laboral (meso) hasta los mandatos del *software* moral familiar (micro); se brinda una comprensión estructural de la realidad comunitaria: la sobrecarga femenina no es un fracaso personal, sino el resultado previsible de una arquitectura institucional que sistemáticamente exonera a los hombres y al Estado. Este acto de desnaturalización constituye el fundamento de toda agencia transformadora, la semilla cognitiva de pasar de “¿cómo aguanto más?” a “¿cómo transformamos las reglas del juego?”

Avanzar en la transformación requerirá incluir las voces de los hombres en este entramado, decodificar el rol de instituciones comunitarias como las iglesias en la legitimación de los mandatos de género, y visibilizar una de las cargas más silenciadas e invisibles: los vínculos de cuidado y sustento que estas mujeres mantienen con los privados de libertad por

el Régimen de Excepción, una externalización extrema del costo social sobre sus espaldas. Explorar con mayor profundidad estas y otras dimensiones interseccionales que cruzan las experiencias de cuidado es el siguiente paso.

Bibliografía

- Araujo Guimarães, N. (2019, mayo). *Circuitos de cuidado: Reflexiones desde el caso brasileño* [Ponencia]. Congreso de Estudios Latinoamericanos LASA 2019, Boston, MA, Estados Unidos.
- Asamblea Constituyente. (1983, 16 de diciembre). *Decreto Constituyente N° 38 Constitución de El Salvador*, Diario Oficial N° 234, Tomo N° 281.
- Asamblea Legislativa. (2014, 9 de abril). *Decreto No. 647 Ley de Desarrollo y Protección Social*. Diario Oficial N° 68, Tomo N° 403.
- Autoridad de Aviación Civil de El Salvador. (s.f.). *Historia*. <https://www.aac.gob.sv/historia/>
- Banco Central de Reserva de El Salvador (BCR). (2023). *Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM) 2022*. <https://onec.bcr.gob.sv/encuesta-de-hogares-de-propositos-multiples-ehpm/>
- Banco Central de Reserva (2024). *VII Censo de Población y VI de Vivienda 2024*. <https://censo2024.bcr.gob.sv/>
- Banco Central de Reserva de El Salvador (BCR). (2024). *Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM) 2023*. <https://onec.bcr.gob.sv/encuesta-de-hogares-de-propositos-multiples-ehpm/>
- Banco Central de Reserva de El Salvador. (2024). *Serie Histórica del Índice de Precios al Consumidor - Grupo Alimentos y Bebidas No Alcohólicas (abril 2022-diciembre 2023)*. <https://www.bcr.gob.sv/bcrsite/category/16.html>
- Banco Central de Reserva de El Salvador (BCR). (2024). *Producto Interno Bruto: Producción, Gasto e Ingreso. A precios corrientes*. <https://estadisticas.bcr.gob.sv/serie/producto-interno-bruto-produccion-gasto-e-ingreso-a-precios-corrientes>
- Banco Central de Reserva de El Salvador (BCR). (2025). *Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM) 2024*. <https://onec.bcr.gob.sv/encuesta-de-hogares-de-propositos-multiples-ehpm/>

- Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). (2020). *Política Fiscal y Endeudamiento en Centroamérica. Reglas Fiscales y Sostenibilidad*.
- Banco Mundial. (2024). *Evaluación de la Pobreza y la Equidad en El Salvador: Avances y Desafíos Pendientes. Informe No. 123456-ES*.
- CEPAL & GIZ. (2015). *Sistemas de cuidado en América Latina: Una evaluación cuantitativa de las políticas públicas*.
- Coleman, J. S. (1988). Social Capital in the Creation of Human Capital. *American Journal of Sociology*, 94, pp. S95-S120.
- Dirección General de Estadística y Censos (DIGESTYC). (2017). *Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT) 2017*. Ministerio de Economía.
- Dirección General de Estadística y Censos (DIGESTYC). (2022). *Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT) 2022*. Ministerio de Economía.
- Esquivel, V. (2014) Cuidado, economía y agendas políticas: una mirada conceptual sobre la ‘Organización social del cuidado’. En Esquivel, V. ed. (pp. 141- 183). *La Economía Feminista desde América Latina: Una Hoja de Ruta sobre los Debates Actuales en la Región*. ONU Mujeres.
- Gobierno de El Salvador. (2022). *Política Nacional de Corresponsabilidad de los Cuidados (2022-2032)*. ONU Mujeres, Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU) y Comisionada Presidencial para Operaciones y Gabinete de Gobierno.
- González, M. (2024, 12 de junio). Comienzan desalojos de vendedores del bulevar del Ejército en Soyapango. *El Salvador*. <https://www.elsalvador.com/h-noticias/h-nacional/comienzan-desalojos-de-vendedoresl-bulevar-ejercito-soyapango/1148751/>
- Hindi, G. (2023). Formales/informales: un binomio cuestionado por la «economía popular». *Nueva Sociedad*, (307), pp. 123-132.
- Infografía: Bulevar del Ejército, el primer polo industrial. (2020, 9 de septiembre). *El Diario de Hoy*. <https://historico.elsalvador.com/historico/685043/bulevar-ejercito-industrial.html>
- Martínez d’Aubuisson, J. J. y García, C. (2022). *MS13&Co. Insight Crime*.
- Ministerio de Hacienda de El Salvador (MH). (2022). *Ley del Presupuesto General de la Nación para el Año Fiscal 2022*.

- Ministerio para el Desarrollo Local (MINDEL) y Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA). (2023). *Transformando el futuro conociendo el presente. Situación de la Población Adulta Mayor en El Salvador, 2023*. (Cuadernos Sobre Población N° 3).
- Ortega Hegg, M., Castillo Venerio, M. y Centeno Orozco, R. (2005). *Masculinidad y factores socioculturales asociados a la paternidad: estudio en cuatro países de Centroamérica*. UNFPA-CEPAL.
- Ostrom, E. (2005). *Understanding Institutional Diversity*. Princeton University Press.
- Portillo, D. (2023, 14 de diciembre). Gobierno salvadoreño pide volver a prorrogar entrada en vigencia de Salas Cuna. *La Prensa Gráfica*. <https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Gobierno-salvadoreno-pide-volver-a-prorrogar-entrada-en-vigencia-de-Salas-Cuna-20231213-0093.html>
- Portillo, D., & Aguilar, G. (2025, 12 de marzo). Hay 254 distritos sin Centros de Atención a la Primera Infancia. *La Prensa Gráfica*. <https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Hay-254-distritos-sin-Centros-de-Atencion-a-la-Primera-Infancia-20250312-0066.html>
- Salinger, N. A. (1998). Theory of the Urban Web. *Journal of Urban Design*, 3(1), pp. 53-71.
- Sampson, R. J., Raudenbush, S. W., & Earls, F. (1997). Neighborhoods and Violent Crime: A Multilevel Study of Collective Efficacy. *Science*, 277 (5328), pp. 918–924.
- Serarols, J. (1995). *Dinámica de crecimiento del AMSS (Documento de Trabajo #77)*. Fundación Nacional para el Desarrollo.
- Aplanando calles. (2023, 15 de junio). Así está hoy Las Margaritas gracias al Régimen del presidente [Video]. YouTube. <https://m.youtube.com/watch?v=otIarS1s5Eg>
- Gordo Soyacity. (2021, 12 de agosto). Así está la Colonia Las Margaritas Soyapango 2021. [Video]. YouTube. <https://m.youtube.com/watch?v=WnOEbCJDjP0>

TERCERA PARTE

Representaciones de las economías
de base, las economías populares
y las economías alternativas
desde las subjetividades

CAPÍTULO 13

Qullqix jakäwiniwa (el dinero
tiene vida), taqi kunas jakañaniwa
(todo tiene vida): jump'atu (sapo),
economía y prosperidad

Jesús Nilo Llusco Mamani

(Kuntur–Mamani Llusco)

Introducción

El culto a los sapos en la waxt'a constituye una manifestación central de la cosmovisión aimara en la región circunlacustre del lago Titicaca, provincia Omasuyus, departamento de La Paz, Bolivia. Esta práctica ritual, tradicionalmente vinculada a la fertilidad de la tierra y el agua, ha experimentado transformaciones significativas, especialmente a partir de 2005, cuando dejó de ser exclusivamente agrícola para asumir un rol en los rituales de Estado. En este proceso, el sapo ha ampliado su simbolismo, incorporándose como un referente de prosperidad económica y mediador entre lo humano y lo no humano.

En el cerro sagrado de Pajchiri, punto focal de este estudio, el sapo se constituye como canal de comunicación con la Pachamama, articulando prácticas agrícolas, domésticas

y comerciales. Los creyentes autoidentificados aimaras y no aimaras sostienen que su presencia asegura abundancia y seguridad económica, evidenciando la estrecha relación entre espiritualidad y subsistencia material. La representación del sapo se materializa en figuras de distintos materiales —azúcar no comestible, madera, barro, yeso, cerámica, metal o piedras líticas— colocadas en altares domésticos, negocios y espacios públicos, acompañadas de ofrendas como hojas de coca, bebidas alcohólicas, dulces y dinero, que reflejan la intención de atraer prosperidad y bienestar.

Este capítulo considera que la *waxt'a* no solo reafirma la centralidad del sapo en la vida material y espiritual, sino que también constituye un espacio de memoria donde la experiencia aimara se entreteje con narrativas históricas, políticas contemporáneas y dinámicas económicas populares. De este modo, la práctica ritual permite un diálogo continuo entre tradición y modernidad, manteniendo vigente la presencia activa de los seres no humanos en la economía y la cultura local y global.

Los imaginarios del sapo: representaciones simbólicas, históricas y culturales en el mundo

Las diversas interpretaciones de la representación del sapo muestran que este batracio ha ocupado un lugar singular en los imaginarios culturales del mundo. A lo largo de la historia, su figura ha transitado entre la sacralidad y la abyección, lo divino y lo demoníaco, la fertilidad y la putrefacción. Habitante tanto de la tierra como del agua, el sapo simboliza la capacidad de moverse entre lo visible e invisible, lo húmedo y lo seco, lo terrenal y lo subterráneo, convirtiéndose en un mediador privilegiado entre los órdenes de la naturaleza y la cultura. Su ambivalencia lo convierte en un símbolo clave para comprender la transformación de las cosmologías humanas,

la construcción de jerarquías simbólicas y los conflictos que surgen en torno a lo sagrado y lo profano.

Desde una perspectiva comparativa, el sapo aparece en casi todas las tradiciones del planeta como un signo de poder regenerativo. En las mitologías mesoamericanas, africanas, asiáticas y europeas, encarna la vitalidad de la tierra húmeda, la fecundidad y el misterio de la vida emergente de la putrefacción. Su condición anfibia lo asocia con la metamorfosis y el cambio, atributos que lo convierten en un símbolo universal del ciclo vital y la renovación. Su piel rugosa, su croar nocturno y su relación con el agua lo vinculan con el útero de la tierra, la oscuridad y el principio femenino de la creación.

En el Antiguo Egipto, la diosa Heqet —representada con cuerpo de mujer y cabeza de rana— simbolizaba la fertilidad, el parto y la renovación. Asociada al agua del Nilo y al alumbramiento, se creía que soplaba el aliento vital sobre los recién nacidos. La proliferación de ranas y sapos tras la crecida anual del río era interpretada como signo de abundancia y regeneración, mientras que las mujeres egipcias llevaban amuletos con su forma para protección durante el embarazo. Así, la iconografía de Heqet evidencia la estrecha conexión entre lo biológico, lo espiritual y lo político: la fertilidad de las mujeres se vinculaba directamente a la prosperidad del Estado, dependiente del equilibrio con las aguas sagradas.

En la China antigua, el sapo también ocupó un papel central. El mito de Ch'an Chu —la rana de tres patas— lo presenta como guardián de los secretos de la longevidad y símbolo de riqueza, asociado a la luna y a la diosa Chang'e. Hasta hoy, las figuras de sapos con monedas en la boca se colocan en hogares y comercios para atraer prosperidad, reflejando la interrelación entre espiritualidad y fortuna material en el imaginario chino y del sudeste asiático.

Entre los pueblos mesoamericanos, el sapo y la rana estaban vinculados con la lluvia, la fertilidad agrícola y los ciclos de regeneración. En las culturas zapoteca y mixteca,

representaban a la diosa terrestre, mediadora entre humanos y deidades del agua. Para los mayas, el anfibio estaba asociado a Chaac, dios de la lluvia y del trueno, vinculado al nacimiento del maíz y a la germinación. El registro arqueológico confirma su papel como mediador entre el inframundo y la superficie, entre la muerte y la resurrección de la semilla.

En los Andes, el sapo se considera un ser de gran poder, capaz de convocar lluvias y garantizar la fertilidad de la tierra por medio de su canto. La antropología andina interpreta al sapo como un puente entre mundos: terrestre y acuático, masculino y femenino, visible e invisible. Su función excede lo ritual: también media en la producción de riqueza, emociones y reciprocidad social. Su representación a través de las *illas* —traducido en lengua aimara como “misterios”— que forman parte de la *waxt’a*, consisten en *cosas* —a decir de Holbraad (2022)— elaborados artesanalmente con azúcar no comestible y yeso que representan a otras *cosas* como ser: cerros, ríos, nevados, animales, elementos de la vida cotidiana, emociones y aspiraciones materiales. En la *waxt’a*, estas *cosas* ocupan un lugar central, simbolizando la interconexión entre lo humano y lo no humano, y la circulación económica y social.

El significado del sapo, sin embargo, no ha sido uniforme ni lineal. En Europa medieval, bajo la influencia del cristianismo, su representación cambió radicalmente: de símbolo de fertilidad pasó a encarnar lo demoníaco, el pecado y la brujería. En los bestiarios del siglo XIII se lo describe como un animal impuro, asociado a aguas estancadas y cementerios, compañero del diablo. Durante la Inquisición, los sapos aparecieron en juicios contra brujas como supuestos familiares demoníacos. Esta demonización revela un proceso de expropiación simbólica: la Iglesia desplazó su poder creativo hacia el ámbito moral, subordinando a los animales al orden humano.

Posteriormente, en la alquimia renacentista, el sapo simbolizó la materia prima a purificar, devorándose a sí mismo como metáfora del alma que renace tras confrontar su oscuridad.

Así, se convirtió en emblema de sabiduría oculta y de la regeneración que une lo terrenal y lo celeste. En la literatura moderna, desde Hans Christian Andersen (1837-1872/ 2005) y Charles Perrault (1697/2012), el sapo sigue siendo figura de transformación, mediador entre mundos, aunque bajo lógicas sentimentales y moralizantes. Con la modernidad, el sapo pasó al ámbito científico: modelo de laboratorio para estudiar bioelectricidad y fisiología, perdiendo su dimensión espiritual y ritual, ejemplificando la separación entre naturaleza y cultura descrita por Latour como “proceso de purificación moderna” (Latour, 1993; Descola, 2013; Viveiros de Castro, 2014).

En América Latina, especialmente en los Andes, el sapo nunca perdió completamente su dimensión ritual. La colonización reconfiguró los cultos locales, pero su presencia persistió en espacios domésticos, negocios y trabajos, cerros sagrados y prácticas populares. En el contexto aimara contemporáneo, el sapo aparece en diversos altares, ferias, espacios públicos y mesas rituales como la *waxt’a*, asociado a prosperidad económica: “atrae la plata”, sostienen sus creyentes. Así, interviene en la economía popular, convirtiéndose en un actor material en los *entramados económicos*. *Entramados económicos* en el entendido de un conjunto de prácticas y relaciones materiales y espirituales por medio de las *cosas*, emociones, conocimientos, memorias múltiples y trayectorias históricas ancladas en las cosas y expresadas por medio de rituales que organizan la producción y circulación de la abundancia, articulando dimensiones materiales, simbólicas y espirituales en el ejercicio de las prácticas económicas populares.

La declaración de Bolivia como Estado Plurinacional a través de la Constitución de 2009 legitimó la presencia de la Pachamama en el espacio público y en rituales estatales. Esto abrió nuevas formas de relacionamiento entre humanos y no humanos, aunque también generó resistencias, como se evidenció en 2019 durante la presidencia de Jeanine Áñez, quien planteaba el regreso al Estado-nación y al catolicismo.

En este contexto, el culto al sapo adquiere su dimensión política: la waxt'a materializa la coexistencia de diversas visiones de mundo y reafirma la relevancia de los seres no humanos, que participen de la economía, la política y la memoria histórica.

El sapo, entonces, permite repensar lo político más allá de la forma antropomórfica impuesto por el Estado-nación y el catolicismo, —a decir de Sahlins en Hartog (2003/2007)—. En la economía popular andina, media la circulación de bienes y emociones, estableciendo pactos de reciprocidad y equilibrio. Su presencia en altares y rituales demuestra la coexistencia de múltiples formas de comprender el mundo y la vida en un mismo territorio político y refleja un proceso de resistencia a las imposiciones coloniales. La historia republicana separó naturaleza y cultura; el pensamiento aimara mantuvo viva la relación con la Pachamama, reconociendo voluntad y memoria en animales, montañas y ríos. Así, la dignidad del sapo es también la dignidad de la Pachamama y del pueblo aimara, que a través de las cosas reafirma su memoria y continuidad existencial.

Desde esta perspectiva, considero que el sapo emergió como símbolo de resistencia y de visión de mundo de los aimaras, que persiste en los rituales, el ejercicio político, las prácticas económicas, y la vida cotidiana. Su presencia no es un vestigio del pasado, sino que constituye un actor político contemporáneo que articula lo material y lo espiritual, ofreciendo una posibilidad de imaginar un Estado desantropomorfizado, capaz de dialogar con la naturaleza y coexistir con ella desde la reciprocidad.

Pajchiri, la waxt'a y el sapo: la persistencia de la Pachamama

Pajchiri es uno de los centros ceremoniales más importantes dentro del tejido espiritual que articula los espacios de consagración para los yatiris en la región surandina, tanto en áreas urbanas como rurales. En la cosmovisión aimara, los nevados y

cerros son concebidos como achachilas y wak'as —abuelos y lugares sagrados— cuya presencia tutela la vida. Así, a lo largo del territorio aimara se reconocen diversos entes protectores como Lloco Lloco, Santiago de Bombori, Illimani, Sajama, Illampu, Mururata o Huayna Potosí entre muchos otros, cada uno con su jerarquía, su especialidad y su propia historia. Todos conforman un tejido de relaciones que escribe, sobre el territorio, un texto vivo donde se expresa y reproduce la memoria aimara. En este contexto, Pajchiri ocupa un lugar singular: es un cerro sagrado sin cruces, grutas o capillas católicas, visitado tanto por aimaras como por no aimaras, conversos y no conversos, que acuden en busca de respuestas ante aquello que Gluckman (1962; 1968) denominaría su “situación social”.

Ubicado a 92 km de la ciudad de La Paz y a 4.420 m s. n. m., su cima se encuentra a unos 8 km de la carretera hacia Tiquina, en la zona circunlacustre del Titicaca. Su relevancia radica en que remite al principio de los tiempos y es considerado un ente de poder, influencia atribuida al espíritu de Q'ixu Q'ixu —el Rayo— cuya fuerza habría partido las dos formaciones rocosas conocidas como Pachamama y Pachatata —madre y padre de la tierra, respectivamente—. De ahí la idea de que Pajchiri separa lo bueno de lo malo y actúa como “juez de jueces y justo de justos”. Esta cualidad explica la intensidad ritual que caracteriza al mes de agosto, cuando se multiplican las ofrendas para resolver problemas individuales y colectivos. Quienes acuden a waxt'ar en el cerro suelen hacerlo impulsados por la incertidumbre y la urgencia: la frustración por no sanar pese a los gastos médicos, acceder a una prosperidad económica, la esperanza de un fallo jurídico favorable o la necesidad de destrabar conflictos familiares, mercantiles o políticos.

En el lugar también se practican rituales de “mesas negras”, empleados para alejar enemigos y malas energías, y para “abrir el camino” laboral del creyente. La mayor parte de las plegarias giran en torno a disputas, negocios, litigios

por propiedades o estrategias de poder. A ello se suma la presencia de un sapo cuya forma surge de manera natural en la roca. No se trata de un simple accidente geológico: para los devotos es un ser vivo portador de memoria y poder. A él confían sus peticiones relacionadas con el trabajo y la prosperidad, y depositan ofrendas que condensan experiencias, preocupaciones y aspiraciones vinculadas a talleres familiares, pequeños comercios o emprendimientos que articulan economías locales e incluso globales, como la importación de mercancías desde China. Cada petición dejada frente a la roca, cada gesto de respeto y cada ofrenda renuevan la relación entre los seres que habitan este mundo y permiten que la memoria de quienes acuden a Pajchiri siga viva, se fortalezca y viaje de generación en generación.

Así, las demandas que los creyentes entregan a Pajchiri abarcan ámbitos administrativos, jurídicos, comerciales y políticos, y participan en la reconfiguración de la comprensión contemporánea de la *waxt'a* entre los aimaras. Los visitantes están atravesados por diferencias de clase, raza y género, pero comparten una búsqueda común que oscila entre la conversión de la Pachamama al cristianismo y del cristianismo a la Pachamama. Para los yatiris, las *wak'as* y *achachilas* —entre ellas Pajchiri— constituyen espacios privilegiados para realizar la *waxt'a*. Parto de la premisa de que este ritual transmite un discurso cargado de significados ideológicos, constantemente actualizados, lo que hace de la *waxt'a* un acto político vivido que nunca se repite de manera idéntica. Sus variaciones expresan un lenguaje mediante el cual se afirma anualmente la resistencia y la reivindicación de derechos aimaras históricamente constituidos, y al mismo tiempo intervienen en los procesos de cohesión social, hegemonía y legitimación. Desde esta perspectiva, la *waxt'a* se ha convertido en un acto perenne de construcción política en Bolivia.

La invocación a la Pachamama condensa además una fuerza transgresora de resistencia frente a la dominación colonial

y expresa la persistencia de las deidades prehispánicas más allá de la imposición católica. Estas coexistencias —renovadas anualmente en fiestas patronales y celebraciones rituales— no pueden comprenderse adecuadamente bajo el concepto de sincretismo. Por ello, es necesario analizar la transición histórica por la cual la presencia de la Pachamama pasó de ser tachada como una práctica “india” negada por sectores mestizos, criollos y por el propio Estado republicano, a convertirse en un símbolo destacado de la identidad plurinacional. Es decir; estoy hablando de *identidades traslapadas* que coexisten de forma total o parcial, que se expresan por medio de las memorias históricas con trayectorias históricas diversas y diferentes, las cuales no se anulan entre sí, sino que coexisten de manera dinámica y no estática. Este traslape no implica una síntesis homogénea ni una fusión estable, sino un proceso continuo de conflicto, negociación y rearticulación, en el que las identidades se exaltan y apaciguan en distintos grados según el contexto histórico, político y económico en el que se activan. Comprender esta transformación exige atender a la agenda estatal en sus distintos momentos, siempre cuestionada por la construcción de una identidad nacional inestable y sujeta a disputa.

En ese marco, la waxt’a emerge como una de las expresiones más potentes de la identidad aimara y como un pilar dentro de los rituales del Estado Plurinacional, ritual que sigue siendo cuestionado desde la óptica del Estado-nación moderno. Aunque la waxt’a se practica todo el año, cobra especial fuerza en agosto, el mes de la Pachamama. Sus elementos —semillas de diversos pisos ecológicos, lana de llama, illas, incienso, copal, sullu, coca, alcohol, untu (grasa de llama), flores y frutas— se comercializan en tiendas de las ciudades de La Paz y El Alto. De esta manera, en la mesa que es incinerada como parte del proceso del ritual, se estructura por medio de sus illas y representaciones como un microcosmos en el cual y por el cual interactúan los seres vivos en esta parte del planeta.

En este contexto, el sapo adquiere un lugar central, pues su asociación histórica con la fertilidad de la tierra y el agua se ha extendido hacia la prosperidad económica. Lejos de ser una simple figura simbólica, participa activamente en la vida material de los creyentes. Las representaciones del sapo realizada en diferentes y diversos materiales habitan altares domésticos y comerciales, donde reciben hojas de coca, alcohol, dulces o cigarros para atraer clientes y asegurar ventas. Así, desde una perspectiva como la sugerida por Bruno Latour (1993), la economía popular aimara integra al sapo como un mediador que articula relaciones entre espiritualidad y subsistencia; un actor material dentro del andamiaje de los circuitos de intercambio.

La arqueología y la antropología han documentado el poder del sapo en los Andes desde tiempos prehispánicos: convocador de lluvias, garante de fertilidad y mensajero de la Pachamama. Su ambigüedad —terrestre y acuático, visible e invisible, masculino y femenino— lo convierte en un ser puente entre mundos. Pese a los esfuerzos coloniales por despojarlo de su dimensión ritual, el sapo nunca desapareció; al contrario, fue desplazado a los hogares y prácticas cotidianas, reconfigurando su presencia en la vida popular. En la actualidad continúa representando la prosperidad económica y mantiene un papel activo en la circulación de bienes y afectos dentro de la economía popular andina, donde su figura condensa una racionalidad económica basada en la reciprocidad y en la convivencia de lógicas no antropomórficas con prácticas capitalistas.

El sapo, así, se vuelve también un símbolo de la plurinacionalidad: expresa la coexistencia de múltiples visiones de mundo en un mismo territorio político. La memoria aimara revela que el sapo ha resistido colonización, evangelización, republicanismo y modernidad, manteniéndose como un actor político contemporáneo cuya presencia ilumina conflictos entre Estado, naturaleza y sociedad. En su cuerpo y en su sonido ancestral resuenan memorias que sostienen modos de vida que no han abandonado su vínculo con la Pachamama.

El ritual de la waxt'a y el culto al sapo no son supervivencias del pasado, sino prácticas plenamente vigentes que configuran economías, emociones y políticas a través de la relación material que mantenemos con las *cosas*. Estas condensan memorias diversas, locales y globales, que conviven en un campo simbólico en constante transformación y confrontación.

Las *cosas* —objetos rituales, entidades naturales, mercancías— no solo median relaciones materiales: movilizan emociones, deseos y formas de autoridad simbólica que se actualizan en cada ofrenda. En el marco del Estado Plurinacional, el reconocimiento oficial de la Pachamama y la incorporación de la waxt'a como ritual estatal sitúan al sapo, entre otros seres no humanos, como emblema de una posibilidad política más amplia: imaginar un Estado desantropomorfizado, capaz de sostener una institucionalidad que no aspire a dominar la naturaleza, sino a dialogar con ella desde otras formas de responsabilidad, reciprocidad y convivencia.

Figura 13.1

La representación del sapo en la waxt'a



Nota. Fotografía de Vladimir Llusco.

Figura 13.2

La ciudad de El Alto, La Ceja, los sapos y la iglesia



Nota. Fotografía de Vladimir Llusco.

Figura 13.3

El sapo, sus ofrendas y su altar.



Nota. Fotografía de Vladimir Llusco.

Economía popular y circulación de la prosperidad

La dimensión económica de la *waxt'a* resulta fundamental para comprender las dinámicas de las actividades económicas populares en los Andes bolivianos, donde la práctica ritual se entrelaza con la producción artesanal, el comercio local y diversas actividades económicas, tanto dentro como fuera de los contextos urbanos. Este entrelazamiento no debe entenderse como una simple coexistencia entre economía y religión, sino como una otra forma de visión de mundo y comprensión de vida en la que las cosas que representan al sapo acompañan la estructuración de los vínculos económicos, sociales y espirituales. En este sentido, la *waxt'a* no solo expresa la reciprocidad entre seres vivos, sino que también materializa las bases morales, emocionales y políticas que sustentan la economía popular.

En los mercados, ferias y espacios domésticos, la presencia del sapo simboliza y activa la prosperidad, la atracción de dinero y la fluidez del intercambio, otorgándole a estas cosas una vida social que se desplaza en distintos contextos. Su eficacia no deriva únicamente de la creencia, sino de su capacidad de intervenir en el mundo, “atraer dinero”, “llamar plata” y generar prosperidad, movimiento y equilibrio en la vida económica de quienes participan en la práctica.

En Pajchiri y sus alrededores, la circulación de las cosas rituales es amplia y constante. El sapo también se manifiesta mediante una roca cuya forma natural recuerda la figura de este animal. En las ciudades, la representación del sapo se desplaza entre altares domésticos, puestos de venta y ferias populares, estableciendo un entramado económico en términos simbólicos y materiales que reproduce la economía local. Como ha señalado Ingold (2011), los materiales no son inertes, sino que participan en el devenir de las relaciones humanas; en este caso, las cosas rituales sostienen la confianza colectiva en la abundancia y la reciprocidad. En cada *waxt'a*,

los creyentes agradecen y solicitan prosperidad mediante un protocolo de ofrendas que incluye hojas de coca, cigarrillos, alcohol, lanas de colores y billetes en miniatura, combinados para reactivar el flujo de energía y riqueza. Esta circulación ritual no solo fortalece los lazos con la Pachamama, sino que también dinamiza la economía popular, generando un sistema alternativo de crédito y confianza social.

La economía popular, en este marco, no debe concebirse como una categoría marginal o informal, sino como una forma de organización productiva y simbólica profundamente vinculada a la cosmovisión andina. En los mercados de La Paz y El Alto, las comerciantes suelen encender una *waxt'a* antes de inaugurar sus negocios, talleres, empresas y otras iniciativas, “dando de comer” a la Pachamama para atraer clientes, ventas prósperas y dinero. Este acto ritual produce efectos concretos: reorganiza el espacio económico según una lógica de interdependencia, donde la prosperidad no se distribuye por acumulación, sino por circulación. Como plantea Gudeman (2001), en las economías populares los bienes no se conciben como mercancías aisladas, sino como parte de una “casa”, un entramado de relaciones donde el valor surge del vínculo social y ecológico.

El ritual también funciona como un espacio de reconfiguración del valor. En la lógica del capitalismo global, el dinero se presenta como un equivalente universal; sin embargo, en la práctica ritual aimara, los billetes miniaturizados ofrecidos en la *waxt'a* no representan una abstracción económica, sino una mediación emocional. Al “dar” dinero simbólico al sapo, los creyentes reactivan un principio de reciprocidad que subvierte la lógica del capital: la riqueza no se produce por acumulación, sino por devolución. Para los aimaras, el dinero debe circular en armonía: “tiene vida” y su estancamiento genera desequilibrio. La presencia activa del sapo se extiende así al plano económico, actuando como regulador simbólico del flujo monetario.

Dentro de este entramado económico, el sapo aparece como figura ambivalente: su poder deviene tanto de su asociación con la fertilidad y el agua como de su capacidad de mediación con fuerzas invisibles que determinan el devenir económico. No es, por tanto, un simple ícono, sino un ser vivo que participa activamente en la producción y circulación del bienestar. En los altares domésticos se le alimenta con cigarrillos, azúcar, hojas de coca, dulces, cerveza y alcohol, solicitándole que “llame la plata”. Este gesto cotidiano refleja una comprensión ecológica y económica profunda: la prosperidad depende del equilibrio entre los mundos visibles e invisibles, y las cosas rituales son mediadores esenciales de ese equilibrio.

Desde esta perspectiva, la *waxt'a* puede entenderse como una síntesis de una visión de mundo que contiene comprensiones económicas y políticas particulares que articulan lo global con lo local y local con lo global, donde los bienes materiales, las emociones y las energías espirituales se entrelazan. Latour (1993) señaló que la modernidad separó artificialmente la naturaleza de la sociedad, creando una “gran división” entre humanos y no humanos. La práctica ritual aimara, en cambio, encarna una cosmovisión que niega esa separación: cerros, ríos, animales y objetos participan del mismo campo de existencia que los humanos. En Pajchiri, esta comprensión se manifiesta en la convivencia entre la devoción ritual y la actividad comercial. Los comerciantes que suben al cerro a “dar de comer” al sapo y a la tierra no lo hacen como un acto supersticioso, sino como una estrategia de gestión económica que asegura la continuidad del negocio, la armonía familiar y el bienestar del creyente.

La dimensión económica del ritual aimara trasciende la simple circulación de bienes y la creación de obligaciones mutuas, tal como propone Mauss (1925) con su concepto de “don”. Desde la perspectiva aimara, la *waxt'a* no se limita a reproducir un ciclo de reciprocidad entre individuos; más bien, articula relaciones complejas entre humanos,

no humanos y el mundo espiritual. El ofrecimiento a la Pachamama y a los sapos no es una transacción que pueda reducirse a un intercambio de equivalencias, sino un acto que reconoce la agencia de los seres no humanos y preserva la memoria histórica de la identidad aimara. La economía ritual coexiste con la economía monetaria, pero opera bajo lógicas distintas: las cosas rituales —ya sean figuras de sapos, miniaturas o illas— circulan para sostener vínculos de coexistencia, respeto y balance con el mundo que habitan los aimaras. En los mercados, la venta de estas cosas, como ocurre durante la fiesta de la Alasita, —es, antes que boliviana, aimara. Cada 24 de enero se celebra esta festividad dedicada a la abundancia y la prosperidad, en la que los creyentes compran y regalan illas que desean ver materializadas en sus vidas— no solo genera ingresos; reafirma la interdependencia entre lo sagrado y lo cotidiano, entre la espiritualidad y la subsistencia, mostrando que la *waxt'a* encarna un entramado económico que no puede entenderse plenamente desde la noción occidental de “don”.

El carácter performativo del ritual transforma, además, el sentido del trabajo y la producción. Ingold (2013) propone que el hacer humano es siempre una forma de corresponder con los materiales y fuerzas del entorno, aunque esta interpretación no agota la complejidad de la práctica ritual que estoy observando. En la *waxt'a*, sus practicantes no producen en aislamiento, sino en diálogo con las cosas. El humo del incienso, el olor del alcohol y la textura de la coca configuran una atmósfera sensorial que actualiza la relación entre los mundos. Esta performatividad es económica y estética a la vez: da forma a una ética del trabajo basada en el vínculo sentimental y conexión emocional con la Pachamama. La economía popular, en consecuencia, se sostiene tanto en el esfuerzo humano como en la colaboración de los seres no humanos.

En este marco, la memoria cumple un papel crucial. La práctica ritual no solo reactiva vínculos y emociones con la

Pachamama, sino que actualiza una memoria histórica de resistencia y continuidad cultural y espiritual. Frente a la historia dominante —que privilegia el archivo, el documento y la linealidad temporal—, la memoria aimara se inscribe en las cosas, los gestos y los espacios. Cada sapo en un altar, cada hoja de coca quemada, cada mesa ofrecida son formas de recordar y afirmar la existencia colectiva. En tiempos de crisis o cambio político, como en 2019, cuando resurgió un discurso cristiano-conservador que pretendió relegar lo étnico al ámbito folclórico, estas prácticas adquieren un carácter político más evidente. La *waxt'a* se convierte así en un acto de afirmación plurinacional, una forma de economía política que desafía el monopolio estatal sobre los símbolos de prosperidad y legitimidad moral.

En síntesis, la dimensión económica de la *waxt'a* revela la profundidad simbólica y política de la economía popular andina. Los sapos, las miniaturas y las ofrendas no son simples adornos ni supersticiones, sino elementos constitutivos de un sistema de intercambio donde lo material y lo espiritual se retroalimentan. Siguiendo a Assmann (1995), la *waxt'a* puede entenderse como una práctica de memoria cultural: a través de la ritualidad, las cosas simbólicas y las ofrendas, se preservan y transmiten conocimientos, valores y experiencias colectivas que reafirman y consolidan la identidad aimara y permiten que la memoria histórica sobreviva más allá de la memoria comunicativa cotidiana.

En cada mercado, feria y hogar donde un sapo fuma, “come” coca o recibe ofrendas, se renueva no solo la fe, sino también la memoria colectiva de los aimaras. De esta manera, la *waxt'a* se constituye en una práctica de recuerdo y afirmación cultural que articula lo económico, lo político, lo espiritual, lo cultural y lo social, asegurando la continuidad de las visiones de mundo étnicas y la resistencia frente a procesos de cambio o imposición estatal de otras visiones de mundo.

Política, plurinacionalidad y conflictos contemporáneos

El análisis del culto al sapo no puede separarse del contexto político contemporáneo boliviano, donde la Pachamama y la waxt'a se han convertido en espacios de confrontación simbólica, ideológica y espiritual. Ambas condensan conflictos de larga data entre el Estado moderno y las visiones de mundo étnicas, entre la historia escrita desde la institucionalidad republicana y la memoria viva que resiste en los rituales y las cosas. Desde esta perspectiva, el culto al sapo, lejos de ser una práctica supersticiosa o meramente religiosa, constituye una manifestación profunda de la vitalidad de la Pachamama y de los vínculos entre seres vivos dentro de la cosmovisión aimara.

La promulgación de la Constitución Política del Estado en 2009 significó, en apariencia, la materialización de imaginar un Estado distinto, un Estado concebido desde lo étnico; es decir, el reconocimiento de la plurinacionalidad como principio estructurador del Estado. A diferencia de la noción de nación única, que homogeneiza culturas, espiritualidades, memorias históricas y visiones de mundo, la plurinacionalidad reconoce la coexistencia y la autonomía e interacción de múltiples cosmovisiones dentro de un mismo marco estatal. Con este cambio, se inscribió jurídicamente la presencia de la Pachamama en la esfera pública y se legitimó la waxt'a como ritual de Estado. Este reconocimiento no solo tuvo un valor simbólico, sino que también constituyó un acto de reparación histórica frente a siglos de negación y subalternización de las espiritualidades étnicas. La Pachamama pasó a formar parte del discurso político como sujeto de derechos y principio ético de convivencia. De manera paralela, la waxt'a dejó de ser un ritual juzgado por las iglesias o relegado a los márgenes de la vida popular, para convertirse en un acto ceremonial que acompañaba las posesiones presidenciales, la inauguración de obras públicas y otras celebraciones estatales.

Sin embargo, esta apertura encontró límites y generó cuestionamientos que se materializaron en una serie de conflictos, siendo uno de los más emblemáticos el ocurrido en 2019, durante la crisis política que culminó con la renuncia de Evo Morales y el ascenso de Jeanine Áñez. En su discurso de proclamación, Áñez afirmó: “nunca más volverá la Pachamama al Palacio de Gobierno”, frase que sintetizó la voluntad de restaurar la República y sus símbolos cristianos frente a la institucionalidad plurinacional. Al mismo tiempo, el líder cívico Luis Fernando Camacho ingresó al Palacio Quemado sosteniendo una Biblia, declarando que “la Biblia vuelve a Palacio”, en un acto cargado de teatralidad religiosa y profunda carga colonial. En ese gesto, el conflicto político se transformó en un conflicto teológico y simbólico: la Biblia, emblema de la nación cristiana y del orden colonial, desplazaba a la Pachamama, símbolo del Estado plurinacional y de las espiritualidades étnicas.

Este episodio no fue un hecho aislado, sino la manifestación de una larga disputa por el sentido del Estado y de la nación en Bolivia. Por un lado, se encontraba el proyecto de la plurinacionalidad, que se presenta como una oportunidad para incorporar en el Estado las cosmovisiones y memorias étnicas, reconociendo la coexistencia de múltiples naciones dentro del mismo territorio. Por otro lado, persistía el imaginario de la nación moderna, homogénea, católica y mestiza, que se fundó en 1825 y estructuró la historia dominante del país. En ese marco, el retorno de la Biblia y la exclusión de la Pachamama representaron el intento de restaurar una nación monocultural, negando los avances simbólicos y políticos del proceso plurinacional.

La frase de Áñez adquirió un poder performativo, pues más allá de su contenido literal, reinstaló la jerarquía entre lo sagrado cristiano y lo sagrado aimara. Implícitamente, negaba la posibilidad de que la Pachamama tuviera un lugar legítimo en el espacio político. La exclusión del ritual de la *waxt'a* del Palacio de Gobierno fue, en ese sentido, un acto de

despojo simbólico que reabrió las heridas coloniales inscritas en la memoria colectiva de los pueblos aimaras y quechuas.

La Pachamama, comprendida desde la visión aimara, no es una metáfora de la naturaleza, sino una totalidad relacional donde convergen el tiempo, el espacio y la vida. La palabra Pachamama no remite únicamente al suelo o al mundo material, sino a una cosmovisión y comprensión de la vida, que en este caso se manifiesta desde lo aimara. Desde esta perspectiva, el sapo ocupa un lugar central en la *waxt'a* como mensajero de la Pachamama, mediador entre los mundos y símbolo de fertilidad, abundancia y equilibrio. Su culto cada martes y viernes representa la materialización de una memoria que se actualiza constantemente en los rituales y altares domésticos. Entonces, el acto de “hacer fumar al sapo”, de ofrecerle coca o alcohol, no responde a una superstición, sino a una práctica cultural viva que mantiene la comunicación entre las esferas visibles e invisibles del cosmos.

Estas prácticas, lejos de ser resabios del pasado, revelan la vitalidad de una economía popular profundamente anclada en la cosmovisión andina. En ella, las cosas como el sapo o sus illas no son simples representaciones, sino seres vivientes con capacidad de intervenir en el mundo, manifestando poder, comunicación, protección y transformación de la vida material y espiritual de las personas. En este sentido, la *waxt'a* funciona como un acto de equilibrio que articula lo económico, lo ritual y lo político, desafiando la idea moderna de que solo los humanos son sujetos de acción o conocimiento.

Desde una perspectiva política, la institucionalización de la *waxt'a* en el Estado Plurinacional representó una ruptura significativa con la historia republicana. El hecho de que un presidente realizara ofrendas a la Pachamama antes de asumir el cargo o inaugurar obras públicas fue interpretado por amplios sectores de la población como la “etnización del Estado”. Sin embargo, esta incorporación también generó peligros internos: por un lado, amplió el repertorio simbólico

del Estado; por otro, corrió el riesgo de reducir la espiritualidad andina a una estética política o a un gesto ceremonial sin contenido emancipador.

Así, el conflicto entre la Biblia y la *waxt'a* no se limita a una disputa religiosa, sino que expresa la lucha por la hegemonía simbólica del Estado. Mientras la Biblia reitera el orden jerárquico del Estado-nación, la *waxt'a* propone otorgarle un otro contenido a la plurinacionalidad centrada en la interdependencia entre seres. La primera legitima la autoridad desde la trascendencia divina; la segunda la construye desde la immanencia de la Pachamama.

La pluralidad de miradas que rodean al culto al sapo —*yatiris*, creyentes, Estado, academia e iglesias— genera fricciones, pero también espacios de complementariedad. Cada una de estas perspectivas produce su propia interpretación sobre el significado del ritual y su función social. Para los *yatiris*, el sapo es un ser con espíritu, un mediador que escucha y responde; para los creyentes, representa la esperanza de éxito económico; para el Estado, forma parte de un símbolo de la identidad plurinacional; y para las iglesias cristianas, un vestigio de idolatría que debe ser superado. Estas posiciones ponen de manifiesto la complejidad del diálogo de las diferentes visiones de mundo en Bolivia, donde lo sagrado, lo político y lo económico se entrecruzan constantemente.

La *waxt'a* y el sapo operan como nodos donde se entrelazan distintas temporalidades, historias y memorias. En ellos coexiste la memoria étnica, que se transmite mediante las cosas rituales que circulan en ferias, mercados y talleres artesanales. Este tránsito de lo sagrado a lo cotidiano demuestra que la memoria aimara no se conserva únicamente en archivos escritos, sino en los cuerpos, los materiales y las cosas. La *waxt'a* es, en este sentido, una forma de archivo vivo, un dispositivo de memoria cultural (Assmann, 1995) que resiste al olvido histórico impuesto por la nación moderna a través de acciones y prácticas culturales que atraviesan los

posicionamientos políticos y las actividades económicas de los aimaras creyentes en la Pachamama.

Los acontecimientos de 2019 evidenciaron, además, la vulnerabilidad de los avances logrados por el Estado Plurinacional. La exclusión simbólica de la Pachamama del Palacio de Gobierno fue percibida por amplios sectores aimaras como un intento de borrar nuevamente su presencia del espacio público. Sin embargo, también reactivó una memoria de resistencia: los aimaras reafirmaron su vínculo con la Pachamama mediante rituales, reforzando la *waxt'a* como un acto de afirmación política frente al poder estatal. De este modo, el acto ritual devino en práctica política y en una estrategia de preservación de la memoria colectiva (Assmann, 1995).

Desde una lectura histórica, el culto al sapo y la *waxt'a* pueden interpretarse como continuidades de antiguas formas de reciprocidad con las fuerzas de la vida. En tiempos prehistóricos, los sapos eran considerados guardianes de las aguas, y sus imágenes aparecían en cerámicas, textiles y tallados rituales. La colonia intentó erradicar estas prácticas mediante campañas de evangelización, pero no logró extinguirlas; más bien, las reconfiguró en un proceso de identidades traslapadas en el que las deidades étnicas convivían con santos cristianos. En la actualidad, esa misma lógica de coexistencia y resignificación continúa vigente, evidenciando la persistencia de una memoria que se rehúsa a morir (Assmann, 1995).

La plurinacionalidad, en este sentido, no debe entenderse solo como una estructura institucional o un discurso jurídico, sino como una práctica cotidiana que reconoce la coexistencia de múltiples formas de ver el mundo y concebir la vida. Reconocer la dignidad del sapo, de la *waxt'a* y de la Pachamama es reconocer la dignidad de los pueblos que sostienen esas prácticas. Por ello, el Estado Plurinacional representa una oportunidad histórica para desantropomorfizar la política y las actividades económicas, para imaginar un Estado

que no se funda únicamente en la figura del sujeto humano, sino en la red de interdependencias que constituyen la vida.

Sin embargo, este proceso sigue siendo frágil. La cooptación estatal de los símbolos andinos y la retórica ambientalista han diluido, en algunos casos, el contenido político y espiritual de la Pachamama. La persistencia del extractivismo, la desigualdad y el racismo institucional muestran que la “descolonización” del Estado no puede realizarse solo en el plano del discurso. Requiere una transformación profunda en la manera en que se conciben las relaciones entre humanos, naturaleza y cosas.

En conclusión, el culto al sapo y la *waxt'a* constituyen una memoria viva que articula historia, memoria, espiritualidad y economía popular. Su estudio permite comprender cómo la cultura aimara ha resistido los procesos de colonización simbólica mediante la práctica ritual y el uso político de las cosas. Frente a los intentos de re-cristianización del Estado y de negación de la Pachamama, el sapo emerge como un signo de continuidad vital, expresión de una visión de mundo donde lo humano y lo no humano se tejen en relaciones de reciprocidad y respeto mutuo. Así, la *waxt'a* no solo es un ritual, sino la síntesis de una forma de comprensión de la vida y el mundo. A través del sapo y de las cosas que conforman la mesa ritual, los aimaras reafirman su derecho a existir en sus propios términos, a narrar su historia desde su memoria, y a participar en la construcción de un Estado que reconozca, sin jerarquías, todas las formas de vida que habitan en la Pachamama.

Conclusión

El culto al sapo dentro de la *waxt'a* revela la profunda interdependencia entre espiritualidad, economía, política, historia y memoria en la cosmovisión aimara. Lejos de ser un mero rito agrícola o una superstición, los sapos y las cosas rituales funcionan como mediadores entre los mundos visibles e invisibles, articulando la vida material, simbólica y económica

de las comunidades. La *waxt'a* constituye un archivo vivo de la memoria cultural, donde los saberes, valores y prácticas aimaras se actualizan continuamente a través de los rituales, las ofrendas y la circulación de las cosas, asegurando la continuidad histórica frente a siglos de colonización, marginalización y apropiación simbólica. Cada sapo que “come” coca o “toma” vino, cerveza o gaseosa, cada mesa ritual organizada con illas, dulces y alcohol, actualiza vínculos con la Pachamama y reafirma la circulación de recursos y emociones dentro de la economía popular, evidenciando que lo material y lo espiritual no pueden separarse en la vida cotidiana aimara.

La Constitución de 2009, evidenció tanto las oportunidades como los conflictos de un proyecto que busca reconocer la diversidad cultural y espiritual del país. Este reconocimiento jurídico y político permitió que la Pachamama y los rituales aimaras se incorporaran en ceremonias estatales, desde inauguraciones hasta posesiones presidenciales, lo que algunos interpretaron como un proceso de visibilización étnica en el Estado. No obstante, episodios como la exclusión simbólica de la Pachamama en 2019 revelan la fragilidad de estos avances y la persistencia de imaginarios coloniales y cristianos que intentan monopolizar la legitimidad simbólica del Estado. Frente a estas disputas, la *waxt'a* y el culto al sapo se consolidan como prácticas de resistencia cultural y política, reafirmando la memoria histórica de los pueblos aimaras y su derecho a existir y narrar su historia desde sus propios términos.

La dimensión económica del ritual evidencia, además, que la *waxt'a* es un sistema de relaciones integrales donde las cosas, las emociones y la memoria histórica aimara interactúan dentro del entramado económico de las prácticas económicas populares. Los sapos y otros objetos rituales actúan como mediadores de la prosperidad y el bienestar, generando un modelo de economía popular basado en la circulación y no en la acumulación, donde la riqueza se concibe como un flujo que vincula lo humano, lo no humano, lo espiritual y lo

material. Esta lógica desafía la visión moderna de economía centrada únicamente en el capital, mostrando que, para los aimaras creyentes en el sapo, la prosperidad depende del equilibrio entre los mundos visibles e invisibles y de la confianza colectiva activada a través de la práctica ritual.

Finalmente, el culto al sapo y la waxt'a constituyen un espacio donde tradición y modernidad dialogan, demostrando que las prácticas rituales no son un pasado inmóvil, sino un presente activo que permite la adaptación, la resistencia y la construcción de nuevas formas de ciudadanía y vida social. La Pachamama, el sapo y las cosas rituales no son metáforas, sino agentes que sostienen la continuidad histórica, fortalecen la economía popular, articulan la política plurinacional y mantienen viva la memoria de los pueblos. En este sentido, la waxt'a representa una forma integral de comprender la vida: un entramado de relaciones que reconoce la interdependencia entre todos los seres vivos, y que propone un modelo de convivencia, economía y política basado en la multiplicidad de memorias e historias, la diversidad de visiones de mundo y comprensiones de vida de todos los que habitamos el planeta.

Bibliografía

- Andersen, H. C. (2005). *Fairy tales*. Penguin Classics. (Trabajo original publicado entre 1837 y 1872).
- Assmann, J. (1995). *Cultural memory and early civilization: Writing, remembrance, and political imagination*. Cambridge University Press.
- Descola, P. (2013). *Beyond nature and culture* (J. Lloyd, Trans.). University of Chicago Press. (Trabajo original publicado en 2005).
- Gell, A. (1998). *Art and agency: An anthropological theory*. Oxford University Press.
- Gluckman, M. (1962). *Essays on the ritual of social relations*. Manchester University Press.
- Gluckman, M. (1968). *Analysis of a social situation in modern Zululand*. Manchester University Press.

- Gudeman, S. (2001). *The anthropology of economy: Community, market, and culture*. Blackwell.
- Hartog, F. (2007). *Regímenes de historicidad* (N. Durán & P. Avilés, Trans.). Universidad Iberoamericana. (Trabajo original publicado en 2003).
- Holbraad, M. (2022). *Puede hablar la cosa?* (Gorjón, M., Trad.) En H. Wardle y J. Shaffner (Eds.), *Cosmopolitics: The Collected Papers of the Open Anthropology Cooperative*, Volumen I. (Trabajo original publicado en 2017). <https://arqueologiasdelporvenir.com.ar/traduccion/puede-hablar-la-cosa/>
- Ingold, T. (2011). *Being alive: Essays on movement, knowledge and description*. Routledge.
- Ingold, T. (2013). *Making: Anthropology, archaeology, art and architecture*. Routledge.
- Latour, B. (1993). *We have never been modern*. Harvard University Press. (Trabajo original publicado en 1991).
- Mauss, M. (1925/2000). *The gift: Forms and functions of exchange in archaic societies*. Cohen & West.
- Murra, J. V., & Condarco Morales, R. (Eds.). (1978). *Intercambio y complementariedad en los Andes: Antecedentes y alternativas*. Instituto de Estudios Peruanos.
- Perrault, C. (2012). *The complete fairy tales*. Oxford University Press. (Trabajo original publicado en 1697)
- Viveiros de Castro, E. (2014). *Cannibal metaphysics: For a post-structural anthropology* (P. Skafish, Ed. & Trans.). University of Minnesota Press.

CAPÍTULO 14

Vulnerabilidad socioecológica y trata en mercados sexuales en contextos de crisis e informalidad: ejemplos desde Venezuela

Irina Zudina

Introducción

En las últimas décadas, la dinámica de las personas involucradas en la venta sexual ha generado debates teóricos y discrepancias tanto éticas como legales. Especialmente en contextos de crisis, quienes venden sexo en el ámbito doméstico y quienes participan en economías sexuales en el extranjero, han sido objeto de debates cargados de juicios de valor, enmarcados en las discusiones más amplias entre posturas prohibicionistas, abolicionistas, regulacionistas y legalizacionistas (De Vries et al., 2023; Kempadoo, 2004; Lamas, 2014, 2016; Meneses-Falcón, 2023; Phillips, 2017; Sanders et al., 2022). La distinción entre quienes participan en el sexo transaccional en un sentido general, quienes recurren al sexo por supervivencia y quienes pasan a ser víctimas de un delito —en particular, la trata de personas— suele

ser difusa y más difícil de identificar en contextos marcados por crisis, regímenes desestabilizados y una alta prevalencia de mercados (sexuales) informales o ilícitos. Sin embargo, existe una brecha de conocimiento sobre las condiciones que colocan a las personas en riesgo de trata dentro de economías sexuales configuradas por procesos de crisis. Abordar esta brecha requiere un marco que vaya más allá tanto de la universalización ecológica de la victimización y la vulnerabilidad, como de la individualización del riesgo.

Uno de los casos más relevantes para abordar la vulnerabilidad a la explotación y la trata en mercados sexuales informales en tiempos de crisis es la Emergencia Humanitaria Compleja (en lo siguiente, EHC), presente en el caso Venezolano que se entrecruza con múltiples crisis simultáneas en los ámbitos local y regional. En general, una EHC o EC se caracteriza por los siguientes indicadores: a) Estado desestabilizado, débil, frágil o fallido; b) desplazamiento de la economía formal hacia la informal y clandestina; c) conflicto armado; d) hambruna y pobreza; e) emigración masiva (Rísquez Parra, 2025).

El éxodo venezolano es el mayor del pasado reciente de América Latina y constituye una de las mayores crisis de desplazamiento forzado a nivel mundial, lo que implica riesgos elevados para las dinámicas de trata transnacional y doméstica. Desde 2015, casi ocho millones de personas han emigrado de Venezuela o han sido desplazadas, debido a la crisis socioeconómica, política y humanitaria que converge en el país. En el extranjero, factores como la xenofobia y las oportunidades limitadas de empleo en mercados laborales formales —especialmente para quienes se encuentran en situaciones precarias o irregulares— seguirán obstaculizando la protección y la integración de las personas migrantes y refugiadas venezolanas (McAuliffe y Oucha, 2024). Las vulnerabilidades socioeconómicas se agravan tanto a nivel doméstico como transnacional, y en particular las mujeres recurren a actos cotidianos de reproducción social e

improvisación económica para sostenerse a sí mismas y a sus familias (John, 2018; Paulino-Ramírez et al., 2023), desde antes de la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela (enero de 2026).

Ante la ausencia de vías legales, acceso a empleo o infraestructuras de protección, muchas personas dependen de forma desproporcionada de redes semitransparentes, economías informales y vínculos relacionales para obtener información, protección, refugio, oportunidades laborales y logística migratoria, tanto dentro del país como en el extranjero (Mesa, 2020; Nagle y Zarama, 2022). Sin embargo, esas mismas redes pueden convertirse en espacios de coerción, reclutamiento y explotación dentro de economías de trata, especialmente cuando actores (organizados) del crimen se infiltran en las estructuras comunitarias y explotan relaciones de confianza para obtener ganancias lucrativas en tiempos de crisis (Locke, 2012; Sabon et al., 2021).

El caso venezolano solo evidencia uno de los muchos contextos en los que las emergencias complejas generan altos niveles de informalidad y riesgo de sufrir daño, violencia y explotación, especialmente en los mercados sexuales. La demanda persistente y las intersecciones entre distintas estructuras económicas (formal/informal, legal/ilegal, regulada/no regulada) muestran la complejidad de identificar, atribuir y definir los delitos.

En este contexto, la pregunta central este capítulo es ¿cómo las personas afectadas por las intersecciones opacas entre formalidad e informalidad, y entre legalidad y criminalidad, están inmersas en estructuras que implican riesgos significativos y requieren ser identificadas? Además, ¿cómo abordar y comprender, de forma práctica, a quienes están en riesgo de ser víctimas de un delito, y cómo enmarcar esta comprensión como una responsabilidad ética que amplíe la discusión sin privatizar ni universalizar riesgo y vulnerabilidad? Finalmente, ¿cómo atender las vulnerabilidades

que surgen en economías sexuales informales en tiempos de crisis, y cómo vincularlas con las rutas que llevan a la victimización en este contexto?

Este capítulo propone un marco socioecológico para abordar y comprender la vulnerabilidad a la explotación y la trata en economías sexuales marcadas por crisis. Un marco socioecológico que considere la interacción de diversos factores en la articulación de la vulnerabilidad al daño no concluye de forma simplista explicando la victimización, sino que ofrece una perspectiva prometedora para entender las características del mercado mismo y explicar cómo surgen y se perpetúan las vulnerabilidades dentro de este.

¿Mercados de victimización?

Las elecciones lingüísticas reflejan valores, intereses y significados políticos subyacentes y moldean cómo se entienden las prácticas y dinámicas en las economías sexuales. La confusión de *prostitución*, aquí como venta de sexo o sexo transaccional, con la *trata de personas* surge de un pánico moral generalizado, particularmente en contextos migratorios (Agustín, 2006b; Cojocar, 2015, 2016; Kempadoo, 2004; Lamas, 2016). La literatura ha señalado sus efectos significativos en la legislación y en las medidas contra la trata, incluidas la investigación, la identificación y la prevención de la explotación sexual (Agustín, 2006a; De Vries et al., 2023; Kempadoo, 2016; Lamas, 2014; Peršak y Vermeulen, 2014; Zudina, 2025). Perspectivas abolicionistas y prohibicionistas ven el sexo transaccional como inherentemente explotador, basado en asimetrías de género y violencia patriarcal, rechazando término trabajo sexual como incompatible con labor legítima (Barry, 1994; Farley, 2004; Coalition Against Trafficking in Women). Marcos regulacionistas y legalizacionistas tratan sexo transaccional como labor, promoviendo inclusión en derechos laborales y protección.

La práctica de asignar estatus de víctima a quien que venda servicios sexuales, especialmente mujeres, puede surgir lógicamente de la teoría abolicionista, pero tiene consecuencias prácticas debatibles. Narrativas de victimización en economías sexuales suelen depender de estereotipos moldeados por intereses políticos, racializados y coloniales (Cojocarú, 2015, 2016; Farrell et al., 2019; Kempadoo, 2004). En contextos de migración, mujeres que venden sexo suelen presumirse traficadas, pese a escasa evidencia empírica que respalde esa suposición (Agustín, 2006a; Phillips, 2017; Pickering y Ham, 2014).

El debate sobre si los servicios sexuales transaccionales constituyen explotación de género o estrategias económicas basadas en agencia queda fuera del alcance de este capítulo. Lo que debe acordarse es que toda actividad que implique amenaza, engaño o fuerza, o que prive a personas de sus derechos humanos y libertad, constituye un delito. La trata de personas, aunque es un concepto debatido, tiene una definición legal en el Artículo 3 del Protocolo de las Naciones Unidas para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Naciones Unidas, 2000).

Esta definición se basa en tres pilares clave: la *acción* (como reclutamiento, transporte, traslado o acogida), los *medios* (incluyendo fuerza, coerción, secuestro, fraude, engaño, abuso de poder o explotación de vulnerabilidad) y el *propósito* de explotación (incluyendo explotación sexual, trabajo forzado, esclavitud, servidumbre o extracción de órganos). Esto distingue la trata de personas del sexo comercial, que se refiere al intercambio de servicios sexuales por dinero u otros recursos.

Observamos que el fenómeno de la trata de personas se enmarca mediante múltiples lentes, a menudo en competencia en teoría y práctica, produciendo una mezcla compleja y éticamente desafiante de lenguajes, narrativas y enfoques en el campo (Farrell y Fahy, 2009; Simmons et al., 2018). Legalmente,

el concepto de trata de personas proviene de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (2000), situándolo en un marco centrado en crimen organizado y seguridad nacional. En la práctica, sin embargo, la trata, sobre todo en sus formas domésticas, suele quedar fuera de este ámbito, lo que produce una comprensión incompleta de su escala y de sus causas de riesgo y vulnerabilidad. Trabajo de campo con personas menores víctimas de trata sexual en México mostró que, pese a la presencia del crimen organizado, la trata doméstica y familiar está estrechamente vinculada a desigualdad, pobreza, acceso limitado a educación y factores culturales (Zudina, 2025). En contraste, marcos de derechos humanos definen la trata como violación de derechos fundamentales y la presentan como asunto de protección y responsabilidad estatal, no de control del crimen organizado. En estas perspectivas, el término *esclavitud moderna* se usa ampliamente en discursos de ONG, a veces reforzando narrativas de salvacionismo y nociones idealizadas de la víctima de trata asociadas a cuerpos y poblaciones marginadas (Cojocarú, 2015; Forringer-Beal, 2022).

No todos quienes cruzan fronteras irregularmente o venden sexo en el extranjero son traficados: el debate suele pasar economías sexuales transnacionales de estudios migratorios a criminología, mostrando sesgos que igualan trabajo sexual transfronterizo y trata (Agustín, 2006b). Además, aunque relacionado, el *tráfico de migrantes* implica movimiento no autorizado con lucro, mientras la trata incluye explotación. Aunque en movilidad transnacional ambos compartan rutas, actores o circunstancias, la diferencia clave es el fin: lucro por movimiento vs. lucro por explotación (Achilli y Kyle, 2024; Campana y Varese, 2016; Horwood, 2015). La trata puede darse en contextos regionales y domésticos, así como en países de tránsito o destino, y no requiere una trayectoria transnacional.

Es esencial reconocer las responsabilidades morales y analíticas al estudiar la trata de personas y la violencia en los

mercados sexuales. El campo incluye marcos diversos, moldeados por distintos supuestos e intereses. En lugar de limitar el análisis a una perspectiva, la investigación debe guiarse por la ética mientras examina críticamente cómo los marcos legales y políticos moldean las definiciones y sesgos actuales de la trata. Se debe entender que la trata ocurre en contextos muy diversos e involucra actores y trayectorias variadas.

La distinción conceptual entre sexo transaccional y trata es difícil de mantener en la práctica, especialmente en trabajo de campo e identificación. Varias expertas y expertos han argumentado que el consentimiento y la participación voluntaria en economías sexuales potencialmente victimizantes existen en un continuo, no como un binario (Agustín, 2006a; Aronowitz y Chmaitilly, 2020; Henderson y Rhodes, 2022; Kempadoo, 2004; Meneses-Falcón, 2023; Persak, 2013). Mi propio trabajo encontró que los relatos dominantes sobre la victimización suelen despojar a adultos y niños traficados de su agencia, reduciéndolos a víctimas pasivas o degradándolos como trabajadoras sexuales moralmente inferiores (Zudina, 2025). La intersección entre agencia, victimidad, y experiencias de victimización sigue siendo un foco crucial tanto para la investigación teórica como práctica.

Factores de empuje como la pobreza o el conflicto y de atracción como mejores condiciones de vida se han usado para explicar los impulsores de la trata (Winterdyk, 2020). Sin embargo, este binario simplifica demasiado la complejidad del movimiento y del riesgo, que también se encuentra en el “entre medio” (Agustín, 2006a). Una perspectiva socioecológica permite entender mejor cómo distintos niveles de factores interactúan para moldear la vulnerabilidad a la trata. La trata de personas es multidimensional, opera en esferas legítimas y criminales, involucra actores en mercados formales e informales con distinta cercanía a las víctimas, y no puede verse como un camino lineal hacia la victimización ni como una *identidad* fija de víctima (Aronowitz et al., 2010).

La evidencia empírica, presentada en informes de casos y estudios, como el del caso venezolano discutido más adelante, subrayan estas complejidades. La tensión entre agencia y factores de posible victimización requiere atención. La vulnerabilidad no debe reducirse a crisis, marginación, estructuras patriarcales o crimen organizado. El análisis debe reconocer la interacción de factores y respuestas adaptativas de quienes enfrentan circunstancias limitantes.

Vulnerabilidades

Al discutir las causas y experiencias de violencia, y particularmente la trata, en mercados sexuales (i)lícitos e (in)formales, parte del debate asume que ciertas poblaciones son inherentemente vulnerables, como mujeres, migrantes o refugiados, minorías étnicas o quienes enfrentan conflicto y crisis. Esta perspectiva corre el riesgo de crear un vínculo causal simplista y cuestionable entre vulnerabilidad y victimización, implicando que quien pertenece a grupos “*per se* vulnerables” y participa en ciertas actividades debe ser inevitablemente víctima. Esto perpetúa narrativas e intereses políticos al identificar a “víctimas arquetípicas” (Agustín, 2006a), tanto como a “delincuentes arquetípicos” (Broad, 2015; Hamid, 2022). Para comprender mejor las rutas hacia la victimización en mercados sexuales, es crucial examinar críticamente el concepto de vulnerabilidad, sus definiciones y cómo se conecta con las prácticas vividas.

La vulnerabilidad se ha convertido en un concepto central, pero a menudo malentendido, en la investigación sobre migración y trata de personas. Con frecuencia se trata como un atributo fijo de ciertas poblaciones, en lugar de un proceso dinámico producido por relaciones sociales, económicas y estructurales y las respuestas a ellas. Este capítulo propone un cambio hacia una comprensión socioecológica de la vulnerabilidad en tiempos de crisis, conceptualizando como

vulnerabilidad a configuraciones específicas de violencia y crimen, en lugar de *vulnerabilidad* en grupos particulares que expliquen la victimización. Así, la vulnerabilidad puede entenderse como una condición que surge de la interacción de múltiples factores, considerando también las respuestas individuales a estas dinámicas.

Es especialmente relevante revisar nuestro enfoque sobre la definición y estudio de la vulnerabilidad, pues en este contexto está ligada a cómo se enmarca la trata, se construyen estereotipos y se entiende la victimización. Estos marcos suelen categorizar a las personas en binarios, como víctimas u ofensores, según características y actividades. En realidad, es mucho más complejo asignar tal estatus sin considerar la agencia individual y la situación humana en un mundo multifacético y cambiante que, a la vez, moldea al individuo y es navegado y respondido activamente. Por ello, es crucial ser preciso y cuidadoso al hablar de victimización en economías sexuales.

Para investigar la trata con base en evidencia, debemos ir más allá de definir a ciertos grupos como *víctimas arquetípicas*, una etiqueta frecuentemente asignada a mujeres migrantes, refugiadas; a comunidades indígenas o a niños y niñas en sistemas de cuidado según sus características individuales y experiencias de vida. Aunque estas clasificaciones buscan visibilizar la violencia y desigualdad en poblaciones marginadas de economías sexuales, también fijan la vulnerabilidad como un estatus inherente, una *identidad de víctima*, en lugar de una condición contextual que puede superarse. Entonces, si la vulnerabilidad no es un estatus por características *a priori*, ¿qué es?

Una excursión filosófica

La investigación antropológica, filosófica y político-teórica ha reconocido, desde hace tiempo, que los seres humanos están inmersos no solo en estructuras, sino en múltiples niveles de

redes recíprocas y relaciones con otras personas y comunidades reales o imaginadas (Anderson y O'Connell Davidson, 2003; Das, 2012; Held, 2006; Tronto, 1993, 2013;). Estas abarcan desde los lazos familiares y comunitarios hasta las relaciones y solidaridades en comunidades (inter)nacionales, así como las interacciones con economías, instituciones y un mundo globalizado. Esta red relacional es fluida, constantemente configurada por acciones y respuestas: premisa para comprender el contexto y la toma de decisiones de la persona, reconociendo que los individuos están constituidos por el mundo que habitan y que, simultáneamente, (co)crean. Para articular un enfoque práctico que estudie las vulnerabilidades a la explotación y la trata en economías sexuales en contextos de crisis desde una perspectiva holística, es preciso considerar qué constituye la vulnerabilidad humana. Esta excursión filosófica establece la premisa metaética sobre la relevancia de la dependencia y la relacionalidad en un marco socioecológico de análisis.

La investigación filosófica, como señala Donatelli (2016), sugiere que la vulnerabilidad es necesariamente una condición humana, derivada de un desapego lógico desde un punto de referencia. No se entiende como estar expuesto a algo, sino como parte inherente de la vida humana, inmersa en contextos cambiantes. Donatelli la describe como una condición universal moldeada por la interacción social, los contextos colectivos e individuales y la percepción de los demás.

¿Hasta qué punto depende la vulnerabilidad de los demás? ¿Y de quién depende? Como argumenta Donatelli (2016), la independencia es un término algo engañoso, pues no reconoce cómo la vida individual se mueve en el ámbito de redes, interacción y dependencia. La dependencia, a la luz de la autonomía, el privilegio y el poder, suele ocultarse políticamente, aunque es inseparable de la acción continua de las relaciones humanas (Donatelli, 2016). En esta lectura, la dependencia se entiende como algo que todo ser humano

posee en su esencia, pues las relaciones de cuidado definen y sostienen la vida humana y permiten que el engañoso término de independencia busque el individualismo adulto. Teniendo esto en cuenta, la dependencia como premisa de la experiencia e interacción humana será clave para abordar la posible victimización en economías sexuales. La vulnerabilidad común se basa en la existencia encarnada y en la interdependencia a través de la exposición al otro. Estar expuesto al otro implica siempre la posibilidad de destrucción corporal (Han, 2018). Conectar la experiencia ordinaria con capas de macrofactores implica incluir la dependencia de otros anónimos que pueden decidir sobre la vida o la muerte y el daño o el bienestar, generando así una vulnerabilidad que trasciende las relaciones individuales concretas y refleja una interdependencia y exposición más global (Butler, 2004).

Al considerar la noción de vulnerabilidad en teorías relacionadas con el Cuidado (Held, 2006; Noddings, 2003; Tronto, 1993, 2013), queda claro que no solo la poseen las personas victimizadas, sino todos los humanos en todos los contextos existentes y en transformación. Al entender la vulnerabilidad como algo que toda persona posee, se reconoce como una condición humana básica. Por su naturaleza, la vulnerabilidad no es opaca, sino una parte eminente de la vida social e interacción diaria, dependiente del contexto colectivo e individual y sujeta a la (inter)dependencia y a la interpretación del otro respectivo.

Veena Das (2012) sostiene que es en el flujo de la vida cotidiana donde los valores de una sociedad se hacen tangibles, al notar qué creencias y acciones se integran en lo diario y habitual. Enmarcar lo “ordinario” como esfera de violencia permite percibir las texturas de la vida cotidiana. De manera similar, al intentar comprender filosófica y antropológicamente el significado de la vulnerabilidad, debemos establecer un marco conceptual para observarla. La vulnerabilidad como condición humana es un argumento lógico;

sin embargo, al hablar de vulnerabilidad en contextos, como mercados laborales o afrontamiento en crisis, es necesario precisar a qué se es vulnerable (por ejemplo, a ser robado) o las vulnerabilidades que surgen en marcos, temporalidades y contextos específicos (como durante un interrogatorio policial). Al discutir implicaciones teóricas y prácticas sobre victimización en economías sexuales, especialmente sobre explotación y trata, es crucial definir qué buscamos observar y nuestros sesgos sobre lo que hace a una persona vulnerable.

Para la evaluación de riesgos o la investigación aplicada en economías sexuales, se requiere un enfoque que vea la movilidad humana no solo especial, sino socialmente, captando cómo múltiples factores moldean y limitan el contexto, la agencia y las respuestas de la persona. Al definir vulnerabilidad a algo, también se abre la posibilidad de identificar la resiliencia frente a ello.

Marcos socioecológicos

En línea con los planteamientos filosóficos sobre la inmersión y dependencia humanas, el marco socioecológico ha evolucionado en décadas recientes para profundizar la comprensión teórica de la vulnerabilidad y los factores de riesgo relacionados con la victimización, al tiempo que facilita la investigación empírica interdisciplinaria. Especialmente en criminología, este marco ofrece una perspectiva más holística para estudiar la victimización y comprender los factores que impulsan el delito. Proporciona una estructura integrada para analizar cómo múltiples niveles contextuales interactúan para moldear la vulnerabilidad y/o resiliencia frente a la victimización.

Originalmente, el marco ecológico, introducido por Bronfenbrenner en los años 70 del siglo XX, se convirtió en un modelo fundamental en la teoría e investigación del desarrollo humano, con variantes como los marcos socioecológicos y bioecológicos (Bronfenbrenner, 1979). Se desarrolló para

comprender cómo las características individuales interactúan con factores ambientales más amplios en múltiples niveles, situando al individuo como parte del mundo. Con el tiempo, se han creado varios marcos ecológicos multinivel para estudiar sistemáticamente las causas, factores de riesgo y dinámicas de distintos fenómenos en relación con el individuo. Por ejemplo, se han aplicado enfoques ecológicos para estudiar la victimización en el abuso infantil (Belsky, 1980; Cicchetti y Lynch, 1993). Una contribución influyente al estudio de la violencia contra las mujeres provino de Heise (1998), quien propuso usar un enfoque socioecológico para analizar las causas de la violencia íntima de pareja y cómo múltiples factores interrelacionados contribuyen a la victimización.

En el pasado, la investigación empírica sobre trata y explotación sexual ha enfatizado principalmente rasgos y experiencias individuales, como abusos previos, trauma, consumo de sustancias o estar bajo cuidado estatal, como indicadores de vulnerabilidad. Este enfoque individualizado corre el riesgo de reproducir narrativas de culpabilización de la víctima basadas en una relación causal cuestionable y pasa por alto factores relacionales, sociales y estructurales que moldean el riesgo. Para superar la privatización del riesgo, que coloca al individuo como único responsable de reducirlo (Rockhill, 2001), se requiere un enfoque multifacético que sitúe el riesgo y la responsabilidad en contextos sociales, relacionales y estructurales (De Vries et al., 2025).

Mientras que la mayoría de los estudios empíricos sobre economías sexuales no aplica un enfoque holístico y multinivel para analizar qué constituye riesgo y vulnerabilidad más allá del nivel individual, a nivel internacional, la Inter-Agency Coordination Group against Trafficking in Persons (ICAT) y Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) han propuesto modelos socioecológicos para conceptualizar la vulnerabilidad a la trata. En estudios empíricos, por ejemplo, Daniel-Wrabetz y Penedo (2015) han usado un marco

socioecológico para explicar dinámicas y vulnerabilidades en la trata de personas, y Finigan-Carr et al. (2019) aplicaron un marco socioecológico traumagénico a la trata sexual infantil. Con el tiempo, algunos enfoques han propuesto “globalizar” los marcos socioecológicos existentes para captar el impacto de la globalización y las economías (políticas) globales en niveles nacional, local, familiar, interpersonal e individual (Fulu y Miedema, 2015; Murphy et al., 2023).

Abordar la vulnerabilidad a la violencia en los mercados sexuales, y en particular a la trata de personas, requiere considerar factores espaciales, incluidos los riesgos personales, situacionales y circunstanciales. Los modelos socioecológicos analizan vulnerabilidades en distintos niveles: algunos incluyen tres niveles (individual, comunidad, sistemas; según ICAT), cuatro niveles (individual/micro, meso, exo, macro; según el modelo original de desarrollo humano de Bronfenbrenner; o historia personal, micro, exo y macro según Heise; u ontogénico, interpersonal, comunitario y social para niños y jóvenes víctimas de trata sexual, según Finigan-Carr et al.), cinco niveles (individual, relación, comunidad, social, global, usado por Fulu y Miedema para estudiar la violencia contra mujeres) o seis niveles (individual, interpersonal, comunitario, institucional, societal, global, para examinar la violencia contra mujeres y niñas en contextos de conflicto y posconflicto, según Murphy et al.).

Un enfoque socioecológico de las vulnerabilidades muestra cómo los rasgos personales (por ejemplo, pobreza, trauma) interactúan con las relaciones (familia, traficantes), la dinámica comunitaria (falta de protección) y factores sistémicos (crisis económicas, desigualdades) para perpetuar los riesgos de trata (Zimmerman y Kiss, 2017). Estas variantes muestran la adaptabilidad de los marcos ecológicos en distintas disciplinas, ofreciendo un lente estructurado para entender cómo se desarrollan las experiencias individuales dentro de entornos sociales complejos y multinivel, relevantes para la vulnerabilidad y la

posible victimización. La investigación futura debe desarrollar marcos socioecológicos ajustados a los ecosistemas, dinámicas y condiciones específicas de diversos contextos, proporcionando mayor matiz y sensibilidad. Por ejemplo, Murphy et al. (2023) proponen un marco sobre los impulsores de la violencia contra mujeres y niñas en contextos de conflicto y posconflicto que captura temporalidades y condiciones diversas a menudo pasadas por alto en modelos generalizados.

Para proponer un enfoque socioecológico ajustado que capture riesgos interrelacionados e impulsores de violencia y victimización, es indispensable definir qué fenómenos se estudiarán (por ejemplo, violencia contra mujeres y niñas en mercados sexuales, especialmente trata) y en qué contexto (por ejemplo, múltiples crisis, migración, región geopolítica o caso). Schwartz (2023) enfatizó la importancia de los factores culturales dentro del modelo socioecológico de la trata de personas, señalando elementos como religión, casta y normas de género persistentes, como el machismo en América Latina y el Caribe (Oblitas, 2014; Rojas Perez et al., 2020), son centrales para comprender y abordar la vulnerabilidad. Emplear un marco socioecológico podría ser una vía prometedora para investigar cómo se constituyen y responden las vulnerabilidades ante las crisis, como en el caso venezolano, debido a la ruptura sistémica, pérdida de apoyo social, baja protección frente a violencia armada y crimen organizado, y al aumento de la dependencia de redes informales y la exposición a la migración y la escasa protección y seguridad (John, 2018; Mesa, 2020; Nagle y Zarama, 2022; Prather, 2019).

Si bien no podemos asumir que los rasgos individuales expliquen el riesgo y la victimización, tampoco podemos sacar conclusiones sobre individuos basadas únicamente en factores ecológicos más amplios: Rockhill (2001) aborda la privatización del riesgo, mientras que Firebaugh (2001) analiza la falacia ecológica. Es relevante considerar la interacción de distintos factores que pueden, pero no necesariamente, constituir riesgo

y vulnerabilidad. Las simplificaciones que individualizan o ecologizan la vulnerabilidad y el riesgo son empíricamente inapropiadas. Especialmente en tiempos de crisis, numerosos factores explican la existencia de mercados (in)formales e (i)lícitos y los impulsores de riesgo y victimización en ellos.

Economías sexuales y trata en tiempos de crisis

En contextos de crisis y conflicto, la situación suele ser difícil de desentrañar y la evidencia empírica difícil de recopilar. Las desigualdades estructurales, la disminución de recursos, las dificultades y la exposición a atrocidades naturales o humanas pueden limitar las opciones de las personas, haciendo que la participación en la economía sexual sea a veces una de las estrategias viables para sobrevivir a corto plazo, alimentar a sus familias, pagar atención médica básica o acceder la educación. Especialmente en zonas afectadas por conflictos, de extractivismo, contextos periféricos o rurales, niñas y mujeres pueden verse obligadas a ejercer el trabajo sexual para evitar consecuencias que amenacen sus vidas y las de sus comunidades (Acosta, 2017; Cuevas García et al., 2019). Las crisis no solo afectan al individuo, sino que impactan los entornos, estructuras comunitarias y relaciones cotidianas que sostienen la vida ordinaria y la gestión de temporalidades e incertidumbres.

Participar en mercados sexuales es una de las formas más lucrativas de generar ingresos inmediatos en contextos migratorios o de crisis, ya que no requiere capacitación ni dominio del idioma y suele situarse en mercados informales, accesibles y con demanda constante (Kempadoo, 2004; Meneses-Falcón, 2023; Phillips, 2017; Sanders et al., 2022). Las relaciones y conexiones sociales también pueden desempeñar un papel crucial, junto a las crisis y dificultades económicas, al impulsar la migración y movilidad para la

venta de sexo. Diversas contribuciones de América Latina y el Caribe sugieren que los factores interpersonales influyen significativamente en la toma de decisiones, los desplazamientos y los destinos de las personas afectadas. (Cuevas García et al., 2019; Falcón, 1995; Kempadoo, 2004; Mesa, 2020; Nagle y Zarama, 2022; Phillips, 2017). Los conflictos y crisis pueden agravar las vulnerabilidades existentes frente al daño y la trata, o generar nuevas vulnerabilidades e impulsores (Murphy et al., 2023). Por eso, al examinar mercados sexuales en crisis, varias dinámicas clave requieren atención.

Primero, familiares y miembros clave de la comunidad, pueden esperar que los individuos migren y participen en mercados potencialmente lucrativos, aunque sean de alto riesgo, para obtener agencia económica, enviar remesas o abrir rutas migratorias para otros. Diversas investigaciones muestran el papel clave de la familia en el contexto venezolano (Cuevas García et al., 2019; John, 2018; León y Lugo, 2023; Paulino-Ramírez et al., 2023; Ulloa Osses et al., 2022): Parientes cercanos fomentan la participación en mercados informales, ilícitos o poco transparentes, especialmente sexuales, tanto nacionales como internacionales, para generar ingresos y mejorar oportunidades. Las presiones económicas durante las crisis pueden modificar las expectativas socioculturales y llevar a adoptar estrategias de reproducción social distintas a las de tiempos de paz. Además, la crisis puede normalizar culturalmente sectores que serían condenados en circunstancias normales, como la venta de sexo.

Segundo, aunque las economías sexuales incluyen personas de todos los géneros, mujeres y niñas están sobrerrepresentadas en los mercados sexuales. Las crisis no son neutrales frente al género y, por tanto, agravan las desigualdades y la violencia de género (Murphy et al., 2023; León y Lugo, 2023). En crisis económicas, préstamos, sectores laborales y gasto gubernamental se reorganizan, y las mujeres suelen ser de las primeras en perder sus empleos. Esto se debe en parte

a la persistente idea de que no son proveedoras principales y realizan trabajo de cuidado no remunerado. En contraste, durante la crisis, las mujeres a menudo asumen roles tradicionalmente masculinos fuera del hogar para generar ingresos y sostener a sus familias (Agustín, 2006a; Murphy et al., 2023). En tiempos de crisis e inseguridad, más mujeres y niñas pueden verse impulsadas a mercados sexuales o migración laboral debido a la limitada protección y al acceso restringido a los derechos humanos.

Tercero, las personas afectadas por las crisis pueden involucrarse en lo que se llama *sexo de supervivencia*, o *sexo transaccional para supervivencia*. A menudo malinterpretado en narrativas dominantes de victimización, el término se refiere al intercambio sexual impulsado por privación extrema y falta de alternativas. (Czechowski et al., 2022). Las crisis, conflictos armados y migración forzada intensifican esa privación, empujando a individuos, especialmente mujeres, niñas y personas con identidades de género diversas, a intercambiar sexo por necesidades básicas como alimento, refugio o protección. Condiciones estructurales como pobreza y despojo sistemático profundizan el vínculo entre crisis y participación en mercados sexuales (Czechowski et al., 2022; Gonzalez Cogollos y Rodríguez Machado, 2023; León y Lugo, 2023; Ulloa Osses et al., 2022). La revisión sistemática de Czechowski (2022) sobre sexo de supervivencia encontró que hambre, pobreza, patriarcado, consumo de sustancias y vivienda insegura aumentan privación y vulnerabilidad.

Estas condiciones reducen la agencia sexual y suelen implicar coerción, haciendo que el sexo de supervivencia sea a menudo no consensuado. Sin embargo, las personas pueden tomar decisiones calculadas, ejerciendo su agencia. Crisis, conflicto y migración moldean los mercados sexuales, impulsando elecciones situacionales de alto riesgo. Participar puede ser una estrategia racional para ingresos o protección, pero aumenta la vulnerabilidad a explotación y violencia. Datos

venezolanos de ONG muestran que el sexo de supervivencia puede intersecar con la trata, con engaño, abuso y violaciones de derechos, especialmente para mujeres migrantes. La mayoría de las mujeres no ingresó al mercado por iniciativa propia, sino que clientes solicitaron el intercambio de sexo por recursos (Gonzalez Cogollos y Rodríguez Machado, 2023; Ulloa Osses et al., 2022). Estos hallazgos exigen un enfoque multinivel que supere los factores individuales para comprender la participación bajo condiciones de precariedad.

Cuarto, al examinar economías sexuales en tiempos de crisis y conflicto, es crucial reconocer que la mayoría de estos contextos se encuentra en el Sur Global. Los mercados sexuales allí están profundamente moldeados por historias de colonización, economías políticas neocoloniales y sistemas globalizados de oferta y demanda. Esto se evidencia en mercados impulsados por el turismo sexual y la mercantilización exotizada de cuerpos y culturas, como la venta de paquetes sexuales en el Caribe (Lu et al., 2020), o en las crecientes industrias sexuales influenciadas por la imaginaria narco en ciudades como Medellín, Colombia (Naef, 2018). Las estructuras que moldean estos mercados son clave para su persistencia, especialmente en el Sur Global, reflejando la demanda global histórica y el impacto perdurable de las desigualdades coloniales (Allenby, 2025; Kempadoo, 2004; Phillips, 2017;).

Finalmente, las presiones estructurales, como conflictos o crisis económicas, no convierten automáticamente a todos los participantes en víctimas pasivas. Evaluar el grado de voluntariedad y consentimiento en estas condiciones es complejo y requiere investigación empírica contextual y profunda. Una comprensión matizada debe superar supuestos deterministas sobre vulnerabilidad, reconociendo limitaciones y agencia en escenarios de múltiples crisis. Esto exige un marco socioecológico que considere estructuras globales y neocoloniales de mercados sexuales y crimen en contextos específicos. Para ejemplificar factores visibles en economías sexuales en el caso

venezolano de EHC, la segunda parte de este capítulo abordará indicadores hallados en literatura empírica y conceptual de la región. ¿Por qué resaltan la importancia de un marco socioecológico para riesgos y vulnerabilidades de la trata?

Factores de riesgo en Venezuela

La prolongada emergencia en Venezuela ha desplazado a casi ocho millones de personas (McAuliffe y Oucho, 2024) agravando vulnerabilidades socioeconómicas a nivel nacional y transnacional. Esta sección presenta factores de riesgo extraídos de literatura empírica y conceptual, identificados mediante entrevistas con ONG, autoridades, víctimas y evaluaciones basadas en encuestas.

Las vulnerabilidades y factores de riesgo preexistentes se intensifican junto a nuevos factores en el contexto de la emergencia compleja en Venezuela, marcada por colapso económico, inestabilidad política y protección social limitada. La interacción de diversas crisis y estrategias de supervivencia aumenta la exposición a explotación, especialmente entre niños, adolescentes y adultos que participan en sexo transaccional o de supervivencia. Dinámicas informales y desestabilizadas elevan el riesgo de explotación sexual y trata. La EHC profundiza vulnerabilidades estructurales y limita oportunidades de medios de vida seguros y dignos (Cuevas García et al., 2019). Es válido asumir que la crisis venezolana y la emergencia compleja tendrán un efecto multinivel sobre las vulnerabilidades y riesgos socioecológicos de dos maneras: exacerbando factores existentes e introduciendo nuevos. La prostitución es actualmente legal y regularizada en Venezuela, aunque gran parte del mercado sexual opera en el sector informal y clandestino.

En el contexto venezolano, la vulnerabilidad a la trata se debe a factores de empuje como colapso económico, inestabilidad política, falta de servicios básicos y violaciones

de derechos, y factores de atracción hacia otros países latinoamericanos, el Caribe o España, como cercanía cultural, reunificación familiar y oportunidades económicas. En el extranjero, la vulnerabilidad se agrava por falta de estatus legal, desesperación económica, explotación por género y edad, aislamiento, ausencia de apoyo y debilidad institucional en seguridad y justicia (John, 2018; Mesa, 2020; Paulino-Ramírez et al., 2023; Prather, 2019).

La inestabilidad y fragilidad del Estado genera no solo vulnerabilidad, sino un entorno propicio para el surgimiento y expansión de actividades criminales organizadas, con modos de operación adaptativos (Locke, 2012), evidentes en el aumento de inseguridad y criminalidad organizada en Venezuela (John, 2018; Mesa, 2020). Sin embargo, debe reconocerse que el crimen y los mercados ilícitos pueden considerarse producidos por el Estado —no solo actores periféricos—, considerando a los grupos criminales como actores activos en la gobernanza migratoria (Achilli, 2024). La administración de Maduro había ignorado en gran medida la actividad criminal organizada, lo que ha resultado en la falla de medidas de protección frente a la trata en mercados sexuales (John, 2018; Prather, 2019). Abordar las vulnerabilidades existentes requiere esfuerzos integrales para brindar protección legal, oportunidades económicas y reforzar la lucha contra la trata. Se ha observado que ofertas de trabajo falsas, mediante agencias o contactos son una estrategia común para reclutar mujeres; redes sociales, amigos, familiares y miembros de la comunidad facilitan la participación, el traslado y la explotación (Cuevas García et al., 2019).

La crisis aumenta la interrelación de sectores legales e ilegales bajo un Estado débil. Centrarse solo en el delito al estudiar la trata en economías sexuales ignora sus causas, como inestabilidad, pobreza, cultura e inequidad estructural, y no captura su complejidad. La trata ocurre también en sectores legales: bares, restaurantes, plataformas en línea y

servicios turísticos pueden facilitarla, a veces conscientemente, a menudo por lucro, especialmente en contextos precarios. Las redes de explotación sexual varían de operadores individuales a estructuras complejas, legales y criminales, planas o jerárquicas, y conectan a sus miembros por familia, parentesco, amistad o intereses económicos (Aronowitz et al., 2010). El caso de venezolanos que siguen trayectorias nacionales e internacionales para participar (in)voluntariamente en mercados sexuales suele estar motivado por redes y relaciones existentes (Cuevas García et al., 2019; Mesa, 2020; Nagle y Zarama, 2022).

La siguiente sección desarrolla brevemente algunas dinámicas y factores que configuran las economías sexuales y la trata con fines de explotación sexual en la emergencia compleja venezolana. Además de los factores de riesgo discutidos, estos ejemplos muestran la relevancia de un enfoque socioecológico para estudiar vulnerabilidad y riesgo en el contexto de la posible victimización por trata, considerando el papel de diversas esferas de impacto: individual, relacional, ambiental, cultural y socioeconómica.

Factores diversos

Individual(es)

Los rasgos individuales, como género, etnia y experiencias previas, afectan las posibles vías de victimización. En Venezuela, niñas/niños y mujeres son las más vulnerables a la trata sexual, especialmente las de poblaciones indígenas o afrodescendientes (Cuevas García et al., 2019; John, 2018; Mesa, 2020). Niños no acompañados en corredores migratorios de baja seguridad presentan riesgo de victimización. Estudios indican que antecedentes de abuso, violencia intrafamiliar, negligencia y desamparo aumentan la susceptibilidad a participar en sexo de supervivencia y sufrir victimización. (Czechowski et al., 2022; Ulloa Osses et al., 2022).

La impunidad general y el silencio frente a la violencia y el abuso sexual normalizan estas dinámicas en Venezuela, moldeando percepciones sobre el cuerpo, la intimidad y la sexualidad. Si bien los antecedentes de abuso se consideran un rasgo individual, las estrategias de afrontamiento se ven influenciadas por la cultura y el entorno. La educación sexual limitada difumina fronteras y refuerza la aceptación individual de violencia corporal y riesgo. Además, quienes tienen experiencia migratoria o de desplazamiento, con estatus irregular o indocumentado, presentan alto riesgo de victimización en mercados sexuales (Mesa, 2020).

Entorno geográfico

Las características geográficas, como zonas con brechas de seguridad, fronterizas, extractivas, mineras o de alto consumo, pueden afectar la vulnerabilidad a la trata, explotación sexual y violencia. La literatura indica que estas zonas suelen presentar alta prevalencia de crimen organizado y sexo transaccional de supervivencia, dentro de Venezuela y en países vecinos, como estrategia para enfrentar la falta de ingresos y recursos (Cuevas García et al., 2019; Lambertini, 2023). Comunidades pobres y fronterizas enfrentan los mayores riesgos (León y Lugo, 2023). Especialmente, los espacios que entrelazan distintos tipos de explotación y trata generan alto riesgo de victimización sexual: las zonas mineras, con alta presencia masculina, crean demanda y posible victimización en mercados sexuales ilícitos y clandestinos, especialmente en el estado Bolívar (Lambertini, 2023). Niños y adultos indígenas de áreas rurales cercanas son susceptibles a la trata hacia zonas de extractivismo y minería (Acosta, 2017; ECPAT International, 2025). Los destinos turísticos como Caracas y Maracaibo también facilitan la explotación sexual y la trata de mujeres y niñas, incluido el turismo sexual, por el cual Venezuela es conocida internacionalmente (Prather, 2019; ECPAT International, 2025).

Factores socioculturales

Los factores socioculturales, como roles de género tradicionales, normas sociales, normalización del abuso sexual o actividades violentas y la hipersexualización temprana, juegan un papel clave en la creación de vulnerabilidad y pueden agravarse en contextos de conflicto o emergencia compleja. La cultura del machismo sexualiza cuerpos femeninos desde temprana edad y normaliza la violencia de género, la desigualdad y la explotación, fomentando alta tolerancia a la violencia contra mujeres y niñas (Oblitas, 2014; Rojas Perez et al., 2020). Es esencial considerar cómo el machismo y la hiper-masculinidad en contextos de crisis y conflicto moldean las vulnerabilidades en economías sexuales. Los factores culturales son clave para evaluar el riesgo desde una perspectiva socioecológica (Schwartz, 2023): La normalización de la violencia, el abuso, familias disfuncionales, maternidad soltera, bajos ingresos y falta de supervisión aumentan los riesgos, especialmente para niños y jóvenes (Harrison et al., 2023).

Otro desafío clave para abordar la explotación en economías sexuales es la desconfianza hacia la policía y la justicia (Mesa, 2020). Esta desconfianza proviene no solo de la corrupción política, sino también del machismo, heteropatriarcado y predominio masculino, especialmente en crisis. Como resultado, testigos y víctimas evitan informar o revelar sus experiencias a autoridades, familia o comunidad (Mesa, 2020). Los factores de riesgo se agravan debido a procesos de invisibilización y marginación, especialmente entre personas pertenecientes a minorías étnicas y personas migrantes en situación irregular, quienes enfrentan discriminación, racismo y xenofobia, así como una falta de protección tanto estructural como sistémica. Estos factores, que marginalizan, discriminan y vulnerabilizan a las personas, dificultan su identificación en contextos de violencia y explotación, así como el reconocimiento de estas situaciones y su posible

denuncia. Cuando, además, personas ya magrinalizadas o irregularizadas son criminalizadas en lugar de tener acceso a protección y justicia, ello sugiere un problema de carácter estructural y sistémico en la producción y reproducción de la vulnerabilidad (Achilli et al., 2023; Rossoni, 2026).

Relaciones sociales y familiares

Las relaciones sociales son clave en la participación y victimización en mercados sexuales en Venezuela. Para enfrentar las crisis, muchas dependen de lazos para movilidad, trabajo, cuidado y recreación. Los vínculos femeninos, basados en solidaridad en una sociedad hiper-masculina, son cruciales en decisiones cotidianas. Ejemplos incluyen a Mariana Pares, ex Miss Venezuela 2016, arrestada en Viena por liderar una red internacional de trata; y el caso Zona Diva en México, donde venezolanas fueron reclutadas mediante ofertas de trabajo opacas. Yolimar Carolina Rodríguez, víctima convertida en reclutadora, fue condenada a 30 años por explotar a otras venezolanas vía redes sociales (El Pitazo, 2021).

Los datos empíricos muestran que los traficantes suelen provenir del círculo social cercano de la víctima, incluyendo familia, amigos o vecinos. Estudios indican que familias venezolanas en precariedad económica y social pueden ver la participación de mujeres en la industria sexual, incluso si es con fines de explotación, como una forma esperada de generar ingresos. Esta participación se reconoce, pero rara vez se discute, ya que familiares en situaciones similares difícilmente ofrecen alternativas o intervienen, especialmente cuando está vinculada a redes ilícitas (Cuevas García et al., 2019; ECPAT International, 2025; León y Lugo, 2023; Páez, 2023). Las dinámicas de confianza en tiempos de crisis son instrumentalizadas por el crimen organizado y redes criminales en Venezuela, como se discutirá más adelante.

La emergencia compleja venezolana tiene un impacto extenso en la explotación y trata sexual de niños. Estudios

indican que las niñas son vendidas o entregadas por sus padres a cambio de recursos, para generar ingresos o trasladar la responsabilidad del cuidado (Mesa, 2020), lo que muestra que la mayoría de las personas jóvenes víctimas de trata sexual, está vinculada a la familia. Más ampliamente, la dinámica reciente de colocar informalmente a niños con otras personas o familias para asegurar su supervivencia, educación o seguridad, claramente sin garantías, crea una vulnerabilidad específica de crisis. Esta práctica no monitoreada incrementa su riesgo de violencia, explotación y trata al llegar a estos entornos (Cuevas García et al., 2019; ECPAT International, 2025).

Perspectivas laborales

El negocio de ofertas de trabajo fraudulentas se intensifica en contextos de crisis e inestabilidad sociopolítica. Las crisis exacerbaban las desigualdades de género en el empleo formal. Durante recesiones económicas, las mujeres suelen perder sus puestos, primero debido a la concepción de que no son proveedoras principales y a los recortes en sectores sociales, predominantemente ocupados por mujeres. Aunque en situaciones de crisis las mujeres asumen roles de proveedoras de manera más marcada, los empleos formales con ingresos estables se vuelven escasos (Agustín, 2006a; Murphy et al., 2023). Esto incrementa su participación en mercados sexuales en contextos de crisis y con acceso limitado a protección y derechos.

Durante la emergencia compleja, mujeres y niñas son atraídas al creciente turismo sexual caribeño mediante ofertas de trabajo falsas en hostelería, servicio doméstico y baile exótico (John, 2018; Paulino-Ramírez et al., 2023). Las ofertas de trabajo engañosas no afectan solo a mujeres de bajo promedio salarial, sino también a profesionales, como profesionales de la medicina y docentes, que a veces se ven obligadas por circunstancias a trabajar en el sexo por alrededor de \$25 la hora. (John, 2018).

Crimen organizado

La amplia participación de militares venezolanos en el crimen organizado ha generado complicidad estatal, ya que el gobierno, dependiente del ejército para la estabilidad política, suele ignorar estas actividades; en consecuencia, el crimen organizado y la trata operan con impunidad (Prather, 2019). Las rutas de trata y tráfico de personas, de alcance transnacional, suelen coincidir con las del tráfico de drogas y contrabando, mostrando la interconexión de estas economías ilícitas (Sampó y Troncoso, 2024). La complicidad de funcionarios estatales y militares, junto con la corrupción y un débil Estado de derecho, socava la prevención de la trata, reflejado en la clasificación Tier 3 de Venezuela por el *U.S. Department of State*. Aunque las actividades organizadas criminales abarcan más que la trata, las rutas compartidas entre Colombia, Perú, Ecuador y Brasil muestran la interconexión estructural entre migración, contrabando y redes transnacionales de trata. (Sampó y Troncoso, 2024; Silva y Souza, 2025).

Las redes del crimen organizado, incluido el *Tren de Aragua*, utilizan el engaño y los lazos personales para facilitar la trata, operando mediante vínculos de confianza que reducen riesgos y maximizan ganancias (InSight Crime, 2023). La comunicación y la flexibilidad hacen que las redes sociales basadas en la confianza, incluidas familias, amistades y comunidades, sean eficaces para operar mercados ilícitos como la trata, porque facilitan el reclutamiento, generan confianza y reducen la posibilidad de conductas indebidas (León y Lugo, 2023). Las víctimas son reclutadas con promesas de empleos lucrativos en el extranjero, pero al llegar enfrentan deudas que deben pagar en mercados sexuales (Ulloa Osses et al., 2022). La crisis económica, política y humanitaria del país incrementa la vulnerabilidad de quienes buscan sobrevivir y generar ingresos para sus familias en los mercados sexuales informales (Cuevas García et al., 2019; León y Lugo, 2023; Ulloa Osses et al., 2022).

Otro tema que requiere mayor atención es cómo el mercado ilícito global, en sus manifestaciones locales, se integra en contextos de crisis y genera oportunidades de empleo dentro de economías informales e ilícitas (Boerman & Golob, 2021; Hurtado et al., 2023). En este sentido, el ‘crimen organizado’ no debe entenderse solo como un actor externo y aislado, sino como parte activa en la configuración de mercados laborales con entradas accesibles, pero sin salidas factibles.

Conclusiones y reflexiones críticas

Sin duda, el análisis de las vulnerabilidades a la trata con fines de explotación sexual en contextos de crisis y emergencias complejas exige un enfoque que trascienda los modelos tradicionales y que reconozca las dinámicas de la vida cotidiana. Este capítulo sostiene que la vulnerabilidad es un concepto dinámico, situado en la experiencia diaria y configurado por la interacción de múltiples factores, así como por las respuestas, resiliencia y estrategias de afrontamiento de las personas, dentro de un sistema interdependiente de relaciones que abarca individuos, comunidades, entornos naturales, infraestructura, condiciones macroestructurales y dinámicas culturales.

Primero, este trabajo sostiene que la vulnerabilidad debe entenderse de manera holística. El riesgo de explotación en los mercados sexuales surge dentro de redes, relaciones y esferas de influencia que se intersecan en múltiples niveles, y no debe reducirse a un rasgo individual ni generalizarse a poblaciones enteras o a factores estructurales.

Segundo, el contexto y la cultura importan. Los análisis sobre delito, victimización y mercados sexuales deben incorporar diversas normas culturales, formas locales de gobernanza y respuestas específicas a la crisis y la movilidad humana. Las percepciones culturalmente arraigadas sobre movilidad, cuidado y roles de género influyen en cómo las personas enfrentan presiones y riesgos en contextos de crisis y conflicto.

Tercero, la victimización en los mercados sexuales requiere diferenciación. El carácter del mercado, los roles de los actores y el lenguaje utilizado para describir la violencia de género, la trata, el tráfico ilícito y otras formas de abuso influyen en cómo se entienden estos fenómenos y cómo se nombran las personas involucradas. Estudiar la “victimización” es complejo y exige sensibilidad ética y diálogo para evitar jerarquías y reconocer cómo las propias personas identifican y narran sus experiencias. La claridad conceptual es fundamental al abordar la violencia de género, la trata de personas, el tráfico de migrantes y otras formas de abuso.

Cuarto, el estudio de las crisis y el crimen en el Sur Global requiere enfoques que reconozcan particularidades regionales, históricas y sociopolíticas, incluidas estructuras post- y neocoloniales, normas de género, hipermasculinidad, heteropatriarcado, y vulnerabilidades racializadas. Los marcos angloamericanos y las definiciones legales suelen ser insuficientes para captar dinámicas locales. La investigación, por tanto, debe permanecer abierta a realidades sociales complejas y, a veces, contradictorias en torno a las economías sexuales, el crimen, la agencia y la victimización. Es clave entender que las vulnerabilidades son producidas por causas sistémicas y estructurales, en particular a través de la marginación, incluida la marginación legal, de ciertos grupos, como minorías étnicas y personas migrantes en situación irregular o criminalizada. En este sentido, las vulnerabilidades frente a la violencia y la explotación son, en parte, resultado de marcos legales y sistemas institucionales que contribuyen a su producción y reproducción.

Los debates sobre economías sexuales en contextos de crisis, movilidad y migración conllevan riesgos analíticos que pueden llevar a simplificaciones conceptuales y empíricas. Debe reconocerse la agencia en la entrada y el ejercicio del trabajo sexual incluso en contextos de crisis; no obstante, es necesario subrayar que la realidad de las economías sexuales en dichos contextos es considerablemente más compleja de

lo que podría suponerse y conlleva riesgos significativos de violencia y explotación. Se trata de una realidad laboral aún más aguda en mercados irregulares y con escasa protección. Evaluar factores de riesgo exige, por tanto, atender al contexto: las normas heteropatriarcales, las estructuras políticas-legales y económicas, la economía sexual globalizada y consumista, y la demanda constante de cuerpos exotizados, jóvenes, y alterizados. Analizar los mercados sexuales en América Latina, especialmente en tiempos de crisis, implica ir más allá de un abolicionismo que busca proteger, para situarse en una crítica anticapitalista, estructural y postcolonial. Se trata de cuestionar una economía que existe de facto y que no debe ser empujada a los márgenes mediante procesos que manufacturan la vulnerabilización de quienes la integran. En última instancia, imaginar un mundo sin prostitución es imaginar uno en el que mujeres y niñas, en particular proveedoras, migrantes, afectadas por crisis o pertenecientes a minorías, sean plenamente reconocidas como sujetas de derechos, con acceso a oportunidades equitativas, participación democrática, educación y trabajo digno y regulado. Asimismo, exige reconocer los múltiples factores interrelacionados que explican tanto la participación voluntaria e involuntaria en estos mercados como los riesgos de victimización, así como el surgimiento y la reproducción continua de la demanda.

Los mercados *incómodos*, aquellos que no solo reflejan problemas económicos, sino que también plantean cuestiones políticas y éticas y están moldeados por jerarquías e inequidades existentes, configuran inevitablemente la textura de una sociedad y su trayectoria de desarrollo.

Siguiendo a Lamas (2014, 2016), la prohibición de estos mercados, por más éticamente o políticamente inquietantes que sean, no constituye una solución; por el contrario, puede producir jurídicamente mercados ilegales. Más bien, exige un examen profundo de los factores que permiten su persistencia: en primer lugar, las condiciones que les dieron

origen, y una reestructuración de la distribución de recursos, riqueza, derechos y oportunidades laborales. La falta de igualdad, educación, empleo digno, rutas migratorias regulares y acceso a derechos no justifica ni explica normativamente la participación en economías sexuales. Aunque pueden ofrecer ingresos, estos mercados están marcados por altos niveles de riesgo, violencia e injusticia, especialmente donde el trabajo sexual es criminalizado, estigmatizado o vinculado a economías ilícitas.

En el caso de Venezuela, en el contexto actual de crisis prolongada posterior a la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela (enero de 2026) y sin una transición política consolidada, resulta indispensable fortalecer los mecanismos de derivación y referencia, mejorar la identificación de situaciones de riesgo y reforzar las respuestas institucionales, así como impulsar esfuerzos sostenidos para combatir la marginalización de las poblaciones afectadas, especialmente aquellas expuestas a vulnerabilidades derivadas de la precarización económica, la movilidad forzada y la erosión de garantías sociales. Asimismo, es necesario un esfuerzo analítico orientado a comprender la emergencia de vulnerabilidades en mercados formales, informales e ilícitos, evitando categorizaciones excesivamente rígidas entre ellos, en la medida en que todos se inscriben en estructuras económicas interconectadas de escala local y global, como es el caso de la industria del sexo.

Bibliografía

- Achilli, L. (2024). The missing link: The role of criminal groups in migration governance. *Journal of Ethnic and Migration Studies*, 50, 1–22. <https://doi.org/10.1080/1369183X.2024.2363844>
- Achilli, L., y Kyle, D. (2024). Global human smuggling: Buying freedom in a retreating world. *Johns Hopkins University Press*. <https://doi.org/10.56021/9781421447513>

- Acosta, A. M. (2017). Oro sexo y poder: Violencia contra las mujeres indígenas en los contextos mineros de la frontera amazónica colombo-venezolana. *Textos e Debates*, 1(31). <https://doi.org/10.18227/2217-1448ted.v1i31.4256>
- Agustín, L. (2006a). The Conundrum of Women's Agency: Migrations and the Sex Industry en R. Campbell y M. Neill (eds.) *Sex Work Now* (1 ed., pp. 116-140) William. <https://doi.org/10.4324/9781843926771>
- Agustín, L. (2006b). The Disappearing of a Migration Category: Migrants Who Sell Sex. *Journal of Ethnic and Migration Studies*, 32(1), 29-47. <https://doi.org/10.1080/13691830500335325>
- Allenby, K. (2025). Beyond Consent: Rethinking Approaches to Sex Tourism in the Global South. *Spectrum*, 15, 1-12. <https://doi.org/10.29173/spectrum292>
- Anderson, B., y O'Connell Davidson, J. (2003). *Migration and development in Asia* (Migration Research Series No. 15). International Organization for Migration. https://publications.iom.int/system/files/pdf/mrs_15_2003.pdf.
- Aronowitz, A. A., y Chmaitilly, M. (2020). Human Trafficking: Women, Children, and Victim-Offender Overlap en A. A. Aronowitz y M. Chmaitilly, *Oxford Research Encyclopedia of Criminology and Criminal Justice*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190264079.013.609>
- Aronowitz, A. A., Theuermann, G., y Tyurykanova, E. (2010). *Analysing the business model of trafficking in human beings to better prevent the crime*. OSCE Office to the Special Representative and Co-ordinator for Combating Trafficking in Human Beings. <https://cdn.osce.org/sites/default/files/f/documents/c/f/69028.pdf>
- Barry, K. (1994). *The Prostitution of Sexuality: The Global Exploitation of Women*. New York University Press. <https://doi.org/10.18574/nyu/9780814786086.001.0001>
- Belsky, J. (1980). Child maltreatment: An ecological integration. *American Psychologist*, 35(4), 320-335. <https://doi.org/10.1037/0003-066X.35.4.320>

- Boerman, T., & Golob, A. (2021). Gangs and Modern-Day Slavery in El Salvador, Honduras and Guatemala: A Non-Traditional Model of Human Trafficking. *Journal of Human Trafficking*, 7(3), 241–257. <https://doi.org/10.1080/23322705.2020.1719343>
- Broad, R. (2015). ‘A Vile and Violent Thing’: Female Traffickers and the Criminal Justice Response. *British Journal of Criminology*, 55(6), 1058–1075. <https://doi.org/10.1093/bjc/azv072>
- Bronfenbrenner, U. (1979). *The ecology of human development: Experiments by nature and design*. Harvard University Press.
- Butler, J. (2004). *Precarious life: The powers of mourning and violence*. Verso.
- Campana, P., y Varese, F. (2016). Exploitation in Human Trafficking and Smuggling. *European Journal on Criminal Policy and Research*, 22(1), 89–105. <https://doi.org/10.1007/s10610-015-9286-6>
- Cicchetti, D., y Lynch, M. (1993). Toward an Ecological/Transactional Model of Community Violence and Child Maltreatment: Consequences for Children’s Development. *Psychiatry*, 56(1), 96–118. <https://doi.org/10.1080/00332747.1993.11024624>
- Coalition Against Trafficking in Women International (CATW). (s. f.). *Coalition Against Trafficking in Women International*. <https://catwinternational.org/>
- Cojocar, C. (2015). Sex trafficking, captivity, and narrative: Constructing victimhood with the goal of salvation. *Dialectical Anthropology*, 39(2), 183–194. <https://doi.org/10.1007/s10624-015-9366-5>
- Cojocar, C. (2016). My Experience is Mine to Tell: Challenging the abolitionist victimhood framework. *Anti-Trafficking Review*, 7. <https://doi.org/10.14197/atr.20121772>
- Cuevas García, M. G., SerranoNaveda, C. S., Moya Goitte, E. M., Rangel Jiménez, C. A., García Cedillo, J. A., Ruiz Herrera, R. L., y Serrano, E. (2019). *Dinámicas de trata de personas especialmente la que victimiza a niños, niñas y adolescentes en Gran Caracas y Estado Bolívar*. Universidad Católica Andrés Bello. <https://ctic.iom.int/en/resources/dinamicas-de-trata-de-personas-especialmente-la-que-victimiza-ninos-ninas-y-adolescentes>

- Czechowski, K., Sylvestre, J., y Corsini-Munt, S. (2022). Survival sex: Sexual agency and consent in a state of deprivation? A scoping review. *The Canadian Journal of Human Sexuality*, 31(2), 293-308. <https://doi.org/10.3138/cjhs.2022-0017>
- Daniel-Wrabetz, J., y Penedo, R. (2015). Trafficking in Human Beings in Time and Space. A Socioecological Perspective. In M. J. Guia (Ed.), *The Illegal Business of Human Trafficking* (pp. 1–19). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-09441-0_1
- Das, V. (2012). Ordinary Ethics. In *A Companion to Moral Anthropology* (pp. 133–149). John Wiley y Sons, Ltd. <https://doi.org/10.1002/9781118290620.ch8>
- De Vries, I., Ebrahim, S., Donninger, D., Van Der Meer, B., y Van Bommel, S. (2025). Social contexts of isolation, vulnerability, and resilience among minors with experiences of commercial sexual exploitation in the Netherlands. *Child Abuse y Neglect*, 164, 107439. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2025.107439>
- De Vries, I., Reid, J. A., y Farrell, A. (2023). From Responding to Uncertainties and Ambiguities to More Constructive and Inclusive Debates on Commercial Sex and Sex Trafficking. *Victims & Offenders*, 18(3), 586–606. <https://doi.org/10.1080/15564886.2022.2151539>
- Donatelli, P. (2016). Vulnerabilità e forme di vita. *Etica&Politica/Ethics&Politics*, XVIII, 59–74.
- ECPAT International. (2025). *Panorama de Países: Venezuela*. https://ecpat.org/wp-content/uploads/2025/07/ECO_Venezuela_2024DEC_v4.pdf
- El Pitazo (2021, noviembre 2). Perfil: Yolimar Carolina Rodríguez, la venezolana sentenciada por el caso Zona Divas. *El Pitazo*. <https://www.elpitazo.net/internacional/quien-es-yolimar-carolina-rodriguez-la-venezolana-sentenciada-por-el-caso-zona-divas>
- Falcón, L. M. (1995). Social Networks and Employment for Latinos, Blacks, and Whites. *New England Journal of Public Policy*, 11(1), 17-28.
- Farley, M. (2004). “Bad for the Body, Bad for the Heart”: Prostitution Harms Women Even if Legalized or Decriminalized. *Violence Against Women*, 10(10), 1087–1125. <https://doi.org/10.1177/1077801204268607>

- Farrell, A., Dank, M., De Vries, I., Kafafian, M., Hughes, A., y Lockwood, S. (2019). Failing victims? Challenges of the police response to human trafficking. *Criminology & Public Policy*, 18(3), 649–673. <https://doi.org/10.1111/1745-9133.12456>
- Farrell, A., y Fahy, S. (2009). The problem of human trafficking in the U.S.: Public frames and policy responses. *Journal of Criminal Justice*, 37(6), 617–626. <https://doi.org/10.1016/j.jcrimjus.2009.09.010>
- Finigan-Carr, N. M., Johnson, M. H., Pullmann, M. D., Stewart, C. J., y Fromknecht, A. E. (2019). A Traumagenic Social Ecological Framework for Understanding and Intervening with Sex Trafficked Children and Youth. *Child and Adolescent Social Work Journal*, 36(1), 49–63. <https://doi.org/10.1007/s10560-018-0588-7>
- Firebaugh, G. (2001). Ecological Fallacy, Statistics of. In *International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences* (pp. 4023–4026). Elsevier. <https://doi.org/10.1016/B0-08-043076-7/00765-8>
- Forringer-Beal, A. (2022). Why the ‘Ideal Victim’ Persists: Queering representations of victimhood in human trafficking discourse. *Anti-Trafficking Review*, 19, 87–102. <https://doi.org/10.14197/atr.201222196>
- Fulu, E., y Miedema, S. (2015). Violence Against Women: Globalizing the Integrated Ecological Model. *Violence Against Women*, 21(12), 1431–1455. <https://doi.org/10.1177/1077801215596244>
- Gonzalez Cogollos, L., y Rodríguez Machado, D. (2023). *Situación de derechos de mujeres cisgénero: Población migrante y refugiada que ejercen sexo por supervivencia*. [Informe]. <https://www.researchgate.net/publication/375182857>
- Hamid, H. (2022). Sex Traffickers: Friend or foe? *Anti-Trafficking Review*, 18, 87–102. <https://doi.org/10.14197/atr.201222186>
- Han, C. (2018). Precarity, Precariousness, and Vulnerability. *Annual Review of Anthropology*, 47(1), 331–343. <https://doi.org/10.1146/annurev-anthro-102116-041644>
- Harrison, A., James, C., y Pemberton, A. (2023). Human Trafficking of Adolescents: A Caribbean Perspective. *Current Pediatrics Reports*, 11(4), 116–121. <https://doi.org/10.1007/s40124-023-00306-2>

- Heise, L. L. (1998). Violence Against Women: An Integrated, Ecological Framework. *Violence Against Women*, 4(3), 262–290. <https://doi.org/10.1177/1077801298004003002>
- Held, V. (2006). *The ethics of care: Personal, political, and global*. Oxford University Press.
- Henderson, A. C., y Rhodes, S. M. (2022). “Got Sold a Dream and It Turned into a Nightmare”: The Victim-Offender Overlap in Commercial Sexual Exploitation. *Journal of Human Trafficking*, 8(1), 33–48. <https://doi.org/10.1080/23322705.2021.2019530>
- Horwood, C. (2015). *Beyond Definitions: Global Migration and the Smuggling-Trafficking Nexus*. [Informe]. https://www.academia.edu/78979976/Beyond_Definitions_Global_Migration_and_tht_Smuggling_Trafficking_Nexus
- Hurtado Lozano, M., Iranzo Dosdad, Á., & Rodríguez, W. (2023). Labor Markets in Contexts of War: Recruitment and Trafficking of Child Soldiers in Colombia. *Colombia Internacional*, (114), 65–91. <https://doi.org/10.7440/colombiaint114.2023.03>
- InSight Crime. (2023). *Tren de Aragua: From prison gang to transnational criminal enterprise*. <https://insightcrime.org/wp-content/uploads/2023/08/Tren-de-Aragua-From-Prison-Gang-to-Transnational-Criminal-Enterprise-InSight-Crime-Oct-2023-1.pdf>
- John, M. (2018). Venezuelan economic crisis: Crossing Latin American and Caribbean borders. *Migration and Development*, 8(3), 437–447. <https://doi.org/10.1080/21632324.2018.1502003>
- Kempadoo, K. (Ed.). (2004). *Sexing the Caribbean: Gender, race, and sexual labor*. Routledge.
- Kempadoo, K. (2016). Revitalizando o imperialismo: Campanhas contemporâneas contra o tráfico sexual e escravidão moderna. *Cadernos Pagu*, 47. <https://doi.org/10.1590/18094449201600470008>
- Lamas, M. (2014). ¿Prostitución, trabajo o trata? Por un debate sin prejuicios. *Debate Feminista*, 50, 160–186. [https://doi.org/10.1016/S0188-9478\(16\)30135-9](https://doi.org/10.1016/S0188-9478(16)30135-9)
- Lamas, M. (2016). Feminismo y prostitución: La persistencia de una amarga disputa. *Debate Feminista*, 51. <https://doi.org/10.1016/j.df.2016.04.001>

- Lambertini, S. M. (2023). Consolidation of Organized Crime in the Orinoco Mining Arc (OMA): The Control of Illegal Mining, Human Trafficking, and Other Crimes. *Journal of Illicit Economies and Development*, 5(1), 22–33. <https://doi.org/10.31389/jied.144>
- León, M., y Lugo, B. (2023). *Estudio sobre sexo transaccional por supervivencia en Venezuela*. Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA). <https://provea.org/wp-content/uploads/2023/07/sexotransaccional-20.07.pdf>
- Locke, R. (2012). Organized Crime, Conflict, and Fragility: A New Approach. International Peace Institute.
- Lu, T., Holmes, A., Noone, C., y Flaherty, G. (2020). Sun, sea and sex: A review of the sex tourism literature. *Tropical Diseases, Travel Medicine and Vaccines*, 6. <https://doi.org/10.1186/s40794-020-00124-0>
- McAuliffe, M., y Ouch, L. (2024). World Migration Report 2024. International Organization for Migration (IOM).
- Meneses-Falcón, C. (2023). Sex worker or victim? Exploring the sex industry in Spain. *European Journal of Women's Studies*, 30(2), 248–265. <https://doi.org/10.1177/13505068231164364>
- Mesa, V. (2020). La trata con fines de explotación sexual- el más reciente peligro para las venezolanas. *Revista venezolana de estudios de la mujer* 25(54), 73–90.
- Murphy, M., Contreras-Urbina, M., Spearing, M., y Swaine, A. (2023). Socioecological Framework for Drivers of Conflict and Postconflict Violence Against Women and Girls. *Violence Against Women*, 29(2), 406–427. <https://doi.org/10.1177/10778012221094065>
- Naef, P. (2018). “Narco-heritage” and the Touristification of the Drug Lord Pablo Escobar in Medellín, Colombia. *Journal of Anthropological Research*, 74(4), 485–502. <https://doi.org/10.1086/699941>
- Nagle, L. E., y Zarama, J. M. (2022). Taking Responsibility under International Law: Human Trafficking and Colombia's Venezuelan Migration Crisis. *University of Miami Inter-American Law Review*, 53(2).
- Noddings, N. (2003). *Starting at home: Caring and social policy*. Univ. of California Press.
- Oblitas, B. (2014). Machismo y violencia contra la mujer. *Investigaciones Sociales*, 13, 301–322. <https://doi.org/10.15381/is.v13i23.7235>

- Organización de las Naciones Unidas. (2000). *Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional*. <https://www.unodc.org/unodc/es/organized-crime/intro/UNTOC.html>
- Páez, G. A. (2023). *Cuando ellas agreden: Mujeres víctimas y victimarias*. Editorial Alfa.
- Paulino-Ramírez, R., Felker Kantor, E., Faccini, M., Rodríguez-Lauzurique, R. M., Canario De La Torre, M., Henríquez-Cross, A., y Castro, A. (2023). Health care access and migration experiences among Venezuelan female sex workers living in the Dominican Republic. *Revista Panamericana de Salud Pública*, 1–10. <https://doi.org/10.26633/RPSP.2023.55>
- Persak, N. (2013). Prostitution in times of economic crisis: Effects, human agency and societal responses. In *Getting by or getting rich? The formal, informal and criminal economy in a globalized world* (pp. 305–325). Boom/Eleven international publishing. <http://hdl.handle.net/1854/LU-2973324>
- Peršak, N., y Vermeulen, G. (2014). *Reframing prostitution: From discourse to description, from moralisation to normalisation?* Maklu.
- Phillips, J. (2017). Migrant sex work or sex trafficking? Reflections on “trafficking in women”: A Caribbean post-colonial perspective. In *Caribbean Crime and Criminal Justice*. Routledge.
- Pickering, S., y Ham, J. (2014). Hot Pants at the Border: Sorting Sex Work from Trafficking. *British Journal of Criminology*, 54(1), 2–19. <https://doi.org/10.1093/bjc/azt060>
- Prather, H. (2019). *When Words Are Not Enough: The Development of Human Trafficking in Venezuela Under the Maduro Administration* [Tesis, University of Mississippi]. https://egrove.olemiss.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2184&context=hon_thesis
- Rísquez Parra, A. (2025). Perspectivas frente a la Emergencia Humanitaria Compleja en Venezuela por los organismos internacionales y el gobierno venezolano, diciembre 2024. *Gaceta Médica de Caracas*, 133(2), 602–612. <https://doi.org/10.47307/GMC.2025.133.2.28>
- Rockhill, B. (2001). The privatization of risk. *American Journal of Public Health*, 91(3), 365–368. <https://doi.org/10.2105/AJPH.91.3.365>

- Rojas Perez, O., Morales, A., Carducci, B., Nave, C., Mio, J., y Riggio, R. (2020). Machismo en B.J. Carducci, C.S. Nave, J.S. Mio and R.E. Riggi (eds.) *The Wiley Encyclopedia of Personality and Individual Differences* (243–246). Wiley Blackwell. <https://doi.org/10.1002/9781119547181.ch305>
- Rossoni, I. (2026). Crafting vulneramentality: Vulnerability (and resistance) among migrants with experiences of sex work in Malta. *European Journal of Criminology*, 14773708251400844. <https://doi.org/10.1177/14773708251400844>
- Sabon, L., Yang, S., y Zhang, Q. (2021). Social Network Analysis of a Latino Sex Trafficking Enterprise. *Journal of Human Trafficking*, 9(3), 263–279.
- Sampó, C., y Troncoso, V. (2024). El tren de Aragua: La transnacionalización del crimen organizado a través del tráfico de migrantes. *Análisis Político*, 37(108), 147–176. <https://doi.org/10.15446/anpol.v37n108.116972>
- Sanders, T., McGarry, K., y Ryan, P. (Eds.). (2022). *Sex Work, Labour and Relations: New Directions and Reflections*. Springer International Publishing. <https://doi.org/10.1007/978-3-031-04605-6>
- Schwartz, S. M. (2023). A Cauldron of Tears: Cultural Factors and Vulnerability in Human Trafficking. In M. de Chesnay y D. Sabella (Eds.), *Human Trafficking: A Global Health Emergency: Perspectives from Nursing, Criminal Justice, and the Social Sciences* (pp. 17–31). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-031-33875-5_2
- Silva, C. A. B. D., y Souza, L. A. A. D. (2025). A expansão do Tren de Aragua no Brasil: Análise sobre uma megafacção transnacional. *Revista Eletrônica de Direito, Democracia e Sociedade*, 10(1), e59. <https://doi.org/10.23900/rdds.v10n1-001>
- Simmons, B., Lloyd, P., y Steward, B. (2018). The global diffusion of law: Transnational crime and the case of human trafficking. *International Organization*, 72(2), 249–281. https://scholarship.law.upenn.edu/faculty_scholarship/2052
- Tronto, J. C. (1993). *Moral boundaries: A political argument for an ethic of care* (Repr). Routledge.
- Tronto, J. C. (2013). *Caring Democracy: Markets, Equality, and Justice*. New York University Press. <https://doi.org/10.18574/nyu/9780814770450.001.0001>

- Ulloa Osses, F., Garlin Politis, F., y Miguel Cares. (2022). Sexo por Supervivencia en Población Migrante. Universidad de Chile. https://www.researchgate.net/publication/366157944_Sexo_por_Supervivencia_en_Poblacion_Migrante
- Winterdyk, J. (2020). Explaining Human Trafficking: Modern-Day Slavery. En J. Winterdyk & J. Jones (eds.), *The Palgrave International Handbook of Human Trafficking*. Palgrave Macmillan. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-63058-8>
- Zimmerman, C., y Kiss, L. (2017). Human trafficking and exploitation: A global health concern. *PLOS Medicine*, 14(11), e1002437. <https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1002437>
- Zudina, I. (2025). *Victimhood in Agency: Re-Narrating Sex Trafficking and its Representations in Dialogue with Survivors in Puebla, Mexico* en R. Viales (Ed.) *Crisis y transformaciones del mundo laboral en América Latina* (267-295). CIHAC-CALAS. http://calas.lat/sites/default/files/transformaciones_del_mundo_laboral.pdf

CAPÍTULO 15

Economia solidária sob disputa: forma jurídica ambiental e as organizações de catadores na logística reversa brasileira

Leila Giovana Izidoro

Introdução

Nas periferias do capitalismo, o acesso ao “lixo” como recurso tem permitido a absorção de mão-de-obra excedente na base da indústria da reciclagem pela exploração da força de trabalho dos catadores de recicláveis. Esses trabalhadores são responsáveis por mais de 90 % dos resíduos sólidos urbanos reciclados no Brasil, embora o país recicle menos de 4 % do total de resíduos passíveis de reciclagem (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, 2010). Esse cenário demonstra que, historicamente, tais trabalhadores se reapropriaram de mercadorias descartadas no pós-consumo e, através da coleta e seleção, as reinseriram em novos ciclos produtivos.

No entanto, a partir dos anos 1990, os catadores de recicláveis viram o acesso a sua fonte de renda ameaçado, sobretudo porque o aproveitamento energético do “lixo” se tornou um negócio lucrativo para grandes empresas (Izidoro,

2021). Com o avanço da financeirização do meio ambiente, entendida como a transformação de funções ambientais em ativos negociáveis (Salviatti, 2013), desenvolveu-se também um mercado de logística reversa. Neste mercado, grandes poluidores passaram a se beneficiar do trabalho dos catadores no cumprimento de suas metas, por meio de compensação ambiental. No Brasil, essa contabilização ocorre por meio de programas estruturantes que envolvem a compra e venda de créditos de logística reversa e focam no aumento da produtividade das cooperativas de catadores.

No mercado de logística reversa, as organizações de catadores podem ser compensadas por meio da equivalência entre uma nota fiscal de venda de uma tonelada de material reciclável e um crédito de logística reversa. Tais organizações são conformadas juridicamente como associações ou cooperativas, empreendimentos de economia solidária criados como um meio para obter maiores ingressos, já que a principal fonte de renda dos catadores é a comercialização de recicláveis. Como são remunerados por um salário por peça, que depende da quantidade e qualidade de recicláveis coletados e triados durante um determinado tempo, esses trabalhadores veem na economia solidária uma alternativa para alcançar maior volume e melhores preços de venda. Além disso, por meio da economia solidária, eles também conseguem formalizar-se e obter a capacidade para firmar contratos.

Embora frequentemente apresentada como uma alternativa democrática e transformadora ao modo de produção capitalista (Singer, 2002), a prática mostra que apenas cooperativas que atuam de forma empreendedora conseguem acessar plenamente o mercado de logística reversa. O acirramento da competição entre cooperativas e entre estas e empresas evidencia os limites do cooperativismo enquanto instrumento de transformação social, corroborando críticas históricas como as de Rosa Luxemburgo (2015) sobre a inserção das cooperativas na lógica capitalista.

Diante desse cenário, o presente capítulo propõe investigar como a forma jurídica ambiental —o conjunto de transações jurídicas que transformam funções ambientais em bens negociáveis— mede e estrutura a relação capital-trabalho nas cooperativas de catadores inseridas no mercado de logística reversa brasileiro. A metodologia adotada combina revisão bibliográfica crítica sobre economia solidária, direito ambiental e teoria marxista do direito, com análise documental de políticas públicas, acordos setoriais e programas de logística reversa, permitindo articular teoria e prática para compreender a mediação jurídica das relações entre capital, trabalho e meio ambiente.

A pergunta central que orienta esta análise é: como a forma jurídica ambiental, que medeia o mercado de logística reversa, atua sobre as organizações de catadores de materiais recicláveis, tensionando os pilares da economia solidária? A hipótese que se pretende demonstrar é a forma jurídica ambiental funciona como instrumento de mediação capital-trabalho que reforça a exploração da força de trabalho dos catadores, mesmo em organizações da economia solidária, pois estas continuam à mercê da concorrência imposta pelo modo de produção capitalista. Ao mesmo tempo, a organização em empreendimentos solidários oferece meios para que os trabalhadores aumentem o volume e a valorização de seus produtos no mercado, tornando-se, paradoxalmente, tanto mecanismo de exploração quanto instrumento de sobrevivência e negociação econômica imediata.

Para responder a essas conjecturas, o capítulo está dividido em quatro partes. A primeira discute o conceito de economia solidária, situando suas tensões internas e suas implicações para a organização dos catadores no contexto neoliberal. A segunda parte utiliza a crítica marxista do direito para analisar a forma jurídica na mediação das relações socioeconômicas e sua articulação com a financeirização ambiental, por meio dos princípios do poluidor-pagador

e do protetor-recebedor na responsabilidade estendida do produtor. Na terceira parte, o artigo traz como estudo de caso o panorama da participação das organizações de catadores no mercado de logística reversa brasileiro, evidenciando como esses trabalhadores são impactados pelas disputas em torno da forma jurídica ambiental. Na quarta e última parte são apresentadas as considerações finais.

Economia solidária, informalidade e neoliberalismo: o lugar das organizações de catadores

Diante do cenário de desemprego estrutural e de aumento da chamada informalidade, muitas estratégias de sobrevivência dos trabalhadores, isto é, de produção para a própria subsistência e para o mercado, passaram a ser abarcadas pelo conceito de economia social e solidária. De acordo com a Organização Internacional do Trabalho (OIT), este é um conceito guarda-chuva que designa organizações como as mutuais, cooperativas, associações, fundações e empresas sociais, que têm a característica específica de produzir bens, serviços e conhecimento ao mesmo tempo que buscam objetivos econômicos e sociais e promovem a solidariedade (Borzaga et al., 2018). Essas iniciativas são entendidas como uma opção viável de geração de renda e de preservação de postos de trabalho frente a crises econômicas.

Na América Latina, o conceito de informalidade foi utilizado pela primeira vez pela OIT para impulsionar o Programa Regional de Emprego na América Latina e Caribe (PREALC), na década de 1970. Durante cerca de vinte anos, o programa reuniu uma série de políticas compensatórias de apoio ao setor informal, definido como aquele composto por pequenas unidades produtivas: trabalho por conta própria, economia familiar, microempresas com até cinco empregados e trabalho doméstico (OIT, 2016; OIT,

2018). O reconhecimento estatal dessas pequenas unidades produtivas deu-se a partir da uma alteração na concepção de informalidade por parte dos organismos internacionais: de relacionada ao atraso e ao subdesenvolvimento passou a ser concebida como reflexo da livre iniciativa dos trabalhadores (Ramos, 2007).

Esse cenário representa uma ruptura do pacto fordista-keynesiano que, ao longo do século XX, estruturou um compromisso político entre capital, trabalho e Estado, garantindo níveis relativamente estáveis de emprego, direitos sociais vinculados ao trabalho assalariado e padrões mínimos de proteção social. A reestruturação neoliberal desmantela esse pacto, flexibiliza relações de trabalho, redefine os limites da exploração da força de trabalho e reduz o alcance dos direitos trabalhistas, produzindo desemprego estrutural e expansão da informalidade. Tal reestruturação também incentiva a formalização dos trabalhadores informais em novas figuras jurídicas, que estejam alinhadas aos processos de financeirização da vida e de concessão de microcréditos por parte dos organismos financeiros internacionais.

Tal fato é evidenciado pela remodelagem do conceito de “emprego” trazido pela Recomendação 204 da OIT, de 2015, que trata da Transição da Economia Informal à Economia Formal. Essa Recomendação solidificou um novo entendimento sobre políticas de emprego, pois, além de incentivar regimes simplificados para o pagamento de contribuições e impostos, destaca como políticas de emprego “o apoio a micro, pequenas e médias empresas, ao espírito empreendedor e as regulamentações bem concebidas, transparentes e bem divulgadas, para facilitar a formalização e uma concorrência leal” (OIT, 2015). É nesse cenário que a economia social e solidária ressurgue como alternativa não apenas para os trabalhadores, mas sobretudo como discurso institucional de governos e organismos internacionais.

No Brasil, especificamente, o crescimento das organizações de economia solidária se deu no final dos anos 1980 e 75% das cooperativas existentes foram criadas a partir de 1992 (Fonseca & Veiga, 2001; Wellen, 2009). Nesse contexto, a OIT (2002), em sua Recomendação 193 de 2002, sobre a Promoção de Cooperativas, elenca os princípios cooperativistas de solidariedade, ao mesmo tempo que realça as virtudes empresariais e gerenciais das cooperativas, bem como as vantagens de acesso ao crédito e a mercados. Assim, o resgate de alternativas solidárias tem sido colocado por diversos agentes externos à própria organização dos trabalhadores como um meio de geração de renda e uma saída para o desemprego estrutural.

Na América Latina, 10% dos catadores se encontram formalizados na figura jurídica de cooperativas ou associações, enquanto a grande maioria trabalha de maneira independente (Sturzenegger, 2020). A organização desses trabalhadores por meio de cooperativas e associações pode ser entendida como uma forma de solidariedade de classe, em busca de melhores condições de renda, inclusive como um meio de fazer frente aos atravessadores e alcançar degraus mais altos da cadeia de valor da reciclagem. Mas também deve ser vista como resultado da ação normativa de atores externos. O próprio Banco Interamericano de Desenvolvimento recomenda que estes trabalhadores se constituam legalmente em empreendimentos de economia solidária, porque dessa forma:

(...) encontram-se em condições de estabelecer contratos com governos locais, facilitando sua integração ao sistema formal de resíduos sólidos municipais e adesão a convênios com organizações não governamentais ou organismos internacionais, facilitando seu acesso a financiamentos (Espinoza et al., 2011, p. 144). A proposta política da economia solidária é definida por Singer (2002) como alternativa ao modo de produção

capitalista, sobretudo pela gestão democrática interna dessas organizações. Esse resgate do trabalho associado no Brasil nos anos 1990 parte de uma perspectiva que já tem sido teorizada como projeto alternativo de sociedade desde o início do século XIX, a partir dos ideais de socialistas utópicos como Charles Fourier e Robert Owen (Konder, 1998). No final do século XIX, esse debate também foi colocado em evidência por Eduard Bernstein, que defendia o cooperativismo como um meio de suprimir as contradições capitalistas rumo ao socialismo (Luxemburgo, 2015, p. 90). Esses autores compartilharam, cada um a sua maneira, o entendimento de que reformas na distribuição capitalista, por meio de uma repartição “mais justa”, levariam, progressivamente, ao desenvolvimento do modo de produção socialista.

No debate com Bernstein, Rosa Luxemburgo critica que haja um potencial transformador das cooperativas no capitalismo, sobretudo as cooperativas de produção, tendo em vista a natureza híbrida dessas organizações. Embora possuam uma pequena produção socializada, essas organizações permanecem dentro da lógica da troca capitalista. Em uma economia fundada na concorrência, como é a economia capitalista, a esfera da circulação domina a esfera da produção, subordinando o processo produtivo às exigências de valorização do capital. Isso também implica que as cooperativas precisam intensificar o trabalho, ajustar jornadas e adotar outras estratégias de mercado, conforme a pressão da concorrência. Para Luxemburgo, essa dinâmica leva os trabalhadores cooperados à contradição de terem que se autogovernar, assumindo ao mesmo tempo o papel análogo ao do patrão capitalista (Luxemburgo, 2015, p. 85-86).

Desse modo, pouco importa distinguir entre as cooperativas que seguem os preceitos solidários e aquelas que seriam formadas apenas por conveniência, com intuito

de fraudar os princípios cooperativos ou a legislação trabalhista. Para os tomadores de serviço e para o modo de produção, como um todo, é indiferente como as empresas se organizam internamente, se de forma solidária ou não. O que interessa é que elas permanecem como parte do processo de produção e de circulação, dando continuidade à reprodução do capital. Assim, independentemente da estrutura interna de organização do trabalho, tanto as empresas solidárias como as empresas capitalistas estão subordinadas aos interesses do capital.

As organizações de catadores, em especial, não sobrevivem de forma isolada ao modo de produção, pois coletam e separam recicláveis com o objetivo de comercialização, por meio de acordos que permitem o fluxo dessas mercadorias para as empresas do topo da cadeia de valor. Os trabalhadores não são livres para produzirem o que querem, ao contrário, entram apenas com a mão de obra e com os insumos que serão reprocessados nas grandes empresas, que controlam as decisões técnicas relacionadas à cadeia produtiva. Essas cooperativas estão inseridas numa relação instrumental e precisam se ajustar constantemente às exigências técnicas de produtividade, intensificando seu trabalho conforme a situação de mercado. Assim, os catadores aparecem apenas como coadjuvantes da indústria da reciclagem e “precisam se manter sob o formato cooperativo para legitimar sua própria instrumentalização” (Gonçalves-Dias, 2009, p. 254).

Diante desse percurso, é possível identificar que a organização dos catadores em cooperativas e associações não é fruto de uma estratégia dos próprios trabalhadores em fornecer uma alternativa ao capitalismo. Trata-se de uma necessidade colocada pelo próprio modo de produção capitalista como forma de recompor os limites da exploração do trabalho em níveis significativamente inferiores àqueles vigentes sob o pacto fordista-keynesiano. No neoliberalismo, práticas já conhecidas do capitalismo — salário por peça,

extração de mais-valia absoluta e relativa, trabalho autônomo e associado — passam a ser utilizadas como engrenagem de uma nova racionalidade produtiva, que articula intensificação da exploração do trabalho com a financeirização de todos os aspectos da vida. Essa disputa em torno da economia solidária prepara o terreno para o que será analisado na seção seguinte: a financeirização do meio ambiente e a incorporação dos trabalhadores em novos mercados, que passam a transacionar “serviços ambientais” e a transformar práticas de reprodução da vida em ativos econômicos.

Da economia solidária à economia verde: forma jurídica ambiental e a responsabilidade estendida do produtor

O relatório “*Green Jobs: Towards Decent Work in a Sustainable, Low-Carbon World*”, de 2008, foi o primeiro estudo abrangente realizado pela OIT (2008) sobre a emergência de uma “economia verde” e seu impacto no mundo do trabalho. No ano seguinte, a organização lançou o Programa Empregos Verdes (OIT, 2009), que relacionava a geração de “empregos verdes” diretamente à superação do desemprego trazido pela Crise Financeira de 2008. A partir de preocupação semelhante com os impactos negativos da pandemia de COVID-19 na economia, a OIT e o Banco Interamericano de Desenvolvimento elaboraram estudo no qual estimam que na América Latina e Caribe poderão ser gerados, até 2030, 15 milhões de novos empregos que contribuam para a economia de emissão zero carbono (Saget et al., 2020).

Ao analisar tais estimativas, é possível identificar que grande parte das ocupações elencadas como “empregos verdes” estão relacionadas a alguma atividade predominantemente de subsistência, como a agricultura orgânica (OIT, 2012). Tal fato denota um avanço da mercantilização dos recursos

naturais mais necessários para a sobrevivência humana. É o que ocorre com pescadores da Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, que passaram a ser remunerados pela coleta de plástico marinho realizada duas vezes na semana, através de mecanismo de créditos de plástico emitidos pela BVRio em parceria com a empresa italiana Ogyre (Hillsdon, 2023). Ou seja, trabalhadores que têm sentido de perto o impacto do aumento da poluição plástica na sua atividade pesqueira passam a ser pescadores de plástico. É um exemplo quase distópico de como a reprodução da vida ameaçada pela degradação dos recursos naturais está sendo compensada através da equivalência jurídica e aprofundando a exploração da classe trabalhadora.

Esse cenário indica que a economia verde, da qual surge o conceito de “empregos verdes” é, na realidade, mais uma das etapas da reprodução ampliada do capital, que não apenas aprofunda a crise ambiental e climática, como intensifica a exploração da força de trabalho, acirrando as contradições inerentes ao modo de produção capitalista. Segundo Chesnais e Serfati (2003), a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento (Rio 92), um marco central na institucionalização da agenda do desenvolvimento sustentável, foi um “vetor do reforço dos direitos do capital sobre a natureza” (p. 71). A crítica da forma jurídica formulada por Pachukanis (2017) oferece um referencial essencial para compreender esse movimento e a criação de serviços ambientais como novas mercadorias autônomas, que são transacionadas entre empresas e organizações de catadores enquanto proprietários ou garantidores desses bens.

A contribuição de Pachukanis reside em sua profunda ruptura com a teoria do direito, pois, para o autor, as relações jurídicas devem ser analisadas como formas historicamente determinadas, inseparáveis das relações sociais que lhes dão origem. Assim como para Marx (2017) a forma mercadoria é a unidade mais abstrata do modo de produção capitalista, para

Pachukanis (2017) a forma jurídica é a unidade mais abstrata da sociabilidade capitalista no plano das relações sociais: é a maneira pela qual a forma mercadoria se expressa no campo da troca de equivalentes entre proprietários de mercadorias, por meio de transações jurídicas como as de compra e venda.

Por isso, no contrato de compra e venda da força de trabalho, que é solidificado na esfera da circulação, trabalhador e capitalista figuram como proprietários livres e iguais, trocando mercadorias equivalentes. A exploração da força de trabalho na esfera da produção imediata, pela extração de mais-valia, fundada na diferença entre o tempo de trabalho necessário e o excedente apropriado, desaparece na esfera da circulação, quando todo trabalho parece pago na forma de salário. Essa oposição dialética entre igualdade jurídica e desigualdade material é a própria condição de existência do modo de produção capitalista: a esfera da circulação só pode reproduzir a igualdade jurídica porque oculta a desigualdade estrutural da produção (Grespan, 2019).

De maneira semelhante, as transações ambientais (como créditos de carbono, créditos de reciclagem, entre outros) exigem formas contratuais de equivalência e garantias jurídicas de entrega. Tal como o trabalhador aparece como sujeito proprietário de sua força de trabalho no contrato de trabalho, os catadores enquanto agentes ambientais aparecem como proprietários de um bem: “serviços ambientais”. O que ocorre, na prática, é a produção jurídica de novos espaços de acumulação por meio da atribuição de direitos de propriedade sobre funções ambientais. Assim, a forma jurídica ambiental projeta sobre o meio ambiente a lógica já constituída da forma mercadoria e da forma jurídica.

É neste ponto que se inserem os princípios do *poluidor-pagador* e do *protetor-recebedor*, bem como o arcabouço da responsabilidade estendida do produtor. Todos eles fornecem a gramática jurídica necessária para que a forma jurídica ambiental funcione: estabelecem equivalências, criam

sujeitos responsáveis, atribuem obrigações quantificáveis e estabilizam juridicamente a circulação dessas novas “mercadorias ambientais”. A partir da responsabilidade estendida do produtor ou da responsabilidade compartilhada sobre o ciclo de vida do produto —como tem sido implementado o princípio do *poluidor-pagador* no Brasil— os custos da gestão de resíduos sólidos urbanos passam a ser socializados, inclusive por meio da compensação ambiental na logística reversa dos produtos pós-consumo.

Nos anos 1990, desenvolveu-se um conjunto de instrumentos econômicos que gradualmente redefiniu a relação entre produção, consumo e responsabilidade ambiental. O ponto de virada ocorreu quando a OCDE difunde o princípio do *poluidor-pagador* como mecanismo de correção de “falhas de mercado”. O objetivo não era apenas prevenir danos ambientais, mas reorganizar competitividade e harmonizar custos ambientais no mercado internacional. Quando a União Europeia incorpora o princípio em sua legislação, ele passa a orientar a construção de políticas de resíduos como instrumentos de mercado, não como políticas sociais ou ambientais em sentido estrito (Izidoro & Trevizan, 2025; Oliveira et al., 2019).

É neste ambiente regulatório que surge a responsabilidade estendida do produtor (REP). A ideia central é prolongar a responsabilidade do fabricante, e outros agentes da cadeia de distribuição de determinadas mercadorias, até a fase pós-consumo. Originalmente, a proposta envolvia estimular o eco-design na fabricação das embalagens, mas o efeito jurídico foi transformar o final do ciclo de vida do produto, cobrindo retorno, reciclagem e destinação final ambientalmente correta, como obrigação econômica organizável via mercado. A União Europeia rapidamente institucionalizou a REP por meio de diretivas de resíduos, a partir de meados dos anos 1990. Apesar de a REP ter sido pensada originalmente como responsabilidade individual de cada empresa, prevaleceu o modelo coletivo, no qual empresas concorrentes

cumprem juntas suas obrigações em entidades específicas. Essas entidades centralizam custos, padronizam metas e criam um campo de gestão altamente concentrado, favorecendo a racionalização econômica e a estabilidade jurídica do sistema.

Dessa forma, a REP torna-se a principal forma de aplicação do princípio do *poluidor-pagador* para resíduos: o produtor internaliza custos ambientais pagando por um sistema coletivo que gerencia fluxos materiais de acordo com metas legais. Trata-se de uma verdadeira juridificação da equivalência ambiental, na qual o impacto é convertido em obrigação financeira, e a compensação é convertida em desempenho de mercado. A forma jurídica ambiental é observada, pois, nesse mercado, não apenas os resíduos são tratados como bens circuláveis, mas os serviços ambientais relacionados a sua coleta, triagem, reciclagem ou outra destinação ambientalmente correta. Trata-se da introdução de instrumentos que organizam mercados ambientais e reforçam a propriedade privada sobre fluxos materiais e imateriais. A REP é, assim, a infraestrutura jurídico-econômica que possibilita a economia verde e a financeirização ambiental no campo dos resíduos sólidos urbanos.

Por outro lado, os benefícios gerados a terceiros, extramercado, são considerados externalidades positivas, como é o caso do trabalho de coleta, triagem e revalorização de plásticos pós-consumo realizado pelos catadores de materiais recicláveis. Nesse sentido, esses trabalhadores estariam aptos a receber uma recompensa pela externalidade positiva, por meio do *princípio do protetor-recebedor*. Esse princípio tem como fundamento a justiça socioambiental, propondo políticas que redistribuam benefícios e riscos, como tributação progressiva, incentivos públicos e o Pagamento por Serviços Ambientais (PSA), que é uma ferramenta mercadológica para internalizar externalidades via criação de um mercado para serviços ambientais (Nusdeo, 2006; Simões & Andrade, 2013).

De acordo com a OCDE (2005), os “serviços ambientais” são entendidos como serviços prestados e bens vendidos que têm alguma relação com a prevenção e o controle da poluição e com o uso de recursos naturais. São serviços que podem ser remunerados por meio de uma compensação ambiental, como, por exemplo, a partir da redução do índice de emissões de gases de efeito estufa e do cumprimento de metas dos Estados, firmadas em acordos internacionais, como o Acordo de Paris, ou de metas voluntárias estipuladas em acordos setoriais, como é o caso dos arranjos da logística reversa de embalagens pós consumo.

Nesse sentido, a economia verde propõe mercados induzidos e regulados por normas internacionais e nacionais, sendo o exemplo paradigmático o sistema *cap and trade*, que estabelece limites obrigatórios de emissão de gases de efeito estufa e permite o seu cumprimento por meio da compra de créditos no mercado de carbono. Além dos sistemas de cotas de emissão, multiplicam-se mecanismos de compensação, como o REDD+ (Redução de Emissões por Desmatamento e Degradação florestal), desenvolvido no âmbito da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, e os mercados de compensação de biodiversidade, frequentemente implementados por meio de pagamentos por serviços ambientais (PSA). Em todos esses casos, trata-se de mercados regulados de direitos transacionáveis, nos quais a lei fixa obrigações ou metas e, simultaneamente, cria a demanda que sustenta o mercado (*cap*), enquanto as trocas econômicas são viabilizadas por instrumentos juridicamente definidos (*trade*) (Packer, 2015, p. 81).

Para que os “serviços ambientais” sejam negociados de forma autônoma, eles devem ser considerados como bens independentes do bem principal, sejam “frutos” objeto de negócio jurídico ou bem móvel propriamente dito (como títulos, mercadorias, ações). Os “serviços ambientais” passam, então, a ser representados por meio de títulos ou

certificados, como títulos de crédito que contém a obrigação (promessa) de pagamento. Nesse sentido, criam-se direitos de propriedade sobre funções ambientais de preservação, assim como sua alienação — direito de perceber remuneração equivalente a unidades definidas de provisão do serviço. No caso da logística reversa, essa equivalência é medida por tonelada de material recuperado e disposto de forma ambientalmente adequada. Então, essa remuneração por serviços ambientais tem como objetivo transferir recursos dos beneficiários (*poluidores-pagadores*) aos que promoveram a “ajuda” à natureza para sua prestação (*protetores-recebedores*), compensando estes últimos.

O princípio do *protetor-recebedor* cria uma subjetividade que titulariza “novos bens” e complementa o princípio do *poluidor-pagador*, tornando esta uma relação bilateral negocial (Packer, 2015). Nesse sentido, o *princípio do protetor-recebedor* refere-se à construção de uma nova subjetividade jurídica específica. O sujeito ao qual esse princípio é direcionado está apto a exercer direitos sobre a propriedade e dispor de funções ambientais a um poluidor-pagador, mediante um valor de troca, cujo preço é determinado pelas cadeias de produção interessadas ou no mercado financeiro que negocia os novos ativos ambientais criados (Packer, 2015, p. 27). No Brasil, embora seja possível localizar o princípio do *poluidor-pagador* já na Política Nacional do Meio Ambiente, Lei 6.938 (Brasil, 1981), por outro lado, o princípio do *protetor-recebedor* só aparece explicitamente na legislação brasileira a partir da Política Nacional de Resíduos Sólidos, Lei nº 12.305 (Brasil, 2010).

A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) reconhece o resíduo sólido reutilizável e reciclável como um bem econômico e de valor social, gerador de trabalho e renda e promotor de cidadania (artigo 6º, VIII). A PNRS também prevê princípios e instrumentos econômicos que partem do pressuposto da inclusão social dos catadores de materiais

recicláveis na coleta seletiva e na logística reversa, dentro da gestão integrada de resíduos sólidos urbanos. Nesse sentido, os grandes beneficiários do *princípio do protetor-recebedor*, na PNRS, são os catadores de materiais recicláveis.

O “serviço ambiental” por esses trabalhadores está relacionado à redução de resíduos sólidos urbanos lançados no meio ambiente no pós-consumo, o que se dá a partir da coleta, triagem e venda de recicláveis para a indústria. Por essa razão, os catadores de materiais recicláveis, ao serem remunerados por “serviços ambientais” na logística reversa, estão recebendo uma contrapartida diretamente relacionada ao seu trabalho. De acordo com relatório do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA, 2010), no Brasil o pagamento por serviços ambientais urbanos (PSAU) à organizações de catadores de materiais recicláveis poderia ser implementado por meio de três mecanismos: i) um pagamento por produtividade, isto é, por tonelagem de resíduos coletados; ii) uma política de acréscimos compensatórios por tipo de material, que multiplica um coeficiente pelo valor a ser pago por tonelada coletada, de acordo com o mecanismo de pagamento por produtividade; iii) um fundo de crédito cooperativo, operacionalizado por bancos, fundos ou cooperativas de crédito, com o objetivo de custear melhorias na operacionalização dos empreendimentos.

Ou seja, o PSAU busca premiar a eficiência, de acordo com a classificação das cooperativas em grupos de produtividade do trabalho, que receberiam distintas remunerações. Mas também há uma parcela paga a partir de uma valoração monetária de acordo com o tipo de resíduos. De toda forma, nesses mecanismos de compensação ambiental, são as organizações de catadores de materiais recicláveis que possuem a titularidade para exercer os direitos de propriedade sobre os dados de compra e venda de materiais recicláveis. Esses dados não apenas refletem a produtividade e a eficiência das cooperativas, mas também funcionam como um lastro

econômico e jurídico essencial: servem de base para que as empresas geradoras comprovem o cumprimento de suas obrigações de logística reversa. No próximo tópico, analisaremos como esses dados estruturam a participação das organizações de catadores no mercado brasileiro de logística reversa de embalagens, evidenciando seu papel estratégico na operacionalização do sistema.

A participação das organizações de catadores no mercado brasileiro de logística reversa de embalagens

O Brasil é reconhecido internacionalmente por ter incluído a profissão dos catadores de materiais recicláveis no Código Brasileiro de Ocupações (CBO nº 5192-05) em 2002 e priorizar a contratação de suas organizações no âmbito da Política Nacional de Resíduos Sólidos, Lei 12.305 (Brasil, 2010). Além disso, a lei estabeleceu que, por meio de acordos setoriais e termos de compromisso firmados com o Estado, os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de embalagens deverão estruturar sistemas de logística reversa, conforme o grau e a extensão do impacto à saúde pública e ao meio ambiente dos resíduos gerados, a fim de comprovar sua parte na responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos que lançam no mercado. Para tal, estes agentes deverão priorizar a parceria com organizações de catadores de materiais recicláveis. Cabe analisarmos, portanto, como estes trabalhadores têm se colocado nesse cenário.

A logística reversa é uma espécie do gênero responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, pois trata da combinação de duas obrigações: retorno ao setor produtivo de produtos e embalagens em fim de vida, e a destinação final ambientalmente adequada destes (Cipriano, 2016, p. 193). Ainda que existam instrumentos de comando-controle no âmbito da logística reversa (ex. o cumprimento das

metas de logística reversa como condicionante para obtenção de licenciamento ambiental), este é um sistema que funciona majoritariamente com base no mercado, tendo o Estado o papel de regular o bom funcionamento das relações de trocas com base na compensação ambiental.

Por meio do mercado de logística reversa, o setor empresarial pode investir na prestação de assistência técnica, financeira e de infraestrutura para as organizações de catadores, a fim de atingir as metas negociadas na logística reversa, por meio de programas estruturantes. O primeiro programa estruturante no Brasil foi o Mãos para o Futuro (antigo “Dê mãos para o futuro”), datado de 2006, envolvendo a ABIHPEC – Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos, a ABIPLA – Associação Brasileira de Indústrias de Produtos de Higiene, Limpeza e Saneantes e a ABIMAPI – Associação Brasileira das Indústrias de Biscoitos, Massas Alimentícias, Pães e Bolos Industrializados.

O setor empresarial também pode realizar a compensação ambiental a partir de créditos de logística reversa, que, conforme já mencionado, são equivalentes, cada um, a uma tonelada de material reciclável recuperado do meio ambiente. A primeira referência de geração de créditos de logística reversa vem da iniciativa da Bolsa Verde do Rio de Janeiro (BVRio), de 2013, que remunerava organizações de catadores a partir de notas fiscais de venda de recicláveis, para que as empresas comprovassem o cumprimento da sua obrigação na logística reversa. De início havia uma parceria com o Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis (MNCR), mas no ano seguinte este chegou a se pronunciar, denunciando que a iniciativa acabou por reproduzir uma ideia de concorrência entre as organizações de catadores de materiais recicláveis que estava gerando o rompimento da solidariedade entre os trabalhadores.

Apenas em 2015 foi firmado o Acordo Setorial das Embalagens em Geral, entre a Coalizão de Embalagens e o

Ministério do Meio Ambiente, vinculado ao Governo Federal. Naquele momento, a Coalizão Embalagens representava 20 associações empresariais e quase 4.000 empresas, o que representa apenas 30% do setor de embalagens (Stella, 2023, p. 119). O Compromisso Empresarial para a Reciclagem (CEMPRE) foi designado para coordenar a atuação das empresas dentro do Acordo e a Associação Nacional de Catadores e Catadoras de Materiais Recicláveis (ANCAT) para garantir a participação dos catadores de materiais recicláveis nas negociações com a indústria. A meta nacional estipulada no Acordo Setorial foi de recuperação de pelo menos 22% das embalagens colocadas no mercado por ano, comprovada por meio das notas fiscais emitidas por empresas e cooperativas no momento da comercialização.

Até o início de 2023, o Acordo Setorial de Embalagens em Geral de 2015 era o único acordo setorial firmado em nível federal, que formalizou o modelo de programas estruturantes de empresas e suas organizações de classe que visam à capacitação técnica de catadores e ao aumento de produtividade de suas organizações. Por meio das ações estruturantes da logística reversa, as empresas praticamente montam as organizações de catadores como empreendimentos produtivos, retirando a responsabilidade das prefeituras nesse sentido e diminuindo os seus custos, inclusive com o pagamento pela gestão de resíduos sólidos municipal (Stella, 2023).

Quando a ANCAT assinou o Acordo Setorial como anuente, parte das organizações de catadores vinculadas ao MNCR interpretou essa negociação como uma aproximação problemática com os interesses do setor empresarial via logística reversa (Rossi, 2021). Além disso, a ANCAT passou a ser gestora do programa estruturante conhecido como Plataforma Reciclar pelo Brasil, criado em outubro de 2017, a partir de iniciativa da Coca-Cola Brasil e Ambev, e que hoje conta com quase 20 empresas participantes. A ANCAT participa,

ao lado das empresas, da governança da plataforma, que se baseia na busca pelo consenso.

São os técnicos da ANCAT que visitam as cooperativas para realizar diagnóstico de demandas de regularidade jurídica e contábil, gestão administrativa e financeira, gestão operacional e de produção, infraestrutura e equipamentos, vitalidade associativa, gestão de pessoas e relacionamento com parceiros (Stella, 2023, p. 136). A partir desse diagnóstico, são elaborados planos de ação e de investimentos para um período mínimo de um ano. Conforme pontuado por Stella (2023), ocorrem tensões no programa quando empresas pressionam por resultados, por maiores volumes de materiais recicláveis recuperados, o que demanda dos representantes da ANCAT um esforço de mediação com os catadores e empresas.

É importante notar que esses programas estruturantes também comercializam créditos de logística reversa. Nesses esquemas, as organizações de catadores de recicláveis vendem toneladas de recicláveis e emitem a nota fiscal com base na qual é gerado um crédito de logística reversa, que também é comercializado e considerado uma forma de pagamento por serviço ambiental. No entanto, há um modelo baseado apenas nos créditos de logística reversa, que foi desenvolvido no Estado de São Paulo, entre 2015 e 2021, a partir de vários Termos de Compromisso de Logística Reversa de embalagens pós-consumo que trazem o modelo de concorrências (leilões reversos). O sistema de concorrência (leilão reverso) trata da figura dos Certificados de Reciclagem (CRE), atrelados às Notas Fiscais da venda da quantidade equivalente do material, emitidas pelas operadoras aderentes, utilizando sistema informatizado.

As “cooperativas, operadores e associações de operadores que realizam triagem de materiais recicláveis” são as operadoras aderentes, que para participar do sistema devem ser homologadas pela certificadora responsável. As notas fiscais são rastreadas, certificadas e transformadas nos

Certificados de Reciclagem de Embalagens (CRE), por meio de *blockchain*, para que não haja duplicação ou colidência entre notas fiscais. Então são realizadas concorrências de certificados de reciclagem, leilões nos quais são dados lances cada vez menores a cada rodada. É um sistema baseado na demanda das empresas aderentes e na oferta das operadoras aderentes. Do total do valor arrecadado com a comercialização dos certificados nessas concorrências, 70% são destinados às operadoras aderentes — pela compensação ambiental e os 30% restantes ficam com a certificadora como taxa de administração do sistema (*fee*). Assim, embora não preveja ações estruturantes direcionadas a organizações de catadores enquanto responsabilidade do setor empresarial, esse sistema faz menção indireta às cooperativas de catadores como vendedoras de CRE.

Com o decreto 11.413 de 2023, houve uma expansão do modelo baseado na comercialização de certificados de logística reversa para todo o Brasil de forma a unir os dois modelos: programas estruturantes e créditos de logística reversa (Certificado de Estruturação e Reciclagem de Embalagens em Geral – CERE). Também foram criados os Certificado de Crédito de Reciclagem de Logística Reversa e o Certificado de Crédito de Massa Futura, que permite à empresa auferir antecipadamente o cumprimento de sua meta de logística reversa. Isso representa as reivindicações da ANCAT, que entende que só os programas estruturantes são capazes de melhorar, de forma permanente, as condições de trabalho das cooperativas (Stela, 2023). Roberto Rocha (2023), presidente da ANCAT desde a sua fundação, comenta as mudanças trazidas pelo Decreto 11.413 de 2023:

Tem uma palavra muito importante ali: a priorização dos catadores de recicláveis neste decreto de logística reversa [Decreto 11.413 de 2023], que é um ponto fundamental, porque os catadores precisam ser priorizados.

E não é ser priorizados como qualquer um, precisam ser priorizados como donos desse negócio. É isso que todos os programas de logística reversa precisam pensar: como trabalhar com os catadores sendo parte e donos desse negócio. Como que pode apoiar, ser um canal de apoio para os catadores serem de fato os donos desses negócios. Isso tudo precisa, é lógico, na regulamentação, estar muito claro. Mas de qualquer forma temos muito claro que esses são elementos que não existiam no Recicla + e que veio a existir no decreto de logística reversa. (Rocha, 2023, grifos meus).

A ANCAT defende o papel dos catadores não apenas como beneficiários dos programas, mas como executores de um desses programas. Isso é relevante considerando que o que está sendo negociado nesses programas, além da produtividade, é a propriedade sobre os dados da logística reversa, que são lastreados na força de trabalho dos catadores. Mas, ao mesmo tempo, precisam cumprir as metas, para que seja interessante para o mercado comprar os títulos. Nesse cenário, não é vantajoso para as empresas que precisam cumprir com as obrigações da logística reversa que muitos materiais estejam sendo recuperados na informalidade e não haja registro da sua contabilização, daí o estímulo à formalização desses empreendimentos dentro da economia solidária.

Além disso, à medida que o material vai passando para outros elos da cadeia, tem risco de colidir sobre a nota fiscal comercializada ou ocorrer duplicidade de massa, o que se reduz no primeiro elo da cadeia, na base da indústria da reciclagem. Por isso que a formalização do trabalho dos catadores também auxilia as empresas a comprovarem suas metas. De modo que estruturar as organizações de catadores (em programas estruturantes) significa estruturar a base da cadeia da reciclagem, onde o registro dos índices de recuperação é mais seguro, inclusive para os sistemas de geração de créditos.

No entanto, poucas são as cooperativas que conseguem atingir destaque na logística reversa em parceria com empresas. As cooperativas de catadores geralmente possuem baixa produtividade, pequena escala de comercialização e dificuldades de articulação em rede. Assim, os desafios do cooperativismo estão relacionados a sua própria viabilidade econômica, a partir de um perfil muito mais empreendedor do que solidário (Magera, 2003). Diante dessas dificuldades de gestão, esses trabalhadores dependem da articulação de redes de comercialização internas e de incentivos do Estado e de instituições privadas. Tal associação entre ideais solidários, práticas empresariais e baixa remuneração demonstram, na verdade, as tensões que compõe um setor altamente competitivo em sua base — onde se encontra o exército de reserva — subordinada a um oligopsônio — a um número reduzido de empresas compradoras.

Apenas as cooperativas “vitoriosas” conseguem se inserir e permanecer no mercado de logística reversa, são aquelas que possuem uma gestão empreendedora, o que denota a crítica já feita por Luxemburgo (2015, p. 86) sobre a necessidade contraditória dos operários das cooperativas terem que governar a si mesmos como patrão, já que as cooperativas estão dentro da troca capitalista e, portanto, precisam praticar “todos os métodos muito conhecidos que permitem a uma empresa capitalista enfrentar a concorrência das outras”. Assim, aquelas cooperativas que se demonstram incapazes de atender às expectativas de eficiência do mercado de logística reversa são simplesmente excluídas do mercado (Gonçalves-Dias, 2009).

Considerações finais

O presente artigo evidenciou como a forma jurídica ambiental atua como mediadora entre capital e trabalho no mercado de logística reversa brasileiro, estruturando as

relações entre as organizações de catadores de materiais recicláveis e as empresas responsáveis por cumprir as metas de responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos. A análise mostrou que, embora a economia solidária seja frequentemente apresentada como uma alternativa democrática e transformadora ao modo de produção capitalista, na prática ela funciona simultaneamente como mecanismo de exploração e instrumento de sobrevivência, oferecendo meios para aumentar o volume e a valorização dos produtos, mas mantendo os trabalhadores subordinados às exigências da competição capitalista.

O estudo evidenciou que o mercado de logística reversa transforma os serviços prestados pelos catadores em ativos financeiros, criando titularidade sobre dados e resultados da coleta e triagem de recicláveis. Esse processo, por um lado, reconhece formalmente o trabalho dos catadores e legitima sua participação no sistema de logística reversa. Mas, por outro, reforça sua inserção subordinada à lógica capitalista, evidenciando a mercantilização da força de trabalho e a necessidade de adoção de práticas empreendedoras para sobrevivência no mercado.

Observou-se ainda que apenas as cooperativas com gestão mais eficiente e orientada ao mercado conseguem se destacar, enquanto muitas outras permanecem marginalizadas. Essa dinâmica corrobora críticas históricas sobre os limites do cooperativismo como instrumento de transformação social, mostrando que, mesmo em organizações formalmente solidárias, os trabalhadores continuam à mercê das decisões do oligopsonio das empresas compradoras. A análise reforça, assim, a relevância da crítica marxista à forma jurídica e aos limites da economia solidária como alternativa de emancipação social em tempos neoliberais.

Além disso, o estudo mostrou como a forma jurídica ambiental atua como campo de disputa entre capital, trabalho e meio ambiente, transformando práticas sociais de reprodução

da vida em ativos transacionáveis. A forma jurídica define direitos, obrigações e equivalências que estruturam como os resíduos e os serviços ambientais podem ser valorizados economicamente. Nesse contexto, as cooperativas de catadores se tornam atores estratégicos: enquanto disputam a titularidade e o controle sobre os dados de produção e os créditos de logística reversa, são simultaneamente pressionadas a maximizar produtividade e competir em um mercado oligopsônico.

Essa dinâmica evidencia que o mercado de logística reversa não é apenas uma arena de inovação ou de formalização da economia solidária, mas um verdadeiro campo de conflito de classe, no qual o trabalho é constantemente apropriado pelo capital. A forma jurídica ambiental, ao transformar os serviços prestados pelos catadores em ativos negociáveis explicita a tensão entre trabalho e capital. Os catadores, portanto, permanecem como trabalhadores subordinados, mas organizados coletivamente, negociando sua força de trabalho e seus serviços ambientais em uma arena controlada pelo capital.

É nesse ponto que o mercado de logística reversa revela sua dimensão política e social: ele coloca em evidência os desafios da classe trabalhadora, a necessidade de resistência, articulação e reivindicação de autonomia sobre meios de produção e dados ambientais, ao mesmo tempo em que escancara os limites impostos pelo modo de produção capitalista. A luta dos catadores, portanto, não é apenas pelo acesso a mercados ou renda imediata, mas pela emancipação do seu trabalho e acesso aos recursos básicos para a reprodução da vida e a economia solidária se apresenta como insuficiente, por si só, para enfrentar esses desafios mais estruturais.

Por fim, a trajetória dos catadores no mercado de logística reversa ilustra tanto a persistência da exploração quanto a capacidade de resistência e conquista de espaços sociais e econômicos, trazendo novos desafios para a sua organização de classe. Assim como diria de Jesus (1961), em “Casa de Alvenaria”: “No quarto de despejo eu conhecia os

pé-rapados, os corvos e os mendigos. Na casa de alvenaria estou mesclada com as classes variadas. Os ricos e os da classe média” (p. 130). No mercado de logística reversa, as organizações de catadores estão mescladas, pela concorrência, com empresas de vários portes. Seu maior desafio é justamente o de representar seus interesses de classe e preservar sua voz e solidariedade em meio às pressões do capital, conflitos constantes na negociação das organizações com grandes empresas.

Referências bibliográficas

- Borzaga, C., Salvatori, G., & Bodini, R. (2018). *La Economía Social y Solidaria y el Futuro del Trabajo*. OIT.
- Brasil (1981). *Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981: Política Nacional do Meio Ambiente*.
- Brasil (2010). *Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010: Política Nacional de Resíduos Sólidos*.
- Chesnais, F., & Serfati, C. (2003). Ecologia e condições físicas da reprodução social: Alguns fios condutores marxistas. *Crítica Marxista*, (16), 39-75.
- Cipriano, T. A. R. P. (2016). A juridificação dos resíduos no Brasil em A. Philippi Jr., V. P. Freitas, & A. L. S. Spínola (Orgs.), *Direito Ambiental e Sustentabilidade* (pp. 155-206). Manole.
- Dardot, P., & Laval, C. (2016). *A nova razão do mundo: Ensaio sobre a sociedade neoliberal*. Boitempo.
- De Jesus, C.M (1961). *Casa de Alvenaria: diário de uma ex-favelada*. Editora Paulo de Azevedo.
- Espinoza, P., Arce, E., Faure, M., & Terraza, H. (2011). *Relatório de Avaliação Regional da Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos na América Latina e Caribe 2010*. Banco Interamericano de Desenvolvimento e Organização Pan-Americana da Saúde.
- Fonseca, I., & Veiga, S. M. (2001). *Cooperativismo: Uma revolução pacífica em ação*. FASE.
- Gonçalves-Dias, S. L. F. (2009). *Catadores: Uma perspectiva de sua inserção no campo da indústria da reciclagem* (Tese de Doutorado, Universidade de São Paulo).

- Grespan, J. L. (2019). *Marx e a crítica do modo de representação capitalista*. Boitempo Editorial.
- Hillsdon, M. (2023). *How waste pickers are helping to win the war on plastic pollution*. Reuters. <https://www.reuters.com/sustainability/society-equity/how-waste-pickers-are-helping-win-war-plastic-pollution-2023-07-17/>.
- Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. (2010). *Pesquisa sobre Pagamento por Serviços Ambientais Urbanos para Gestão de Resíduos Sólidos*. Governo Federal.
- Izidoro, L. G., & Trevizan, A. F. (2025). Waste pickers in extended producer responsibility policies: A comparative analysis of Brazil and the European Union. *RECIEL*, 34(2), 352–364. <https://doi.org/10.1111/reel.70014>
- Izidoro, L. G. (2021). *Recicladores de base e a subjetividade jurídica “empreendedora”*: Uma crítica a partir da América Latina (Dissertação de Mestrado, Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo).
- Konder, L. (1998). *Fourier, o socialismo do prazer*. Civilização Brasileira.
- Luxemburgo, R. (2015). *Reforma ou revolução?* Expressão Popular.
- Magera, M. (2003). *Os empresários do lixo: Um paradoxo da modernidade. Análise interdisciplinar das cooperativas de reciclagem de lixo*. Editora Átomo.
- Marx, K. (2017). *O capital: Crítica da economia política: Livro I: O processo de produção do capital* (R. Enderle, Trad.). Boitempo Editorial.
- Ministério do Trabalho e Emprego. (2002). *Classificação Brasileira de Ocupações: CBO nº 5192-05*.
- Nusdeo, A. M. de O. (2006). O uso de instrumentos econômicos nas normas de proteção ambiental. *Revista da Faculdade de Direito de São Paulo*, 101, 357–378.
- Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. (2005). *Opening markets for environmental goods and services*. www.oas.org/dsd/Tool-kit/Documents/ModuleIII/doc/Opening%20Markets%20for%20Environmental%20Goods%20and%20Services.pdf
- Organización Internacional del Trabajo. (2008). *Green jobs: Towards decent work in a sustainable, low-carbon world*.

- Organização Internacional do Trabalho. (2016). *Desarrollo productivo, formalización laboral y normas del trabajo: Áreas prioritarias de trabajo de la OIT en América Latina y el Caribe*. OIT.
- Organização Internacional do Trabalho. (2012). *Hacia el desarrollo sostenible: Oportunidades de trabajo decente e inclusión social en una economía verde*. OIT.
- Organização Internacional do Trabalho. (2018). *Políticas de Formalización en América Latina – Avances y Desafíos*. OIT, Oficina Regional para América Latina y el Caribe, FORLAC.
- Organização Internacional do Trabalho. (2015). *Recomendação 204 de 2015 sobre a Transição da Economia Informal para a Economia Formal*. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---ilo-brasilia/documents/genericdocument/wcms_619831.pdf
- Organização Internacional do Trabalho. (2009). *Programa empregos verdes*. www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---ilo-brasilia/documents/publication/wcms_229629.pdf
- Oliveira, A. C., Tupiassu, L. V. C., & Gros-Desormeaux, J.-R. (2019). Princípio do poluidor-pagador: A análise da sua evolução sob a perspectiva da OCDE. *Revista Duc In Altum Cadernos de Direito*, 11(24), 225-259.
- Organização Internacional do Trabalho. (2002). *Recomendação n° 193 sobre a promoção de cooperativas*. Genebra: OIT. <https://webapps.ilo.org/public/english/standards/reim/ilc/ilc90/pdf/rec-193.pdf>
- Pachukanis, E. (2017). *Teoria geral do direito e o marxismo* (L. Simone, Trad.). Sundermann.
- Packer, L. (2015). *Novo Código Florestal & Pagamentos por serviços ambientais: Regime proprietário sobre os bens comuns*. Juruá.
- Ramos, C. A. (2007). Setor informal: Do excedente estrutural à escolha individual. Marcos interpretativos e alternativas de política. *Revista Econômica*, 9(1), 115-137. <https://periodicos.uff.br/revistaeconomica/article/view/34897>
- Rocha, R. (2023). *13 anos da Política Nacional de Resíduos Sólidos: Desafios e a importância de uma rede recíproca* [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/live/6zvGpLoPljM?feature=share>

- Rossi, F. C. R. (2021). *Sujeitos de sua própria história: A trajetória do Movimento Nacional de Catadores de Materiais Recicláveis (MNCR) no Brasil (2001-2016)* (Tese de Doutorado, Universidade Estadual de Campinas).
- Saget, C., Vogt-Schilb, A., & Luu, T. (2020). *Jobs in a Net-Zero Emissions Future in Latin America and the Caribbean*. BID e OIT.
- Salviatti, A. P. (2013). *A financeirização do Meio Ambiente: O caso do mercado de créditos de carbono* (Dissertação de Mestrado, Universidade de São Paulo).
- Simões, M., & Andrade, D. C. (2013). Limitações da abordagem coreana à definição do instrumento de Pagamento por Serviços Ambientais (PSA). *Sustentabilidade em Debate*, 4(1), 59–78.
- Singer, P. (2002). *Introdução à economia solidária*. São Paulo: Fundação Perseu Abramo. <https://fpabramo.org.br/wp-content/uploads/2018/04/Introducao-economia-solidaria-WEB-1.pdf>
- Stella, E. A. (2023). *A governança das políticas públicas entre atores estatais, movimentos sociais e atores empresariais: A logística reversa com inclusão dos catadores* (Tese de Doutorado, Fundação Getúlio Vargas).
- Sturzenegger, G. (2020). Reciclaje en tiempos de pandemia. *Banco Interamericano de Desenvolvimento*. <https://blogs.iadb.org/agua/es/reciclaje-en-tiempos-de-pandemia/>
- Wellen, H. A. R. (2009). *Para a crítica da “economia solidária”* (Tese de Doutorado, Universidade Federal do Rio de Janeiro).

CAPÍTULO 16

La legitimación de la informalidad desde las élites a partir de la discursividad mediática. El caso de Costa Rica

Ronny J. Viales Hurtado
David Chavarría Camacho

Introducción

La economía informal ha sido históricamente construida desde perspectivas estigmatizantes que la asocian con ilegalidad, desorganización y atraso. Sin embargo, investigaciones recientes han problematizado estas visiones reduccionistas, señalando que dicha economía constituye un fenómeno estructural, relacional y discursivamente constituido dentro de las economías contemporáneas. La variedad de denominaciones empleadas —tales como autoempleo, economía sumergida, sector no remunerado, economía paralela, secundaria, subterránea, oculta, irregular, del pueblo o gris— revela la ausencia de una definición unívoca y la coexistencia de múltiples marcos interpretativos que implican dimensiones legales, económicas, sociales,

culturales y simbólicas (Edelbacher et al., 2015; Luque, 2022; Tongel, 2013; Whittingham, 2014).

Desde una perspectiva crítica, se ha señalado que la construcción de la informalidad no puede entenderse al margen de las estrategias discursivas que han operado en su legitimación, ocultamiento o criminalización. Ha sido representada en muchos casos como una necesidad estructural, más que como una elección individual, especialmente entre los sectores empobrecidos de los países del Sur Global. En este sentido, se ha constituido discursivamente como una forma de adaptación o resistencia frente a un sistema económico que excluye a amplias franjas de la población del acceso al empleo formal y los derechos laborales (Luque, 2022; Sallah, 2016; Slavnic, 2010).

Un aporte clave para entender estas representaciones lo brinda Owen Jones (2013) en *Chavs: la demonización de la clase obrera*, donde explora cómo los medios de comunicación y el discurso político británico han construido al “chav” como una figura grotesca y despreciable, representante de una clase trabajadora estigmatizada por su pobreza, estética y conducta. Esta construcción, señala Jones, no es inocente ni anecdótica, sino profundamente funcional al proyecto neoliberal, pues permite justificar políticas de austeridad, desinversión social y criminalización de la pobreza. En este marco, el trabajo informal se convierte en una forma de mala conducta atribuida a los sectores populares, desplazando el foco de atención desde las causas estructurales de la precariedad hacia supuestas fallas morales del individuo.

Esta lógica estigmatizante se refuerza mediante otras estrategias, como el ocultamiento institucional, la invisibilización mediática selectiva o la naturalización de las desigualdades en nombre del emprendimiento individual (Lindell, 2010a; Webb & Barzuna-Hidalgo, 2025). En efecto, muchas de las políticas de formalización impulsadas

por organismos multilaterales y gobiernos nacionales se basan en discursos tecnocráticos que suponen una transición deseable y posible hacia la formalidad, sin reconocer los contextos culturales, económicos y jurídicos que hacen viable y legítima la economía informal (McLain et al., 2008; Morris, 2019).

A nivel institucional, la literatura reciente ha subrayado la importancia de la incongruencia normativa entre instituciones formales (leyes, políticas públicas) e instituciones informales (normas sociales, valores, creencias), como factor clave para comprender su prevalencia. (Littlewood et al., 2020; Williams et al., 2015). En contextos donde las normas estatales no logran articularse con los marcos simbólicos de la ciudadanía, se produce una deslegitimación del aparato estatal, lo que impulsa la búsqueda de alternativas fuera del marco laboral regulado. Esta situación se ve agravada por niveles bajos de confianza en las instituciones públicas, lo que refuerza la percepción de que operar informalmente resulta más eficiente y justo (Chen & Zeng, 2024; Sami & Lassassi, 2020).

De esta manera, la economía informal debe ser entendida como una práctica económica, así como una construcción discursiva compleja en la que se articulan relaciones de poder, sentidos comunes, resistencias y estrategias de reproducción social. Analizar las formas en que se representa el trabajo informal —en la política, en los medios, en el lenguaje técnico y en las narrativas culturales— permite comprender cómo se produce su normalización o su marginación. Estas estrategias discursivas tienen como referente la realidad y su construcción social y, además, contribuyen activamente a organizarla.

En contextos de reformismo neoliberal, el emprendedurismo se está naturalizando como solución para el problema del desempleo, tanto desde los sectores privados, como desde el Estado, construyendo un mensaje claro para

las personas jóvenes (Pérez & Busso, 2020): convertirse en “emprendedores de sí mismos”, flexibles, autónomos y adaptables, donde se tiende a desplazar la responsabilidad por el empleo desde el Estado hacia las personas, sin modificar las estructuras (Busso & Pérez, 2021) lo que genera espacios de trabajo degradado. (Fernández & Barrera, 2021) En el caso de Costa Rica, este fenómeno se llega a plantear como una posibilidad de ahorro para los empresarios al deslegitimar la inversión social, el respeto de los derechos laborales y el pacto fiscal generador de estilos de cohesión social incluyente (Viales & Chavarría, 2025).

Así, la informalidad, como estrategia desde las elites, se construye a partir de un estigma positivo, ocultando su diversidad y minimizando su capacidad de agencia (Banks et al., 2020), e incluso se ha llegado a retratar a las personas que participan de esta como menos comprometidas políticamente, con actitudes de derecha y más favorables a los programas sociales no contributivos (Baker & Velasco, 2017), aunque no existe evidencia contundente de que la participación política sea solamente de derechas y sí sobre la vinculación entre trabajo formal e informal en núcleos familiares, por lo que pueden funcionar como agentes reproductores del reformismo neoliberal, a pesar de que las personas trabajadoras informales son excluidas del estilo neoliberal (Kopper & Richmond, 2024) y deben desarrollar estrategias de supervivencia, adaptación o lucha.

En este trabajo se analiza la legitimación de la informalidad en Costa Rica, desde la prensa, entre 2023 y 2025, para justificar la existencia de actividades económicas no reguladas o no registradas, a partir de mecanismos y representaciones tales como la normalización de prácticas informales, la falta de denuncia o regulación o la percepción de la informalidad como una necesidad económica, partiendo de la premisa de que los medios reproducen visiones del mundo que responden a intereses específicos

(económicos, políticos o culturales) bajo la apariencia de neutralidad, donde los discursos mediáticos no son homogéneos, porque combinan y pueden legitimar o contradecir ideologías (Fairclough, 2006), así como la tipología de las personas actoras que aparecen, implícita o explícitamente, en los discursos, para estudiar su función, la lógica de su intervención y su relación con el poder.

Enfoque teórico

El análisis del trabajo informal ha evolucionado desde enfoques estructurales que lo concebían como patología económica hacia perspectivas que reconocen su carácter situado, relacional y discursivamente construido (Luque, 2022; Turner, 2019). Este giro teórico ha permitido evidenciar que esta no constituye un residuo del pasado, sino una configuración activa del presente, donde convergen condiciones materiales, racionalidades culturales y procesos de legitimación simbólica. En consecuencia, este trabajo adopta un enfoque que entiende la informalidad como un conjunto de prácticas económicas no reguladas y como un campo de producción discursiva, donde se disputan sentidos, se definen fronteras morales y se configuran jerarquías sociales. En este campo intervienen actores diversos —instituciones estatales, medios de comunicación, elites políticas y actores populares— que movilizan discursos orientados a justificar, invisibilizar, estigmatizar o integrar dichas prácticas (Lindell, 2010a; Webb & Barzuna-Hidalgo, 2025).

Discurso, informalidad y poder

Desde una perspectiva constructivista, el discurso no es meramente una descripción de la realidad, sino una práctica social que la produce y organiza. En el caso de la economía informal, los discursos operan configurando

los límites entre lo aceptable y lo ilícito, entre el ciudadano legítimo y el sujeto sospechoso, entre la inclusión institucional y la exclusión moral (Jessop, 2004; Slavnic, 2010). Las representaciones discursivas que circulan sobre el trabajo informal moldean tanto su percepción social como las políticas públicas orientadas a gestionarlo. Un caso emblemático es el analizado por Owen Jones (2013), donde muestra cómo los sectores populares británicos han sido retratados mediáticamente como “vagos”, “violentos” y “dependientes”, construyendo una figura estigmatizada que legitima el dismantelamiento del Estado de bienestar. Esta operación discursiva permite desplazar el foco desde las causas estructurales del desempleo hacia la supuesta patología moral de quienes trabajan en condiciones informales o precarias.

De acuerdo con Norman Fairclough, el lenguaje de los medios de comunicación reproduce, transforma y disputa relaciones de poder, por lo que es importante dilucidar las dimensiones tanto discursivas como ideológicas de la mediatización. En ese sentido, los medios construyen un poder significativo que genera o reproduce conocimiento, valores e identidades. El contexto en que desarrolla esta dinámica está mediado por condiciones económicas, políticas e institucionales, recientemente dominadas por la (des)globalización, el consumo y el neoliberalismo, por lo que se da una relación dialógica que incluye, además, a diferentes actores y actrices aparentemente plurales, pero en cuyos mensajes se ocultan jerarquías discursivas. (Fairclough, 1995)

Los medios construyen, reproducen y transforman las relaciones de poder, donde el discurso funciona como un campo de luchas simbólicas, a través del cual, por medio de representaciones mediáticas, se puede naturalizar, legitimar o cuestionar desigualdades, situación que se complejiza en la era digital y de la inteligencia artificial. (Chouliakari,

2025) Por lo tanto, los medios plantean una representación del mundo social sesgada, que incluye presencias y ausencias, así como jerarquías en el discurso, con la finalidad de construir identidades sociales, por lo que es vital fomentar una alfabetización mediática crítica. (Fairclough, 1995) Entre política y lenguaje hay una relación constitutiva que puede llevar a la persuasión, la manipulación, la negociación o la cooperación, por lo que se convierte en un espacio de disputa. (Chilton, 2004)

De acuerdo con Fairclough (2006), la discursividad mediática constituye un campo donde se articulan y disputan ideologías diversas. Las elites han utilizado los medios de comunicación para construir la legitimidad (Schmidtke, 2019) de la informalidad “desde arriba”, por medio de la discursividad mediática y a partir de diversos mecanismos y representaciones sociales. En contextos de reformismo neoliberal, esta legitimación presenta la informalidad como naturalizada (Decima, 2022) pero exalta unas dimensiones y oculta otras. (Vinelli, 2014).

En el sentido anterior, una buena parte de las personas en condición de informalidad son excluidas de las aspiraciones de modernidad que proyectan, por lo que deben construir formas de resistencia, desde abajo, tanto como de sociabilidad, de pertenencia subjetiva y de agencia política o de su transformación, real o subjetiva, en emprendedores. (Kopper & Richmond, 2024)

Sistematización de estrategias discursivas

Los discursos sobre la economía informal operan más allá de la descripción; en esta sección se sistematizan analíticamente las estrategias que configuran dichas construcciones simbólicas a partir de la literatura secundaria. Esta sistematización es presentada en la tabla 16.1.

Tabla 16.1

Sistematización de estrategias discursivas sobre la economía informal a partir de la literatura consultada.

Estrategia discursiva	Descripción	Función principal	Referencias clave
1. Legitimación por necesidad	Presenta la informalidad como respuesta estructural a la falta de empleo formal y exclusión social.	Justificar la informalidad como inevitable	Luque (2022); Sallah (2016); Slavnic (2010)
2. Ocultamiento y evasión	Destaca la clandestinidad, eludir controles fiscales y ausencia de regulación.	Vincular informalidad con ilegalidad	Webb & Barzuna-Hidalgo (2025); Tongel (2013)
3. Resistencia y adaptación	Enfatiza la capacidad de los actores para resistir normativas y adaptarse a entornos hostiles.	Resignificar informalidad como agencia	Lindell (2010b); Slavnic (2010); Curro (2017)
4. Mecanismos relacionales	Muestra la informalidad como articulada a redes de confianza, apoyo mutuo y capital social.	Legitimar su eficiencia y resiliencia	Polukhina & Strelnikova (2015); Kumi & Copestake (2022)
5. Normalización simbólica	Reproduce la informalidad como parte cotidiana, estable y aceptada del orden económico.	Naturalizar su presencia estructural	Turner (2009); Reimer (2006); Webb & Barzuna-Hidalgo (2025)
6. Estigmatización moral	Asocia la informalidad con incivildad, flojera o desviación cultural.	Criminalizar a los actores informales	Jones (2013); Thai & Turkina (2013)
7. Incorporación tecnocrática	Busca formalizar gradualmente la informalidad sin alterar las causas estructurales.	Gestionar la informalidad sin disputarla	Williams (2016); Riisgaard et al. (2024); Morris (2019)

Nota. Elaboración propia con base en Luque (2022), Webb & Barzuna-Hidalgo (2025), Slavnic (2010), Lindell (2010a, 2010b), Jones (2013), Turner (2009), Morris (2019), Riisgaard et al. (2024), entre otros.

Estas estrategias no son excluyentes ni unívocas, pueden coexistir y entrar en tensión según el actor, el contexto geopolítico, socioeconómico y cultural, y el tipo de discurso analizado. Por ejemplo, la legitimación por necesidad es una

narrativa común en discursos académicos críticos, mientras que la estigmatización moral predomina en marcos conservadores y mediáticos. A su vez, la incorporación tecnocrática es el enfoque dominante de organismos multilaterales, que promueven regulaciones sin confrontar las causas estructurales de la exclusión laboral.

Metodología

Este estudio parte de un enfoque cualitativo de tipo interpretativo, orientado a analizar las construcciones discursivas en torno al trabajo informal. La investigación emplea el análisis crítico del discurso (ACD) como perspectiva metodológica, en tanto permite examinar cómo el lenguaje contribuye a la producción y reproducción de relaciones de poder en contextos marcados por la desigualdad, la exclusión y la estigmatización (Fairclough, 1992; Van Dijk, 2008).

El corpus está conformado por documentos seleccionados de manera intencional, con base en criterios de pertinencia temática, diversidad de actores y presencia explícita o implícita de representaciones sobre la economía informal. Se analizaron textos provenientes de piezas mediáticas (noticias, editoriales, columnas de opinión). Esta selección busca capturar una gama representativa de enunciados que inciden en la construcción simbólica del trabajo informal.

El análisis se sustenta en la sistematización de siete estrategias discursivas desarrolladas en el marco teórico: 1) legitimación por necesidad, 2) ocultamiento y evasión, 3) resistencia y adaptación, 4) mecanismos relacionales, 5) normalización simbólica, 6) estigmatización moral e 7) incorporación tecnocrática. Estas estrategias funcionan como categorías analíticas que orientan la lectura e interpretación del *corpus*. En la tabla 16.2 se presenta un resumen de las estrategias discursivas con sus respectivos indicadores textuales y preguntas guía para el análisis.

Tabla 16.2
*Estrategias discursivas, indicadores textuales
y preguntas guía para el análisis*

Estrategia discursiva	Indicadores textuales	Preguntas guía para el análisis
Legitimación por necesidad	Frases que aluden a sobrevivencia, falta de empleo, urgencia	¿Cómo se presenta la informalidad como única opción viable?
Estigmatización moral	Términos peyorativos, referencias a desorden o ilegalidad	¿Cómo se atribuye culpa o responsabilidad al actor informal?
Incorporación tecnocrática	Lenguaje administrativo o neutralizador (formalizar, regular)	¿Cómo se reduce la informalidad a un problema técnico?
Mecanismos relacionales	Menciones a redes de apoyo, solidaridad, economía comunitaria	¿Qué rol juegan las redes sociales y la confianza?
Resistencia y adaptación	Expresiones de informalidad como alternativa u oposición	¿Cómo se expresa la agencia frente a las regulaciones formales?
Ocultamiento y evasión	Evasión de impuestos, trabajo "por debajo" de lo legal	¿Qué prácticas buscan mantenerse fuera del control institucional?
Normalización simbólica	Lenguaje naturalizado, informalidad como costumbre o hábito	¿Cómo se representa la informalidad como parte del orden común?

Nota. Elaboración propia con base en Luque (2022), Webb & Barzuna-Hidalgo (2025), Slavnic (2010), Lindell (2010a, 2010b), Jones (2013), Turner (2009), Morris (2019) y Riisgaard et al. (2024).

El procedimiento metodológico contempló una lectura intensiva del *corpus*, seguida de la segmentación de las unidades discursivas más relevantes. Posteriormente, se procedió a la codificación analítica, identificando patrones de sentido asociados a cada estrategia discursiva. Se prestó particular atención a la relación entre el posicionamiento discursivo de cada fuente y el tipo de actor que la emite (institucional, mediático o académico). Esta articulación permitió trazar continuidades, contrastes y tensiones en la forma en que se representa la economía informal.

Marcos discursivos dominantes sobre la informalidad laboral en la prensa costarricense: análisis crítico desde la construcción mediática del fenómeno

En este apartado se desarrolla el análisis empírico de las construcciones discursivas sobre la economía informal en Costa Rica. El objetivo central es examinar críticamente cómo la discursividad mediática, a través de una selección de noticias de la prensa costarricense contemporánea, configura, representa y potencialmente legitima el fenómeno de la informalidad laboral. Para ello, se aplicó el marco analítico basado en las siete estrategias discursivas identificadas a partir de la literatura especializada (ver tabla 1). Este análisis busca desentrañar las relaciones de poder implícitas en el lenguaje mediático y cómo este contribuye a la producción y reproducción de sentidos comunes sobre un aspecto crucial de las dinámicas laborales actuales.

El estudio de cómo las élites, a través de su influencia o control sobre los medios de comunicación, construyen la narrativa sobre la informalidad es fundamental para comprender tanto los horizontes como las limitaciones que enfrentan las estrategias de supervivencia “desde abajo” en el contexto del reformismo neoliberal latinoamericano. De ahí la importancia de analizar las lógicas de la informalidad en relación con la formalidad, las nuevas formas de control social “desde arriba”, y las dinámicas de poder, inequidad y estigmatización que atraviesan las experiencias laborales contemporáneas.

El corpus del presente análisis consiste en una recopilación de noticias publicadas en diversos medios de comunicación costarricenses, principalmente periódicos digitales durante los años recientes, desde finales de 2023 hasta 2025. Estas piezas abarcan desde reportes estadísticos basados en datos oficiales hasta artículos de opinión, análisis de políticas y relatos de experiencias individuales de trabajadores

informales. Se logró identificar los marcos narrativos o encuadres generales predominantes a través de los cuales la prensa costarricense aborda la informalidad laboral, según se desprende del *corpus* analizado. Estos marcos configuran el telón de fondo sobre el cual se despliegan las estrategias particulares, estableciendo las definiciones implícitas y las asociaciones más recurrentes en torno al fenómeno. Se observa una coexistencia, y a veces tensión, entre distintos marcos que presentan la informalidad principalmente como 1) un fenómeno estadístico medible, como 2) un problema socioeconómico, y como 3) una consecuencia inevitable de factores estructurales (ver figura 16.1).

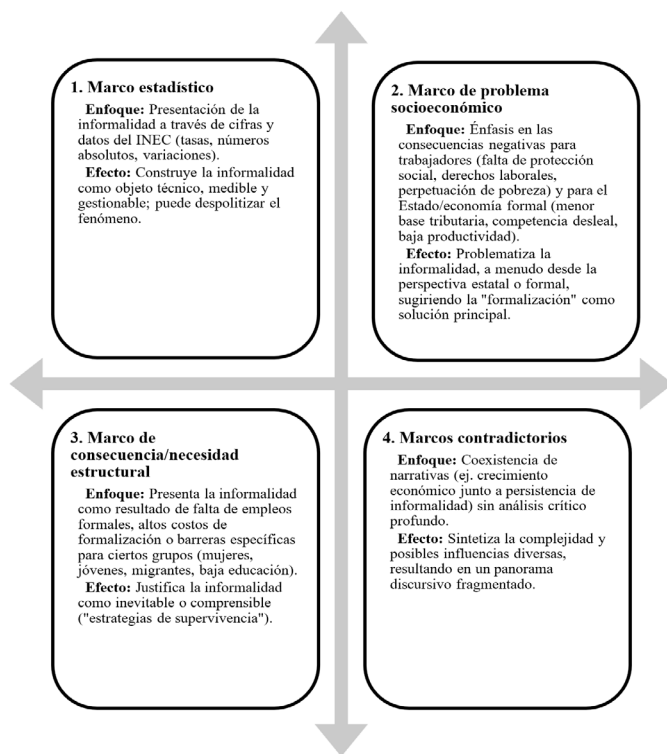
Un marco discursivo sumamente extendido es el que presenta la informalidad primordialmente como un fenómeno estadístico (aquí se le ha denominado “Marco estadístico”). La gran mayoría de los artículos analizados recurren de manera central a los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), específicamente a través de la Encuesta Continua de Empleo (ECE). Noticias de diversos medios citan las tasas de informalidad, los números absolutos de personas en esta condición, su distribución por sexo (género), edad o sector y las variaciones trimestrales o interanuales (por ejemplo: Alvarado, 2025; Brenes, 2025; Cerdas Gómez, 2022; Condega, 2025; Ibarra, 2024; Serrano, 2025).

Este encuadre, centrado en la cuantificación y el monitoreo a través de cifras oficiales, tiende a construir la informalidad como un objeto técnico, susceptible de ser medido y gestionado. La recurrencia a la autoridad estadística del INEC confiere un aura de objetividad y neutralidad a la representación, lo cual puede tener el efecto de despolitizar el fenómeno, presentándolo más como un indicador económico fluctuante que como un terreno de conflicto social o un resultado de relaciones de poder desiguales.

La manera en que se reportan las fluctuaciones —a veces destacando aumentos (Ibarra, 2024; Alvarado, 2025), otras

Figura 16.1

Costa Rica: Marcos discursivos dominantes sobre la informalidad en la prensa nacional



Nota. Elaboración propia a partir del análisis de noticias de periódico.

veces disminuciones (Morales, 2025; May-Grosser, 2025) o estabilidad (Brenes, 2025; “Tasa de desempleo en Costa Rica sin cambios”, 2025)— a menudo se presenta sin profundizar en las causas estructurales o las experiencias vividas detrás de esos números. Este enfoque cuantitativo y descriptivo se alinea estrechamente con la estrategia de “Incorporación Tecnocrática”, que reduce problemas sociales complejos a

cuestiones de medición y manejo técnico, marginando análisis críticos sobre las raíces de la precariedad o las lógicas alternativas presentes en las economías populares.

Paralelamente, y a menudo utilizando los mismos datos estadísticos como base, otro marco discursivo dominante construye la informalidad como un problema con consecuencias negativas, tanto para los individuos involucrados como para la sociedad y la economía formal (Marco de problema socioeconómico). Desde la perspectiva de las personas trabajadoras, se enfatiza la falta de protección social, la ausencia de derechos laborales básicos como seguro de salud, pensiones, aguinaldo, vacaciones, y la exposición a condiciones precarias y abusos patronales (Velázquez-Robles, 2025; Ramírez, 2025; Muñoz-Sequeira, 2022; Alvarado, 2023). Se subraya cómo esta desprotección perpetúa ciclos de pobreza y exclusión social, impidiendo la acumulación de derechos a largo plazo, como la jubilación (Velázquez-Robles, 2025; Ramírez, 2025; Solano-Miller, 2025).

Desde la perspectiva del Estado y la economía formal, la informalidad se presenta como un problema debido a la reducción de la base tributaria y la evasión de contribuciones a la seguridad social, lo que debilita el financiamiento de servicios públicos y genera una carga adicional sobre el sistema formal (Velázquez-Robles, 2025; Ortega, 2025; Pérez, 2024). También se representa como un factor de competencia “desleal” para las empresas formales (“Comenzar un negocio en Costa Rica”, 2017; Ramírez, 2023) y como una causa o consecuencia de baja productividad (Ramírez, 2025). La problematización de la informalidad, si bien es necesaria para visibilizar sus aspectos negativos, puede operar discursivamente de maneras sutiles. Al centrar el problema en la pérdida de ingresos fiscales o la competencia desleal, se privilegia la perspectiva de las instituciones estatales y del capital formal. Incluso cuando se enfoca en la falta de protección del trabajador, la solución implícita o explícita

suele ser la “formalización” dentro del sistema existente, sin necesariamente cuestionar las condiciones estructurales (bajos salarios, precariedad incluso en el empleo formal) que hacen que la informalidad persista o sea una opción racional para muchas personas. Este encuadre se vincula con la temática de las “limitaciones” de las dinámicas laborales actuales.

Un tercer marco discursivo, frecuentemente entrelazado con los anteriores, presenta la informalidad como una consecuencia o una necesidad derivada de factores estructurales que escapan al control individual (Marco de consecuencia/necesidad estructural). Se argumenta que la informalidad surge como respuesta a la falta de suficientes empleos formales que absorban la fuerza laboral disponible (Ortega-Campos, 2025; Molina-Cordero, 2025; Cordero-Parra, 2025; Pérez, 2024; Ramírez, 2025).

También se señalan los altos costos asociados a la formalización —cargas sociales, impuestos, trámites burocráticos— como barreras significativas, especialmente para pequeñas empresas y trabajadores independientes (Ramírez, 2025; Ortega-Campos, 2025; Alvarado, 2022; Zolezzi, 2023). Este marco a menudo se ilustra con historias personales de actores y actrices sociales que recurren a la informalidad para “subsistir” o “pulsearla” ante la falta de alternativas (Campos, 2025; Serrano, 2020).

Además, se reconoce que ciertos grupos sociales enfrentan barreras particulares que los empujan hacia la informalidad: las mujeres (por responsabilidades de cuidado o discriminación), las personas jóvenes (por falta de experiencia o habilidades demandadas), las personas migrantes (por estatus legal o discriminación), las personas con bajos niveles educativos o residentes en zonas rurales con pocas oportunidades (ver ejemplos en sección de interseccionalidad). Este encuadre conecta directamente con la noción de estrategias de supervivencia desde abajo y con una estrategia discursiva de “Legitimación por Necesidad”.

Finalmente, es relevante señalar la presencia de marcos contradictorios o tensiones discursivas en la cobertura mediática.

No es raro encontrar artículos que reportan simultáneamente indicadores económicos positivos, como crecimiento del PIB o del PIB *per cápita*, o creación de empleo formal, junto con la persistencia o incluso el aumento de la informalidad (por ejemplo, Condega, 2025; Alvarado, 2025; Morales, 2025). Estas aparentes contradicciones, crecimiento económico sin reducción significativa de la informalidad, o caída del desempleo con reducción de la población ocupada total debido a la salida de informales del mercado laboral (como analiza Brenes, 2024), a menudo se presentan sin un análisis crítico profundo sobre las dinámicas subyacentes del estilo de crecimiento. La gestión discursiva de estas tensiones puede variar: a veces se atribuyen a desfases temporales, a la heterogeneidad del mercado laboral y de trabajo, o simplemente se presentan como datos paralelos sin intentar reconciliarlos.

Esta coexistencia de narrativas, a veces opuestas, refrenda la complejidad del fenómeno, pero también puede ser un indicio de cómo diferentes fuentes y actores institucionales (gobierno, empresarios, economistas, organismos internacionales) influyen en el encuadre mediático, resultando en un panorama discursivo fragmentado donde no siempre se conectan las causas estructurales con las consecuencias observadas.

Análisis de las estrategias discursivas de legitimación (y deslegitimación) de la informalidad en Costa Rica

En este apartado se analiza la operación concreta de las siete estrategias discursivas sistematizadas (ver tabla 16.1 y tabla 16.2). Estas estrategias no siempre aparecen de forma aislada, sino que a menudo se combinan y refuerzan mutuamente para construir significados específicos sobre la informalidad laboral en Costa Rica. El examen detallado revela cómo el lenguaje, la selección de temas, las fuentes citadas y los encuadres narrativos contribuyen a justificar, naturalizar, problematizar o gestionar discursivamente este fenómeno complejo. Una síntesis de los hallazgos principales se puede observar en la tabla 16.3.

Tabla 16.3

Síntesis de resultados sobre las estrategias discursivas analizadas

Estrategia discursiva	Descripción en el corpus	Función principal identificada
1. Legitimación por Necesidad	Presenta la informalidad como única opción de subsistencia ante falta de empleo formal (ej. historias personales de vendedores, trabajadores agrícolas, trabajadoras sexuales trans).	Justificar la informalidad como inevitable o comprensible, aunque puede despolitizarla.
2. Ocultamiento y Evasión	Vincula informalidad con elusión de impuestos, CCSS, regulaciones; a veces con ilegalidad (ej. comercio ilícito, evadir policía municipal, subcontratación para esquivar responsabilidades).	Construir la informalidad como desviación de la norma legal/fiscal, centrando el problema en el incumplimiento.
3. Resistencia y Adaptación	Resalta agencia, creatividad y resiliencia ("pulsearla"); informalidad como emprendimiento o búsqueda de autonomía (ej. historias de vendedores, trabajadores independientes, uso de plataformas).	Resignificar informalidad como espacio de agencia, aunque puede romantizar precariedad o alinearse con discurso neoliberal de emprendimiento.
4. Mecanismos Relacionales	Menciones limitadas o implícitas; énfasis en obligaciones familiares como motor; redes a veces en contexto negativo (explotación); poca visibilidad de redes de apoyo mutuo positivas.	Subrepresentación de la dimensión socialmente integrada, favoreciendo visiones individualistas o economicistas.
5. Normalización Simbólica	Presentación de la informalidad como característica estructural, persistente, cotidiana (ej. uso de lenguaje naturalizador, repetición de altas cifras, descripción de escenas comunes).	Reducir expectativas de cambio estructural, fomentar resignación o búsqueda de soluciones paliativas.
6. Estigmatización Moral	Menos directa; asociaciones sutiles con delincuencia, desorden (espacio público), competencia desleal, riesgo sanitario; se documenta estigma sufrido por algunos grupos (trabajadoras sexuales).	Justificar control, reforzar exclusión, desviar atención de causas estructurales hacia supuestas fallas individuales o de la actividad.
7. Incorporación Tecnocrática	Dominante; informalidad como problema técnico administrativo a gestionar con políticas, regulación, medición (ej. dependencia de estadísticas, citas de OCDE, discusión de reformas legales, estrategias nacionales).	Despolitizar el debate, enfocar en gestión técnica dentro del sistema existente, marginar perspectivas de trabajadores informales.

Nota. Elaboración propia a partir del análisis de noticias de periódico.

La legitimación por necesidad es una de las estrategias más recurrentes y explícitas en el corpus. Se manifiesta principalmente a través de la presentación de la informalidad no como una elección libre, sino como la única alternativa viable para la supervivencia frente a la exclusión del mercado formal y la falta de oportunidades. Los indicadores textuales clave incluyen referencias directas a la “necesidad”, la “subsistencia”, la “falta de empleo” o la informalidad como “única opción”.

Un ejemplo paradigmático es la historia de Landon Josué Castro, un joven de 18 años que vende *patí* (repostería caribeña) en la calle para mantener a sus padres, uno de ellos discapacitado. Su relato, recogido por *La Nación* (Ortega-Campos, 2025), utiliza expresiones como “Toca pulsearla” y menciona que las oportunidades laborales en su lugar de origen (Siquirres), ubicado en la provincia caribeña de Limón, son “muy escasas”, enmarcando su actividad informal como una obligación ineludible dictada por la responsabilidad familiar y la ausencia de alternativas.

De manera similar, Allan Alvarado Sandí recurre a la venta de miel en la calle tras quedarse sin empleo formal (Ortega-Campos, 2025). El trabajo sexual es explícitamente descrito como una “estrategia alternativa de generación de ingresos debido al difícil acceso a diferentes tipos de empleo” para grupos vulnerables como las mujeres trans (Molina-Cordero, 2025). En Bagaces, ubicado en la provincia de Guanacaste, en el Pacífico Norte del país, personas trabajadoras agrícolas informales expuestas a riesgos de salud justifican su permanencia en esas labores por la necesidad de mantener a sus familias: “Diay doctor, ¿Qué voy a hacer? Tengo dos o tres chiquitos, tengo que trabajar” (Cordero-Parra, 2025). La edad también aparece como factor de exclusión del empleo formal. El vendedor ambulante Juan Bravo, de edad avanzada, afirma: “No hay empleo y menos

va a haber para un viejo como yo... La venta ambulante es necesaria para salir adelante” (Serrano, 2020).

Incluso desde la perspectiva empresarial, se reconoce esta dinámica cuando se describe a la persona trabajadora aceptando condiciones informales porque “si no me tiene de manera formal, entonces no tengo trabajo” (Alvarado, 2022). Esta estrategia, al enfatizar las constricciones estructurales, cumple la función de justificar la informalidad como inevitable o, al menos, comprensible en el contexto socioeconómico del reformismo neoliberal.

De esta manera, la temática sobre las estrategias de supervivencia “desde abajo” es recurrente. Sin embargo, si bien reconoce las dificultades, esta narrativa puede simultáneamente despolitizar la cuestión, pues al presentar la informalidad como una consecuencia casi natural de la escasez de empleo, puede desviar la atención de las políticas específicas (o la ausencia de ellas) que configuran el mercado laboral y de trabajo como mecanismo de exclusión social. Además, aunque a menudo se ilustra con historias personales conmovedoras, tiende a individualizar la lucha por la supervivencia, centrando el foco en la resiliencia o el sufrimiento individual más que en la necesidad de transformaciones sistémicas o acciones colectivas.

La estrategia de ocultamiento y evasión opera vinculando discursivamente la informalidad con prácticas que buscan eludir el control estatal, la regulación y la tributación. Los indicadores textuales remiten a la “ilegalidad”, la “evasión de impuestos”, el trabajo “no declarado”, la “clandestinidad” o la ausencia de registros formales. Esta asociación es muy frecuente en las discusiones sobre las consecuencias negativas de la informalidad. Se menciona repetidamente que los trabajadores informales no cotizan a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) ni pagan impuestos sobre la renta, lo cual se presenta como una pérdida para el Estado y una carga para el sistema formal

(Velázquez-Robles, 2025; Ortega-Campos, 2025; Solano-Miller, 2025; Pérez, 2024).

La propia definición de informalidad utilizada por organismos como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), a la que Costa Rica se incorporó en 2021, incluye el trabajo “no declarado para fines fiscales o de seguridad social” (Ruiz, 2020). En algunos casos, se establece una conexión más directa con actividades ilícitas, como el “comercio ilícito” (venta de cigarrillos ilegales, “*outlets* de cajón”) mencionado en relación con el crecimiento del sector informal en el comercio (Alvarado, 2024). Las narrativas sobre personas vendedoras ambulantes a menudo incluyen la dimensión de evadir a la policía municipal, reforzando la idea de una actividad que opera al margen o en contra de la ley (Alfaro-Herrera, 2023; Serrano, 2020).

Asimismo, se describe cómo la subcontratación por parte de las empresas, en sectores como la agricultura, se utiliza para “esquivar sus responsabilidades legales” (Muñoz-Sequeira, 2022). Este encuadre construye la informalidad como una desviación de la norma legal y fiscal, posicionando al Estado y al sistema formal como el referente legítimo que está siendo transgredido. Al enfatizar la falta de contribución y regulación, el discurso tiende a centrarse en las consecuencias para las arcas públicas y la competencia formal, relegando a un segundo plano las razones estructurales o racionales que pueden llevar a los actores y actoras a operar fuera del marco formal (como los costos prohibitivos, la desconfianza en las instituciones o la percepción de injusticia del sistema tributario o de seguridad social). Esta perspectiva refuerza la visión de la informalidad como un problema de incumplimiento que requiere mayor control o incentivos para la formalización, en lugar de un síntoma de fallas más profundas del estilo de crecimiento económico y del marco regulatorio.

En contraste, la estrategia de resistencia y adaptación resalta la capacidad de agencia de las personas actoras

informales, su creatividad, resiliencia y habilidad para generar ingresos y operar en entornos a menudo hostiles o restrictivos. Las evidencias pueden incluir expresiones que presentan la informalidad como una “alternativa”, una forma de “emprendimiento”, o simplemente destacan la persistencia y el esfuerzo individual (“pulsearla”). La figura de las personas trabajadoras informales como “emprendedoras”, por necesidad o por opción, aparece en varios relatos. Landon Josué Castro (Ortega-Campos, 2025), a pesar de las dificultades, persiste en su venta diaria. Mary Padilla Fallas (Ortega-Campos, 2025) inició su negocio de venta de papalotes (cometas) no solo por necesidad económica sino también para “interactuar con la gente”. Henry Ruiz (Ortega-Campos, 2025) aprendió su oficio de artesano “en la calle” y con esa actividad logra sostener a su familia. El crecimiento del trabajo independiente es interpretado por algunos analistas como un posible “cambio cultural” hacia la “autonomía, flexibilidad y opciones de emprendimiento”, especialmente entre las personas jóvenes (Solano-Miller, 2025). La habilidad de las personas vendedoras ambulantes en el centro de San José para organizarse y comunicarse, para evadir a la policía (Alfaro-Herrera 2023) también puede leerse como una forma de adaptación y resistencia a los controles.

Johnny Muñoz Vargas, al iniciar su venta de gallopinto (plato combinado de arroz y frijoles), lo hizo con el deseo explícito de “trabajar en lo propio y no depender de un patrono” (Vega & Montoya-Salas, 2024), expresando una búsqueda de autonomía. La creación de la ‘Bici-Batería’ por Mariano Castro (Ruiz, 2014) se presenta como un ejemplo de innovación en la forma de operar. Esta estrategia resignifica la informalidad, al menos parcialmente, como un espacio de agencia y creatividad, conectando con las ideas de innovación y adaptación en las economías populares.

Sin embargo, esta representación no está exenta de ambigüedad. La celebración de la resiliencia individual puede

deslizarse hacia una “romantización” de la precariedad, ocultando la falta de alternativas dignas. Particularmente, el discurso neoliberal sobre el “emprendimiento” puede ser fácilmente cooptado en este contexto, presentando la necesidad de autoemplearse en condiciones informales como una elección positiva en favor de la autonomía y la flexibilidad, lo cual puede servir para justificar la reducción de la protección social estatal o la responsabilidad empresarial, respecto a la funcionalidad de ciertas narrativas para el reformismo neoliberal. Por lo tanto, es crucial analizar críticamente si la agencia representada es una forma de resistencia transformadora o simplemente una adaptación funcional dentro de un sistema que sigue siendo profundamente desigual.

La estrategia de mecanismos relacionales, que enfatiza el papel de las redes sociales, la confianza, el apoyo mutuo y el capital social en el funcionamiento de la economía informal, aparece de forma limitada y a menudo implícita o ambivalente en el corpus mediático analizado. Las menciones más directas suelen referirse a las obligaciones familiares como motor de la participación en la informalidad, como en los casos de Landon Josué trabajando para sus padres (Ortega-Campos, 2025) o Henry Ruiz para su esposa e hijos (Ortega-Campos, 2025). La categoría estadística de “auxiliares familiares” o “auxiliares no remunerados” (presente en muchos reportes del INEC, (e.g. “Casi el 40% de los hombres ocupados”, 2025; Ramírez, 2025; Brenes, 2025) reconoce la existencia de trabajo familiar no asalariado, pero lo hace de manera abstracta, sin explorar las dinámicas relacionales subyacentes. En algunos casos, las redes se presentan en un contexto negativo o de explotación, como para las trabajadoras sexuales que deben pagar a otras colegas o a la policía por “protección” (Molina-Cordero, 2025).

La solidaridad comunitaria o las redes de apoyo mutuo que podrían facilitar el emprendimiento informal, al compartir recursos o gestionar riesgos colectivamente son raramente

descritas en detalle. Esta relativa ausencia o subrepresentación de los mecanismos relacionales positivos en el discurso mediático es significativa. Sugiere una tendencia a encuadrar la informalidad predominantemente a través de lentes individualistas (el emprendedor resiliente, el trabajador necesitado) o puramente economicistas (costos, ingresos, estadísticas), descuidando la dimensión socialmente integrada que es crucial para comprender cómo operan realmente muchas economías populares y de base. Esta omisión puede contribuir a una visión descontextualizada y deshumanizada de la informalidad, facilitando su reducción a un problema técnico o a una suma de casos individuales, al marginar las lógicas no mercantiles o comunitarias que podrían estar presentes.

La normalización simbólica es una estrategia discursiva que opera de manera más sutil, contribuyendo a presentar la informalidad como una característica estructural, persistente y, en cierto modo, aceptada en el panorama socioeconómico costarricense. Esto se logra no tanto a través de argumentos explícitos, sino mediante el uso de lenguaje naturalizador, la repetición constante de altas cifras sin necesariamente expresar alarma o urgencia desmedida, y la descripción de la informalidad como un fenómeno de larga data. Los indicadores textuales incluyen frases que denotan continuidad y cronicidad, así como la presentación rutinaria de datos elevados.

Expresiones que refrendan que el empleo informal “continúa siendo elevado” (Ramírez, 2025), “persiste” (“Desempleo se reduce”, 2025), “sigue alto” (“Desempleo se reduce”, 2025), o su caracterización recurrente como un “flagelo del mercado laboral” (Alvarado, 2023) pueden, paradójicamente, contribuir a su normalización al enmarcarlo como un problema crónico y casi inherente al sistema. La mención de una tasa de informalidad que ha oscilado entre 36% y 47% durante los últimos trece años (Núñez-Chacón, 2023) refuerza esta idea de persistencia estructural. Las descripciones de escenas cotidianas con personas vendedoras ambulantes

(Ortega-Campos, 2025; Serrano, 2020) también funcionan como una forma de naturalización visual y social. Inclusive declaraciones como la del presidente de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP), con su visión corporativista que se refiere a que la gente instala su “negocito informal” como una alternativa común (Ramírez, 2023), contribuyen a esta normalización.

Esta estrategia tiene implicaciones importantes. Al presentar la informalidad como parte del “orden común”, como algo que siempre ha estado ahí y probablemente seguirá, se contribuye a reducir las expectativas de cambio estructural. Se debilita la percepción de que la informalidad es un problema agudo que requiere soluciones radicales e inmediatas y se fomenta una actitud de resignación o de búsqueda de soluciones paliativas dentro del sistema existente. Esta naturalización puede servir a intereses que se benefician de la existencia de un sector laboral flexible y de bajo costo, al disminuir la presión social y política para abordar sus causas fundamentales.

Por su parte, la estigmatización moral, definida como la asociación de la informalidad o sus actores con rasgos personales negativos (pereza, deshonestidad, desorden) o con problemas sociales derivados de conductas individuales desviadas, parece manifestarse de forma menos directa y virulenta en el *corpus* costarricense analizado, en comparación con otros contextos, pero no está completamente ausente. Se detecta en asociaciones sutiles y en el discurso de ciertos actores. Por ejemplo, la declaración del presidente de la UCCAEP que sugiere que las personas que abandonan el mercado de trabajo (muchas de las cuales transitan hacia la informalidad o la inactividad) podrían, “en el peor de los casos, [estar] entrando en la parte delictiva” (Ramírez, 2023) establece un vínculo entre la salida del mercado formal y la criminalidad, lo cual puede estigmatizar a quienes se encuentran en esa situación.

El discurso policial sobre los vendedores ambulantes, centrado en la necesidad de “liberar espacios” de tránsito peatonal y en los riesgos higiénicos de la venta de alimentos (Serrano, 2020), si bien puede tener bases objetivas, también construye a los vendedores como una fuente de desorden y potencial peligro para la salud pública, lo cual puede tener connotaciones estigmatizantes.

La caracterización de la informalidad como “competencia desleal” (“Empresarios ticos preocupados,” 2017), aunque es un término económico, puede llevar implícita una carga moral de injusticia o falta de ética por parte de los actores informales. Es importante notar que algunos artículos, como el que aborda el trabajo sexual (Molina-Cordero, 2025), documentan explícitamente el estigma y la discriminación que sufren estas personas trabajadoras por parte de la sociedad y las autoridades, pero el propósito del artículo periodístico es denunciar ese estigma, no reproducirlo. De manera similar, aunque el empleo informal en la agricultura se asocia con graves problemas de salud, como la enfermedad renal crónica no tradicional (ERCnt) (Cordero-Parra, 2025), el discurso mediático analizado se centra en la vulnerabilidad y la falta de protección, sin caer (en este *corpus*) en la culpabilización de las víctimas.

En general, aunque la condena moral explícita es infrecuente, las asociaciones indirectas con el desorden, la ilegalidad (solapándose con la estrategia de evasión fiscal), la competencia injusta o el riesgo (delictivo o sanitario) contribuyen a forjar una imagen negativa de la informalidad. Esta estigmatización, por sutil que sea, puede justificar medidas de control más estrictas (como operativos policiales contra personas vendedoras), reforzar la exclusión social y, en línea con las tendencias neoliberales analizadas por Jones, desviar la atención de las causas estructurales hacia supuestas fallas o problemas inherentes a los propios actores informales o a la actividad misma.

Finalmente, la incorporación tecnocrática emerge como una de las estrategias discursivas dominantes, con valor persuasivo, en la cobertura mediática de la informalidad en Costa Rica. Esta estrategia consiste en enmarcar la informalidad fundamentalmente como un problema técnico, administrativo o de gestión, que requiere soluciones basadas en políticas públicas, regulación, medición estadística y ajustes institucionales, a menudo utilizando un lenguaje neutral y supuestamente despolitizado.

En primer lugar, la ya mencionada dependencia casi universal de las estadísticas del INEC para definir y cuantificar el fenómeno de la informalidad lo constituye como un objeto primordial de medición y monitoreo técnico. En segundo lugar, gran parte del discurso se centra en las causas y soluciones propuestas desde una perspectiva de política pública o de análisis económico experto. Las recomendaciones de organismos internacionales como la OCDE son frecuentemente citadas, enfocándose en “palancas” políticas como la reducción de las cargas sociales patronales, la simplificación del sistema de salarios mínimos, la disminución de la burocracia y la mejora de la regulación del mercado de productos (Ramírez, 2025).

Los artículos de opinión y análisis a menudo discuten la necesidad de “reformas legales y políticas públicas” para “promover la formalización” (Velázquez-Robles, 2025), proponiendo medidas como asesoría gratuita, capacitación, beneficios fiscales temporales para empresas que se formalicen, o regímenes simplificados de tributación y seguridad social (Velázquez-Robles, 2025; Pérez, 2024; Zolezzi, 2023).

Se mencionan explícitamente estrategias gubernamentales con nombres técnicos como la Estrategia Nacional para la Transición a la Economía Formal (Ruiz, 2020; Alfaro-Herrera, 2023) o la Estrategia Nacional de Empleabilidad y Talento Humano (“Costa Rica lanza estrategia”, 2023), presentándolas como respuestas institucionales al problema. El debate sobre las barreras a la formalización se centra a menudo en aspectos

técnicos: los costos de inscripción, los trámites engorrosos y la complejidad de las normativas (Alvarado, 2022; Ramírez, 2025).

Este enfoque tecnocrático, si bien puede identificar barreras reales y proponer soluciones pragmáticas, tiende a operar dentro de los parámetros del sistema existente. Trata la informalidad como una desviación del modelo formal normativo, que debe ser corregida o gestionada mediante ajustes técnicos, incentivos o regulaciones más eficientes. Rara vez cuestiona las premisas fundamentales del estilo económico que genera la exclusión, las relaciones de poder que sustentan la precariedad, o la posibilidad de que la informalidad represente lógicas económicas alternativas o formas de resistencia. Al privilegiar la voz de personas “expertas”, funcionarios y organismos internacionales, y al utilizar un lenguaje administrativo y neutralizador, esta estrategia despolitiza el debate y posiciona la solución del problema en el ámbito de la gestión técnica, marginando potencialmente las perspectivas, experiencias y agencias de los propios trabajadores informales. Este enfoque encaja coherentemente con las lógicas de gobernanza neoliberal que buscan gestionar los problemas sociales sin alterar las estructuras de poder fundamentales.

Representaciones interseccionales en el discurso mediático sobre la informalidad en Costa Rica

El análisis discursivo de la informalidad laboral en la prensa costarricense revela no sólo la operación de las estrategias generales de legitimación y deslegitimación, sino también cómo estas se entrelazan con las representaciones de grupos sociales específicos. Desde una perspectiva interseccional, es crucial examinar cómo el discurso mediático construye la informalidad en relación con categorías como el género, la edad, el nivel educativo, la condición migratoria y el sector de actividad, evidenciando cómo se pueden reforzar o,

en ocasiones, cuestionar, las desigualdades existentes. En la figura 16.2 se presenta una síntesis de los hallazgos principales sobre estas representaciones.

La dimensión de género es frecuentemente abordada en la cobertura mediática, aunque a menudo de manera estadística o superficial. Se reporta consistentemente que las mujeres enfrentan las tasas de desempleo más altas, así como tasas de participación y ocupación más bajas que los hombres (Brenes, 2025; “Tasa de desempleo”, 2025; Alvarado, 2025). Aunque las tasas de informalidad femenina a veces se reportan como ligeramente inferiores a las masculinas (“Casi el 40% de los hombres”, 2025), en otros momentos se destaca un aumento significativo en el número de mujeres en la informalidad (Ibarra, 2024; Núñez-Chacón, 2024; “Sector femenino impulsa”, 2024) o una caída más acentuada que la de los hombres (Ramírez, 2025).

Figura 16.2
Síntesis analítica de los ejes de representación interseccional de la informalidad laboral en Costa Rica a partir de la discursividad mediática

Género	Edad	Nivel educativo	Condición migratoria	Sector de actividad
Mujeres: Mayor desempleo, menor participación, afectadas por cuidado, trabajo parcial. Aumento reciente en informalidad femenina. Mujeres trans: Extrema vulnerabilidad, empujadas al trabajo sexual informal por discriminación.	Jóvenes (15-24): Alto desempleo, menor participación post-pandemia, “desajuste de habilidades”. Entrada temprana a informalidad. Adultos mayores (60+): Dificultad de reinserción, concentración en informalidad, posible discriminación. Edad intermedia (35-60+): Concentra la mayoría de trabajadores informales.	Baja escolaridad: Fuerte correlación con informalidad. Discurso dominante: Énfasis en déficit educativo (estigmatización sutil) y necesidad de capacitación (incorporación tecnocrática). Puede opacar otras barreras.	Vulnerabilidad: Sobrerrepresentación en sectores precarios (agricultura, venta ambulante). Discurso: Oscila entre necesidad (supervivencia), evasión/estigma (irregularidad, control) y normalización (mano de obra complementaria).	Alta informalidad: Trabajo doméstico, construcción, transporte, artístico, agropecuario, alojamiento/comida. Representaciones específicas: venta ambulante (conflicto autoridad, subsistencia); agricultura (dureza, riesgos salud, migrantes); plataformas digitales (nueva informalidad, flexibilidad vs. falta derechos).

Nota. Elaboración propia con base en: Ibarra, 2024; Núñez-Chacón, 2024; “Sector femenino impulsa”, 2024; Molino-Cordero, 2025; “Costa Rica, segundo país”, 2024; Ortega-Campos, 2025; Conejo, 2025; Núñez-Chacón, 2023; Alvarado, 2023; Cordeiro-Parra, 2025; Muñoz-Sequeira, 2022; Alvarado, 2024; Pérez, 2024.

Se mencionan factores específicos que afectan a las mujeres, como la mayor propensión a trabajar en jornadas parciales (lo cual dificulta la cotización a la seguridad social según la OCDE, (“Empleo informal en Costa Rica”, 2025)) o la salida del mercado de trabajo por dedicarse a labores del hogar y de cuidado (Alvarado, 2025; Brenes, 2024). Sin embargo, estas explicaciones, aunque se asientan en realidades sociales, pueden caer en una reproducción de estereotipos de género si no se acompañan de un análisis crítico sobre la división sexual del trabajo y la falta de corresponsabilidad social en el cuidado. La vulnerabilidad extrema de las mujeres trans, empujadas al trabajo sexual informal debido a la discriminación sistémica y la falta de acceso a empleo formal (Molina-Cordero, 2025), es un caso que ilustra crudamente la intersección de la identidad de género, la exclusión laboral y la informalidad como única vía de supervivencia (“Legitimación por Necesidad”). Aunque algunos reportes celebran el aumento de la participación laboral femenina o la reducción de la informalidad en mujeres (“Crece la fuerza laboral femenina”, 2025; May-Grosser, 2025), el discurso general tiende a presentar a las mujeres como un grupo estadísticamente desfavorecido, cuyas problemáticas se abordan a menudo a través de la lente de la ‘Incorporación Tecnocrática’ (e.g., adaptar regímenes de cotización para tiempo parcial) sin profundizar en las estructuras patriarcales que subyacen a su precariedad laboral.

La edad también aparece como un eje de diferenciación significativo en el discurso sobre la informalidad. Por un lado, se presta considerable atención a las personas jóvenes (generalmente definidas como el grupo de 15 a 24 años). Se resalta su alta tasa de desempleo (“Costa Rica, segundo país”, 2024), su menor participación laboral post-pandemia (Ramírez, 2025; Núñez-Chacón, 2024) y la dificultad que enfrentan para encontrar empleos acordes a su calificación, lo que se conceptualiza a menudo como un “desajuste de habilidades” (Ramírez, 2025).

La informalidad juvenil también se reporta como elevada. La historia de Landon Josué (Ortega-Campos, 2025) ilustra la entrada temprana en la informalidad por necesidad. Por otro lado, las personas adultas mayores (generalmente de 60 años o más) son otro grupo destacado por su vulnerabilidad. Se señala su dificultad para reinserirse en el mercado de trabajo una vez que salen de este, su concentración en el empleo informal (Brenes, 2023), y la posible discriminación por edad que enfrentan (Soto-Sibaja, 2025). La cita del vendedor ambulante Juan Bravo “No hay empleo y menos va a haber para un viejo como yo”, (Serrano, 2025) expresa vívidamente esta percepción de exclusión.

A pesar de estas vulnerabilidades en los extremos etarios, los datos también indican que la mayoría de las personas trabajadoras informales se concentran en edades intermedias, particularmente entre 35 y 60 años o más (Soto Sibaja, 2025). Discursivamente, la situación de las personas jóvenes se enmarca frecuentemente a través de la ‘Incorporación Tecnocrática’, con un énfasis en la necesidad de mejorar la educación y la capacitación técnica para cerrar la brecha de habilidades (Ramírez, 2025; “Cuatro acciones, 2025). La problemática de las personas adultas mayores, en cambio, parece recibir menos atención en términos de soluciones políticas específicas en el *corpus*, siendo a menudo presentada bajo el marco de la ‘Necesidad’ (trabajar para subsistir) o la ‘Estigmatización’ implícita (ser vistos como menos productivos o adaptables), aunque este último aspecto no se explora a fondo.

El nivel educativo es el factor más consistentemente asociado con la informalidad en el discurso mediático analizado. Existe una relación abrumadora en los reportes entre tener bajos niveles de escolaridad (primaria incompleta, primaria completa o secundaria incompleta) y la probabilidad de encontrarse en un empleo informal (Ramírez, 2025; Ortega-Campos, 2025; Soto-Sibaja, 2025; Brenes, 2024; Rodríguez, 2016).

Esta asociación se utiliza a menudo para explicar la persistencia de la informalidad y la dificultad de ciertos grupos para acceder a empleos formales, los cuales, se argumenta, demandan cada vez mayores calificaciones (Brenes, nacion.com, 2024; Ramírez, 2025). Discursivamente, este énfasis en la educación puede operar de dos maneras principales. Por un lado, puede alimentar una forma sutil de ‘Estigmatización Moral’, donde la informalidad se vincula a un déficit individual (falta de estudios), responsabilizando implícitamente a la persona por su situación laboral precaria. Por otro lado, y de manera más frecuente, se alinea con la estrategia de ‘Incorporación Tecnocrática’, que identifica la falta de capital humano como un problema técnico a resolver mediante políticas de educación, formación profesional y capacitación (“Cuatro acciones”, 2025; Ramírez, 2025).

La sobredeterminación discursiva del factor educativo puede opacar otras barreras importantes, no relacionadas con la escolaridad formal, como la discriminación (por género, edad, etnia, origen), los costos prohibitivos de la formalización, la falta estructural de empleos decentes, incluso para personas calificadas, o las redes sociales excluyentes. La mención ocasional de que incluso personas con estudios universitarios se encuentran en la informalidad (Madrigal, 2019) sirve como contrapunto, pero parece ser una nota discordante en un discurso dominante que privilegia la explicación por déficit educativo. Esta tendencia discursiva contrasta con otra, mediante la cual se desvaloriza el papel de la educación en términos de la inserción en el mercado de trabajo. En el año 2019, el presidente Carlos Alvarado declaró que los “Títulos universitarios pierden importancia”, por lo que proponía fomentar las capacidades y la constante capacitación (certificaciones) que ganaban, desde su punto de vista, mayor fuerza en un mercado de trabajo cambiante (Arrieta, 2019) argumento que deslegitimaba el papel de las universidades públicas y privadas orientadas a la profesionalización y a la producción de nuevo conocimiento.

La condición migratoria emerge como otro factor crucial de vulnerabilidad en relación con la informalidad, aunque su tratamiento discursivo varía. Se reconoce que las personas migrantes, especialmente aquellas en situación “irregular”, están sobrerrepresentadas en ciertos sectores informales y precarios, como la agricultura (trabajo en piñeras y en plantaciones de caña de azúcar mencionado en relación con la ERCnt en Semanario Universidad (Cordero-Parra, 2025); Castro Méndez describe la preferencia de algunas empresas por contratar trabajadores irregulares por ser “más vulnerables” y la amenaza de deportación (2022)); y el trabajo en la vía pública (vendedores ambulantes enfrentando una “doble informalidad” por su estatus migratorio (Alfaro-Herrera, 2023); el refugiado guatemalteco Noé Osorio para quien la venta ambulante es la “única posibilidad” (Serrano, 2020)).

El discurso a menudo enmarca su situación a través de la “Legitimación por Necesidad”, destacando la falta de alternativas y la búsqueda de estrategias de supervivencia. Sin embargo, también pueden aparecer elementos de “Ocultamiento y Evasión” o “Estigmatización”, especialmente cuando el foco se pone en la irregularidad y la dificultad de control por parte de las autoridades. La noción de que la mano de obra migrante es “complementaria” a la local en ciertos sectores (Conejo, 2025) puede funcionar como una forma de ‘Normalización Simbólica’ o incluso como justificación de su presencia en nichos laborales específicos, potencialmente minimizando las dinámicas de competencia salarial a la baja o la explotación. En general, el discurso mediático tiende a reconocer la especial precariedad de las personas migrantes informales, pero el encuadre puede oscilar entre la empatía hacia su vulnerabilidad y la preocupación por el control y la regulación, evidenciando tensiones sociales y políticas más amplias sobre la migración. (Cubillo, Viales & Robles eds., 2025)

Finalmente, el discurso mediático también diferencia la informalidad según los sectores de actividad económica. Sectores como el trabajo doméstico, la construcción, el transporte y almacenamiento, las actividades artísticas, el agropecuario y el alojamiento y servicios de comida son identificados consistentemente como aquellos con las tasas de informalidad más altas, superando ampliamente el promedio nacional (Núñez-Chacón, 2023; Alvarado, 2023).

La venta ambulante recibe una atención particular, a menudo asociada con el espacio público urbano, la visibilidad, los conflictos con las autoridades municipales y la necesidad de subsistencia (Ortega-Campos, 2025; Serrano, 2020; Alfaro-Herrera, 2023). El sector agrícola se vincula con condiciones laborales duras, riesgos para la salud (estrés térmico, agroquímicos, ERCnt) y la presencia de mano de obra migrante vulnerable (Cordero-Parra, 2025; Muñoz-Sequeira, 2022). El sector de turismo y de hospitalidad también se menciona como un ámbito con informalidad significativa, afectado por la estacionalidad y la recuperación post-pandemia (Núñez-Chacón, 2023).

El surgimiento de plataformas digitales, de transporte, de reparto de comida, pero no el de los empleos generados por el denominado “capitalismo de plataformas” (Srnicek, 2018) y la “economía digital” (Jones, 2021) se señala como un nuevo foco de crecimiento de la informalidad, generando empleo, pero sin las condiciones de formalidad tradicionales (Alvarado, 2024; Pérez, 2024). El análisis discursivo sugiere que ciertas estrategias pueden ser más prominentes según el sector. Por ejemplo, la “estigmatización moral” (desorden, ilegalidad) y el “ocultamiento y evasión” (conflicto con la autoridad) parecen más frecuentes en las representaciones de los vendedores ambulantes, mientras que la “legitimación por necesidad” y la visibilización de la precariedad física son más comunes en los relatos sobre trabajadores agrícolas. El discurso sobre las plataformas a menudo combina la

“resistencia y adaptación” (flexibilidad, autonomía) con la problematización de la falta de derechos como problema. Esta diferenciación sectorial en el discurso contribuye a construir imágenes distintas de la informalidad, no como un fenómeno homogéneo, sino como un conjunto de realidades diversas, aunque interconectadas por la precariedad y la falta de regulación formal.

Las personas trabajadoras de los *call centers*, por ejemplo, no se tienden a representar como personas en riesgo de “informalidad” —es decir, sin contrato, sin cotización, sin seguridad social— sino que la representación es más compleja y se articula en torno a categorías como empleo atípico, precariedad, temporalidad y desgaste emocional, a pesar de que enfrentan riesgos laborales y económicos, tales como la alta rotación, los contratos de prueba o el trabajo sin contrato, la posibilidad de despido sin responsabilidad patronal, los cambios de horario, el deber de trabajar feriados y las altas demandas de rendimiento. Antes bien, se les estigmatiza positivamente como los principales representantes del “trabajo flexible”, que se ajusta a las demandas del mercado de trabajo y como empleo emblemático como signo de modernidad laboral globalizada y de oportunidad para las personas jóvenes calificadas, sobre todo en términos del dominio de otros idiomas. En 2024, la diputada del Frente Amplio, Priscilla Vindas, denunció que, debido a la depreciación del dólar, personas trabajadoras de los *call centers* estaban ganando un salario inferior al mínimo de ley. (Marín, 2025)

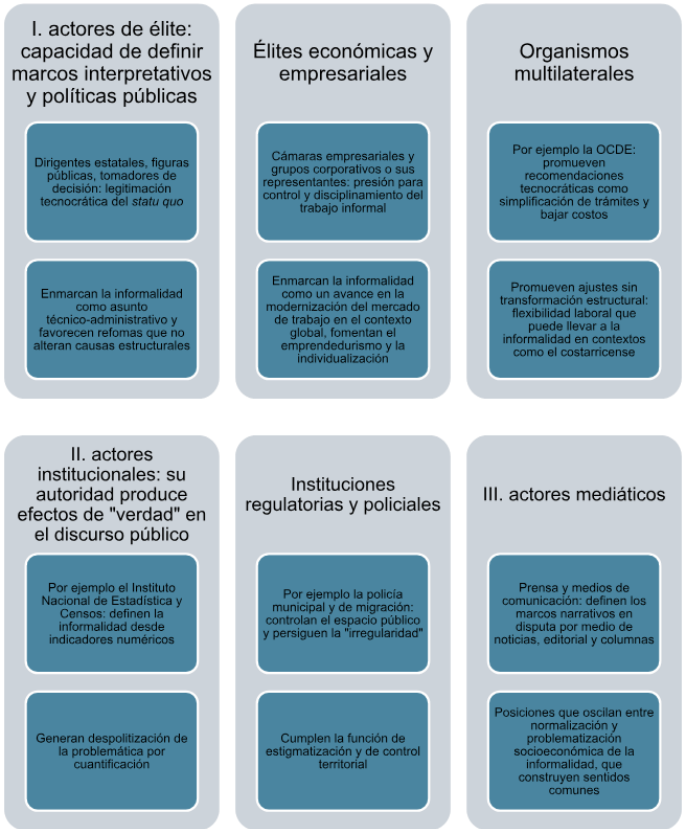
La tipología de personas actoras y su papel en la legitimación de la informalidad en Costa Rica

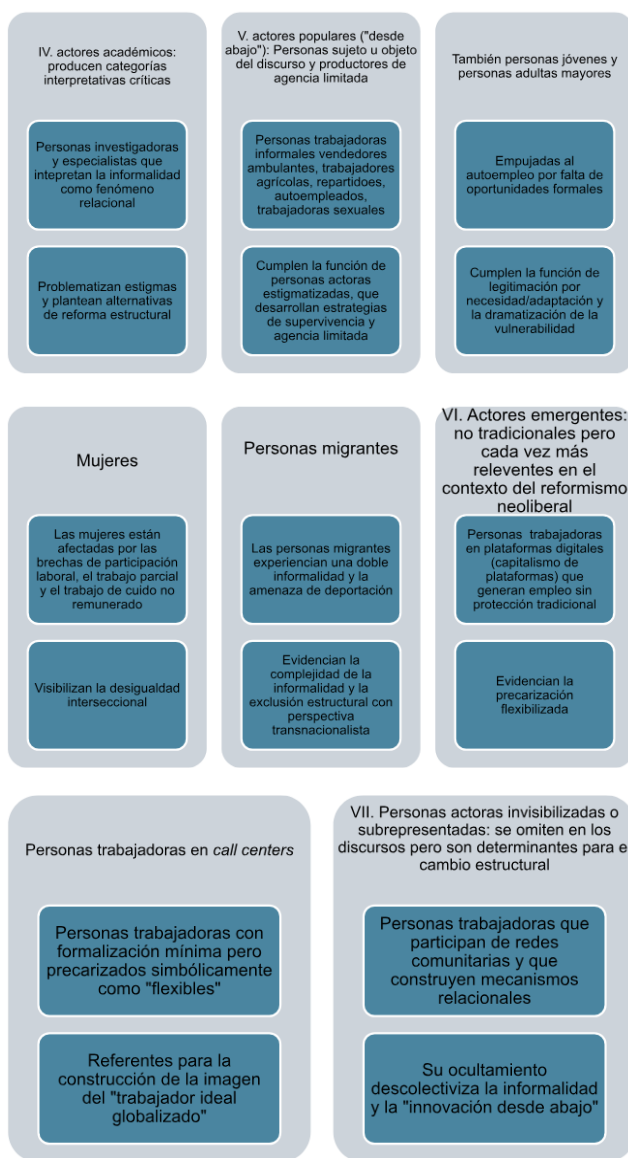
Es importante señalar que las personas actoras que aparecen, ya sea de manera explícita o implícita, en los discursos, tienen

una vinculación, directa o indirecta, con la legitimación de la informalidad en Costa Rica, debido a su posición en la estructura de poder, a su función discursiva y a la lógica de su intervención en relación con la informalidad. Por esa razón es interesante construir una tipología analítica que considere estos atributos (ver figura 16.3).

Figura 16.3

Las personas actoras y su papel en la legitimación de la informalidad desde la discursividad mediática en Costa Rica





Nota. Elaboración propia.

Las élites políticas y empresariales desempeñan un papel central en la legitimación de la informalidad, mediante la construcción de marcos discursivos tecnocráticos que trasladan la atención desde las raíces estructurales de la desigualdad hacia fallas administrativas corregibles. Su narrativa enfatiza la necesidad de simplificar trámites, reducir cargas sociales y flexibilizar el mercado de trabajo y laboral, configurando la informalidad como un problema de diseño institucional antes que como consecuencia de un estilo de crecimiento excluyente. Al hacerlo, producen una despolitización del fenómeno y contribuyen a la aceptación tácita de la informalidad como componente funcional del estilo de crecimiento vigente. Su influencia sobre medios, cámaras y políticas públicas refuerza una lectura centrada en la eficiencia económica y no en la justicia social.

Por su parte, los organismos internacionales y expertos se constituyen en autoridades epistemológicas que dotan de legitimidad “objetiva” al discurso, especialmente mediante la provisión de datos comparativos, recomendaciones de política y diagnósticos técnicos. Su intervención tiende a naturalizar la informalidad como desviación corregible dentro de los márgenes del reformismo neoliberal, promoviendo soluciones incrementales y gestionables en lugar de transformaciones estructurales profundas. De este modo, contribuyen a consolidar una narrativa tecnocrática global que privilegia el crecimiento competitivo, la productividad y la flexibilidad laboral, relegando a un segundo plano las condiciones culturales, territoriales y relacionales propias de las economías populares.

En esta lógica relacional, los medios de comunicación operan como dispositivo articulador que traduce las lógicas de élites y expertos al sentido común cotidiano. A través de la constante referencia a estadísticas, fluctuaciones trimestrales y relatos individuales, construyen un marco que oscila entre la problematización moral y la normalización simbólica. En este

proceso, la informalidad es presentada tanto como “flagelo” persistente como parte habitual del paisaje urbano y rural, lo cual genera una percepción ambivalente que simultáneamente alarma y resigna. La selección de fuentes privilegiadas, mayoritariamente institucionales y empresariales invisibiliza voces colectivas y refuerza jerarquías discursivas.

Las personas trabajadoras informales aparecen mediáticamente como figuras de resiliencia que deben “pulsearla” para sobrevivir, reforzando narrativas de esfuerzo individual y responsabilidad personal. Este encuadre produce una legitimación por necesidad que empatiza con su precariedad, pero que también individualiza la lucha y desplaza la atención de la acción colectiva y la demanda de derechos. Al presentar la informalidad como estrategia obligatoria ante la ausencia de empleo formal, los discursos contribuyen a la naturalización de la precariedad y a la perpetuación de la idea de que sobrevivir depende de la capacidad individual y no de fallas sistémicas.

El tratamiento mediático de grupos vulnerabilizados refuerza la legitimación de la informalidad como mecanismo de supervivencia. Mujeres con responsabilidades de cuidado, personas jóvenes sin experiencia, migrantes sin regularización y adultos mayores forzados a mantenerse activos son representados como casos inevitables de exclusión laboral. Aunque esta representación visibiliza desigualdades estructurales, también corre el riesgo de reproducir estereotipos y de presentar la precariedad como destino sociolaboral naturalizado. Su inclusión discursiva como sujetos frágiles y dependientes estrecha el horizonte de alternativas, consolidando la idea de que la informalidad funciona como “válvula de escape” social.

En la búsqueda de la legitimación de la informalidad por parte de las élites, que también son heterogéneas, las redes comunitarias y las economías de base permanecen mayormente invisibilizadas en la discursividad mediática, a pesar de su papel fundamental en la reproducción social y en la

resistencia económica cotidiana. Esta invisibilización contribuye a reforzar visiones individualistas de la informalidad y debilita la capacidad de imaginar alternativas colectivas. La ausencia de menciones a solidaridad, cooperación o innovación social limita el debate público a soluciones tecnocráticas, reduciendo la complejidad relacional de las economías populares y borrando sus potencialidades transformadoras.

Conclusión: discursividad mediática, perspectivas dominantes “desde arriba” y representaciones de la informalidad en Costa Rica

La legitimación de la informalidad en la discursividad mediática costarricense se articula mediante una compleja superposición de estrategias discursivas. El análisis del *corpus* demuestra que la informalidad se legitima no tanto por una exaltación directa, sino por su normalización simbólica como un hecho estructural y por su (re)presentación como una necesidad impuesta para la supervivencia de vastos sectores de la población, especialmente los más vulnerables (mujeres, jóvenes, baja escolaridad, migrantes), en el contexto del reformismo neoliberal.

Las estrategias de legitimación por necesidad y resistencia y adaptación son centrales para construir un discurso de la informalidad como una “economía de base” vital para el sustento de miles de familias, a pesar de la precariedad inherente (ausencia de seguridad social y bajos salarios). Las narrativas sobre personas vendedoras ambulantes organizadas que luchan por la formalización evidencian una importante agencia popular, que desafía la perspectiva de estigmatización moral, al reivindicar la dignidad del trabajo no regulado.

Sin embargo, el discurso de las élites y de los expertos institucionales impone un marco de incorporación tecnocrática. La informalidad es mayormente entendida como un problema de diseño de políticas públicas, donde las altas

cargas sociales, los salarios mínimos elevados y la excesiva burocracia son los “verdaderos culpables”. Al enfocar la solución en la simplificación administrativa y la reducción de costos, este enfoque desplaza el foco de atención desde las causas estructurales de la desigualdad (como la falta de empleo formal que absorba la fuerza laboral de baja calificación) hacia fallas técnicas del sistema regulatorio. Esta despolitización, irónicamente, legitima el *statu quo* al sugerir que la informalidad es manejable sin una confrontación radical del estilo de crecimiento predominante.

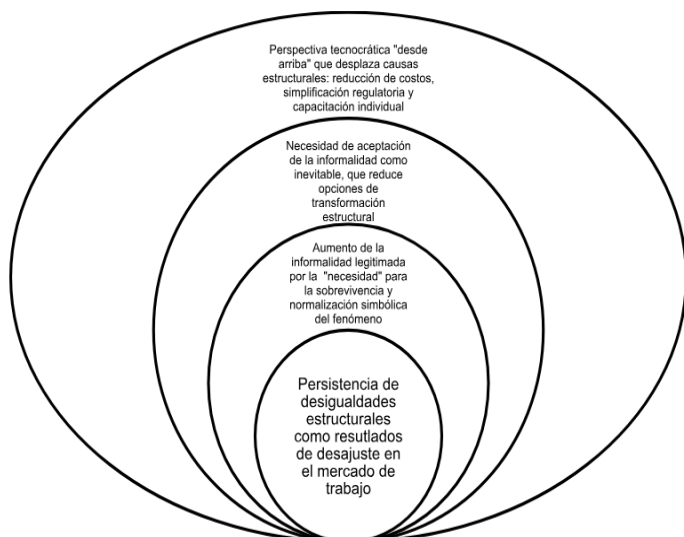
La informalidad se (re)presenta como la dolorosa consecuencia de un mercado de trabajo que produce un desajuste constante entre la demanda de habilidades especializadas (empleo formal en alta tecnología) y la oferta de trabajo disponible (empleo informal en subsistencia). En última instancia, el discurso mediático costarricense, al documentar la persistencia, la necesidad y la alta concentración en sectores vulnerables, aunque deplora sus efectos sociales (pérdida de derechos y pensiones), valida tácitamente su existencia como un componente ineludible y funcional de las economías contemporáneas del Sur Global. El gran reto de las “economías de base” en Costa Rica, tal como lo enmarcan estos discursos, es cómo transitar de esta legitimación por necesidad hacia un modelo de empleo formal que no sea excluyente.

El análisis crítico del discurso mediático costarricense sobre la informalidad laboral revela un panorama complejo donde coexisten diversas estrategias discursivas que, en conjunto, tienden a construir y representar este fenómeno de maneras específicas, a menudo alineadas con perspectivas dominantes. Si bien la cobertura no es monolítica, emergen patrones claros en la forma en que se encuadra la informalidad, se explican sus causas, se evalúan sus consecuencias y se proponen soluciones.

La síntesis de los hallazgos muestra una notable prevalencia de dos estrategias principales: la “incorporación

Figura 16.4

Las estrategias de la discursividad mediática para la legitimación de la informalidad desde las élites en Costa Rica



Nota. Elaboración propia.

tecnocrática" y la "legitimación por necesidad". La primera se manifiesta en la constante referencia a datos estadísticos oficiales (principalmente del INEC), en el enfoque en diagnósticos y recomendaciones de expertos y organismos internacionales (como la OCDE), y en la discusión centrada en políticas públicas, regulaciones, costos y beneficios de la formalización. Este marco reduce la informalidad a un problema técnico-administrativo, susceptible de ser gestionado a través de ajustes en el sistema existente.

La segunda estrategia, la Legitimación por Necesidad, justifica la informalidad como una respuesta inevitable a la falta de oportunidades formales y a la necesidad de supervivencia, a menudo ilustrada con relatos individuales que enfatizan el esfuerzo y la resiliencia. Aunque reconoce las

dificultades estructurales, esta narrativa puede individualizar la lucha y desviar el foco de las responsabilidades sistémicas. Otras estrategias identificadas, como el “ocultamiento y evasión” (que vincula informalidad con ilegalidad y no contribución) y la “estigmatización moral” (con asociaciones sutiles a desorden o riesgo), contribuyen a una visión negativa y a veces criminalizadora, aunque parecen menos centrales que en otros contextos.

La “resistencia y adaptación”, si bien presente en relatos de emprendimiento y agencia individual, a menudo se alinea con discursos neoliberales que celebran la flexibilidad y la autonomía, omitiendo la precariedad subyacente. Es notable la relativa escasez de énfasis en los “mecanismos relacionales” positivos (redes de apoyo, solidaridad comunitaria), lo que sugiere una subrepresentación de la dimensión socialmente integrada de las economías populares. Finalmente, la “normalización simbólica”, a través de la presentación de la informalidad como un rasgo persistente y casi natural del paisaje económico, contribuye a disminuir la urgencia de transformaciones profundas (ver figura 16.5).

Estos patrones discursivos predominantes sugieren la reproducción de perspectivas dominantes, potencialmente asociadas a las élites económicas y políticas. El fuerte énfasis tecnocrático, que privilegia soluciones de gestión dentro del marco neoliberal existente (ajustes fiscales, desregulación, capacitación individual), resuena con las agendas de organismos internacionales y sectores empresariales que buscan mantener la estabilidad macroeconómica y la flexibilidad laboral, sin abordar necesariamente las desigualdades estructurales profundas. La frecuente dependencia de fuentes oficiales y expertas (INEC, OCDE, economistas, cámaras empresariales, gobierno) tiende a marginar las voces y perspectivas de las personas trabajadoras informales y sus organizaciones. La combinación de una presentación tecnocrática y neutralizante con narrativas de necesidad individual crea un discurso que,

Figura 16.5

Los riesgos sociales de la legitimación de la informalidad desde la discursividad mediática en Costa Rica



Nota. Elaboración propia.

si bien puede generar cierta empatía, rara vez desafía las relaciones de poder fundamentales o promueve alternativas económicas radicales.

La normalización de la informalidad, como un fenómeno crónico, también puede servir para gestionar las tensiones sociales sin necesidad de implementar cambios costosos o disruptivos para el capital. Este conjunto de características discursivas se alinea con el planteamiento teórico que vincula el discurso mediático con la producción y reproducción de ideologías y relaciones de poder favorables a los grupos

dominantes que, además, van configurando la imagen del “trabajador ideal” vinculado con los sectores modernos de la economía, pero con condiciones que los ponen en el límite de la informalidad, como en el caso de las personas trabajadoras en los *call centers*.

Figura 16.6
*El poder discursivo de las personas actoras
sobre la legitimación de la informalidad en Costa Rica*

Tipo	Posición	Función discursiva
Élites	“Desde arriba”	Normalización, tecnocratización
Instituciones	Intermediarias	Gestión, medición, regulación
Medios	Filtro simbólico	Encuadrar, (in)visibilizar, estigmatizar
Personas académicas	Crítica	Desnaturalización
Personas trabajadoras informales/ sujetos populares	“Desde abajo”	Resistencia, supervivencia

Nota. Elaboración propia.

Las implicaciones de esta construcción discursiva para las economías de base, populares y alternativas son significativas. Al encuadrar la informalidad predominantemente como un problema técnico a gestionar o una necesidad individual a sobrellevar, el discurso mediático dominante puede limitar los “horizontes” de estas economías e invisibilizar la “innovación desde abajo”. Se tiende a invisibilizar o desvalorizar las lógicas no capitalistas, las redes de solidaridad, las formas de resistencia colectiva o las innovaciones sociales que puedan surgir “desde abajo”. La narrativa se centra en la integración (formalización) dentro del sistema dominante o en la adaptación individual a sus márgenes, más que en la exploración de alternativas sistémicas. Esto puede restringir el espacio político y simbólico para el desarrollo de economías verdaderamente alternativas o solidarias. Además, las estrategias de normalización y

estigmatización sutil pueden contribuir a la “demonización” o a la percepción de “desechabilidad” de ciertos grupos de trabajadores informales (migrantes, vendedores ambulantes, personas en trabajos considerados “sucios” o marginales), dificultando su organización y la reivindicación de sus derechos. En suma, el discurso mediático analizado, al reflejar y reforzar perspectivas dominantes, parece contribuir más a delinear las “limitaciones” que a expandir los “horizontes” de las prácticas económicas alternativas y populares en el contexto costarricense.

Finalmente, las personas actoras y su representación tienen un poder discursivo diferenciado en la legitimación de la informalidad (ver figura 16.6). Este poder, con supremacía de la ideología del reformismo neoliberal, reproduce asimetrías y vulnerabilidades donde quienes definen el discurso (élites, medios, instituciones) legitiman la informalidad; legitimación que se reproduce desde quienes la gestionan (instituciones técnicas). A su vez, los medios (in)visibilizan a quienes la padecen e intentan transformar la problemática, desde abajo, pero las redes comunitarias no se resaltan como potenciadoras del cambio. Antes bien, se promueve desde los medios la figura de las personas emprendedoras, generalmente sin recursos ni acceso al crédito de manera viable y de la persona trabajadora globalizada flexibilizada.

Bibliografía

Fuentes secundarias

- Baker, A., & Velasco-Guachalla, V. X. (2018). Is the Informal Sector Politically Different? (Null Answers from Latin America). *World Development*, 102, 170–182.
- Banks, N., Lombard, M. & Mitlin, D. (2020). Urban Informality as a Site of Critical Analysis, *The Journal of Development Studies*, 56(2), 223-238.

- Busso, M. & Pérez, P. E. (2021). De meritocracia y emprendedurismo: La reproducción de las desigualdades sociales de los y las jóvenes durante el gobierno de Cambiemos en M. Busso & P. E. Pérez (Coords.), *El trabajo degradado: Heterogeneidad ocupacional, precarización y nuevas inserciones laborales durante el gobierno de Cambiemos* (pp. 307-333). La Plata: Universidad Nacional de La Plata, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación.
- Chen, L., & Zeng, H. (2024). Can social trust promote the professional division of labor in firms? Evidence from China. *International Review of Economics and Finance*, 89, 303–315. <https://doi.org/10.1016/j.iref.2023.09.007>
- Chilton, P. (2004). *Analysing Political Discourse: Theory and Practice*. London & New York: Routledge. Capítulo 1: “Politics and Language”, pp. 3–15.
- Chouliaraki, L. (2025). Discourse and Mediation: A Historical Overview of Theoretical Narratives and Research Agendas. *The Greek Review of Social Research*, 165, 77–93.
- Cubillo-Paniagua, R.; Viales-Hurtado, R. J. & Robles-Rivera, F. (Editores) (2025). *Crisis y transformaciones del mundo laboral en América Latina y el Caribe: cambios institucionales, política social, género y resistencias*. San José: CIHAC-CALAS-UCR.
- Curro, C. (2017). From goods to emotions: The transformation of informal practices in the Republic of Georgia. In C. Curro (Ed.), *The Informal Economy: Exploring Drivers and Practices* (pp. 139–156). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315158013>
- Decima, D. “Discursividad mediática sobre la informalidad urbana”. En: Cuaderno Urbano. Espacio, Cultura, Sociedad - Vol. 32 - N.º 32 (Junio de 2022), pp. 111-142.
- Edelbacher, M., Kratcoski, P. C., & Dobovšek, B. (2015). *Corruption, fraud, organized crime, and the shadow economy*. Springer.
- Fairclough, N. (1992). *Discourse and social change*. Polity Press.
- Fairclough, N. (1995). *Media Discourse*. London: Arnold Publishers.
- Fairclough, N. (2006). *Language and globalization*. London, England: Routledge.

- Fernández-Massi, M., & Barrera Insua, M. (2021). Informalidad y políticas de empleo en los gobiernos kirchneristas y de Cambiemos. En M. Busso & P. E. Pérez (Comps.), *El trabajo degradado: Heterogeneidad ocupacional, precarización y nuevas inserciones laborales durante el gobierno de Cambiemos* (pp. 159–184). Universidad Nacional de La Plata, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación.
- Jessop, B. (2004). Critical semiotic analysis and cultural political economy. *Critical Discourse Studies*, 1(2), 159–174. <https://doi.org/10.1080/1740590042000302085>
- Jones, O. (2013). *Chavs: La demonización de la clase obrera* (M. González, Trad.). Capitán Swing.
- Jones, P. (2021) *Work Without the Worker: Labour in the Age of Platform Capitalism*, London: Verso.
- Kopper, M. & Richmond, M. (2024) *Subjectivity at Latin America's Urban Margins*. New York: Berghahn.
- Kumi, E., & Copestake, J. (2022). Friend or Patron? Social relations across the national NGO–donor divide in Ghana. *European Journal of Development Research*, 34(1), 27–47. <https://doi.org/10.1057/s41287-021-00412-7>
- Lindell, I. (2010a). Between exit and voice: Informality and the spaces of popular agency. *African Studies Quarterly*, 11(2–3), 1–11.
- Lindell, I. (2010b). Informal work and transnational organising. In A. Bieler & I. Lindberg (Eds.), *Global Restructuring, Labour and the Challenges for Transnational Solidarity* (pp. 75–86). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203842454-16>
- Littlewood, D., Rogers, P., & Williams, C. (2020). Experiences, causes and measures to tackle institutional incongruence and informal economic activity in South-East Europe. *Current Sociology*, 68(7), 950–971. <https://doi.org/10.1177/0011392118788911>
- Luque, A. (2022). Analysis of the concept of informal economy through 102 definitions: Legality or necessity. *Open Research Europe*, 2, 134. <https://doi.org/10.12688/openreseurope.13990.2>
- McLain, R. J., Alexander, S. J., & Jones, E. T. (2008). *Incorporating understanding of informal economic activity in natural resource and economic development policy* (PNW-GTR-755). USDA Forest Service.

- Morris, J. (2019). The informal economy and post-socialism: Imbricated perspectives on labor, the state, and social embeddedness. *Demokratizatsiya*, 27(3), 321–346.
- Pérez, P. & Busso, M. “Jóvenes y emprendedurismo: discursos, políticas y trabajo independiente en la Argentina de Cambiemos”. En: Revista Pilquen. Sección Ciencias Sociales, Vol. 23, No. 3, julio-septiembre 2020, pp. 75-88.
- Polukhina, E., & Strelnikova, A. (2015). Exploring the Russian online gift-exchange communities: The results of nethnographic approach. *Acta Polytechnica Hungarica*, 12(8), 2041–2049.
- Reimer, B. (2006). The informal economy in non-metropolitan Canada. *Canadian Review of Sociology and Anthropology*, 43(1), 23–45. <https://doi.org/10.1111/j.1755-618X.2006.tb01159.x>
- Riisgaard, L., Torm, N., Kinyondo, G., & Indimuli, R. (2024). Challenging the formality bias: The organization of informal work, working relations, and collective agency in Kenya and Tanzania. *Development Policy Review*. <https://doi.org/10.1111/dpr.12724>
- Sallah, A. (2016). Re-reading the narrative of the informal economy in the context of economic development in sub-Saharan Africa. *International Journal of Social Economics*, 43(11), 1090–1104. <https://doi.org/10.1108/IJSE-03-2015-0055>
- Sami, L., & Lassassi, M. (2020). Investigating the effect of trust in institutions on the decision of young people in selected MENA countries to opt for an informal economic activity. *International Journal of Technology Management and Sustainable Development*, 19(2), 173–193. https://doi.org/10.1386/tmsd_00021_1
- Schmidtke, H. (2019). Elite legitimation and delegitimation of international organizations in the media: Patterns and explanations. *The Review of International Organizations*, 14(4), 633–659.
- Slavnic, Z. (2010). Political economy of informalization. *European Societies*, 12(1), 3–23. <https://doi.org/10.1080/14616690903042724>
- Srnicek, N. (2018) *Capitalismo de Plataformas*. Buenos Aires: Caja Negra Editores.
- Thai, M. T. T., & Turkina, E. (2013). *Entrepreneurship in the informal economy: Models, approaches and prospects for economic development*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203066775>

- Tongel, M. A. (2013). The feminine paradigm of entrepreneurship in the informal economy. In M. T. T. Thai & E. Turkina (Eds.), *Entrepreneurship in the informal economy: Models, approaches and prospects for economic development* (pp. 177–191). Routledge.
- Turner, S. (2009). Economy, informal. In R. Kitchin & N. Thrift (Eds.), *International Encyclopedia of Human Geography* (Vol. 3, pp. 367–371). Elsevier. <https://doi.org/10.1016/B978-008044910-4.00179-6>
- Turner, S. (2019). Economy, informal. In A. Kobayashi (Ed.), *International Encyclopedia of Human Geography* (2nd ed., Vol. 4, pp. 203–209). Elsevier. <https://doi.org/10.1016/B978-0-08-102295-5.10358-6>
- Van Dijk, T. A. (2008). *Discourse and power*. Palgrave Macmillan.
- Viales-Hurtado, R. y Chavarría-Camacho, D. (2025). *La legitimación de la informalidad desde las élites a partir de la discursividad mediática. El caso de Costa Rica* [Mesa de diálogo]. Plataforma para el Diálogo: Economías de Base, Economías Populares y Economías Alternativas, Centro Maria Sibylla Merian de Estudios Latinoamericanos Avanzados en Humanidades y Ciencias Sociales (CALAS), 5–7 de noviembre, San José, Costa Rica.
- Vinelli, N. (2014). La televisión desde abajo. Historia, alternativa y periodismo de contrainformación. Colectivo El Topo Blindado. Cooperativa El Río Suena.
- Webb, J. W., & Barzuna-Hidalgo, O. (2025). Implementing firm strategy in the informal economy. *Organizational Dynamics*, 54(1), Article 101125. <https://doi.org/10.1016/j.orgdyn.2025.101125>
- Whittingham, K. L. (2014). Informal economy. In U. P. Jäger & V. Sathe (Eds.), *Strategy and Competitiveness in Latin American Markets: The Sustainability Frontier* (pp. 85–99). Edward Elgar Publishing.
- Williams, C. C. (2016). Tackling enterprise in the informal economy: An introductory overview. *International Journal of Entrepreneurship and Small Business*, 28(2–3), 139–153. <https://doi.org/10.1504/IJESB.2016.076637>
- Williams, C. C., Horodnic, I. A., & Windebank, J. (2015). Explaining participation in the informal economy: An institutional incongruence perspective. *International Sociology*, 30(3), 294–313. <https://doi.org/10.1177/0268580915578745>

Noticias de periódico

- Alfaro-Herrera, N. (8 de agosto de 2023). Vendedores ambulantes en Costa Rica: Atrapados entre dos economías. *Global Citizen*. <https://www.globalcitizen.org/es/content/street-vendors-costa-rica/>
- Alvarado, J. (15 de Octubre de 2022). Formalizar las empresas en Costa Rica: “No es que sea caro, es imposible”, dice Cámara de pymes. *El Observador*. <https://observador.cr/formalizar-las-empresas-en-costa-rica-no-es-que-sea-carro-es-imposible-dice-camara-de-pymes/>
- Alvarado, J. (24 de Noviembre de 2023). Sin seguro y con salarios bajos: en 7 ramas laborales de Costa Rica la informalidad es superior al 50%. *El Observador*. <https://observador.cr/sin-seguro-y-con-salarios-bajos-en-7-ramas-laborales-de-costa-rica-la-informalidad-es-superior-al-50/>
- Alvarado, J. (3 de Diciembre de 2024). Cierre de 2024: Comercio de Costa Rica crece, pero preocupa aumento de empleo informal”. *El Observador*. <https://observador.cr/cierre-de-2024-comercio-de-costa-rica-crece-pero-preocupa-aumento-de-empleo-informal/>
- Alvarado, J. Población con trabajo en Costa Rica aumentó “significativamente” en el último año, según el INEC. (6 de Febrero de 2025). *El Observador*. <https://observador.cr/poblacion-con-trabajo-en-costa-rica-aumento-significativamente-en-el-ultimo-ano-segun-el-inec/>
- Alvarado, J. (6 de Marzo de 2025). Población con trabajo en Costa Rica aumentó, pero también el empleo informal, dice el INEC”. *El Observador*. [https://observador.cr/poblacion-con-trabajo-en-cost-rica-aumento-pero-tambien-el-empleo-informal-dice-el-inec/](https://observador.cr/poblacion-con-trabajo-en-costa-rica-aumento-pero-tambien-el-empleo-informal-dice-el-inec/)
- Araya, F. (4 de diciembre de 2023). Feria de empleo: Bimbo recibirá personal este martes en Heredia. *Telediario*. <https://www.telediario.cr/nacional/feria-bimbo-recibira-personal-martes-heredia>
- Arrieta, E. (7 de junio de 2019). “Títulos universitarios pierden importancia”: Carlos Alvarado. *La República* <https://www.larepublica.net/noticia/titulos-universitarios-pierden-importancia-carlos-alvarado>

- Aumenta la población ocupada con empleo informal en Costa Rica. (11 de enero) *E&N*. <https://www.revistaeyn.com/empresasymangement/aumenta-la-poblacion-ocupada-con-empleo-informal-en-costa-rica-AH23535041>
- Brenes, L. (18 de Abril de 2023). Trabajo informal en jóvenes y adultos mayores mantiene secuelas de la pandemia. *La Nación*. <https://www.nacion.com/economia/empleo/trabajo-informal-en-jovenes-y-adultos-mayores/7DURZL7OVJBKPM2L-CIOTMVDTXU/story/>
- Brenes, L. (18 de noviembre de 2024). Población con trabajo se reduce por caída de empleo informal y escasez de puestos adecuados. *La Nación*. <https://www.nacion.com/economia/empleo/poblacion-con-trabajo-se-reduce-por-caida-de-YYFE65W23BB4XEZQE7VHUN76VE/story/>
- Brenes, L. (4 de Septiembre de 2025). Empleo en Costa Rica: ¿Cómo le fue a la población con trabajo en el trimestre que finalizó en julio?. *La Nación*. <https://www.nacion.com/economia/empleo-en-costa-rica-como-le-fue-a-la-poblacion/3ZB-6N5E72NGYRAM437HNSU2M7U/story/>
- Brenes-Mora, S. INEC: Cerca de 864 mil personas ocupadas poseen empleo informal. (9 de enero de 2025). *Delfino CR*. <https://delfino.cr/2025/01/inec-cerca-de-864-mil-personas-ocupadas-poseen-empleo-informal>
- Casi el 40 % de los hombres ocupados en Costa Rica trabajan en la informalidad. (3 de octubre de 2025). *E&N*. <https://www.revistaeyn.com/empresasymangement/casi-el-40-de-los-hombres-ocupados-en-costa-rica-trabajan-en-la-informalidad-AD27605621>
- Cerdas-Gómez, M. (6 de Marzo de 2022). Población con empleo informal en Costa Rica se estima en 966.000 personas. *El Financiero*. <https://www.elfinancierocr.com/economia-y-politica/poblacion-con-empleo-informal-en-costa-rica-se/L6Q6QQBIAJETBN5UIYTHY3UBLU/story/>
- Comenzar un negocio en Costa Rica, tarea de titanes. (28 de septiembre de 2017). *Revista E&N*. <https://www.revistaeyn.com/lasclavesdeldia/comenzar-un-negocio-en-costa-rica-tarea-de-titanes-GCEN1112422>

- Conejo, F. (15 de junio de 2025). Informalidad laboral afecta al 45% de los trabajadores en C.R. *Diario Extra*. <https://www.diarioextra.com/noticia/informalidad-laboral-afecta-al-45-de-los-trabajadores-en-costa-rica/>
- Condega, X. (10 de Enero de 2025). Costa Rica logra aumento histórico en la ocupación: 160 mil nuevos empleos en 2024. *El Mundo*. <https://elmundo.cr/costa-rica/costa-rica-logra-aumento-historico-en-la-ocupacion-160-mil-nuevos-empleos-en-2024/>
- Cordero-Parra, M. (6 de Agosto de 2025). Preocupa empleo informal y falta de aseguramiento en Bagaces frente a casos de enfermedad renal crónica no tradicional. *Semanario Universidad*. <https://Semanariouniversidad/pais/preocupa-empleo-informal-y-falta-de-aseguramiento-en-bagaces-frente-a-casos-de-enfermedad-renal-cronica-no-tradicional/>
- Costa Rica lanza estrategia de empleo para cerrar brecha entre oferta y demanda de trabajo. (26 de julio de 2023). *La Prensa*. <https://www.prensa.com/centroamerica/costa-rica-lanza-estrategia-de-empleo-para-cerrar-brecha-entre-oferta-y-demanda-de-trabajo/>
- Costa Rica, segundo país con menor tasa de empleo en la OCDE. (26 de Enero de 2024). *El País*. <https://www.elpais.cr/2024/01/26/costa-rica-segundo-pais-con-menor-tasa-de-empleo-en-la-ocde/>
- Crece la fuerza de trabajo femenina en Costa Rica. (10 de junio de 2025). *E&N*. <https://www.revistaeyn.com/empresasymangement/crece-la-fuerza-de-trabajo-femenina-en-costa-rica-EF26107535>
- Marín, S. (28 de octubre de 2025). Trabajadores de call center no están ganando ni el mínimo debido al tipo de cambio”. *El Mundo*. https://elmundo.cr/costa-rica/trabajadores-de-call-center-no-estan-ganando-ni-el-minimo-debido-al-tipo-de-cambio-denuncia-vindas/?utm_source=chatgpt.com
- Cuatro acciones para potenciar la creación de empleo en Costa Rica, según ManpowerGroup. (2 de enero de 2025). *E&N*. <https://www.revistaeyn.com/empresasymangement/cuatro-acciones-para-potenciar-la-creacion-de-empleo-en-costa-rica-segun-manpowergroup-NK23290962>

- Desempleo se reduce levemente en Costa Rica, pero el trabajo informal persiste. (5 de septiembre de 2025). *E&N*. <https://www.revistaeyn.com/empresasymangement/desempleo-se-reduce-levemente-en-costa-rica-pero-el-trabajo-informal-persiste-HD27240052>
- Disminuye el desempleo en Costa Rica, pero informalidad sigue creciendo. (14 de agosto de 2025). *E&N*. <https://www.revistaeyn.com/empresasymangement/disminuye-el-desempleo-en-costa-rica-pero-informalidad-sigue-creciendo-LE26998366>
- Empresarios ticos preocupados ante auge de empleo informal. (7 de agosto de 2017). *E&N*. <https://www.revistaeyn.com/centroamericaymundo/empresarios-ticos-preocupados-ante-auge-de-empleo-informal-ASEN1096431>
- Ibarra, L. Estudio: Mujeres de Costa Rica tienen más estudios superiores que los hombres. (11 de julio de 2024). *E&N*. <https://www.revistaeyn.com/centroamericaymundo/estudio-mujeres-de-costa-rica-tienen-mas-estudios-superiores-que-los-hombres-HD20320304>
- Ibarra, L. (03 de octubre de 2024). El empleo informal en Costa Rica aumenta casi un 10 %. *E&N*. <https://www.revistaeyn.com/centroamericaymundo/el-empleo-informal-en-costa-rica-aumenta-casi-un-10-HM21875929>
- Ibarra, L. (9 de septiembre de 2025). Bajan las expectativas de contrataciones en Costa Rica, Guatemala y Panamá. *E&N*. <https://www.revistaeyn.com/inteligencia-eyn/bajan-las-expectativas-de-contrataciones-en-costa-rica-guatemala-y-panama-DG27302032>
- Madrigal, M. (10 de Mayo de 2019). Costa Rica, un país con un millón de trabajadores informales. *El Financiero*. <https://www.elfinanciero.com/economia-y-politica/costa-rica-un-pais-con-un-millon-de-trabajadores/ACQ4CBYOTVG7ZEQLTTCFLWULY/story/>
- May-Grosser, S. (8 de agosto de 2025). Segundo trimestre del 2025 no dejó nuevos empleos. *Delfino. CR*. <https://delfino.cr/2025/08/segundo-trimestre-del-2025-no-dejo-nuevos-empleos>

- Molina-Cordero, M. (11 de Agosto de 2025). Grupos de alto riesgo ante VIH en Costa Rica acudieron al trabajo sexual como ingreso en el último año - Radioemisoras UCR. *Radios UCR*. <https://radios.ucr.ac.cr/2025/08/interferencia/grupos-vulnerables-en-cr-trabajo-sexual/>
- Montero-Salazar, M. (2 de febrero de 2022). Una informalidad que no cede: ¿qué proponen los aspirantes a la silla presidencial para resolverla?. *Teletica*. https://www.teletica.com/elecciones-2022/una-informalidad-que-no-cede-que-proponen-los-aspirantes-a-la-silla-presidencial-para-resolverla_303991
- Morales, J. (24 de Julio de 2025). Tendencias laborales 2025: Habilidades y perfiles más demandados en Costa Rica”. *El País*. <https://www.elpais.cr/2025/07/24/tendencias-laborales-2025-habilidades-y-perfiles-mas-demandados-en-costa-rica/>
- Muñoz-Sequeira, E. (1 de mayo de 2022). La informalidad sigue violentando los derechos laborales. *Universidad de Costa Rica*. <https://www.ucr.ac.cr/noticias/2022/5/01/la-informalidad-sigue-violentando-los-derechos-laborales.html>
- Núñez-Chacón, M. (19 de Julio de 2023). Informe de OIT confirma que en Costa Rica se recupera más rápido el empleo en turismo. *Semanario Universidad*. <https://SemanarioUniversidad/pais/informe-de-oit-confirma-que-en-costa-rica-se-recupera-mas-rapido-el-empleo-en-turismo/>
- Núñez-Chacón, M. (22 de Noviembre de 2023). Trabajo doméstico, construcción y transporte presentan mayores indicadores de informalidad laboral. *Semanario Universidad*. <https://SemanarioUniversidad/pais/trabajo-domestico-construccion-y-transporte-presentan-mayores-indicadores-de-informalidad-laboral/>
- Núñez-Chacón, M. (12 de Enero de 2024). Jóvenes de 15 a 24 años se están quedando fuera del mercado laboral. *Semanario Universidad*. <https://SemanarioUniversidad/pais/jovenes-de-15-a-24-anos-se-estan-quedando-fuera-del-mercado-laboral/>
- Núñez-Chacón, M. (30 de Abril de 2024). Personas con poca educación y mayores de 60 años siguen sin conseguir empleo en Costa Rica tras la pandemia”. *Semanario Universidad*. <https://SemanarioUniversidad/pais/personas-con-poca-educacion-y-mayores-de-60-anos-siguen-sin-conseguir-empleo-en-costa-rica-tras-la-pandemia/>

- Núñez-Chacón, M. (3 de Octubre de 2024). Crecimiento del empleo informal golpeó a las mujeres entre junio y agosto. *Semanario Universidad*. <https://SemanarioUniversidad/pais/crecimiento-del-empleo-informal-golpea-principalmente-a-las-mujeres/>
- Ortega-Campos, Gustavo. (27 de Febrero de 2025). Landon Josué, de 18 años, tiene un empleo informal como vendedor de patí para mantener a sus padres. *La Nación*. <https://www.nacion.com/economia/landon-josue-de-18-anos-tiene-un-empleo-informal/SCVAKMNYORDLBHX4NV22TX4GFA/story/>
- Ortega-Campos, Gustavo. (27 de Febrero de 2025). Hay 68.000 nuevos trabajadores informales en las calles de Costa Rica: conozca las razones. *La Nación*. <https://www.nacion.com/economia/68000-nuevos-trabajadores-informales-en-las-calles/IOEYTPBUQZHSRLUFSME2XKQB3M/story/>
- Pérez, D. (11 de Marzo de 2024). ¿Qué es el empleo informal y cuál es su incidencia en Costa Rica?. *Columbia*. <https://columbia.co.cr/que-es-el-empleo-informal-y-cual-es-su-incidencia-en-costa-rica/>
- Pérez, D. (8 de Noviembre de 2024). Encuesta Continua de Empleo: Pese a caída en desempleo, crece informalidad. *Columbia*. <https://columbia.co.cr/encuesta-continua-de-empleo-pese-a-caida-en-desempleo-crece-informalidad/>
- Ramírez, A. (12 de julio de 2023). Casi el 40% de la población ocupada tiene empleo informal. *crhoy.com*. <https://crhoy.com/casi-el-40-de-la-poblacion-ocupada-tiene-empleo-informal>
- Ramírez, A. (7 de diciembre de 2023). Empresarios: Desempleo e informalidad son una bomba de tiempo. *CR Hoy*. <https://crhoy.com/empresarios-desempleo-e-informalidad-son-una-bomba-de-tiempo/>
- Ramírez A. (11 de marzo de 2025). OCDE alerta que proporción de jóvenes que no están en educación o trabajando “es relativamente alta. *CR Hoy*. <https://crhoy.com/ocde-alerta-que-proporcion-de-jovenes-que-no-estan-en-educacion-o-trabajando-es-relativamente-alta/>
- Ramírez, A. (20 de abril de 2025). Empleo informal en Costa Rica sigue alto: Esto recomienda la OCDE. *CR Hoy*. <https://crhoy.com/empleo-informal-en-costa-rica-sigue-alto-esto-recomienda-la-ocde/>

- Ramírez, A. (2 de julio de 2025). Empleo informal en Costa Rica impactará pensiones de miles de trabajadores. *CR Hoy*. <https://crhoy.com/empleo-informal-en-costa-rica-impactara-pensiones-de-miles-de-trabajadores/>
- Rodríguez, A. (30 de Julio de 2016). Las dos caras de la población trabajadora en Costa Rica. *El Financiero*. <https://www.elfinancierocr.com/economia-y-politica/las-dos-caras-de-la-poblacion-trabajadora-en-costa-rica/SQY5E6QKEVE4VDWIKZBTSGGITI/story/>
- Ruiz, G. (31 de Agosto de 2014). Empleo informal se hace gigante. *El Financiero*. <https://www.elfinancierocr.com/economia-y-politica/empleo-informal-se-hace-gigante/RGPCIZPE4JDDTE5YCRW4TBW7PA/story/>
- Ruiz, G. (6 de julio de 2020). El consejo de la OCDE que Costa Rica aún no aplica con éxito. *CR Hoy*. <https://www.crhoy.com/el-consejo-de-la-ocde-que-costa-rica-aun-no-aplica-con-exito/>
- Sector femenino impulsa el crecimiento del empleo en Costa Rica. (6 de septiembre de 2024). *E&N*. <https://www.revistaeyn.com/centroamericaymundo/sector-femenino-impulsa-el-crecimiento-del-empleo-en-costa-rica-EJ21282754>
- Serrano, P. (21 de enero de 2020). Vendedores ambulantes: 6 mil familias sobreviven del trabajo informal en San José”. *CRHoy* <https://www.crhoy.com/vendedores-ambulantes-6-mil-familias-sobreviven-del-trabajo-informal-en-san-jose/>
- Soto-Sibaja, J. (15 de junio de 2025). 7 de cada 10 personas con empleo informal tienen más de 35 años. *Monumental*. <https://www.monumental.co.cr/2025/06/15/7-de-cada-10-personas-con-empleo-informal-tienen-mas-de-35-anos/>
- Tasa de desempleo en Costa Rica sin cambios en el primer trimestre. (10 de mayo de 2025). *E&N*. <https://www.revistaeyn.com/centroamericaymundo/tasa-de-desempleo-en-costa-rica-sin-cambios-en-el-primer-trimestre-EB25712464>
- Vega, E. y Montoya-Salas, F. (24 de Noviembre de 2024). 329 personas al día comenzaron un trabajo informal durante el último año. *La Teja*. <https://www.lateja.cr/empleo-costa-rica/329-personas-al-dia-comenzaron-un-trabajo-informal/NMOGY6025BEYDG4PEM6HZMQQ6Q/story/>

- Velázquez-Robles, R. (11 de junio de 2025). El trabajo informal y la falta de protección legal para los trabajos. *Semanario Universidad*. <https://Semanariouniversidad/opinion/el-trabajo-informal-y-la-falta-de-proteccion-legal-para-los-trabajos/>
- Víctor Peña, M. (17 de septiembre de 2024). Cuándo y dónde es la feria de empleo con 900 vacantes. *Telediario*. <https://www.telediario.cr/nacional/feria-de-empleo-con-900-vacantes-cuando-y-donde-es>
- Zolezzi, S. (7 de diciembre de 2023). La informalidad en el mercado laboral de Costa Rica puede decrecer con la implementación de políticas públicas correctas. *Delfino.CR*. <https://delfino.cr/2023/12/la-informalidad-en-el-mercado-laboral-de-costa-rica-puede-decrecer-con-la-implementacion-de-politicas-publicas-correctas>

Sobre las personas autoras

Rosa Alvarado Brenes

Historiadora y administradora. Asistente de gestión del Centro Centroamérica y el Caribe de CALAS-CIHAC, Universidad de Costa Rica. En la actualidad trabaja en su tesis de Maestría en Historia, la cual aborda las políticas culturales de los museos en Costa Rica en la segunda mitad del siglo XX. Su principal interés se centra en la historia institucional y la historia intelectual, en el flujo de ideas que configuraron las instituciones culturales, y en la dinámica internacional-nacional-local.

León Enrique Ávila Romero

Profesor-investigador de tiempo completo en Desarrollo Sustentable y en el posgrado en economía social y solidaria en la Universidad Intercultural de Chiapas. Es miembro del cuerpo académico consolidado “Patrimonio, territorio y desarrollo en la frontera Sur de México”, miembro del SNI-CONACyT nivel 2 y miembro honorario del SEI Cocyttech. Es Ingeniero en Agroecología por la Universidad de Chapingo, Maestro en Ciencias en Recursos Naturales y Desarrollo Rural por el Colegio de la Frontera Sur y Doctor en Ciencias Agrarias, por el Departamento de Sociología Rural de la UACH. Fue profesor visitante de la Universidad de California en Berkeley (EEUU), la Universidad Católica de Bolivia, la Universidad de la República de Uruguay, la Universidad de Girona (España) y de la Universidad de Bielefeld (Alemania).

David Chavarría Camacho

Investigador del Centro de Investigaciones Históricas de América Central (CIHAC) y docente de la Escuela de Historia de la Universidad de Costa Rica. Posee una maestría en Historia por esta misma institución. Actualmente cursa el Doctorado en Gestión Pública y Ciencias Empresariales en el Instituto Centroamericano de Administración Pública (ICAP) y el Doctorado en Historia en la Universidad de Costa Rica. Ha publicado varios artículos y capítulos de libros sobre historia de la ciencia y la tecnología, políticas científicas y políticas sociales y sobre transformaciones en el mundo del trabajo en Costa Rica.

Marina Farinetti

Licenciada en Ciencias Política, Magister en Investigación en Ciencias Sociales, Doctora en Ciencias Sociales, egresada de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Especialista en historia conceptual, teoría política y movimientos sociales. Profesora de grado y posgrado en la Universidad Nacional de San Martín. Vicedirectora del Laboratorio de Investigación en Ciencias Humanas (LICH-Escuela de Humanidades/UNSAM y CONICET. Forma parte del comité editorial de las revistas científicas *Conceptos históricos*, *Trabajo y sociedad* y *Laboratoria*.

Maura Febles Domínguez

Socióloga, investigadora del grupo Galfisa del Instituto de Filosofía de Cuba. MsC en Gestión y desarrollo de cooperativas (FLACSO-Cuba). Actualmente es becaria doctoral de Conicet- IdICHS, Universidad Nacional de La Plata, Argentina. Pertenecer al grupo Al Borde de la UNLP y al GT de CLACSO Cuerpos, Territorios, Feminismos. Investiga temas de cuidado, cooperativismo y economía feminista. Ha coordinado espacios de formación política para mujeres en varios países de América Latina como El Salvador, Honduras, y República Dominicana.

Cecilia Antonia Forment-Hirsch

Licenciada en sociología por la Universidad de Buenos Aires. Magíster por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales (EHESS), con especialización en sociología e investigación en ciencias sociales. Miembro de la Red Investigación y Acción sobre los residuos en Argentina (RIAR). Realicé mi tesis bajo la dirección de Daniel Cefaï que obtuvo una mención destacada. Mi tema de investigación fue sobre la comunidad guaraní de Pueblo Nuevo, en el norte argentino, y su relación con el basural a cielo abierto de la ciudad de Tartagal, en la provincia de Salta. A partir de una etnografía ecológica, busqué comprender cómo y por qué esta comunidad se ha constituido en proximidad al basural, y por qué dicha relación no ha derivado en una institucionalización clásica, como la de las cooperativas de reciclado. Mis áreas de investigación e interés son: etnografía urbana y rural, ecología urbana, sociología política y la socio-antropología de los mundos sociales, a partir de los enfoques teóricos y metodológicos de la ecología humana desarrollados por la Escuela de Chicago desde la década de 1920.

Emilia María Gallegos Mejía

Emilia Gallegos es abogada por la UCA de El Salvador y doctora en Gobierno y Políticas Públicas por la Universidad de Costa Rica, becaria DAAD. Con más de 15 años de experiencia en investigación aplicada, gestión de proyectos sociales y análisis de políticas públicas en temas de justicia juvenil, violencia comunitaria, trabajo y protección social. Ha trabajado con fondos USAID, INL, PNUD, OIT y CDKN, y fue Directora General de Inspección de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social de El Salvador. Ha sido docente en maestrías en la UCA y la UES. Su enfoque combina derecho, gestión pública y análisis sociológico.

Malena Victoria Hopp

Doctora en Ciencias Sociales y Magíster en Políticas Sociales por la Universidad de Buenos Aires. Es investigadora del CONICET y del Instituto de Investigaciones Gino Germani donde coordina el Grupo de Estudio sobre Política Social y Condiciones de Trabajo. Es profesora de la Carrera de Trabajo Social e integra el Observatorio de Economía Popular, Social y Solidaria de la Facultad de Ciencias Sociales, UBA. Es Investigadora del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini.

Leila Giovana Izidoro

Doutoranda e Mestra em Direitos Humanos pela Universidade de São Paulo (2021), pesquisadora do Maria Sybilla Merian Centre Conviviality-Inequality in Latin America (MECILA) e integrante do Grupo de Pesquisa Direitos Humanos, Centralidade do Trabalho e Marxismo (DHCTEM). Durante o mestrado realizou estágio de pesquisa no Instituto de Investigaciones Sociales, da Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Possui graduação em Direito (2016) pela Universidade de São Paulo, com intercâmbio acadêmico na Universidad de la República (UdelaR). É associada à Latin American Climate Lawyers Initiative for Mobilizing Action (LACLIMA). Sua agenda de pesquisa envolve direitos socio-ambientais, financeirização do meio ambiente e pagamento por serviços ambientais urbanos, desenvolvimento desigual e combinado e transição justa na cadeia de resíduos plásticos.

Carlos Izquierdo Vázquez

M. Sc. en Historia por la Universidad de Costa Rica. Bach. en Historia, Universidad de Costa Rica. Estudiante del Doctorado en Historia, Universidad de Costa Rica. Profesor de la Escuela de Historia, Universidad de Costa Rica (2015-actualidad). Autor de varios artículos en revistas académicas

sobre pobreza y mercados laborales, economías de base, desigualdades, niñez trabajadora. Su tesis doctoral es sobre las ventas callejeras en el centro de San José (1980-2003).

Jesús Nilo Llusco Mamani

Historiador, antropólogo y teatrista aimara. Su trabajo entreteje la memoria, la ritualidad y el pensamiento indígena con una mirada crítica sobre el Estado, la nación y la plurinacionalidad. Desde una perspectiva anclada en el mundo aimara, articula historia, antropología y teatro como lenguajes de resistencia y reflexión colectiva. Es Doctorando en Ciencias Sociales en El Colegio de Michoacán (COLMICH), México. Obtuvo la Maestría en Antropología en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), Ecuador y la Licenciatura en Historia en la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), Bolivia. Fue coordinador del Instituto de Investigaciones Históricas “Fausto Reinaga” y docente de la Carrera de Historia en la Universidad Pública de El Alto. Su labor se enmarca en una apuesta intelectual que busca visibilizar las memorias indígenas, desmontar los mitos del nacionalismo moderno y abrir espacio a otras formas de conocimiento desde los Andes.

Óscar Miguel Luna Alvarado

Es sociólogo, con un doctorado en Desarrollo Territorial por FLACSO Ecuador y una maestría en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Andina Simón Bolívar (UASB), sede Ecuador. Cuenta con más de diez años de experiencia en el trabajo con pueblos y nacionalidades indígenas, así como en procesos de conservación de la naturaleza desde un enfoque inclusivo. Se especializa en la región andino-amazónica. Sus principales campos de investigación incluyen la ecología política, la conservación inclusiva, los pueblos indígenas, la gobernanza territorial y los conflictos socioambientales.

Virginia Manzano

Doctora por la Universidad de Buenos Aires, área antropología. Actualmente es la Directora del Instituto de Ciencias Antropológicas de la Universidad de Buenos Aires. Es Profesora de la asignatura “Problemas de Antropología Social y Política” también en la Universidad de Buenos Aires e Investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina (CONICET). Sus investigaciones se inscriben en el campo de la antropología de la política y abordan temas tales como movimientos sociales, protestas, formas de trabajo en las periferias urbanas y autoconstrucción de ciudad. Sus publicaciones en torno a estas temáticas son numerosas, destacándose su libro “La política en movimiento. Movilizaciones colectivas y políticas estatales en la vida del Gran Buenos Aires” (editorial Prohistoria) en el cual recupera su investigación etnográfica de seis años con el movimiento de desocupados (piquetero) y su capítulo “Dilemmas of trade unionism and the movement of the unemployed under neoliberal and progressive regimes in Argentina” en el libro *Where are the unions?. Workers and Social Movements in Latin America, The Middle East and Europe*, editado por Sian Lazar. Además, viene experimentando con metodologías colaborativas para la construcción de un archivo de la palabra y la memoria de las luchas urbanas y se ha desempeñado como perito ante la justicia penal a pedido de la defensa de mujeres del movimiento Tupac Amaru encarceladas debido a la creciente criminalización de la vida política popular en Argentina.

Elizabeth Morillo

Es Socióloga, Magíster en Estudios de la Cultura por la Universidad Andina Simón Bolívar (UASB) sede Ecuador, especialista en Medio Ambiente Urbano y Sostenibilidad por la Universidad Politécnica de Cataluña. Actualmente, profundiza su formación en Ecología Política y Alternativas al Desarrollo en

la UASB, articulando sus conocimientos sobre sostenibilidad, cambio climático, territorio y relaciones sociedad-naturaleza. Cuenta con alrededor de diez años de experiencia en investigación social, gestión socioambiental, gobernanza y procesos participativos con pueblos y nacionalidades indígenas, comunidades rurales y organizaciones de mujeres, que constituyen sus principales áreas de interés y trabajo.

Lorena Pérez Roa

Profesora asociada de Trabajo Social en la Universidad de Chile. Doctora en Filosofía (Ciencias Humanas Aplicadas) por la Université de Montréal (2014). Su trabajo se centra en economía doméstica, endeudamiento, educación financiera crítica y economía feminista; actualmente es Investigadora Responsable del Fondecyt Regular N.º 1220039 (2022–2026) sobre estrategias para navegar en la incertidumbre en hogares de ingresos moderados y ha liderado/colaborado en proyectos sobre economía doméstica, procesos de endeudamiento en el Chile contemporáneo y educación financiera.

Jesús Quirós González

Licenciado en Enseñanza de Estudios Sociales y Educación Cívica con 16 años de experiencia como docente de secundaria. Tiene una Maestría en Administración Educativa y es estudiante del Posgrado de Historia de la Universidad de Costa Rica (pendiente el Trabajo Final de Graduación). Es escritor de texto didácticos, lector de Trabajos Finales de Graduación para la Licenciatura en la Enseñanza de los Estudios Sociales para la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica.

Guillermo Romero

Sociólogo con Maestría en Estudios Urbanos. Tiene experiencia en el análisis de desigualdades territoriales, dinámicas urbanas y rurales, organizaciones sociales y procesos de participación

ciudadana. Su trayectoria académica y profesional se ha desarrollado en torno al estudio de las relaciones entre territorio, sociedad y políticas públicas, con énfasis en procesos de planificación territorial, fortalecimiento de la participación y articulación entre actores sociales e institucionales.

Ronny J. Viales Hurtado

Director del CIHAC. Doctor en Historia y Máster en Historia Económica por la Universitat Autònoma de Barcelona (España). *Magister Scientiae* en Historia por el Sistema de Estudios de Posgrado de la Universidad de Costa Rica. Profesor catedrático de la Escuela de Historia y del Programa de Posgrado en Historia de la Universidad de Costa Rica. Premio Nacional de Historia “Aquileo Echeverría” en 1998. Premio Cleto González Víquez, 2003 de la Academia de Geografía e Historia de Costa Rica. Premio al Investigador de la Universidad de Costa Rica. Área de Ciencias Sociales, 2012. Premio Manuel Moreno Fragonals al mejor libro de historia económica del Caribe 2024, otorgado por la Asociación de Historia Económica del Caribe. Autor de numerosas publicaciones, entre ellas libros y artículos científicos globalización, sistemas agroexportadores y transformaciones del mundo laboral en Centroamérica. Ha liderado y participado en proyectos de historia económica, nacionales e internacionales, aportando una visión crítica sobre los modelos de desarrollo en la región centroamericana, en el contexto global.

Daniel Vizuite

Maestro en Sociología Política, FLACSO Ecuador. Investigador social especializado en Estudios Sociales de Ciencia, Tecnología y Sociedad. Actualmente enfocado en el estudio de políticas públicas de ciencia, tecnología e innovación; Tecnologías Emergentes; producción y circulación de conocimientos; economía de plataformas, procesos de desarrollo económico, gobernanza del espacio exterior.

Irina Zudina

Investigadora interdisciplinaria sobre violencia y doctoranda en criminología en Leiden Law School (Países Bajos). Tiene una maestría en Estudios InterAmericanos por la Universidad de Bielefeld y formación en ciencia política y filosofía. Ha sido becaria de ISAP y PROMOS (DAAD), participante financiada de la Escuela de Verano de la EHESS en París, de plataformas de CALAS (Guadalajara, Weingarten y San José), del CIEDSI (Girona) y de SLAS (Ámsterdam), presentando su investigación sobre trata sexual y vulnerabilidad. Ha estudiado, vivido y trabajado en México (Guadalajara y Puebla), colaborando con diversas ONG nacionales para sus investigaciones. Actualmente, ella y su tesis doctoral cuentan con el financiamiento completo de la Fundación Konrad-Adenauer. Además del ámbito académico, ha trabajado en periodismo, medios audiovisuales independientes y como traductora independiente para CALAS y ONG.

Las profundas transformaciones del capitalismo han alterado las formas de trabajar, producir y sostener la vida en América Latina y el Caribe. La precarización laboral, la expansión de la informalidad, las desigualdades, las migraciones, la crisis ambiental, la financiarización y el avance de las tecnologías digitales conviven con una extraordinaria capacidad social para construir respuestas desde abajo. Este libro propone mirar esas experiencias a través de las economías de base, las economías populares y otras formas alternativas de organización del trabajo, entendidas no simplemente como estrategias de supervivencia frente a la crisis actual, sino como espacios de innovación social en los que se articulan comunidad, mercado y estado, y se crean nuevas relaciones de cooperación, solidaridad, reciprocidad y reproducción de la vida.

Desde una perspectiva histórica, comparada, relacional e interseccional, los dieciséis capítulos reunidos en este libro recorren distintas experiencias de América Latina y el Caribe para explorar la pluralidad del trabajo y las respuestas construidas frente a la desigualdad y la incertidumbre. Agricultura familiar, pesca artesanal, comercio popular, cooperativismo, cuidados comunitarios, economías indígenas, reciclaje, trabajo informal y nuevas tecnologías revelan que estas prácticas no ocupan los márgenes de la economía, sino que forman parte de las maneras concretas mediante las cuales las personas sostienen cotidianamente la vida. El libro invita a pensar las economías de base como un espacio privilegiado para comprender las tensiones entre desigualdad, innovación y transformación social, pero también como un horizonte desde el cual imaginar futuros posibles para el trabajo y formas más solidarias, equitativas y sostenibles de organización económica y social.



With funding from the:



Federal Ministry
of Research, Technology
and Space

ISBN: 978-9930-645-11-6



9 789930 164511